

OWALEZ



AMERICA
LATINA
EN LOS
AÑOS
REINTA

UNAM



F1414
.2
A53

25590

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

América Latina en los años treinta

Coordinador: Pablo González Casanova

Luis Antezana E.
Susy Castor
Manuel Correia de Andrade
Agustín Cueva
Franklin J. Franco
Isaac Ganón
Manuel Maldonado Denis
Alejandro D. Marroquín
D. F. Maza Zavala
Guillermo Palacios
Rodolfo Puiggrós
Aníbal Quijano Obregón
Delberto Torres
Lugo Zemelman M.



2 AMERICA LATINA EN LOS AÑOS TREINTA

Luis Antezana E.
Susy Castor
Manuel Correia de Andrade
Agustín Cueva
Franklin J. Franco
Isaac Ganón
Manuel Maldonado Denis
Alejandro D. Marroquín
D. F. Maza Zavala
Guillermo Palacios
Rodolfo Puiggrós
Aníbal Quijano Obregón
Edelberto Torres
Hugo Zemelman M.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

América Latina en los años treinta



Universidad Nacional Autónoma de México. *México*, 1977



América Latina
en los años treinta



INVESTIGACIONES
SOCIALES

Primera edición: 1977

DR © 1977, Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria. México 20, D. F.

DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES

Impreso y hecho en México



PRESENTACIÓN

La década de los años treinta del presente siglo fue el escenario de grandes transformaciones en el mundo entero originadas, en buena medida, por la crisis del capitalismo mundial de 1929-1932.

En América Latina se reorientó el modo de producción capitalista con los cambios consiguientes en la estructura política y en las relaciones sociales, con formas específicas en cada uno de los países.

Las políticas proteccionistas se abrieron paso entre los escombros del liberalismo que había sido definido de una manera peculiar en cada nación. El Estado cobró mayor importancia, y su intervención directa en la economía pasó a ser vista como algo normal y necesario, con el reacomodo consiguiente de las relaciones entre las oligarquías, los sectores medios y las clases populares.

En algunos países, como México, la organización política ya había experimentado cambios en el mismo sentido, pero no por ello dejaron de sentirse los efectos de la crisis. Así la década tiene un gran significado para comprender la época actual, pues buena parte de las estructuras y procesos vigentes hoy, encuentran su cauce en aquellos cambios. Sin embargo, el tema no ha sido tratado en ninguna obra específica que reúna las diversas experiencias que se dieron en los países de la región, y si bien existen valiosos trabajos para casi todos los países, su estudio implica un esfuerzo considerable que se inicia en la difícil disponibilidad de los otros.

Por lo anterior, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM emprendió la realización de una antología de trabajos sobre cada uno de los países latinoamericanos. Para ello el exdirector del Instituto, doctor Pablo González Casanova, encomendó a prestigiosos científicos sociales de cada país la elaboración de un documento en el que se analizara lo sucedido en la década.

El camino seguido garantizó no sólo contar con trabajos originales, sino también, por medio de la bibliografía utilizada en cada uno, ofrecer al lector interesado una guía para profundizar su estudio.

Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó todo el éxito deseado, pues en algunos casos no se pudo contar, por diferentes causas, con la colaboración de los científicos invitados. Los estudios incluidos corresponden a: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Salvador, Uruguay y Venezuela. El orden en que aparecen ha sido establecido pensando en presentar al lector conjuntos de países, dentro de los cuales hay una problemática más o menos común y en el mismo sentido diferenciable de los otros conjuntos.

De esta manera presentamos tres grupos: El Caribe y Centro América: Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua; Países Andinos: Bolivia, Ecuador, Perú; El Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay; México y Venezuela se presentan por separado, ya que su problemática en esta época guarda poca relación con la de los demás, el primero, debido a la Revolución de 1910, y el segundo, por el auge del petróleo.

Por otra parte, se ha incluido un prólogo, en el cual se presenta, de manera general, la situación global de la región y la de los países capitalistas, a fin de proporcionar una visión más amplia al lector, labor que se encomendó al sociólogo Víctor Manuel Durand Ponte.

Los trabajos presentados no responden a una misma orientación teórica; por el contrario, en ellos se encuentra una buena variedad de enfoques, lo que representa una perspectiva adicional, dado que, en cierta forma, el lector podrá ver fácilmente la bondad de los diferentes acercamientos, simplemente comparándolos. No obstante lo anterior, en casi todos los trabajos hay información básica sobre la economía, los movimientos sociales, la estructura de poder y las relaciones exteriores, lo que permite nuevas interpretaciones sobre la misma información.

Creemos, con sus limitaciones, que esta publicación supera una deficiencia en el conocimiento de la realidad latinoamericana, y esperamos estimule análisis más profundos.

Queremos agradecer a todos los autores su valiosa colaboración, que ha hecho posible la edición de esta obra.

RAÚL BENÍTEZ ZENTENO

PRÓLOGO

1929 marca sin duda el inicio de la mayor y más profunda crisis que haya avalado al sistema capitalista mundial. Durante los años que dura la crisis, de 1929 a 1933, todas las contradicciones del capitalismo estuvieron, más que en ningún otro momento, a flor de tierra.

El desarrollo desigual entre la industria y la agricultura, la irracionalidad del capitalismo que se deriva de la producción social y de la apropiación privada —nunca antes se habían destruido tantos alimentos mientras millones de desocupados se morían de hambre—, en pocas palabras, nunca la contradicción inherente a la mercancía, que es una contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio, fue tan evidente.

Sin embargo, lejos de desaparecer el sistema capitalista, de haber sido la crisis la causa del derrumbe del sistema, salió de ella (sobre todo a causa de la Segunda Guerra Mundial) más fuerte y agresivo, y las mismas crisis se harían a partir de entonces menos virulentas.

Por esto el estudio de las sociedades latinoamericanas, durante esta época, tiene un enorme significado teórico para la comprensión de su historia y sobre todo de su presente.

En este prólogo, más que intentar un resumen de los acontecimientos en la región o de procurar un análisis de las distintas metodologías o enfoques teóricos que utilizaron los autores que participan de esta antología, vamos a presentar a grandes rasgos cuál fue a nivel mundial la expresión de la crisis y cuáles sus consecuencias, sobre todo para los países dependientes y, en particular, para Latinoamérica. Lo hemos decidido así pensando en que no todos los lectores tendrán la información de los especialistas en ciencias sociales, y que el proporcionárselas, aun cuando sea con cuentagotas, les será de alguna utilidad. El otro enfoque estaría más destinado a los especialistas y, en todo caso, de la lectura del libro ellos podrán obtener sus conclusiones.

La producción industrial del mundo experimentó una baja más que considerable, pues el índice en el año de 1932 era parecido apenas al obtenido en 1913. En el cuadro 1 reproducimos la información.

CUADRO 1 *

INDICE DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL MUNDO
(1921 = 100)

Año	1913	1929	1930	1931	1932	1933
Medios de producción	69	110	96	82	62	73
Medios de consumo	81	105	98	91	89	96

FUENTE: E. Varga. *La crisis y sus consecuencias políticas*. Ed. Europa-América. Barcelona, 1935, p. 51.

El descenso mucho más pronunciado de los bienes de producción se explica fácilmente por la mayor inestaticidad de su demanda; pues mientras los bienes de consumo mantenían su demanda, al menos para la subsistencia de la población, era obvio en cambio que en estos momentos pocos empresarios pensarían en modificar su equipo productivo, o en aumentarlo cuando en términos generales había sobreproducción.

Con este solo indicador el lector podrá darse cuenta de la profundidad de la crisis en el mundo; no obstante, su efecto no fue el mismo en todos los países. En el cuadro 2 se reproducen los datos para algunos países seleccionados.

CUADRO 2

INDICE DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EL AÑO 1932
(1928 = 100)

País	EUA	Alemania	Inglaterra	Francia	Japón
Medios de consumo	48.2	50.2	85.3	80	99.5
Medios de producción	81.3	77.7	90.5	64	110.3

FUENTE: E. Varga. *La crisis y sus consecuencias políticas*. Ed. Europa-América. Barcelona, 1935, p. 52.

* Dados los problemas de comparabilidad de las distintas fuentes para la información estadística, hemos decidido utilizar una sola fuente, pues el tiempo disponible no nos permitía un análisis apropiado.

Los países que menos sufrieron los efectos de la crisis fueron Inglaterra y el Japón. El primero debido a que ya en 1928 la producción era bastante baja y a que la organización de *Common Wealth* cerró el imperio evitando mayores efectos para Inglaterra, al mismo tiempo que exportaba para sus colonias sus consecuencias más graves. El segundo, debe recordarse que su economía ya funcionaba en gran parte como economía de guerra; en aquel entonces ya había invadido a la China. Este último criterio es tanto más importante si pensamos que constituyó al final de cuentas el único que pudo solucionar los problemas creados por la crisis.

En los otros países mencionados los efectos fueron severos; sobre todo en los Estados Unidos y Alemania. Francia constituye un caso especial, ya que la crisis se manifiesta más en los bienes de producción que en los de consumo. Las razones de esto son que en este país la crisis tuvo un comienzo relativamente tardío, así como la ejecución de vastos programas gubernamentales durante la crisis; construcción de fortificaciones, puertos y canales; y, además, el paso tan fuerte de la crisis en el sector de los bienes de producción se debe, al menos en parte, a la depresión de las industrias que producían bienes de lujo.

Esta baja en la producción industrial fue acompañada de la brusca caída de los precios del comercio al por mayor. En el cuadro 3 se reproducen los datos necesarios referentes a algunos países seleccionados.

CUADRO 3
ÍNDICE DE LOS PRECIOS DEL COMERCIO AL POR MAYOR
(1913 = 100)

Año	Alemania	Francia en francos oro	Inglaterra (Economist)	EUA	Japón
1929	137	127	127	137	166
1930	125	113	107	124	137
1931	111	102	89 (a)	105	116
1932	97	87	86	93	122 (b)
1933	93	81	87	94 (c)	136

FUENTE: *Bulletin Mensual de Statistique*. Sociedad de las Naciones, 1934, núm. 7.

- a) Inflación desde septiembre de 1931.
- b) Inflación desde fines de 1931.
- c) Inflación desde abril de 1933.

Copiado de E. Varga. *La crisis y sus consecuencias políticas*. Ed. Europa-América. Barcelona, 1935, p. 59.

A pesar de que las cifras del cuadro no son estrictamente comparables, pues en cada país se incluyen mercancías diferentes, nos dan una idea general del movimiento de precios. Así el porcentaje del promedio anual de la caída de los precios entre 1929 a 1933, es para Alemania del 32%; para Francia del 36%; en Inglaterra del 31%, lo mismo que en los Estados Unidos.

A pesar de esta baja considerable de los precios y de medidas crediticias, no fue posible resolver la crisis; el comercio mundial experimentó una baja enorme tanto en las importaciones como en las exportaciones.

CUADRO 4
COMERCIO EXTERIOR
(en miles de millones de dólares oro)

	1928	1929	1930	1931	1932	1933
Importación	34.7	35.6	28.8	20.8	14.0	12.5
Exportación	32.8	33.0	26.5	18.9	12.9	11.7

FUENTE: Estadísticas de la Sociedad de Naciones. Copiado de E. Varga. *La crisis y sus consecuencias políticas*. Ed. Europa-América. Barcelona, 1935, p. 78.

Como puede observarse en el cuadro 4, el comercio exterior era para 1933 apenas un poco superior a un tercio del efectuado en 1928. Además, las formas de comercialización regresaron a sus niveles más primitivos, ya que debido a la falta de financiamiento, a la suspensión de todos los pagos de deudas, y a las severas medidas proteccionistas tomadas, sobre todo, por los países metropolitanos, el comercio exterior se convierte en una relación entre dos países con intercambios de mercancía en términos de trueque, al menos aseguraban que su balanza comercial fuese estable.

Así, pues, la economía mundial estaba en bancarrota; todo el sistema capitalista se había desorganizado totalmente; el auge que resultó de la Primera Guerra Mundial desapareció como por arte de magia para que los volúmenes de producción y los precios de las mercancías volvieran al nivel de 1913.

El análisis de la crisis en los Estados Unidos,¹ que fue sin duda uno de los países que más sufrieron las consecuencias, y que para aquel entonces ya empezaba a desplazar a Inglaterra como centro

¹ Los datos para este análisis han sido tomados básicamente de S. E. Morison y H. S. Commanger: *Historia de los Estados Unidos de Norteamérica*, t. III. México, 1951.

de la economía mundial, sobre todo por sus relaciones con América Latina, podrá dar más luz al lector sobre la gravedad del problema.

A partir de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos conocieron un auge cuya importancia tal vez sólo pueda ser comparada con el auge que experimentó la economía americana después de la Guerra Civil. En el año de 1928 y 29, dicho impulso alcanzó su punto más alto.

La cotización media de los valores corrientes subió a 117 en diciembre de 1928, y en septiembre de 1929 alcanzaron 225, y algunos valores, como los de la United States Steel y de la General Electric subieron mucho más. Impulsados por las ganancias astronómicas los corredores de la bolsa aumentaron sus empréstitos bancarios de 3 500 millones de dólares, en 1927, a 8 500 millones en 1929. Se crearon un gran número de organizaciones financieras, y, en 1929, sólo en la bolsa de Nueva York se negociaron 1 124 900 acciones. Parecía que el público estaba dispuesto a absorber cualquier cantidad de papel, pues sólo en enero del mismo año se lanzaron al mercado obligaciones por nada menos que 1 000 millones de dólares. Todos los índices de la actividad económica marcaban una sensible alza.

Ante la manía especulativa que se había desatado, la Oficina de Reserva Federal se preparaba a poner fin a la política de crédito fácil que habían inaugurado en 1927. En realidad ya existían factores de preocupación. La situación mundial no era buena, no había manera de cobrar las deudas de la guerra, el comercio exterior declinaba verticalmente y miles de millones de la inversión privada estaban sin cobrar intereses; el alza había terminado.

Por otra parte, había depresión en la agricultura y el poder adquisitivo de los campesinos disminuyó. En algunas industrias —como la del carbón y la textil, no participaron del auge—, lo cual aunado a que el progreso técnico perjudicaba a las empresas antiguas empezó a incrementar la desocupación y aunque ésta nunca bajó del millón y medio, durante el decenio de los años veinte su crecimiento alarmaba. Se concluía que gran parte de la riqueza generada había ido a parar a manos de unos pocos privilegiados y la capacidad adquisitiva no había aumentado. Mientras que el índice de los salarios creció entre 1923 y 1928 de 100 a 112, el de los beneficios especulativos llegaba hasta 410. Por otra parte, las deudas públicas y privadas alcanzaban casi un tercio de la riqueza nacional.

La crisis se presentó en octubre de 1929; el 21 de ese mes los valores empezaron a bajar; el día 23 cambiaron de manos 12 millones

de acciones, y el 29 se produjo la catástrofe. En menos de un mes las acciones bajaron un 40%, en término medio.

A pesar de que los funcionarios públicos y privados veían en la caída de los valores un evento pasajero e incitaron a los inversionistas a comprar a bajos costos para que luego que pasara la histeria hicieran el gran negocio, resultó como dicen apropiadamente Morison y Commanger: "Todos los que prestaron oídos a los consejos de los expertos vivieron para lamentarlo."²

En los tres años siguientes, los precios de los valores de las 50 empresas industriales más grandes bajaron en 76%, los de las 20 compañías ferrocarrileras lo hicieron en un 80% y los de las 20 compañías de servicios públicos en un 72%.

Una vez iniciada, la depresión tomó cada vez más fuerza. Millones de inversionistas perdieron sus ahorros y muchos de ellos quebraron. Las deudas subieron y las compras disminuyeron, las fábricas redujeron su producción y despidieron personal; en 1930 había poco más de 3 millones de desocupados, y en 1933 el número era de 12 a 15 millones. Los obreros que conservaron sus puestos vieron bajar sus salarios a menos de la mitad, y aun cuando los precios bajaron no lo hicieron en la misma proporción. El valor de la propiedad inmobiliaria se desplomó y la recaudación tributaria decreció a un nivel alarmante, imponiendo economías al gobierno. Por otra parte los pagos de intereses y dividendos alcanzaron, en 1931, un récord de 8,000 millones de dólares; en ningún momento de la depresión bajaron a menos del nivel de 1928, y considerando que la renta nacional bajó de 85,000 millones de dólares a 32,000 millones, entre 1929 y 1932, resulta que la carga de la depresión pesó con irritante desigualdad sobre las clases menos privilegiadas.

Como una prueba más de ello, el agricultor en 1920 recibía únicamente el 15% de la renta nacional; pero en 1933 sólo alcanzó el siete por ciento.

Con respecto a los obreros, el cuadro 5 nos proporciona los datos que muestran claramente el sacrificio que le fue impuesto a la clase obrera.

Mientras la producción baja para 1933, con respecto a los años base en un 24%, el grado de ocupación desciende aún más: 34%; lo cual indica que la explotación de la clase obrera se incrementó, tal y como lo corroboran los otros datos. Así, por ejemplo, el número de horas de trabajo disminuye aún más que el grado de ocupación,

² *Op. cit.*, p. 106.

CUADRO 5

COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS FACTORES DE LA ECONOMÍA AMERICANA
(1923-25 = 100)

Año	Producción	Grado de ocupación	Horas de trabajo	Suma pagada en salarios	Rendimiento por obrero	Rendimiento por hora de trabajo	Costo de trabajo por unidad producida
1923	101	104.8	106.5	103.4	97.3	95.0	102.3
1924	94	96.2	33.9	95.7	97.7	100.1	102.1
1925	105	99.6	99.9	100.9	105.1	104.8	96.5
1926	108	101.4	101.6	104.3	106.5	106.7	96.6
1927	106	98.8	98.0	107.0	107.1	107.9	96.6
1928	112	97.2	97.0	101.8	114.8	115.0	31.3
1929	113	101.1	101.8	107.7	117.8	117.0	90.7
1930	95	87.8	80.7	87.4	108.4	117.9	91.9
1931	80	74.4	64.4	66.0	107.7	124.4	82.2
1932	63	62.0	48.3	45.3	101.2	130.3	72.1
1933	76	66.2	52.0	47.5	114.8	145.0	63.4

FUENTE: *National Industrial Conference Board Bulletin*, del 20-11 de 1934.
Copiado de E. Varga, *op. cit.*, p. 151.

lo que significa una mayor intensidad del trabajo que de otra manera está indicado por las columnas sobre rendimiento; por otra parte, la suma de salarios pagados es la que experimenta la baja más pronunciada del 53%. De esta suerte, a mayor intensidad de trabajo es menor el salario. El obrero americano fue superexplotado. Además es necesario señalar que salvo el renglón de salarios y de costo del trabajo por unidad producida (que también es un indicador de la superexplotación), los demás tienen un repunte de 32 a 33, mientras salario y costo de trabajo continúan bajando. Es decir, el capital no sólo pudo superar la parte más aguda de la crisis gracias a la mayor explotación del obrero; pasada ésta la aprovecha para explotarlo aún más.

En realidad esto no fue privativo de los Estados Unidos de Norteamérica; se presentó con variada intensidad en todos los países que fueron afectados por la crisis. Sin embargo, de la misma manera que en los países desarrollados la crisis pesó sobre todo en las clases populares; fue en los países subdesarrollados donde la crisis hizo más estragos, y fueron, sin lugar a dudas, las clases populares de éstos las que más sufrieron las consecuencias.

Dada la composición del mercado mundial las colonias y los países dependientes se habían integrado al mismo tiempo como abastecedores de materias primas y como consumidores de los productos manufacturados de las metrópolis. En términos generales, que obviamente varían de país a país, estas naciones tenían su economía organizada alrededor de un cultivo o de unos pocos; así, pues, dominaba el monocultivo. Cuando se presentó la crisis, la caída de los precios, sobre todo de los productos agrícolas, tenía un efecto infinitamente mayor que en los países de economía más diversificada no sólo porque las condiciones del monocultivo o en torno a un número pequeño de productos agropecuarios afectan de un solo golpe la economía, sino también debido a que el precio de dichas mercancías está fuera de su control.

El cuadro 6 nos da una idea de la caída de los precios de mercancías agrícolas.

Aunado esto a la estrechez de los mercados, la baja experimentada en el ingreso debido a las exportaciones fue sumamente importante, pues la caída de los precios fue aún más impresionante para los campesinos de estos países. Fueron sin lugar a duda los trabajadores del campo los que más sufrieron las consecuencias, pues a pesar de que algunos de ellos podían volver a la economía de autoconsumo su situación fue aún más pobre.

CUADRO 6

PRECIOS DE MERCANCIAS TÍPICAMENTE COLONIALES
(En francos oro por quintales métricos)

	Londres arroz Saigón	Nueva York azúcar caña Cuba	Londres té ceilán	Nueva York café	Londres caca	Londres soja	Alejandro algodón	Nueva York caucho	Londres yute	Nueva York seda, cerda en kgs.
Dic. 1928	32.7	24.5	3.2	206	65.4	31.0	433	206	90	58.9
Dic. 1932	12.3	9.5	1.0	95	27.6	12.4	99	37	25.4	16.6

FUENTE: E. Varga, *op. cit.*, p. 98.

Aún a pesar de la fuerte caída de los precios la producción mundial de productos alimenticios no descendió, sino que prácticamente se mantuvo estable como lo muestran los datos del cuadro 7.

CUADRO 7

INDICE DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(cereales, carnes, vino, café, té, cacao, etcétera)
(1925-29 = 100)

1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933
98	97	99	103	103	104	102	104	103

FUENTE: "Datos de la Sociedad de Naciones", copiado de E. Varga, *op. cit.*, p. 83.

De esta manera la producción constante de estas mercancías —debido a que el gran número de productores agrícolas hacía sumamente difícil la ejecución de una política orientada a la disminución de la producción, y a que algunos países procuraban contrarrestar la caída de precios intentando colocar más mercancías en el mercado mundial— influía aún más en la baja de los precios, y pese a los esfuerzos de algunos países, como Brasil y Cuba, de destruir las cosechas con el fin de contrarrestar la caída de los precios, en términos generales, los esfuerzos fueron inútiles.

La pérdida del valor de las exportaciones de los países dependientes limitaron su capacidad para importar (lo cual, como veremos más adelante, tuvo consecuencias importantes para la industrialización de algunos países), la falta de crédito internacional y la cada vez mayor incapacidad de las metrópolis para exportar capitales (véase el cuadro 8) obligaron a estos países a suspender el pago de sus deu-

das con el exterior, y mientras fue posible, a pagar con sus reservas de oro; por esto las reservas de los bancos centrales y de los gobiernos de Asia bajaron en un 66%, y los de América Latina en un 46% durante el periodo de 1929 a 1933. En tanto que los de Europa se incrementaban en más del 50% en el mismo periodo.³

CUADRO 8
EXPORTACIÓN DE CAPITALES

	1921	1929	1930	1931	1932	1933
EE UU. (millones de dólares)	1.325	763	1.020	255	27	1.6
Inglaterra y Colonias (millones de libras esterlinas)	219	159	127	37	29	30
Extranjero	86	54	70	9	0.3	8

FUENTE: Anuario Estadístico de la Sociedad de Naciones. Años 1932-33 y 1933-34. Copiado de E. Varga *La crisis y sus consecuencias políticas*. Ed. Europa-América. Barcelona, 1935, p. 75.

Resulta claro de lo anterior cómo el mayor peso de la crisis recayó en los países periféricos y cómo, si esto fuera poco, la crisis misma provocó una descapitalización de éstos para concentrar aún más la riqueza en los países metropolitanos.

La crisis trajo para los países latinoamericanos una gran inestabilidad política, no hubo ningún país de la región que durante la crisis pudiera conservar en el poder a sus jefes de Estado. Las formas variaron, desde renuncia, el golpe de Estado, el cuartelazo, hasta la imposición de dictaduras en los países invadidos en la época por los Estados Unidos, como Nicaragua y la República Dominicana.

Dicha inestabilidad política puede ser explicada por la dinámica de la misma crisis, ya que al haber desarticulado toda la estructura económica, la base de sustentación de las clases sociales dominantes, básicamente agrario-exportadoras, perdieron su fuente de poder y dominación; al mismo tiempo, la insostenible condición en que se

³ Los números absolutos son:

Años	Europa	Asia	América Latina
1929	4.511	728	801
1933	6.932	481	367

FUENTE: E. Varga, *Op. cit.*, p. 75.

encontraban las clases medias y populares hacía que se levantasen o fuesen movilizadas, con relativa facilidad, en su afán de encontrar solución a sus problemas.

Los movimientos populares tendieron a los extremos: o socializantes o bien fascistas. Los primeros, encontraban su base en las clases obreras, mientras los segundos, en las clases medias y algunos sectores de la oligarquía. La Revolución Rusa y la Guerra Civil española prestaban los marcos ideológicos para dichos movimientos; aun cuando en casi todos los países se presentaron estas dos tendencias destacan los movimientos sociales de Chile y Perú, mientras que el movimiento fascista que más se desarrolló fue el llamado Movimiento Integralista del Brasil.

Paradójicamente el resultado de esta inestabilidad política, derivada de la incapacidad de las clases sociales para sustentar una de ellas el poder, es el fortalecimiento de los Estados y la adquisición de una mayor autonomía frente a las clases. Los gobiernos o bien se constituyen como dictaduras militares o bien como regímenes populistas. En el primer tipo, quizá el más generalizado, destacan Nicaragua, República Dominicana, Argentina, El Salvador. En el segundo Brasil, México y Colombia.

En medio del caos creado por la crisis es el Estado, como ya habíamos señalado, el que busca orientar el ritmo de la producción y de su comercialización tanto interna por medio de la fijación de precios fijos, como exterior; para lo cual en varios países el Estado compra las cosechas para almacenarlas, o en los casos más radicales, para destruirlas.

Esta participación del Estado, que no tiene precedentes como práctica económica, es una empresa costosa. El sector agropecuario pasa a ser sistemáticamente subvencionado, en una política que algunos han identificado con el New Deal, pero que en realidad sólo tiene una semejanza económica, pues en lo social en la política latinoamericana la subvención beneficia básicamente a los grupos terratenientes.

Por otra parte, el afán del Estado de contrarrestar los efectos de la crisis lo lleva en casi toda América Latina a definir reformas en la política monetaria y cambiaria. En el primer aspecto se puso un hasta aquí a la idea de la libre convertibilidad, apoyada quizá por la pérdida de prestigio que experimentaba esta idea en los países metropolitanos. Este abandono tuvo para casi todos los países consecuencias deflacionarias (la excepción más importante la constituye Chile) que la política monetaria y crediticia no logra frenar, sobre todo por su modesto carácter.

Junto a estas políticas aparecen otros rasgos nuevos. El Estado encuentra, al mismo tiempo, que una nueva fuente de gastos representa una fuente de recursos en el control de la economía y, sobre todo, en el intercambio. La política de subvención es costeadada con moderadas tasas a la importación y en lo que Furtado ha llamado la socialización de las pérdidas. De esta manera la pérdida del poder de compra de las exportaciones se ve reforzada y sus efectos comienzan a diferenciarse por sectores; así el proteccionismo a la incipiente industria aparece como corolario de estas políticas.

Por otra parte, el intento de diversificar la economía agrícola empieza a hacerse sentir tan pronto como los efectos del monocultivo afectan ahora también a las clases dominantes. Sin embargo, los avances logrados en términos generales son modestos.

Todos estos cambios implicaban una nueva imagen entre el Estado y la economía; significaba la ruina del liberalismo, cuya teoría no podrá justificar las nuevas políticas que favorecían a los sectores dominantes.

Sin embargo, el nuevo papel del Estado dirigente se veía limitado, pues aquellos sectores que habían dominado el sistema anterior a la crisis, y que superarán, al menos en parte, sus primeros embates, carecían de medios y, en ocasiones, también de deseos para acelerar los cambios que se preparaban. En este aspecto la acción del Estado es limitada (aun cuando no en todos los casos, Brasil y México, por ejemplo) e incoherente. En medio del avance del dirigismo, el clima en que se desarrollaban los sectores ahora más dinámicos de la economía comienza por ser a menudo inesperadamente caótico.

Otro aspecto de gran importancia que se desarrolla durante la crisis, es la industrialización, realizada bajo lo que se ha llamado la sustitución de importaciones. En realidad este proceso no es generalizable a toda América Latina, pues hubo algunos países que no iniciaron durante esta época su proceso de industrialización, como aquellos que conocieron un fuerte aumento de sus exportaciones en el periodo subsecuente a la crisis como Venezuela, Perú o los países de América Central; a algunos otros, su grado de atraso no se los permitió, como Bolivia o Paraguay y algunos países del Caribe. Por otra parte, la crisis no se presenta como la madre de la industrialización, pues ésta tiene importancia en aquellos países que ya habían logrado algún grado de industrialización de productos de consumo no duradero. Sin embargo, este proceso, ya antes de la crisis, daba síntomas de pérdida de dinamismo, y es la crisis quien la reaviva al modificar su estructura.

En efecto, el desarrollo del sector industrial hasta antes de la crisis funcionaba como un reflejo de la expansión de las exportaciones; a partir de la crisis, la industrialización vendría a ser inducida fundamentalmente por las tensiones estructurales provocadas por el declinio o crecimiento insuficiente de las exportaciones.

La industrialización antes de la crisis, consistía en un mucho de productos de bienes de consumo corriente como tejidos, productos de cuero, alimentos elaborados, etcétera, que encontraban mercado gracias a la expansión de la renta que se derivaba por el impulso de las exportaciones. Por otra parte, el crecimiento de las ciudades significaba un aumento en la demanda de bienes manufacturados para la construcción, que en términos generales eran producidos antes por medios artesanales.

La forma en que se constituyeron estas industrias, provocó su dependencia de las exportaciones para su crecimiento

En primer lugar la industria funcionaba en un mercado abundante de mano de obra, en algunos casos proveniente del exterior, lo cual le permitía operar con tasas de salario estables; es decir, sin presiones fuertes que tendieran a presionar sobre la baja de costos y por ende a la adquisición de nueva tecnología. En este sentido la industrialización funcionaba igual que la agricultura de exportación, pues ésta tenía siempre mano de obra abundante procedente de los sectores de autoconsumo.

Al mismo tiempo, las inversiones para infraestructura y las que requería el sistema industrial encontraban facilidades de financiamiento en el exterior. Sin embargo, este financiamiento generalmente estaba atado a la adquisición de bienes de capital y tecnología de los centros hegemónicos.

Esta dependencia financiera reducía el proceso industrial al tratamiento de materias primas locales o al acabado de productos semi-manufacturados, siempre con maquinaria y tecnología importada. Incluso la asistencia mecánica a las empresas se limitaba a la sustitución de piezas, las cuales eran surtidas para las casas importadoras.

De esta manera, la industria no generaba demanda para sí misma o no presionaba para la nueva sustitución de importaciones.

Su crecimiento se limitaba a la expansión industrial en el mismo tipo de artículos de acuerdo con la nueva demanda general por la renta que producían las exportaciones. No se trataba, pues, de un proceso tendiente a la formación de un sistema industrial cada vez más integrado, sino simplemente de la creación de unidades similares a las ya existentes.

Todas estas limitaciones que en su tiempo pudieran ser tenidas como ventajas, impidieron que se creara en Latinoamérica una auténtica mentalidad empresarial, que aparte de su función administrativa fuese conocedora de los procesos técnicos en su totalidad.

En los países que ya habían cubierto esta primera etapa de la sustitución de las importaciones, la crisis de 1929, al asumir inicialmente la forma de contracción de las importaciones, provocó junto con otros factores la depreciación cambiaria que poco después pusieron en marcha procesos inflacionarios. Así, tanto la depreciación como la inflación permitieron tasas más altas de ganancia para el núcleo industrial ligado al mercado interno. Por otra parte, como existía una capacidad ociosa por el relativo estancamiento anterior, la industria pudo cubrir el exceso de la demanda —creado por la contracción de las importaciones de bienes generalmente de mayor calidad— sin tener necesidad de invertir más capital, y puesto que no se dependía de materias primas del exterior, sino de manera reducida, pudo ocurrir una expansión de este sector apoyada en la explotación intensiva de la mano de obra.

El aumento de la producción manufacturada de bienes de consumo corriente que experimentaron aquellos países, en donde las condiciones lo permitieron, como México, Brasil, Argentina, etcétera, se tradujo en un aumento de la demanda de productos intermedios y bienes de capital. Dada la incapacidad para importar y la creación de ciertos excedentes crearon las condiciones para nuevos sectores de inversión. En los países donde ya existía cierta experiencia anterior en metalúrgica, como el caso de México, y donde la acción del Estado se hace con más eficacia en la promoción de industrias de base, el proceso de sustitución de importaciones ganó en amplitud y profundidad.

Finalmente, la crisis provocó un cambio general en las relaciones de América Latina con las metrópolis y permitió, para aquellos países que intensificaron su industrialización, el romper con un tipo de dependencia para sentar las bases de otro más integrado.

Los Estados Unidos de Norteamérica, después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a hacer sentir su peso internacional en tanto Inglaterra va perdiendo terreno. Durante la crisis y, posiblemente, un poco antes, la política norteamericana con América Latina empieza a cambiar, significa el abandono del *Big Stick* para inaugurar la política del *Good Neighbor*.

Corresponde al afianzamiento de la metrópoli en las zonas ocupadas por sus *marines* —Santo Domingo, Nicaragua— y a la creciente ola de descontento que baña a Latinoamérica contra el agresor.

La política del buen vecino implica la renuncia formal a la intervención armada y el apoyo creciente a la organización panamericana.

El clima europeo que presagia la guerra, como la conquista italiana de Etiopía y la ascensión del fascismo en Alemania, así como la invasión japonesa en China, confieren un nuevo valor a los intentos para la organización del panamericanismo.

En contrapartida de la "blanda" diplomacia americana, su política económica a cuyo frente aparecía el proteccionismo, se desentendía por procurar cualquier tipo de reciprocidad con las naciones, latinoamericanas, provocando con ello cierta tensión en las relaciones. Los obstáculos a la organización del panamericanismo continuaban siendo presentados por aquellas naciones que, como Argentina, pertenecían más a la órbita de Inglaterra, y que se oponían a la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos en la América Latina.

Sin embargo esta posición se iba debilitando en la medida en que Inglaterra era cada vez menos capaz para enfrentarse a los intereses de la potencia nortea.

En estas condiciones, la conferencia panamericana efectuada en Montevideo en 1933 dio como resultado un pacto de no agresión y conciliación, propuesto por Argentina y apoyado inesperadamente por los Estados Unidos. Con esto la metrópoli pudo evitar una unánime condena de la política proteccionista de su país. De esta suerte la conferencia se pronunció en favor de acuerdos bilaterales para la liberación recíproca de las barreras aduaneras.

Así, pues, los Estados Unidos preparaban la institucionalización de su hegemonía, la creación de un organismo internacional que les permitiera desde ahí marcar los derroteros que habrían de seguir los países latinoamericanos.

Por otra parte, las relaciones de dependencia de cada uno de los países con la metrópoli variaron en algunos casos. Variaron en aquellos países en los cuales gracias a la industrialización y a su política agraria la economía se diversificó. En las otras su situación continúa la misma: producción de uno o pocos artículos de tipo agropecuario o minero para la exportación a un país y su dependencia de las importaciones para cubrir sus necesidades de productos manufacturados, sobre todo de consumo corriente y duradero, y en algunos también de productos agropecuarios para alimentar a su población.

En los primeros, en los que se inició el desarrollo hacia adentro, para emplear el lenguaje de la CEPAL, aun cuando su comercio exterior continúa basado en la exportación de productos agropecuarios y mineros, en ocasiones basados en economía de monocultivo, su

dependencia de la importación de bienes de consumo corriente y duradero va perdiendo importancia para dar paso a una dependencia más inelástica de bienes intermedios y de capital.

Sin embargo, el rasgo fundamental que se inicia tímidamente durante la crisis es la internación del imperialismo en las sociedades que lograron efectuar su industrialización. No es que el capital no haya estado presente en algunas sociedades y aún lo esté, los enclaves mineros y plantaciones serían una prueba irrefutable; más bien hacemos referencia a la participación de los intereses imperialistas en el sistema industrial, en el sector más dinámico de la sociedad.

Por razones históricas que no cabe discutir aquí, los países que lograran esta industrialización no tenían ni enclaves mineros ni del tipo de plantaciones, lo cual no quiere decir que en ellos no hubiese capital extranjero; lo había en los servicios públicos, en los ferrocarriles, en la agricultura y en la minería, pero no era dominante en el conjunto de la economía. En cambio, ahora su temprana incorporación en la industria manufacturera, tan temprana como la industrialización misma y su desarrollo, le iría otorgando un papel cada vez más importante y por ende más dominante hasta demostrar cómo en nuestros días, salvo que un país salga de la órbita del capitalismo como lo hizo Cuba, el único medio que tienen estos países de desarrollarse es logrando una mayor integración económica con la metrópoli; es aliándose cada vez más al capital extranjero y a sus intereses; es consolidando lo que se ha llamado acertadamente el desarrollo asociado; es, en una palabra, a costa de su autonomía nacional.

VÍCTOR MANUEL DURAND PONTE

PAÍSES DEL CARIBE Y CENTROAMÉRICA



LA CRISIS DEL 29 Y LA INSTAURACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE DOMINACIÓN-DEPENDENCIA EN HAITÍ

Susy Castor

A principios del siglo, ya que se había concluido el reparto del mundo entre las grandes potencias capitalistas, se impuso a los Estados Unidos la necesidad de una política de expansión hacia zonas en donde la influencia europea era menor o estaba en situación de desventaja. Orientaron sus esfuerzos hacia la región del pacífico y, sobre todo, hacia América Latina, desplazando la presencia declinante de España, o la más significativa, de Inglaterra. Su injerencia en la vida económica y política de los países latinoamericanos aumentó en forma creciente, llegando, durante el gobierno de Woodrow Wilson, hasta la intervención armada y la ocupación militar en América Central y el Caribe: Cuba (1906), México (1914), Haití (1915), Santo Domingo (1916), Nicaragua (1917).

Frente a esta política de intervención, llamada del *Big Stick*, cundió el descontento en América Latina, que se manifestó abiertamente en los diversos países y aun en un plan oficial, durante la Conferencia Panamericana de Santiago de Chile en 1923, y la de La Habana en 1928. Para calmar estas inquietudes e “inspirar confianza”, el Departamento de Estado trató de formular una nueva política. Hoover emprendió un viaje a través del continente en 1929... “para manifestar el respeto, estimación y deseo de los Estados Unidos de una cooperación espiritual e intelectual con los países de América Latina”.¹

El retiro de los *marines* de la República Dominicana (1924) y de Nicaragua (1926), la normalización de las relaciones con México, la estabilización de la situación en Panamá y Cuba, con la institucionalización de los gobiernos peleles, parecían demostrar esa buena voluntad del gran vecino. Pero la presencia de las tropas intervencionistas en Haití constituía aún el talón de Aquiles de esta nueva política e invalidaba las buenas intenciones de Hoover. Todavía más, ninguna solución se vislumbraba para liquidar el caso haitiano. En

¹ Francisco Cuevas Cancino. *Roosevelt y la Buena vecindad*. Fondo de Cultura Económica. México, 1954, p. 115.

diciembre de 1929, el presidente Hoover planteó al Senado la urgente necesidad del retiro de los *marines* de Haití, confesando al mismo tiempo que todavía no veía cómo llegar a ello.²

En efecto, después de quince años de ocupación militar de los Estados Unidos, Haití era sacudido por la agitación y por un fuerte movimiento nacionalista, que canalizaba el descontento y el patriotismo de las diversas capas sociales para plantear como reivindicación nacional el retiro de las tropas de ocupación y el reintegro al país de sus derechos soberanos.

I. EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS ESTADUNIDENSE

Esta nueva etapa de transición —entre una férrea dictadura militar y la búsqueda de nuevas fórmulas de dominación— estuvo supeditada a las incidencias de la gran crisis internacional de 1929.

En los Estados Unidos, ya durante el *boom* de Coolidge (1923-1929), habían aparecido signos precursores de una depresión. Ésta estalló, sin embargo, de manera inesperada, el 25 de octubre de 1929 con el *Crash* de la bolsa de valores de Nueva York, y el colapso de la industria norteamericana se extendió rápidamente a todos los países capitalistas, desde los muy industrializados de Europa hasta las colonias y zonas dependientes.

Los países productores de materias primas, y en particular los países latinoamericanos, fueron fuertemente sacudidos por la depresión. En Haití, el impacto fue brutal. La burguesía, que había esperado que la ocupación promoviera un gran avance económico, resintió de inmediato los golpes de la crisis metropolitana.

Al sumarse a una crisis nacional crónica, el colapso de 1929 tomó en Haití proporciones trágicas. En 1931, el número de desocupados era más elevado proporcionalmente que en cualquier otro país: “la miseria del pueblo haitiano no tenía precedente”.³

Esta situación crítica se prolongó años, comprometiendo las intenciones modernizantes que parecía tener la administración de Vincent. En los mismos Estados Unidos se hacían sentir a partir de 1933 los efectos de la política del *New Deal* de Roosevelt y el inicio de la fase de recuperación del ciclo económico. La situación crítica se fue superando. En Haití, por lo contrario, el marasmo económico se fue profundizando, y las repercusiones de la crisis mundial mucho

² H. P. Davis. *Black Democracy. The Story of Haiti*. Mc Veah The Dial Press, 1938, p. 261.

³ Sténio Vincent. *En posant les jalons (1930-1933)*, t. II, Imprimerie de l'État, Puerto Príncipe, Haití, p. 22.

más duraderas sacudieron muy fuertemente a la sociedad. Esto se debe a que la crisis tenía raíces muy profundas de tipo interno y estructural. La situación económica mundial le vino a dar una nueva dimensión.

A. *Baja de las exportaciones*

La economía haitiana, fincada en la producción y exportación de productos agrícolas, fue golpeada de muerte por la caída internacional de precios de los productos agrícolas. Además, el bajo volumen de las exportaciones no ayudó ni de lejos a compensar las tremendas pérdidas ocasionadas por el bajo nivel de los precios.

La crisis mundial de 1929 subrayó con fuerza la vulnerabilidad del país y los efectos desastrosos del monocultivo. Ya desde 1915, al iniciarse la ocupación norteamericana, se planteó como condición *sine qua non* del desarrollo económico el aumento de la producción. Con este fin se tomaron numerosas medidas administrativas entre las cuales se destacó la creación del Servicio Técnico de Agricultura en 1922 (STA), encargado de modernizar las técnicas de producción. Eran esfuerzos limitados, desde luego, que no podían, en ningún caso, contribuir en forma sensible a resolver los grandes problemas del desarrollo agrícola determinados por la estructura agraria existente.

En 1929 existía un embrión de agricultura de plantación promovido por dos importantes compañías norteamericanas, la Sugar Company (HASCO) (caña de azúcar) y la Plantation Dauphin (henequén). Este sector moderno no lograba crecer y desarrollarse en medio de una estructura global dominada, por una parte, por el latifundismo (estatal y privado) de tipo feudal y, por otra, por una masa de pequeños campesinos que vivían en el seno de una economía de subsistencia o carentes de tierra, sin ningún poder de compra. En definitiva Haití no sólo se agitaba todavía en las mismas condiciones de una economía precapitalista, tal como había ocurrido antes de la intervención militar, sino que tampoco realizó trabajo alguno de infraestructura (camino, irrigación, etcétera) tendiente a impulsar el desarrollo agrícola y aumentar el poder de compra de las masas o a una mayor comercialización de los productos de la agricultura.

El principal producto de exportación, el café, constituía en 1930 el 70% del valor de las exportaciones. Los precios bajísimos registrados a partir de la crisis coincidían con una disminución del volumen global de la producción generada por las mismas condiciones estructurales de atraso de la agricultura. Esta doble tendencia, lejos de constituir

un fenómeno coyuntural de la crisis, se acentuó en proporciones alarmantes durante el decenio de 1930-1940.⁴

Además, las medidas adoptadas por el gobierno brasileño para enfrentarse al colapso económico tuvieron repercusiones profundas sobre el mercado mundial. El gobierno brasileño, para solucionar el problema de su superproducción cafetalera, decidió abandonar su política de subsidios para sostener artificialmente el precio mundial. Resultó de ello un catastrófico desplome de precios.

Con esta gran baja de los precios del café, el algodón, segundo producto de exportación, vino a constituir "la última esperanza".⁵ Todos los esfuerzos se orientaron hacia un aumento de su producción y a una cuidadosa selección para mejorar su presentación. Sin embargo, a partir de 1930, se registró una fuerte caída de los precios, con la consecuencia de una contracción de su exportación. De 1929 a 1931 el valor de las ventas al extranjero disminuyó en más de la mitad.⁶ Esta baja desanimó a los cultivadores, que se negaron a pizar el producto. Una epidemia de gorgojo mexicano complicó más aún la situación. Por su parte la venta del cacao, tradicional producto de exportación, quedó estancado sin perspectiva de cambio.

La industria azucarera, iniciada en 1915 por la Haitian American Sugar Co., experimentó un crecimiento considerable durante la época de la crisis mundial. Sin embargo, la caída de los precios pasados, de \$ 0.11 el kilo en 1923 a \$ 0.04 en 1931-32, amenazó seriamente esa industria. De acuerdo con el gobierno, la HASCO adoptó la política de hacerse sostener por el consumidor haitiano con precios internos más altos que los del mercado mundial. Siguiendo esa política, aun cuando había terminado la crisis mundial, la HASCO se ingenió para ser exonerada, con el decreto oficial del 28 de mayo de 1935, de los derechos de exportación sobre el azúcar.

A partir de 1934, aparece el plátano como nuevo producto de exportación. Después de la amarga experiencia de la crisis mundial, que ya estaba superada, el gobierno haitiano —en un intento desesperado para diversificar la producción y aliviar los efectos depresivos que aún resentía la economía nacional— otorgó a la Standard Fruit Company el monopolio de exportación del plátano. Pero era nada más un paliativo. Solamente la Standard Fruit Company recibía los beneficios del comercio de esta fruta.

⁴ Alain Turnier, *Les États-Unis et le marché haïtien*. Imprimerie St Joseph, Canadá, p. 314.

⁵ Sténio Vincent, *op cit.*, p. 33.

⁶ Pierre Benoit, *150 ans de commerce extérieure d'Haïti*, Institut Haïtien de Statistique, Port au Prince, Imprimerie de l'IHS, 1954, p. 12.

El cuadro siguiente de las exportaciones resume la baja global de la producción agrícola durante esta época.⁷

HAITI: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
(1922 - 1934) (millares de toneladas)

	1922	1930	1931	1932	1933
Azúcar	62.4	111.8	115.1	201.1	325.6
Cacao	2.0	2.3	1.2	0.8	1.1
Café	35.8	34.3	26.3	23.2	19.0

B. Quiebra presupuestaria y política fiscal antipopular

Esta baja en el volumen y el valor de las ventas al exterior, repercutió sobre los ingresos del Estado, alimentados casi exclusivamente por los derechos percibidos de la exportación y la importación que representaban 83.5% de los ingresos gubernamentales durante el período 1927-32. Estos derechos nacionales evolucionaron como sigue: 9 millones de dólares en 1927-28; 7 millones en 1928-29; 6 millones en 1929-30; 5 millones en 1930-31; 4.6 millones en 1931-32. Después de un ligero aumento a 6.2 millones en 1932, estos derechos anuales siguieron su curva descendente reflejándose en forma sustancial en el presupuesto de los gastos públicos.⁸

Como consecuencia de esta situación, el monto del presupuesto de los ingresos públicos disminuyó en forma constante, registrando además un déficit creciente.⁹

HAITI: EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1930 A 1936
(en millones de dólares)

Año	Ingresos	Gastos	Superávit	Déficit
1922-23	6,390	6,115	0,275	
1924-25	8,097	7,843	0,254	
1927-28	10,084	8,199	1,885	
1929-30	7,729	8,123		0,399
1930-31	6,353	7,238		0,885
1931-32	5,604	6,558		0,954

⁷ A partir de datos proporcionados por Lee Montague, *Haiti and the United States (1915-1933)*. Surham, Duke University Press, 1940, p. 21.

⁸ Joseph Chatelain, *La Banque Nationale. Son histoire, ses problèmes*, Puerto Príncipe, 1954, p. 157.

⁹ Roger Hazel. *La production et le commerce de la République d'Haïti*, p. 26.

Además, el pago de las obligaciones de una deuda contraída sobre el mercado norteamericano en 1922, disminuía todavía más el presupuesto. Después de la fase inicial de la ocupación, el gobierno norteamericano había presionado al gobierno de Sudre Dartiguenave a contraer una deuda oficial bajo el pretexto oficial de "sanear las finanzas haitianas e impulsar la economía..." Pero de hecho, Washington quería un medio más de presión sobre el gobierno haitiano. Tergiversó Dartiguenave. Al fin, realizada en 1922, bajo el gobierno de Louis Borno, esta deuda constituía una operación financiera sumamente ventajosa para el National City Bank. De un monto nominal de 23 millones 660,000 dólares, Haití recibió 20 millones 984,042 dólares. La mayor parte de este empréstito sirvió para cubrir gastos de intermediarios, saldos de antiguas deudas francesas, y pagos de numerosas indemnizaciones a extranjeros, sobre todo norteamericanos, quejosos de pérdidas sufridas durante el periodo anterior a la ocupación.

Los intereses y amortizaciones de dicha deuda llegaron a constituir entre el 32% y el 25% del presupuesto nacional.

Con la crisis mundial muchos países, siguiendo una política de austeridad, suspendieron o atrasaron el pago de sus obligaciones en el mercado financiero internacional. Haití, por el contrario, bajo los dictados del consejero financiero norteamericano, ofrecía "un espectáculo apenas creíble". No sólo estaba al corriente del pago de sus obligaciones, sino que estaba adelantado. Para el 30 de septiembre de 1931, Haití había pagado a sus acreedores más del doble del monto, reembolso previsto para la fecha, según las cláusulas contractuales.¹⁰ En diciembre de 1932, ya se había pagado el adeudo correspondiente al 1º de abril de 1933. Según el gobierno haitiano esta política se justificaba por la necesidad de ofrecer serias garantías a los portadores de título de empréstito norteamericano. Sténio Vincent proclamaba con orgullo: "Nuestros títulos son los más fuertemente garantizados que existen en este momento."¹¹ Esta política, llevada por el consejero financiero norteamericano, defendía ante todo los intereses de los hombres de negocios norteamericanos en detrimento de la economía nacional. Así, en las horas más difíciles de la crisis que afectaba la economía, las finanzas y el nivel de vida del pueblo haitiano, Haití, según las mismas palabras del consejero Cumberland, prestaba dinero a Wall Street. Sin embargo, el presupuesto tan bajo exigía del gobierno verdadero malabarismo para sobrevivir en estos años terribles.

¹⁰ Alain Turnier, *op. cit.*, p. 296.

¹¹ Sténio Vincent, *op. cit.*, p. 296.

Sténio Vincent quiso recurrir al paliativo tradicional: colocar un empréstito de 25 millones de dólares en el mercado norteamericano. El proyecto no pudo concretarse debido a la crisis mundial. Pese a las ventajas ofrecidas y las garantías, el gobierno tuvo que confesar que no encontraba “ninguna ayuda, habiendo tocado a todas las puertas que permanecieron siempre cerradas”.¹²

En 1932, solicitó un préstamo de 800 mil dólares por intermedio del Banco Nacional, filial del National City Bank de Nueva York. Le fue negado. El Nacional City Bank utilizó el pretexto de que las garantías ofrecidas no eran suficientes, no obstante que el gobierno haitiano tenía dos millones de dólares en títulos guardados en las arcas de esta institución.

Frente a lo precario de la situación financiera, la administración haitiana empezó una política de restricción de gastos públicos y de austeridad, disminución de salarios, reducción de empleos públicos, suspensión de obras públicas. El campo de aplicación de tales restricciones era limitado, para un presupuesto ya raquítico. El gobierno lo recalcó a los pocos meses, al declarar el señor presidente:

En el capítulo de los gastos hemos alcanzado el tope de la compresión... nos parece imposible ir más allá en este terreno, so pena de exponer los más importantes de nuestros servicios a una desorganización rápida y perjudicial a los intereses de la comunidad.¹³

En 1928, para disminuir los derechos a la exportación del café, el consejero financiero había establecido numerosos impuestos al consumo en particular sobre la producción y venta de alcohol, de las bebidas alcohólicas, del tabaco y los cigarros. Numerosos destiladores y fabricantes de cigarros fueron eliminados del mercado. Gracias a esta tributación interna, los ingresos estatales aumentaron en US Dlls 4.000,000.¹⁴ Haití, ya para esta época, tenía una tasa impositiva tres veces superior a la de Estados Unidos según las propias palabras del consejero financiero.¹⁵ A raíz de la crisis mundial, desapareció el *leitmotiv* de la disminución de los impuestos a la exportación. Los gravámenes tenían una meta exclusiva: aumentar los ingresos gubernamentales. Afectaron los artículos de primera necesidad: como el jabón, el aceite, la manteca de cerdo, etcétera. Los impuestos internos, que representaban el 9.5% de las entradas fisca-

¹² *Idem*, p. 182.

¹³ *Idem*, pp. 98-99.

¹⁴ Joseph Chatelain, *op. cit.*, p. 154.

¹⁵ Sténio Vincent, *op. cit.*, p. 30.

les en el periodo 1922-1927, pasaron a 13.5% entre 1927 y 1932, y a 13.9% en 1932-1937.¹⁶

Esta carga impositiva recaía sobre las masas populares, cuya situación se volvía más difícil, reduciendo todavía más su poder adquisitivo. Aun los círculos oficiales, por lo general tan optimistas, tuvieron que abandonar sus eufemismos y reconocer que "la mayoría del pueblo está sin trabajo y a punto de morir de hambre. . . y se enfrenta hoy a una miseria sin precedente".¹⁷ El paro forzado en el campo y en la ciudad, la escasa circulación monetaria, el alza del costo de la vida, afectaban a todas las clases sociales, lo que hacía cundir el descontento, que no tardó en manifestarse de manera abierta.

El gobierno acusó a la oposición de levantar a las masas, valiéndose del "espectro de la miseria". De hecho, las repercusiones de la crisis de 1929 sensibilizaron con mayor fuerza a las masas populares, contribuyendo a movilizarlas en una lucha abierta contra el gobierno entreguista de Sténio Vincent, y para exigir el fin efectivo de la ocupación norteamericana en el país.

II. *El nuevo reordenamiento sociopolítico*

Al final del siglo XIX, la vida política haitiana se caracterizaba por una agitación constante. A principios del siglo XX, las insurrecciones repetidas expresaban o bien las luchas entre los caudillos políticos y militares en pugna por el poder, o bien el conflicto más sordo entre los terratenientes dueños del poder político y la burguesía naciente que pretendía el poder. Estos conflictos eran alimentados a menudo por comerciantes y aventureros extranjeros (franceses, ingleses, sobre todo, estadounidenses y alemanes) que instalados en el país con toda clase de privilegios se enriquecían en detrimento de los intereses nacionales.

La lucha de esas facciones de la *élite* haitiana tenía un carácter aún más violento que el militarismo, que constituía una vieja tradición de la clase dominante desde la independencia.

La gran masa campesina seguía marginada. Sin embargo, en su seno se reclutaban los famosos "cacos" que constituían la carne de cañón de estas discordias, permitiendo asimismo a los generales apoderarse del palacio nacional en Puerto Príncipe.

La situación culminó en crisis aguda: de 1914 a julio de 1915, cuatro presidentes se sucedieron en medio de un gran choque de

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Op. cit.*, p. 29.

armas. El último, Vilbrun Guillaume Sam, después de escasos cuatro meses en el poder, cayó en condiciones trágicas. Después del asesinato de 165 presos políticos, el responsable de la matanza general Charles Oscar Étienne y el propio presidente Guillaume Sam, sacados de los consulados dominicano y francés donde se habían refugiado, fueron ajusticiados por el pueblo iracundo de Puerto Príncipe. La situación ya no podía empeorar más. Incluso parece que se vislumbraba cierto desenlace de la situación caótica del país con la llegada del liberal doctor Rosalvo Bobo en Puerto Príncipe a la cabeza de sus cacos.

Estimando el momento oportuno y tomando como pretexto esta situación, el gobierno de Washington hizo desembarcar a sus *marines* el 28 de julio para “restablecer el orden”, “proteger los bienes norteamericanos” y “enseñar la civilización” a la *élite* haitiana. Desde tiempo atrás, algunos hombres de negocios con intereses en Haití lo habían inducido a ello. Roger Farham, representante del National City Bank de Nueva York, encabezaba esta corriente.

Así empezó la ocupación militar norteamericana en Haití. Acto seguido, para encubrir esta brutal intervención, el Departamento de Estado y las fuerzas de ocupación impusieron a punta de bayonetas un tratado al país que lo privaba “legalmente de su soberanía”. Poco después, en 1918, el propio Franklin Delano Roosevelt dotaba a Haití de una constitución.

A. *El protectorado norteamericano*

Haití perdió su soberanía. No podía firmar ningún protocolo con otra potencia extranjera ni administrar su propio dominio. Según el tratado impuesto por los norteamericanos, la defensa exterior y el mantenimiento de la paz interior incumbieron a la infantería de marina norteamericana y a un cuerpo indígena de gendarmería, creado inmediatamente por aquélla. Se estableció así un régimen férreo de ocupación militar.

El almirante Caperton, jefe de las fuerzas de ocupación asumió el mando con todos los poderes y responsabilidades que daban el Ministerio de Marina y la Casa Blanca. En 1922, un alto comisario con rango de embajador fue nombrado máxima autoridad norteamericana. El mando militar de la ocupación duró hasta 1930.

Dos presidentes comparsas, Sudre Dartiguenave (1915-1922) y Louis Borno (1922-1926-1930) encabezaron durante esta época el gobierno nacional de corte presidencialista. Las Cámaras Legislativas

pretendían oponerse a la institucionalización de la fuerza invasora. El poder ejecutivo limitado en su acción no podía dar legalmente los pasos exigidos por el ocupante. Para conservar una postura constitucional, las Cámaras Legislativas fueron disueltas con lujo de violencia y reemplazadas por un Consejo de Estado de veintiún miembros nombrados y revocables a voluntad del presidente de la República.

Este poder presidencial autóctono era nada más una fachada. En virtud del tratado de 1915, la administración militar y civil norteamericana constituía el verdadero poder de gobierno.

Ninguna decisión podía ser tomada por una autoridad haitiana, ni siquiera por el presidente, sin el visto bueno del alto jefe norteamericano, que apoyaba su autoridad en la presencia de la infantería de marina y de la gendarmería indígena. Esta última, formada y dirigida por oficiales norteamericanos, aseguraba de manera muy efectiva la presencia y el control del ocupante aun en los lugares más apartados del territorio nacional.

Una administración civil, compuesta de un sin fin de expertos norteamericanos, prestaba sus servicios para impulsar el desarrollo económico del país. Según estipulaba el tratado, un recaudador general y un consejero financiero, con sus ayudantes y empleados nombrados por Washington, “percibían y disponían de todos los derechos de aduana, asegurando las erogaciones públicas, y de todas las reformas necesarias para el saneamiento de las finanzas públicas”. Cada ministro haitiano era “asistido” —de hecho, dirigido— por un experto norteamericano.

Ninguno de estos funcionarios militares o civiles dependía del gobierno haitiano. Recibían órdenes directamente del Departamento de Estado o del Departamento de la Marina de los Estados Unidos, e informaban de sus actividades únicamente a estas dependencias. La fórmula política que aplicaron los norteamericanos en Haití fue justamente definida en los siguientes términos:

Un régimen híbrido, dos Estados sobre un mismo territorio, un Estado soberano y un Estado vasallo. El Estado soberano que poseía dos cabezas: el alto comisario y el consejero financiero, dueños absolutos de nuestros asuntos políticos y administrativos. Y más arriba —emergiendo de entre esas dos cabezas... que combinan la persecución armoniosa de sus designios, siempre tenebrosos— una soberanía feudal exterior, el Departamento de Estado, con los largos brazos tentaculares del monstruoso pulpo de Wall Street.¹⁸

¹⁸ En Suzy Castor *La ocupación norteamericana en Haití*, p. 71.

Este aparato político-militar, desde la época de su instalación, tuvo que enfrentarse a una fuerte oposición que cobró principalmente la forma de resistencia armada, y se fue generalizando como un amplio movimiento nacional de repudio a la ocupación. Para quebrantar dicha resistencia, sobre todo la insurgencia armada, recurrió a las medidas más brutales, llegó hasta el asesinato colectivo. Pero poco a poco tuvo que ir buscando fórmulas más originales.

B. La resistencia nacionalista del pueblo

Mientras la burguesía haitiana abría los brazos al ocupante y ofrecía su colaboración en los primeros años, los campesinos “cacos” del norte se negaron a cualquier compromiso y mantuvieron una lucha cruenta e indoblegable en contra del blanco invasor. Echar fuera del país a los norteamericanos fue el objetivo muy bien definido del movimiento de los “cacos”, que duró de 1915 a 1920, y que constituyó la lucha más larga y difícil que tuvieron que librar los *marines* antes de la guerra de Vietnam en sus incursiones intervencionistas.

Los despojos de tierra realizados en gran escala por las compañías norteamericanas en virtud de la estructura agraria haitiana acarreo consecuencias muy graves en el campo, el régimen restablecido de la *corvée* (antigua práctica colonial que obligaba al campesino al trabajo forzoso) recordaba a muchos el tiempo de la esclavitud; la pobreza, el hambre y el descontento generalizado contra el blanco, impulsaron al campesino a adherirse en masa a la resistencia armada encabezada por Charlemagne Peralte, en el norte del país, lo cual logró, según el senador Mac Cormick, abarcar la cuarta parte del territorio y la quinta parte de la población del país.¹⁹ Este movimiento, aun careciendo de armas suficientes y no contando con la participación de las demás regiones del país y de las ciudades, logró propinar fuertes golpes y mantener en jaque a los *marines* mejor disciplinados pertrechados durante siete años. Llegó incluso a atacar a la capital, Puerto Príncipe, el 7 de octubre de 1919.

Para reducir la resistencia, el ocupante utilizó toda su fuerza militar, incluyendo aviones. No vaciló en destruir aldeas, incendiar regiones enteras y exterminar a la población civil. La pacificación se logró con un saldo de 12 000 muertos.

Paralelo a este movimiento campesino, se desarrolló desde el desembarco una resistencia pacífica, legalista y nacionalista que se oponía a la ocupación a través de la prensa, de la propaganda a escala nacio-

¹⁹ *Idem*, p. 140.

nal e internacional y de las Cámaras Legislativas. La encabezó una vanguardia de la pequeña burguesía radical e incluso antiimperialista, movida por sentimientos patrióticos.

La burguesía, que había esperado grandes beneficios de la ocupación, aceptaba pagar el precio de la paz. Consideraba que la intervención militar, aún muy amarga para el orgullo nacional, empujaría sin embargo al país, con el orden restablecido, en la vía del desarrollo. Es decir, permitiría la constitución de una burguesía fuerte, favoreciendo la acumulación de capital.

Sin embargo, desde 1921, las ilusiones empezaron a desvanecerse. Aun con la pacificación completa del territorio nacional y los pasos para una franca colaboración, la burguesía haitiana se dio cuenta de que el Departamento de Estado ocupaba el país más bien para garantizar los intereses exclusivos de sus súbditos. Reducida al vasallaje político, las migajas que recibía eran pocas, en vista de que las crisis económicas en los Estados Unidos no permitían a Haití recibir el flujo de capital juzgado indispensable.

Además, el látigo del prejuicio racial, como factor subjetivo, empujó a la burguesía a incorporarse al movimiento nacionalista, encabezando hacia los años 1925-26 las reivindicaciones populares y la lucha antimperialista. La crisis de 1929 agudizó todavía más contradicciones, y la resistencia nacionalista burguesa se convirtió en un movimiento de masas de carácter nacional, adquiriendo una nueva dimensión.

Las fuerzas de ocupación adoptaron medidas cada vez más arbitrarias para reprimir esta resistencia a la ley marcial, a la institución de tribunales militares y a la ley restringente del derecho de reunión y de la libertad de expresión con sanciones que iban hasta años de cárcel. Todo ello no logró frenar la oposición popular a la ocupación.

La burguesía descontenta incorporó a las masas en su movimiento, y todo el edificio sociopolítico construido durante una década y media de intimidación pareció venirse abajo.

C. 1930. *La transición*

El colapso empezó a escasos siete días del estruendoso *crash* de Wall Street. Un funcionario superior norteamericano del ministerio de Agricultura, tal vez previsor de las dificultades financieras y administrativas que iba a acarrear la crisis ocurrida en el corazón del imperio, quiso reducir las asignaciones previstas a los estudiantes becarios de la Escuela de Agricultura de Damiens. *

* Pequeña localidad situada a unos 5 kms de la capital.

La medida suscitó el descontento de los estudiantes, que desde hacía tiempo tenían bastantes quejas en contra de esta institución manejada por “expertos” norteamericanos. Se decretó una huelga de protesta el 31 de octubre de 1929. Las universidades y escuelas de Puerto Príncipe se solidarizaron con los huelguistas. Este incidente administrativo pronto salió de las esferas universitarias y se extendió por todo el país, dando lugar a grandes manifestaciones antinorteamericanas y nacionalistas.

Poco después, el 7 de diciembre, dentro del clima de agitación creado por la huelga estudiantil, una manifestación campesina se enfrentó a las tropas de ocupación en la región de Machatterre, cerca de Cayes, capital provincial sureña. De este choque resultaron muertas veintidós personas y cincuenta y cinco heridas. De golpe pareció resurgir la violencia que había desaparecido del país desde 1920, con la victoria de los *marines* sobre la guerra popular “caco” en el norte.

La prensa extranjera —sobre todo la norteamericana— dio amplia difusión a estos acontecimientos. La gran crisis sacudía a los Estados Unidos. La opinión pública bastante sensibilizada al fenómeno imperialista, hostil a la política del *Big stick*, condenó esta violencia desatada por los *marines*. Además, desde el punto de vista del gobierno estadounidense, había que evitar que los ecos de la situación haitiana llegasen a los otros países del continente para no opacar la nueva imagen del gran vecino que Hoover se esforzaba por presentar.

En Haití, el clima de descontento hacía temer un levantamiento popular a escala nacional. Washington tenía que buscar una nueva fórmula de dominación susceptible de ganarse, o, por lo menos, de neutralizar a los jefes del movimiento, aplacando, asimismo, a las masas movilizadas en una perspectiva de liberación.

A solicitud del presidente Hoover, el Senado norteamericano nombró a una comisión investigadora para estudiar la situación en Haití y decidir “cuándo y cómo los Estados Unidos pondrían un término a su ocupación . . . y los pasos que dar mientras tanto . . .” Esta comisión conocida como Comisión Forbes, desembarcó en Puerto Príncipe el 28 de febrero de 1930, en medio de una gran agitación política y de movilización de las masas. Empezó a investigar la situación en la capital y la provincia. Pudo desde el primer momento darse cuenta del repudio profesado contra la ocupación por todas las clases sociales y del alcance nacional del clamor que exigía la salida de los *marines*. Concluyó sus trabajos reconociendo la necesidad de un cambio en la política norteamericana en Haití; pero, recomendó el mantenimiento del aparato de ocupación hasta la expiración del Tratado de 1915, es decir, hasta 1936. Sugirió no obstante, como medida para desarmar a

la opinión pública y a las masas, el retorno a una vida política más democrática con la reconstitución de las Cámaras Legislativas y la elección de un nuevo presidente para suplir a Louis Borno, demasiado impopular, por estar totalmente identificado con las fuerzas de ocupación.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Forbes, Washington decidió realizar elecciones legislativas, las cuales tuvieron lugar en noviembre de 1930. Poco después, el 18 de noviembre, las Cámaras erigidas en Asamblea Nacional eligieron como presidente a Sténio Vincent, un líder nacionalista de gran prestigio. Con él subió al poder un nuevo equipo, que tras la bandera de un nacionalismo verbal estaba decidido a cooperar con las fuerzas de dominación.

Haití tenía, a partir de este momento, todas las apariencias de un gobierno soberano y de un Estado nacional: un poder legislativo integrado por diputados y senadores, salidos de comicios "democráticos"; un presidente elegido por la Asamblea Nacional y por lo tanto, representante de la voluntad popular; un poder judicial liberado de aquellas arbitrariedades de la antigua *Haití Toma* * o de la atrofia impuesta por el imperio de la ley marcial desde 1915. Así, venían funcionando nuevas superestructuras de dependencia correspondientes a la mutación que se estaba operando en los mecanismos de dominación.

El aparato de dominación militar se aflojaba con la desaparición del alto comisionado militar y el fin del control norteamericano en todos los ministerios gubernamentales. Eso parecía significar el fin, o por lo menos, la disminución del carácter militar de las relaciones de dominación. Había sido nombrado para representar a Washington en Puerto Príncipe un ministro con rango de embajador, el doctor Dana Munro, quien desde hacía tiempo había manejado los asuntos haitianos en el Departamento de Estado.

Todo ello, sin embargo no era más que una transición, un reacondicionamiento de las relaciones institucionales entre metrópolis y colonia. En efecto, las tropas militares ocupaban todavía el país; el control norteamericano sobre las finanzas, a pesar de los acuerdos, se mantenía aún más firme. El consejero financiero ejercía no sólo el derecho de control y decisión sobre los ingresos y gastos fiscales, sino que también podía revocar los nombramientos hechos por el presidente de la República en ciertos servicios públicos. La gendarmería quedaba bajo la dirección de oficiales norteamericanos y un cuerpo de *marines* seguía asegurando la paz en el país.

* Se entiende por *Haití Toma*, la época histórica anterior a la ocupación norteamericana.

Esta nueva situación satisfizo a la burguesía, que tenía por lo menos la ilusión del poder. Pero los sectores nacionalistas auténticos siguieron luchando para que fueran alcanzados los objetivos planteados desde el principio de la intervención militar: la desocupación inmediata e integral. Estas presiones cobraron aún más fuerza, ya que la situación económica seguía dramática, provocando descontento y miseria. Mientras que en los Estados Unidos y aun en países dependientes como Cuba y la República Dominicana, se empezaban a notar a partir de 1934 los efectos de la recuperación económica, la situación en Haití se mantenía estancada, manifestando incluso un colapso cada día más profundo.

Para distraer la opinión pública y calmar el descontento, el gobierno emprendió largos tratos para llegar a un *modus vivendi* que modificase el estatuto de "país ocupado". La fuerza estadounidense y el gobierno de Vincent firmaron sucesivamente los Tratados del 5 de agosto de 1931, del 3 de septiembre de 1932 y del 7 de agosto de 1933, los cuales aun proclamando la desocupación de juramento y de palabra seguían desconociendo en Haití los atributos de soberanía y mantenían la presencia de las tropas de la potencia dominante en territorio haitiano.

La oposición no se desarmó. Siguió exigiendo la salida de los *marines*. El presidente Vincent acorralado por el deterioro de la situación económica, consecuencia de la gran crisis estadounidense, y para combatir una impopularidad creciente tuvo que empeñarse en resolver la cuestión de la salida de los *marines*, cuestión esencial, a la que estaba supeditada su autoridad y fama de "nacionalista" . . . Se trasladó a Washington en marzo de 1934 con vista a discutir con las autoridades metropolitanas las modalidades de la desocupación militar.

Poco después, para consagrar oficialmente la nueva era de relaciones de los Estados Unidos con América Latina, en el marco de la buena vecindad, el presidente Roosevelt llegó a Haití, el 5 de julio de 1934, en una visita de algunas horas, y fijó el mes de agosto para el inicio de la desocupación. El 5 de agosto, el último contingente de *marines* abandonaba el territorio haitiano. Se festejó el retiro de las tropas extranjeras. El presidente Vincent en persona, el jefe de la guardia, todas aquellas autoridades encargadas ya de asegurar el *statu quo* de la dependencia, encabezaron los festejos de la celebración de este acontecimiento. El pueblo tuvo la ilusión de una gran victoria creyendo que habían salvado el honor nacional.

Después de estos festejos emotivos, la vida política haitiana parecía seguir en el curso de un régimen democrático que funcionaba en medio de la paz y el orden. Pero aquello era solamente un barniz.

Seguía como antes la incomunicación entre la oligarquía dirigente y las masas populares, explotadas y totalmente marginadas de la vida política. Mas, como nunca antes, la oligarquía dirigente conformada por los patrones de consumo del *standard of life* metropolitano, oprimía en forma más sistematizada a las masas, sobre todo campesinas.

El presidente de la República, menospreciando la Constitución, los poderes legislativos y judiciales, ejercía una dictadura más moderna, pero quizás más implacable que la anterior a 1915. En muchos aspectos, el modelo político instaurado desde 1930, constituía en definitiva una forma de transición entre el régimen de dictadura militar impuesto por tropas extranjeras y el viejo sistema político haitiano modernizado en el nuevo marco dominación-dependencia, que se venía estableciendo en América Latina.

Los acontecimientos de 1930 llegaron a movilizar grandes masas sobre la base antiimperialista, para la reconquista de la soberanía nacional, ya que había agudizado el malestar económico y aumentado las reivindicaciones populares. La burguesía, al encabezar el movimiento nacional, resolvió la situación en su beneficio y provecho, cobrando el mérito de haber realizado la desocupación y la "segunda independencia". Robusteció el aparato político, ideológico y económico a su servicio, frustrando las aspiraciones populares.

A partir de este nuevo reordenamiento sociopolítico se realizaron significados cambios políticosociales que influyeron en forma notoria en el desarrollo ulterior de la nación.

1. El ascenso al poder del ala mulata de la "élite"

Las dos clases principales de la sociedad colonial preindependen-tista de Haití, definidas por su lugar en la producción, se diferencian, además, por el color de su piel: los colonos esclavistas eran blancos, y negros los esclavos traídos de África. Poco a poco se había ido formando una nueva clase intermedia: la de los mulatos, hijos del colono blanco y de la esclava negra. Esta clase de *affranchis* que contaba además con algunos exesclavos negros libertos gozaba de ciertos privilegios. Sus miembros disponían, por derecho de herencia, de plantaciones y esclavos, y como clase poseedora llegaron incluso a competir económicamente con la de los colonos blancos. Existían profundos antagonismos entre esa clase y la masa de esclavos negros; pero sufrían el peso del sistema y los prejuicios y restricciones de tipo racial de la sociedad colonial.

Para romper el cuadro colonial y conquistar la independencia, *affranchis* y esclavos comprendieron que el éxito de la lucha dependía de su unión. Su alianza en la guerra libertadora culminó con la proclamación de la independencia en 1804. Pero esa unión era frágil, marcada por tiranteces y conflictos durante todo el proceso de la lucha libertadora, desde 1789.

Después de la independencia —ya que el ejercicio del derecho de propiedad había sido profundamente perturbado durante los años de guerra social— la clase intermedia mulata quiso regresar a la posesión de sus bienes, y valiéndose de sus derechos de herencia, reclamó ciertas propiedades de los colonos. De ahí empezó la oposición entre jefes mulatos y jefes negros, ex esclavos, que argüían sus derechos de conquista. Por otra parte, los mulatos, como clase, y algunos nuevos cuadros negros surgidos de la guerra patria, ocupando altas posiciones en la administración, el comercio y el ejército, vinieron a constituir una sólida oligarquía, mientras la masa negra era marginada y explotada sin piedad.

Así la repercusión de la cuestión racial marcó la evolución de la nación desde sus orígenes, viniendo incluso a diluir los antagonismos económicos profundos o esenciales entre el sector comercial latifundista, dominante en los puertos y acaparador de los beneficios del comercio exterior (integrado de preferencia por mulatos), y el sector latifundista dominante en la economía agraria (integrado sobre todo por negros). Este antagonismo, en el seno de la *élite*, tomó la forma de una lucha continua por el poder, entre el sector mulato, más poderoso económicamente, y el negro más dinámico en cuanto a su deseo de participación en los principios sociales; así, se ocultaba el antagonismo entre la *élite* dominante, negra-mulata, y la masa de la población negra. Como lo subraya el sociólogo haitiano Price-Mars, “La cuestión de los antagonismos de clase ligados directamente al color de la piel, . . . formó la estructura íntima de nuestros movimientos históricos.”²⁰

A fines del siglo XIX, la fracción negra de la *élite* llegó a tomar el poder conservándolo en medio de fuertes luchas internas contra la fracción mulata hasta 1915.

El modelo de gobierno —escribe Price Mars— formado por dos elementos, permaneció intacto de 1804 a 1915 (fecha de la independencia); cierto es que la carrera a la presidencia a menudo perturbó la homogeneidad aparente de la clase dirigente. Pero cuando la fortuna

²⁰ Jean Price-Mars, *Lettre ouverte au Dr. René Piquion*, Puerto Príncipe, Haití, 1967, p. 24

favorecía el éxito de tal o cual facción disidente, ésta se apresuraba siempre a resolver los problemas y a hacer entrar a los discordantes en el orden general; y la comedia continuaba...²¹

Con la llegada de los norteamericanos, la situación cambió. El nombramiento de Sudre Dartiguenave, un mulato sureño, para la presidencia, marcó un nuevo giro: el traslado del poder de los negros a los mulatos.

El aspecto más notable de este hecho —señala el profesor norteamericano Lee Montague— no fue la elección de este presidente por los *marines* norteamericanos, sino que éste era un mulato del sur, el primero en ser llevado a esta dignidad desde 1889.²²

La influencia de este hecho se haría sentir mucho después que el último *marine* hubiera salido del suelo haitiano.²³

Después de Dartiguenave, las elecciones sucesivas de Louis Borno y de Sténio Vincent, ambos mulatos, vinieron a asegurar la continuidad de la hegemonía mulata. Pocos negros ocupaban puestos ministeriales o siquiera puestos administrativos de cierta responsabilidad. Esta nueva realidad no se podía imputar al azar, sino a una política deliberada del ala mulata triunfante, y en gran parte del sur de los Estados Unidos. Durante el régimen de Élie Lescot (1943-1946) esta política pro mulata se fortaleció hasta un total monopolio del poder por parte de los mulatos. Este hecho suscitó un profundo resentimiento de la pequeña burguesía negra excluida del poder, y se convirtió en uno de los factores decisivos de movilización de las clases medias negras en contra del régimen de Lescot, dando un contenido “colonista” muy pronunciado al movimiento democrático conocido como “la revolución de 1946”.

2. El nuevo militarismo

Las diferentes circunstancias de la desocupación militar yanqui en la República Dominicana, Nicaragua y Haití, llevaron a los norteamericanos a matizar en forma distinta su política hacia esos países a partir de 1930. En los dos primeros colocaron en el poder, para tomar el relevo de los *marines*, a jefes militares, comandantes de las Fuerzas Armadas: Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza.

²¹ *Idem*, p. 45.

²² Lee Montague, *op. cit.*, p. 29.

²³ Rippy James, Fred, *Latin America: A Modern History*, p. 440.

En Haití, por lo contrario, la ocupación dejó en el poder a un brillante intelectual y político, el abogado Sténio Vincent. Este hecho, sin embargo, de ninguna manera significaba la entronización real de un sistema de gobierno civil en Haití. El militarismo estaba presente tan fuerte como siempre, sólo que había cambiado de fisonomía.

Aun después de la llegada al poder de Vincent, en 1930, los militares norteamericanos no dejaron de dirigir la gendarmería: todavía constituían más del 60% de la oficialidad de este cuerpo,²⁴ hecho que alarmaba a la opinión pública. Bajo presión del movimiento nacionalista, el ocupante, en enero de 1932, procedió a la “haitianización” de las fuerzas militares acantonadas en el Departamento del Centro del país. Sólo dos años después, los oficiales haitianos vinieron a encabezar el mando del Departamento del Oeste (enero de 1934) y del Sur (diciembre de 1934). Estas etapas preparan la llamada haitianización total. El 1º de agosto de 1934, el mayor general Clayton C. Vogel, comandante de la gendarmería, pasó el mando al coronel haitiano Demosthènes P. Calixte. En este momento, ya los *marines* consideraban a los “oficiales indígenas” lo suficientemente adiestrados para garantizar el orden sin asesoría, puesto que la gendarmería podía impedir el resurgimiento del “cacoísmo”, y garantizar el funcionamiento del aparato colocado por la ocupación.

“La guardia de Haití —escribe Lee Montgue— era más un cuerpo de policía que un ejército; pero las armas modernas y su adiestramiento hacían de ella la fuerza militar más eficiente que jamás tuvo la República.”²⁵ Ya no existían en el seno de ese nuevo ejército los conflictos internos, característica del periodo anterior a la ocupación. Constituía un cuerpo monolítico, compacto y con espíritu militarista marcado.

Una Academia Militar moderna empezó a funcionar en septiembre de 1930, organizada y dirigida por oficiales norteamericanos, “siguiendo las reglas de la Academia Naval de los Estados Unidos”.²⁶ Algunos de sus instructores, jóvenes oficiales a la sazón, vinieron a tener fama mundial durante la Segunda Guerra Mundial. Además, los más destacados oficiales haitianos fueron mandados a especializarse, desde fines de la década de 1930, el West Point y otros centros militares de los Estados Unidos. Bien imbuidos de su papel y sus responsabilidades en la nueva sociedad, estos oficiales constituían

²⁴ Lee Montague, *op. cit.*, p. 145.

²⁵ Mc Croklin James, *Garde d'Haiti*, The United States Naval Institute, Annapolis, Maryland, p. 121.

²⁶ Mc Croklin James, *op. cit.*, p. 209.

una capa privilegiada, con prestigio y autoridad ilimitada. Su formación técnico-militar, era tan rigurosa que constituyó un rasgo típico del ejército haitiano hasta fecha reciente, lo que contribuyó a estimular los instintos militaristas del trujillismo en la vecina República Dominicana.

A partir de su entronización como guardián del orden, la *Garde* cumplía su finalidad: defender el *statu quo*, mantener el régimen establecido y preservar el orden a toda costa. Estas tareas no resultaron difíciles de cumplir, ya que una de las primeras medidas tomadas por la ocupación, había sido el desarme de la población. Los acontecimientos de 1929 proporcionaron a las autoridades la ocasión de recoger las pocas licencias para porte de armas, pistolas automáticas que existían todavía en las ciudades.²⁷ Así, por primera vez en la historia haitiana, el pueblo, que desde 1791 disponía de armas para la conquista y la defensa formal de su libertad, quedó totalmente desarmado, lo que tuvo gran importancia en el desarrollo ulterior del país, al reducir todavía más la participación de las masas en la vida política.

Sténio Vincent, durante todo su periodo de gobierno, no desaprovechó jamás una oportunidad para recordar al ejército que le incumbía un papel preponderante y exclusivamente de "guardián del orden". Esto mostraba su temor de que la ideología militarista, inculcada a la guardia, moviera a sus integrantes hacia la política; exhortó muchas veces a los militares a que evitaran ponerse al servicio de causas partidarias con vista a la conquista del poder. Estuvo particularmente explícito en la graduación de nuevos oficiales, en julio de 1933:

Ya ustedes —subrayaba— por su capacidad técnica, es decir, específicamente militar, van a reforzar la organización del ejército... para mantener el orden interno y quizás asegurar la defensa nacional... Pero sobre todo, jóvenes oficiales, cuidense como de la peste, de la política y de los políticos.²⁸

Estas declaraciones no pasaban de ser sino meras advertencias para que el ejército no se pusiera al servicio de sectores de oposición. Este ejército fue, pues, educado para que viniera a constituir la espina dorsal de la estructura de la dependencia y la prolongación en el tiempo y en el espacio de la Marina Norteamericana en territorio haitiano. Apoyó resueltamente a Vincent y al salir los *marines* del

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Sténio Vincent, *op. cit.*, p. 188.

país, es decir, a partir de 1934, se convirtieron en la fuerza determinante de la política haitiana.²⁹

Vincent gobernó con ella, consciente de que era su más fuerte apoyo y la única institución capaz de amenazar su régimen. En efecto, a los pocos años de la salida de los *marines* el comandante de la *Garde*, Demosthènes Calixte, intentó un golpe de Estado. Tan sólo la habilidad del presidente y el apoyo de parte de la alta oficialidad salvaron la situación. Desde esta época el ejército constituyó, hasta fecha reciente, la fuerza interna preponderante.

3. La hegemonía de los Estados Unidos

A principios del siglo Haití era uno de los escenarios de las rivalidades interimperialistas en el Caribe. Los antagonismos entre Francia, Alemania y los Estados Unidos se manifestaban en los conflictos de carácter comercial que desembocaron poco a poco en luchas de influencia política.

Líneas de navegación alemanas aseguraban casi todos los fletes de las exportaciones, súbditos germánicos controlaban parte del comercio, teniendo además una activa participación en la vida política. Francia, por sus relaciones tradicionales con su excolonia, ocupaba una posición privilegiada. Recibía más de la mitad de las exportaciones, era acreedora de las deudas externas y tenía gran prestigio político.

Al entrar los Estados Unidos en la batalla para desplazar a estos concurrentes, la lucha fue bastante cerrada y provocó más y más intromisiones de esas potencias en la política del país. Numerosos políticos haitianos, por su parte, trataron de aprovechar esas rivalidades.

Con los problemas generados por la Primera Guerra Mundial y frente al expansionismo poderoso y exclusivista de los Estados Unidos, las potencias europeas tuvieron que ir dejando el campo libre a los Estados Unidos en América Latina. Haití, como todos los demás países del continente, fue cayendo en la esfera de influencia exclusiva del Tío Sam, lo que culminó con la ocupación militar. Desde entonces, la situación económica de nuestro país adquirió las características predominantes de supeditación hacia los Estados Unidos.

El primer paso se dio con miras a desplazar definitivamente la influencia francesa en el país. Acuerdos comerciales entre ambas

²⁹ James Rippey, *op. cit.*, p. 415.

naciones desde 1907 y renovados posteriormente (el último en 1930) otorgaban a Francia la preferencia en el comercio, teniendo este país que comprar, en cambio, una cantidad anual de 30 000 toneladas (siendo la exportación total de 34 000 toneladas en 1933-34). En 1935, al vencer estos acuerdos, no fueron renovados por iniciativa de la parte haitiana. Todavía más, un tratado comercial firmado el 28 de marzo de 1935 con los Estados Unidos, concedía ventajas enormes a los productos norteamericanos en detrimento de los productos franceses. El gobierno francés, que ya registraba un balance deficitario en su comercio con Haití y se enfrentaba, como consecuencia de la crisis mundial, a una baja del franco, decidió cerrar el mercado del Havre al café haitiano.

Para comprender el alcance de esta medida, hay que recordar que desde hacía mucho tiempo el mercado francés recibía 60% de las exportaciones totales de Haití, y cubría solamente alrededor de 6% de las importaciones. Los Estados Unidos, por el contrario, proporcionaban la mayor parte de las importaciones (64.5%) y compraban poco en nuestro país (9%).⁸⁰ Como lo señaló más tarde el profesor francés Paul Moral: "El comercio haitiano ganaba sus dólares en Europa para gastarlos en los Estados Unidos."⁸¹

Después de la denuncia de Francia del Acuerdo franco-haitiano, el comercio exterior pasó casi exclusivamente a los Estados Unidos. "Nuestras exportaciones a los Estados Unidos aumentaron nueve veces en relación con el año 1934."⁸²

También las inversiones fueron exclusivamente norteamericanas. Poco después, en 1941, una compañía privada estadounidense que tomó el nombre de Sociedad Haitiano-Americana de Desarrollo Agrícola (SHADA) recibió una concesión de sesenta mil hectáreas para el cultivo experimental del caucho con un monopolio de 50 años para la compra y la exportación de este producto. En el marco de esa operación financiada por el Banco Import de Washington, el gobierno haitiano recibía a su cuenta y bajo su aval un millón de dólares, utilizable por la Compañía para llevar a cabo el proyecto.

Penetraron también los capitales norteamericanos en la rama de los servicios. Organizaron la compañía de alumbrado eléctrico de Puerto Príncipe y de Cabo Haitiano, cuyas instalaciones obsoletas siguen proporcionando hasta la fecha dividendos cuantiosos y servicio pésimo. La Hasco y la Plantación Dauphin recibieron durante

⁸⁰ Dantès Bellegarde, *La nation haïtienne*. Paris J. de Gigord, 1938. p. 209.

⁸¹ Paul Moral, *L'économie haïtienne*. Imprimerie de l'État, Puerto Príncipe Haití, 1959, p. 142.

⁸² Gérald Brisson, *Fondements économiques de la situation révolutionnaire 1945-46*, Éditions Avant Garde, Puerto Príncipe, 1958, p. 6.

la ocupación el monopolio de la producción del azúcar y del henequén, respectivamente. El mismo año en que salían los *marines* (1934), la United Fruit Company recibió, por su parte, el monopolio de la compra y exportación del plátano. Líneas de comunicaciones como la American Cable Company, la Pan American Airways, aseguraban el flete haitiano. La Sinclair Exploration Company se instaló por la misma época y se formaron otros muchos monopolios dentro de esta misma actividad económica.

Desde las reformas de 1919, la moneda haitiana, cuya paridad fue establecida en 5 gourdes por 1 dólar, quedó ligada al sistema monetario norteamericano. Su valor no se definió en orden al oro, sino en función del dólar: "El dólar de los Estados Unidos es el único elemento del *stock* monetario cuyo desarrollo está completamente exento de control o limitación de orden legal o administrativo."³³

La deuda exterior, tradicionalmente francesa, pasó a ser norteamericana. En 1937-38, para impulsar la economía todavía debilitada a consecuencia de la crisis de 1929, el Export-Import Bank de Washington recientemente creado, prestó —en lo que constituyó su primera operación con América Latina— cinco millones de dólares al Estado haitiano para la realización de grandes obras públicas, tales como irrigación, drenajes, caminos etcétera. Esta inyección de capital se inspiraba en las ideas del New Deal y el supuesto keynesiano de lograr la recuperación a base de un aumento del poder adquisitivo de la población. El supuesto en sí resultó falso, ya que la depresión en Haití era crónica y de orden estructural, no sólo coyuntural. Además, la incompetencia y el despilfarro que hizo la Compañía J. G. White, encargada de llevar a cabo dichas obras, convirtieron este proyecto en un verdadero fracaso: "La administración de la J. G. White en definitiva no realizó ningún trabajo durable."³⁴

Pero las obligaciones de esa nueva deuda recayeron una vez más sobre las finanzas haitianas. El mismo destino tuvo la deuda contraída para financiar las plantaciones de caucho de la SHADA, ya que a poco de iniciarse el experimento se llegó a la producción en gran escala del caucho sintético, lo que repercutió en definitiva sobre la deuda externa.

El 12 de mayo de 1934, la *Banque Nationale*, propiedad del National City, fue rescatada por el gobierno haitiano mediante un pago en efectivo de un millón de dólares. Esta operación, pretendida muestra de la buena vecindad del gobierno norteamericano hacia Haití,

³³ Joseph Chatelain, *op. cit.*, p. 233.

³⁴ Gérard Pierre-Charles. *La economía haitiana y su vía de desarrollo*. Cuadernos Americanos, México 1964, p. 209.

constituyó otro buen negocio para el National City Bank, que ya desde 1910 venía maniobrando como malabarista en esta institución financiera. El gobierno haitiano tuvo que pagar este millón en efectivo, en un momento en que sus reservas monetarias resultaban mermadas por la crisis, desaprovechando la oportunidad de pagar dicha suma a plazos. Además, pese a esta compra, el gobierno haitiano, ya teóricamente dueño del banco, no tenía derecho a administrarlo.

La institución, siendo una "pieza importante en la administración financiera y recibiendo la totalidad del ingreso público, debía quedar bajo el control directo americano hasta el reembolso integral del préstamo de 1922",⁸⁵ contraído con el National City Bank.

Mientras, consultores y asesores del National City Bank tenían voz y voto en el consejo de administración de la *Banque Nationale*. Esta situación quedó vigente hasta 1946, cuando el gobierno de Estimé lanzó un empréstito interno para pagar parte de los bonos del National City Bank. Este episodio, conocido como la campaña para la liberación financiera, no permitió sin embargo a Haití liberarse de las obligaciones del empréstito de 1922, que quedaron pendientes de pago todavía hasta 1961.

Así, no solamente el Departamento de Estado controlaba la vida política del país, sino que los monopolios norteamericanos dominaban ya completamente la vida financiera y económica. La estructura misma de la economía había sido conformada de tal manera que viniera a adaptarse al molde dominante impuesto por el imperialismo en función del nivel de desarrollo global de las fuerzas productivas de la sociedad haitiana y de sus intereses concretos correspondientes. En esta estructura de la dependencia, el comercio externo, la moneda y la deuda externa venían a constituir elementos decisivos, lazos de subordinación y descapitalización entre la sociedad haitiana y el centro metropolitano, mientras que sólidas ligazones políticas y militares garantizaban la vigencia de este estatuto dependiente.

La crisis de 1929 ocasionó la aparición de diversas corrientes ideológicas. Mientras el gobierno y la burguesía, para justificar su política entreguista antinacional llamaban a la solidaridad, a la cooperación internacional, dos corrientes renovadoras surgieron, propiciadas por los sectores más nacionalistas y más avanzados de la pequeña burguesía.

Ya en 1928, el libro de Jean Price-Mars, *Así habló el Tío*, denunciaba los prejuicios de la *élite* haitiana y su gran desprecio hacia la cultura nacional. "Desde 1804 —escribía Price-Mars— la comunidad

⁸⁵ Joseph Chatelain, *op. cit.*, p. 196.

negra haitiana recogió para sí el despojo de la civilización occidental... esforzándose por creerse francés de color, olvidando ser haitiano a secas.”³⁶ Era hora de reivindicar y reconocer la cultura y todo lo auténticamente nacional (costumbres, lenguaje, sentimientos, creencias, etcétera).

Esta posición dio nacimiento a la escuela indigenista que surgió como una forma de resistencia a la ocupación y al gobierno de Sténio Vincent. Fue acogida con entusiasmo por una clase media negra en su mayoría, recién formada, de la que expresaba el sentir. Contribuyó a renovar la literatura haitiana, confinada hasta entonces a una imitación servil de la literatura francesa y a estimular el surgimiento de una pintura primitiva con expresión negra, nacional y popular. Esta corriente también impulsó la investigación y el interés por la etnología.

Esta negritud *ante literam*, fue distorsionada poco después por una capa de la *élite* negra que encontró en esta corriente el sustento ideológico para justificar su acaparamiento del poder con fines de saqueo y explotación en sustitución de la vieja *élite* mulata, colocada y fortalecida en el poder por la ocupación.

Por otra parte, un grupo de jóvenes formados en las ideas socialistas en Europa fueron más allá del impulso nacionalista cultural verbal o estático. Bajo la dirección de Jacques Roumain se lanzaron a la lucha política fundando el partido comunista haitiano en 1934. Esta vanguardia reducida numéricamente intentó, como primer paso de su acción política, un estudio interpretativo de la situación haitiana al publicar en 1934 *Análisis esquemático 32-34* o *El mito del nacionalismo haitiano*.

La escuela socialista, al contrario de la indigenista, no encontró eco en los amplios sectores de la pequeña burguesía, tanto por el hecho de que la clase obrera en Haití era muy reducida en número, como por estar integrada esta vanguardia por elementos mulatos en su mayoría. Y por el bajo nivel ideológico y la política global de la sociedad, su influencia quedó reducida a círculos de la juventud, lo que vino a expresarse en la fuerte participación de jóvenes de inspiración comunista en el movimiento populista de 1946.

— Desde el punto de vista económico Haití, lejos de encontrar una salida favorable a la crisis de 1929, entró en otras todavía más profundas, hasta estancarse en una crisis permanente. Los paliativos adoptados desde 1929, contribuyeron a la supervivencia de las estructuras que siguieron intactas. La Segunda Guerra Mundial y el cierre de los

³⁶ J. Price-Mars. *Así habló el tío*. Casa de las Américas, La Habana 1968. Prefacio.

mercados internacionales a los productos primarios tuvo como consecuencia una fuerte depresión en Haití, que acrecentó la miseria popular y demostró al mismo tiempo la vulnerabilidad de la economía haitiana nacida de su estructura de dependencia.

Esta vulnerabilidad, el raquitismo de la economía nacional, tuvo repercusiones en la evolución política haitiana. En 1946, una "revolución" de carácter democrático antidictatorial y antioligárquico, con matices populistas y socializantes, encabezada, por la pequeña burguesía negra y el ala negra de la *élite*, tomó el poder en nombre de una *negritud* que pugnaba por la formación de una burguesía negra. A raíz de ello, los sectores de la pequeña burguesía negra tomaron el poder hasta 1950, cuando el régimen del general Paul E. Magloire de 1950 a 1956 —producto de un golpe de Estado militar— logró reunir a las dos alas de la oligarquía mulata y negra bajo la fuerte autoridad del ejército. Durante este periodo se registró cierta prosperidad con que se beneficiaron los productos agrícolas y las materias primas. El monto de las exportaciones haitianas pasó de 15 millones de dólares en 1944 a 54 en 1954. Esta prosperidad produjo una verdadera euforia que permitió al régimen de Magloire llegar a la cúspide del sistema político soñado por los norteamericanos. El poder se ejerció según los lineamientos de la "democracia representativa" tal como se entiende en América Latina hoy en día.

En los últimos años del gobierno de Magloire empezó el deterioro de la situación económica y con ello se dio una profunda crisis política que propició la caída de Magloire. En medio de esa crisis subía al poder en elecciones el señor François Duvalier, que no tardó en convertirse en un feroz dictador que se autoeligió presidente vitalicio del país.

Con Duvalier esa crisis crónica se agudizó en forma creciente, repercutió con fuerza en todas las estructuras económico-sociales y las instituciones políticas, removiendo así los cimientos del sistema sociopolítico constituido por la ocupación.

El poder judicial y legislativo pasaron de la debilidad a la inexistencia; la práctica del procedimiento electoral fue totalmente suprimida. Aun el ejército, institución hasta entonces monolítica, empezó a desmoronarse con la aparición del famoso cuerpo terrorista de los *tontons macoutes* erigida como fuerza fundamental del gobierno.

Las repercusiones de la crisis de 1929-1933 en Haití se colocaron, así, en el marco del proceso de reacondicionamiento del dominio imperialista norteamericano sobre la sociedad haitiana, y coincidieron con una fase de transición entre la ocupación militar que de hecho había convertido a Haití en una colonia —protectorado de los Estados

Unidos; en el periodo posterior que sigue hasta la fecha— las relaciones dominación-dependencia adaptadas a las características concretas de la sociedad haitiana se realizan en el contexto de las relaciones globales dentro del sistema mundial capitalista entre el centro dominante imperialista y las naciones dominadas.

LA CRISIS DEL 29 Y LA GÉNESIS DEL TRUJILLATO

Franklin J. Franco

La hora de Rafael Leónidas Trujillo había llegado... producto militar de la ocupación norteamericana, iba a ser en el orden político, el producto de la descomposición caudillista y de la gran crisis económica de 1929.

Juan Bosch: *Trujillo: causas de una tiranía sin ejemplo*
Caracas, 1961.

I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En 1916 las fuerzas militares de los Estados Unidos de América ocuparon la República Dominicana. Si bien la “conservación de la paz y la garantía para algunos ciudadanos norteamericanos” fueron el pretexto, los verdaderos móviles de tal acción saltan a la vista, con una mera ojeada a la historia económica de esta nación.

En el siglo pasado, varios gobiernos representativos de las fuerzas del latifundismo concertaron con capitalistas europeos, varios empréstitos, cuyos términos contractuales no pudieron cumplir. En 1893 varias operaciones financieras traspasaron la mayor parte del monto de las deudas a manos de capitalistas norteamericanos, que fundaron incluso una compañía financiera para el manejo de tales acreencias: The Santo Domingo Improvement Co. En 1905, frente a la amenaza de los restantes acreedores europeos —franceses, españoles, belgas, holandeses—, radicados algunos en el país, que amenazaban constantemente con solicitar el auxilio de sus respectivos países para garantizar el cobro de sus préstamos, los Estados Unidos firmaron con el gobierno tambaleante del presidente Morales un acuerdo tendiente a “evitar la intervención de las potencias europeas” en Santo Domingo. El acuerdo fue discutido en persona por el comodoro A. H. Dillingham, con carácter de comisionado especial de los Estados Unidos en la República Dominicana, con el respaldo de varios buques. El Senado de aquel país no ratificó lo acordado, pero el presidente Roosevelt encontró una fórmula para mantener lo pactado: se firmó un *Modus vivendi* bajo iguales cláusulas que originó la rápida caída del presidente Morales. Este *Modus vivendi* estuvo vigente hasta 1907, fecha en que se hizo posible la permanencia de aquella situación, más otros elementos agravantes bajo los términos de una convención. Por medio de este acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos se hizo cargo de todas las obligaciones, tanto extranjeras como interiores, y el dominicano entregaba a cambio al de los Estados

Unidos el manejo de las aduanas del país, con derecho incluso de nombrar los empleados necesarios para la recaudación de las rentas aduaneras, de donde se retiraría un 55% del total recaudado de pago de la deuda pendiente, que ascendía, luego del arreglo, a 17 millones de dólares; el acuerdo originó una emisión de bonos dominicanos calculada en 20 millones de dólares, al 5%, amortizable en cincuenta años con el 1% de amortización. Lo pactado, además, obligaba al Estado dominicano a no aumentar su deuda pública ni modificar sus aranceles aduaneros sin el consentimiento de los Estados Unidos. Bajo este patrocinio, se creó en 1908 una oficina de obras públicas, para administrar las obras de infraestructura pagada por el Estado dominicano, pero manejada por funcionarios norteamericanos designados también por el gobierno norteamericano y sujetos a la supervisión de la oficina insular de la Secretaría de Guerra de Washington. En su artículo 2, la Convención recogía: "El gobierno de los Estados Unidos dará al Receptor General y a sus auxiliares la protección que estime necesaria para el cumplimiento de los deberes de éstos."¹

La reacción popular, frente a tal ignominia, no se hizo esperar. Se inauguró en el país un serio periodo de convulsiones sociales donde "presidentes" iban y venían a razón de dos por año, aun por encima de los esfuerzos del gobierno norteamericano, interesado ahora más que nunca en el mantenimiento de la "paz"; de una paz que permitiera tranquilamente la recaudación aduanera. La desesperación llegó a tal punto en Washington, que en 1910 se ordenó a la Marina de Guerra Norteamericana "la vigilancia de las costas dominicanas".² Pero además de la necesidad de mantener las aduanas bajo su control, en los últimos 10 o 15 años, los capitalistas norteamericanos habían iniciado una real penetración en todos los órdenes en la economía dominicana. En la fértil región del este, cercaron tierras, o compraron bajo presión y crearon varios ingenios azucareros; la compañía Clyde³ de New York, tenía en sus manos el monopolio de navegación del país; el único banco importante, el Banco Nacional, era a la fecha propiedad de capitalistas norteamericanos;⁴ un usurero puertorriqueño famoso, Santiago Michelena, realizaba importantes inversiones en calidad de representante del National City

¹ De la Rosa, Antonio. *Las Finanzas en Santo Domingo y el control americano*. Editora Nacional, 1969, p. 152. Santo Domingo. R. D.

² *Idem, op. cit.*, p. 161.

³ *Idem, op. cit.*, p. 167.

⁴ Herrera, César A. *Las finanzas de la República Dominicana*, t. II, núm. 19. Colección "25 años de Historia Dominicana. Era de Trujillo". Ciudad Trujillo, 1955, p. 29.

Bank of New York. Sus intereses, por tanto, no se reducían al préstamo antes citado.

En 1912, la cadena de protestas populares contra la enajenación de los intereses nacionales colocó en bancarrota otro de los tantos regímenes impopulares patrocinados por Washington. En tal fecha, el ministro americano en Santo Domingo, escribía al Secretario de Estado americano interino, señor Alvey A. Adee:

En contestación a la suya de septiembre 14, creo que nuestro gobierno debería dar inmediatamente los primeros pasos para ocupar las aduanas fronterizas, las cuales estaban y están abandonadas porque el gobierno dominicano no ha sido capaz de mantener el orden y la ley.⁵

En 1914, los norteamericanos no se conformaron con la administración de los fondos de las aduanas nacionales y la administración de la oficina de Obras Públicas. El presidente Wilson, en común acuerdo con otro presidente pasajero, general Bordas Valdés, designó a Charles Johnston, experto financiero ante el gobierno dominicano, con el propósito de:

trazar un sistema adecuado de contabilidad pública y conservar, y poner en ejecución el acuerdo primitivo de aumentar las entradas y ajustarlas a los gastos con el fin de asegurar el orden y la estabilidad en la República Dominicana, y evitar el déficit. Para desempeñar el cometido estará en el deber de investigar la validez de cualquier cuenta o reclamación que pueda ser presentada al gobierno dominicano, refrendar cheques, giros, órdenes de pago de fondos dominicanos en favor de terceros.⁶

El documento estipulaba que el mencionado financiero sería pagado por el gobierno dominicano y en moneda americana. Este acuerdo fue firmado el 29 de mayo. En agosto un movimiento político, tímidamente nacionalista, derrocó al presidente firmante; luego un gobierno provisional fue establecido hasta la convocatoria de elecciones, donde salió triunfante, en octubre del mismo año, Juan Isidro Jimenes.

Y resultó que la presión popular obligó al nuevo presidente a denunciar la presencia del experto financiero norteamericano, supremo control del Estado Dominicano. Los norteamericanos presionaron entonces con sus barcos y diplomáticos y el nuevo gobierno llegó a una solución salomónica: se suprimió al experto, pero se amplió la esfera de acción del receptor de aduanas, con las mismas atribuciones

⁵ *Idem, op. cit.*, p. 25.

⁶ *Idem, op. cit.*, p. 34.

anteriormente reconocidas al experto. El pueblo entero protestó; el ministro de Guerra del gobierno acusó al presidente de violar la Constitución, y el presidente se vio en la necesidad de presentar su renuncia en mayo de 1916. El país quedó sin un verdadero gobierno. Un consejo de secretarios de Estado asumió la precaria dirección del país. En junio el ministro Russell escribía al Consejo de Gobierno informándole que, de acuerdo con instrucciones de su gobierno, la Receptoría General de Aduanas “se hacía cargo de las recaudaciones de todas las rentas del Estado y que actuaría como agencia pagadora del gobierno ciñéndose a las estipulaciones presupuestales”.⁷

Mientras, pasaban los días y las semanas, y el Congreso deliberaba tras la búsqueda de un nuevo presidente. Por fin, el 25 de julio fue elegido el doctor Francisco Henríquez y Carvajal, quien residía desde hacía varios años en Cuba; llegó al país y se juramentó el 31 del mismo mes.

Como primera medida, el nuevo presidente se dio a la tarea de rescatar de las manos de la Receptoría parte de los fondos de las aduanas que le pertenecían al gobierno. Washington contestaba ahora, exigiendo para tales fines, la disolución del Ejército Nacional y la creación de una nueva guardia rural “como única fuerza armada, bajo el mando de un oficial norteamericano, designado por el presidente de los Estados Unidos”.⁸ Con dignidad el nuevo mandatario rechazó la petición. El gobierno dominicano mientras tanto, congelados sus ingresos por los norteamericanos, no podía siquiera cumplir con sus compromisos salariales burocráticos. Para esta fecha los barcos norteamericanos permanecían anclados en los principales puertos del país, y en algunos puntos incluso habían desembarcado tropas.

Un memorándum del Departamento de Estado, redactado a mediados del mes de noviembre, recogía:

La retención de los fondos por el gobierno de los Estados Unidos, basada en la circunstancia de que no ha sido reconocido Henríquez, ha producido una crisis económica en el país que se empeora día a día y de la cual este gobierno no quisiera hallarse en situación que pudiera hacer responsable... Se piensa que la única solución de la dificultad sería la proclamación de la ley marcial, poniendo a Santo Domingo bajo la ocupación militar, basando esta acción en la interpretación que los Estados Unidos han dado a la Convención de 1907, y también en las actuales condiciones de incierta paz de la República...⁹

⁷ *Idem, op. cit.*, p. 50.

⁸ *Idem, op. cit.*, pp. 51-52.

⁹ Welles, Sumner. *La Viña de Naboth*. Editorial El Diario. Santiago. Rep. Dom. 1939, vol. II, p. 244.

A finales del mismo mes, concretamente el 29, el capitán Knapp hizo oficialmente la declaración de que Santo Domingo “era puesta en estado de ocupación por las fuerzas bajo mi mando y queda sometida al gobierno militar aplicable a tal ocupación”.¹⁰ Y se dio inicio a la creación de un gobierno de la República Dominicana encabezado por un oficial de la Marina de Guerra norteamericana, con el gabinete de oficiales del cuerpo de infantería de la marina, sin el conocimiento siquiera del idioma español.

Frente a la invasión, las fuerzas populares levantaron la bandera de la insurrección, y los sectores oligárquicos la conciliación. Los invasores desataron en el país una brutal represión, tendiente antes que nada, al desarme de la población, primer paso hacia la creación de una nueva fuerza militar dirigida por oficiales norteamericanos. Tal idea no encontró simpatías en el pueblo:

Se hizo punto menos que imposible, al principio, disuadir a los dominicanos que reunían las condiciones de educación, buena reputación y rango social necesarios, para que entraran a servir como oficiales de esta fuerza bajo el mando del gobierno militar.¹¹

Entre los que se prestaron a la colaboración con el invasor, muy tempranamente, se encontraba Rafael Leonidas Trujillo. Los primeros servicios que ofreció fueron las persecuciones de patriotas en los campos azucareros del este, destacándose en este servicio de manera “excelente” a juicio de las fuerzas militares.

II

ANTESALA

Si la situación financiera dominicana, sus compromisos con los prestamistas norteamericanos, habían hecho de la República Dominicana un Estado maniatado jurídicamente por el sistema imperialista, ahora los norteamericanos, con la ocupación, profundizaban más su penetración. El gobierno militar llegó incluso, en nombre de la República, a continuar la carrera hacia la hipoteca total. En 1922 emitió una nueva serie de bonos, puesta en venta en el exterior, por valor de 6 700 000 dólares.

Pero un aspecto importante de observar es el de la propiedad de

¹⁰ *Idem, op. cit.*, p. 257, vol. II.

¹¹ *Idem, op. cit.*, p. 269, vol. II.

la tierra. En este plano, éste era un país organizado bajo las viejas prácticas de la vida colonial. La inmensa mayoría de las tierras bajo cultivo se encontraban incluso bajo la denominación de “terrenos comuneros”, sistema de tenencia donde tres o más propietarios compartían el derecho a la propiedad. Con el pretexto de “modernizar” el sistema, las grandes compañías norteamericanas apoyadas por sus fuerzas militares encontraron aquí la gran oportunidad para apropiarse de las mejores tierras del país. Para facilitar las cosas el gobierno militar dictó una ley sobre el registro de tierra:

La ley de registro de tierra, promulgada por el gobierno militar en 1920 era precisamente lo que habían deseado los azucareros (norteamericanos, fundamentalmente) durante muchos años. Para simplificar las cosas, la ley establece que la posesión durante diez años consecutivos y cumplidos el día 1º de enero de 1921, da un título limpio de propiedad.¹²

A partir de la interpretación de este decreto, todas las tierras en posesión de compañías norteamericanas tenían 10 años o se encontraban próximas a cumplirlos. En el periódico dominicano, *El Listín Diario*, en agosto de 1921, bajo el título de: “El crimen ha sido consumado”, aparece una carta firmada por Emilio Morel, del pueblo de La Romana, que explica en pocas palabras cuál fue en la práctica el procedimiento empleado: “Pueblos enteros eran desalojados a la fuerza.” En el caso específico de Ani e Higuerol, “ambas aldeas fueron quemadas y más de ciento cincuenta familias se encontraban sin albergue”.

Estas tierras eran la base del desarrollo industrial azucarero que desde los últimos años del pasado siglo se había convertido, luego de una pausa de casi dos siglos, en uno de los principales renglones de exportación del país. En 1920 el país exportó 158 803.6 toneladas métricas de azúcar, por un valor de 45,535.600 dólares. Lo que significa casi el 70% del total de todas las exportaciones; situación que continuó y continúa más o menos siendo igual hasta la fecha. Ahora, para proseguir el anhelado desarrollo de la industria, ligada directamente a empresarios norteamericanos y al gobierno militar, máquina pesada e implementos entran al país exonerados de todo impuesto.

De ahí que cuando los norteamericanos luego de presiones internas y externas —como por ejemplo, la inmensa campaña de solidaridad con el pueblo dominicano desatada por toda Hispanoamérica—

¹² Knight, Melvin M. *Los americanos en Santo Domingo*. Listín Diario, 1939. Rep. Dom., p. 148.

deciden evacuar la República Dominicana, la industria azucarera, espina dorsal de la economía nacional, está férreamente en sus manos. Veamos:

LAS PRINCIPALES EMPRESAS AZUCARERAS
EN SANTO DOMINGO, 1925

Nombre	Nacionalidad	Area en Acres	Valor declarado
Consuelo	Americana	49 354	5 456 700.43
Barahona	Americana	49 400	7 130 350.76
Quisqueya	Americana	8 593	944 603.40
San Isidro	Americana	20 727	1 500 021.90
Las Pajas	Americana	5 588	1 243 491.56
San Marcos	Americana	1 251	120 151.00
San Carlos	Americana	564	140 355.14
Santa Fe	Americana	61 069	4 944 025.57
Porvenir	Americana	10 877	1 644 867.70
Ansonia	Americana	2 066	422 420.00
Central Romana	Americana	144 418	9 761 349.07
Boca Chica	Amer. P. R. Dom.	6 325	527 585.70
Monte Llano	Americana	1 947	389 296.33
Amistad	Amer. Dom.	3 811	239 921.52
Italia	Italiana	8 269	
Azuano	Italiana	4 647	1 699 152.90
Ocoa	Italiana	1 941	
Angelina	Italiana	13 317	1 930 640.90
Cristóbal Colón	Italiana	22 175	1 454 660.20
J. J. Serralles	Ital. Dom.	12 275	
San Luis	Dominicana	8 346	1 237 697.95
Cuba	Dominicana	1 222	1 106 843.75
Totales		438 182	40 894 135.78

De este cuadro se desprende que de 40.894,135.78 dólares invertidos en el principal sector industrial, 33.802,508.56 estaban en manos de capitalistas norteamericanos, y que además de toda la tierra bajo el dominio de este sector, 438 182 acres, la gran mayoría, 362 189 acres, estaban bajo control estadounidense.

Además:

La compañía maderera extranjera domina un área de terreno mayor que la que posee la industria azucarera. La cantidad más grande de la mejor caoba del mundo está en Santo Domingo. En 1926 una compañía americana, la Orme Mahogany Company, anunció que tenía concesión sobre cerca de medio millón de acres de terreno.¹³

Otra empresa de la misma nacionalidad, registrada bajo el nombre

¹³ *Idem, op. cit.*, p. 150.

de Enriquillo, dijo tener derecho sobre 400 acres en la parte suroeste. En sus prospectos de venta de acciones, esta compañía mencionaba a Santo Domingo como un "protectorado" norteamericano. En la provincia sureña de Azua la misma cantidad de terreno era controlado por la Habanera Lumber Co., compañía controlada a su vez por la American and Eagle Pencil Co.,¹⁴ y Barahona Wood Company, cuya extensión de terreno bajo control no fue declarada, controla más o menos la misma extensión de terrenos que las anteriores. Tenían también en sus manos, bajo concesiones, el dominio de las principales minas del país.

Con anterioridad a la ocupación norteamericana, Santo Domingo en el plano del comercio internacional mantenía lo que podemos denominar una diversificación del intercambio comercial, y eran sus mayores proveedores los países europeos. Su ocupación significó, además, la total monopolización del comercio por el mercado imperialista norteamericano. La naturaleza de tal fenómeno puede ser demostrada mejor tras una ojeada a la tabla condensada que sobre las importaciones trae Melvin M. Knight en su estudio: *Los americanos en Santo Domingo*.

Esta breve exposición resumida sobre la penetración económica del imperialismo norteamericano da la idea del grado de dependencia y explica por sí sola por qué algunas compañías norteamericanas, al hablar de Santo Domingo en su prospecto de inversiones, utilizan el término "protectorado". Si no lo era formalmente, en la práctica ésa era la realidad. Cuando los norteamericanos abandonaron formalmente el país, en 1924, la deuda internacional del Estado "ascendía más o menos a 11.000,000 de dólares".¹⁵ Y no lo hicieron, sin antes firmar una convención —Convención dominico-americana de 1924— que prolongaba "la existencia a lo más oneroso de la convención de 1907, como era la recaudación de las rentas aduaneras por medio de agentes norteamericanos".¹⁶ El convenio, además, abría las puertas a la tradicional oligarquía a una loca carrera a los empréstitos. El documento autorizaba a la República Dominicana a emitir bonos hasta la suma de 25.000,000, consolidando las emisiones anteriores:

Y para destinar el saldo existente después de concluida dicha operación, a mejoras públicas permanentes y a otros progresos encaminados a favorecer el desarrollo económico e industrial del país.¹⁷

¹⁴ *Idem, op. cit.*, p. 160.

¹⁵ Herrera, *op. cit.*, p. 65.

¹⁶ *Idem, op. cit.*, p. 65.

¹⁷ *Convención de 1924*. Colección Trujillo, t. 15, p. 491. Citado por Herrera.

PREDOMINIO AMERICANO EN LAS IMPORTACIONES
DOMINICANAS, 1925

Artículo	De los EEUU	Total importado
Maquinaria para agricultura	93 957	216 755
Automóviles y carruajes	1 349 961	1 385 019
Productos químicos y farmacéuticos	418 674	626 260
Carbón, coque, ladrillos	76 325	77 837
Cobre y aleaciones	128 126	144 006
Algodón, efectos manufacturados	3 305 496	4 485 611
Efectos de barro, porcelana	72 435	202 796
Fibra, vegetal	495 574	1 168 869
Comestibles		
Carnes	1 042 015	1 202 076
Pescado	376 188	442 623
Granos y frutas	1 485 330	3 368 922
Licores y bebidas sin alcohol	34 217	580 136
Laterías o efectos preservados	113 161	161 729
Varios		
Vidrio y cristalería	552 539	1 088 288
Sombreros y gorras	84 097	153 130
Cueros y pieles	65 083	175 622
Hierro y acero	862 086	1 177 446
Hierro fundido	21 960	58 388
Hierro forjado	1 289 364	1 677 571
Aceites y minerales	1 488 365	1 664 307
Pinturas y pigmentos	699 739	1 536 783
Papel y manufactura	134 393	185 050
Perfumería y cosméticos	286 582	457 387
Goma	45 519	129 535
Seda	324 689	362 526
Jabón	315 242	482 932
Maderas	273 007	366 097
Lanas	577 009	638 412
	97 985	243 092

El convenio estipulaba además:

Artículo 4º

El gobierno dominicano se compromete a no modificar en cualquier época, los derechos de entrada a tal punto que, tomando por base exportaciones e importaciones del mismo tamaño y de igual índole durante los dos años anteriores al en que se desee hacer dicha modificación, el neto total de los ingresos aduaneros, según tarifa así modificada, no habrían alcanzado para cada uno de dichos dos años al menos una vez y media el importe necesario para asegurar el servicio de interés y amortización de su deuda pública.¹⁸

¹⁸ Troncoso de la Concha, M. *Génesis de la Convención Dominico-Americana*. Editorial El Diario, 1946. Santiago, Rep. Dom., p. 128.

El problema

Santo Domingo era por aquellos años, al igual que hoy, un país eminentemente agrícola. En la década que va de 1920 a 1930 su población osciló entre 895 mil y 1 250 000 habitantes. La caña de azúcar, el cacao y el tabaco en rama, constituían sus principales renglones de cultivo, y en menor medida la producción maderera. A diferencia de algunos países agrícolas atrasados, con economía orientada en lo fundamental a las necesidades del mercado interno, la economía dominicana apuntaba al exterior. De ahí que a pesar de ser una sociedad dedicada a la agricultura, su producción no suplía las necesidades de la alimentación de su población. En 1927, el total de las importaciones ascendía a 27.784,000; de ese monto, 7.505,000 fueron invertidos en la importación de alimentos; y de estos últimos, 2.500,000 en la compra de arroz, uno de los principales componentes de la dieta alimenticia de la gran masa del pueblo.

Dentro de la producción nacional, el azúcar constituía y constituye el principal producto, y ocupó desde los primeros años de este siglo, y sobre todo a partir de 1920, cerca de un 60% del valor de todas las exportaciones. Este renglón, como hemos visto, se encontraba en manos de capitalistas extranjeros. Para tener una idea clara, veamos por ejemplo la exportación de seis de los principales productos en el año de 1928. En este año, el valor total de las exportaciones ascendió a 28.754,000. De esta suma, seis productos totalizaron más de 24.000,000 de dólares. Son éstos:

Cacao	4.250,415
Café	2.135,682
Azúcar moscabo	16.911,925
Maderas	48,971
Caoba	17,933
Tabaco en rama	1.274,416
Total	24.639,352

Todos estos productos, a consecuencia de factores externos, entre otros la última guerra mundial, disfrutaron de cotizaciones elevadas en el mercado internacional. En 1920, conocido como el año de la "danza de los millones", el azúcar llegó a alcanzar un precio de 28.5 centavos por libra; el café se cotizó a 43.0 centavos por libra y el cacao a 26.3 centavos por libra. Se trata, sin embargo, de precios bajo situación de anormalidad. Veamos fuera de esta esfera, el movimiento de los precios de algunos productos, en el quinquenio de 1924-28.

PRECIO MEDIO DE LOS ARTÍCULOS SELECCIONADOS

	1924	1925	1926	1927	1928
Azúcar crudo	9.8	5.1	4.3	5.6	5.0
Cacao	12.0	16.5	19.0	28.2	22.0
Café	38.6	48.5	43.8	42.7	47.0
Tabaco en rama	14.4	12.2	12.7	9.0	8.5 ¹⁹

La producción, por otra parte, mantenía un acelerado ritmo de crecimiento. Esto lo dejan ver claramente las cifras en toneladas métricas de las exportaciones para el mismo quinquenio.

CANTIDADES EXPORTADAS EN TONELADAS MÉTRICAS

	1924	1925	1926	1927	1928
Azúcar C.	220 629.5	301 105.9	337 653.4	295 896.0	335 019.9
Cacao	23 142.5	23 482.1	20 084.2	26 512.9	19 301.5
Café	2 232.6	2 666.3	4 307.2	4 093.9	4 542.5
Tabaco	15 760.2	22 260.5	9 754.1	20 298.3	14 067.7

III

LA CRISIS

Después del efímero gobierno provisional presidido por Juan B. Vicini dejado por los norteamericanos, previo acuerdo con los grupos oligárquicos, en 1924 se llevan a cabo elecciones generales, y frente a un candidato abiertamente norteamericano —Peinado— resultó ganador un viejo caudillo, ahora arropado con la bandera del nacionalismo: Horacio Vásquez.

Apoyado en los primeros años por las fuerzas más sanas de la nación, el nuevo gobierno emprendió una verdadera tarea de reorganización estatal y de fomento y protección a la agricultura, tan abandonada entonces en nuestro país. Se declararon así varias zonas de explotación privilegiada en donde se ofrecían ciertas ayudas técnicas y económicas al pequeño propietario. Por otra parte, derogó toda una serie de privilegios otorgados por el anterior gobierno militar en favor de compañías norteamericanas. Por ejemplo: las exonera-

¹⁹ Estudio estadístico de algunos aspectos del comercio exterior. Dirección General de Estadísticas. Rep. Dom., 1941.

ciones de impuestos que disfrutaban estas compañías sobre sus importaciones de máquinas e implementos agrícolas; y limitó por decreto las extensiones de terrenos que estas compañías podían dedicar al cultivo de la caña de azúcar. Se ha afirmado que “estabilizados los precios en general, los seis años transcurridos entre 1924 y 1929 inclusive, marcan uno de los mejores periodos, si no el mejor, que financieramente vivió la República Dominicana en su historia hasta entonces”.

Todo este bienestar, a pesar de la importante tajada que de los ingresos aduaneros retiraba el receptor general de aduanas para engrasar los bolsillos de los prestamistas norteamericanos. Veamos los ingresos totales del Estado, y las sumas afectadas por convenciones, empréstitos y otros gastos —entre éstos el pago de funcionarios norteamericanos— de 1924 a 1929.

Año	Total de ingresos	Sumas afectadas por convenciones, empréstitos y otros gastos	Total disponible
1924	10.320,730.07	4.519,476.62	5.801,253.45
1925	11.744,489.03	5.858,114.51	5.886,374.52
1926	12.465,605.22	5.213,524.55	7.252,080.67
1927	15.314,332.88	2.911.675.23	12.402,657.65
1928	14.781,780.52	4.218,162.36	10.563,618.16
1929	15.385,843.75	4.577,026.99	10.808,816.76 ²⁰

En sus últimos dos años, sin embargo, la administración de Vásquez entró en dificultades; dificultades derivadas de los compromisos políticos contraídos con ciertos grupos influyentes que aspiraban al control de ciertos ministerios y de ciertos cargos claves en la administración estatal. Tratando de limar las diferencias, el presidente cedió:

Y el presupuesto nacional fue dedicado en una proporción alarmante a satisfacer demandas del Horacismo, creando miles de cargos innecesarios, que fueron bautizados con el nombre de *botellas*, porque aquellos que los disfrutaban no tenían siquiera la obligación de asistir a ninguna oficina ni realizar trabajo alguno, excepto el de ir al correo los días de pago a buscar su cheque. ²¹

²⁰ Marrero Aristy, R. *La República Dominicana*. Editora del Caribe, 1946, t. II, Rep. Dom.

²¹ Aristy, *op. cit.*, p. 424.

En la medida en que esta corrupción crecía, aumentaba la descentralización del mandatario sobre su gobierno, y caía poco a poco su prestigio político, su "nacionalismo".

En el interior del país, en los pueblos pequeños:

el sistema de prestatarios para arreglar caminos (se) mantenía como una costumbre del medievo. Es decir, que los campesinos y la gente pobre de las poblaciones estaban obligados a trabajar determinado número de días al año en favor del municipio del Estado en el arreglo de vías de comunicación que siempre resultaban ser aquellas que interesaban a los caciques por el hecho de poseer propiedades al lado de las mismas o en sus cercanías. Esta costumbre daba lugar, incluso, a que los caciques llevaran a sus fincas a la gente pobre de los campos y de las aldeas a trabajar sin remuneración en su beneficio particular, violando así los más elementales derechos del ciudadano. En algunos municipios el cacique paralizaba los pagos de los sueldos para que los empleados les vendiesen sus libramientos a un agente suyo con descuentos que fluctuaban entre 10% y 30%, y estos sueldos eran cobrados horas después por el comprador en la Tesorería del Ayuntamiento, donde todos dependían del amo de la provincia o de la comuna.²²

A todo este descontento se agregaron luego las intenciones del presidente de utilizar una interpretación constitucional para extender su periodo por dos años más.

A mediados de 1929, era evidente que el régimen había perdido toda popularidad, situación que favorecía enormemente las intenciones de los industriales azucareros norteamericanos, disgustados por sus medidas en contra del latifundio. Para este año, Rafael L. Trujillo ocupaba el grado de general de brigada y era, a su vez, el jefe de las fuerzas militares organizadas por los norteamericanos durante los años de la ocupación.

Para esta fecha era ya una realidad la crisis económica norteamericana, aunque sus efectos no fueron sentidos en todos los sectores de la economía nacional de inmediato. El precio del azúcar, que había bajado de 5.0 a 3.8 centavos libra, anunciaba lo que vendría. Al finalizar el año, los ingresos del Estado habían bajado en forma tal que el gobierno comenzó a:

No poder cumplir el presupuesto, dejando sin pagar en primer término los sueldos de los maestros y otros empleados. Este fallo dio oportunidad a que la corrupción aumentara en los municipios, en muchos de

²² *Idem, op. cit.*, p. 424.

los cuales los pagos eran detenidos deliberadamente para que los empleados se vieran obligados a vender sus comprobantes de sueldos con grandes descuentos.²³

Para tratar de ajustar la crisis dentro de un molde llevadero los norteamericanos envían ahora al experto financiero Dawes, con el propósito de asesorar al gobierno en la formulación de un plan de acción frente a la situación. En primer término se ordenaba una reducción tajante en el aparato burocrático estatal. Resultado: aumento del descontento general.

Para 1930 estaban fijadas, según la nueva interpretación de la Constitución Dominicana, las elecciones nacionales. Empujado por los círculos más corruptos dentro de su régimen, violando su propia palabra, el presidente Vásquez se enfrascó en una intensa campaña reeleccionista. Este detalle indujo a la ruptura entre el presidente y el vicepresidente, licenciado Federico Velázquez, dirigente del partido progresista, aliado al cual, Vásquez había conquistado el poder.

A finales del 1929, dado el carácter eminentemente agrícola del país dominicano, la crisis económica sólo balbuceaba, pero los conflictos políticos afloraban con absoluta madurez.

Si bien el tiempo de Vásquez significó el ascenso al poder de los pequeños propietarios urbanos y rurales y el fracaso de la oligarquía tradicional aliada con la enajenación de las riquezas del país al capital norteamericano, y en sus primeros años representaba a su vez el triunfo del nacionalismo sobre el entreguismo, la política económica del gobierno, los zigzagueos de su contradictoria trayectoria, característicos de la clase que representaba, liquidaron las posibilidades de esta fuerza por muchos años.

A finales del 30, valga la idea, Vásquez era un presidente solitario. El país era un hervidero de protestas contra la reelección y la corrupción; era a su vez, un hervidero de conspiraciones. A la cabeza del movimiento de oposición y compartiendo igual posición con los grupos de la oligarquía tradicional, estaban de nuevo la pequeña burguesía urbana y rural, conjuntamente con algunos sectores del comercio importador y exportador, principales afectados por los rápidos jalones de la crisis norteamericana.

Cuando la situación estuvo madura, la larga mano de la Legación norteamericana movió su ficha clave: Rafael L. Trujillo, para entonces jefe del ejército y general de brigada. Se escogió como cuna del movimiento a Santiago de los Caballeros, segunda ciudad en impor-

²³ *Idem, op. cit.*, p. 428.

tancia, y cabeza del principal centro agrícola del país, verdadero panal de pequeños propietarios rurales, cultivadores de tabaco, café y cacao.

Todo esto ocurría en los momentos en que se iniciaba la nueva campaña electoral. Campaña que había aglutinado contra Vásquez en una "compatación de partidos" a los principales grupos políticos organizados, quienes llevaron como candidato presidencial al ex vicepresidente Federico Velázquez, representante de las mismas fuerzas nacionalistas que habían apoyado a Vásquez en 1924, y quien acusaba al presidente de renegar de los principios que hicieron posible su elección. Para la vicepresidencia, la compatación de partidos proclamaba a un prestigioso abogado de Santiago: el licenciado Estrella Ureña. Este último, al parecer, a espaldas de su compañero y candidato presidencial —Velázquez— había caído en las redes de la conspiración dirigida por los norteamericanos. De ahí que algunos días antes de que estallara el movimiento cívico militar que derrocará al presidente Vásquez y "antes de manifestarse sus primeros chispazos, el tercer secretario de la legación (norteamericana) John Moors Cabo fue enviado a Santiago donde se entrevistó la misma noche del 22 de febrero —1930— con Estrella Ureña".

Armados con las propias armas del gobierno, entregadas por el brigadier Trujillo, los rebeldes del movimiento cívico que encabezaba Estrella Ureña planearon un ataque a la fortaleza de Santiago. La guarnición allí "simuló una defensa simbólica".²⁴ Luego de la toma de la fortaleza, las fuerzas insurrectas comenzaron su marcha hacia la ciudad de Santo Domingo, capital de la República. Decidido a enfrentar la situación, el presidente llamó al jefe del ejército para planear las acciones que hicieran frente a la situación:

Trujillo alegó estar enfermo, y fue entonces el anciano presidente quien se trasladó a la Fortaleza Ozama; Trujillo le reiteró su adhesión, y juntos decidieron que una compañía de soldados marchara por la carretera a cortar el paso a los rebeldes; Horacio Vásquez decidió que el coronel José Alfonseca se pusiera al frente de la columna leal por ser hombre de su confianza, pero Trujillo lo substituyó después con el coronel Simón Díaz, a quien al parecer dio órdenes concretas de entenderse con los rebeldes.²⁵

Cumplido este primer paso de la comedia, a los pocos días —concretamente, el 26 de febrero— las tropas insurrectas gritando consignas a favor del general Trujillo y del doctor Estrella Ureña, entra-

²⁴ Galindez, Jesús de. *La era de Trujillo*. Editorial Americana, p. 19. Buenos Aires.

²⁵ *Idem, op. cit.*, p. 15.

ron sin luchar a la capital, bajo el mando del general José Estrella, tío de la cabeza civil del movimiento.

A partir de aquí, la legación no necesitó de extender su larga mano. Su propia sede fue el recinto que sirvió para entrevistar a rebeldes y leales. Luego de dar estricto cumplimiento a una serie de requisitos constitucionales, se anunció allí la renuncia de Vásquez y la formación del nuevo gobierno, encabezado por Estrella Ureña como presidente de la República. En el nuevo régimen, sin embargo:

Era el general Trujillo quien ocupaba las posiciones claves utilizando hombres de su confianza; el nuevo secretario de la Presidencia es precisamente Rafael Vidal, cerebro de la conspiración con Trujillo; y el secretario del Interior y Policía es el licenciado Jacinto B. Peynado, llamado a ser lugarteniente de Trujillo a su muerte en 1940.²⁶

Entre las primeras medidas adoptadas por el nuevo régimen, se encontraban la derogación de todas aquellas leyes aprobadas durante el régimen de Vásquez que afectaban en algo los intereses azucareros norteamericanos. Entre éstas la que permitía limitar la extensión de los cultivos de la caña de azúcar; la 815, por medio de la cual se establecía un impuesto de 150% al valor sobre las importaciones de implementos y maquinarias agrícolas de las industrias azucareras.²⁷

Cuando Estrella Ureña se juramentó como presidente provisional de la República, un acuerdo entre el jefe nominal de la Revolución, el jefe de Estado derrocado, y el ministro norteamericano, establecía que el "general Trujillo no podría ser jamás candidato presidencial".²⁸ A los veinte días de este acuerdo, el periódico local —*Listín Diario*, 18 de marzo de 1930— trae un pronunciamiento de una "Coalición patriótica de ciudadanos" anunciando la postulación de Trujillo para los comicios fijados para mayo; Estrella Ureña aparece como candidato a vicepresidente. En Washington, el nuevo ministro dominicano se entrevistó con el secretario de Estado en funciones, con el propósito de indagar la actitud del gobierno norteamericano frente a la candidatura de Trujillo. Un "memorándum escrito por Francis White indica que el Departamento de Estado rehusó darle ninguna respuesta clara".²⁹ La primera parte de la farsa estaba cumplida.

Al día siguiente, por primera vez Trujillo se dirige al país para aceptar su postulación presidencial:

²⁶ *Idem*, op. cit., pp. 16-17.

²⁷ *Colección de leyes*, 1930. Ver Ley 1319-26, julio. Santo Domingo. Rep. Dom.

²⁸ Galindez, op. cit., p. 17.

²⁹ *Idem*, op. cit., p. 19.

No hay peligro en seguirme, porque en ningún momento la investidura con que pueda favorecerme el resultado de los comicios de mayo, servirá para tiranizar la voluntad popular a la cual sirvo en este momento y a la que serviré lealmente en el porvenir...

La frase: ¡no puede ser!, se enarboló como consigna general de la gran mayoría del pueblo contra la candidatura anunciada. Este grito se materializó en la alianza electoral, que aglutinó a los principales grupos políticos organizados. Para presidente, la alianza escogió a Federico Velázquez, del Partido Progresista, para la vicepresidencia a Ángel Morales, del Nacional (Horacista), anterior partido de gobierno.

Jesús Galíndez resume en pocas palabras lo sucedido poco tiempo después en el proceso electoral:

Trujillo no sólo había sido elegido presidente de la República, sino que había conseguido eliminar a toda la oposición: Federico Velázquez, José Dolores Alfonseca, Ángel Morales, Gustavo Díaz y otros dirigentes de la alianza tuvieron que escapar al exilio; Martínez Reyna y algunos menos afortunados habían sido acribillados a balazos; tan sólo el viejo y achacoso caudillo Horacio Vásquez fue respetado en su lenta agonía de Tamboril. El propio licenciado Francisco J. Peynado, ajeno a las convulsiones posteriores al golpe de febrero, había marchado voluntariamente a Francia. Los que volvieron después, volvieron en un féretro; y entonces Trujillo les rindió a veces honores póstumos.⁸⁰

IV

En 1930, la crisis norteamericana comenzó a sentirse ya con mayores fuerzas. Las memorias del secretario de Estado de Agricultura, señalan:

La crisis económica ha venido acrecentándose cada día más, el año de 1930 ha presenciado los consiguientes efectos de ella. La parcial restricción del Crédito Internacional y la notable disminución del poder adquisitivo del público han contribuido a disminuir notablemente las importaciones.⁸¹

Es decir, había disminuido el principal renglón desde donde el Estado cubría sus gastos presupuestales. Y puesto que eran las adua-

⁸⁰ *Idem, op. cit.*, p. 21.

⁸¹ *Memoria del secretario de Agricultura y Comercio. 1930. Litografía La Información, febrero, 1931.*

nas la principal garantía, a la vez que fuente de ingresos para la amortización de la deuda contraída con los norteamericanos, el llamado receptor de aduanas ya en abril había informado:

Aunque es empeño constante de la Receptoría complacer al gobierno y cooperar con él, después de un estudio y examen cuidadoso del estado de cosas actual, según lo evidencia la adjunta tabla, si no mejora la situación que mantiene restringidos los ingresos, hasta nuevo aviso nos será menester retener todos los fondos aduaneros remesados a esta Receptoría, para poder hacer frente con ellos a los compromisos de amortización de los empréstitos.⁸²

Tal comunicación está fechada en el mes de abril, esto es, cuando aún era presidente provisional de la República Estrella Ureña. El tratamiento de Washington con el nuevo régimen "elegido" no fue idéntico.

Por otra parte, la crisis continuaba profundizándose, aumentando a su paso el hambre y la miseria de las grandes masas del pueblo. Los ingresos globales del Estado lo expresan claramente: en 1929 hubo entradas por 15.385,000.00; en 1930, bajaron a 9.879,843.75, reduciéndose en 1931 las entradas a 7.350,000.00.⁸³ En este último año, el precio del azúcar, principal producto de exportación, había descendido a 2.3 centavos libra y todo indicaba que continuaría la pendiente. Ese año el gobierno tuvo dificultades para pagar los sueldos de los empleados, y muchas escuelas fueron clausuradas. A finales del año, el azúcar bajó a 1.5, y el café, el tabaco y el cacao, rodaron por el suelo. En tal fecha, el funcionario norteamericano designado receptor general de las aduanas escribía:

Siendo éste el tercer año consecutivo en que se había sufrido una baja de los precios y una tensión general, la República Dominicana experimentó todo el peso de la depresión reinante. Con los réditos bancarios grandemente restringidos o completamente retirados, el comercio refleja la crisis produciéndose una merma notable en el volumen de las importaciones.

El país estaba al borde del colapso. Aumenta el descontento general, dando paso incluso a conspiraciones e insurrecciones abiertas contra el régimen de hambre, miseria y terror. El principal foco de agitación eran los campos del Cibao, con su cabeza comercial, la

⁸² Herrera, *op. cit.*, p. 72.

⁸³ Trujillo, Rafael L. *Evolución de la democracia en Santo Domingo*, 1950, p. 22.

ciudad de Santiago. Para atender personalmente las medidas represivas tendientes a "calmar" la situación, Trujillo decidió cambiar temporalmente la sede de la presidencia del gobierno de Santo Domingo a Santiago. La presencia de Trujillo allí no detuvo el desencadenamiento de las protestas. A mediados de año, un viejo cacique, el general Desiderio Arias, se declara en abierta rebelión. Contra él se lanza todo el peso del ejército. A los pocos días los rebeldes fueron cercados y Arias cayó herido:

Y mientras yacía caído, un teniente, conocido por su salvajismo, le cercenó la cabeza de un machetazo. Dado que aquella noche se celebraba un baile en Mao —pequeño poblado al norte del país— la cabeza fue entregada a Trujillo como trofeo.³⁴

Mientras la crisis continuaba agudizándose, creciendo a su vez la efervescencia general, a la par con el desempleo, se hacía imperioso tantear alguna solución para detener el caos que se avecinaba. En este año, William E. Dunn, un norteamericano muy vinculado a los círculos gobernantes de Washington, fue designado consejero financiero del gobierno. Su misión era buscar una salida airosa con la máxima garantía para los prestamistas norteamericanos. A los pocos meses, con bombos y platillos, Trujillo envió al Congreso una Ley de Emergencia. Para explotar los sentimientos antinorteamericanos del pueblo, el "jefe" daba a entender que había sido elaborada sin consultas previas con Washington. Antes de su promulgación, sin embargo, y luego del estudio minucioso hecho por Dunn sobre la situación del país, Trujillo había asegurado al Departamento de Estado de Washington que "sólo se había recurrido a ella después que todas las soluciones alternativas de nuestras dificultades financieras habían sido intentadas sin éxito".³⁵ Por esta ley el gobierno dominicano anunciaba "la interrupción del pago de los fondos provenientes de las aduanas de las amortizaciones sobre los préstamos y los bonos extranjeros, asegurando en cambio el pago de los intereses".³⁶ Esta disposición ponía en manos del gobierno rentas adicionales que sumaban aproximadamente 100,000 dólares mensuales. El artículo 9 de la Ley de Emergencia dispuso que "los efectos de la misma cesarían el 31 de diciembre de 1933 a menos que antes de esa fecha cesaran las circunstancias que la motivaron".³⁷

³⁴ Crassweller, R. D. *Trujillo: la trágica aventura del poder personal*. Editorial Bru-guera, 1968.

³⁵ Trujillo, *op. cit.*, p. 26.

³⁶ *Idem*, *op. cit.*, p. 24.

³⁷ *Idem*, *op. cit.*, p. 25.

La ley fue recibida con júbilo. La intelectualidad integrada al régimen preparó el terreno. Días antes de ser sometida la ley al Congreso comenzaron a aparecer en la prensa pomposos artículos en apoyo a "la sabia política económica de Trujillo". Con extraordinario cuidado y desde muy temprano, Trujillo encaminó su acción a ganarse el respaldo de la joven intelectualidad del país, compuesta en su mayoría por jóvenes de clase media sin grandes posibilidades de progreso individual; por jóvenes de familias de "alcurnia" arruinados por las vicisitudes de la azarosa vida económica del país. Ambos grupos encontraron aquí su oportunidad. A su entrega total contribuyeron, además, sus vacilaciones frente a los brutales métodos represivos empleados por el régimen desde sus inicios. Para los opositores, el régimen tenía tres alternativas: la cárcel, la muerte y el exilio. Por otro lado, contribuía también la inmensa distancia social impuesta por una oligarquía casi centenaria en la sociedad dominicana. Muchos intelectuales de cierto nivel, por encima de su capacidad, sentíanse postrados; imposibilitados por los prejuicios sociales imperantes que les impedían escalar posiciones largamente anheladas. En el Santo Domingo de entonces, un hombre valía por su apellido y no por su realización personal. Además, el hecho de haber sido Trujillo un individuo de baja extracción, y su lucha largamente conocida por escalar peldaños cada vez más elevados en la "sociedad", los identificaba mutuamente. Puede decirse, creaba un sentimiento de solidaridad natural.

El año de 1931 fue terrible. Fueron los doce meses decisivos para la estructura política que duraría en Santo Domingo treinta y dos largos años. Si bien la represión y las frustraciones de un amplio sector de nuestra sociedad fueron las piedras angulares sobre las que se edificó el sistema, teniendo como base la crisis mundial; en este año, ni siquiera el empleo de los métodos más brutales de terror impedían las manifestaciones de inconformidad. Así, por ejemplo, en la medida en que la crisis mundial se profundizaba, y bajaban extraordinariamente los precios de los productos agrícolas, crecía el descontento general. A la cabeza de tales acciones iban por lo regular hacendados, cultivadores de café, cacao, y frutos menores, y los pequeños propietarios rurales; y entre estos últimos los de la región del Cibao. A mediados de año, a raíz de la muerte del general Desiderio Arias y en los meses sucesivos, la situación había llegado a tal extremo, que Trujillo optó por dirigir personalmente las represiones. El propio vicepresidente, quien se hallaba en el extranjero, fue acusado y procesado por "conspiración" por el Senado y destituido. Truji-

llo inició en esta fecha visitas periódicas de "inspección" a cada uno de los más importantes poblados del país, acompañado siempre de las tropas del ejército. A su paso, la muerte, la cárcel y la expropiación de bienes para usufructo personal de Trujillo, esperaba a los opositores.

Los escasos datos estadísticos que se pueden encontrar hoy en Santo Domingo, hablan claramente de esta concatenación de fenómenos. En 1929, fecha en que el azúcar alcanzó un precio de 3.8 toneladas métricas, el valor de las exportaciones ascendía a 23.736,000. En 1931, las exportaciones bajaron a 13.067,000, y en 1932 a... 11.164,000. En 1929, como recordamos, la renta del país totalizó 15.350,000; en 1931, apenas llegó a los 7.350,000 dólares.³⁸ En 1932 el presupuesto nacional ni siquiera llegó a los 7.000,000. A finales del año, el informe del funcionario americano encargado de la Receptoría General de Aduanas señaló:

La tendencia que tenían las condiciones de decaer prevaleció durante todo el año y se reflejó en la capacidad adquisitiva del pueblo, y en la disminución general en el volumen de las importaciones. Las condiciones económicas del país tampoco prosperaron, y la falta de nuevas obras públicas conjúgase con el aumento en el número de desempleados.

Para finales de este último año, no obstante, el país había sido ya "pacificado" y en noviembre el Congreso aprobó con carácter de "urgencia" la resolución desde entonces histórica que otorgó a Trujillo el título de "Benefactor de la Patria".³⁹

En 1933 la situación económica no había mejorado. La baja de los precios fue tan sensible en ese año respecto del año anterior, que produjo una diferencia de 3.000,000 de dólares⁴⁰ en el valor de las exportaciones. Pero las rentas públicas con la creación de nuevos impuestos habían mejorado en algo, en relación con el año anterior. De 7.380,000, esta vez alcanzaron casi los 8.500,000 de dólares. En el orden político la mejoría era extraordinaria: Trujillo gobernaba ya prácticamente sin oposición. Había logrado además, de los norteamericanos, la aceptación para la prórroga de la legislación de emergencia de 1931 hasta diciembre de 1937.

Esto último se consiguió luego de la visita de inspección al país de Joseph E. Davies, prominente figura del Partido Demócrata en-

³⁸ *Idem*, *op. cit.*

³⁹ Galíndez. *Op. cit.*, p. 28.

⁴⁰ Trujillo. *Op. cit.*

tonces en el poder en los Estados Unidos, “consejero legal del presidente Trujillo”,⁴¹ quien llegó en 1933.

Davies se reunió con comerciantes, “políticos y dirigentes cívicos e intelectuales” y otros sectores representativos de la sociedad dominicana. Y sobre todo discutió con los empresarios azucareros norteamericanos. En uno de los tantos banquetes oficiales organizados en su honor, M. Kilbourne, en representación de los magnates de los ingenios azucareros norteamericanos en el país, expresó:

Hablando en nombre de mis asociados, deseo decir, que es nuestra firme creencia que es esencial para el bienestar de la República Dominicana que el general Trujillo continúe dirigiendo el curso de los acontecimientos en este país como su jefe ejecutivo.

Creemos que sus problemas son nuestros problemas; que cuanto a él y su gobierno sea beneficioso, será beneficioso a nosotros y estamos enteramente contentos de dejar en sus manos la protección de nuestros intereses, en la firme convicción de que no podrían estar en mejores manos.⁴²

Era la santificación de la campaña reeleccionista que pocos meses más tarde iniciaría Rafael Leónidas Trujillo. Atravesando con “felicidad” las dificultades derivadas de la crisis del 1929, Trujillo era ya un tirano de cuerpo entero. El resto de esta historia, América bien la conoce.

BIBLIOGRAFÍA

- GALINDEZ, Jesús de. *La era de Trujillo*. Ed. Americana.
WELLES, Sumner. *La Viña de Naboth*. Editorial El Diario.
HERRERA, César. *Las finanzas de la República Dominicana*. Santo Domingo, 1955.
DE LA ROSA, Antonio. *Las finanzas en Santo Domingo*. Ed. Nacional.
KNIGHT, Melvin. *Los americanos en Santo Domingo*. Listín Diario.
Colección Trujillo. *Convención de 1924*.
La era de Trujillo, Nanita, Abelardo, núm. 8.
DEMORIZI, Emilio. *Cronología de Trujillo*, núm. 9.
TRONCOSO de la Concha. *Génesis de la Convención Dominico-Americana*. Editorial El Diario.
MARRERO, ARISTY, R. *La República Dominicana*. Ed. El Caribe.
Colección de Leyes, 1930. Santo Domingo.
Memoria del secretario de Agricultura. Litografía La Información.

⁴¹ Herrera. *Op. cit.*, p. 44.

⁴² *El Listín Diario*, mayo 23, 1933.

- CRASSWELLER, R. D. *Trujillo: la trágica aventura del poder personal*. Editorial Bru-guera. 1968.
- GOICO, Manuel de Jesús. *Un hombre de América*. Santo Domingo, 1941.
- TRUJILLO, Rafael L. *Fundamentos y política de un régimen*. Editorial El Caribe, 1960.
- CASTILLO DE AZA, Zenón. *Trujillo y otros benefactores de la Iglesia*. Editorial Handi-cap. Santo Domingo, 1961.
- Mensaje de Rafael Leónidas Trujillo*. Imprenta Listín Diario. Santo Domingo, 1940.
- Boletín del Archivo General de la Nación*. Editora Montalvo. 1947, núms. 52-53
- Estudio estadístico de algunos aspectos del comercio exterior*. Rep. Dom., 1920-1939.
- LLAVERÍAS, Federico. *Ofrenda votiva*. Santo Domingo.
- BALAGUER, Joaquín. *El pensamiento vivo de Trujillo*. Impresora Dominicana, 1955. Santo Domingo.
- BOSCH, Juan. *Trujillo: causas de una tiranía sin ejemplo*. Caracas, 1961.

PUERTO RICO EN LOS AÑOS TREINTA

Manuel Maldonado Denis

Los años treinta representan el periodo más crucial de nuestra historia en lo que va del siglo. Ningún otro momento histórico ha sido capaz de crear las condiciones propicias para nuestra liberación como lo hizo la década del treinta. Es por ese motivo que he denominado la “década crucial” el decenio que habrá de preocuparnos en este ensayo.¹ Crucial porque el colapso de la economía capitalista que acaece con la “gran depresión” estremece en sus propios cimientos al Puerto Rico colonizado, y deja al descubierto la vulnerabilidad de una economía que hasta ese instante parecía disfrutar de una gran estabilidad. La jocunda algarabía de los *gay twenties* se convirtió ahora en el crujir de dientes de un sistema que se hallaba en estado de postración. El *rugged individualism* de Herbert Hoover tiene que ceder el paso a las políticas reformistas del “nuevo trato”. Franklin D. Roosevelt se convierte en el salvador del capitalismo internacional cuando decide ensayar aquellas medidas de intervención estatal capaces de poner a la economía una vez más sobre sus pies. Su política dirigida hacia el meliorismo social y llevada a ejecución de manera pragmática pone de manifiesto que, para sobrevivir, el sistema capitalista no tenía otra alternativa que no fuese la del camino de las reformas sociales.

Como colonia de los Estados Unidos desde 1898, Puerto Rico se verá afectado directamente por las medidas sociales del *novotratismo*. El hecho de que se hiciesen extensivos a la isla algunos de los programas sociales ideados por la administración de Roosevelt tendría profundas consecuencias para nuestra vida colectiva. Más aún, el enfoque de las relaciones interamericanas enumerado en “la política del buen vecino” no podía dejar de reflejarse en las relaciones entre la metrópoli y un país hispanohablante que se hallaba bajo su dominio directo. La administración de Roosevelt —llevada al poder en los

¹ Remito al lector interesado a mi libro *Puerto Rico: una interpretación histórico-social*. México, Siglo XXI, 1969.

Estados Unidos cabalgando en la ola del descontento popular— inicia así en Puerto Rico una nueva fase de la política imperial norteamericana que deja atrás la fase de ese “imperialismo del abandono” que el profesor Gordon K. Lewis ha sabido describir tan cabalmente en su magnífico libro.²

Cuando los Estados Unidos ocupan militarmente a Puerto Rico el 25 de julio de 1898, los designios expansionistas del imperialismo norteamericano encuentran el asidero en el Caribe que les permitirá sentar su presencia “en el Mediterráneo norteamericano”, mientras su gran flota hace lo propio con la ocupación de las Filipinas en el Lejano Este. Un estudioso de la materia describe la política expansionista de los Estados Unidos de la manera siguiente:

Para Mahan, William McKinley, Theodore Roosevelt y Henry Cabot Lodge, las posesiones coloniales, tal y como éstos las definían, eran piedras de toque hacia los dos grandes premios: los mercados latinoamericanos y asiáticos. Esta política se asemejaba mucho menos al colonialismo tradicional que al nuevo periodo de expansión industrial y financiera de 1850-1914. Estos hombres no visualizaban “colonizar” a Latinoamérica o a Asia. Sí querían explotar estas áreas económicamente brindándoles (especialmente a Asia) los beneficios de la civilización occidental y cristiana. Para hacer esto, estos expansionistas necesitaban bases estratégicas desde las cuales los carriles marítimos y los intereses interiores en Asia y América Latina pudiesen ser protegidos.³

Es bueno indicar al lector desprevenido que al momento de consumarse la ocupación de Puerto Rico nuestro país era fundamentalmente una isla productora de café y tabaco para la exportación, aunque el renglón de la caña de azúcar tenía también una importancia capital en nuestra economía. Al consumarse la anexión de Puerto Rico como territorio norteamericano, encontramos un país primordialmente agrario, en donde predomina la pequeña propiedad del agro. En el estudio autorizado de los Diffie se nos indica que para 1899 los agricultores puertorriqueños eran dueños del 93% de las fincas existentes en la isla, de manera tal que “un gran número de personas pertenecientes a la población rural eran dueños de sus hogares y residentes permanentes de la isla”.⁴ Según el autor

² Gordon K. Lewis. *Puerto Rico: Freedom and Power in the Caribbean*. New York, Monthly Review Press, 1963.

³ Walter LaFeber. *The New Empire, An Interpretation of American Expansion 1860-1898*. Ithaca, Cornell University Press, 1963, p. 91.

⁴ Bailey W. y Justine Whitfield Diffie. *Porto Rico: A Broken Pledge*. New York, The Vanguard Press, 1931, p. 150.

recién citado, del área cultivable total de Puerto Rico (área total 3 435 millas cuadradas = 2 198 acres) el 41% estaba dedicado al café, el 15% a la caña de azúcar, el 32% a comestibles y sólo el 1% al cultivo del tabaco.

El panorama económico sufrirá una transformación inmediata al perpetrarse la invasión norteamericana. La moneda local es devaluada en el 40% de su valor y el dólar pasa a ser el denominador común para todas las transacciones económicas. Comienza el proceso sistemático de expropiación de los pequeños y medianos agricultores por parte de los grandes consorcios azucareros y tabaqueros. Desprovista del mercado europeo —que era su mercado tradicional— la producción cafetalera comienza a declinar. La tarifa arancelaria de los Estados Unidos cubre a la isla dentro de su ámbito. Concebida originalmente con el propósito de proteger los productos manufactureros norteamericanos de la competencia extranjera, la tarifa está concebida desde el punto de mira de los intereses metropolíticos. El resultado inmediato es que Puerto Rico se halla a la merced de una competencia a todas luces desventajosa para sus productos. En la división de trabajo internacional su papel como productor de azúcar y tabaco queda establecido desde el momento en que se fijan en la isla los ojos de las grandes corporaciones explotadoras de estos productos.

La impotencia que es ínsita a todo sistema colonial se ilustra en el hecho de que, ya concluida la primera década del siglo xx, el líder puertorriqueño Luis Muñoz Rivera podrá ofrecernos el siguiente cuadro respecto a la dependencia de la isla:

Puerto Rico vende a Estados Unidos casi todo lo que consume. Y por virtud de las nuevas tarifas, quedarán sin protección alguna todos sus productos, a excepción del tabaco y las frutas: el tabaco monopolizado por un *trust* americano que se llama Porto Rican American Tobacco Company; las frutas, poco menos que monopolizadas por capital americano.⁵

La situación de dependencia característica del sistema colonial imperante en Puerto Rico queda al descubierto en el hecho de que los intereses azucareros dispondrán en 1930 de 200 000 acres, siendo ello el 44% del área total cultivable de la isla. Queda, así, sentado el principio del monocultivo y de la hegemonía del “rey azúcar” en nuestra Patria.

Al arribar a la década del treinta notamos lo siguiente: Cuatro

⁵ Citado en Sebastián Dalmau Canet. *Luis Muñoz Rivera, su vida, su obra, su carácter*. San Juan: Tip. Boletín Mercantil, 1917, pp. 332-33.

grandes corporaciones norteamericanas dominan prácticamente la producción del azúcar en Puerto Rico. Como indican los *Diffie*, en los treinta el 60% de la producción del azúcar estaba dominado por cuatro grandes corporaciones absentistas, y lo mismo podía decirse del tabaco (80%), servicios públicos y bancos (60%) y líneas marítimas (100%). Y, como señala Perloff, durante las primeras tres décadas de dominación norteamericana la inversión absentista ascendió a \$ 120.000,000.⁶

El proceso sistemático de acaparamiento de tierras por corporaciones norteamericanas se lleva a cabo ininterrumpidamente a partir del momento en que sus tropas ocupan a Puerto Rico. Los intereses azucareros de la metrópoli, conjuntamente con los productores del azúcar de remolacha, habían logrado que se incluyera una disposición en la Primera Carta Orgánica (Ley Foraker, de 1900) donde se prohibió a las corporaciones absentistas el tener tierras en exceso de 500 acres. Esta disposición fue prácticamente letra muerta desde los comienzos de la dominación estadounidense. Miles y miles de acres pasaron a manos de los intereses azucareros que explotaban la caña en todo el Caribe. Incorporadas en cada país bajo nombres distintos, cada una de estas gigantescas corporaciones extendía sus redes hasta Cuba, Santo Domingo, Haití... El principio era elemental: mano de obra barata y abundante, materia prima para refinarse en la metrópoli, dominio colonial o neocolonial del país dependiente. El proceso de expropiación de los pequeños agricultores por las corporaciones norteamericanas convierte a la gran mayoría de éstos en "agregados" de las grandes centrales azucareras. Mediante este sistema se remachaba el principio de la dependencia de aquellos que cultivaban la tierra cañera a cambio de que se les permitiese vivir y trabajar dentro del ámbito de la central. De otra parte se hallaba el más amplio contingente de los obreros de la caña. Éste se encontraba a la merced del trabajo que podía conseguir durante la zafra para luego enfrentarse a la ominosa realidad del "tiempo muerto", cuando la zafra tocaba a su fin. Conscientes de este hecho, las corporaciones azucareras los reducían prácticamente a la servidumbre mediante el establecimiento de las tiendas de la central, lugares en donde el obrero terminaba por dejar su magro salario y donde por lo general terminaba endeudándose progresivamente con la corporación.

En un estudio hecho más o menos al filo de la década del treinta la Brookings Institution dio constancia de este hecho al mencionar

⁶ Harvery S. Perloff. *Puerto Rico's Economic Future*. Chicago, 1950.

que Puerto Rico era “una comunidad de obreros agrícolas”, y que de cada cinco personas que vivían en el campo cuatro no eran terratenientes. Los salarios para aquel entonces eran 75 centavos diarios (caña); 50 centavos diarios (café); 8 centavos diarios (frutos menores); 80 centavos diarios (tabaco), mientras que el ingreso medio por familia era de 250 a 275 dólares al año. De ahí que el estudio citado concluya:

En términos generales el movimiento, las enfermedades, los accidentes y la muerte son soportados sin que se haga mucho esfuerzo para aliviarlos. En las casas de la montaña del jíbaro uno encuentra con demasiada frecuencia que la enfermedad y el sufrimiento son aceptados con un fatalismo impotente.⁷

La estructura social de una sociedad colonial es un reflejo de la dependencia de dicha sociedad frente a la metrópoli. Lo mismo podemos decir, desde luego, de su economía. En caso de la sociedad puertorriqueña, por lo tanto, es imperativo señalar, como primer rasgo saliente de su estructura social, la ausencia para todo propósito práctico de una burguesía nacional bien definida. De ahí que haya preferido usar el concepto de “*elite* colonial” o *elite* criolla para designar ese grupo de personas dentro de la sociedad puertorriqueña que disfrutaban en un grado mayor que los demás puertorriqueños del acceso a los bienes materiales y espirituales de nuestra sociedad. Con una economía dominada por un puñado de corporaciones responsables ante sus accionistas en los Estados Unidos, la labor esencial de la *elite* criolla es la de servir de intermediaria entre el poder de la metrópoli y la sociedad puertorriqueña. Con esto quiero decir que la *elite* colonial se ve forzada a ajustarse al nuevo orden de cosas porque sus intereses económicos así lo requieren. Presionados desde abajo por las masas obreras en reclamo de sus reivindicaciones sociales, la *elite* colonial busca en el regazo del imperio la protección necesaria para continuar su actividad económica a la sombra de los grandes intereses que amenazan con devorarlos. El estilo de vida (Weber) de esta *elite* es el estilo de vida de quienes tienen como punto de referencia y apoyo a la clase media alta de la metrópoli.

En la base de la pirámide social encontramos el proletariado rural y urbano que vive prácticamente al nivel de subsistencia y que es el más numeroso entre los grupos componentes de la población. Es bueno señalar que según el estudio de la Brookings Institution ya

⁷ Víctor S. Clark (editor). *Porto Rico and its Problems*. Washington, D. C.: The Brookings Institution, 1930, pp. 13, 21, 27, 37.

citado, en 1930 sólo el 27% de la población podía considerarse como urbana, y según el censo norteamericano de 1960, en 1940, de una población total de 1 869 255 habitantes sólo vivían en las zonas urbanas 566 357. El grueso de la fuerza obrera, por consiguiente, era el contingente de los obreros de la caña, del tabaco, del café y de los frutos menores. No creo necesario hacer mayor hincapié sobre la condición paupérrima de los sectores populares durante estas cuatro décadas. Según el criterio enunciado, éstos serían los que se verían privados del acceso a los bienes materiales y espirituales de la sociedad puertorriqueña.

En el medio de estos dos grupos se hallaba la clase media, compuesta primordialmente por profesionales, pequeños comerciantes, pequeños agricultores, empleados del gobierno, profesores de instrucción pública y universitarios, etcétera. Las más distinguidas figuras intelectuales de este periodo provenían de la clase media. Sus probabilidades de existencia estaban definidas por fuerzas poderosas y y ajenas que mantenían a la economía del país en constante zozobra.

Y todos, tanto la *elite*, como los obreros, como la clase media, dependían para su existencia de decisiones hechas fuera de Puerto Rico, inconsultamente, y con perspectiva de que en cualquier momento podía una fluctuación en el mercado mundial del azúcar lanzar a miles de hombres al desempleo y a la desesperación.

Cuando acaece la gran crisis del capitalismo en víspera de la década del treinta, Puerto Rico sufre el impacto tremendo de su golpe. En esa década crucial hace crisis el sistema capitalista mundial y hace crisis, por tanto, el sistema colonial imperante en Puerto Rico. La agitación obrera y estudiantil, el nacionalismo, la lucha de clases, la conciencia antiimperialista, las huelgas, la lucha por la independencia, cristalizan todas en aquel momento histórico. Como reacción ante estos hechos se endurece el incondicionalismo y se torna más represivo el aparato de fuerza del imperio. La cuestión habrá de tornarse tan grave que Franklin D. Roosevelt —electo presidente en 1932— hace extensivos a Puerto Rico algunos programas del Nuevo Trato.⁸

En el estudio recién citado, el doctor Mathews documenta hasta la saciedad cómo y de qué manera la isla queda envuelta en la ma-

⁸ Véase la obra definitiva sobre este periodo, escrita por el doctor Thomas Mathews y titulada *Puerto Rican Politics and the New Deal*. University of Florida Press, 1969. Resulta también de interés para la comprensión de este periodo el relato autobiográfico del gobernador Rexford Guy Tugwell, nombrado por Roosevelt como procónsul en Puerto Rico en el comienzo de la era de Muñoz Marín. Véase R. G. Tugwell, *The Stricken Land, the Story of Puerto Rico*. Nueva York: Doubleday, 1947. El subtítulo es engañoso. Debía llamarse "The Story of Tugwell".

deja de la política norteamericana tan pronto como la metrópoli hace extensivas a su colonia alguna de su legislación social. Asimismo su libro ilustra cómo la administración de Roosevelt halla en Luis Muñoz Marín el instrumento adecuado para implementar un programa moderado de reformas sociales, pero sin alterar fundamentalmente el sistema colonial vigente. Así los programas de ayuda norteamericana se convierten en una poderosa fuerza política, ya que contribuyen a crear una imagen benévola de la metrópoli al mismo tiempo que remachan aún más nuestra situación de dependencia.

No obstante, los movimientos de protesta de los años treinta ponen en jaque a todo el andamiaje del orden social vigente al plantear, como dos aspectos de un mismo problema, la cuestión de nuestra independencia nacional así como el de nuestra emancipación económica.

Los movimientos más significativos desde esas dos vertientes resultan ser, de una parte, la fundación del Partido Nacionalista de Puerto Rico y la creación de la Confederación General de Trabajadores (CGT) en 1940.

El Partido Nacionalista de Puerto Rico se fundó en 1921. En sus orígenes dicho partido es el portavoz de aquellos sectores de la intelectualidad puertorriqueña que se hallaban profundamente preocupados por el proceso de destrucción a que se hallaba sometida la cultura puertorriqueña. En 1930 sube a la presidencia de dicha agrupación el doctor Pedro Albizu Campos e inmediatamente le da a éste una tónica radical. Concibiendo la independencia de Puerto Rico como el problema central de nuestro país, el Partido Nacionalista toma, bajo la dirección de Albizu Campos, la vanguardia de la lucha antiimperialista en Puerto Rico. En la asamblea del Partido Nacionalista celebrada en el Ateneo Puertorriqueño, el 11 de mayo de 1930, se acordó declarar:

Que es inaplazable la supresión inmediata del coloniaje norteamericano y se compromete a celebrar la convención constituyente que establezca en Puerto Rico el gobierno de una república libre, soberana e independiente, tan pronto reciba el sufragio de las mayorías.

Además quedaba consignado que “bajo el duro yugo del coloniaje norteamericano, de una nación de propietarios, hemos pasado a ser una masa de peones, rica mina económica para la explotación del capital invasor”. Y en su programa económico el Partido Nacionalista expresará lo siguiente:

1) organizará a los obreros para que puedan recabar de los intereses extranjeros o invasores la participación de las ganancias a que tienen derecho, asumiendo su dirección inmediata, poniendo hombres de talla, responsabilidad y patriotismo para dirigirlos; 2) procurará por todos los medios, que el peso fiscal recaiga sobre los no residentes, para destruir el latifundio y el absentismo, y dividir la propiedad inmueble entre el mayor número posible de terratenientes; 3) deberá por todos los medios a su alcance revocar el efecto del cabotaje libre entre Estados Unidos y Puerto Rico, que hoy beneficia exclusivamente al invasor; 4) favorecerá exclusivamente el consumo de los frutos de la tierra y de industrias puertorriqueñas, procurando por todos los medios a que se llegue a satisfacer las necesidades patrias; 5) fomentará la exportación y el establecimiento de la industria de transportación marítima; 6) favorecerá exclusivamente los bancos nativos, y donde no los haya, procurará se organicen; 7) procurará organizar las finanzas de tal forma de respetabilidad bancaria nativa que los depósitos nacionales se hagan sólo en sus bancos, y procurará liberar su país de los empréstitos extranjeros, públicos o privados, para que la agricultura, el comercio y la industria en manos puertorriqueñas puedan resurgir potentes.⁹

La Confederación General de Trabajadores (CGT) será, de otra parte, la vanguardia del movimiento obrero puertorriqueño. Dominado hasta ese momento por el obrerismo reformista de corte norteamericano de su fundador Santiago Iglesias Pantín, el movimiento obrero organizado de Puerto Rico se hallaba —hasta la fundación de la CGT— bajo el signo anexionista. El Partido Socialista, fundado por Iglesias, se une en coalición en 1932 al Partido Republicano, defensor a ultranza de los intereses de la *elite* colonial criolla y del imperialismo norteamericano. La CGT es el primer intento serio de dar al movimiento obrero puertorriqueño una orientación radical y revolucionaria. La huelga, como instrumento de lucha, deja de ser un medio de obtener mejores salarios y condiciones de trabajo y se convierte en una poderosa arma política.

El sindicalismo y el nacionalismo, no obstante, no aciertan a hacer un frente común antiimperialista. Cuando los obreros de la caña se declaran en huelga, en 1934, en claro repudio del liderato contemporizador de Iglesias, éstos solicitan a Albizu Campos y lo nombran su representante. Uno de los participantes en aquel suceso histórico nos deja saber que:

El Partido Nacionalista no disponía de dirigentes —ni de un solo diri-

⁹ Véase Bolívar Pagán. *Historia de los partidos políticos puertorriqueños*, 2 tomos. San Juan. Librería Campos, 1959, t. I.

gente— diestro en organización obrera. En ese momento decisivo la composición social de su liderato pesó como una tragedia sobre las posibilidades del partido y el destino de la patria. Noble, desinteresado, heroico, el liderato nacionalista garantizó a la clase obrera su victoria económica a la huelga. Pero no pudo dar el paso inmediato para consolidar aquella alianza: destronar el liderato de la clase obrera a la Federación Libre organizando una nueva sindical con espíritu patriota... El Partido Nacionalista, operando sobre una verdad innegable, la de la necesidad previa de la independencia como instrumento de justicia social, decía al pueblo la verdad sobre la lucha por la independencia.

Preparándolo seriamente para luchar por conquistarle, no podía llamarse a engaños sobre la naturaleza de la lucha —una lucha a brazo partido, a vida o muerte con el engréido imperialista yanqui. En el calor de la pelea, progresivamente el nacionalismo, enfrascado en la lucha por la independencia, disminuía, además, en su propaganda, el aspecto de la justicia social. Era un *lapsus*, pero un *lapsus* desgraciado.¹⁰

Ésta fue una de las fallas más notorias del movimiento nacionalista en aquel entonces. El movimiento sindical, por otra parte, se desangra en luchas intestinas y se incapacita para presentar un frente unido al enemigo común. Inserto desde su inyección en el papel de socio dependiente del sindicalismo norteamericano capitaneado por Samuel Gompers, éste había nacido bajo los auspicios de la tendencia anexionista y ello no podía sino dejarle su profunda impronta.

Los movimientos de protesta contra el sistema colonial imperante en Puerto Rico durante los años treinta, representarán una toma de conciencia agudizada por la política represiva, dirigida por el imperio norteamericano a través de sus gobernadores coloniales en la isla. El blanco principal de la represión será en aquel momento el Partido Nacionalista, vanguardia por aquel entonces de la lucha por la liberación del pueblo puertorriqueño. Ello se manifestó concretamente a través de la persecución y liquidación física de los líderes del Partido Nacionalista.

Un régimen colonial, como el que estamos describiendo, no podía tolerar un movimiento como el de Albizu Campos, porque éste pretendía ir a la raíz de nuestros problemas. La represión contra los nacionalistas comienza con Gore, pero alcanza su más acabada expresión bajo Winship. El coronel E. Frances Riggs es a la sazón jefe de la policía insular. Las hostilidades comienzan el 24 de oc-

¹⁰ Juan Antonio Corretjer. *La lucha por la independencia de Puerto Rico*. San Juan, P. R. Publicaciones de Unión del Pueblo Pro Constituyente, 1950, pp. 70, 64.

tubre de 1935; día que los nacionalistas han designado como el día de "La Masacre de Río Piedras". En esa ocasión hay un encuentro entre la policía y los nacionalistas a la salida de la Universidad, y resultaron muertos cuatro nacionalistas y un policía insular, contándose cuarenta entre los heridos. Era claro para aquel entonces que el régimen colonial y el binomio Winship-Riggs había decidido —sin duda siguiendo órdenes de Washington— desintegrar mediante la fuerza el ingente Partido Nacionalista.

El 23 de febrero de 1936 dos jóvenes nacionalistas, Hiram Rosado y Elías Beauchamp, ejecutan al coronel Riggs en las calles de San Juan. Llevados al cuartel general de la policía, son asesinados allí villanamente, alegándose luego que habían tratado de escapar. El gobernador Winship toma parte destacada en la persecución de los nacionalistas, ya que dirige personalmente el proceso de acumulación de evidencia contra éstos.¹¹

Como consecuencia de la muerte de Riggs, el senador Millard Tydings presenta en Washington un proyecto —punitivo en la mayoría de sus aspectos— para conceder la independencia a Puerto Rico. Albizu Campos acepta desde luego la independencia, pero rechaza una consulta plebiscitaria al pueblo puertorriqueño sobre el particular, por considerar que un plebiscito dentro de un país intervenido como el nuestro no podrá nunca reflejar la auténtica ansia de libertad de nuestro pueblo. Barceló, luego de exclamar "que venga la independencia aunque nos muramos de hambre", se retracta y opta por parlamentar con Washington. Muñoz Marín hace otro tanto, augurándose ya el rumbo que habrá de tomar durante los próximos años. Es interesante notar el hecho de que la independencia de Puerto Rico —que sólo merecía el desprecio y la negativa rotunda tanto de los líderes del Congreso norteamericano como de los presidentes de la nación norteamericana— cobra mediante la acción de Beauchamp y Rosado una fuerza inusitada ante la opinión nacional e internacional. Más que todas las comisiones enviadas a Washington a lo largo de tres décadas, más que todas las declaraciones y pronunciamientos de todos los políticos que habían perorado sobre el tema en ese periodo, un acto heroico de dos jóvenes puertorriqueños, dispuestos a sacrificarlo todo por la liberación de su patria, pone en jaque al gobierno colonial. Lejos de amilanarse ante el reto, éste responde con un aumento sustancial de su actividad represiva.

El secretario del Interior, Harold Ickes, siguiendo instrucciones al efecto del presidente Roosevelt; toma la decisión pertinente: los

¹¹ Véase al respecto a Thomas G. Mathews. *Puerto Rican Politics and the New Deal*. University of Florida Press, 1960, p. 251.

nacionalistas y Albizu Campos deben ser encarcelados. En consecuencia, éstos son encausados por un gran jurado en la Corte Federal (norteamericana) presidida a la sazón por el juez Cooper. Llevará la acusación de sedición y de “conspirar para derrocar el gobierno de los Estados Unidos por la fuerza y la violencia” el fiscal federal J. Cecil Snyder. Según demuestra el doctor Mathews en el libro recién citado, los cargos contra Albizu Campos tenían un carácter eminentemente político. El Departamento de Justicia estadounidense —que llevaba la voz cantante como parte acusadora— está dispuesto a proceder de acuerdo con el criterio del Departamento del Interior. A pesar del hecho de que dos fiscales adicionales fueron enviados desde Washington para participar en el caso, el primer jurado que entendió en el juicio no pudo ponerse de acuerdo. Se procedió entonces a escoger un nuevo jurado, *compuesto de diez norteamericanos y sólo dos puertorriqueños*. Esta vez sí se logra la convicción y Albizu Campos es sentenciado, conjuntamente con sus compañeros, a sentencias de presidio en la cárcel de Atlanta, Georgia, de hasta 15 años. Alborozado el director de la PRERA, doctor Ernest Gruening, cablegrafió al gobernador Winship expresando que “esos resultados satisfactorios. . . llegarían lejos en la restauración del orden y de la tranquilidad”.¹² Quedaba así al descubierto cómo se administraba la justicia en la colonia cuando alguien amenazaba el orden existente.

El proceso de Albizu Campos, su convicción y su presidio son sólo parte de la represión desatada contra los nacionalistas. El 21 de marzo de 1937 acontece el segundo episodio que muestra al desnudo hasta qué punto llegaría el régimen contra los patriotas. Es el 21 de marzo de 1937, el domingo de Ramos, en Ponce. Los nacionalistas habían recibido un permiso del alcalde de la ciudad para realizar una manifestación pacífica durante ese día. A última hora dicho permiso es revocado. La policía, bajo las órdenes del coronel Orbeta, se movilizó en fuerza con rifles, carabinas y ametralladoras de mano. Unos 150 policías se apostaron al frente del desfile en despliegue de fuerza. Los cadetes —incluyendo mujeres y niños— decidieron seguir adelante con la marcha. Vestían la camisa negra del movimiento los varones, y traje blanco las mujeres. Llegado el momento de marchar, se tocó la Borinqueña, y a una señal de su líder, los nacionalistas comenzaron a marchar, totalmente desarmados. La policía abrió fuego contra ellos, hiriendo a unas cien personas —entre ellos meros observadores— y asesinando a diecinueve. Así se per-

¹² *Ibid.*, pp. 268-69.

petró la masacre de Ponce aquel domingo de Ramos. Años más tarde, el fiscal investigador del suceso, licenciado Rafael V. Pérez Marchand, descubriría en una conferencia, en el Ateneo Puertorriqueño, toda la participación de Winship en el desenlace fatal. De la investigación practicada por la American Civil Liberties Union se desprende que de este acto de brutalidad policiaca, "había sido responsable la policía". Pero Winship, Ickes y Roosevelt permanecieron impertérritos ante la magnitud del hecho. La legislatura colonial dominada por la coalición, declaró a Winship "hijo adoptivo de Puerto Rico" y culpó a los nacionalistas por la masacre mientras que el crimen permaneció impune en lo que concernía a la fuerza policiaca.

Pero la represión desatada contra el Partido Nacionalista es sólo una fase de la política colonial de los Estados Unidos respecto a Puerto Rico. La otra fase es, según ya he señalado, la de los programas de ayuda bajo la égida del nuevo trato de Roosevelt.

Es en ese contexto donde cabe una referencia al Partido Popular Democrático (PPD), fundado bajo la dirección de Luis Muñoz Marín en 1938.

El Partido Popular Democrático es fundado por Luis Muñoz Marín y un grupo de sus seguidores bajo la consigna de "Pan, Tierra y Libertad". El símbolo del partido habrá de ser el jíbaro, el campesino puertorriqueño. La retórica del nuevo partido es la retórica del reformismo. Pero es éste un reformismo que debe darse dentro del contexto del régimen colonial vigente. Las bases del programa del Partido Popular Democrático son la reforma agraria, el fin del absentismo, el mejoramiento de la condición de vida de las clases trabajadoras. Se decide poner a la independencia de Puerto Rico entre paréntesis hasta tanto puedan resolverse los problemas económicos de mayor urgencia para el pueblo puertorriqueño. En esa coyuntura histórica la ayuda económica norteamericana por conducto de programas de distribución de alimentos excedentes, por ejemplo, se convierte en una poderosa arma política en la lucha entre la administración colonial dominada por la oligarquía tradicional y las clases marginadas —como el campesinado y el proletariado rural. El Partido Popular Democrático atraerá también un sector considerable de la ingente burguesía criolla, así como a los intelectuales y estudiantes.

Con el correr del tiempo y luego de su copo electoral en 1944 —que había sido precedido por un precario triunfo en las elecciones de 1940— el PPD se convirtió en el partido más poderoso de la historia de Puerto Rico. No es hasta 1968 cuando el PPD pierde unas elecciones generales en la isla. En este largo periodo histórico el

otrora partido reformista termina creando nuevas formas de dependencia económica, y va abandonando gradual pero sistemáticamente todo su ímpetu renovador. Como indicó en 1965 el doctor Luis Nieves Falcón al analizar el "futuro ideológico" del PPD:

El liderazgo del partido que comenzó como parte viva de la realidad del pueblo perdió contacto con ese mismo pueblo que le dio vida, lo hizo crecer, y lo nutría de capacidad creadora. Sus líderes se encastillaron y prefirieron recibir una visión diluida, estadística, del pueblo a través de los burócratas y los tecnócratas que piensan en esquemas perfectos, *foolproof*, olvidando los elementos humanos. El *average*, el promedio, que se convirtió en la norma y necesidades fundamentales han pasado desapercibidos.¹⁸

(En verdad, puede observarse un paralelo entre este partido y otros partidos en el contexto latinoamericano tales como el APRA y Acción Democrática. Se trata de partidos que en sus orígenes se envuelven en el manto radical, pero que terminan por dar un viraje hacia la derecha una vez que se aproximan al poder.)

El rezago ideológico que aqueja a todo país colonial dejó su impronta sobre nuestra vida colectiva en los años treinta. Si bien es cierto que el Partido Comunista se funda en 1934, éste nunca logra ampliar su base más allá de un pequeño grupo de personas. En ese momento el partido más radical lo es el Partido Nacionalista, partido que antepone la independencia a cualquier otra consideración en materia de reformas sociales. La coalición que detenta el poder colonial de 1932 es una amalgama donde se pretenden reconciliar las teorías elitistas de la oligarquía criolla, con las demandas de los obreros puertorriqueños. Al desaparecer el Partido Liberal —que seguía una línea nacionalista desde una perspectiva reformista— y fundarse sobre sus ruinas el Partido Popular Democrático, éste pretende realizar una síntesis entre el nacionalismo y el reformismo social. El PPD se caracteriza por su ideología pragmática al estilo del liberalismo novotratista imperante para aquel entonces en la metrópoli. Con el correr del tiempo sus dos puntales ideológicos, el novotratismo y reformismo, pasarán a ser cosa del pasado. Pues durante los 28 años en que el PPD detenta el poder en Puerto Rico la tendencia general hacia el abandono de los principios ideológicos que lo prohicieron se va acusando a medida que éste se va consolidando en el poder.

¹⁸ Luis Nieves Falcón. "El futuro ideológico del Partido Popular Democrático", *Revista de Ciencias Sociales*, vol. ix, núm. 3, septiembre, 1965, p. 261.

En verdad la imagen del futuro que predominará en el PPD a partir del 1948 —año en que Teodoro Moscoso asume la jefatura de su programa denominado “Operación Manos a la Obra”, basado en el principio de la exención contributiva para todas las empresas extranjeras establecidas en Puerto Rico por un periodo de hasta 17 años— es la de una forma de “ingeniería social”, donde los problemas fundamentales de la sociedad puertorriqueña podrían resolverse a través de la “administración de las cosas”. Pero para ello era necesario sacar todo elemento controversial de la vida colectiva puertorriqueña, muy particularmente la cuestión referente a su condición política. A eso dirigen sus esfuerzos los dirigentes del PPD, pero sobre todo su líder máximo Luis Muñoz Marín.

Con el encarcelamiento de todo el liderato del Partido Nacionalista la situación puertorriqueña en los años treinta es de tal naturaleza, que el camino se halla expedito para la toma del poder del PPD. En aquel momento de crisis porque atraviesa la isla el PPD logra cristalizar los elementos esenciales de un movimiento reformista que alcanza un considerable apoyo popular.

En 1968 dicho partido es derrotado por un movimiento anexionista, que se nutre precisamente de las fuerzas sociales que el PPD contribuyó a crear durante sus 28 años de gobierno. Sobre todo, la elefantíaca clase media que es secuela del programa de “industrialización por invitación” termina por darle el golpe de gracia a aquellos que la crearon. En consecuencia, hoy el país confronta una situación de polarización entre las fuerzas independentistas y anticolonialistas y los sectores anexionistas y colonialistas. El PPD se halla en franco proceso de deterioro y de decadencia. La generación que le sirvió como su piedra miliar es una en proceso de desaparición física. El nuevo gobierno anexionista ha tendido a llevar hasta sus consecuencias últimas el proceso de entrega precipitada del patrimonio nacional puertorriqueño. Frente a eso se alzan la juventud puertorriqueña así como todas las fuerzas opuestas a la perpetuación del colonialismo en Puerto Rico. Una crisis que va a la raíz del sistema colonial mismo ya se vislumbra en el porvenir. Si los treinta fueron una década crucial en la historia del pueblo de Puerto Rico, los tiempos actuales no prometen ser menos. Del desenlace de esa crisis dependerá esencialmente el destino de Puerto Rico como pueblo.

San Juan de Puerto Rico
Octubre de 1969

INFLUENCIA DE LA CRISIS DEL 29 EN NICARAGUA

Edelberto Torres

El impacto de la crisis mundial iniciada en 1929 afectó a la sociedad nicaragüense en la medida en que su estructura primario-exportadora resintió los efectos de una caída prolongada en los precios de sus productos comerciales. En otros países latinoamericanos, de mayor desarrollo, el impacto tuvo efectos múltiples, paralizando además la producción manufacturera y, con ello, causando estancamiento. No fue ésta la situación provocada en el seno de una sociedad donde la mayor parte de la población, en aquella época, se dedicaba a la agricultura de subsistencia, entendida ésta como una agricultura no comercial de naturaleza familiar. Los efectos de naturaleza económica y social, provocados por la honda depresión del sistema capitalista, sin embargo, no hicieron más que sumarse a la profunda crisis en que el país se encontraba sumido desde hacía casi 15 años, producto directo de la intervención norteamericana primero, y de una Guerra Civil, después. Es por tal razón que la crisis del mercado mundial no hizo sino agudizar los síntomas de estancamiento económico e inestabilidad política, que la dominación norteamericana directa y las pugnas liberoconservadoras, alentadas por aquéllos, habían provocado.

La experiencia del desarrollo económico de Nicaragua es diversa aun en relación con los otros países centroamericanos; en la imposibilidad de reseñar sus causas y de describir sus rasgos más importantes, señalaremos sumariamente el hecho más significativo que es la ausencia de una agricultura comercial de exportación que, desde la segunda mitad del siglo XIX se consolidó en Costa Rica, Guatemala y El Salvador. La situación geográfica del país le atrajo intervenciones extranjeras y guerras civiles que crearon tales condiciones políticas internas, que hicieron imposible la creación de una base productiva importante o la existencia de sectores sociales vigorosos y capaces de encabezar un orden político estable. La ocupación extranjera de 1910 a 1930, interrumpida con breves intervalos, acentuó la ausencia

de condiciones políticas y sociales favorables al desarrollo económico y, consecuentemente, agravó la situación de estancamiento que exhibió la sociedad nicaragüense a finales de la década del 20. Cuando los violentos desequilibrios del comercio mundial golpean la economía nicaragüense, su producción de azúcar, madera y cueros, pero especialmente banano y café, como se indica más adelante, exhibía ya evidentes signos de deterioro.

Es indispensable conocer siquiera los antecedentes inmediatos que condujeron a Nicaragua al estado de postración económica, de inestabilidad política y de un virtual receso de su soberanía,¹ con la intención patriótica de aliviar siquiera al país de la onerosa carga de la intervención extranjera, para lo cual era indispensable evitar que el obstinado entreguista Emiliano Chamorro llegara a la presidencia, el 1º de enero de 1925, los partidos unionista-centroamericano, liberal-nacionalista y una fracción conservadora no chamorrista, se coligaron para llevar a la primera magistratura a un ciudadano que pudiera ser elemento conjuntivo de la mayoría y garantía de su concordia, y de la estabilidad necesaria para el cumplimiento del programa de recuperación nacional. Los dirigentes políticos creyeron encontrar ese hombre en un burgués que gozaba de fortuna y de anonimía política, circunstancia esta última que interpretaron como ajena a las pasiones partidistas, que en Nicaragua han sido más funestas que en cualquier otro país.

El presidente Bartolomé Martínez, agricultor, conservador, sin letras, pero honrado y patriota, dio amplias garantías para que las elecciones fueran libres, y el candidato de "la transacción", que así se llamó al entendimiento de los partidos, triunfó y tomó posesión de la presidencia el 1º de enero de 1925.

Ya en la presidencia, Carlos Solórzano se manifestó más adicto a sus parientes que solidario y consecuente con los dirigentes políticos que lo encumbraron al poder, y uno de aquéllos, jefe de la fortaleza de Tiscapa, que protegía a Managua, la entregó al funesto Emiliano Chamorro el 25 de octubre de ese año. Solórzano, sin ambición política y sin carácter, no sólo se dejó deponer sin chistar palabra, sino que firmó al punto su renuncia.

Era vicepresidente constitucional el médico Juan Bautista Sacasa, apreciable profesional y mejor personaje de salón. El Departamento

¹ A finales de la década del 20 el embajador yanqui era sin duda la autoridad indisputada del país; norteamericano era el jefe de la Guardia Nacional y el director de la Academia Militar; norteamericanos eran el gerente del Banco Nacional, el administrador general de Aduanas, el gerente de los Ferrocarriles y otros muchos altos funcionarios del gobierno "nacional".

de Estado de Washington no reconoció el derecho constitucional de Sacasa a la presidencia, aunque tampoco reconoció a Chamorro, y optó por la determinación más absurda. Sabía que Chamorro era lacayo suyo, que era nada menos que el firmante del tratado canalero Bryan-Chamorro (1914); sin embargo había otro lacayo más acepto, presidente de Nicaragua cuando aquel vitando pacto fue celebrado, Adolfo Díaz, y éste fue sentado en el sillón presidencial, lo que Chamorro aceptó complacido.

Inmediatamente los liberales enarbolaron la bandera de la constitucionalidad y el nombre de Sacasa para lanzarse a la lucha armada. Chamorro fue el general en jefe de las tropas conservadoras y José María Moncada de las liberales. Sacasa inauguró su gobierno en Puerto Cabezas de la costa oriental, mientras Moncada dirigía las operaciones militares. El gobierno de Washington apoyó a Díaz, el Nguyen Van Thieu de entonces, e instruyó al almirante Latimer para que obstaculizara los movimientos de los constitucionalistas en la costa atlántica, e impidiera la ayuda exterior. Un cargamento de armas proporcionado por el presidente de México, Plutarco Elías Calles, fue decomisado casi todo y arrojado al mar.

A pesar de la abundancia de recursos proporcionados por el gobierno de John Calvin Coolidge a Díaz, las tropas de Moncada marcharon de triunfo en triunfo hasta las cercanías de Managua. Díaz estaba perdido, y su protector, decidido a sostenerlo o por lo menos a facilitarle una salida en caballo blanco, nombró a Henry L. Stimson delegado personal suyo, quien llegó a Nicaragua, escoltado en ambos océanos por barcos de guerra y con la orden de desarmar al ejército liberal o destruirlo si se oponía. Logró lo primero sin tener más que una entrevista con Moncada a quien hizo dos propuestas: desarmar el ejército a la fuerza o de grado, y hacerlo presidente de Nicaragua si aceptaba lo primero. Por supuesto que aceptó el desarme y la presidencia conforme con el llamado Pacto del Espino Negro (4 de mayo de 1927), por el árbol a cuya sombra se firmó. Moncada olvidó la constitucionalidad por la cual había conducido a través de la *jungla* al pueblo liberal, que sólo en el combate de Laguna de Perlas ofrendó 1500 vidas a su causa.

Washington cumplió con Moncada, pero no de inmediato; Díaz continuó en la presidencia por todo el resto del año 27 y el 28, y la entregó a Moncada el 1º de enero de 1929, después de las elecciones controladas por un general norteamericano, Mac Coy y numerosos oficiales igualmente yanquis.

Sólo un oficial del ejército constitucionalista se negó a aceptar el

desarme e inició la lucha contra la intervención extranjera. Era Augusto C. Sandino.

Stimpson retiró su persona de Nicaragua, pero dejó encendida la guerra de la parva hueste de Sandino contra el ejército yanqui de ocupación y la constabularia, llamada oficialmente Guardia Nacional, creación norteamericana, inicua, impuesta durante el gobierno de Díaz (diciembre de 1927) como única fuerza militar y de policía del país.

La brega libertaria de Sandino duró seis años, de mayo de 1927 a febrero de 1933, e inmediatamente después de firmar la paz, al salir el último soldado yanqui, empezó a aplicar su pensamiento social organizando cooperativas en un sitio fluvial llamado Wiwilí. Esta labor fue completamente abolida al ser asesinado el 21 de febrero de 1934, por orden del ministro norteamericano Arthur Bliss Lane, sobrino de Henry Lane Wilson, que desempeñó igual cargo en México e igual papel en el asesinato del presidente Francisco I. Madero. Como puede colegirse por las fechas apuntadas, la crisis económica de 1929-34 tuvo su dramático decurso mientras en Nicaragua se llevaba a cabo una guerra a muerte provocada por la torpe e incalificable política de los Estados Unidos.²

La región central de Nicaragua, la más fértil, fue la más castigada por la guerra de liberación nacional; los infantes de marina devastaban la campiña, ametrallaban aldeanos y fusilaban campesinos a la vista de sus mujeres o hijos para obligarlos a informar todo lo que sabían de Sandino. La ganadería y los cultivos de exportación casi se extinguieron; de esa zona salía para Costa Rica un importante flujo de exportación de ganado; pero ese tráfico desapareció y apenas se mantuvo en la parte sur del país (Chontales), más próxima al país comprador.

La zona oriental o Atlántica tiene en su suelo (casi 50 000 kilómetros cuadrados) una imponderable riqueza forestal y en el subsuelo una gran riqueza aurífera cuya cuantía se ignora con exactitud. Sin embargo, la minería ha sido tradicionalmente un renglón importante de producción interna y de exportación, aunque ha estado desde sus inicios en manos de inversionistas norteamericanos. La minería sufrió el impacto de la guerra y la consiguiente pérdida afectó principalmente a sus propietarios extranjeros; la crisis del 29 se sumó ini-

² A dos gobiernos afectó la crisis: el de José María Moncada (1929-32) y Juan Bautista Sacasa (1933-36); que no pudo terminar su periodo por haberlo lanzado del poder su sobrino político Anastasio Somoza, Jefe de la Guardia Nacional, seis meses antes. Moncada era periodista mediocre y militar empírico; Sacasa, médico, pero ambos sin estatura de estadistas. Algo unía a estos dos personajes y los convertía en siameses políticos: la voluptuosa entrega cordial a la política norteamericana.

cialmente a tales efectos, pero fueron de naturaleza transitoria. Sólo los minerales preciosos —especialmente oro— tuvieron un comportamiento distinto del resto de las exportaciones del país, y ya después de 1933 la producción mantuvo un ritmo constante de incremento que dado el estado de postración agrícola, elevó a los metales preciosos al primer lugar en las exportaciones.³ La venta de oro en el exterior ofrece este ritmo:

CUADRO 1

EXPORTACIÓN DE ORO
(en dólares) (cifras absolutas)

1929	1930	1931	1932	1933	1934
434.310	424.763	411.709	382.198	414.554	679.837

FUENTE: *Memorias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público*. Managua, Nicaragua, 1936.

Estas cantidades del valor exportado no significaban para Nicaragua ingresos de consideración, pues minas tales como El Jabalí, Babilonia, La India, La Bonanza y Limón, pertenecían al capital extranjero y apenas causaban un mínimo impuesto al fisco.

Pero donde la crisis hizo sentir más sus estragos fue en la agricultura de exportación y en el complejo urbano que se ubica estrechamente en la zona del Pacífico, y en donde se encuentran las principales ciudades del país —Chinandega, León, Managua, Masaya, Jinotepe, Granada y Rivas. Aunque el café era el primer renglón de exportación nunca llegó a ser más del 10% del total de las ventas centroamericanas; la lucha antiintervencionista y la crisis mundial abatieron la producción cafetalera en más de un 60%, y los niveles de producción anteriores a la crisis sólo pudieron alcanzarse veinticinco años después, en 1950. Sin embargo, las exportaciones del grano nunca volvieron a ocupar su importancia relativa (pese a su aumento en términos absolutos) en la estructura del comercio nicaragüense a causa del apareamiento de nuevos rubros productivos. Deben señalarse, además, los efectos desastrosos, a largo plazo, oca-

³ Véase el cuadro 2, donde aparecen las exportaciones de Nicaragua entre 1926 y 1945 y su composición porcentual. "... después de la devaluación del dólar en 1934 la producción y exportaciones de oro comienzan a aumentar sustancialmente hasta llegar a constituir, en algunos años de la década de los cuarenta, el sesenta por ciento de la exportación total". *Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico: El Desarrollo de Nicaragua*, Naciones Unidas, 1966, p. 10.

sionados en otras tantas líneas de la exportación tradicional del país, tales como el banano, cuero, pieles, madera y azúcar.

Por ello se dice con razón que la crisis fue sobre todo parálisis y debilitamiento del sector externo, y que aunque sus efectos fueron menos drásticos que en Sudamérica, se prolongaron anormalmente por espacio de quince años.⁴ Se afirma, con razón, que entre el fin de la década de 1920 y la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el comercio de exportación no proporcionó a la economía nicaragüense nuevos estímulos de crecimiento. En ese espacio de tiempo, se redujo en un 50% el valor corriente de las exportaciones de madera, se vio la casi total desaparición de las ventas de azúcar y banano, y los niveles que corresponden a cueros y pieles vuelven a alcanzarse —igual que el café— varios lustros después.⁵

CUADRO 2
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRINCIPALES
(en miles de dólares)

	1926	1930	1935	1940	1945
Café	8.000	3.782	3.118	2.094	3.669
Oro	686	425	567	5.758	7.117
Plata (en lingotes)	34	16	39	100	114
Azúcar	876	366	88	—	—
Bananos	1.226	2.239	1.201	446	81
Maderas	1.342	535	140	274	667
<i>Composición porcentual</i>					
Café	62.2	45.5	55.1	21.7	26.8
Oro	5.3	5.1	10.1	59.7	52.0
Plata	.3	.2	.7	1.0	1.8
Azúcar	6.7	4.4	1.6	—	—
Bananos	9.4	26.8	21.2	4.6	.6
Maderas	10.3	6.4	2.5	2.9	4.9

FUENTE: "El desarrollo económico de Nicaragua", *op. cit.*, p. 11, cuadro 2.

Cuando los cosecheros de café aseguraron que el levantamiento de la cosecha y el laboreo para poner el grano en condición de café oro, era incosteable por el bajo precio, el gobierno los favoreció con un aporte de dinero que hiciera posible su formalización con algún margen de ganancia. Los intereses, que consumían el 30% del dinero recibido en préstamo, bajó con la reforma bancaria de Vita, y a los pequeños productores, "los poquiteros", todo se les iba en intereses.⁶

⁴ E. Torres Rivas. *Procesos y estructuras de una sociedad dependiente*, Ed. PLA., Santiago, Chile, 1969, p. 114.

⁵ "El desarrollo económico de Nicaragua..." *op. cit.*, p. 12.

⁶ Vicente Vita. Entrevista en *La Nueva Prensa*. Managua, 27 de noviembre, 1936.

La caída del precio había sido vertical hasta el abismo de 6 dólares el quintal (100 libras), siendo la cosecha promedio de 300 000 quintales.

Como para prestar una cooperación a la calamidad de la guerra y empeorar la crisis económica, la ciudad de Managua fue totalmente destruida el 31 de marzo de 1931 por un terremoto. Era presidente José María Moncada, quien compartió con su sucesor Juan Bautista Sacasa, aquel azote universal. Durante el gobierno de Sacasa la situación se hizo más apremiante. Bajo Moncada ya el país había sufrido un rudo golpe en su vida cultural con la supresión de casi todas las escuelas, presionado por la embajada de Washington que exigió que el dinero destinado a educación, unos 400,000 dólares, se transfiriera a la "pacificación". Durante el gobierno de Sacasa los prestamistas usureros proliferaron y más aún sus víctimas: pequeños propietarios, artesanos, costureras, planchadoras, etcétera.

Los campesinos propietarios, pequeños y medianos, fueron arruinados y convertidos en gleba de los grandes finqueros. La mayor parte de ellos trabajó, después de su extorsión, como braceros sin sueldo y por una ración de comida consistente —como ha vuelto a suceder en la actualidad en muchas fincas— en dos tortillas de maíz, un puñado de frijoles o de arroz o, en caso de munificencia patronal, de ambos elementos.

En otra parte recojo la opinión de que el campesino de subsistencia, no sintió tanto el impacto de la crisis; pero las circunstancias particulares apuntadas —guerra civil, guerra antiimperialista, terremoto, incendio— no podían menos que llevar sus efectos al campo.⁷

Las ventas forzadas por la necesidad y las hipotecas vencidas, favorecieron la extensión de los latifundios existentes y la creación de otros a los que todavía una ley agraria no ha tocado ninguno de sus ángulos.

Otros hechos y circunstancias hicieron más penosa la situación. Al imponer el gobierno de Washington al de Nicaragua la fundación y sostenimiento de la Guardia Nacional, gravó el ya menguado tesoro público con 689,132 córdobas (o dólares). Ese organismo, ejército y policía a un tiempo, ya está dicho, tuvo jefes nicaragüenses en vez de norteamericanos desde enero de 1933, y su primer jefe-director, Anastasio Somoza, se entregó a una carrera desenfrenada por acumular poder y dinero. El asesinato de Sandino le aseguró lo primero para dentro de pocos años, y lo segundo por todos los medios que le permitía la autonomía de que gozaba la Guardia Nacional, lle-

⁷ El crecimiento del latifundismo puede verse en José Córdoba Boniche: *Aspectos fundamentales de la reforma agraria en Nicaragua*. México, 1963.

gando en su frenética ambición hasta causar estragos que aparentemente perjudicaban a la institución que dirigía, pero que en realidad lo favorecían a él política y económicamente. El 1º de agosto de 1933 una explosión destruyó el arsenal de guerra, y el 12 de septiembre se incendió el almacén de abastos de la Guardia Nacional. Somoza recibió, de las firmas vendedoras, el 10% y en muchos casos más, en la compra de todo tipo de materiales para reponer los destruidos.

Ambas erogaciones hechas para restaurar el arsenal de guerra y el depósito de abastos, empobrecieron las cajas de la Tesorería Nacional. El hambre se acentuaba en el pueblo, la mortalidad infantil aumentaba, la prostitución se desarrollaba, y lo que avergüenza considerar es que Somoza, que ya era factor de empobrecimiento nacional, gozaba de popularidad.

El presidente Juan B. Sacasa describió el estado económico de Nicaragua en estos términos:

Jamás como entonces, se había presentado en la vida de la República un cuadro tan sombrío en lo económico. Fuera de las causas generales que han afectado al mundo entero, la crisis económica nuestra se caracterizaba por la restricción del crédito y escasez de producción y de moneda circulante, lo cual deprimía la economía nacional, amenguaba las posibilidades de trabajo y abatía al comercio, reduciendo a términos desesperantes las posibilidades de transacciones de negocios. Las Segovias, extensa y rica región del país, se encontraban pobrísimas, casi aniquiladas por la cruenta guerra que en ellas se había sostenido durante más de cuatro años, haciendo sentir sus desastrosos efectos en toda la República; la agricultura nacional en la más tremenda situación, pues la mayor parte de los agricultores, por la desvalorización mundial de sus productos, se veían en imposibilidad de conservar sus propiedades, sobre las que pesaban hipotecas onerosas, o no les era posible continuar trabajándolas con dinero a alto tipo de interés y a corto plazo; la generalidad de nuestros pequeños propietarios no podían satisfacer ni aun las exigencias ordinarias de la vida; millares de obreros y campesinos carecían de trabajo y el gobierno, por encontrarse en penuria, no podía ofrecerles siquiera el que necesitaban para obtener el sustento de sus hogares; gran número de hombres de espíritu emprendedor y de profesionales no encontraban la oportunidad de poner en ejercicio sus actividades y sus conocimientos; las rentas fiscales venidas muy a menos y reduciéndose cada día más y más; el Presupuesto General de la Nación desequilibrado con un déficit considerable; y una peregrinación constante a la Casa Presidencial en solicitud del empleo salvador o la

ayuda inmediata para aliviar la urgente necesidad. Así encontré la República al hacerme cargo de la presidencia, el 1º de enero de 1933.⁸

Naturalmente que el Banco Nacional de Nicaragua, como gestor y centro de la vida económica, era la antena más sensible a las sacudidas de la crisis. Con la intención de mejorar el metabolismo económico hizo emisiones que alcanzaron un total de 6.925,000 córdobas. * Esas emisiones no podían menos que provocar inflación y facilitar la devuación del córdoba, aconsejada a Sacasa para fundar la Caja Nacional de Crédito Popular, o sea el Monte de Piedad, y vitalizar el Banco Hipotecario. Este banco inyectó alguna energía a la agricultura, la industria y la ganadería. Salvó a muchos propietarios de la pérdida de sus bienes y permitió comer —y eso fue todo— a la mocería trabajadora. El banco se reorganizó con un capital de 3.000,000 de córdobas y una de sus labores fue ayudar a los casahabientes en la reconstrucción de Managua. Importante fue la iniciación de la obra recuperadora de la propiedad del Banco Nacional de Nicaragua y del Ferrocarril Nacional de manos de los banqueros de Wall Street, Brown Brothers y Seligman, y también los esfuerzos desplegados en otros sentidos, que Sacasa enuncia en términos halagüeños, pero que hay que leer como la exposición de buenas intenciones más que como realidades en cuanto a sus efectos positivos:

La nacionalización práctica del Ferrocarril del Pacífico y del Banco Nacional de Nicaragua, las dos columnas principales de la economía nacional; la amplitud que imprimí a la política bancaria de las instituciones de crédito del Estado, la cual se cristalizó en arreglos, en condiciones favorables a los deudores, de las obligaciones abrumadoras que sobre ellos pesaban, y en facilidades para obtener créditos a corto y a largo plazo y bajo tipo de interés; la reorganización, con bases firmes del Banco Hipotecario, que vino a salvar la agricultura nacional y con ella a muchos agricultores que se encontraban en situación desesperante; el aumento ordenado y prudente de la circulación monetaria, sin llegar a producir los efectos de una inflación; la creación de la Caja Nacional de Crédito Popular o Monte de Piedad, que hoy funciona en varias cabeceras departamentales y que hace extensivos los beneficios del crédito a las clases proletarias, que son las que mayormente recurren a los préstamos sobre prendas, para remediar sus necesidades perentorias; la Ley contra la Usura, que ha estimulado las actividades económicas de los nicaragüenses en todos los órdenes, que ha destruido la

⁸ Juan B. Sacasa. *Cómo y por qué caí del poder*. León, Nicaragua, 1946.

* Córdoba: unidad monetaria nicaragüense, cuyos tipos de cambio oficial y libre, equivalía respectivamente, en 1936, a 1.11 y 1.84 por cada dólar de los Estados Unidos.

influencia desfavorable que la usura ejercía sobre ellas, que ha salvado de la ruina a muchos propietarios y ha llevado la tranquilidad a muchos hogares; la Ley de Habilitaciones que acabó con las dificultades con que tropezaban nuestros agricultores e industriales para obtener el dinero necesario al mantenimiento y producción de sus empresas; la Ley de Conciliación, por cuyas prevenciones los deudores que ya habían perdido toda esperanza de salvar su propiedad de las consecuencias de una ejecución judicial, han encontrado en ella la puerta de salvación y el medio de continuar siendo factores de producción nacional; y la reducción al cincuenta por ciento de la tarifa de los ferrocarriles para los fletes de muchos productos de exportación y el azúcar y el jabón de producción nacional, para el consumo de la Costa Atlántica, obras que quedarán rindiendo beneficios al pueblo nicaragüense y que, junto con las otras de progreso que, dentro de la más estrecha situación económica realizó mi administración en casi todos los departamentos de la República, atestiguan mi vivo interés y mis afanes por el bienestar nacional.⁹

Fueron importantes, en aquella situación de grave postración del sector externo, las medidas tomadas por el Banco Nacional de Nicaragua, dirigido por el economista Vicente Vita; se recurrió a una serie de devaluaciones sucesivas en 1934, 1937 y 1938, que arrastraron el valor-cambio del córdoba de su antigua paridad con el dólar al nuevo tipo de 1 a 5. "Esta política contuvo en parte la contracción del sector exportador —alrededor del cual ha girado tradicionalmente la economía nicaragüense— al conducir a una alteración interna de costos y precios",¹⁰ con esa medida se favoreció directamente a la oligarquía cafetalera y a todo el grupo social exportador, creándose artificialmente una alteración de costos y precios en su beneficio y perjudicando a la masa popular consumidora. Sin embargo, algunos excedentes derivados de tal política permitieron recrear el casi extinto Banco Hipotecario y el Monte de Piedad. El primero de ellos junto a la política flexible del Banco Nacional facilitaron con créditos y moratorias la difícil situación de los finqueros grandes y medianos y el Monte de Piedad alivió a millares de víctimas del agiotismo privado.

Pero el flujo de la crisis llegaba hasta los meandros más remotos de la vida económica; la parálisis del comercio exterior redujo considerablemente la captación de impuestos, y las rentas del Estado no alcanzaban a cubrir los gastos públicos como el sueldo de la buro-

⁹ J. B. Sacasa, *op. cit.*

¹⁰ "El desarrollo económico de Nicaragua", *op. cit.*, p. 12.

cracia, especialmente al del magisterio; para evitar la bancarrota se procedió al reajuste del Presupuesto General y a la reducción de las pocas prestaciones públicas que existían, como el servicio hospitalario, único relativo a salubridad, pues el otro que había era el filantrópico de la Institución Rockefeller que se ocupaba de la parasitosis intestinal y de hacer préstamos bancarios a largo plazo y bajo interés.

La producción descendía en cada estación y los precios también, y lo único que aumentaba era el déficit de la balanza de pagos y los intereses de la deuda exterior que se acumulaban. El panorama del comercio exterior era éste:

CUADRO 3

COMERCIO EXTERIOR DE NICARAGUA
(en córdobas)

Años	Importaciones Valor	Exportaciones Valor
1929	11.797,440	C\$ 10.872,526
1930	8.172,360	C\$ 8.343,358
1931	6.015,481	C\$ 6.575,058
1932	3.479,878	C\$ 4.541,597
1933	3.814,261	C\$ 4.862,496
1934	4.610,130	C\$ 5.230,236

FUENTE: *Memoria de Hacienda y Crédito Público*, 1936-37.

¿Y la moneda circulante?: pues era sencillamente insuficiente y prestaba su contribución a la carestía, la escasez y el empobrecimiento general. Una emisión de 1.500,000 córdobas elevó el monto a 3.459,822, garantizando al Banco Nacional con varias rentas internas (1933). El presidente Sacasa dijo con regocijo, cuando la crisis amainaba, pero estando en Nicaragua todavía intensa, que:

El respaldo que garantiza nuestra circulación monetaria es amplio, cierto y sano, y cuenta, además del valor intrínseco de nuestra moneda metálica, que asciende a \$ 219,763.77 dólares, con el valor representado por veintitrés mil ciento cincuentisiete onzas de oro fino, diecisiete mil ochocientos treinticuatro onzas de plata y títulos de buena calidad por la suma de \$ 896,762.61. Los depósitos de oro y plata metálicos siguen en aumento cada día, gracias a las compras del Banco Nacional, destinadas a fortalecer su fondo de cambio; en otras palabras, a reafirmar la solvencia de nuestra moneda.¹¹

¹¹ Mensaje presidencial de 15 de diciembre de 1935, al Congreso Nacional. Managua, Nicaragua.

Cuando él recibió la presidencia, la deuda nacional se descomponía así:

Bonos de 1909:

Feb. 29, 1932,
Libras esterlinas 490,280 a \$ 4.8665 C\$ 2.385,947.62

Feb. 28, 1933,
Libras esterlinas 487,780 a \$ 4.8665

Bonos Aduaneros Garantizados de 1918 1.187,750.00

Total de la deuda garantizada C\$ 3.573,697.62

Cálculo de deudas y reclamaciones sujetas a revisión y fallo por la Comisión de Reclamaciones C\$ 18.000,000.00

Total de la deuda pública C\$ 21.573,697.62

FUENTE: J. B. Sacasa. "Estado de la deuda pública al comienzo de mi administración, 1º de enero de 1933", op. cit.

Según el designio presidencial de Sacasa, el plan de resurgimiento económico debía constar de medidas que condujeran al rápido aumento de la producción exportable y al conveniente desarrollo de los artículos de consumo interno; el abaratamiento de las tarifas de transporte interior para los productos de exportación; estímulos a la industria minera y la manufactura que desplazara artículos que el país importaba, para evitar la salida de valores necesarios al incremento de la vida económica nacional. El presidente confiaba mucho en las luces y ayuda práctica que resultarían de la Conferencia de Montevideo, figurándose con ingenuidad que los Estados Unidos pensaban con algún comino de sinceridad en el bienestar de la América Latina.

La ley de habilitaciones permitió a los agricultores e industriales recibir anticipos de dinero para financiar sus cosechas y productos en condiciones relativamente favorables. Por la Ley de Usura se fijó en el 9% anual el interés sobre el dinero a mutuo y sobre cantidades pequeñas el 2% anual.

Existía desde los peores días del intervencionismo banquerista una Comisión Mixta de Reclamaciones para atender las peticiones de los que sufrieron perjuicios en la guerra civil y por otras causas. La Junta Directiva del Banco Nacional de Nicaragua hizo un préstamo al gobierno por 900,000 córdobas, y éste a su vez aumentó en un 12.5 el aforo aduanero para garantizar el pago de la deuda y, fatalmente, la operación repercutió en los precios de todas las mercaderías.

Hay que reconocer que las medidas adoptadas en algún grado paliaban la pavorosa, el Banco Nacional, ante el umbral de la bancarrota, devolvió a muchos agricultores y a otros propietarios, las fincas rurales y urbanas que ya habían pasado a su haber o que les administraba.

La devaluación equivalió, según dicho criterio, a una apelación a la realidad económica, que recuerda, para bien de todos, que la deuda es una función de la producción de que depende, y no del oro que sólo debe servir de comparación. Es lo que hizo Roosevelt en los Estados Unidos cuando partió el dólar en dos mitades, devaluándolo en un 41% de su valor. Francia hizo lo mismo con todo y que su moneda, el franco, era barata y estaba ya deprimida. Inglaterra hizo lo mismo, y Nicaragua no hacía una locura ni un disparate haciendo lo que hacían esas grandes potencias económicas, cuando se lo pedía como única solución el grave problema que se había planteado con la crisis favorecedora de la usura, única usufructuaria de la depresión de los valores. El remedio en tales momentos no era otro que rebajar la moneda y así se hizo, salvando a muchos como el Banco Hipotecario, que pudo reinstalarse al amparo salvador de aquella medida.

Vita dinamizó el banco y, como un periodista dijo, de un banco judío hizo un banco cristiano. Un banco, decía aquél, es una obra humana y debe llenar fines humanos. Si un pueblo establece un banco es para vivir de él y no para que el banco viva del pueblo. La moneda no puede permanecer almacenada, debe ir a manos de los que la hagan producir para que se ponga en movimiento. El banco era dueño de innumerables haciendas, el termómetro de la institución señalaba grandes ganancias que halagaban a los directores extranjeros, pero no les importaba el país. El júbilo público fue unánime cuando fueron devueltas por el banco las propiedades que retenía y más aún cuando a sus propietarios les dio dinero para ponerlos en condiciones de trabajar y, por lo mismo, de poder cancelar sus deudas.

Atendiendo las sugerencias del gerente, la Directiva del Banco con sede en Nueva York, autorizó el retiro de sumas de la reserva con el fin de hacer préstamos a los agricultores. El resultado fue sorprendente porque el agro tuvo un alivio y el banco una ganancia de 600,000 córdabas. Existía la falta de equidad consistente en que a medida que el préstamo era menor la tasa de interés era mayor y así "todo se iba en intereses".

Una pesadilla permanente, anterior, coetánea y posterior a la crisis, angustiaba al mísero erario público. Era la deuda externa de diversa procedencia en cuanto a país y tiempo. Una antigua deuda inglesa

—6.000,000— había sido traspasada a los banqueros de Nueva York, los Brown y los Seligman; un crédito individual de un tal Emery, que de 10,000 dólares creció hasta más de 400,000 por el artificio del tiempo, los intereses y más que todo por los manejos de los banqueros; los varios empréstitos negociados con estos piratas de la banca, hacían un monto de 21.573,697.62 córdobas.¹² Por intereses rezagados y comisión de los banqueros se abonaron a éstos y a Emery 443,461.05 ese año.

Ya sabemos que todas las rentas estaban controladas por agentes de los banqueros que en toda operación se quedaban con la parte del león, y no tenían la más insignificante preocupación por el mantenimiento, ni mucho menos la mejora, del aspecto material de los muebles, vapores y ferrocarriles. El deterioro era progresivo, naturalmente, y el día de su recuperación por el Estado estaría en condición de chatarra.

Los ingresos nacionales durante los años críticos ofrecen estas cifras:

CUADRO 4

INGRESO PÚBLICO EN NICARAGUA
(córdobas — cifras absolutas)

1929	5.967,746.57
1930	5.852,022.51
1931	5.392,332.58
1932	4.665,592.22
1933	3.795,666.44
1934	4.213,997.89

FUENTE: *Memorias de Hacienda* de los respectivos años. Managua, Nicaragua.

En 1920-28 el ingreso medio total había sido de 20 millones, de manera que la caída de la economía fue vertical, vertiginosa, sorprendente y espantosa.

Por todo lo dicho se comprende que se haya abierto un paréntesis de estancamiento económico-social con fuertes efectos en el régimen político, que era rígido, como sostenido por la intervención extranjera y la monolítica cohesión de la oligarquía. Esto impidió que ni la conjugación de la crisis ni la resistencia armada de Sandino a la intervención, tuviesen un corolario de movimiento tendiente a modificar la estructura social.

La crisis no tuvo su término en Nicaragua, en 1934:

¹² *Memoria del recaudador de aduanas, 1932.* Managua, Nicaragua.

En el periodo comprendido entre 1930 y 1945, en general, no aumentó ni la capacidad productiva interna ni se diversificó la exportación y los precios del café sufrieron durante los años 30 el descenso más violento y persistente de toda su historia. . . . En Nicaragua los niveles de producción del café del quinquenio 1921-25 no volvieron a alcanzarse hasta treinta años más tarde.¹³

Por ello, las repercusiones de la gran bancarrota del capitalismo en 1929-33 fueron agudas en el país, especialmente por el descenso en el valor unitario de las exportaciones; júzguese que el precio del kilo de café exportado bajó de 46 centavos en 1929 a 15 centavos en 1934. Como consecuencia de tal descenso, el recaudador general de aduanas de Nicaragua indica que:

No hay buenas perspectivas de algún aumento considerable en la exportación de productos nicaragüenses, debido a los precios extremadamente bajos y la excesiva producción de similares productos en otros países y la falta de poder adquisitivo de otras naciones. Las indicaciones son de que Nicaragua está volviendo a las condiciones anteriores de la guerra europea (N. del A.: se refiere a la Primera Guerra Mundial) de bajos salarios, bajo costo de vida y bajo precio de los productos exportables.

En el aspecto social al cual se acaba de aludir, apenas puede señalarse que:

Algunos sectores campesinos de la zona noroccidental acicateada en parte por el desempleo y la miseria provocados en 1930, prestaron apoyo activo al movimiento guerrillero de Sandino; aunque iniciada por motivos distintos, aquélla confluyó hacia reivindicaciones de naturaleza agraria. El descontento en las zonas rurales se manifestó en demanda de tierras, cuya oferta por parte del gobierno central fue uno de los medios que facilitaron la pacificación del país.¹⁴

La historia de la depresión, la historia política y las relaciones internacionales de Nicaragua, están tan íntimamente ligadas a los Estados Unidos, a su intervención arrolladora y absorbente, que para acabar de comprenderla es preciso ocuparnos de ella de manera particular, entrando de paso en otras consideraciones.

Al concluir el año de 1929, el país debía a los banqueros de los

¹³ Edelberto Torres Rivas, *op. cit.*

¹⁴ Edelberto Torres Rivas, *op. cit.*, p. 81.

Estados Unidos, según informes de las Naciones Unidas, 2.9 millones de dólares por concepto de deuda pública externa a largo plazo.¹⁵

En el renglón de inversiones directas había 13 millones de dólares, de los que más del 50% estaba aplicado a la agricultura y un 22.3% (2.9 millones) correspondía a la fundición de metales y a la minería.¹⁶

El dato de la inversión directa de los Estados Unidos en Nicaragua en el año de 1929, es muy revelador en cuanto al estricto dominio que aquéllos ejercían sobre esta última, en virtud de que, de acuerdo con el tipo de cambio oficial y libre del córdoba con respecto al dólar en 1936, los 13 millones de dólares de referencia representaban, en forma respectiva, el 42% y el 69.7% del total invertido.

Destacaba, por la importancia económica que tenía entonces, la Standard Fruit and Steamship Corporation, rival en ocasiones de la United Fruit Company, en la explotación del plátano centroamericano.

A juzgar por los informes anteriores, el capital estadounidense no fue, en ningún momento, un elemento que propiciara la industrialización de Nicaragua, ya que, de hecho, sólo se ocupó en saquear los recursos naturales de este último, en beneficio de los monopolios privados que ya desde entonces dominaban la actividad política, económica y social de los Estados Unidos.

Con un sistema de relaciones económicas coloniales, presidiendo el conjunto de la vida total del país —excepción hecha de Sandino y sus guerrilleros—, la economía de Nicaragua ofrecía un panorama desolador de miseria.

El soviético N. Larin caracteriza ese estado de cosas en la siguiente forma:

Como resultado del saqueo que los monopolios norteamericanos realizaban en el país, la situación de los trabajadores nicaragüenses empeoraba cada vez más. Mientras el mundo capitalista vivía en el auge de la posguerra, el 90% de la población de Nicaragua pasaba hambre. La gran mayoría de los niños nicaragüenses no recibía ninguna asistencia médica. Más del 50% de los niños moría sin alcanzar la edad de 9 años. Las tres cuartas partes de la población del país eran analfabetas. Hambre, miseria, múltiples privaciones del pueblo nicaragüense: he ahí los frutos del dominio de los monopolios norteamericanos.

¹⁵ Véase al respecto el cuadro 23 del estudio *El financiamiento externo de América Latina*. Naciones Unidas, p. 27. Nueva York, 1964.

¹⁶ Consúltese sobre el particular, *Las inversiones extranjeras en América Latina*. Naciones Unidas, p. 134. Nueva York, 1955.

El bajo nivel del desarrollo económico y cultural, la completa dependencia de los Estados Unidos, imprimieron su huella también en la vida política de Nicaragua. La clase obrera del país, poco numerosa y dispersa en las pequeñas empresas de la industria extractiva, no poseía experiencia de lucha de clases y se encontraba bajo nivel del desarrollo económico y cultural, la completa dependencia de los Estados Unidos, imprimieron su huella también en la vida política de Nicaragua. La clase obrera del país, poco numerosa y dispersa en las pequeñas empresas de la industria extractiva, no poseía experiencia de lucha de clases y se encontraba bajo la influencia de la ideología burguesa. Su conciencia revolucionaria apenas se estaba gestando. No existía el partido político revolucionario del proletariado, capaz de dirigir la lucha del pueblo por la libertad, la democracia y la independencia. Entre los trabajadores de Nicaragua la clase más numerosa —el campesinado— era analfabeta casi en su totalidad y se encontraba bajo la influencia de los latifundistas y los acaparadores de productos agrícolas. Las múltiples arbitrariedades policíacas en el campo, completaban el cuadro de injusticia política y económica en que vivía la población campesina. En el poder se encontraban los representantes más reaccionarios de los grandes latifundistas y de la burguesía, ligados estrechamente a los monopolios norteamericanos. Ellos actuaban en alianza con el clero y con la oficialidad reaccionaria, y tenían su propia organización, el Partido Conservador.¹⁷

Se llama la atención al hecho de que el examen de la situación económica del país en los años que antecedieron y reflejaron la crisis mundial del capitalismo, acusa, a juzgar por la información disponible, la ausencia total o la imprecisión de las cuentas nacionales. La presencia en el país de funcionarios estadounidenses versados en cuestiones económicas, reduce, aunque no elimina del todo, la posibilidad de que las cuentas nacionales no hayan podido ser calculadas. Por otra parte, la debilidad de la economía mercante y el predominio de una economía natural ha influido, de manera importante quizás, en la irregularidad observada.

La característica fundamental de esa producción mercantil encaminada a satisfacer la demanda de los mercados extranjeros —en primer lugar el estadounidense, y en segundo término el francés—, radicaba en la existencia de la propiedad privada de los objetos y medios de trabajo y la consecuente explotación del trabajador asalariado. Es decir, era un régimen económico-mercantil de tipo capi-

¹⁷ N. Larín. "Sandino y la lucha liberadora del pueblo de Nicaragua contra la intervención armada de los Estados Unidos (1929-1933)". *Revista Historia y Sociedad*, núm. 4, invierno de 1965, pp. 69-70. México.

talista, que comenzaba a levantarse, en el orden interno, frente a una economía natural de autoconsumo, en la que el bajo nivel de acumulación de los medios productivos y la gran escasez de comunicaciones y transportes imposibilitaba al país, entre otras causas, para desarrollarse por la manida senda capitalista.¹⁸

En efecto, según datos proporcionados por el ya citado recaudador general de aduanas de Nicaragua —de nacionalidad norteamericana— de aquella época, en su *Memoria* correspondiente al año de 1934, se estima que la inversión pasó, en el lapso 1915-1921, de 24.2 millones de córdobas, a 40 millones, lo que equivale a señalar que hubo un incremento promedio por año de 2.6 millones en forma aproximada.

A partir de 1921 y hasta 1929, se observa toda una serie de altibajos que terminan cuando, en 1930, el valor del capital invertido alcanzó los 43.8 millones, lo cual quiere decir que, de 1921 a 1930, hubo un aumento medio anual de tan sólo 400 mil córdobas, inferior, a todas luces, al espacio de tiempo precedente, mismo que, si bien abarcó solamente seis años contra nueve del más reciente, resultó más importante en lo referente al desarrollo capitalista.

Es fácil explicar esa reducción operada en la acumulación del capital, conociendo que, en los primeros seis años de los quince considerados en los dos párrafos anteriores, la situación interna de Nicaragua fue de relativa paz, perturbada únicamente por los desmanes cometidos por los infantes de marina de los Estados Unidos, acantonados en el país.¹⁹

El reverso de esa situación se produjo en los nueve años siguientes, en virtud de haberse roto el orden constitucional por el golpe de cuartel que Emiliano Chamorro llevó a cabo en contra de Carlos Solórzano, presidente de la República legalmente electo, como quedó anotado al principio. La subsiguiente lucha popular en pro de los acatamientos constitucionales y la ulterior epopeya de Sandino, el General de Hombres Libres, en contra de la ocupación militar yanqui, pueden muy bien explicar, en un plano antiimperialista y de lucha de clases, esa contracción registrada en el proceso de capitalización nacional.

Por otra parte, la acumulación capitalista en Nicaragua acusó, en ese tiempo, una evidente discriminación territorial del país, ya que, a nivel departamental, Managua, Granada, Zelaya, León, Carazo y

¹⁸ Carlos José Rodríguez. *La crisis económica de 1929-33 y la economía nicaragüense* (inédito).

¹⁹ Se refiere a la primera larga ocupación militar de 1912-1925.

Rivas, representaron en promedio, el 80.4% del total invertido, habiéndole correspondido a cada uno de ellos, los siguientes porcentos:

<i>Departamentos</i>	<i>%</i>
Managua	26.2
Granada	18.9
Zelaya	10.0
León	9.3
Carazo	9.0
Matagalpa	7.0
Masaya	4.2
Rivas	4.1
Chinandega	3.2
Chontales	3.0
Estelí	2.1
Jinotega	1.7
Nueva Segovia	0.9

FUENTE: *Memoria del recaudador general de aduanas*. Managua, 1934.

A nivel zonal, a la región del Pacífico, que comprendía a los departamentos de Managua, Granada, León, Carazo, Masaya, Rivas y Chinandega —más del 50% del número de departamentos, pero mucho menos de la mitad en cuanto a extensión territorial del país— le correspondió el primer lugar: 74.9% de la inversión promedio total, siguiéndole la zona Centro-Norte, compuesta por Matagalpa, Chontales, Estelí, Jinotega y Nueva Segovia, con el 14.7% y, por último, la Costa Atlántica con su único departamento: el de Zelaya, con el 45.5% de la superficie nacional de Nicaragua, representaba apenas, en aquellos años —1932 a 1934—, el 10% de la inversión total.

Corroborando ese bajo nivel de capitalización nacional, estuvieron las importaciones del país, mismas que, procediendo en lo fundamental de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, estuvieron representadas básicamente en el lapso 1925-1934, por bienes de consumo inmediato y duradero. En orden a su importancia monetaria, esas mercancías fueron: manufacturas de algodón y de hierro y acero, harina, productos químicos y farmacéuticos, pieles y sus manufacturas, manufacturas de seda y de fibras vegetales, licores, cerveza, vinos y otras bebidas, legumbres, gasolina, manufacturas de lana, papel y sus manufacturas, petróleo refinado y carnes y sus productos.

Como puede verse, ninguna de estas mercancías corresponde a bienes de producción, lo cual revela escasa acumulación del capital en dicho periodo.

El otro factor que imposibilitaba el desarrollo capitalista del país, era el aislamiento en que vivían las diversas zonas del mismo, y que anulaba cualquier intento de creación de un mercado interno bien integrado.

Según el Estudio Económico de la América Latina, de Naciones Unidas, resulta que, en 1930, en Nicaragua había tan solo 265.3 km de vía férrea, lo que equivalía a 557.5 km² de territorio por cada kilómetro de vía. Cabe señalar que era la región del Pacífico la única favorecida en este sentido, por lo que puede afirmarse que reunía en esa época, más que ninguna otra zona, las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de un mercado interno capitalista.

En cuanto al renglón de carreteras se ignora cuántos kilómetros estaban construidos en las décadas 20 y 30 del presente siglo, pero para darse una idea del atraso que entonces existía, basta con señalar que, en 1947, había un kilómetro de carretera por cada 166.2 km² de superficie.

Los medios de comunicación natural: ríos, lagos y litorales del Pacífico y el Atlántico no eran aprovechados en lo general, por lo que el cuadro de retraso en ese sentido era casi absoluto.

La pérdida de la capacidad de compra nacional se reflejó en las finanzas del Estado, que se vio obligado a suspender, en 1932, el trabajo preliminar de la carretera al Atlántico, por falta de fondos.²⁰

Se aceleró, en esos cuatro primeros años de la década de los 30, la descapitalización del país. En primer lugar, la inversión nacional pasó de 43.8 millones de córdobas en 1930, a 34.1 millones en 1934. El capital estadounidense invertido en forma directa en el territorio nacional, descendió de 13 millones de dólares en 1929 a 5 millones en 1936. Las importaciones —que se sostuvieron a lo largo del periodo 1930-34 en condiciones de notoria inferioridad con respecto a las exportaciones— no aportaron nada nuevo en su estructura y, por último, la deuda pública externa a largo plazo, que hacia 1929, según se manifestó, ascendía a 2.9 millones de dólares, llegó a desaparecer en 1935, en virtud de que, de conformidad con las cifras de las Naciones Unidas, Nicaragua, a diferencia de sus hermanos latinoamericanos, no suspendió el servicio de dicha deuda en los años de la crisis mundial.

Esta nota lisonjera se explica por la circunstancia de que, en virtud de la consolidación de la deuda externa, el acreedor único estaba en Wall Street y sus agentes atendieron ante todo la amortización

²⁰ Es la carretera que debía unir el centro económico principal del litoral atlántico (Rama y Bluefields) con el del Pacífico, y que en 60 años no fue posible construir; actualmente está terminada.

del capital y pago de los intereses. Pero entiéndase que eso no significó la liberación económica del país, ya que nuevas cuentas fueron abiertas dentro de la nueva política que con el nombre de *new deal* sólo barnizó con esas palabras los mismos procedimientos expoliatorios. El Plan Marshall filtró sus erogaciones confabuladamente piadosas, en particular las que llevaban el encabezado de "punto cuarto" relativas a fundaciones de tipo educativo, las cuales dieron principio al imperialismo cultural. Y se fundó en Managua la Biblioteca Americana; en las márgenes del Río Segovia funcionó sin resultado un plan piloto, de tipo educativo; y la Universidad recibió préstamos de dinero y obsequio de libros.

Toda la política de los Estados Unidos en Nicaragua tiene como trasfondo el dominio de la ruta canalera. La rapiña de los banqueros de Wall Street, que aparentemente no tiene atinencia con aquel interés oficial del gobierno de Washington, la tiene, sin embargo, muy íntima, como que los tres millones de dólares de indemnización por el tratado de canal que debió recibir Nicaragua, ellos, los banqueros, se los apropiaron.

La configuración política y económica de la Nicaragua actual es el eslabón histórico de la cadena de errores de los partidos liberal y conservador y de la política intervencionista de los Estados Unidos.

Los dos partidos han actuado desde los días que siguieron a la independencia con una empeñosa rivalidad por arruinar a su país, con apenas un paréntesis de treinta años —1860-1893— en que Nicaragua saboreó gobiernos honestos y progresistas de "burgueses conservadores".²¹ Desde el último de esos años el país ha seguido una carrera vertiginosa en un declive violento cuyas etapas son la dictadura de José Santos Zelaya —17 años, de 1910 a 1927—, el segundo régimen liberal, entreguista —8 años, de 1927 a 1936— y como corolario lógico del proceso de descomposición los 36 años del gobierno dinástico fundado por Anastasio Somoza.

Las clases sociales se presentan con los rasgos generalmente comunes a los pueblos latinoamericanos de igual formación histórica, que son aquellos en que el conquistador español encontró pueblos aborígenes más numerosos que no logró aniquilar. En Nicaragua el diezmo de vidas fue tremendo y sustituido por el elemento negro, de donde resultó la abundante pigmentación de su población actual. Pequeños núcleos de población indígena más o menos puras se en-

²¹ Se refiere a los presidentes conservadores de la segunda mitad del siglo pasado, que introdujeron muchos progresos de la época: ferrocarriles, centros docentes, telégrafos, etcétera, con recursos nacionales. No puede decirse lo mismo de sus hijos, empedernidos adictos al imperialismo.

cuentran en el litoral del Pacífico y otros en el del Atlántico. En términos de relativa aproximación, los grupos étnicos pueden representarse por los porcentajes siguientes: blancos, 15%; negros, 5% mestizos (hispano-indígena, negro-indígena y mulatos), 80%.

Reduciendo a cifras la población, encontramos que el 60% es rural (1.180.000 habitantes) y el 40%, urbana (720,000 habitantes). La propiedad de que dispone esa población es tan desigual que las pequeñas fincas (menos de 7 hectáreas) ocupan el 3.3% de la tierra laborable, en tanto que las fincas de más de 140 hectáreas, que apenas abarcan el 3% del total de fincas, comprenden el 55% de aquella tierra.²² Según un estudio muy acucioso, el 42% de la superficie cultivada de Nicaragua es propiedad del 1.4% de la población, y el 35% de campesinos propietarios apenas dispone del 2.3% de dicha extensión.²³

Económicamente Nicaragua está expoliada internamente por dos sectores oligárquicos, el uno que detenta el poder y el capital, a cuya cabeza está el grupo Somoza, y el otro, en su mayoría compuesta de terratenientes y comerciantes opositores, que pertenecen a la casta de herederos de criollos coloniales infiltrados de algunos elementos extranjeros. De ahí los apellidos Somoza, Chamorro, Cuadra, Sacasa, Benard, Montealegre, Lacayo, Argüello, Pastora, Pellas, Mántica, Molina, Gasteazoro, Venerio, Deshon, Holmann... más firmas yanquis como Falcon Bridge, Catling y Co., Magnavox Co., Segovian Lumber Co., American Rubber Co., Book, Fisher, Well Bowes Inc., y varias subsidiarias de la gigantesca United Fruit Co.

Pero tantos explotadores no significan la labranza total del suelo. Según la FAO, de 236,790 hectáreas supervisadas, sólo el 51% estaban cultivadas, y el 49% ociosas, dan idea de lo que pasa en el resto del territorio laborable.

Las compañías extranjeras están dejando el subsuelo empobrecido de metales preciosos y el suelo sin bosques, ayudados por la erosión en su obra esterilizadora.

El salario de los trabajadores del campo, el de los que lo devengan, es de 6 córdobas (0.84 dólar) sin la tradicional ración de tortillas, frijol y arroz. Hay que subrayar que existen fincas en las que el trabajador no recibe salario alguno, sino la ración de alimento y permiso para sembrar algo en una pequeña parcela.

Como se ve por lo dicho y se colige de ello lo demás, la economía

²² Naciones Unidas. "El desarrollo económico de Nicaragua". *Op. cit.*

²³ Departamento de Estudios económicos del Banco de Comercio Exterior de México, S. A., 1967.

de Nicaragua es una estructura estrangulada por intereses internos y externos, y es terreno en que germina ya la rebeldía en forma violenta.

La población en edad escolar es de 327,228 niños (7 y 15 años de edad) de los cuales los inscritos en las 2,300 escuelas son 208,925 y quedan sin ninguna atención educativa 118,303 niños, y como del total de escuelas 1,563 son de un solo grado, sus alumnos fatalmente se incorporan pronto al antro del analfabetismo. Éste es el 65% de la población total, y son muchas las aldeas en que el 100% de sus habitantes son analfabetos.²⁴

De la totalidad de niños inscritos en las escuelas primarias sólo 9,033 aprobaron el 6º grado en 1966, es decir el 11%. Los graduados universitarios fueron 165 en todas las carreras. El privilegio que es la educación en Nicaragua hiere con violencia la dignidad humana.

El panorama cultural no es tan sombrío a pesar de estar lejos de ser luminoso. Es que la burguesía nicaragüense, conservadora —y la liberal que se ha asimilado a ella—, apoyó decididamente a la Compañía de Jesús y a otras órdenes religiosas, y la enseñanza humanística en que es especialista, le dio opimos resultados. Del Colegio Centroamérica del Corazón de Jesús surgió un grupo de hombres de letras que en prosa y en verso han hecho trascender sus nombres fuera de las fronteras locales. Ha habido contagio en la clase media y hoy son innumerables los que firman estrofas, muchos los que escriben cuentos y a últimas fechas los ensayistas, comediógrafos y novelistas han hecho su aparición.

Los artistas plásticos también han logrado nivel internacional y casi todos han tenido su iniciación en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y como estímulo oficial es la única institución que se puede mencionar. Pintores concretos y abstractos o realistas y surrealistas; escultores, miniaturistas, maestros de la artesanía aborígen y criolla, de todas hay representantes, satisfechos legítimamente unos, humil-

²⁴ La pirámide de amplia base y agudo ápice y que globalmente representa la situación pedagógica del país, así como la posición marginada de la mayoría y la privilegiada de la minoría, la representan las siguientes cifras:

Población estudiantil	367.453
Población escolar primaria	327.228
Alumnos primarios inscritos	208.925
Alumnos de bachillerato	18.754
Alumnos normalistas	4.810
Alumnos universitarios	3.343
Alumnos vocacionales	893
Otros	632

des y anónimos otros, pero todos revelando el don de arte de que está bien dotado el pueblo nicaragüense. No fue fruto del azar sino resultado de un determinismo sicosocial propio que Rubén Darío naciera en Nicaragua.

El movimiento de renovación social y política que sacudió a Centroamérica en la posguerra alcanzó también a la sociedad nicaragüense, pero sin alcanzar a modificar la estructura de poder que con la dinastía Somoza se prolonga desde la mitad de la década del 30. Más que las inversiones económicas es la concesión canalera lo que mueve al imperialismo norteamericano a perpetuar una dictadura militar y a mantener la ficción democrática en el país. Por ello, puede considerarse que la solución autoritaria y conservadora que encabezó Anastasio Somoza padre, y han continuado sus dos hijos, fue en parte producto de la crisis del 30; sus hondos efectos en la vida del país, prolongados innecesariamente por la dependencia política frente a los Estados Unidos, mantienen y explican la crisis que sólo parece tener solución en la gesta heroica de los herederos de Sandino: las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El porvenir de Nicaragua no le será exclusivo; las cinco sociedades centroamericanas tienen un destino común. Habrá que luchar para que el patriotismo, la cultura y la conciencia revolucionaria de los pueblos ístmicos madure, pero de todos modos la imagen de Nicaragua será la de un Estado de la República Federal de Centroamérica, soberana, independiente y socialista.

México, marzo de 1970

ESTUDIO SOBRE LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA EN EL SALVADOR

*Alejandro D. Marroquín **

I. INTRODUCCIÓN

La crisis de los años treinta afectó a El Salvador en forma particularmente intensa, con características singulares que correspondían a las modalidades peculiares del sistema socioeconómico salvadoreño. La crisis mundial encontró en el país condiciones de extrema vulnerabilidad, debido, en gran medida, a las siguientes circunstancias:

1ª Ninguna preparación técnica ni práctica por parte del sector dirigente, para enfrentarse adecuadamente a la inesperada emergencia.

2ª Composición orgánica de la economía nacional que la hacía depender casi totalmente de factores externos: *a)* en lo que respecta a maquinaria y demás medios modernos de producción; *b)* en lo que respecta a la producción de bienes de consumo, por lo menos en un 70%; *c)* en lo que respecta a la estabilidad de la moneda; *d)* en lo que respecta a los diversos servicios que se sufragan con ingresos nacionales.

3ª Carencia de instituciones que moderaran el ímpetu de la crisis y canalizaran sus efectos en forma equitativa entre los distintos sectores sociales.

4ª Organización social que imponía el traslado del peso de la crisis a los estratos más débiles y menos desarrollados.

La investigación que sigue se ha proyectado predominantemente bajo el enfoque histórico en un amplio cuadro macroeconómico y macrosociológico.

Las características de la crisis en El Salvador requirieron una visión de conjunto del sistema socioeconómico, para pasar después al estudio del desarrollo de la crisis y sus proyecciones generales más destacadas.

Las fuentes utilizadas son, a la vez, abundantes y escasas; abundantes en cuanto la documentación oficial se presenta en vastas pro-

* Facultad de Jurisprudencia y CC. SS. Universidad de El Salvador.

porciones, al igual que las fuentes de carácter periodístico; escasas, en cuanto no hay estudios especializados, ni depuración crítica de los diversos documentos, los cuales, al ser analizados, en la mayoría de los casos dejan muy poco que pueda considerarse como esencial e importante.

El presente trabajo es sólo un esbozo inicial; con mayor capacidad de tiempo y mejor organización del trabajo investigador podrá desarrollarse un estudio con la hondura y penetración que requiere la importancia del tema.

Queda constancia de mi agradecimiento para con el doctor Pablo González Casanova, eminente científico mexicano, quien, con su feliz iniciativa de preparar un estudio colectivo de la crisis de los treinta en América Latina, me ha brindado la oportunidad de realizar la presente investigación. *

II. CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA SOCIEDAD SALVADOREÑA EN LOS AÑOS TREINTA

En la época que estudiamos la sociedad salvadoreña presentaba las siguientes características, algunas de las cuales todavía perduran en la sociedad contemporánea, en tanto que otras han desaparecido o han visto disminuida sensiblemente su importancia:

1º *Pequeñez territorial.* El Salvador es el país más pequeño de América Latina; cuenta con unos veintidós mil kilómetros cuadrados de extensión superficial. Esta pequeñez territorial ha influido en cierta medida en la conformación de la cultura salvadoreña: la presión demográfica, la alta densidad de la población —densidad no sólo material sino moral como requería Durkheim—, que ha permitido un alto grado de desarrollo en las comunicaciones; agudización del problema agrario, etcétera.

2º *Alto desarrollo poblacional.* Desde el punto de vista de la densidad El Salvador es el país más poblado del Continente Americano. En el año de 1930 las cifras de población se presentaban de la manera como se indica en el cuadro de la página siguiente.

3º *Sociedad predominantemente rural.* Las cifras que hemos consignado sobre la distribución urbano-rural de la población no corresponden exactamente a la realidad; estadísticamente se considera como grupo urbano a todo aquel que tenga más de dos mil quinientos ha-

* San Salvador, 24 de septiembre de 1968.

Habitantes	1.459.578
Hombres	48.6%
Mujeres	51.4%
Urbanos	39.5%
Rurales	60.5%
Indios	25.0%
Mestizos	70.0%
Blancos	5.0%
Habitantes por km ²	43.0

Los índices de natalidad y mortalidad eran bastante elevados:

Natalidad	46.6 por millar
Mortalidad	22.0 por millar ¹

bitantes; este criterio es demasiado limitado; grupos hasta de veinte mil habitantes tenían en ese entonces las características propias de la sociedad rural, por lo que puede asegurarse que el 80% de la población era verdadera y esencialmente rural; la cultura salvadoreña, haciendo a un lado a los pequeños sectores urbanos, presentaba los siguientes rasgos:

- a) Vida general sometida al ciclo de la naturaleza.
- b) Técnica atrasada.
- c) Concepción del mundo saturada de proyecciones irracionales.
- d) Fuertes remanentes feudales cuyas fuentes principales se encuentran en el sistema de tenencia de la tierra a base de latifundios y de haciendas señoriales. Sociedad jerarquizada con valores cuyas raíces se remontan a la etapa colonial.
- e) Predominio de relaciones interpersonales subjetivas.
- f) Tradicionalismo y conservadurismo.
- g) Polarización socioeconómica: por un lado una minoría de privilegiados sociales y, por el otro, abrumadora mayoría de gentes que viven en la pobreza y aun en la miseria, sin privilegios ni derechos.

4º Singular estratificación social en donde las clases no aparecen claramente definidas, pues se entremezclan en su seno remanentes feudales con elementos capitalistas, y en donde la dicotomía ladino-indígena configura algunas comunidades con las características propias de las castas o cuasi castas.

Tomando como base el Censo de población de 1930, que contiene

¹ *Anuario Estadístico de 1930*. Dirección General de Estadística. Imprenta Nacional. San Salvador, 1931. Los datos sobre población indígena se han obtenido a base de inferencias.

importantes datos sobre la distribución de profesiones y oficios, hemos podido elaborar un esquema de las clases sociales de la época, partiendo de la ya clásica visión tripartita: alta, media y baja, con la salvedad de que tal esquema es simplemente una tentativa de aproximación y tiene por objeto destacar los núcleos o centros de aglutinación de los estratos más generales:

Esquema de las clases sociales en 1930.² Sobre la base de 854,127 personas censadas que ejercían las distintas profesiones u oficios, las clases se presentan así:³

Clase alta	640	0.2%
Clase media	38,247	4.4%
Clase baja	815,359	95.4%

Es posible que el esquema pudiera mejorarse elevando un tanto los porcentajes de las clases media y alta, pero en general dicho esquema refleja la aguda polarización social que ya hemos indicado (véase la gráfica 1).

5º Sistema político oligárquico con monopolio del poder por parte de los sectores terratenientes. Gobierno civil con características de democracia formal.

6º Sistema económico con las siguientes características:

a) Predominantemente agrícola. Los sectores industrial y minero no llegaban al 15% del total.

b) Escasez de campesinos independientes. La distribución de la propiedad era extremadamente desigual. El Censo de Población, del 1º de mayo de 1930,⁴ presenta al respecto las siguientes cifras:

Propietarios	117,680	8.2%
No propietarios	1.316,681	91.8%

Lo anterior explica la falta de campesinos que fueran pequeños propietarios y la alta cifra de peones que vivían de su salario o como mozos-colonos en las diversas haciendas.

² Censo de Población 1930.

³ El procedimiento utilizado fue:

1º Enumeración y estudio de los diversos oficios y profesiones.

2º Selección de aquellos que pertenecen a las clases alta y media (por ejemplo: todos los banqueros, ciertos industriales y algunos agricultores fueron colocados en la clase alta por su elevada base económica).

3º No se pudo establecer la distinción entre clases rural y urbana.

4º Censo de Población.

c) Persistencia de remanentes precapitalistas arraigados, unos en las comunidades indígenas (con peculiar sistema de economía pre-feudal); y los otros en los latifundios y haciendas, con los rasgos propios del feudalismo colonial.

d) Predominio del monocultivo. El café constituía el artículo clave de la economía nacional; el 80% de la renta nacional dependía directamente de la producción del café;⁵

e) Gran vulnerabilidad hacia los factores externos. La economía salvadoreña se caracterizaba por ser de "crecimiento hacia fuera", a la par que dependía intensamente del sistema económico de los Estados Unidos. En la *Memoria del Ministerio de Hacienda*, correspondiente al año de 1935, se hace notar esta dependencia y su carácter nada equitativo⁶ en un periodo de once años que termina en 1932. El Salvador compró a los Estados Unidos mercaderías por valor de 175.272,532.00 colones y le vendió a dicho país mercaderías por valor de 78.883,637.00 colones arrojando un balance desfavorable de 96.388,985.00 colones. En el mismo periodo, el saldo con Inglaterra, también desfavorable, fue de treinta y tres millones de colones.⁷

En realidad el estado de relativo bienestar o de crisis depende del precio que obtenga el café en el mercado mundial.

f) Pequeño sector industrial que implicaba un alto costo social. Las pocas industrias existentes se sostenían a base de concesiones monopolistas y de altas tarifas proteccionistas.

g) Gran inestabilidad. Paradójicamente, a un periodo de más de veinte años de estabilidad política en que los presidentes de la República se sustituían por las vías constitucionales, correspondía un periodo de gran inestabilidad económica, debida, entre otros factores, a las especulaciones que los bancos particulares de emisión realizaban con la moneda nacional con motivo de la abundancia o escasez de divisas; "en los meses en que se prepara y exporta la mayor parte de la cosecha del café, es decir, de diciembre a marzo, las ofertas de giros sobre el extranjero exceden de las demandas para uso inmediato y en el resto del año la demanda excede a la oferta"; aprovechando este ciclo fluctuante los bancos subían o bajaban el valor de la moneda originando la correspondiente incertidumbre. Unido a este factor estaba el de la eventualidad de las cosechas, inclusive

⁵ *Memoria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público*, correspondiente al año de 1929, p. 4.

⁶ *Idem*, 1935, pp. 94 y 95.

⁷ *Idem*, 1935, p. 61.

las del café, que dependían de los ciclos de la naturaleza y por ende presentaban grandes eventualidades.

h) Grave lastre de los empréstitos y deudas públicas. Los empréstitos eran contratados en condiciones onerosísimas; agentes fiscales específicos controlaban, por ejemplo, las rentas aduaneras, para garantizar el pago de las cuotas anuales correspondientes, a los tenedores de bonos del empréstito celebrado en 1922. El Estado no podía operar libremente, pues el interventor vetaba cualquier disposición que se sospechara podría perjudicar a los acreedores extranjeros. El presupuesto de la nación tenía que contemplar en sus egresos un porcentaje bastante alto para abonar a la deuda pública. Así, los gastos en el presupuesto nacional para el ejercicio fiscal del primero de julio de 1928 al treinta de junio de 1929, se distribuían así, en sus principales rubros:

Hacienda y Crédito Público	32.7% del total de gastos
Guerra, Marina y Aviación	18.5% del total de gastos
Fomento y Obras Públicas	11.1% del total de gastos
Gobernación	9.9% del total de gastos
Instrucción Pública	7.8% del total de gastos

Por las cifras anteriores puede verse que el peso más oneroso del presupuesto nacional lo constituían las carteras de Crédito Público y de Guerra. De paso señalaremos la raquítica participación del Ministerio de Instrucción Pública en los gastos nacionales, lo cual constituye un índice sintomático de la orientación general del gobierno en aquel entonces.

7º Crisis agraria crónica. El país venía sufriendo en su sector agrícola crisis intensas que dejaban al país en un estado de postración que se prolongaba durante muchos años. Cuando se inicia la crisis mundial de los años treinta, como veremos oportunamente, el país estaba sufriendo lo que se llamó "la crisis del maíz", alteraciones económicas producidas en el sector de los cereales con motivo de las alteraciones del sistema de lluvias, de la mala distribución de la tierra, del acaparamiento de los granos, etcétera.

Las características generales de la crisis agraria crónica eran las siguientes:

- a) Producción agrícola casi estancada, debido a que su expansión era sumamente lenta.
- b) Bajo índice de productividad.
- c) Falta de integración en el sistema agrícola y en el sistema eco-

nómico nacional, pues algunos productos dependen para su valoración de la coyuntura mundial, en tanto que otros dependen tan sólo de las condiciones internas del mercado de consumo nacional.

- d) Predominio de los monopolios de distribución.
- e) Rigidez en la producción, con franco apego a las formas y cultivos tradicionales.
- f) Injusta distribución del ingreso agrícola.
- g) Ineficaz organización del crédito bancario y predominio de la usura.

Tal era el marco general de la sociedad salvadoreña cuando recibió el impacto de la crisis mundial de los años treinta.

III. LOS PRELUDIOS DE LA CRISIS

El año de 1929 se inició para El Salvador como el desarrollo y culminación de un intenso periodo de relativa e inusitada prosperidad. El año anterior, 1928, presentó un incremento realmente extraordinario: la renta nacional ascendió a la cifra de 25.546,290.54 (veinticinco millones, quinientos cuarenta y seis mil doscientos noventa colones cincuenta y cuatro centavos) al cambio de dos colones por un dólar; esto significaba un incremento de cinco millones de colones con respecto a 1927. Este crecimiento de la renta nacional continuó en 1929, cuyo monto fue “considerablemente más grande a todos los anteriores periodos de tiempo”:⁸

Monto de la Renta Nacional en 1929	colones 16.147,159.74
Incremento con respecto a 1928	600,869.20

Las causas inmediatas que provocaron tan inusitado incremento fueron las siguientes, según opinión del ministro de Hacienda de la época:⁹

“a) Superproducción de café; la cosecha (de entonces) fue la más grande en todos los periodos de la historia del país.

“b) Precio extraordinario del café (en el mercado mundial): veinticinco dólares el quintal.”

Al iniciarse el segundo semestre de 1929, las condiciones económicas cambiaron bruscamente. El auge y prosperidad del periodo ante-

⁸ *Idem*, 1929, p. 4.

⁹ *Opus cit.*, p. 5.

rior engendró un optimismo ingenuo; de pronto el panorama cambió: “en julio se notó cierta inquietud porque no hubo demanda de café; los precios eran nominales.

“En octubre bajaron súbitamente dichos precios como un barómetro que anuncia mal tiempo. El café corriente tuvo una baja de 43% entre el máximo y el mínimo del año y el (café) lavado de 46%.”¹⁰

El sistema económico nacional dependiente de la economía norteamericana, acusó extrema sensibilidad para las repercusiones originadas por las conmociones de este último sistema: así el *crack* de Nueva York repercutió inmediatamente en nuestro país con consecuencias desastrosas. El café se había convertido ya en el artículo clave de la economía nacional: en 1903 El Salvador exportó 589,979 quintales de café oro y en 1928 la exportación de dicho grano alcanzó la cifra de 1.152,122 quintales; en 1929 con sólo seis meses de “prosperidad”, la exportación llegó a 1.017,013 quintales. El 85% de la exportación correspondió al aludido producto. Por eso, al bajar el valor del café, todas las estructuras económicas se conmovieron y la crisis empezó, extendiéndose por ondas concéntricas a todos los distintos sectores sociales.

Nunca como entonces se hicieron tan evidentes los efectos perniciosos del monocultivo en la economía nacional. Así lo reconoce expresamente el ministro de Hacienda, don José Esperanza Suay, en su informe constitucional ante la Asamblea Legislativa:

La crisis del café, que en el presente año (1929) ha alarmado con justicia a toda la colectividad, ha presentado claramente los peligros que encierra para la economía nacional, la condición del monocultivismo agrícola en que se halla la República, cuyo mayor porcentaje de producción lo significa aquel artículo.

El ministro recuerda que tal ha sido el sino de nuestro país desde la época colonial: primero fue el monocultivo del cacao, después el de la cochinilla (añil), y por último el del café; todos los cuales “han servido, sucesivamente para el cambio internacional”.¹¹

En el pasado el país sufrió algunas crisis de importancia como las que se tuvieron en los años de 1897-98, y la que originó la Primera Guerra Mundial; pero ninguna presentó la intensidad y duración de la crisis que estudiamos.

¹⁰ *Idem*, p. 5.

¹¹ *Idem*, pp. 19 y 20.

Debemos señalar, además, que la crisis obedece, en su impulso inicial, a factores completamente externos: la situación de la industria cafetalera era completamente normal; no hubo ningún abuso del crédito; no hubo exportación de capitales, pues la industria del café, desde sus inicios, ha estado siempre en manos de capitalistas salvadoreños y las estructuras organizadas para la exportación cumplieron sus atribuciones como todos los años anteriores.

Las consecuencias inmediatas de la caída de los precios del café fueron las siguientes:

1ª Aguda depreciación de los precios internos del café. Los grandes productores de café, exportan directamente su grano a los mercados internacionales o tienen participación en las empresas que se dedican al negocio de dicha exportación; en cambio los pequeños y medianos productores sufrieron la explotación de la compleja red de intermediarios que satura la producción cafetalera, y tuvieron que vender sus cosechas a precios rebajados en un setenta a ochenta por ciento. En cada ciudad cabecera de departamento y en cada beneficio de café, había agentes de las casas exportadoras que compraban el grano cobrando una comisión que, en ese entonces, fluctuaba entre el quince y el veinte por ciento sobre el precio del mercado exterior; pero en las pequeñas poblaciones, habían dos o tres intermediarios que compraban el café a los pequeños productores para revenderlo a los agentes de las casas exportadoras, los cuales se aprovecharon de la situación de incertidumbre y pánico para fijar precios extremadamente bajos.

2ª Baja de precios de los cereales. La "crisis del maíz" recibió un nuevo impulso con la baja del café, y los granos destinados al consumo popular bajaron inmediatamente de precio con los consiguientes perjuicios al campesino productor:

PRECIOS DE LOS CEREALES
(por quintal)

	1928 colones	1929 colones
Maíz	6.75	5.90
Arroz	12.88	10.42
Frijol	13.06	11.19

3ª Alto nivel de desocupación. Al descender los precios del café a precios tan bajos que casi no cubrían los costos de producción, la reacción inmediata de los finqueros fue la de no contratar trabaja-

dores, prefiriendo que las cosechas se perdieran a tener que pagar planillas de jornales sin tener la seguridad de colocar el café a precios remunerables. En el campo la desocupación llegó a un cuarenta por ciento de la población masculina adulta; en las ciudades, la desocupación llegó a un quince por ciento.

4ª Insolvencia generalizada de los deudores. Durante el periodo de "prosperidad", los propietarios usaron abundantemente del crédito esperando poder pagar con la venta de la próxima cosecha. Los viajes de placer por Europa y los Estados Unidos fueron frecuentes entre los caficultores. Al terminar la bonanza, los propietarios se vieron imposibilitados de pagar sus deudas; los plazos se vencieron y, en consecuencia, empezaron los cobros mediante ejecuciones judiciales.

A continuación se presentan algunas cifras relativas al problema de la insolvencia:

	1928	1929
Número de enajenaciones	11,645	11,134
Hipotecas constituidas	238.175,629	22.215,526
Hipotecas canceladas	10.570,222	10.746,067

Las ventas, con respecto a 1928, disminuyeron en número, posiblemente debido a la baja general de precios ocasionada por la caída de los del café. Las hipotecas disminuyeron de manera ostensible, especialmente debido al hecho de que el año de 1928 la IRCA (Empresa Ferroviaria Subsidiaria de la United Fruit Company), realizó una serie de operaciones hipotecarias que no correspondían al ritmo normal de tales préstamos. Lo cierto es que, según afirmó el ministro de Hacienda Suay, los bancos tenían invertidos 18.043,627 colones en hipotecas cuando estalló la crisis, o sea que controlaban el 81.4% del total de hipotecas, y por eso se cernió la amenaza de que tres entidades bancarias particulares se quedaran con más de las tres cuartas partes de la propiedad inmueble del país.¹²

Por otra parte, es de hacer notar que, a partir de la caída de los precios del café, el crédito quedó completamente arruinado y la usura floreció por todos lados. El dinero escaseaba y los prestamistas requerían, para conceder créditos, el máximo de garantías y una tasa de interés sumamente elevada.

¹² *Idem*, pp. 114 y 115.

5ª Escasez monetaria. Los bancos particulares tenían el privilegio de emisión de moneda; ante el advenimiento de la crisis, los bancos, no sólo restringieron los créditos sino que retiraron moneda de la circulación. La *Memoria del Ministerio de Hacienda*, de 1929, indica que los bancos retiraron de la circulación 3.670,533 colones ocasionando un proceso de deflación interna que va a ser una de las características que acompaña todo el proceso general de la crisis. Ante la reducción de la oferta monetaria, la moneda aumenta su valor adquisitivo y se da la paradoja de que una moneda que está perdiendo valor en el cambio internacional, aumenta sin embargo su capacidad de compra dentro del sistema nacional.

6ª Baja de los precios de la propiedad raíz. Los bancos reclamaban el pago de las hipotecas; los deudores no podían colocar su café; sin ingresos no les era posible cancelar sus compromisos; por consiguiente, se vieron forzados a ofrecer en venta sus bienes raíces antes de tener que perderlos en ejecuciones judiciales de los bancos. La oferta de inmuebles era abundante; la demanda tan escasa que podría decirse inexistente. Consecuencia, baja general de precios y alza del valor adquisitivo del colón.

7ª Alza de los cambios y grave desequilibrio de la balanza de pagos. El colón salvadoreño, que normalmente se cambiaba por el dólar en la proporción del dos por uno, empezó a perder su valor frente al dólar. La moneda norteamericana escaseaba, y como en la mayoría de las obligaciones crediticias se contemplaba el pago en dólares, se tuvieron que ofrecer elevadas primas que llegaron a elevarse hasta el 200%. En adelante, el Estado va a mantener el cambio elevado "como una prima proteccionista en beneficio de los exportadores del café".¹⁸

8ª Incremento de la deuda pública. Además de la carga de los empréstitos contratados por gobiernos anteriores, el gobierno, ante la difícil situación fiscal, empezó a retrasar el pago de los servidores del Estado. Para el año de 1932 lo adeudado a la burocracia ascendía a la cantidad de siete millones de colones.

9ª Baja del comercio exterior y en consecuencia, iniciación de la crisis fiscal. Las exportaciones del país empezaron a mermar en un cincuenta por ciento; el valor de las mismas se redujeron todavía más; esto originó mermas muy serias en los ingresos del fisco y como consecuencia el ejercicio del presupuesto tuvo que cerrarse con grave déficit.

¹⁸ *Idem*, 1932, p. 14.

IV. EL DESARROLLO DE LA CRISIS

La crisis de los años treinta se entrelazó con la crisis historicosocial del sistema capitalista, y como consecuencia, de simple crisis económica de coyuntura, se convirtió en crisis universal que abarcaba las más variadas esferas de la compleja trama de la vida social.

Para apreciar mejor el desarrollo de la crisis expondremos los efectos de la misma en las áreas más importantes del sistema socioeconómico nacional:

1º Área poblacional. La población salvadoreña no alteró su lento ritmo de crecimiento durante los años de la crisis, como lo demuestran las cifras siguientes:

... DATOS DE POBLACIÓN ¹⁴

Años	Población absoluta	Población por km ²
1930	1 459 594 habitantes	43
1931	1 493 826 habitantes	44
1932	1 522 186 habitantes	45
1933	1 539 900 habitantes	45
1934	1 574 495 habitantes	46
1935	1 597 549 habitantes	46

En esa época el crecimiento de la población salvadoreña era sumamente lento; el incremento anual no pasaba, cuando mucho, de cuarenta mil habitantes; ello se debía, en gran medida a que los altos índices de natalidad eran contrarrestados por los también altos índices de mortalidad. Aparentemente la crisis no tuvo mayor efecto sobre el desarrollo de la población. Veamos sin embargo otras cifras que pueden darnos mayor claridad para comprender el proceso poblacional:

MOVIMIENTO POBLACIONAL ¹⁵

Año	Matrimonios	Nacimientos	Defunciones	Índice vital
1929	5 813	61 091	34 689	247
1930	5 430	66 402	38 490	211
1931	4 839	67 445	33 213	203
1932	4 536	61 133	32 773	186
1933	2 798	33 805	16 091	203
1934	5 659	63 277	38 776	163
1935	5 886	61 938	38 884	159

¹⁴ Datos tomados de los *Anuarios Estadísticos* de los años correspondientes.

¹⁵ *Id. id.*

Los datos anteriores, más concretos, nos permiten hacer las siguientes observaciones:

1ª Los matrimonios han estado relacionados íntimamente con las crisis económicas, aun cuando no sólo sea el factor económico el único que influye sobre los matrimonios. En el caso presente, los matrimonios descienden a partir de la iniciación de la crisis (1930); la incertidumbre económica limita el número de matrimonios; a partir de 1934, cuando ya se inicia la recuperación, los matrimonios se incrementan.

2ª Los nacimientos se presentan en forma irregular: aumentan hasta 1931; decrecen durante los años de 1932 y 1933, se incrementan durante 1934, y vuelven a disminuir en el año 1935. La poca difusión de los procedimientos anticonceptivos aleja toda sospecha de planeación familiar; de ahí que no se pueda establecer ninguna correlación con la crisis. Conviene señalar, sin embargo, la baja singular de los nacimientos durante el año de 1933, año que sigue al del más bajo fondo de la crisis que, como veremos oportunamente, es el de 1932.

3ª La mortalidad se presenta también en forma irregular: aumenta en 1930, disminuye en los años 1931, 1932 y 1933, para aumentar en los años de 1934 y 1935; es decir, que en los años más difíciles de la crisis, la mortalidad disminuye y se incrementa cuando se inicia la recuperación. Es posible que los factores que determinan la mortalidad no siempre provoquen las muertes de manera inmediata, como en el caso de las muertes violentas, sino que acumulan sus efectos perniciosos por periodos más o menos largos; tal el caso de la desnutrición que se desarrolla con gran amplitud en los años de crisis y cuyos efectos se proyectan en los años siguientes. Por otra parte debemos dejar constancia de una seria alteración estadística: el año 1932 estalló en El Salvador una insurrección campesina que fue aplastada en forma despiadada por el ejército nacional; se calcula que con motivo de la represión fallecieron más de veinte mil campesinos. Estas muertes no fueron registradas estadísticamente; incluso se llegan a presentar las defunciones como inferiores a las del año anterior. Tal omisión es la consecuencia de la política oficial que trató de ocultar datos relativos a la aludida represión.

4ª En lo que respecta al índice vital, podemos decir que sigue, más o menos, el ritmo de las muertes registradas: marca un descenso hasta el año 1932 y luego se pasa al ascenso en los últimos años.

Podemos ahondar aún más el análisis, estudiando los siguientes índices demográficos:

INDICES DEMOGRÁFICOS

<i>Año</i>	<i>Nupcialidad</i>	<i>Natalidad</i>	<i>Mortalidad</i>
1929			17.7
1930			22.0
1931	3.3	46.2	22.8
1932	3.0	40.9	21.9
1933	3.2	41.8	23.5
1934	3.6	40.8	25.0
1935	3.1	32.4	21.1

Los anteriores índices confirman nuestras observaciones. Debe comentarse sin embargo el bajo nivel de la nupcialidad, que parece ser la característica actual de los salvadoreños. Como correlativo a la escasez de matrimonios está la abundancia de hijos ilegítimos. Se ha sostenido que esta clase de hijos abundan en las épocas de crisis, porque la consiguiente estrechez económica no permite la realización de matrimonios que siempre implican gastos emergentes, y a veces, ni siquiera la compra de anticonceptivos. El índice de hijos ilegítimos es el que aparece en el siguiente cuadro:

HIJOS ILEGÍTIMOS

<i>Año</i>	<i>%</i>
1928	58.7
1929	57.4
1930	58.7
1931	59.8
1932	57.9
1933	60.0
1934	60.2
1935	59.5

Los índices de ilegitimidad no nos dan ninguna base seria para sacar alguna inferencia con respecto a la influencia de la crisis en los nacimientos extramatrimoniales; es más, debe señalarse que los referidos índices son enteramente normales en El Salvador, pues justamente uno de los problemas que más afectan a la familia contemporánea es el alto índice de hijos ilegítimos.

Concluyendo podemos decir que en lo que respecta al área poblacional no se destaca una correlación inmediata entre la crisis económica y el crecimiento de la población. Evidentemente si hubiéramos

podido disponer de datos tales como los relativos a la desnutrición, las consecuencias hubieran sido muy distintas.

2º Área económica. Es esta área la que más sufrió el impacto de la crisis, pues al manifestarse ésta como predominantemente económica, tenía que afectar con mayor intensidad las estructuras del sistema económico nacional. Empezaremos por estudiar el desarrollo de la crisis en los sectores más importantes del dicho sistema.

1.2. Las finanzas nacionales

La caída de los precios del café colocó a la hacienda pública al borde de la quiebra. Los impuestos bajaron súbitamente y la renta nacional sufrió una merma tremenda:

EVOLUCIÓN DE LA RENTA NACIONAL

Años	Valor en colones
1928	25.546,290.54
1929	26.147,159.74
1930	21.964,881.32
1931	17.599,077.64

La renta del año de 1931 era apenas el 68.8% de la correspondiente al año 1928. En 1932, la renta descendió todavía llegando a ser aproximadamente el 50% de la aludida renta de 1928. Todos los servicios públicos se vieron fuertemente afectados. El Estado no podía, materialmente, pagar sus sueldos a los empleados públicos, y el retraso de los pagos provocó el descontento general que más tarde se canaliza en acontecimientos políticos de importancia que estudiaremos en la correspondiente área política.

Para escándalo y susto de los financieros a la antigua usanza, los presupuestos empezaron a cerrar con fuertes déficits, algunos de los cuales alcanzaron el diez por ciento de los ingresos reales.

Bajo la presión de los grandes caficultores, cuya influencia política era decisiva, el Estado se vio obligado a suspender los impuestos de exportación del café, con lo cual sus ingresos fueron todavía más raquíticos.

Las rentas fiscales disminuían a ojos vistas. La importancia de las mismas se presentaba así:

ORDEN DE IMPORTANCIA DE LAS RENTAS FISCALES

(Conforme el Presupuesto de 1929)

1ª	Importación	54.5 %
2ª	Renta de Licores	16.9 %
3ª	Exportación	11.8 %
4ª	Rentas Diversas	7.4 %
5ª	Impuestos diversos	5.3 %

Esto significaba que el fisco se mantenía principalmente de los ingresos obtenidos por la importación, y como ésta descendió radicalmente, la hacienda pública se debilitó profundamente. Otra renta fiscal importante, la segunda en categoría, sufrió con la crisis un impacto tan tremendo que no pudo reponerse durante el periodo estudiado:

RENTA DE LICORES

Año	Monto de lo recaudado
1928	\$ 4.670,109.43
1929	4.525,001.74
1930	3.550,710.47
1931	2.527,105.82
1932	2.066,355.54
1933	2.017,277.73
1934	2.205,145.71
1935	2.061,922.18

Como veremos oportunamente, los años de 1934 y 1935 constituyen el ascenso de la crisis económica hacia la recuperación: sin embargo, la renta de licores no logra reaccionar adecuadamente, y en 1935 llega a su más bajo nivel.

Con respecto a los impuestos directos el cuadro que sigue puede darnos una idea de su situación durante la crisis:

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DIRECTOS ¹⁶

Años	Renta	Vialidad
1933	\$ 563,466.43	\$ 410,384.13
1934	557,161.84	366,282.12
1935	461,073.59	342,715.25

Lo mismo que con la renta de licores pasa con los impuestos di-

¹⁶ Memoria del Ministerio de Hacienda, correspondiente al año de 1935, p. 187.

rectos; llegan al año 1935 sin que logren recuperarse. El fisco, sin embargo, en ese tiempo logra un ascenso general en sus rentas debido a que las rentas provenientes de la importación y la exportación han vuelto casi a la normalidad en el referido año de 1935.

2.2. La economía del café

Para comprender el proceso económico de la crisis necesitamos estudiar con cierto detenimiento la economía del café; este grano es la clave de la pobreza o abundancia del país, y constituye a la vez su talón de Aquiles; por el café penetran los desquiciamientos de la economía mundial y los ciclos críticos se apodetan de todo el sistema nacional. Los precios del café los fija el mercado mundial sin la participación de los caficultores salvadoreños; cuando el precio es alto, hay prosperidad; cuando es bajo, hay crisis no solamente en el sector cafetalero, sino también en todos los ámbitos de la economía. Por eso el café nos sirve de índice para comprender la marcha de la crisis y para conocer también su profundidad.

a) La producción del café. A partir del año treinta, la producción sufre un importante descenso que implica fuerte daño para la economía nacional:

PRODUCCIÓN DE CAFÉ
(en quintales de 46 kilos)

Año	Volumen
1929	1.321,819
1930	1.413,492
1931	(sin datos)
1932	1.357,321
1933	1,204,434
1934	1.332,224
1935	1.245,900

No obstante que el volumen de la producción descendía (descenso que se debió al inadecuado régimen de lluvias, por un lado y, por el otro, a la falta de recursos económicos originados por la depresión del crédito), las áreas de cultivo de café se fueron ampliando; en cierto sentido, los caficultores intuyeron que sólo el incremento de la producción podría sacarlos de la hondura de la crisis:

HECTÁREAS DE CAFÉ CULTIVADAS Y
RENDIMIENTO POR HECTÁREA

Año	Has. cultivadas	Rendimiento por ha.
1930	93,545	15.1 quintales
1932	96,523	14.06 quintales
1933	100,000	14.06 quintales
1934	104,126	12.04 quintales
1935	106,357	12.79 quintales

De 1930 a 1935 hay cultivadas 13 902 hectáreas más de café; sin embargo el rendimiento por hectárea disminuye sensiblemente; esto de debe, principalmente, al hecho de que el café es una planta que rinde cosecha cinco años después de sembrada y, por consiguiente, las nuevas hectáreas no cuentan como unidades de producción.

A continuación presentamos el cuadro de la exportación del café:

Año	Volumen en quintales	Valor en colones	Valor por qq.
1929	1.017,014	34.090,450	33.52
1930	1.274,378	23.914,481	18.77
1931	1.187,628	21.695,441	18.27
1932	862,063	12.867,077	15.00
1933	1.215,137	19.398,185	15.96
1934	1.204,434	22.824,125	18.95
1935	1.332,224	24.228,376	18.19

Los datos anteriores son, sin duda, los más importantes en cuanto al proceso económico de la crisis; por ellos nos damos cuenta de que el año de 1932 fue el año en que la crisis económica llegó a su más bajo fondo (véase la gráfica II). El valor de la exportación es la clave para la interpretación, puesto que ella representa el flujo de dinero que se derramará por todo el país para impulsar el dinámico proceso de su actividad general; en 1932, la exportación del café, valorada en colones, apenas llega al 37% del nivel de la exportación de 1929; si se calculara en dólares la proporción sería menor; porque el colón salvadoreño en 1929 valía cincuenta centavos de dólar, en tanto que en 1932 valía apenas veinticinco centavos de aquella moneda.

El bajo valor de la moneda en el exterior nos ayuda a interpretar con mayor acierto los precios adquiridos por el quintal de café en los años estudiados; cuando el café vale apenas quince colones, o sea, menos de cuatro dólares, el caficultor sólo logra recuperar sus costos y, a veces, ni siquiera tales costos; y esto en circunstancias tales en que los salarios de los campesinos habían sido rebajados a niveles increíbles de quince a diez centavos de colón por día.

El destino de la exportación del café salvadoreño implicaba una vinculación peculiar con el país que recibía el café. Los tres primeros países, por la importancia de sus compras, en el año de 1929, fueron los siguientes:

- 1º Alemania con el 33.9% de toda la exportación
- 2º Estados Unidos con el 17.8% de toda la exportación
- 3º Holanda con el 10.3% de toda la exportación

El principal cliente de El Salvador era Alemania, quien año con año fue aumentando el volumen de sus ventas; más tarde, en 1933, con motivo de la llegada del Partido Nacional Socialista al poder en Alemania, ésta impuso a El Salvador condiciones muy especiales de intercambio, que, como veremos oportunamente, imponían formas del antiguo trueque, con la fijación de una moneda especial.

Las condiciones del café, en cuanto a su exportación, se mantuvieron, más o menos, con la misma distribución por países hasta la Segunda Guerra Mundial; al estallar esta conflagración, Alemania deja de ser el primer cliente y la dependencia respecto de los Estados Unidos fue completa y absoluta.

3.2. Otros aspectos económicos

a) Los cereales. El consumo alimenticio del pueblo salvadoreño descansa fundamentalmente en el maíz y el frijol. La crisis agraria mantenía a estos cereales en constante fluctuación; el proceso de los precios marca un ritmo de la crisis agraria, distinto del de la crisis del café.

PRECIOS DE LOS CEREALES
(promedio del valor de los granos por quintal)

Año	Maíz	Arroz	Frijol
1928	\$ 7.30	\$ 10.12	\$ 10.63
1929	5.90	12.42	11.19
1930	3.65	9.80	11.45
1931	4.68	10.17	7.73
1932	2.98	7.30	5.96
1933	3.61	6.68	8.82
1934	6.52	10.34	11.90
1935	2.57	6.84	5.29

La crisis de los cereales nunca tuvo los efectos espectaculares de la del café. Afectó principalmente a los pequeños propietarios y a los "terrajistas", ninguno de los cuales ni todos en conjunto (si hubieran estado organizados) podían enfrentarse al enorme poderío economicopolítico de los grandes caficultores.

La producción del cereal depende de múltiples factores; entre ellos se destacan: el régimen de lluvias; el bajo nivel de la técnica agrícola; la calidad de los terrenos. Cuando abunda la producción de granos, los precios bajan y el campesino pierde; si hay escasez de granos el precio tiende a subir, pero como para cubrir el déficit del consumo el Estado importa granos de los países vecinos, el precio vuelve a bajar y el campesino sigue en malas condiciones económicas. Esto explica, en gran medida, la irregularidad aparente de los precios (véase gráfica III).

b) Moneda. El colón salvadoreño sufrió directamente el impacto de la crisis. Al decretar el Estado en 1931 la inconvertibilidad de los billetes de banco, el colón empezó a perder valor como puede verse en las cifras siguientes:

CAMBIO SOBRE NUEVA YORK

Año	Valor promedio con respecto al dólar
1929	2.04
1930	2.07
1931	2.06
1932	2.54
1933	2.92
1934	3.50
1935	2.52

Al iniciarse el periodo de la crisis el colón se cambiaba en la proporción de dos por uno con respecto al dólar; al terminar el ciclo de la crisis, el colón ha sido estabilizado y su valor oficial fue de dos colones cincuenta por dólar, valor que ha mantenido desde entonces hasta el presente año de 1968.

Los bancos eran tres y estaban en manos privadas; todos ellos actuaron viendo únicamente la defensa de sus particulares intereses; gozaban del privilegio de emisión de billetes, lo que les permitía especular con las divisas, como se ha indicado ya anteriormente. Los bancos restringieron el crédito y al mismo tiempo restringieron la emisión de billetes, con lo cual contribuyeron a agudizar aún más el proceso de la crisis. La conducta de los bancos obligó al Estado

a tomar medidas tales como la creación del Banco Hipotecario, destinado a levantar y democratizar el crédito, y el Banco Central de Reserva que asumió el privilegio de emitir los billetes de banco.

c) Movimiento de la propiedad raíz. Ya hemos indicado que la propiedad inmueble bajó en más de un cincuenta por ciento de su precio al iniciarse la caída de los precios del café. Los datos que tenemos al respecto son:

MOVIMIENTO DE PROPIEDAD

Año	Número de ventas	Precio Colones	Hipotecas Colones	Cancelaciones Colones
1929	11 134	18.343,186	22.215,526	10.746,067
1930 *				
1931	8 188	13.494,269.74	18.060,341.82	11.650,501
1932	8 814	8.354,841	12.536,637	8.092,782
1933	8 586	8.095,210	8.698,147	7.258,296
1934	11 292	10.458,854	8.460,077	7.348,576
1935	10 665	13.650,133	7.707,623	7.826,778

* No hay datos para 1930

Con las cifras anteriores puede constatarse la baja de las ventas y de las hipotecas, particularmente, en lo que se refiere al año de 1932.

d) Comercio internacional. Aparentemente el comercio internacional era favorable al país, por cuanto las exportaciones superaban, en cuanto a su valor, a las importaciones:

COMERCIO EXTERIOR ¹⁷

Años	Importación		Exportación	
	Toneladas	Valor *	Toneladas	Valor *
1928	114 873	37,304	114 873	48,928
1929	135 098	34,581	135 098	36,831
1930	82 479	24,872	82 479	27,303
1931	65 508	22,729	65 508	22,726
1932	49 652	14,002	49 652	14,002
1933	48 624	14,900	12 324	20,102

* Valor en miles de colones.

Es de sospechar que la *Memoria del Ministerio de Hacienda* de donde se tomaron los datos, hasta el año de 1932, confundió por

¹⁷ *Idem*, 1932, p. 45 y *Memoria* del año 1933, p. 43.

un error las columnas relativas a las toneladas, tanto de la exportación como de la importación, pues ambas son idénticas. *La Memoria* del año de 1933 ya trae las correspondientes diferencias. En cuanto a los valores con sus diversas variaciones es de creer que son más confiables. Obsérvese que el año 1932 presenta el más bajo fondo, tanto en volumen como en valor de las mercaderías importadas o exportadas. Con respecto a los años de 1934 y 1935 las cifras son las siguientes:

VALOR
(en miles de colones)

Año	Importación	Exportación
1934	20,475	24,049
1935	22,657	27,093

Con lo anterior se confirma la tendencia hacia la recuperación, que hemos encontrado en el caso del café, lo que confirma nuestro aserto de que el más bajo fondo de la crisis se encontró en el año de 1932.

Si la balanza comercial fue casi siempre favorable, la balanza de pagos, por el contrario, era esencialmente desfavorable para El Salvador; así lo reconoce el Ministerio de Hacienda en su *Memoria* correspondiente al año de 1935 cuando dice: "Las salidas de oro son más voluminosas que las entradas."¹⁸ Las causas que el funcionario aludido señalaba como determinantes del déficit de nuestra balanza de pagos fueron las siguientes:

- 1ª Importación de mercaderías.
- 2ª Servicios tales como los transportes marítimos y aéreos.
- 3ª Cuotas a organismos internacionales (Oficina de Trasbordos de Panamá, Postal Internacional de Berna, *id.* de Montevideo, Unión Panamericana de Washington, Corte de Arbitraje de La Haya, etcétera.
- 4ª Dividendos a compañías extranjeras: International Railway of Central America, Salvador Railway Ltd., Panair, Cía. de Alumbrado y Fuerza Motriz, etcétera.
- 5ª Primas y premios a compañías de seguros.

¹⁸ *Idem*, 1935, p. 92.

- 6ª Mantenimiento del servicio exterior.
- 7ª Estudiantes becados en el exterior.
- 8ª El oneroso servicio del empréstito.
- 9ª Salidas ocultas: turismo, enseñanza por correspondencia, suscripción a revistas, arrendamiento de películas cinematográficas, etcétera.

No obstante las medidas tomadas por el gobierno (control de cambios, suspensión del servicio del empréstito, etcétera), el hecho es que la salida abundante de divisas se mantuvo durante todo el ciclo de la crisis.

El comercio con los Estados Unidos y con Inglaterra arrojó siempre saldos desfavorables para El Salvador. En un periodo de once años que terminó en 1932, El Salvador compró a los Estados Unidos mercaderías por valor de 175.272,532 colones, en cambio las ventas a los Estados Unidos llegaron apenas a un valor de 78.883,637 colones, arrojando un balance desfavorable de 96.388,895 colones. En ese mismo periodo, el saldo desfavorable con Inglaterra fue de treinta y tres millones de colones.

Hemos visto ya que Estados Unidos no era el mejor cliente para la compra del café salvadoreño, pero en cambio imponía, mediante un tratado comercial oneroso, un trato preferencial en sus relaciones comerciales con El Salvador, invocando la cláusula de "la nación más favorecida". El gobierno se esforzó en muchas oportunidades por iniciar una política comercial nueva pero:

Por cualquier lado que se busquen mayores ventajas con otros países, encontramos el fantasma de la concesión otorgada a Estados Unidos que le hace gozar automáticamente de aquéllas, en circunstancias que esas ventajas favorecen casi exclusivamente a esa República.

Estamos sujetos al comercio norteamericano, sin poder dar salida a nuestro principal producto con otros destinos mediante concesiones que pudieran servir de estímulo.¹⁹

Lo transcrito, son párrafos tomados textualmente de la *Memoria de Hacienda*, presentada por el ministro del ramo correspondiente, y reflejan la insoportable dependencia en que el tratado comercial con los Estados Unidos ponía a nuestro país. El informe del ministro señala que el embajador salvadoreño en Europa, doctor Gus-

¹⁹ *Idem*, 1932, p. 115.

tavo Guerrero, había realizado hábiles gestiones diplomáticas con distintos países del Viejo Continente con el fin de ampliar el comercio salvadoreño; pero todas las gestiones se vinieron abajo cuando los Estados Unidos reclamaron las ventajas automáticas de la fatídica cláusula de la nación más favorecida.

Ya hemos visto que Alemania constituía el mejor cliente para el café salvadoreño; pero a raíz de la llegada de los nazis al poder las condiciones del intercambio cambiaron: la política adoptada por Alemania "a base de trueque colocó a los exportadores de la República en situación de importar el valor total de las exportaciones en mercaderías alemanas", lo cual originó un extraordinario incremento de mercaderías.²⁰ Alemania emitió una moneda especial para comerciar con el área centroamericana, el *sunder mark*, que sólo tenía validez en dicha zona; paralelamente, Alemania presionaba para que se recibieran "técnicos" nazis en la administración pública; así apareció como gerente del Banco Hipotecario de El Salvador un ciudadano alemán; al frente del Colegio Militar fue colocado, como director de dicho establecimiento, el coronel Bonsted, del ejército nacional socialista alemán, etcétera.

e) Transporte y consumo de carne. Los transportes tradicionales de El Salvador han sido siempre los ferrocarriles. Dos empresas controlaban esta rama de la economía: La International Railway of Central America (IRCA) y la Salvador Railway; la primera, subsidiaria de la United Fruit Company y la segunda de capital inglés. Ambas empresas se vieron seriamente afectadas por la crisis, circunstancia que aprovecharon las nacientes empresas de autobuses, para restarles clientela de pasajeros y carga:

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL

Año	IRCA	Salv. Railway
1928	1 041 565	703 540
1929	911 967	633 515
1930	755 214	523 436
1931	552 941	179 038
1932	457 115	329 821
1933	491 525	639 126

La caída de los pasajeros en cuanto a su número, es evidente; de más de un millón en 1928, desciende a 457 115 en 1932, con respecto a la IRCA. En cuanto a la Salvador Railway, el número de

²⁰ *Idem*, 1935, pp. 56-57.

pasajeros descendió de más de setecientos mil en 1928, a 179 038 en 1931. Sin embargo esta empresa presenta una insólita recuperación en los dos últimos años del cuadro, explicable únicamente por circunstancias especiales del mercado de trabajo de la zona occidental del país y la intensa movilización de tropas represivas en la indicada zona.

El consumo de carne es también un índice importante de la violencia de la crisis. Por regla general dicho consumo corresponde, fundamentalmente a la clase media y a la clase alta. La clase baja, particularmente la campesina, está prácticamente marginada de dicho consumo.

CONSUMO DE GANADO

Año	Ganado sacrificado (número de cabezas)	Valor Colones
1929	186 909	7.386,125
1930	177 884	6.420,832
1931	165 291	5.279,787
1932	160 024	3.537,910
1933	146 286	3.020,620
1934	179 283	4.092,679
1935	173 244	4.387,187

Obsérvese que la caída de los precios no está en relación con el consumo de ganado; en 1935 el consumo de ganado casi alcanza la cifra de 1929, en tanto que el precio del mismo es apenas el 59% del logrado en 1929. Aparentemente, al bajar el precio del ganado, bajaría el de la carne, y esto incrementaría el consumo; pero sucedió al revés: las clases alta y media tienen una demanda rígida; con precios altos o bajos, consumen, más o menos, la misma cantidad de carne; en cuanto a la clase baja, ésta se encontraba totalmente imposibilitada de consumirla, porque sus espaldas soportaban lo más duro de la crisis y sus menguados ingresos apenas si le permitía comer un poco de maíz o maicillo, con frijoles (véase gráficas iv y v).

f) Medidas tomadas por el Estado para contrarrestar los efectos de la crisis. El inesperado ímpetu con que la crisis azotó al país, provocó desconcierto y estupefacción; el Estado salvadoreño no tenía ninguna estructura organizada para soportar y contrarrestar la crisis; las fuerzas económicas desbordadas, al no encontrar valladares adecuados, causaron mayores daños que los esperados; los gobernantes

buscaron ayuda en los teóricos de la ciencia económica, para llegar, con el ministro de Hacienda en su *Memoria* correspondiente al año de 1933, a la conclusión de que “los principios clásicos de la economía están en derrota”.²¹

Ante la emergencia, los gobernantes tuvieron que actuar; si lo clásico estaba en bancarrota, había que hacer a un lado a los clásicos; el Estado dejó a un lado al liberalismo económico y empezó a crear instituciones y a tomar medidas que ayudaran a salir de la crisis. Las más importantes decisiones tomadas fueron las siguientes:

Suspensión de pagos e inconvertibilidad de los billetes de bancos: el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, inspirado en deberes anteriores y superiores a toda norma, y como medida de emergencia, dictó el decreto del 7 de octubre (de 1931) cuyos fines son: preservar el oro que garantiza la circulación, ampliar ésta, y tranquilizar a los deudores de los bancos para que trabajen sin preocupaciones. La inconvertibilidad del billete será temporal.²²

Dicho decreto contiene los siguientes alcances:

1º Exime a los bancos de emisión de la obligación de convertir sus billetes.

2º Los bancos quedan obligados a dar facilidades a agricultores, industriales y comerciantes.

3º Los bancos quedan obligados a poner en circulación billetes hasta la cantidad que autorizaba la ley respectiva.

4º El gobierno procedió a guardar el oro de los bancos, bajo sello, constituyendo lo que se llamó “Fondo intangible de oro en custodia”.²³

5º Los bancos, además, estaban obligados a “no hacer efectivos los créditos en cartera contra las personas domiciliadas en la República (siempre que no estuvieran en mora de intereses); no podían (además) cobrar más del diez por ciento de interés; ni elevar el tipo de cambio de las letras bancarias a más del 105% de prima”.²⁴

La actitud de los bancos —que representaban los intereses de tres

²¹ *Idem*, 1933, p. 3.

²² *Idem*, 1931, p. 15.

²³ Alfredo Humberto Ortiz Manca. Consideraciones sobre el crédito en El Salvador. Tesis Doctoral 1938. En *Revista de Hacienda*, núms. 14-17, octubre de 1939, p. 193.

²⁴ Oscar Quinteros Orellana. “Causas y efectos de la moratoria de 1932.” *Economía Salvadoreña*, núms. 21-22, enero-diciembre de 1960.

familias— fue completamente hostil al aludido decreto; el ministro de Hacienda en su *Memoria* correspondiente al año de 1932 dice:

Dicho decreto llenó a su tiempo la función principal que le estaba encomendada; pero las obligaciones impuestas a los bancos no tuvieron ninguna efectividad práctica y la zozobra de los deudores llegó a su estado álgido al grado de que la intervención oficial se hacía de imperiosa necesidad. Los bancos no cumplían con las obligaciones que les fueron impuestas en el decreto mencionado; por el contrario, exigían a sus deudores el pago de sus obligaciones en oro acuñado o en giros al exterior; por consecuencia de esas demandas y de la inconvertibilidad transitoria del billete de banco, la causa original del desequilibrio de la balanza económica se agravó, y el cambio sobre la moneda llegó a su más alta expresión. Los acreedores distintos de los bancos urgían también a sus deudores el pago de sus créditos. Los deudores no conseguían créditos por ninguna parte y el valor de sus propiedades se encontraba con depresión que llegaba al 50% al grado de que no había garantías suficientes para los créditos contraídos con anterioridad a la actual crisis.²⁵

A partir de entonces, el Estado, con timidez al principio, y luego con cierta energía, empezó a emitir decretos de emergencia que se fueron sucediendo con cierta precipitación, hasta constituir un cuerpo jurídico financiero bastante complejo, cuyos aspectos más salientes trataremos a continuación:

1º La suspensión de los pagos afectó en primer lugar a los empleados públicos; el fisco no pudo pagar a su numeroso aparato burocrático ni tampoco pudo pagar las obligaciones que tenía con los acreedores del empréstito internacional de 1922. El ministro de Hacienda en su *Memoria* del año de 1932 decía:

El comienzo del año recién pasado (1931) se presentó sombrío: nuestro principal artículo, el café, sin suficiente demanda, liquidaba con precios deprimidos; había escasez de brazos debido a los sucesos comunistas y parte de la cosecha se perdió. Los deudores estaban amenazados con ejecuciones en su mayor parte y muchos de ellos se vieron pasar de la simple amenaza a la ejecución efectiva; los tribunales de justicia estaban atestados de juicios iniciados. La circulación monetaria cada vez más escasa hacía subir el valor de la moneda en el mercado interior, recrudeciéndose la deflación y con ella el valor de la propiedad inmueble.²⁶

²⁵ *Memoria de Hacienda*, correspondiente al año 1935, pp. 10 y 11.

²⁶ *Idem*, 1932, p. 3.

En vista de tal situación apareció, como dijo el ministro, “la dificultad de los pagos a los servidores de la nación por consecuencia de la baja de las rentas”. Pero el problema se agudizaba aún más con la obligación de tener que pagar las deudas del empréstito de 1922; los tenedores de bonos con sede en Nueva York, tenían un representante que intervenía las rentas aduanales; tomaba de los fondos recaudados un alto porcentaje y lo remitía a los acreedores. En ocasiones llegó a tomar hasta un 30% del total de las rentas del Estado. El gobierno se encontró ante el siguiente dilema:

se pagaban los compromisos anteriores (los del empréstito) y entonces *no serían suficientes las rentas restantes para atender la vida de la nación*, con lo que podría provocarse un colapso que a la larga vendría a perjudicar a los mismos acreedores, o se suspendían los pagos a los acreedores (del empréstito), para inocular la savia que necesitaba el organismo de la nación a fin de fortalecerlo en el más breve tiempo posible.²⁷

A partir del 29 de febrero de 1932 entró en vigencia la suspensión temporal de la deuda externa. La reacción de los tenedores de bonos no se hizo esperar. Amenazaron incluso con la “intervención diplomática”, amenaza que no podía ser pasada por alto, pues en ese tiempo las intervenciones diplomáticas de los Estados Unidos se traducían en desembarco de marinos, tal como estaba ocurriendo en ese tiempo en la hermana república de Nicaragua. El gobierno, sin embargo, se mantuvo firme, y logró culminar un arreglo financiero en el que los tenedores de bonos aceptaron la suspensión de pagos.

2º Medidas bancarias: era una ingenuidad creer que los bancos cumplirían las obligaciones que les imponía el Decreto del 7 de octubre de 1931, sin que se tomaran otras providencias institucionales y coactivas que impusieran tal cumplimiento. Por consiguiente el Estado se vio forzado a tomar algunas medidas de carácter enérgico:

a) Con fecha 12 de marzo de 1932 se dicta la Ley Moratoria, ley que ratifica, derogándolo, el decreto ejecutivo ya citado, e imponiendo la inconvertibilidad de los billetes de banco; una moratoria general para todas las deudas anteriores a la fecha del decreto; y rebaja de un 40% del interés estipulado en los diversos convenios de mutuo.

Las reacciones contra el anterior decreto fueron bastante intensas:

²⁷ *Idem*, 1932, pp. 6-7.

se alegó la inconstitucionalidad de la ley, se dijo que daba un golpe de muerte al crédito, tanto público como privado, y se aprovecharon los vacíos de la ley para poner trabas en los distintos procedimientos que la ley citada había establecido apresuradamente.

b) A continuación se emitieron una serie de decretos que tenían por objeto llenar los vacíos apuntados y poner nuevos frenos a las maniobras bancarias: Decreto Legislativo del 28 de mayo de 1932 y decreto del 14 de noviembre del mismo año, llamado Ley de Emergencia, en donde se recopiló y sistematizó todo el derecho financiero de emergencia decretado con anterioridad.

c) El 25 de agosto de 1933, la Asamblea Legislativa impuso el control de cambios, pero ante la protesta de la opinión pública fomentada por los bancos, tuvo que revocarse la medida y se dejó la fijación del cambio al libre juego económico; el promedio del cambio fue de 315%. El gobierno se inclinó, en ese entonces, por un tipo de cambio alto con la expresa manifestación de su propósito de favorecer a los industriales.²⁸

d) Finalmente, ante el escándalo de las especulaciones con las divisas, realizadas por los grandes caficultores y los bancos, el gobierno se vio obligado a estabilizar el colón al tipo de 2.50 por un dólar. Esta estabilización fue lograda a mediados de 1935; con ella, dice el ministro de Hacienda, se aumentaron "los ingresos al país, y se (logró) el ascenso de los depósitos bancarios".²⁹

e) A pesar de todo, en opinión del gobierno, "una moratoria no resolvería el problema . . . Era necesario buscar una solución más efectiva que viniera a liquidar tal estado de cosas".³⁰

Esa solución anhelada fue la Ley de Liquidación de Deudas Privadas, decretada el 3 de septiembre de 1935. Esta ley regulaba la forma de pago de todas las obligaciones contraídas antes del 12 de marzo de 1932, mediante un sistema de cuotas anuales que permitían liquidar el adeudo en quince años y medio a partir del 31 de marzo de 1936. Los intereses eran reducidos al 3% anual, que deberían pagarse por semestres o trimestres vencidos, según la naturaleza del crédito.

²⁸ *Idem*, 1933, p. 107.

²⁹ *Idem*, 1935, p. 18.

³⁰ Maximiliano Patricio Brannon. *Las deudas privadas en la crisis contemporánea*. San Salvador, 1936, p. 10.

La aludida ley fue muy elogiada en su tiempo. El doctor Ortiz Mancía, por ejemplo, en su tesis doctoral dice:

Los beneficios esperados de la ley de referencia han empezado a palparse. A los ojos de todo el mundo está el bienestar general que ella ha introducido en la vida del país.³¹

Todo el proceso culminó con la creación institucional de dos bancos que la opinión pública demandaba desde fines del siglo pasado: el Banco Central de Reserva de El Salvador y el Banco Hipotecario. Por decreto de 19 de junio de 1934, el Estado compra las acciones del Banco Agrícola Comercial y crea en su lugar el Banco Central cuyos objetivos fundamentales serían:

Controlar el volumen de crédito y la consiguiente demanda del medio circulante, de manera que se asegure el valor externo del colón.

Regular la expansión o contracción del volumen del crédito y fortalecer la liquidez de los bancos comerciales mediante el establecimiento de un fondo central de reserva bancaria bajo su control.

Como era natural, los bancos particulares perdieron el privilegio de la emisión billetaria, y cesó desde entonces la especulación con la moneda que tan graves repercusiones originaba sobre la economía nacional.

Desde luego, el Banco Central fija el tipo de descuento e interés y supervisa las actividades de los bancos particulares.

El Banco Hipotecario de El Salvador fue creado por Decreto legislativo de 18 de diciembre de 1934, publicado en el *Diario Oficial*, del 8 de enero de 1935. El banco fue constituido en la forma de sociedad anónima cuyas acciones fueron suscritas, en su mayoría, por la Asociación de Cafetaleros de El Salvador (el 40%) y por la Asociación de Ganaderos de El Salvador (el 20%). Quedaba, pues, bajo el control práctico de los sectores que dirigen la economía del país, como una compensación que se les daba por la creación del Banco Central. La finalidad suprema del banco era la de conceder préstamos con garantía de primera hipoteca sobre inmuebles rústicos o urbanos, a largo plazo y a bajo tipo de interés. El banco emitió cédulas hipotecarias para el acrecentamiento de sus propios fondos.

³⁰ Algunas medidas proteccionistas. Ante el ambiente de la crisis se imponía una política proteccionista. El ministro de Hacienda en su *Memoria* correspondiente al año de 1935 fija como objetivos de la política hacendaria los siguientes:

³¹ Ortiz Mancía, *opus cit.*, p. 196.

- a) Proteger la moneda.
- b) Resolver el problema de las deudas privadas de origen pre-moratorio.
- c) Procurar para el caficultor el restablecimiento de la rentabilidad de su empresa.
- d) Facilitar al agricultor la obtención de créditos a un tipo de interés bajo y a largo plazo.
- e) Procurar un nivel de precios razonable para los artículos producidos en el país.³²

Consecuente con estos objetivos el gobierno suprimió temporalmente los impuestos de exportación del café, lo que significó para los exportadores una economía de dos millones de colones. El beneficio directo de esta medida fue para los grandes exportadores. Paralelamente el gobierno, a partir del 1932, había rebajado en un 30% los sueldos de los servidores del Estado.

También el Estado dio todo su apoyo a las instituciones de crédito, en especial al Banco Hipotecario, para que el crédito estuviera a disposición de los grandes agricultores y ganaderos.

Se tomaron algunas medidas proteccionistas en favor de ciertas industrias tales como la Fábrica de Hilados, la Compañía Henequenera, la de Harina y Trigo y la Fábrica de Porcelana. En general el interés proteccionista se orienta en beneficio del sector agrícola, pues como dice el ministro de Hacienda:

El problema (de la crisis) debe enfocarse con especial referencia a la empresa agrícola, ya que girando la economía nacional alrededor de ella, su estado próspero o adverso repercute en florecimiento o depresión de los otros factores.³³

Debe hacerse constar que las medidas proteccionistas fueron tan débiles que no modificaron en lo esencial la estructura liberal del comercio internacional. El doctor Quinteros dice a este respecto:

La naturaleza de nuestro comercio exterior siguió siendo de corte liberal; a los intereses bastardos en nada preocupó su contextura irracional, ni el entorpecimiento que con ello se causó al crecimiento económico del país.³⁴

³² *Memoria de Hacienda*, correspondiente al año 1935, p. 23.

³³ *Idem*, p. 13.

³⁴ Oscar Quinteros Orellana, *opus cit.*, p. 14.

La protección de la industria incipiente hubiera ayudado mucho al desarrollo nacional, pero la *élite* dirigente prefirió descargar el peso de la crisis sobre las espaldas populares, dispensando de impuestos a los grandes exportadores o poniendo las llaves del crédito en manos de caficultores y ganaderos, lo que mantenía la estructura semi-feudal del país y su atraso secular.

En realidad los funcionarios oficiales encargados de la política económica del país consideraban como uno de sus mayores méritos el haber conservado la estructura liberal del comercio exterior; así se desprende de lo que manifestó el doctor Juan Ernesto Vásquez, en la Reunión de Representantes de los Ministerios de Hacienda de los Estados Americanos celebrada en Montevideo en 1939, en la que, a nombre de El Salvador, dijo:

Es algo que vale la pena hacer resaltar, que El Salvador, entre 1931 a 1938 no ha creado nuevas prohibiciones a su comercio exterior, conservándose sólo aquellas de carácter sanitario y fiscal que rigen aún dentro de un régimen completamente normal de tal comercio; no ha elevado su tarifa general de aduanas, más bien se han modificado aforos en el sentido de la baja; tampoco se ha establecido ningún régimen de contingentes ni de control de divisas y se han celebrado convenciones comerciales con la cláusula de la nación más favorecida.³⁵

4º Política social. Ante los graves impactos de la crisis, y los trágicos sucesos políticos —que veremos más adelante— originados por la emergencia económica, el gobierno se vio obligado a extender la acción del Estado hacia el ámbito social; si el campo presentaba los peores cuadros de miseria y desolación, el gobierno pretendió calmar el hambre de los campesinos hambrientos, desocupados y sin tierras, entregando a unos cuantos unas parcelas de tierra. Al efecto creó un organismo llamado Mejoramiento Social, cuyo objeto principal sería “conseguir hasta donde sea posible el ideal de que cada habitante de la República, tenga su parcela en que pueda dedicarse a trabajos agrícolas propios y el modesto hogar de su propiedad”.³⁶

Dada la penuria en que se encontraba el gobierno salvadoreño, de antemano podía asegurarse que los procedimientos utilizados por Mejoramiento Social para resolver la cuestión campesina fueron tan ingenuos que no se puede menos que calificarlos como burda dema-

³⁵ Juan Ernesto Vásquez. *Actividades hacendarias en lo que se refiere a los aspectos monetarios, cambiarios y bancarios*. Ministerio de Hacienda, San Salvador, 1939, p. 6.

³⁶ *Memoria de Hacienda*, correspondiente a 1932, p. 139.

gogia. El gobierno compró algunas haciendas cuyos propietarios se encontraban en malas condiciones económicas; pagó por ellas un precio muy elevado y luego parceló haciendas y las fue entregando a cada campesino que hubiera comprobado su buena conducta y correctos antecedentes, prueba que consistía en la constancia de la afiliación al partido propatria, partido oficial que apoyaba incondicionalmente al gobernante. La entrega de tierras no llegó, en cada año, ni siquiera al 0.2% de las familias campesinas. Por otra parte, la entrega de la tierra se llevó a cabo sin proporcionar a los agricultores aperos de labranza, créditos ni asistencia técnica.

V. LA POLÍTICA NACIONAL Y LA CRISIS

1º Aspecto introductorio. Es en el ámbito de la política donde con más violencia se manifestaron los efectos de la crisis en el país. En el breve periodo de 1929 a 1935, El Salvador tuvo tres presidentes, conoció de graves y sangrientos levantamientos populares, y los destinos de la incipiente democracia nacional fueron fijados para largos años. La emergencia económica contaminó a los estratos políticos y al entrelazarse la crisis económica con la crisis política, el país estuvo al borde de la revolución social.

Para facilitar la exposición del tema seguiremos el orden cronológico de los acontecimientos agrupándolos en los siguientes puntos:

a) El gobierno del doctor Pío Romero Bosque (1929 al 1º de marzo de 1931).

b) El gobierno del ingeniero Arturo Araujo (marzo 1931 a diciembre del mismo año).

c) El ascenso del general Hernández Martínez al poder (2 de diciembre de 1931).

d) La consolidación de la tiranía martinista (marzo de 1932).

e) Algunas conclusiones.

2º El gobierno del doctor Pío Romero Bosque. Desde el año de 1911, la presidencia de la república venía siendo ocupada por civiles, que se sucedían unos a otros respetando el principio de la alternabilidad en el poder. En contraste con su antecesor, el doctor Romero Bosque realizó un gobierno de tipo paternalista con amplia concesión de libertades democráticas; aunque, como todos los gobiernos anteriores, era el representante de la oligarquía semifeudal y su obra ad-

ministrativa y financiera se limitó a mantener el marco semicolonial y semifeudal tradicional. Al conceder amplias libertades, el régimen permitió la formación de los primeros grupos sindicales con orientación francamente revolucionaria de lucha de clases, por oposición a las sociedades artesanales que predominaban en El Salvador desde el siglo pasado. Empezaron a divulgarse doctrinas sociales y muy pronto aparecieron a la luz pública organizaciones de inspiración marxista-leninista, tales como el partido comunista salvadoreño, afiliado a la Tercera Internacional, la liga antiimperialista y el socorro rojo internacional. La demanda de libros sobre temas sociales, particularmente de libros marxistas, fue extraordinaria. Las librerías hicieron pingües negocios con tales libros.

Las difíciles condiciones imperantes, tanto en la ciudad como en el campo, estimulaban la germinación de inquietudes, descontentos y zozobras en los conjuntos humanos; se buscaba con ansiedad una senda nueva que condujera a una sociedad en donde no hubiera injusticias ni conflictos. Las publicaciones de tipo periodístico se multiplicaban; el público leía todo con voracidad propia de quien ha pasado años enteros sufriendo la limitación del pensamiento (el presidente anterior mantuvo a la República bajo estado de sitio y por consiguiente con censura de prensa, durante todo su periodo presidencial). Es en estas condiciones que apareció en San Salvador un vespertino titulado *Patria*, que marcó un momento estelar en la historia del periodismo nacional. *Patria* era dirigido por un notable escritor y reformador social, Alberto Masferrer, que constituye el más eminente pensador salvadoreño y posiblemente centroamericano. Vivió en una época de crisis y supo captar el núcleo esencial de aquella época y sus conflictos, y encontrarles una solución teórica de adecuada proyección histórica.

Masferrer es el representativo típico de la salvadoreñidad: mestizo, como lo son el 60% de los salvadoreños; hijo natural, como lo son todavía el 70% de los hijos nacidos en El Salvador; proveniente de la cultura rural, como lo son el 75% de los salvadoreños. Poseedor de una vasta cultura universal, adquirida como autodidacto en sus viajes por América del Sur y por Europa, trató de asimilar esa cultura y proyectarla hacia la realidad salvadoreña. Su vida toda fue una preocupación constante por mejorar y superar esta pequeña parcela del pueblo centroamericano.

Las características más importantes del pensamiento de Masferrer son las siguientes:

- a) Orientación anarcosocialista. Siguiendo las enseñanzas de Tols-

toi, de George, de Kropotkin y de Marx, se declara partidario del socialismo, "porque el socialismo es la más santa de las doctrinas, es el cristianismo en sus más avanzadas consecuencias".⁸⁷

b) Proyección misticopanteísta: Tagore, Vivekananda, Rama Krishna y otros connotados teósofos, influyeron profundamente en la formación religiosa de Masferrer, cuyo temperamento místico fue campo propicio para que florecieran en él románticas concepciones del mundo de carácter panteísta.

c) Intenso nacionalismo. Salvadoreño cien por ciento, Masferrer trató de estudiar los problemas salvadoreños y de encontrarles soluciones netamente salvadoreñas. Ninguno ha sabido exponer con más amor y comprensión el paisaje, la tradición, el folklore, las leyendas de este pequeño país centroamericano. Su meta era desarrollar la conciencia nacional y hacer de El Salvador una auténtica nación próspera y armónica.

d) Profunda vocación por la reforma social. Masferrer es el arquetipo del reformador social; su perspicaz mirada descubrió las llagas ulcerantes de la sociedad; su verbo encendido de indignación, protesta contra las injusticias y reclama soluciones tajantes; fue el primero en denunciar públicamente a aquellos "que tienen el alma en el libro de cheques y la conciencia en el libro de caja"⁸⁸ y que mantienen a los pueblos en "una miseria tan grande, que 'mata de hambre' a millares de personas y hace sucumbir por falta de alimentos, abrigo y descanso, antes de que lleguen a los treinta años, a más de la mitad de los trabajadores".⁸⁹

En un mundo social en donde nunca se habían atacado en forma concreta los privilegios feudales de la oligarquía terrateniente, Masferrer denuncia al monopolio de la tierra:

Esencialmente feudalismo significa monopolio de la tierra, en grandes bloques de que son dueños únicos los *señores*, y en los cuales viven en calidad de vasallos o colonos, los que dan ahí su trabajo a cambio de una ración de vida. Tal como había duques, condes, barones, en los ducados, condados y baronías, los hay ahora, sin ese nombre, en las grandes extensiones de tierra que se llaman fincas o haciendas, y su poder y privilegios dependen del grandor de la posesión y de la cantidad de colonos que en ella puedan vivir. El patrono es ahí *el señor*, el dueño, el que da y quita, el que permite residir en *su dominio*, o destierra de él

⁸⁷ Alberto Masferrer, *Páginas* 1915, San Salvador, p. 18.

⁸⁸ Masferrer. *El dinero maldito. Obras completas*, t. 1, p. 59.

⁸⁹ *Idem. Cartas a un obrero. Obras completas*, t. 1, p. 103.

a quien no le obedece o le complace. El castigo tremendo, aquel que simboliza todo el privilegio, todo el poder y autoridad de señor, se encarna en esa palabra: *desterrar*, quitarle a uno la tierra.⁴⁰

Oponiéndose audazmente a los grandes señores de la tierra, reclama en grandes campañas periodísticas la nacionalización de la tierra, y el aseguramiento a cada familia campesina de una parcela para su sustento. Con respecto al problema de la vivienda, que se manifestaba con trágicas características sobre la inmensa mayoría de los salvadoreños que tenían que ocupar viviendas infrahumanas, afirma:

Sólo una codicia infinita puede impulsar a unos al acaparamiento de las casas, y sólo una imbecilidad infinita puede inducir a los otros a consentir ese acaparamiento.⁴¹ —Y concluye en la necesidad de romper este viejo y estrecho molde en que se ahoga la sociedad actual, y encaminarse sin vacilaciones, en busca de una organización más sabia y más justa.⁴²

Frente al problema de la crisis, Masferrer reclama severas economías, tanto en el presupuesto de la nación como en las economías privadas; se opone rotundamente a los viajes anuales de nuestros ricos a París y a la compra anual de carros lujosos; combate el absurdo proteccionismo del azúcar que obligaba al pueblo salvadoreño a consumir azúcar de mala calidad a precios sumamente elevados, mientras se vendía casi regalada en el mercado mundial; reclama la reforma agraria que suprima el monopolio de los terratenientes latifundistas; exige el desarrollo de industrias de manufacturas con el desarrollo consiguiente de la producción de materias primas; exige una amplia política social que no se preocupe tanto de la ciudad capital sino de los millares de aldeas a donde deben llevarse la construcción de viviendas baratas, asistencia médica, escuelas, centros de recreo, etcétera.

El ojo penetrante de Masferrer le hizo percibir la catástrofe social que se avecinaba; se dio cuenta de que la crisis, al agudizar aún más las ya agobiantes condiciones del pueblo salvadoreño, tornaba el ambiente social en algo profundamente explosivo, y vio cómo la pasión, el fanatismo, el odio y la envidia estaban penetrando por todos los estratos sociales, y que el país vivía una real situación prerrevolu-

⁴⁰ *Idem. Terraje. Obras completas, t. 1, p. 148.*

⁴¹ *Idem. La vivienda. Obras completas, t. 1, p. 135.*

⁴² *Idem. Cartas a un obrero. Obras completas, t. 1, p. 96.*

cionaria. La catástrofe era inminente y él trató de evitarla con todas sus fuerzas. Sabía que las masas populares no estaban preparadas para la lucha, pues carecían de organización, de armas y demás elementos técnicos necesarios para lograr el triunfo; sabía también que en el remoto caso de que los trabajadores llegaran a tomar el poder, su fracaso sería inevitable, pues carecían de la preparación ideológica y de los cuadros técnicos capaces de hacer marchar un nuevo sistema social; por otra parte, Masferrer se daba cuenta de que los sectores oligárquicos estaban decididos a aplastar despiadadamente cualquier movimiento insurreccionalista, y que contaban para ello con la fuerza militar; tenían a mano todos los recursos del aparato estatal, sus inmensos poderes económicos y, además, en caso de fracasar todo esto, con la ayuda todopoderosa de las potencias imperialistas que no vacilarían en desembarcar "marinos" para restaurar "el orden", tal como lo estaban haciendo los norteamericanos en Nicaragua en contra de Sandino y su legión de patriotas irreductibles.

Masferrer prevé que si tiene lugar un levantamiento popular, a más de los miles de vidas generosas que serían segadas, el resultado sería una dictadura militar que arruinaría al país por mucho tiempo. Es entonces cuando Masferrer, queriendo impedir la catástrofe, desarrolló su famosa teoría del *Minimum Vital*, que es "como un llamamiento al buen sentido de los hombres, a su bondad primaria, a su instinto de conservación, casi a su egoísmo, para que no se desgarran, para que no se devoren".⁴⁸ El *Minimum Vital* dice al proletario, al asalariado, "confórmate con lo imprescindible; conténtate con que se te asegure aquello indispensable sin lo cual no podrías vivir". Y al rico le dice: "consiente en que haya un límite para tu ambición; conténtate con que se te dé libertad para convertir en oro el árbol y la piedra, pero no la miseria, no el hambre, no la salud, no la sangre de tus hermanos". El *Minimum Vital* de Masferrer exige del Estado y de la sociedad toda la satisfacción de las siguientes necesidades:

1. Trabajo higiénico, honesto y remunerado en justicia.
2. Alimentación suficiente, variada, nutritiva y saludable.
3. Habitación amplia, seca, soleada y aireada.
4. Agua buena y bastante.
5. Vestido limpio, correcto y buen abrigo.
6. Asistencia médica y sanitaria.

⁴⁸ *El Minimum Vital. Obras completas*, t. I, p. 19.

7. Justicia pronta, fácil, e igualmente accesible a todos.
8. Educación primaria y complementaria eficaz, que forme hombres cordiales, trabajadores expertos y jefes de familia conscientes.
9. Descanso y recreo suficientes y adecuados para restaurar las fuerzas del cuerpo y el ánimo.

Las anteriores necesidades las considera Masferrer como necesidades primarias o vitales, es decir, necesidades de cuya satisfacción no se puede prescindir sin poner en peligro la vida misma de los seres humanos. Pero ese mínimo implicaba un cambio profundo en las estructuras feudales de El Salvador: seguro social, salario mínimo adecuado, elevación del nivel de vida en cuanto a alimentación popular; revolución de la vivienda; reformas educacionales, reformas sanitarias y reformas en el campo de la administración de justicia. En una palabra, una verdadera política social. Por eso el *Minimum Vital* fue combatido por los ricos, los terratenientes, con pasión y violencia; a Masferrer lo atacan los sectores de la derecha llamándolo "bolchevique peligroso", "agitador criminal", "elemento peligroso"; pedían contra él la cárcel o el destierro. La izquierda extrema, a su vez, lo combate con saña, tachándolo de traidor, de socialista de derecha, de demagogo, de derechista disfrazado de apariencias izquierdistas. Su ideología del *Minimum Vital* fue considerada como una ingenua manifestación de socialismo utópico, carente de toda base científica. Colocado entre dos fuegos y visto con desconfianza y a veces con hostilidad por parte del gobierno, la popularidad se acrecienta; las masas intuyen en él al gran dirigente que puede resolver los graves problemas de la crisis. Las ideas de Masferrer se difunden ampliamente y poco a poco se va formando un núcleo de discípulos que rodean al escritor y lo acompañan en sus luchas. El diario *Patria* se convierte en el periódico más leído de todo el país; el pueblo todo nimba la personalidad de Masferrer con características apostólicas y empieza a designarlo con el honroso título de "maestro".

Aprovechando el ambiente de libertades democráticas, muchos gremios se organizaron para poder defender en forma más adecuada sus particulares intereses. Los primeros en organizarse fueron los obreros que formaron sus sindicatos de empresa y una gran confederación regional de trabajadores. Los estudiantes universitarios constituyeron la Asociación General de Estudiantes Salvadoreños (AGEUS), poderoso grupo de presión que ha jugado destacado papel en las contiendas políticas nacionales.

La actividad de los estudiantes en el periodo presidencial de Romero Bosque fue verdaderamente notable: vigilaron el mantenimiento de las libertades públicas, luchando por el pronto levantamiento del estado de sitio que en más de alguna oportunidad se vio obligado el presidente a decretar; lucharon también los estudiantes por clarificar los problemas nacionales a través de un órgano de combate denominado *Opinión Estudiantil* que junto con *Patria* de Alberto Masferrer, significó la expresión cálida y apasionada de un periodismo audaz, que denunciaba con valentía todos los atropellos e injusticias que se originaban en el medio social salvadoreño de aquel tiempo.

En 1929 se inició el último año del gobierno del doctor Pío Romero Bosque. Era un año de crisis política porque tenían que celebrarse elecciones presidenciales; justamente, a fines de dicho año, como hemos visto, se inicia la crisis económica; esta coincidencia, en la que la crisis económica se enlaza con la crisis política, tuvo consecuencias catastróficas para nuestro país.

Todavía era la época en que no existían partidos políticos permanentes, pues, por un singular proceso histórico, los llamados partidos tradicionales (liberal y conservador) habían desaparecido; al aproximarse el periodo electoral, se improvisaban partidos políticos alrededor de una personalidad destacada, el futuro candidato —quien formulaba un programa de gobierno y se lanzaba a una gran campaña nacional de propaganda. Los fondos necesarios para el funcionamiento del partido eran proporcionados, en parte, por el candidato y, en parte, mediante donativos de personas pudientes. Los grandes latifundistas y caficultores ayudaban económicamente al candidato de sus simpatías, y su poderío financiero aseguraba casi siempre el triunfo del candidato de sus preferencias. En la época a que nos estamos refiriendo, aparecieron cinco aspirantes al solio presidencial: uno de los candidatos gozaba del apoyo del gobernante y era considerado el candidato oficial; tres más no tenían mayor arraigo popular; pero el quinto, el ingeniero Arturo Araujo, millonario terrateniente, gozaba de gran popularidad debido a sus actitudes filantrópicas. Fundó el Partido Laborista imitando el modelo británico, y oportunamente logró ganar el apoyo del maestro Masferrer ofreciéndole aplicar, si llegaba al poder, el programa del *Minimum Vital*. Masferrer, ilusionado con la promesa presidencial, le da todo su apoyo al candidato Araujo, con lo cual el laborismo ganó gran cantidad de adeptos. Por otra parte, el programa vitalista de Masferrer contemplaba la nacionalización de la tierra y la entrega de parcelas

al campesinado. Este aspecto difundido por los propagandistas movilizó a la masa campesina provocando su entusiasmo. La crisis empezaba a afectar seriamente al sector rural: un gran conjunto de pequeños y medianos propietarios (aproximadamente un 28%) habían perdido sus tierras, otros estaban ante la amenaza de futuras ejecuciones; además, la miseria empezaba a enseñorearse de la mayoría de los hogares campesinos. La oferta de una parcela de tierra para cada familia campesina abrió un horizonte de esperanza para todos aquellos que estaban llegando al borde de la desesperación.

Las elecciones se desarrollaron en un clima de auténtica libertad. Nunca el país ha vuelto a vivir en un clima semejante. El triunfo del Partido Laborista fue rotundo. El ingeniero Arturo Araujo fue electo presidente de la República y tomó posesión de su cargo el primero de marzo de 1931; llevaba como vicepresidente al general Maximiliano Hernández Martínez, que había lanzado su candidatura a la presidencia; siendo el más impopular de los candidatos, decidió unirse al Partido Laborista y jugar como aspirante a la vicepresidencia. El presidente Arturo Araujo lo nombró su ministro de Guerra.

3º El gobierno del ingeniero Araujo. El triunfo del Partido Liberal originó grandes alegrías en un sector y profundo desconcierto en otro. La oligarquía de los terratenientes quedó asombrada; no podía concebir que sus candidatos hubieran sido derrotados por la chusma, por la "plebe miserable". Por primera providencia la oligarquía asumió una actitud de boicot al nuevo gobierno. Ninguno de sus prohombres aceptó puestos en el gabinete. Los técnicos presentaron su renuncia, y el ingeniero Araujo tuvo que iniciar sus labores con equipo de gente que por primera vez se acercaba al poder y que carecía de experiencia en la administración pública. La casi totalidad de las plazas del Estado fueron ocupadas por miembros del Partido Laborista, muchos de los cuales llegaron a desplazar a funcionarios que tenían largos años de desempeño en los mismos. La máquina estatal empezó a funcionar con notoria pesadez y torpeza. Mientras tanto la crisis económica penetraba más y más en las entrañas del sistema, y el Estado se mostraba incapaz de tomar adecuadas medidas para detener o contrarrestar los perniciosos efectos de la aludida crisis. Las finanzas eran un desastre; los sueldos de los empleados públicos dejaron de pagarse, incluyendo los sueldos de los militares. El descontento era general. Los campesinos pedían la tierra prometida y su desengaño los inclinaba hacia la rebeldía. Se sentía que la nave carecía de un verdadero timonel y que marchaba a la deriva.

Fueron los estudiantes universitarios los primeros que iniciaron un movimiento enérgico de protesta. El gobierno pretende contratar un nuevo empréstito como única solución ante la crisis. Los estudiantes denuncian el proyectado empréstito como la venta de la soberanía nacional ante el imperialismo. La Asamblea Nacional, en una agitada sesión, aprueba finalmente la contratación del mencionado empréstito. Los universitarios salen a la calle en manifestación de protesta, y el pueblo se les une formándose columnas cerradas que ocupaban las calles del centro de San Salvador en una gigantesca demostración de repudio a la política del régimen. El gobierno ordenó a la fuerza militar disolver la manifestación por medio de las armas. Hay choques violentos entre civiles y militares. La manifestación es disuelta parcialmente y en forma sangrienta, pero las fuerzas estudiantiles y populares se reorganizan y se concentran en el parque Barrios, en donde oradores impetuosos hablan francamente de derribar al gobierno. El presidente responde decretando el estado de sitio en toda la República. Las libertades democráticas quedaron suspendidas. San Salvador vivió entonces momentos de aguda tensión política. Diversos núcleos políticos se dedicaban a la conspiración. La oligarquía tradicional veía complacida el proceso de los acontecimientos, que ella también contribuía a estimular, pues ello permitiría derribar al gobernante que subió al solio presidencial sin su aprobación y aun en contra de sus particulares intereses.

El gran líder popular, el maestro Masferrer, nombrado diputado, dio en el seno de la Asamblea brillantes batallas en favor de su programa del *Minimum Vital*; la inercia de los intereses creados opuso a sus propuestas un frío y, a la vez, sólido valladar, que impidió decididamente la realización de sus anhelos. Ante la situación desastrosa, desengañado, triste y enfermo, Masferrer se exilia voluntariamente, yéndose a vivir a Guatemala y, posteriormente, a Honduras, de donde regresará pocos meses después totalmente postrado, para morir en su solar nativo.

El vicepresidente de la República, general Maximiliano Hernández Martínez, a quien el presidente había confiado el Ministerio de Guerra, prepara en la sombra un golpe de Estado; con hipocresía y astuta habilidad maneja hilos de la conspiración que jóvenes oficiales llevaban a cabo en contra del régimen, y en la noche del primero al dos de diciembre de 1931, los mencionados jóvenes se alzan en armas; toman violentamente la Casa Presidencial, asumen el poder político mediante la constitución de un gobierno colectivo *de facto* llamado Directorio Militar, y levantan el estado de sitio. El presi-

dente Araujo huye a Guatemala con su gabinete y principales partidarios. El triunfo del anhelo democrático parece realizado. El pueblo desborda por las calles saludando la caída del presidente y viviendo al militarismo que había restablecido el imperio de la libertad. Pero detrás de aquel oropel y de aquellas nubes rosadas, se cernía sobre el pueblo salvadoreño una grave y mortal amenaza: la fuerza funesta de los oligarcas que harían del militarismo un sistema adecuado de gobierno.

Después de unos días de incertidumbre, en los que menudearon las intrigas y las discusiones bizantinas, Hernández Martínez asume el poder en una mascarada de procedimiento constitucional urdido por abogados de la antigua oligarquía: Martínez, en su carácter de vicepresidente, ocupa la vacante dejada por el presidente titular, quien al abandonar el país sin el correspondiente permiso de la Asamblea, había dado lugar para que ésta lo destituyera conforme a los preceptos de la Constitución. No importaba que el presidente se hubiera visto forzado a abandonar el país, no sólo para salvar a su gobierno sino también para salvar su propia vida; no importaba el hecho de que el nuevo presidente era nada menos que el ministro de la Guerra del régimen anterior y que estaba obligado por su honor a defender el aludido régimen.

4º El régimen de Hernández Martínez. Al subir al poder el futuro dictador Hernández Martínez tuvo que enfrentarse con los siguientes problemas:

a) El reconocimiento internacional. A pesar del pretendido arreglo constitucional, el nuevo gobierno no fue reconocido por el resto de los Estados centroamericanos ni por los Estados Unidos; el aludido reconocimiento estaba obstaculizado por las célebres Conferencias de Washington de 1923, en las cuales se prohibió el reconocimiento de los gobiernos *de facto* surgidos por golpe de Estado. Con esta cláusula se pretendía evitar tales golpes de Estado.

b) Resolver a la mayor brevedad posible los más agudos problemas planteados por la crisis económica, tales como la quiebra de los deudores y la amenaza de que los bancos se apoderaran del 70% de las tierras laborables, el de la caída del colón, el del retraso de los sueldos de los funcionarios públicos, etcétera.

c) Liquidar la creciente oposición al nuevo régimen. El Partido Laborista era muy grande; la mayoría de los campesinos que esperaban el prometido reparto de tierras se movían inquietos, pues sus

líderes les explicaban que los militares se oponían a que se les entregara la tierra y que para impedir tal entrega habían quitado al presidente Araujo.

d) Impedir la restauración del presidente destronado. Éste se había refugiado en Guatemala, en donde el presidente Jorge Ubico, gran amigo suyo, le ofreció apoyarlo con efectivos bélicos para que invadiera El Salvador y recuperara el poder.

e) Contener el intenso desarrollo del movimiento comunista que se incrementaba peligrosamente en las filas sindicales y entre los trabajadores del campo.

Los cinco problemas anteriores exigían inmediata solución. La oligarquía reclamaba con energía la solución en particular de la inquietud campesina y del avance del comunismo.

Martínez puso manos a la obra. Su objetivo táctico inmediato fue el reforzar la unidad del ejército y asegurar su lealtad y apoyo. Los oficiales inseguros fueron dados de baja, y algunos, arrojados al exilio. A la par reforzó su alianza con el sector oligárquico, sector que le ofreció los cuadros técnicos de estadistas experimentados para integrar el gabinete y que antes había negado al presidente Araujo.

El plan estratégico de Martínez se proyectaba a largo alcance; sabía de los preparativos de Araujo en Guatemala y también de los trabajos subrepticios que los líderes del Partido Laborista realizaban entre los campesinos de la zona occidental del país. Araujo proyectaba hacer coincidir su invasión con un levantamiento agrario en la zona por donde pensaba atravesar la frontera. Martínez se propone precipitar el levantamiento campesino mediante hábiles provocaciones; daría además libertad de movimiento a los comunistas con el objeto de atribuir al levantamiento campesino un ropaje comunista. Así Martínez magnificaría la rebelión y se presentaría ante el mundo entero como el salvador del país ante la amenaza del comunismo. Con esto lograría Martínez el reconocimiento y el apoyo de los demás países centroamericanos y, en especial, de los Estados Unidos; el retorno del ingeniero Arturo Araujo a la presidencia quedaría totalmente descartado y, finalmente, en el aspecto interno, la oligarquía nacional otorgaría su plena confianza al nuevo régimen y Martínez quedaría debidamente consolidado en el poder.

El plan de Martínez se va cumpliendo aceleradamente:

1º Se permite la realización de elecciones municipales, y en ellas, la participación abierta y franca del Partido Comunista de El Sal-

vador, Sección de la III Internacional (Comunista). Por primera y última vez en la historia de El Salvador, los comunistas presentaron candidaturas "proletarias" sobre el principio de la lucha de clases. El clima de libertad electoral dejado por el presidente Romero Bosque, fue respetado en apariencia. Los ciudadanos ejercieron el sufragio sin ninguna coacción de parte de las autoridades; el sufragio era público y el nombre de cada votante quedaba consignado en los correspondientes pliegos así como los candidatos por quienes se votaba. Las candidaturas comunistas lograron gran cantidad de votos. Las causas de este éxito fueron las siguientes:

- a) Convicción y disciplina de partido o de simpatizante.
- b) Espíritu de novedad.
- c) Deseo de manifestarse en contra de las otras candidaturas.
- d) El descontento general por la aguda situación de crisis.

Cuando las autoridades se dieron cuenta de que en algunos municipios se corría el riesgo de que triunfaran las candidaturas comunistas, se hizo intervenir a la guardia nacional y se ayudó a triunfar a la candidatura que seguía en el orden de los sufragios. En San Salvador y en Santa Tecla se favoreció el triunfo del Partido Claromonista permitiendo la duplicación de votos. La candidatura comunista para el municipio de San Salvador fue la siguiente:

Para alcalde: Joaquín Rivas.

Para primer regidor: Hermógenes Rodas Guzmán.

Para segundo regidor: Rogelio Castellanos.

Para tercer regidor: Rafael Flores.

Para cuarto regidor: Dr. Jaime Dreyfus.

Para quinto regidor: Ladislao Martínez.

Para sexto regidor: Pablo Guevara.

Para octavo regidor: Miguel Ángel Martínez.

Para síndico regidor: Dr. Rafael Angulo Alvarenga.

Veinte días más tarde, cuando Martínez desató la represión comunista, la mayoría de las personas que figuraron en dicha planilla fueron fusilados como peligrosos agentes rojos. La única prueba de su peligrosidad fue el haber figurado en la planilla de candidatos comunistas.

El diario *La Prensa* de San Salvador, del 4 de enero de 1932, al informar sobre las elecciones dice: "Al medio día el bando político

que tenía más gente en esos momentos era, en justicia, el Partido Comunista." El mismo cronista señala el problema de los que votaban varias veces, arma con la cual lograron derrotar a los candidatos comunistas.

Entre los lugares donde la fuerza pública intervino para impedir el triunfo de los comunistas pueden citarse Soyapango, Guazapa, Izalco, Nahuizalco y Colón. En otros lugares la votación fue suspendida arbitrariamente.

Los fraudes y atropellos electorales originaron profundo descontento que vino a ahondar, aún más, la tensión social en que se vivía. Sectores importantes entre los militantes comunistas, simpatizantes y miembros del llamado Socorro Rojo Internacional, reclamaban en reuniones y en mítines de masas la necesidad de la insurrección armada, para protestar contra la estafa electoral sufrida.

El gobierno por su parte siguió una política de franca provocación. A continuación, algunos ejemplos de estos incidentes provocativos:

1º El 4 de enero de 1932 se originaron sucesos sangrientos en las fincas de los cantones Santa Rita, Anonal, El Paraíso, el Chayal, Tortuguero y Montañita, jurisdicción de Atiquizaya. Los trabajadores se declararon en huelga y se negaron a cortar el café. Intervino la Guardia Nacional y vino el derramamiento de sangre: murieron el cabo Manuel A. Zelaya y el líder "comunista" Indalecio Ramírez. Hubo varios heridos y desaparecidos entre los trabajadores. Tropas del Ejército Nacional se movilizaron desde Santa Ana y Ahuachapán para restablecer el orden y garantizar el cese de la huelga.

2º Alboroto público en Mejicanos el día seis de enero, motivado por el descontento popular con el resultado de las elecciones. Hay detenidos y golpeados.⁴⁴

3º El 7 de enero *La Prensa* informa que gran parte de la cosecha de café se está perdiendo por falta de brazos. En realidad lo que pasa es que por la crisis los caficultores no pueden pagar los antiguos salarios y los han bajado todavía más, a niveles tan miserables que no constituyen ningún incentivo para las poblaciones hambrientas.

4º El 8 de enero la casa del director de *La Tribuna* fue apedreada en un alboroto popular, como consecuencia de las elecciones, en la ciudad de Usulután.⁴⁵

⁴⁴ Colección de *La Prensa* del primer trimestre de 1932.

⁴⁵ *Idem.*

5º El 9 de enero *La Prensa* informa de actividad comunista en Armenia. Los líderes fueron encarcelados.

6º El 11 de enero tienen lugar las elecciones para diputados a la Asamblea Nacional. Con el fracaso electoral anterior ya nadie tiene confianza en la libertad electoral y muy pocos son los que votan.

7º El 12 de enero tremenda agitación en el campo; los rojos reparten hojas sueltas amenazantes. Hombres armados intentan tomar Tacuba, algunas haciendas y las poblaciones de Izalco, Nahuizalco y Juayúa.⁴⁶

8º El gobierno expulsa del país al comerciante Alberto Bobak, por suponérsele de nacionalidad rusa y considerarlo extranjero pernicioso y agitador comunista. La Corte Suprema de Justicia amparó al referido extranjero, pero éste ya había sido extrañado del país.

9º El 16 de enero huelga en la Hacienda de San Isidro, cuyo casco fue sitiado por centenares de trabajadores que demandaban aumento de salarios y mejoría en la comida. Este conflicto fue resuelto amigablemente gracias a la eficaz mediación del gobernador del Departamento. Este parece ser el único caso de solución pacífica de un conflicto laboral en aquel tiempo.

10º El 19 de enero algarada a altas horas de la noche en el barrio de Concepción de San Salvador, cuando numerosos trabajadores trataron de arrebatar unos prisioneros —líderes políticos izquierdistas— que la Guardia Nacional conducía a la Penitenciaría de San Salvador para ser interrogados.⁴⁷

11º Ante la creciente ola de protesta y de actos de rebeldía los agricultores del departamento de Santa Ana se reúnen con el subsecretario de Defensa y deciden organizar una especie de guardia blanca para defender sus propiedades.⁴⁸

El general Martínez consideró llegado el momento de actuar. El momento era decisivo: los ricos, los grandes propietarios estaban atemorizados y exigían medidas represivas inmediatas; la conspiración araujista avanzaba entre los elementos campesinos de occidente; los comunistas y sus simpatizantes hacían prosélitos por todos lados aumentando el pánico de los terratenientes; el hambre y la miseria penetraba a todos los hogares campesinos con lo que el clima propicio para la violencia y la desesperación se acrecentaba. Algunos lí-

⁴⁶ *Idem.*

⁴⁷ *Idem.*

⁴⁸ *Idem.*

deres obreros decidieron hablar con el presidente para encontrar una solución pacífica a los conflictos y hacer que cesaran las provocaciones de la guardia y demás autoridades. El presidente los rechaza enfáticamente y decide actuar conforme a sus propios planes.

El 21 de enero la ciudad de San Salvador despertó con la noticia de que había abortado un complot comunista de grandes alcances nacionales. Según el comunicado oficial, se trataba de un plan insurreccional que perseguía la toma del poder; células comunistas infiltradas en los cuarteles habían preparado la entrega de los mismos. Las detenciones se hicieron con rapidez y en gran cantidad. Tres líderes comunistas: Agustín Farabundo Martí, secretario del Socorro Rojo Internacional, exsecretario del general Augusto César Sandino, hombre de gran popularidad entre obreros y campesinos, verdadero líder carismático; y los estudiantes Alfonso Luna y Mario Zapata, destacados líderes universitarios. Los tres se encontraban escondidos en una casa aislada de una población aledaña a San Salvador, desde hacía varios días antes, pues sabían que la policía los buscaba. Martínez los designó como las víctimas propiciatorias; fueron acusados de haber sido encontrados in fraganti, en su cuartel general, planeando la insurrección. Los capturados fueron sometidos a consejo de guerra, pues se les incorporó a la jurisdicción militar; se les condenó a muerte y fueron fusilados inmediatamente, como culminación de uno de los procesos judiciales más monstruosos que conoce la historia salvadoreña.

La noticia de la detención y muerte de los líderes fusilados, se extendió por todo el país; es más, la noticia de su muerte se anticipó por el rumor popular que afirmó al día siguiente de la captura que habían sido fusilados sin formación de juicio, en el mismo cuartel de la penitenciaría. El descontento popular estalló y muchas turbas de gentes hambrientas y desesperadas, que habían depositado toda su esperanza y todo su amor en Agustín Farabundo Martí, se lanzaron a la revuelta, en un acto de desesperación que los llevó, a ellos también, a la muerte. Esto es lo que esperaba el tirano; las protestas populares fueron denunciadas por el déspota como el cumplimiento del plan de subversión comunista nacional e internacional. Los canales de la propaganda se desbordaron; los periódicos y las radiodifusoras difundieron por el mundo el tremendo peligro de sovietaización de El Salvador, Martínez ordenó la movilización del ejército y empezó la represión más implacable que conoce la historia de El Salvador.

El estado de sitio fue decretado en todo el país; las libertades individuales fueron suspendidas; para trasladarse de un lugar a otro;

dentro del territorio nacional, tenía que sacarse pasaporte; se dictó también la "ley marcial", o ley de queda, por medio de la cual se prohibía en San Salvador y ciudades importantes, salir a la calle después de las ocho de la noche, so pena de poder ser muerto impunemente. Se autoriza la incorporación automática, al ejército, de todo propietario y, en general, de todo aquel que tuviera intereses que defender frente al comunismo, a fin de que pudiera armarse y repeler cualquier ataque comunista. Se creó también una "guardia cívica", formada especialmente por elementos de la clase media, los cuales se encargaron de la vigilancia de las ciudades durante la noche, y fueron los que cometieron muchos atentados con motivo de la famosa "ley marcial", pues varias personas murieron a manos de dichos guardias cívicos por haber salido a la calle después de las ocho de la noche, tal vez cuando imperiosas necesidades hogareñas los impelían a salir en busca de un médico o de una medicina.

La represión de las fuerzas martinistas llegó a extremos increíbles; bastaba estar vestido como campesino en las zonas de actividad bélica, para que se diera muerte a dicha persona, cualquiera que fuera su sexo o su edad. El dictador decía a sus subalternos: "no quiero prisioneros"; y por consiguiente los obligaba a matar a mansalva a cuanto campesino cayera en sus manos. No corresponde describir paso a paso las múltiples incidencias de la campaña represiva llevada a cabo sobre las "hordas comunistas", de campesinos armados con machetes y piedras que se oponían a ejércitos modernos, armados con ametralladoras y fusiles automáticos. No se ha determinado todavía la magnitud de las víctimas de esta salvaje represión; pero puede darnos una idea aproximada el siguiente telegrama emitido por el general Tomás Calderón desde el puerto de Acajutla al almirante británico Smith, jefe de una flotilla de buques de guerra ingleses, que se aproximaron a las costas salvadoreñas, y ofrecieron el desembarco de marinos para ayudar a aplastar la rebelión comunista. Dicho telegrama dice así:

28 de enero de 1932

El Jefe de operaciones en la zona occidental de la República, general José Tomás Calderón, saluda atentamente en nombre del gobierno del general Martínez y en el suyo propio, al almirante Smith del crucero Rochester, al comandante V. G. Brahudes del destroyer Skeena y al de igual grado Hart, del destroyer Vancouver y se complace en comunicarles que la paz en El Salvador está restablecida; que la ofensiva

comunista ha sido totalmente abatida y dispersa y que se llegará a la completa exterminación. *Que ya están liquidados cuatro mil ochocientos bolcheviques.*

Jiménez Barrios, comentando este telegrama, dice: "¡4 800 campesinos muertos únicamente en seis días, y la matanza duró tres meses!"⁴⁹

El anterior telegrama originó algunos comentarios críticos; muchas personas se escandalizaron ante la matanza que se estaba llevando a cabo. Casi cinco mil personas "liquidadas" en seis días parecía una cifra monstruosa. Fue entonces cuando el general Calderón hizo aclaraciones públicas en el sentido de que la palabra "liquidados" no quería decir muertos sino, simplemente, personas fuera de combate. Tal explicación no hizo más que arruinar las cosas; los que no habían puesto atención en el texto del telegrama ahora se preocuparon de analizarlo críticamente y la explicación del general les resultó completamente estrafalaria.

La represión se prolongó durante varias semanas. Por primera vez se usaron ametralladoras para fusilar a grandes conjuntos humanos; los cadáveres eran colocados en carretones y camiones de carga y arrojados a las barrancas. Los pliegos de votación en donde se consignaban los nombres de los votantes y la candidatura por quien votaban, sirvieron de base para las persecuciones: los que habían votado por las candidaturas comunistas eran buscados por las fuerzas represivas, y si eran capturados, muy pronto pasaban a los grupos de fusilados.

Terminada esta dramática y sangrienta etapa, Martínez logró la mayor parte de sus objetivos:

- a) Se consolida definitivamente en el poder.
- b) La oligarquía nacional le entrega plenamente su confianza.
- c) Internacionalmente, los Estados Unidos le dan su completo respaldo y, por consecuencia, la amenaza de invasión del presidente Araujo con el apoyo del gobierno de Guatemala, desapareció para siempre.
- d) El "laborismo" araujista quedó destruido y sin ninguna capacidad ofensiva.

⁴⁹ Rodolfo Jiménez Barrios. *La tiranía de Martínez en El Salvador o el caso de una "democracia" americana*. México, D. F., 1941, p. 20.

- e) El comunismo fue liquidado físicamente. El movimiento sindical quedó totalmente desorganizado.
- f) La Universidad, suprimida su autonomía y encarcelados o expatriados sus más importantes líderes, asumió una actitud de pasividad ante el despotismo entronizado.
- g) El aparato de opresión del Estado se depura y consolida.
- h) El sistema de derecho se reforma con el objeto de garantizar la perpetuación del despotismo.
- i) Las condiciones nuevas permitieron descargar todo el peso de la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores.

A partir de entonces se va a entronizar en El Salvador un régimen de despotismo militarizado que se mantendrá en el poder durante largos trece años.

VI. LA CRISIS EN EL ÁMBITO SOCIOCULTURAL

1º *Consideraciones generales*

La crisis económica iniciada a fines de 1929 muy pronto rebasó sus propios límites, y se convirtió en una crisis general que afectó las diversas esferas de la sociedad global. Los hechos sociales están íntimamente entrelazados en una espesa y compleja trama que los une en intensa y total solidaridad. Las alteraciones económicas provocaron repercusiones en cadena que abarcaron todos los ámbitos de la vida nacional; desde los hechos políticos hasta los procesos educativos, desde la delincuencia hasta el alcoholismo; la religión lo mismo que el derecho; el arte al igual que el deporte, todo fue arrasado en impetuoso torbellino al vórtice de la crisis, y la vida total del país se vio alterada hasta sus cimientos.

Aparte de los poquísimos estudios dedicados a los aspectos económicos de la crisis, o a la pretendida "sublevación comunista", no hay estudios dedicados a las proyecciones de la crisis en el ámbito sociocultural. Con el reducido material que hemos tenido tiempo de investigar expondremos a continuación los aspectos más destacados de estas proyecciones.

2º *La crisis en el ámbito del derecho*

- a) El fenómeno jurídico ha sido considerado por los autores de

teoría del derecho como uno de los sectores de mayor sensibilidad ante las transformaciones económicas. Las épocas de crisis son épocas de grandes transformaciones en el ámbito del derecho. Las normas jurídicas, según Kelsen, no constituyen un “orden eterno y sagrado, sino un compromiso de fuerzas sociales que luchan entre sí”,⁵⁰ pero en las épocas críticas más que un compromiso entre las fuerzas en pugna, se destacan las características propias de la voluntad de la clase dominante que trata a toda costa de consolidar sus privilegios y de salir lo menos perjudicada posible de la situación de emergencia crítica.

En El Salvador, los años treinta significaron urgentes y laboriosas transformaciones del sistema jurídico. Dos objetivos persiguieron tales transformaciones: 1) armar al Estado, como representante político de la sociedad, del instrumental normativo e institucional que le permitiera defenderse mejor ante la avalancha de la crisis y defender también los intereses económicos más importantes, y 2) afinar el aparato represivo del Estado de manera que permitiera impedir cualquier estallido revolucionario y, a la vez, dotar al Poder Ejecutivo de las bases normativas adecuadas para controlar totalitariamente la conducta de los ciudadanos. Veamos con algún detalle ambas tendencias.

b) El nuevo derecho financiero. El Estado salvadoreño no estaba preparado, en manera alguna, para las emergencias críticas; sus estructuras profundamente liberales, limitaban el papel del Estado a dejar actuar libremente a las fuerzas privadas de la economía. El colapso motivado por la caída brusca de los precios del café impone a los gobernantes timoratos y a los más aferrados ministros del libre-cambismo, la necesidad de tomar algunas medidas intervencionistas de emergencia; son medidas que en un principio van a reflejar la timidez e ingenuidad de quienes las tomaban. Poco a poco, a medida que avanza la crisis y los problemas se agudizan, ante el ejemplo de otros países, las medidas se tornan institucionales y tienden a dotar al Estado de los instrumentos intervencionistas y reguladores que le hacían tanta falta. Presentaremos el desarrollo de los principales decretos de índole financiera que fueron emitidos de 1930 a 1935.

1º Decreto del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, del 23 de enero de 1931 por medio del cual el gobierno se incauta de los fondos que el representante fiscal recaudaba de la renta de aduanas para el servicio del empréstito. En su *Memoria*, correspondiente al

⁵⁰ H. Kelsen. “Kelsen’s Pure Theory of Law”, *Harvard L. Rev.* 1941, p. 48.

año de 1931, el ministro de Hacienda dice: "La situación del Tesoro es crítica, es un momento de vida o muerte para la nación, y como necesidad suprema el Poder Ejecutivo acordó dicho decreto." Ingenualmente el ministro considera que la medida es provisional para "mientras prevalezcan las circunstancias causantes".

2º Decreto del Poder Ejecutivo, del 7 de octubre de 1931, que crea el fondo intangible del oro en custodia. Los billetes se declaran inconvertibles. La medida tiende a tranquilizar a los deudores de los bancos y a estimular la ampliación de la circulación. En realidad, dicha medida, considerada "temporal", sólo logró beneficios para los bancos privados.

3º Decreto Legislativo del 12 de marzo de 1932, cuyas partes resolutivas son: se deroga el decreto de 7 de octubre de 1931; se ratifica la inconvertibilidad de los billetes de banco; se ordena a los bancos abrir créditos a los agricultores, comerciantes e industriales; todo crédito hipotecario o personal gozará de moratoria; se rebaja el tipo de interés en un 40%; el mínimo debe ser el 6% anual; se suspenden los efectos de los juicios ejecutivos con sólo que el deudor pague los intereses al tipo legal.

Lo verdaderamente importante del decreto consistió en la moratoria concedida a toda clase de créditos y en la rebaja del tipo de interés. Los intereses afectados hicieron campaña de opinión pública criticando dicha ley como atentatoria, inconstitucional y retroactiva. Los hechos se impusieron y la ley se mantuvo, salvando a miles de deudores.

4º Decreto Legislativo de 16 de mayo de 1932, que estableció que:

b) Los créditos prendarios se dedicarían a pagar jornales, materias maquinarias o utensilios.

b) Los créditos prendarios se dedicarían a pagar jornales, materias primas, abonos, semillas, aperos, instrumentos, ganado y demás implementos necesarios para la explotación agrícola.

c) La prenda se establece sin desplazamiento de la garantía prendaria.

d) La garantía prendaria afectaba a la propiedad raíz.

Con graves errores técnicos, el legislador salvadoreño, empieza a orientarse hacia la creación de instituciones que ayudaran al Estado y a los particulares a salir de la mejor manera posible de la crisis.

5º Decreto Legislativo de 3 de junio de 1932. Con la precipitación e inexperiencia de los legisladores, los anteriores decretos con-

tenían muchos errores, lagunas y antinomias. El presente decreto tuvo por fin aclarar y mejorar las leyes de emergencia anteriormente enunciadas.

6º Decreto Legislativo de 25 de julio de 1932. Contiene aclaraciones e interpretaciones auténticas de la Ley del 12 de marzo de 1932.

7º Decreto Legislativo del 10 de noviembre de 1932. El conjunto de disposiciones de emergencia se había acumulado en tal forma que se imponía una sistematización técnica de todos los decretos financieros: ésta fue la llamada Ley de Emergencia, que reunió en un solo cuerpo todas las disposiciones tomadas frente a la crisis.

8º Decreto Legislativo del 14 de noviembre de 1932, que autoriza dar en arrendamiento, en pequeños lotes, los bienes raíces del Estado. Todas las leyes de emergencia anteriores, contemplaban el beneficio y la defensa de los propietarios. Por primera vez, después de la rebelión y matanza de campesinos de enero del mismo año 1932, empieza el Estado a preocuparse por la situación de los campesinos sin tierra. El enfoque de la ley es totalmente equivocado; ni siquiera pudo aplicarse en gran escala.

9º Decreto-Ley de 31 de mayo de 1932, que establece reformas importantes a la Ley Moratoria de 12 de marzo del mismo año. Su objetivo: dar mejor protección a los deudores.

10º Decreto Legislativo de 8 de junio de 1933. Ley sobre Bien de Familia. Otra de las formas con que el legislador pretendió resolver el agudo problema social fue la de asegurar una base económica a las familias. El bien de familia se declara inembargable así como también sus frutos. El bien beneficiado no debe exceder de cinco mil colones.

11º Ley de Prenda Agraria e Industrial, del 24 de octubre de 1933. Contiene mejoras técnicas a la Ley de 16 de mayo de 1932.

12º Facilitando la realización de asambleas de accionistas de los bancos particulares, de manera que por simple mayoría de acciones podían renunciar al privilegio de emitir billetes. Decreto Legislativo de 4 de junio de 1934.

13º Decreto Legislativo de 19 de junio de 1934. Ley del Banco Central de El Salvador. Por fin el Estado se decide a crear una institución bancaria fundamental: la banca central. La estructura del nuevo banco es sumamente conservadora y aún deja importantes

privilegios a la banca privada, pero con todo es ésta una de las más importantes medidas financieras.

14º Decreto Legislativo de diez de octubre de 1934. Regula el destino de los impuestos sobre la exportación del café a fin de crear un fondo que permita la creación de un banco hipotecario.

15º Decreto Legislativo de 29 de octubre de 1934. En vista de la favorable acogida de la Ley de Prenda Agraria, el legislador introduce reformas a dicha ley que le dan mayor eficacia. En este caso se concede preferencia a los créditos prendarios, aun por encima de los créditos hipotecarios.

16º Decreto Legislativo de 3 de noviembre de 1934 que autoriza al Poder Ejecutivo para que dé en arrendamiento, con promesa de venta, lotes de 15 hectáreas de los terrenos nacionales. Los lotes se venderían en subasta y se tomaría como postura lo que se ha pagado en cánones de arrendamiento. Los lotes adquiridos no serían gravables ni embargables durante un periodo de 25 años. El legislador, sometido a la presión del jefe de gobierno pretende resolver el problema agrario salvadoreño mediante el reparto de tierras. El ensayo fracasó rotundamente.

17º Decreto Legislativo de 8 de enero de 1935. Ley del Banco Hipotecario de El Salvador. Es éste otro de los pasos positivos del nuevo derecho financiero. El banco recién creado se destina a operar préstamos hipotecarios para ayudar especialmente a los agricultores. Se constituye en forma de sociedad anónima; la mayoría de las acciones (8 838) pasan a la Asociación Cafetalera de El Salvador; 150 acciones a la Asociación de Ganaderos de El Salvador, quien más tarde recibiría de la Cafetalera, 1 650 acciones más. El banco introduce las cédulas hipotecarias como forma de canalización de los ahorros particulares.

18º Decreto Legislativo de 24 de enero de 1935. Introduce reformas técnicas al Reglamento de Licores con el objeto de evitar el contrabando y por ende, incrementar los ingresos del fisco.

19º Ley de Solvencia de los Funcionarios que Manejan Fondos Públicos, de 20 de marzo de 1935. Que tiene por objeto garantizar al Estado, acongojado por la penuria económica, el manejo de sus escasos caudales.

20º Decreto Legislativo del 13 de abril de 1935. Trata de estimular

el desarrollo del cooperativismo, eximiendo de impuestos a las cooperativas que en ese tiempo eran muy escasas.

21º Decreto Legislativo de 25 de mayo de 1935. Faculta al Banco Central de El Salvador a exportar oro y plata. La prohibición de exportar tales metales continúa vigente para los particulares. Se toman medidas técnicas para impedir la exportación clandestina; la sanción que se aplica a los infractores es el decomiso del metal que se pretendía exportar, y el denunciante recibe como premio el 30% del valor del metal decomisado.

22º Decreto Legislativo del 4 de septiembre de 1935. Ley para la Liquidación de Deudas Privadas, anteriores al 12 de marzo de 1932. Esta ley trata de encontrar una salida al *impasse* creado con motivo de la Ley Moratoria. Había que permitir al deudor hacer abonos al capital, a la par que pagaba los intereses legales. La ley contiene tablas de amortización que, aun con algunos errores técnicos, fue de gran utilidad para los deudores, siempre amenazados de una ejecución.

23º Decreto Legislativo de 25 de septiembre de 1935, que exime toda clase de impuestos al Banco Central de Reserva.

24º Decreto Legislativo de 3 de octubre de 1935. Otorga facilidades para que se puedan contratar créditos refaccionarios.

25º Decreto Legislativo de 11 de noviembre de 1935. Introduce reformas de carácter técnico a la Ley de Papel Sellado y Timbres con el objeto de obtener mayores ingresos a favor del fisco.

26º Cierra el ciclo de esta abundante legislación financiera el Decreto Legislativo de 10 de diciembre de 1935, el cual declara libres de toda clase de derechos e impuestos de importación a los artículos, de cualquier clase que fueren, que introduzcan al país los presidentes de los tres poderes del Estado y los ministros y subsecretarios, siempre que tales importaciones no fueran hechas con fines comerciales.

c) El derecho de represión. Las peculiares circunstancias en que llega al poder el general Maximiliano Hernández Martínez, lo obligan a consolidar y desarrollar un extraordinario sistema represivo, en el cual el derecho es uno de los instrumentos más importantes. Sanciones draconianas para los que atentan contra el orden público, control desmedido, de corte totalitario, al ejercicio de las libertades individuales. A continuación enumeraremos las disposiciones legales

más importantes, haciendo la salvedad de que la realidad del aparato represivo fue más cruel y despótica que las normas jurídicas que vamos a enunciar:

1º Decreto Legislativo de julio de 1932. Por primera vez se decreta el apremio personal de los contribuyentes que no hayan pagado el impuesto de vialidad.

2º Decreto de 2 de julio de 1932. Se reforman los artículos 125 y 132 del Código Penal y se crean nuevas figuras delictivas, relacionadas con la defensa del orden social imperante. Al artículo 126 citado, que se refiere al delito de rebelión, se le agrega un inciso considerando como culpables del delito de rebelión a los que se alzaren contra el gobierno para “abolir o reformar la Constitución Política, las instituciones que de ella emanan, o *la organización social o económica establecida por las leyes de la República*”.

Las nuevas figuras delictivas que se incorporan al artículo 132 del Código Penal son más graves todavía: se castiga la propaganda en campo o poblado, en público o en privado, “de doctrinas anárquicas o contrarias al orden político, social o económico”; se castiga incluso la simple asistencia a una reunión en donde se hiciera tal propaganda; al asistente se le puede poner en libertad si da su palabra de honor de abstenerse en lo sucesivo de asistir a reuniones de propaganda delictuosa. Finalmente se castiga la mera tenencia de escritos o impresos destinados a la propaganda referida. La garantía constitucional de libre reunión y libre expresión del pensamiento quedaron seriamente coartadas.

3º Decreto Legislativo de 23 de abril de 1932. Ley de Cédula Patriótica de Defensa Social, que establecía una clara discriminación social. La cédula costaba cien colones. Daba las siguientes ventajas: era documento de identidad y además servía de pasaporte para poder salir del país; en caso de falta de policía o de infracción de tránsito, su portador no sería apresado por la policía; gozaba del respeto y atención de las fuerzas represivas. Desde luego dicha cédula no podían obtenerla aquellos que tuvieran ideas disolventes o comunistas. Por otra parte, el 80% de los salvadoreños no estaban en condiciones de obtenerla porque no podían pagar un precio tan alto.

4º Decreto Legislativo de 24 de julio de 1932. Ley de Cédula de Vecindad. Todo Estado que se apoya sobre la represión violenta tiene necesidad de identificar y controlar a todos los habitantes del referido Estado. La Ley de Cédula de Vecindad, perseguía el control de toda la población mayor de 18 años.

5º Decreto Legislativo de 13 de julio de 1932. Concede amnistía a todos los que participaron en la rebelión comunista de enero y febrero del mismo año, en los Departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapan. Aparentemente era ésta una resolución muy noble que tendía a la reconciliación de la familia salvadoreña; en realidad era una maniobra jurídica tendiente a exonerar de toda culpa y de toda responsabilidad a las fuerzas represivas del gobierno. Efectivamente, la amnistía no se aplicaba a los culpables de asesinato, homicidio, robo, incendio, violación y lesiones graves, ni, mucho menos, a los soldados y clases que se incorporaron a la rebelión. En cambio, la amnistía era amplia e incondicional a favor de funcionarios, autoridades, empleados, agentes de autoridad, cualquiera que fuere el delito que hubieren cometido al proceder al restablecimiento.

6º Decreto Legislativo de 1º de abril de 1933. Nueva Ley de Imprenta. La prensa, cuando es orientada hacia el desarrollo y defensa de las instituciones democráticas, es una fuerza respetable que los tiranos temen; por eso el general Martínez decidió controlar la emisión del pensamiento haciendo prácticamente nugatoria dicha libertad. La nueva ley de imprenta contenía las siguientes disposiciones: establece requisitos muy severos para que una imprenta no fuera considerada clandestina y en cambio quedara sometida a un estricto control policiaco. El dueño de la imprenta es obligado a actuar como agente de policía, pues se le considera coautor del delito que se cometa con los impresos, si el autor de la publicación fuere desconocido o si siendo conocido "fuera moralmente irresponsable".

7º Decreto Legislativo de 12 de junio de 1933. Ley de Migración. El general Martínez había atribuido el levantamiento comunista de enero del año anterior a la presencia de peligrosos agentes extranjeros que habían propagado doctrinas disolventes. Por eso la Ley de Migración prohíbe la entrada al país a los que enseñen, inciten o propaguen la oposición al gobierno, doctrinas contrarias al régimen constitucional, la obstrucción del trabajo por huelgas, etcétera. Se prohíbe también la entrada a los anarquistas, terroristas, a los afiliados a grupos o asociaciones contrarias a la familia, al régimen social y canónico establecido. La ley mantiene además una actitud racista: prohíbe la entrada en general a los originarios de China o Mongolia; a los de raza negra, a los malayos y a los gitanos; a los originarios de Arabia, Líbano, Palestina o Turquía.

8º Decreto Legislativo del 18 de octubre de 1934. Ley Orgánica de la Guardia Nacional. El general Martínez se preocupó porque la

Guardia Nacional, que tan eficaces servicios le prestara en el aplastamiento de la sublevación campesina de 1932, mejorara en su organización. La nueva ley fija los objetivos de dicho cuerpo en cuanto a mantener el orden público y defender la propiedad y las personas. Se faculta al guardia, cuando actúa en servicio propio, a "penetrar sin previo permiso en todo lugar público, haciendas y fincas".

9º Decreto Legislativo del 1º de mayo de 1935. Convoca a una Asamblea Constituyente. Conforme la Constitución vigente, el periodo presidencial era de cuatro años; pero el dictador se había encariñado con el poder y por eso acude al procedimiento de convocar una constituyente para que ésta autorice su continuación en la presidencia.

10º Decreto de 16 de noviembre de 1935. Reformas al Código Militar. El objetivo perseguido es someter a los civiles al fuero militar en los casos de los delitos de rebelión y sedición. A los líderes Martí, Luna y Zapata se les aplicó la ley militar siendo civiles, con lo cual se cometió grave atentado jurídico; el general Martínez consideró necesario que la ley militar dijera expresamente que comprendía a los civiles. Lo más grave de la reforma es que castiga como delito consumado de rebelión, es decir con la pena de muerte, la sola proposición o conspiración para cometer tal delito.

11º Decreto Legislativo de 16 de diciembre de 1935. Reformas al Código de Instrucción Criminal, para facilitar la persecución de los delitos de malversación de fondos públicos.

12º Decreto Legislativo del 30 de diciembre de 1935. Contiene reformas al Código Penal con el objeto de reforzar la protección de las vías férreas. Las penas van desde nueve años hasta veinte años de presidio.

Por lo expuesto anteriormente puede verse la intensa labor legislativa realizada durante el periodo de 1930 a 1935, muy en especial a partir de la llegada del general Martínez al poder (diciembre de 1931). La crisis obliga al Estado a crear un nuevo derecho, el derecho financiero, con las siguientes características:

a) Persigue la defensa económica del sector dominante: terratenientes, banqueros y grandes comerciantes.

b) Se practica un intervencionismo estatal moderado, dejando siempre las estructuras liberales básicas a favor del aludido sector dominante. Por eso mismo el pueblo trabajador quedó sin protección y recayó sobre él el peso mayor de la crisis.

c) Las reformas institucionales tuvieron proyecciones sociales profundas. Veinte años más tarde la estratificación social salvadoreña, manteniendo su estructura esencial, presenta una matización más adecuada y una mejor definición de los estratos dominantes, con su consiguiente fortificación.

d) El intervencionismo estatal no condujo a la “sustitución de importaciones”, y por consiguiente no se crearon en esa etapa nuevas industrias nacionales.

El derecho de carácter represivo contribuyó a fortalecer la orientación nazi-fascista del presidente Martínez: el estado de sitio, la censura de prensa, las deportaciones de ciudadanos, las prisiones arbitrarias, la militarización de distintos servicios, la supresión de la autonomía universitaria, la proliferación del espionaje, los consejos de guerra y las penas de muerte a los conspiradores, etcétera, encontraron apoyo y estímulo en las nuevas formas del derecho represivo promulgado durante la emergencia crítica.

d) La delincuencia durante la crisis. Algunos autores han pretendido establecer correlaciones directas entre delincuencia y crisis; se ha señalado que en los periodos críticos, la delincuencia tiende a aumentar, particularmente en lo que respecta a los delitos de violencia y a los delitos contra la propiedad.⁵¹ Veamos las cifras ilustrativas que nos presenta la estadística salvadoreña para confirmar o ratificar tales asertos.

CIFRAS GENERALES DE LA DELINCUENCIA

Año	Nº juicios criminales	Procesados		Total delinquentes	Días de comisión	
		Hombres	Mujeres		Festivos	No festivos
1931	3 827	4 561	532	5 013	34%	66%
1932	4 103	5 003	564	5 567	47%	52%
1933	4 413	5 196	661	5 857	25%	75%
1934	4 736	5 680	673	6 353	25%	75%
1935	4 047	4 799	538	5 337	21%	79%

El cuadro anterior merece las siguientes observaciones:

1ª El incremento de la delincuencia en los cinco años estudiados es relativamente leve.

2ª El más alto índice de la delincuencia no corresponde al año del más bajo fondo de la crisis. 1934 es un año en el que ya se presentan síntomas de recuperación. Podría insinuarse la hipótesis de

⁵¹ Véase: Parmelee, *Criminología*; Mezger, *Criminología*; Ferri, *Sociología criminal*; Ingenieros, *Criminología*; etcétera.

que, al aflojarse las tensiones provocadas por la situación económica, la energía reprimida se proyecta abiertamente hacia la delincuencia.

3ª El año de 1935, que es el año de la declinación de la crisis, las cifras de la delincuencia bajan ostensiblemente, aun cuando no lo gran llegar a los niveles de 1931.

4ª Es interesante destacar las cifras relativas a los días en que se cometieron los delitos. Frecuentemente, es en las festividades cuando abunda el consumo del licor y hay grandes concentraciones humanas, que tienen lugar el mayor número de delitos. Los días de fiesta, incluyendo los 52 domingos del año, vienen a ser como el 19% de todos los días del año. Los índices de los días de comisión de delitos en días festivos son siempre más altos que la proporción de días festivos. Nótese que tales índices tienden a disminuir; son muy altos en los años 31 y 32. Podría interpretarse el hecho de que en los primeros años de la crisis la gente concurría con mayor frecuencia a las festividades; a medida que la crisis se ahonda la gente se retrae, trata de evitar las oportunidades en que se gasta dinero sin mayor necesidad. Este principio de austeridad se mantiene durante los años restantes, aun en el año de la declinación.

Para apreciar mejor el problema de la delincuencia, pasemos ahora a presentar cifras con respecto a los delitos más importantes en particular.

DELINCUENCIA CON DETALLES DE DELITOS

Año	Número de delitos	Personas	Propiedad	Libertad	Honestidad	Varios
1929	4 163	2 171	868	588	372	164
1930	4 480	3 124	1 216	749	429	352
1931	3 827	2 649	1 121	607	350	—
1932	4 103	2 995	1 235	670	404	—
1933	4 413	3 024	2 475	—	—	—
1934	4 736	3 016	1 977	617	478	—
1935	4 292	2 741	1 609	577	495	—

1.1. A simple vista puede constatar que los delitos contra las personas son los que presentan el más alto volumen. Estos delitos comprenden asesinatos, homicidios, lesiones y otros delitos menores. Son delitos de acometimiento, de agresión; ellos expresan la aguda tensión social en que vivían las gentes durante la crisis. El segundo lugar lo ocupan los delitos contra la propiedad, que con frecuencia refleja la presión de los factores económicos; la desesperada situación del hombre que no encuentra trabajo ni tiene medios para

mantenerse él y su familia se traduce, a veces, en violencia contra sus semejantes, y otras en atentados contra la propiedad.

1.2. La fluctuación de los delitos contra las personas presenta una secuencia distinta de la de los delitos contra la propiedad; en los primeros, el índice más alto corresponde al año de 1930; luego un ligero descenso en 1931, y luego un moderado ascenso en 1932 y 1933, para iniciar la declinación en los años de 1934 y 1935. Se diría que el impacto de la crisis en 1930 estimuló el estallido de la violencia; después, las gentes hicieron lo posible por dominar sus tendencias agresivas. Los delitos contra la propiedad presentan un incremento más o menos regular a partir de 1929; el año de 1933 contiene el más alto índice, iniciándose en los periodos subsiguientes el descenso de dichos índices. En el caso de los delitos contra la propiedad se ve con mayor evidencia la presión del factor económico; el año de 1932 fue el del más bajo fondo de la crisis; el año siguiente, la delincuencia contra la propiedad bate el récord; y luego, al declinar la crisis, declina también el índice de tales delitos.

1.3 Debemos advertir que si bien en cifras absolutas el año de 1930 fue el de más alto número de delitos contra las personas, en términos relativos lo fue el año de 1933, pues los porcentajes respectivos se presentan así:

1930	52.2% del total de delitos
1933	68.5% del total de delitos

1.4 También debe tenerse presente que las estadísticas no registran los delitos cometidos durante la sangrienta represión de enero y febrero de 1932.

Estudiemos ahora, en particular, los delitos contra las personas, ya que son el sector más numeroso de la delincuencia salvadoreña.

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

Año	Parricidios	Asesinatos	Homicidios	Lesiones	Agresiones
1929	1	5	343	1 574	227
1930	2	13	600	2 219	269
1931	3	13	503	1 840	196
1932	1	8	589	2 093	189
1933	7	41	554	2 076	216
1934	2	6	590	2 066	249
1935	1	20	536	1 866	223

Observaciones al cuadro anterior:

1.1. Los más altos índices de delincuencia corresponden al año de 1930; dentro de ellos, las lesiones ocupan el primer lugar, pues constituyen el 71.03% del total de delitos contra las personas, vale decir, casi las tres cuartas partes; en segundo lugar está el homicidio con el 19.20% de todos los delitos. En tercer lugar están las agresiones con el 8.62%.

1.2. Conviene aclarar que las categorías parricidio, asesinato, lesiones y homicidio, se establecen fundamentalmente por el resultado de la acción delictuosa; por regla general, cuando dos personas se traban en pleito, no se sabe si persiguen matar o herir simplemente al contrincante; si la mala suerte quiso que el herido fallezca, se considera el hecho como homicidio, y si hay agravantes calificadas (premeditación, alevosía, etcétera) se le llama asesinato. Pero si la persona no fallece, entonces el hecho se torna delito de lesiones. Por eso difícilmente se puede encontrar mayor índice de peligrosidad en el homicidio, pues la intención del hecho era la misma: quiso matar y no pudo matar, se le juzga por lesiones; quiso sólo lesionar y no pudo lesionar sino que mató, se le juzga por homicidio.

1.3. Los tres delitos, homicidio, lesiones y agresión, presentan su índice más alto en el año de 1930 confirmando la hipótesis de la reacción de violencia que provoca inicialmente la crisis.

1.4. El parricidio se refiere a la muerte de un ascendiente o descendiente en línea recta, o del cónyuge; el asesinato es el homicidio calificado por circunstancias agravantes de mucho relieve. Ambas categorías presentan mucha irregularidad en su secuencia anual. Como dato curioso indicaremos que en el año de 1933 se cometieron el mayor número de parricidios y asesinatos. La cifra de 41 asesinatos es sorprendente porque triplica las cifras alcanzadas en 1930 y 1931; sin embargo, en el año de la declinación de la crisis, 1935, el índice marca 20 asesinatos. No se nos ocurre ninguna explicación aceptable de tales fluctuaciones. Con todo, consideramos que la tendencia fundamental está dada cuando contemplamos los índices relativos a los delitos de homicidio, lesiones y agresión.

Pasemos ahora a estudiar las cifras de la delincuencia juvenil. Este estudio es particularmente importante porque las nuevas generaciones recibieron el impacto de la crisis cuando aún no maduraba su personalidad; el trauma que dichas generaciones sufrieron marcó una huella profunda en sus conciencias, y es un factor relevante en la conducta posterior de los salvadoreños.

Veamos las cifras de la delincuencia juvenil:

DELINCUENCIA JUVENIL

Años	de 10 a 15 años	de 15 a 25 años
1929	39	1 120
1930	54	1 025
1931	38	836
1932	31	486
1933	66	1 065
1934	78	1 153
1935	35	963

Observemos:

1.1 El curso irregular de la delincuencia juvenil. En la columna de los delincuentes de 10 a 15 años, la delincuencia presenta un aumento en 1930, desciende hasta el año de 1932; logra su máximo ascenso en 1934 y desciende después en 1935 a un nivel inferior al de 1929. La columna de los delincuentes de 15 a 25 años, presenta mayor regularidad: sigue una curva regular de descenso hasta 1932, inclusive, luego se vuelve al ascenso que culmina en 1934, y en el año último se inicia el declive.

1.2. El año de 1932, año del más bajo fondo de la crisis, presenta por extraña paradoja, en ambas columnas, el más bajo índice de delincuencia juvenil. Al iniciarse la recuperación la delincuencia juvenil se incrementa, y los índices crecen en consecuencia.

1.3. La verdadera delincuencia juvenil corresponde a la columna de 15 a 25 años. La importancia de la misma puede apreciarse en términos relativos si se la compara con la delincuencia general (que incluye a la juvenil).

Año	% del total de delincuentes
1929	20 %
1930	17.4%
1931	20.3%
1932	11.8%
1933	25.9%
1934	28.1%
1935	23.4%

En los años de 1933 y 1934 la participación de los jóvenes delincuentes fue poco más de la cuarta parte del total de delincuentes. Debemos agregar que la mayor parte de los delitos cometidos por los jóvenes fueron delitos de violencia, especialmente lesiones. Un 10% de los mismos fueron delitos contra la propiedad (robos).

Para terminar el aspecto relativo a la delincuencia haremos alguna referencia al consumo de licores y al delito de contrabando de licores. El consumo del licor tiene particular importancia porque, por un lado, constituye uno de los factores más relevantes de la delincuencia y, por el otro, está íntimamente vinculado con el ciclo de la crisis.

Podemos anticipar de antemano que alrededor de un 60% de los delitos sangrientos, homicidios y lesiones, fueron cometidos por personas que habían ingerido abundante licor. La embriaguez no es el único factor que determina la comisión del delito, pero es factor coadyuvante que facilita o estimula el desencadenamiento de los sentimientos de agresividad reprimidos. Por otra parte, algunos autores afirman que el consumo del licor aumenta en la medida en que la crisis se ahonda. Los escasos datos estadísticos que hemos logrado obtener nos señalan que el consumo de licor aumenta en las épocas de prosperidad.

CONSUMO DE LICORES

Año	Número de litros	Valor en colones
1928	_____	\$ 4.670,109.43
1929	_____	4.525,001.74
1930	_____	_____
1931	_____	2.527,105.82
1932	1.666,566	2.066,355.54
1933	1.305,225	2.017,277.73
1934	1.345,805	2.017,277.73
1935	_____	2.061,922.18

Observemos:

1º Que el consumo de licores en los años anteriores a la depresión fue aproximadamente el doble del consumo que en los años de crisis. No disponemos de datos con respecto al número de litros consumidos, pero en cambio tenemos el dato de lo gastado por el pueblo salvadoreño en dicho consumo. La comparación pone en evidencia la enorme diferencia: en los años de "prosperidad" casi se gastan cinco millones de colones, o sean dos millones y medio de dólares por año; en los años de crisis el consumo es ligeramente superior a dos millones de colones, pero de colón depreciado, lo que significa, expresado en dólares dicho consumo, una cifra de seiscientos mil dólares.

2º El consumo de licor tiene lugar principalmente en las fiestas, tanto públicas como privadas; con la crisis dichas fiestas se redujeron a su mínima expresión y, en consecuencia, también se redujo al mínimo el aludido consumo.

3º En las *Memorias* de los ministros de Hacienda se repite, año con año, el lamento de que la renta del licor ha decaído y de que no logra aproximarse siquiera a los niveles de 1928. Algunas veces los ministros tratan de explicar la caída de dicha renta por la abundancia de contrabando. El pueblo salvadoreño es aficionado al licor de "sacadera", es decir, elaborado en alambiques clandestinos. Para combatir el contrabando, el gobierno acudió en 1930 a bajar el precio de venta de licor vendido en los estancos oficiales, de manera que pudiera venderse al público a un precio más bajo que el del aguardiente clandestino; pero resultó que el contrabando de licor siguió desarrollándose y el fisco experimentó una sensible baja en sus ingresos. El experimento fue deshecho y se decidió perseguir el contrabando por todos los medios. Sin embargo el contrabando persistió durante el periodo de la crisis, sencillamente porque era una actividad a que se veían obligados a dedicarse aquellos que no podían encontrar trabajo en ninguna parte. En el año de 1930 la actividad de policía dio los siguientes resultados:

Fábricas clandestinas de aguardiente	105
Fábricas clandestinas de vino	3
Chicherías	48
	<hr/>
Total de establecimientos descubiertos	156

En el año de 1934 la actividad de la policía de Hacienda fue todavía más intensa y sus descubrimientos fueron los siguientes:

Fábricas clandestinas de aguardiente	675
Fábricas clandestinas de chicha	1 573
	<hr/>
Total de descubrimientos	2 248

Esto quiere decir que a pesar de la persecución policiaca, el consumo del licor oficial se mantuvo casi a los mismos niveles. Después de la notable persecución de 1934, era de esperarse que el consumo del licor oficial se incrementara notablemente; pero la realidad fue

que el incremento logrado fue apenas de \$ 44,644.45, o sea un 7% del consumo total de 1934.

3º *La crisis en la esfera de la educación*

La importancia de la educación en el Estado moderno es indiscutible; el proceso de formación e información cultural orientado hacia las grandes masas decide los destinos históricos de un pueblo. La crisis de los treinta afectó profundamente la función educativa del Estado, en forma tal, que durante un largo periodo que llega hasta la Segunda Guerra Mundial, la mantiene en profunda postración.

1.1. El Estado salvadoreño se encontró al borde de la quiebra por sus raquíticos presupuestos y su carencia de instrumentos de defensa frente a la emergencia crítica; los gobernantes, completamente desorientados, no piensan en otra cosa más que en hacer economías. Los primeros decretos del general Martínez significaron rebaja en un 30% de los sueldos de los empleados públicos, y de las pensiones y jubilaciones. Agréguese a esto la circunstancia de que el colón se había devaluado, circunstancia que determinaba una rebaja más en los ingresos fijos; por eso puede decirse que la rebaja de sueldos, pensiones y jubilaciones fue en realidad de un 60% aproximadamente.

La difícil situación de los empleados públicos se tornó insoportable para la mayoría del profesorado, los cuales en grandes conjuntos abandonaron las aulas para dedicarse a otras ocupaciones mejor remuneradas. Veamos algunas cifras estadísticas:

EDUCACIÓN PÚBLICA PRIMARIA
(número de escuelas, profesores y alumnos)

Año	Número escuelas	Número maestros	Alumnos matriculados
1929	923	1 605	54 673
1930	975	2 305	59 358
1931	924	1 698	46 583
1932	947	1 153	50 814
1933	962	1 821	56 716
1934	968	1 822	56 368
1935	980	1 850	56 986

Debemos observar, en primer lugar, que las cifras correspondientes al año de 1930 son atípicas, pues comprenden las escuelas, maestros y alumnos no sólo de las escuelas gubernamentales o públicas, sino también las escuelas municipales.

En un periodo de siete años el aumento registrado en el número

de escuelas es de 57 (7 escuelas por año). Los maestros aumentan en ese mismo periodo en un 15% y los alumnos en un 4%. La relación directa con la crisis se pone en evidencia cuando se ven las bajas cifras de maestros y de alumnos en los años de 1931 y 1932, que fueron aquellos en que el impacto de la crisis tuvo mayor fuerza.

Los cambios operados en siete años son tan pequeños que dan la impresión de una escuela estancada.

Veamos ahora las cifras relativas a la enseñanza secundaria.

LA EDUCACIÓN PRIVADA Y LA SECUNDARIA

Años	Número colegios	Número alumnos	Alumnos Instituto Nacional
1929	26	856	281
1930	95	653	316
1931	119	—	—
1932	—	—	—
1933	119	736	207
1934	155	—	207
1935	115	—	—

La enseñanza secundaria ha sido siempre privilegio de las clases media y alta; los amplios sectores de la clase baja no gozan de los beneficios de tal enseñanza. La educación que se imparte en los colegios de enseñanza privada también corresponde a las referidas clases alta y media. Ello explica la exigüidad de las cifras anteriores. Los alumnos del Instituto Nacional, el único costado por el Estado que impartía enseñanza media, presenta un número muy pequeño de alumnos; la difícil situación de los hogares obligó a muchos adolescentes a buscar empleos y demás colocaciones para poder satisfacer sus necesidades; por eso el cuadro empieza con 281 alumnos para 1929, y termina con 207 para el año de 1934.

Ligado con el problema educativo anterior está también el problema de la educación de los adultos, un 60% de los cuales ni siquiera sabía leer. Con el pretexto de la emergencia crítica el gobierno se abstuvo de fundar centros de enseñanza nocturna de importancia y no inició ninguna campaña de alfabetización de masas.

Los diarios estaban sometidos a la censura de prensa, tanto por el correspondiente censor oficial como por el director o editor del periódico. La gente se movía llena de desesperación buscando una salida a la situación tan difícil en que se encontraban, y muchos buscaron en los libros algún mensaje de esperanza. Veamos a este respecto los datos sobre la importación de libros.

IMPORTACIÓN DE LIBROS
(como fardos postales)

Año	Valor colones	Kilos
1929	2,393.74	1 273 840
1930	2,314.00	1 136 750
1931	2,251.00	1 279
1932	1,548.00	1 580
1933	3,832.00	989
1934	1,563.00	940
1935	3,278.00	1 171

IMPORTACIÓN DE LIBROS
(excepto los que llegaron como fardos postales)

Año	Valor colones	Kilos
1929	30,764.38	21 975
1930	28,936.00	16 487
1931	16,750.00	12 067
1932	22,238.00	13 400
1933	11,171.00	8 580
1934	5,766.00	2 715
1935	13,777.00	15 915

Los libros llegaban al país en dos formas: por correo, como fardos postales, o por la vía marítima a través de las aduanas portuarias; esta última forma era y es la más usada. La importación de libros, periódicos y revistas extranjeras estaba sometida a una rigurosa censura; el dictador Martínez prohibió la entrada de libros de tendencia marxista o simplemente revolucionaria; esto contrastaba con la absoluta libertad que se disfrutaba en los años anteriores a la crisis. Precisamente lo que la gente quería leer eran libros de orientación social; éstos entraban al país de manera clandestina y eran leídos con avidez por las pocas personas que podían obtener tales libros.

Durante la crisis, la introducción de libros disminuye sensiblemente; el libro es considerado como artículo de lujo, y por lo tanto las compras de los mismos se reducen. En 1935 se inicia la recuperación económica nacional y con ella aumentan las compras de los libros; pero el valor en colones de los libros importados no llegó ni siquiera al 50% del valor de los que se importaron en 1929.

La cerrazón de la cultura popular era muy densa.

En lo que respecta a la enseñanza superior la situación no podía ser más catastrófica. Al iniciarse la rebelión campesina, de enero de 1932, el dictador Martínez suprimió la autonomía universitaria; que-

daron cesados en sus cargos los dirigentes universitarios y fueron más tarde sustituidos por elementos incondicionales del dictador.

La mayor parte de los líderes estudiantiles fueron expatriados; la masa estudiantil se encontraba desorganizada, los años de mayor agudización de la crisis (1931-32) para volver al nivel de los años anteriores. De los 78 suicidas habidos en todo el periodo, el 57% eran de personas menores de treinta años; de estos suicidas jóvenes, el 90% eran elementos de la población urbana pero el 65% tenía orígenes rurales. Estos datos reflejan la trágica situación de esta infortunada juventud.

VII. ALGUNAS CONCLUSIONES

La somera exposición que hemos hecho sobre los aspectos más salientes de la crisis de los años treinta en El Salvador amerita que, como parte final, presentemos algunas conclusiones:

1ª La crisis puso en evidencia la tremenda desigualdad que existe en el orden mundial de los países: naciones desarrolladas y muy poderosas en cuyo seno se generó la crisis y débiles naciones dependientes que reciben dicha crisis como una desgracia que les viene de fuera; naciones cuyo desarrollo institucional les permite recursos y reservas para enfrentarse a la emergencia crítica, y pequeñas naciones que lejos de tener recursos defensivos son incorporadas al engranaje de la economía internacional y se ven obligadas a actuar como instrumentos amortiguadores a favor de las grandes naciones (recordemos la cláusula de la nación más favorecida, los onerosos empréstitos, la devaluación de las materias primas, etcétera).

2ª La crisis económica de superproducción se entrelaza con la crisis agraria crónica y, por eso mismo, tiene una presentación heterogénea:

- a) En lo que respecta al valor de la moneda.
- b) En lo que respecta a la producción de artículos de consumo.
- c) En lo que respecta a la delincuencia.
- d) En lo que respecta a la evolución demográfica de la población.
- e) En lo que respecta a la política nacional.

En todos estos sectores los ritmos del ciclo son muy distintos.

3ª La estrategia asumida por los gobernantes frente a la crisis pre-

senta dos etapas muy bien definidas: *a*) la etapa de ingenua espontaneidad, en la que todo se reduce a soportar la tormenta y a esperar que pase, y *b*) la etapa en la cual el Estado se ve obligado a tomar medidas intervencionistas.

Se ha considerado que la etapa intervencionista significa el fin del Estado liberal en El Salvador; tal afirmación parece ser un tanto exagerada: las medidas intervencionistas fueron mínimas y conservaron siempre las estructuras fundamentales del Estado liberal; las nuevas instituciones bancarias que se crearon sirvieron, principalmente, para ayudar y estimular el libre juego de la iniciativa privada y no para controlarla.

4ª Consecuencias de la crisis en el ámbito político:

a) Las clases sociales se separan por profundas barreras de desconfianza y hostilidad. Después del levantamiento de enero de 1932 las clases sociales se separan; las posibilidades de una política de frente popular o de unión nacional para salir de la crisis, desaparecen por completo y se abre la era de las dictaduras oligárquicas.

b) Como derivado de lo anterior, mayor agudización del aparato represivo, lo que implica un franco retroceso político en el desarrollo de la democracia salvadoreña.

c) Desarrollo de la participación del ejército en la política nacional hasta convertirse, bajo el régimen del general Martínez, en franco militarismo.

d) Una mejor definición de las clases sociales y consolidación de la oligarquía feudal como sector dirigente.

5ª Consecuencias de la crisis en el ámbito económico:

a) Mayor desarrollo del monocultivo del café.

b) Mayor dependencia del país frente a los Estados Unidos.

c) Baja catastrófica de los precios.

d) Baja agudísima de los salarios y sueldos.

e) Gran concentración de la propiedad.

6ª Consecuencias en el ámbito social:

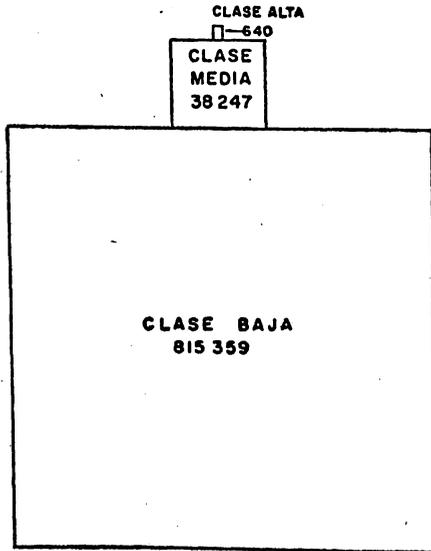
a) Incremento del alcoholismo, particularmente en los sectores juveniles.

b) Incremento de la prostitución, especialmente en las mujeres que emigran del campo a las ciudades en busca de trabajo.

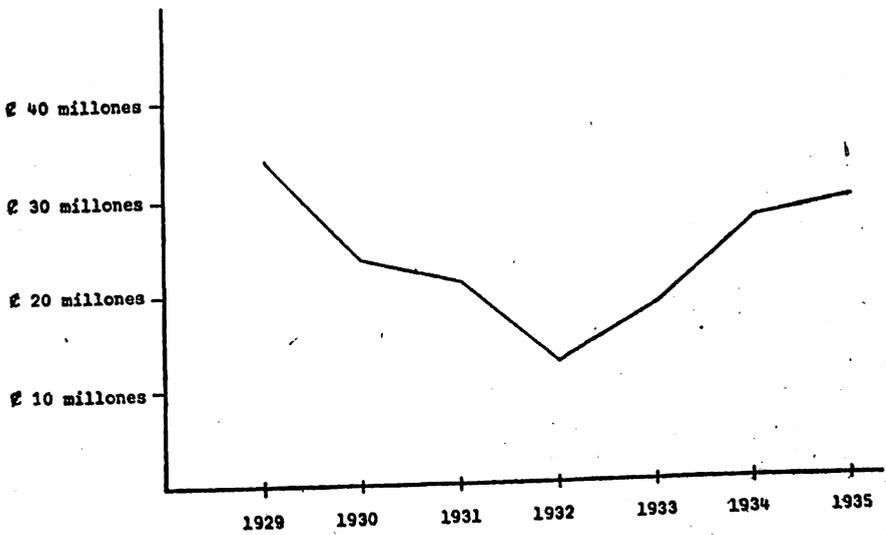
c) Incremento de la delincuencia.

San Salvador, 11 de enero de 1969.

GRAFICA I
ESQUEMA DE LAS CLASES SOCIALES
EN EL SALVADOR
(SEGUN CENSO DE POBLACION DE 1930).



GRAFICA II
Valor de la exportación de café en El Salvador
(años 1929 a 1935)



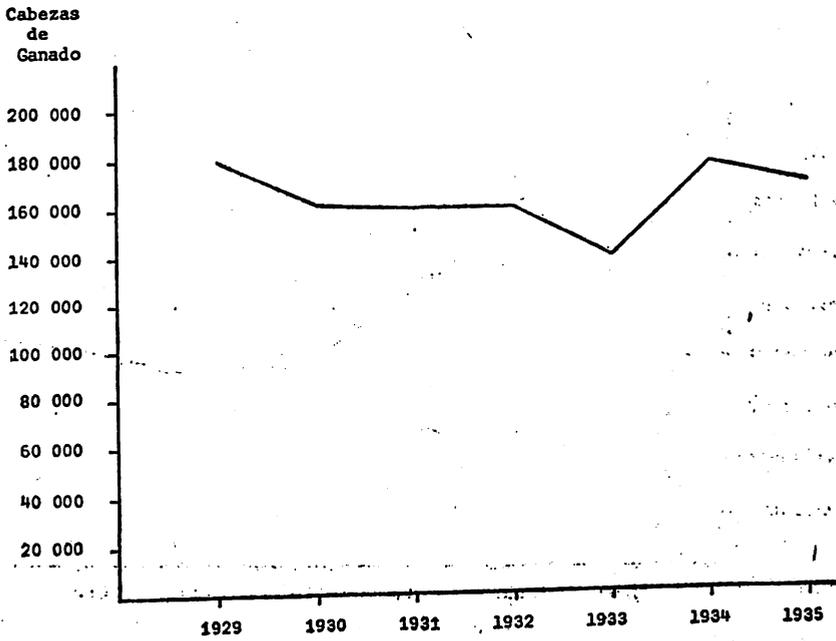
GRAFICA III

Evolución de los precios de cereales en El Salvador
(años 1928 a 1935)



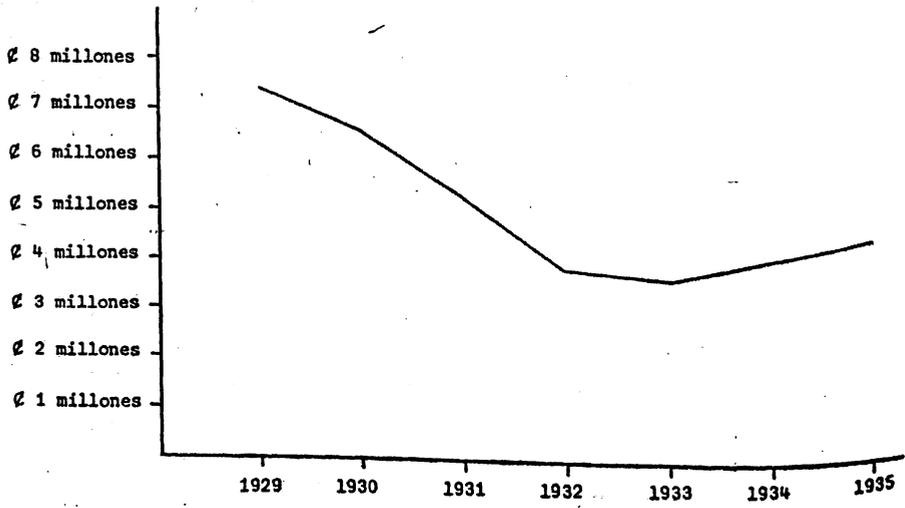
GRAFICA IV

Consumo de ganado en El Salvador
(años de 1929 a 1935)



GRAFICA V

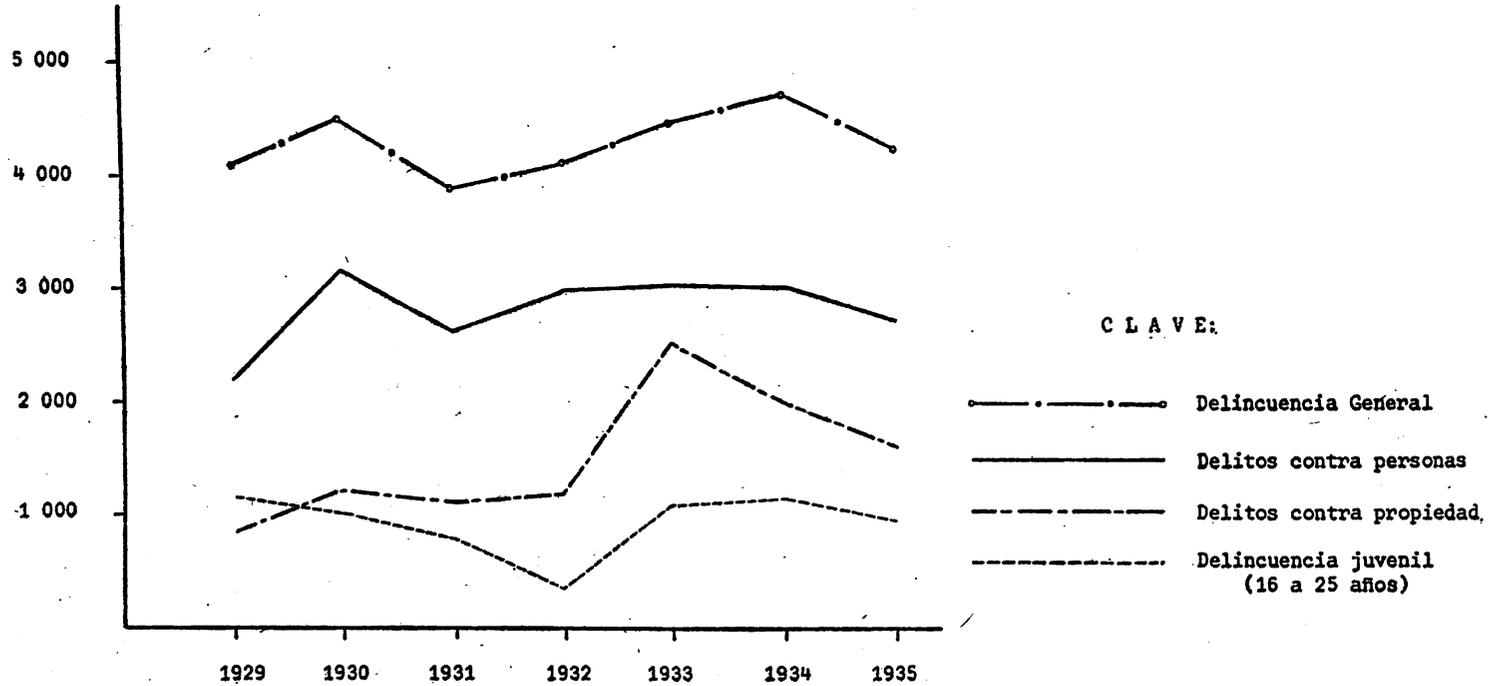
Valor del ganado consumido en El Salvador
(años 1929 a 1935)



GRAFICA VI

Delincuencia en El Salvador
(años 1929 a 1935)

Nº delitos



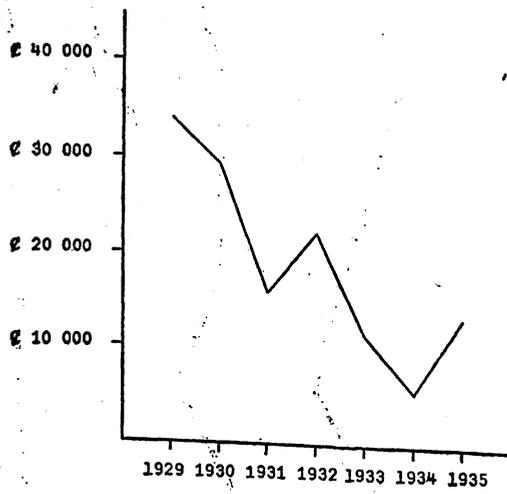
C L A V E:

- Delincuencia General
- Delitos contra personas
- Delitos contra propiedad
- Delincuencia juvenil (16 a 25 años)

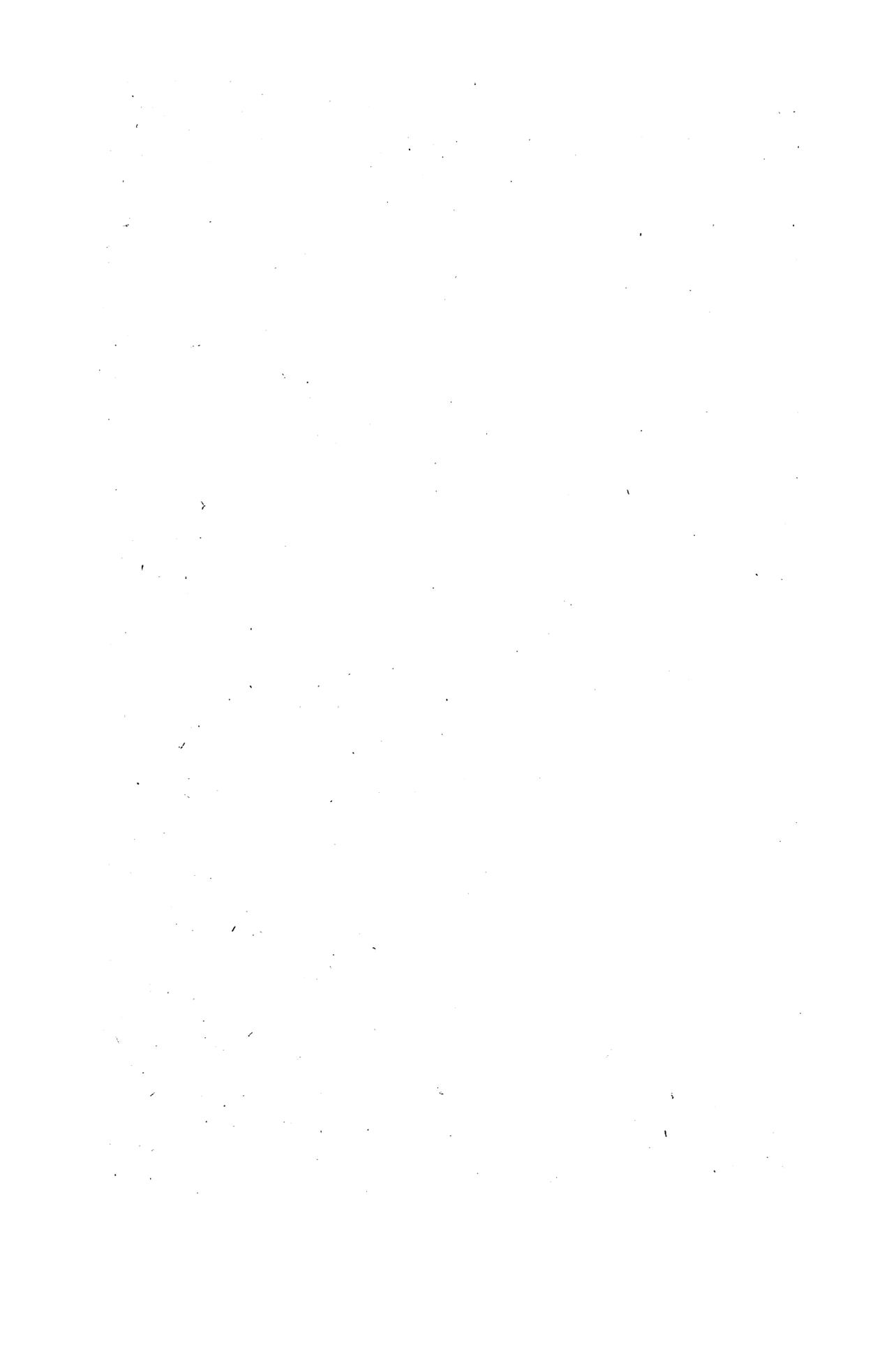
GRAFICA VII

EL SALVADOR

Compra de libros durante la crisis



PAISES ANDINOS



BOLIVIA EN LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA

Luis Antezana E.

I

En los años treinta, las características más importantes de Bolivia eran las siguientes: un país semicolonial, exportador de materias primas minerales, en especial estaño, que se industrializaban en la metrópoli inglesa, y una agricultura semifeudal en la cual la tierra era propiedad de pocas manos y los campesinos estaban sometidos a un régimen de servidumbre gratuita, a cambio de una parcela pequeña y estéril. En las ciudades la producción se reducía a formas semiartesanales y se esbozaba una industria ligera que empezó a funcionar con materias primas semielaboradas importadas, en especial lana y algodón, y en las fábricas los obreros estaban sometidos a un sistema de explotación salarial muy acentuado.

El país tenía algo más de tres millones de habitantes. El 80% de la población estaba formada por indígenas, sometidos a condición de siervos de la gleba. El proletariado minero y urbano no pasaba del 10% y el resto estaba conformado por la burocracia, los grandes mineros y los terratenientes. La capital, La Paz, tenía 150 000 habitantes.

Los mineros, campesinos y obreros tenían un consumo de 1 500 calorías al día, y las clases acomodadas vegetaban en un nivel de vida de aldea, aunque con la diferencia que detentaban el poder político nacional, mediante el cual conservaban su *status* y se ponían al servicio de la metrópoli.

El Estado era paupérrimo y pese a que las exportaciones de minerales pasaban de diez millones de libras esterlinas al año, a veces no tenía para pagar los sueldos a los funcionarios públicos.

La Primera Guerra Mundial había empezado a agravar la situación boliviana y la baja que experimentó la cotización del estaño y de la goma, en el primer semestre de 1914, determinó la caída del cambio¹ de 19 d. a 133/4 d. por boliviano. No obstante el alto nivel

¹El tipo de cambio sobre el exterior que antes de 1870 había sido de 49 d. por boliviano, cayó a 27 d. en 1889. La baja cotización se acentuó más todavía en

que, entonces, alcanzaron las exportaciones y las considerables fortunas que se hicieron en el país durante los años de la primera guerra, el Estado no obtuvo, proporcionalmente, las rentas que requería para hacer frente a los gastos crecientes. Como resultado de la liberalidad en la política económica, todo el beneficio fue para los exportadores, que desde entonces adquirieron el control total de la vida económica y política del país. El fenómeno económico se tradujo en una corriente intervencionista, que frente al problema del drenaje constante de la riqueza minera nacional, concibió como solución la nacionalización de minas; y en una corriente liberal que seguía siendo partidaria de la explotación colonial.

La polémica aclaró el problema teóricamente, pero cuando se intentó solucionarlo, los partidarios de la línea nacional ya eran impotentes, pues las empresas mineras habían crecido tan desmesuradamente que eran más fuertes que el Estado. Asimismo los hombres de Estado ya estaban al servicio de esos grandes intereses.

Sin embargo, entre 1920 y 1930 se dictaron leyes que establecían un impuesto progresivo a las utilidades mineras, y que regulaban las relaciones entre patronos y obreros. También fueron sancionadas algunas leyes proteccionistas.

La crisis económica mundial empezó en 1929, y su repercusión depresiva se sintió en Bolivia a partir de 1930. Bolivia no pudo sustraerse a las influencias internacionales, y el Banco Central cumplió apenas su función de regulador del medio circulante. La deflación iniciada en 1930 puso en quiebra a la mayoría de las industrias incipientes, desvalorizando la propiedad rural y urbana. El constante drenaje de oro que sufrió el Banco Central fue funesto para sus reservas metálicas.

Como emergencia de la crisis mundial, Bolivia abandonó el régimen de la libre convertibilidad de su signo monetario, y en mayo de 1932 se declaró de utilidad pública la concentración en el Banco Central de todas las operaciones de compra y venta de letras de cambio y de oro, la entrega obligatoria de los exportadores de un porcentaje (65%) del valor de sus exportaciones y el control de cambios.

Con la caída de la cotización de las materias primas de exportación y, principalmente, del estaño, las disponibilidades sobre el exterior disminuyeron considerablemente.

1893, con motivo de la clausura de las casas de amonedación de la India Inglesa. En 1920 la cantidad de billetes era sólo de Bs. 42.087,789. La inflación empieza a producirse en 1933, año que registra ya la cifra de Bs. 53.884,031.

El Banco Central había sufrido el drenaje de la mitad de su encaje, en su vano empeño de mantener invariable el tipo de cambio, política que benefició a gerentes de grandes empresas mineras y directores de bancos, que aprovecharon el tipo de cambio artificialmente favorable para hacer fugar sus capitales al exterior, escapando de la desvalorización monetaria que se había iniciado. El cambio bajó a 12 d. por boliviano.

La violenta deflación de billetes emitidos y del crédito bancario para mantener la proporción legal de la reserva de oro, con relación al circulante, motivó numerosas quiebras, desocupación y un comienzo de paralización de la vida económica por la violenta caída de los precios y la subsiguiente falta de circulante. Además, la experiencia de la crisis del 30 demostró que una reserva de oro, por importante que sea, es insuficiente para salvar de la crisis a un país que depende del mercado mundial y que tiene como eje de la economía un solo producto, como es el estaño para Bolivia.

La reducción del valor de las exportaciones de minerales fue brusca, como muestra el siguiente orden:

Año	Exportación Total
1929	10.500,528 £
1930	7.517,499 £
1931	4.486,575 £
1932	3.028,084 £
1933	3.878,799 £

Estos datos demostraban que la exportación total de Bolivia descansaba, entonces, en más de 70% en la producción de estaño, y que el valor de la exportación, cuyo índice fue de 100.00% en 1929, llegó a bajar al 28.84% en 1932.

A comienzos de siglo la exportación de estaño era sólo de 9 739 toneladas. En 1909 superó las 20 000, en 1922 superó las 30 000 y su máximo nivel lo alcanzó en 1929, cuando llegó a 46 490. Desde entonces la producción bajó, y en 1933 sólo llegó a 19 957 toneladas.

En 1927, la excesiva producción mundial de estaño empezó a provocar la declinación de la cotización mundial. La gran depresión agravó este estado y el estaño bajó de 917 dólares la tonelada en 1927, a 794 dólares la tonelada en 1929; y más tarde bajaría en 385 en el año 1932. Esta situación preocupó al gobierno Siles en 1929, pues a menor cotización del estaño, menores ingresos fiscales, y a menores ingresos fiscales mayores problemas para el gobierno, de cuyo pre-

supuesto, por ejemplo en 1929, destinaba el 37% al servicio de la deuda externa, el 20% a los militares, el 43% para mantener los servicios fiscales, y nada para obras públicas.

El efecto de la crisis mundial del 30 repercutió doblemente en Bolivia, tanto por sus propias características como por el raquitismo colonial del país. A la baja de las cotizaciones de estaño y otros minerales, siguió la baja de producción y la reducción considerable de los ingresos nacionales. Primero se acudió a la deflación, pero la artificialidad de la medida causó mayores daños al país. En ese estado de crisis se precipitó la guerra con Paraguay, y de esas características y con medidas de control artificiales se pasó a la inflación.

II

En julio de 1920 cayó del poder el Partido Liberal, que había gobernado el país desde 1899, y cuya acción fue la prolongación de la política de la entrega de territorios básicos a países limítrofes, la usurpación de tierras de los indígenas para convertirlas en latifundios feudales, y ante todo la entrega de yacimientos de minerales, goma, quina y otros productos a monopolios internacionales, sistema que había empezado a practicarse desde mediados del siglo XIX, por Melgarejo. El país tenía una apariencia de bonanza, pero debajo de la corteza bullían problemas prontos a estallar.

El republicanismo heredó, entonces, una latente situación de crisis. Ante la presión del creciente movimiento obrero, emitió en septiembre de 1920 las primeras disposiciones sociales, entre ellas el reconocimiento del derecho de huelga y un sistema gubernativo de arbitraje. Sin embargo, los trabajadores no sólo perseguían mejoras económicas sino la solución del problema nacional, frente a la opresión colonial.

Las principales organizaciones artesanales se convirtieron en sindicatos de obreros asalariados, en especial los ferroviarios, gráficos, tranviarios y otros, que se aglutinaron en una federación obrera, buscando mejoras salariales; emitió un llamado a la huelga general, la misma se produjo con éxito en febrero de 1921, y fue la primera de la historia del movimiento obrero boliviano.

El régimen había sufrido una derrota, mas estaba dispuesto a mantener el "orden". Sin embargo, los campesinos de Jesús de Machaca, en el departamento de La Paz, que como los del resto del país se encontraban en permanente estado de sublevación, protagonizaron un levantamiento masivo, que fue cruentamente aplastado por tropas militares.

Desde entonces, nuevas fuerzas motrices empezaron a intervenir en el panorama nacional. Obreros y campesinos se unían y luchaban activamente para cambiar su destino y el del país. Entonces los mineros retomaron la iniciativa, y en Huanchaca realizaron una huelga de protesta, que dio paso al Primer Congreso Nacional de Trabajadores, en septiembre de 1921, evento que mostró que el potencial obrero estaba dispuesto a convertirse en el principal actor del proceso social boliviano.

La presión obrera continuó ascendiendo, pero su ala más combativa, los mineros, fue de nuevo cruentamente reprimida en la masacre de Uncía, de junio 1923.

La lucha política entre 1920 y 1930 estuvo protagonizada principalmente por el liberalismo y el republicanismo que se disputaban el poder, descuidando los problemas de fondo del país. Entonces nació el nacionalismo, que tendría acogida del presidente Siles, quien se decidió a enfrentar a la *Rosca* con algunas medidas, aunque con poco éxito, pues fue derrocado del gobierno produciéndose la restauración de las fuerzas tradicionales. Entonces, el nacionalismo se dividió; el grupo minoritario con Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, Guillermo Alborta y otros, se mantuvo en posición intransigente, mientras el ala conciliadora se puso al servicio del régimen restaurador.

La década que concluyó en 1930 transcurrió bajo el signo de las luchas obreras y campesinas. Después del Primer Congreso Nacional de Trabajadores, se realizaron otros tres; el segundo en julio de 1925, el tercero en abril de 1927 y el cuarto en marzo de 1930, todos ellos de fuerte contenido nacionalista, en particular el tercero, que se efectuó en Oruro, en el que se planteó la nacionalización de minas y la abolición de la servidumbre gratuita en el campo. Por otra parte, en esta etapa sólo se realizó la huelga general de 1921 aunque dejando una secuela de huelgas aisladas cada vez más decididas.

A mediados de 1927, los campesinos irrumpieron nuevamente en el escenario nacional, con una de las sublevaciones más extensas y combativas de su historia. En pos de tierra y libertad los campesinos se levantaron en todos los distritos de los valles y el altiplano prendiendo fuego a las casas de hacienda, destruyendo los campos de cultivo y amenazando la vida de los terratenientes. Sin embargo, los campesinos, que luchaban sin dirección política, fueron también reducidos por medio de grandes matanzas y no obtuvieron ni la liberación de la servidumbre gratuita, ni la propiedad de sus parcelas. No obstante la derrota, esta sublevación nacional dejó saldos favorables

como la liberación de tendencias políticas extrañas, mayor organización y el interés de sectores sensibles de las ciudades, en especial de los intelectuales que se nutrían de la contundente realidad y de las nuevas corrientes ideológicas que llegaban de Europa desde 1917.

Consecuencia del movimiento obrero campesino, fueron el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, el crecimiento del nacionalismo como partido político, así como el relegamiento paulatino de los partidos Liberal y Republicano.

En agosto de 1928 se reunió el Congreso de Estudiantes en Cochabamba, que fundó la Federación Universitaria Boliviana. El Congreso aprobó un programa pidiendo la nacionalización de minas y la Reforma Agraria, aunque confundido con desviaciones populistas y anarquistas, llegando al caso de propugnar el lema "sin dioses en el cielo y sin amos en la tierra".

Este Congreso de estudiantes significó la incorporación a la lucha nacional de los sectores urbanos más sensibles al cambio de relación de fuerzas, como son los universitarios, estudiantes, empleados públicos e intelectuales.

La unidad de fuerzas nacionales se estaba produciendo más en los hechos, que en la teoría: buscaba no sólo soluciones de *clase*, sino ante todo, soluciones de carácter nacional. Entonces se planteó en la práctica y, por primera vez, en el proceso histórico boliviano, el antagonismo entre la nación y la metrópoli. Ese enfrentamiento estaba conformado, por un lado, por los campesinos, los trabajadores urbanos, mineros y la clase media, contra los explotadores coloniales de las minas y sus aliados, los terratenientes.

El país era un barril de pólvora con la mecha encendida. La permanente agitación laboral, la explosiva situación rural y la aparición de tendencias rebeldes en las ciudades, conformaban un panorama angustioso para las minorías dominantes que consideraban que sus soluciones eran las únicas que podrían salvar la amenazada estructura feudal-colonial del país.

Sin embargo, la agitación social fue desviada, hacia fines de 1928, por una amenaza de conflagración bélica con el Paraguay, la misma que fue sorteada por el presidente Siles, quien con sentido realista señaló que el ejército boliviano era débil, que para llegar al campo de batalla tenía que marchar a pie 2000 kilómetros y que para penetrar al territorio en disputa, previamente debía atravesar territorio argentino, pues no existían vías camineras propias.

A la crisis social, se sumaron, entonces, la crisis política y la amenaza bélica. Entonces, el gobierno de Siles, que tenía algunas velei-

dades con el naciente nacionalismo, fue derrocado del poder en junio de 1930, restaurándose en el gobierno las fuerzas más oligárquicas, encabezadas por una Junta Militar presidida por el general Carlos Blanco Galindo, el cual se encargó de “constitucionalizar” al país, llamando a elecciones, en las que triunfó el viejo senador liberal, belicista, terrateniente y partidario de la explotación colonial, Daniel Salamanca.

Al mismo tiempo que en el interior del país se acentuaba la tempestad social, el mundo se estremecía con el *crack* económico, cuyos efectos llegarían a Bolivia en 1930 y la llevarían a dramáticos momentos.

III

La crisis mundial fue la gota que rebasó el vaso: La ola de agitación social volvió a encrespase y a hacerse más y más amenazante, hasta llegar a pronosticarse la inminencia de una conmoción social que derribaría al gobierno por medio de una nueva huelga general en el medio urbano, y un levantamiento campesino mucho más profundo que el de Chayanta de 1927. También los mineros empezaban a realizar una lucha organizada y sistemática, buscando soluciones a su estado de miseria y planteando objetivos nacionales.

La Junta Militar de Blanco Galindo convocó a elecciones, en las cuales salió triunfante el “hombre-símbolo”, Daniel Salamanca, quien asumió el poder en febrero de 1931. Fundador del Partido Republicano, pronto adoptó una actitud disidente y organizó el ala genuina, mostrándose partidario del principio “debemos pisar fuerte en el Chaco” y de un programa de gobierno de naturaleza antiobrera. Salamanca afirmaba:

El primer aspecto adverso que es necesario mencionar con claridad, es de orden social. Me refiero a la propaganda comunista . . . El peligro de esta propaganda es proporcional a la pobreza y a la ignorancia del país . . . Me parece palmaria la insuficiencia de las constituciones actuales para atajar este peligro y hartó clara la necesidad de un nuevo derecho de defensa social . . .

La agitación se desbordaba con más frecuencia. Los trabajadores organizados en la Federación Postal, Telegráfica y Radiotelegráfica se declararon en huelga general. El gobierno desconoció el paro y la Federación y sus dirigentes fueron destituidos de sus cargos. Asimismo, dio plazo de 24 horas para que los trabajadores regresaran

a sus labores, y ordenó a tropas de ejército ocupar las oficinas de telégrafos y correos.

La FOT procuró mediar en el problema, pero Salamanca no aceptó, reaccionando con mayor energía hasta lograr que la huelga general decretada fracasara en su comienzo. El movimiento obrero sufrió una derrota, pero empezó a prepararse para una nueva contraofensiva, ya que con esas medidas oficiales la crisis no se había solucionado, sino más bien agravado. El déficit del presupuesto y la declinación de ingresos determinaron que el gobierno adoptara medidas enérgicas, como la reducción de sueldos y salarios y la suspensión del pago de las obligaciones de la deuda externa del país. El segundo semestre de 1931 mostrábase más tempestuoso y Salamanca afirmaba:

El segundo semestre se presenta más oscuro y amenazador que el primero... Y como la reacción favorable en el precio del estaño, se presenta todavía como un problema, tendremos que sobrellevar muchos días difíciles y probablemente más penosos que los pasados. Muy poco o casi nada podemos hacer para conjurar esta situación. Bolivia padece, en grado agudo, las consecuencias de una crisis mundial, cuyas causas no pueden ser removidas por nosotros.

Las medidas del gobierno determinaron la subida precipitada de precios, y en octubre de 1931 el gobierno prohibió la exportación de oro y suspendió por treinta días el pago de las obligaciones internacionales. Indudablemente, esas medidas agravaron las tensiones del ambiente y los partidos opositores contribuyeron a dar más relieve a los problemas.

Frente a la agitación, el gobierno de Salamanca presentó al Congreso un proyecto de Ley de Defensa Social, que autorizaba a la policía a dispersar las manifestaciones a balazos, y que había sido previamente anunciada por el presidente para adquirir poderes extraordinarios y así aplastar al movimiento obrero y a los partidos de oposición. Mas la reacción ante esta propuesta fue tan fuerte que los obreros, los estudiantes y los grupos de izquierda, realizaron violentas manifestaciones de masas, hasta hacer que el gobierno archivase la ley ante el temor de una conmoción social de insospechables alcances. No sólo el gobierno, sino todo el régimen, estaba al filo de la navaja, y Salamanca hacía desesperados esfuerzos para capear el temporal y la crisis económica.

El año 1932 fue todavía peor. Los ingresos del gobierno apenas alcanzarían a unos 19 millones de bolivianos, cuando se necesitaban en realidad más de 35.

Ante el desolador panorama, Salamanca contrató un nuevo empréstito por 15 millones de bolivianos y aumentó la circulación monetaria.

El sindicalismo obrero arreciaba su combatividad y desde fines de 1931 realizaba manifestaciones callejeras en las ciudades mineras de Oruro y Potosí. Los ataques al gobierno eran extremadamente duros. Igual cosa ocurría en La Paz, donde a la acción obrera también se sumaban sectores de empleados, estudiantes, intelectuales, artesanos. La convulsión aumentó en proporciones alarmantes cuando el pueblo se levantó en protesta contra la Ley de Defensa Social. Por otra parte, a la vez que las masas se inflamaban, también los obreros aumentaban su nivel de organización y los nuevos grupos políticos de oposición redoblaban la potencia de fuego de su artillería. Los intelectuales señalaban que había que destruir el sistema de los monopolios mineros y de las haciendas feudales.

Entretanto en el Parlamento se denunciaron las violaciones cometidas por la Standard Oil en su contrato de concesión petrolífera. Pero Salamanca y sus ministros archivaron la denuncia y la prensa de la Standard aplicó el sistema del silencio, utilizado siempre por los monopolios cuando se les oponen datos irrefutables.

El gobierno se encontraba casi impotente para detener la marejada social que diariamente elevaba su voluntad de voz y acción. Sin embargo, ésta, carente de un partido político organizado y consecuente, confundida por tendencias anarquistas y seudosocialistas, no pasaba más allá de la agitación, sin poder llegar a la insurrección. A este estado se sumaba su propia falta de madurez política y la todavía bien asentada fortaleza de la oligarquía. La relación de fuerzas empezaba a quebrarse, pero la oligarquía era todavía la parte dominante, fuertemente respaldada con el poder del Estado, el apoyo económico internacional, etcétera. Deberían ocurrir todavía importantes acontecimientos y transcurrir mucho tiempo para que el pueblo se convirtiera en la principal fuerza social del país y asumiera la dirección nacional.

A medida que aumentaba la presión popular en busca de soluciones de fondo, el gobierno Salamanca redoblaba sus medidas represivas.

El pueblo derrotó sucesivas veces al gobierno y éste, como medida de distracción, comenzó a mostrar interés en el Chaco —territorio deshabitado, sin agua y de monte bajo, de 300 000 kilómetros cuadrados, ubicado en el sudeste del territorio nacional—, señalando que se trataba de una necesidad “patriótica”.

La determinación de Salamanca fue detectada por el pueblo como un paso belicista y recibió la condena de los trabajadores de todo el país. Señalaban:

Nos oponemos a la guerra porque tenemos la solemne promesa de los trabajadores del Paraguay y de toda la América, de que ellos jamás irán a la guerra, que a la declaración de guerra de sus gobiernos responderán con la insurrección general.

Entretanto, no dejaban de actuar presiones internacionales para que se produjera un enfrentamiento guerrero. Chile, particularmente, que sufría los rigores de la crisis económica, alentó en Bolivia la atención por el territorio del sudeste de tal manera que se olvidasen los anhelos marítimos siempre latentes en el país.

Salamanca encontró en el problema territorial del Chaco el motivo ideal para desviar la atención del pueblo y reprimir con más severidad al movimiento social. Aseguró que Bolivia derrotaría fácilmente a ese débil país, el Paraguay, con el "gran ejército boliviano", según el mito liberal. Sobre un posible triunfo bélico, Salamanca pensaba consolidar el régimen feudal-colonial de Bolivia. Sus asesores militares se mostraban muy optimistas y afirmaban que en poco tiempo "entrarían a Asunción con el látigo en la mano".

El 15 de julio de 1932, los paraguayos atacaron la guarnición de Laguna Chuquisaca y virtualmente estalló la guerra. En ese momento, Bolivia tenía en el Chaco 1500 hombres y 22 camiones, y Salamanca se oponía a volcar todas las energías de la nación para defender el sudeste. Las tropas eran abastecidas "por cuenta gotas" y se pronosticaban derrotas en vez de triunfos.

Entonces se desencadenó la serie de fracasos y retiradas que no terminó sino tres años después, con la pérdida de 50 000 vidas y un territorio de aproximadamente 300 000 kilómetros cuadrados. Con su estrategia y táctica feudales, el ejército boliviano fue destruido tres veces y tuvo que ser reconstruido otras tantas. Jugó en favor de la estrategia del ejército paraguayo y se hizo derrotar en su terreno.

Mientras la guerra producía sus efectos lógicos, la crisis económica se acentuó mucho más:

Cerradas las posibilidades de crédito externo, desde la suspensión del servicio de los empréstitos norteamericanos, en 1930, la financiación de los gastos de guerra se hizo con emisiones fiduciarias del Banco Central de Bolivia, que concedió préstamos sucesivos al Estado hasta un total de cuatrocientos millones de bolivianos. Por suerte, a raíz de la mejoría

general que se operó en el mercado mundial y como consecuencia del *pool*, la cotización del estaño subió.²

La guerra duró hasta junio de 1935, y en 1936 el tipo de cambio oficial era de 4½ d. y el libre de 3 d. por boliviano, la depreciación de la moneda era ya incontenible y duró muchos años más.

Cuando concluyó el conflicto, la crisis económica interna se había agudizado enormemente como resultado del conflicto y las emergencias de la crisis mundial. Pero, a esos factores se sumó uno más: el efecto de la derrota, que fue atribuido por el pueblo a la incapacidad del gobierno y a la estrategia de su ejército: en síntesis, a todo el régimen.

Al concluir la guerra del Chaco los problemas sociales y económicos eran obviamente más graves que tres años antes. Quedó entonces confirmado que la medicina —o sea haber precipitado la contienda armada— resultó peor que la enfermedad. Un complejo de grandes males aquejaba al país: la crónica penuria económica, la crisis mundial y sus efectos sobre la raquítica economía semicolonial y, finalmente, los efectos de la guerra. Las cotizaciones de minerales seguían siendo bajas y la inflación adquiría mayor velocidad, aplicándose el ejemplo gráfico que “mientras los precios subían en ascensor, los salarios subían por las gradas”. Cuando concluyó la guerra, en 1935, los billetes en circulación sumaban 145.945,000 bolivianos y en 1940, llegaban a 475.856,000.

Sin embargo, la guerra tuvo por virtud desenmascarar la artificialidad del régimen feudal-colonial que vivía el país y unificar el pensamiento popular para combatirlo y trasformarlo. El descontento de posguerra era mayor, y el presidente Tejada Sorzano fue cambiado por un gobierno militar, con cierta tendencia “socialista”. Durante el gobierno Toro, se aplicó mayor control a la exportación de minerales y también fueron nacionalizadas las concesiones petrolíferas que habían sido concedidas a la Standard Oil Co.

Mas el gobierno militar de Toro fue derribado por el coronel Germán Busch, quien dictó el decreto de 7 de junio de 1939, disponiendo la venta obligatoria de divisas al Estado, en el 100%, debiendo solicitar los dueños de las minas las divisas que necesitaran para cubrir sus gastos en moneda extranjera. Asimismo, el Banco Minero y el Banco Central fueron estatizados.

Hasta 1913, los banqueros privados tenían derecho a emitir bille-

² Victor Paz E. *Bolivia. El pensamiento económico latinoamericano*, p. 65.

tes. Sólo entonces se creó el Banco de la Nación Boliviana, aunque éste se convirtió, en realidad, en instrumento de Patiño y su partido: el liberalismo. Para su constitución, el Estado boliviano aportó 12 y medio millones de bolivianos, que obtuvo en préstamo en un banco francés, el Credit Mobilier. En principio, la administración del instituto emisor debía contar con tres vocales propietarios por el gobierno en representación de las 100 000 acciones del Estado, y los cuatro restantes por la junta general de accionistas, sin la concurrencia de las acciones del Estado.

Después de una serie de maniobras de Patiño, la representación del gobierno en el cuerpo directivo, se redujo a un propietario y un suplente por haber vendido 30 000 acciones. Más tarde, el Estado vendió 20 000 acciones más, y la directiva del Banco de la Nación Boliviana quedó sin derecho de elegir NINGÚN representante para su Consejo de Administración y quedó totalmente en manos de la firma Patiño. "Con el Banco en sus manos —dice A. Céspedes en el *Dictador Suicida*—, la Rosca pudo gobernar el país durante 40 años."

El Banco de la Nación Boliviana se convirtió, en 1929, en Banco Central de la Nación; sólo entonces dispuso 100% de sus acciones, aunque en muchas oportunidades el Consejo de Administración siguió controlado por el patinismo.

Cuando todavía estaba gobernando el presidente Tejada Sorzano, el movimiento obrero adquirió un empuje extraordinario tanto en sus planteamientos políticos, como en su organización. En marzo de 1933 se produjo una huelga general de gran combatividad y disciplina, la misma que determinó la suerte del gobierno y anunció su derrocamiento. En efecto, en mayo, Toro tomó el mando supremo de la nación.

Sin embargo, este gobierno —que dictó algunas medidas sociales reformistas— también enfrentó la ascendente marea laboral, que después de gran cantidad de huelgas aisladas, desembocó en un congreso nacional de trabajadores —el quinto de la historia obrera boliviana. Entonces se fundó la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, con 213 sindicatos y 70 000 afiliados. En junio de 1937 se produjo la tercera huelga general que conoció el país y determinó la caída de Toro y el ascenso de Busch.

La acción política del movimiento obrero determinaba indudablemente los cambios de gobierno, y los gobernantes se esforzaban en reflejar las aspiraciones populares, como lo revelan la nacionalización del petróleo, la venta obligatoria de divisas al Estado por parte

de los grandes mineros, etcétera, que, no obstante su audacia, se trataba de medidas reformistas que provocaban a la oligarquía y la decidían a reacciones más enérgicas, haciendo recordar que “quien hace revoluciones a medidas, lo único que hace es cavar su propia tumba”.

Durante el gobierno Busch, se realizó el Sexto Congreso Nacional de Trabajadores, y en él se plantearon objetivos nacionales como la única manera de obtener mejoras económicas y sociales. La formación de una conciencia nacional era más notable, y para el caso boliviano significaba luchar por la independencia económica y política del país, tener conciencia de un antagonismo irreconciliable con los colonizadores extranjeros y sus agentes criollos y, por consiguiente, la necesidad de organizar a los trabajadores en un ejército político, con el fin de acabar con la opresión colonial extranjera y la esclavitud de toda la nación.

Cuando el país marchaba por un camino de recuperación de su soberanía nacional, en agosto de 1939, dos meses después del decreto de 7 de junio, se produjo la muerte del presidente Busch. Entonces retomaron el gobierno fuerzas tradicionales que obedecían a las directivas de los intereses de la gran minería, los monopolios y los terratenientes. Empezó a aplicarse una política de intervencionismo ostensible, poniendo la fuerza y recursos del Estado al servicio de los intereses de la minoría.

La inflación se había desencadenado, acentuando la crisis y los sufrimientos de las masas populares, que seguían ajustándose los cinturones. El trabajador boliviano sólo consumía 24 kilos de pan al año, mientras el argentino se alimentaba con 154. En cuanto al consumo de carne, un obrero boliviano se alimentaba con sólo 23 kilos al año, mientras un argentino consumía 119. La Misión Magruder informó, en 1943: “El régimen alimentario del trabajador promedio de Bolivia se halla por debajo de los *standars* comúnmente considerados para la buena salud; se encuentra en un nivel peligrosamente bajo.” En el campo, los labradores no conocían el pan, el azúcar ni la fruta, y debían cultivar gratuitamente las tierras de la hacienda a cambio de una parcela. Cuando los campesinos de algunas haciendas del valle intentaron organizarse en sindicatos para defenderse de los abusos de los gamonales, fueron rápidamente desorganizados por fuerzas policiales.

Los partidos políticos tradicionales —Liberal, Republicano, etcétera—, no representaban en ninguna forma el interés nacional y eran considerados como la “carcoma” de la República. Por otra parte, la agitación social se convertía en el caldo de cultivo para la formación

de nuevos partidos políticos. En efecto, el nacionalismo consecuente del tiempo del presidente Siles reapareció en marzo de 1936, publicando un órgano periodístico llamado *La Calle*, en el cual apoyaba las demandas obreras y desenmascaraba la política antinacional y antiobrera de los gobiernos restauradores y reformistas. Este órgano de prensa sería el germen del futuro Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); era redactado por Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, Armando Arce, Paz Estenssoro, José Cuadros y otros.

Reflejando las tendencias reformistas de la clase terrateniente, en agosto de 1937 se fundó, en Santiago de Chile, el partido de la Falange Socialista Boliviana, contándose entre sus inspiradores Carlos Puente y Óscar Unzaga. Al fundarse, este partido se basaba en su exaltado fervor patriótico partiendo del principio de la cooperación de clases para combatir a las ideologías de izquierda. Su organización se orientaba en una rígida disciplina jerárquica.

En julio de 1940, también en Santiago de Chile, se fundó el Partido de la Izquierda Revolucionaria, con personajes como José Antonio Arze, Ricardo Anaya y otros. Su programa se inspiraba en los postulados fundamentales del marxismo "base inexcusable de cualquier política verdaderamente socialista", como decía su programa ideológico. En 1941 se fundó el Movimiento Nacionalista Revolucionario.

Los principios sustanciales del MNR eran 1) contra la democracia entreguista; 2) contra el seudosocialismo, instrumento de una nueva explotación; 3) con el nacionalismo revolucionario; 4) por la consolidación del Estado y la seguridad de la patria, y 5) para la liberación económica y soberanía del pueblo de Bolivia.

Al fallecer Busch, la gestación de los nuevos partidos políticos avanzó rápidamente, y las fuerzas sociales del país radicalizaron su actuación, acelerando el crecimiento de esas nuevas corrientes ideológicas. Por otra parte, al producirse la restauración con el general Peñaranda, quien fue elegido presidente de la República por la Concordancia, o sea la alianza de los partidos nacidos a principios de siglo, se puso de nuevo en vigencia la política liberal, inspirada en el pensamiento colonial sintetizado en Félix Avelino Aramayo, millonario minero, que trazó las coordenadas liberales que desde entonces vivió y todavía vive en gran parte Bolivia: Aramayo había expresado que el programa del general Pando:

Se reduce a un gran pensamiento regenerador: *Definir el periodo geográfico de la República*, es decir, poner término a las cuestiones de lími-

tes y de restricciones comerciales y aplicar todos los recursos del erario y todos los elementos provenientes de combinaciones internacionales al desenvolvimiento de las riquezas públicas, es decir a la *apertura de caminos que pongan nuestros productos al alcance del extranjero* y que atraigan *inmigración de capitales*, para que los poderosos elementos naturales que poseemos puedan dar frutos.

Aunque esa política fue denunciada por la prensa y el parlamento, continuó vigente sin alteración, y el gobierno siguió firmando "contratos inmejorables", para venta de materias primas a monopolios extranjeros, aunque a precios inferiores a los de las cotizaciones internacionales.

Fue entonces cuando Bolivia se incorporó decididamente a la ascendente lucha anticolonial que se había desatado en Asia, el Medio Oriente, África y América Latina. Particularmente, los trabajadores de las minas, unos 50 000 obreros que no tenían derecho ni a sindicalizarse, empezaron a demandar mejoras económicas y sociales, pero fueron desestimados y amenazados para que se dedicaran a producir y no alteraran el orden establecido. Sin embargo, los obreros mineros insistieron en sus solicitudes, recurriendo a los procedimientos legales y pacíficos.

Estos trabajadores se vieron obligados a salir en manifestación demandando el pago de salarios y fueron rechazados por densa metralla. Un delegado obrero de la CIO señalaba:

Varios emplazamientos de ametralladoras habían sido levantados en la pampa. A las diez a.m. los soldados abrieron fuego sobre la multitud con ametralladoras, un mortero de campaña y fusiles. Los trabajadores se refugiaron donde pudieron. El fuego continuó hasta las tres de la tarde. Los muertos fueron precipitadamente enterrados en un cementerio cercano adoptándose precauciones para que no se pudiera hacer la cuenta de bajas. Había alrededor de 8000 personas en la multitud sobre la que dispararon los soldados. No se informó que uno solo de los soldados hubiera sido herido o muerto durante esa acción. Los militares tomaron medidas drásticas para prevenir cualquier investigación sobre los hechos.

La represión no sólo tuvo por objeto poner en vereda a los obreros, sino aplicar la novísima tesis económico-oligárquica de "matar para mantener los bajos costos". Al respecto, Augusto Céspedes señala en el *Presidente colgado*:

A fin de analizar esta estrategia (de la masacre) es necesario seguir el curso de los precios de venta del mineral, paralelamente al plan de gué-

ra elaborado por las empresas y el gobierno. Los grandes mineros gestionaron un aumento en el precio de 48 centavos de dólar por libra fina, hasta conseguir 64 centavos, o sea casi un 30%, retroactivo al 1º de enero de 1942. Sincronizadamente se dictaban decretos de emergencia bélica que comprometían al ejército en la vigilancia del trabajo forzado en las minas. Los millones de dólares del aumento beneficiaban exclusivamente a los magnates mineros. En cuanto a los obreros sus salarios habían perdido capacidad adquisitiva en un 12%.

La masacre de Catavi se produjo el 21 de diciembre de 1942, y fue el punto más alto de la curva ascendente del movimiento obrero y principio del fin del dominio oligárquico minero-terrateniente.

La masacre de Catavi sacudió a todo el país y se convirtió en un escándalo internacional. AFL y CIO de Estados Unidos enviaron investigadores para conocer la magnitud del genocidio.

Varios meses después, el parlamento tomaba cartas en el asunto y el MNR interpeló al gabinete. Entonces Paz Estenssoro expresó:

Los señores ministros se quejan de la debilidad del Estado boliviano. Efectivamente es débil cuando está frente a las grandes empresas; pero es muy fuerte cuando se pone frente a los trabajadores. Declaro en nombre del MNR que si no se sanciona al general Peñaranda y a sus ministros por la masacre de Catavi, el pueblo habrá remachado las cadenas de la esclavitud.

El gabinete se salvó de la censura por un voto, pero al día siguiente se comprobó que éste había sido escamoteado.

La declinación de la fuerza oligárquica dependiente de los monopolios y el fortalecimiento de las corrientes populares nacionales llegaron a sus puntos de máxima tensión, y era fácil advertir que el país iba a ser escenario de un inminente cambio de grandes alcances. Mas, la oligarquía se defendía con medidas más enérgicas. En efecto, a principios de diciembre de 1943 dictó el Decreto de Seguridad del Estado, que autorizó a disparar sobre el pueblo a simple toque de corneta; aplicó la censura de prensa y radio; evitó la circulación de la propaganda; estableció el control de las comunicaciones, allanamiento de domicilios, secuestro de correspondencia, etcétera. *La Calle* fue clausurada. Pero, el 20 de diciembre de 1943 —a pocos días de dictada la Ley Seguridad— el gobierno Peñaranda fue derrocado por el MNR, conjurado con una fracción de militares nacionalistas que se había agrupado en una logia llamada "Razón de Patria". A consecuencia de este golpe, se hizo cargo del gobierno el coronel Gual-

berto Villarroel, que inició una etapa de gobierno nacionalista: desplazó del poder a la *Rosca* y aplicó medidas tendientes a solucionar el problema colonial de las minas y el lastre feudal terrateniente en el medio rural.

El ascenso al poder de la alianza MNR-RADEPA constituyó el comienzo de una política interesada en cambiar la estructura feudal-colonial predominante. En efecto, en los países coloniales como Bolivia, la revolución no significa reemplazar a la burguesía por el proletariado en el poder, sino, ante todo, el cambio de las minorías colonialistas por las clases mayoritarias nacionales. De ahí que los procesos revolucionarios, varias veces instaurados en Bolivia, y siempre derrotados por el colonialismo, en ningún caso fueron "nazi-fascistas", ni "comunistas", sino básicamente nacionalistas, porque sólo donde se ha consolidado la nación se puede dar su conformación adjetiva.

La curva de las acciones populares nacionalistas iniciadas antes de la guerra del Chaco, llegó a su auge en diciembre de 1943 cuando sus expresiones partidario-políticas, el MNR y la RADEPA, tomaron el poder. Pero el origen de este suceso político está, en gran parte, en la crisis económica de 1930, con su serie de consecuencias, como el desencadenamiento de las luchas sociales, la inflación; el descubrimiento de la cuestión nacional-colonial, la guerra del Chaco, la crisis de los partidos tradicionales, la aparición de nuevas ideologías políticas, el crecimiento del movimiento obrero-campesino, etcétera.

Durante los años 1935-1942, las condiciones objetivas se desarrollaron rápidamente. También maduraron las condiciones subjetivas, tarea que estuvo a cargo de los grupos políticos revolucionarios, los intelectuales, la prensa nacional, etcétera.

Al asumir la dirección del gobierno, luego de desplazar del mismo a las fuerzas feudales y coloniales que ocupaban el poder casi ininterrumpidamente desde la fundación de la república,³ el MNR y RADEPA, que representaban genuinas fuerzas populares, nacionalizaron el poder político, conquista fundamental para proceder a la solución de los problemas económicos que enfrentaba el país. El nuevo gobierno comenzó sus actividades solucionando problemas nacionales: reinició una etapa de nacionalización paulatina de las minas poniendo en vigencia el decreto de entrega total de divisas de la gran minería al Estado, dictado por Busch el 7 de junio de 1939;

³ Fueron presidentes que realizaron política de contenido nacionalista Belzu, Busch y Villarroel. Estuvieron en el poder menos de diez años en total, de los 130 años de vida republicana.

dio libertad a los obreros para que se sindicalizaran y plantearan libremente sus demandas económicas y sociales a las empresas; impulsó medidas reformistas para terminar con el sistema feudal que imperaba en el medio rural; enfrentó los problemas económicos nacionales aplicando, en esa forma, las primeras medidas destinadas a mejorar la situación financiera del Estado, deteriorada por la crisis mundial del año 30 y la guerra del Chaco; redujo la velocidad de la inflación; ayudó a mejorar el nivel de vida de las mayorías.

Pese a esa nueva política económica y social, la *Rosca* inició una activa oposición para recuperar el poder político que había perdido y que quería recuperar a toda costa, antes de que el nuevo gobierno progresista aplicara medidas económicas de fondo y diera paso al ascenso popular ansioso de hallar conquistas nacionales y democráticas. La oposición de la *Rosca* fue intensa desde el primer momento y se plegaron a ella todos los partidos políticos existentes a manera de furgón de cola, desde los de extrema derecha hasta los que se denominaban de "izquierda", pasando por el POR y el PIR de José Antonio Arce y Ricardo Anaya.⁴

En cierto momento, la oposición de derecha pudo romper la alianza MNR-RADEPA, pero ésta fue restablecida aunque sólo hasta las postrimerías del gobierno, logrando así nuevos avances para el proceso revolucionario. Entonces se creó la Federación de Minerías que agrupaba a los trabajadores de las minas y se realizó el Primer Congreso Indígena que abrió a los campesinos del país la posibilidad de organizarse y liberarse del sistema de trabajo gratuito en las haciendas.

Durante el gobierno Villarreal, el MNR ocupó, entre otros, el Ministerio de Hacienda, y como resultado de esa gestión aumentó la recuperación de ingresos fiscales y el fortalecimiento de la moneda, que a fines de 1945 casi alcanzó a nivelar el cambio libre con el de tipo oficial. La producción de estaño alcanzó a 45 000 toneladas, *record* sólo superado en 1929 con 48 000. De 19 millones de dólares de disponibilidades del Banco Central, al 31 de diciembre de 1943, la política del Ministerio de Hacienda las hizo subir a 34 millones en 1945, aplicando una política que, según el informe de Paz Estenssoro, se dirigía a:

⁴ Por esa conducta práctica equivocada de oponerse al proceso histórico iniciado por Villarreal, el PIR se desintegró poco después de 1948. De los residuos nació el Partido Comunista, que nunca olvidó la vocación contrarrevolucionaria que heredó de sus antecesores.

Aprovechar la última fase de la coyuntura que significa la demanda de nuestros productos de exportación, para prevenir la depresión consecuente a la posguerra (la segunda) y el encauzamiento de la distribución ordenada de las divisas hacia la importación de artículos de primera necesidad y de bienes de producción, fuera de usarse la concesión de giros en moneda extranjera como instrumento para proteger la naciente industria nacional.

Por otra parte, el Parlamento aprobó la Constitución de 1945, ampliando las normas socialistas de la aprobada en la Constituyente de 1938. En particular esta nueva constitución trató de legislar sobre la población campesina, hasta entonces marginada de su texto.

Al aplicarse desde 1943 una política nacional, se había empezado efectivamente una lucha contra el “subdesarrollo”, neologismo que encubría la práctica de coloniaje. El gobierno RADEPA-MNR no hablaba de buscar el progreso utilizando conceptos abstractos como aquellos de “atraer capitales”, “buscar la inversión privada”, “garantizar la empresa y la iniciativa individuales” y otros *slogans* atrayentes que, aunque en la apariencia ofrecen algún desarrollo, en el fondo lo único que hacen es acentuar la dependencia colonial, producir un subdesarrollo mucho más acelerado que, además, conduce a la pérdida de soberanía del Estado y a la liquidación de la nacionalidad, y donde, finalmente, el mismo Estado deja de ser nacional y se convierte en apéndice de la metrópoli, sin ninguna independencia ni derecho de autodeterminación.

Las derechas tradicionales y las recién organizadas, arreciaron la ofensiva para restaurar el Estado colonial, liquidando al nacional. A esa tarea se sumó el PIR como una fuerza de choque tanto física como ideológica, afirmando que todo lo que había hecho el nuevo régimen estaba mal y que había que eliminar. La intensa lucha opositora encabezada por dicho partido de “izquierda”, neutralizó a los trabajadores que apoyaban al régimen y la contrarrevolución avanzó por terreno libre, hasta derrocar al gobierno y colgar a Villarroel de un farol de la Plaza Murillo, frente al Palacio Quemado, el 21 de julio de 1946.

Mas el PIR —que se definía como partido marxista-leninista, etcétera—, no tomó el gobierno, como podía esperarse de su activa participación en la oposición al régimen nacionalista, sino que prontamente entregó el gobierno a las fuerzas políticas antinacionales de la *Rosca*: los grandes mineros y terratenientes, que reiniciaron la colonización del país mediante la entrega de las materias primas, la restau-

ración del feudalismo en el medio rural, todo acompañado de masacres de obreros y campesinos a cargo de las fuerzas institucionales del Estado. El gobierno fue desnacionalizado por la Rosca en complicidad con la "izquierda" y se perdió todo lo que el pueblo boliviano había conquistado en esos pocos años.

En síntesis, la crisis de 1930 determinó primero la deflación con toda su secuencia de malestar y dificultades, luego la guerra con el Paraguay y simultáneamente un proceso inflacionario que, en conjunto, pusieron al desnudo los problemas nacionales que ya se dejaban vislumbrar desde antes de 1930. Todos estos problemas se convirtieron en el contenido subjetivo de la conciencia de las mayorías, que inmediatamente se propusieron resolverlos. Paralelo a este fenómeno de toma de conciencia popular, también surgieron los nuevos partidos políticos (MNR, PIR, FSB, RADEPA, grupos de izquierda) que reflejaban distintos aspectos de la realidad socioeconómica de la época. Pero mientras unos partidos nacían de arriba a abajo, mecánicamente, por la vibración externa producida por el crecimiento del fascismo y el comunismo en el Viejo Mundo, otros, como el MNR, emergían fundamentalmente al impulso de las fuerzas internas del país.

El planteamiento de la solución de los problemas de Bolivia —el movimiento popular y las nuevas corrientes políticas— surgió tan sólo cuando se daban ya las condiciones materiales para su solución, y esas condiciones fueron aceleradas y complementadas por la crisis económica mundial de 1930 y su resultado inmediato: el conflicto bélico con Paraguay, la inflación, etcétera.

La revolución boliviana se daba en la esencia de los problemas nacionales antes de la crisis mundial. Ésta puso al desnudo esa crisis interna que, con los otros factores, creó la conciencia colectiva dirigida a cambiar la estructura del país que, en principio, intentó ser canalizada por las vías reformistas, lentas y dolorosas por Toro, Busch y Villarreal. Finalmente, la revolución nacional sólo se realiza en profundidad, rápidamente y con un mínimo de violencia, con la revolución de 1952. La crisis del 30 tuvo, pues, gran significación en la vida económica y política de Bolivia, ya que, principalmente, abrió las puertas a los movimientos reformistas del "militarismo socialista" y a la revolución del MNR de 1952, que destruyó toda, o por lo menos gran parte, de la antigua estructura feudal-colonial de la antigua Bolivia, poniéndola en la vía de las naciones modernas.

BIBLIOGRAFIA

ÓRGANOS DE PRENSA

El Diario
La Calle
La Razón

LIBROS Y FOLLETOS

- CÉSPEDES, Augusto. *El dictador suicida*. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1956, Colección América Nuestra.
El presidente colgado. Buenos Aires, Editorial Alvarez, 1966.
- MONTENEGRO, Carlos. *Nacionalismo y coloniaje*. La Paz, 1943.
- PAZ ESTENSSORO, Víctor. *Bolivia. El pensamiento económico latinoamericano*. México, Fondo de Cultura Económica, 1945.
- CORNEJO, Alberto. *Programas políticos*. Cochabamba, Editorial Universitaria, 1947.
- KLEIN, Herbert. *Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana*. La Paz, Editorial Juventud, 1968.
- ANTEZANA, Luis. *El movimiento obrero boliviano*. La Paz, 1966.
- OCAMPO, Luis. *La regulación del crédito y la estabilidad monetaria*. La Paz, Talleres Gráficos Gamarra, 1945.
- CUADROS, Alfredo. *Estabilización en un sistema de papel moneda controlado*. Cochabamba, Imprenta Universitaria, 1941.

EL ECUADOR EN LOS AÑOS TREINTA

Agustín Cueva

I. EL ECUADOR ANTES DE LA CRISIS

El Ecuador sigloventino nació bajo el signo de la revolución liberal de 1895, cuyo aliento se apagó, por desgracia, prematuramente. Sucede que, realizadas las transformaciones institucionales y políticas que la burguesía agraria exportadora de la costa necesitaba para afianzarse como clase dominante, el liberalismo perdió interés en impulsar nuevas reformas, y el espíritu inicialmente emprendedor y progresista de esa burguesía decayó.

A partir de la segunda década de nuestro siglo, dicha clase se limitó a tratar de mantener su control del Estado al menor costo, para lo cual no vaciló en pactar con su antigua rival, la aristocracia de la sierra, cuya revigorización era inevitable en la medida en que la estructura agraria del callejón interandino, sustento de su poder económico y social, no había sido cancelada por la revolución del 95. Los liberales concedieron pues a los conservadores carta blanca de dominio a nivel local y regional, y compartieron con ellos ciertas prebendas a fin de amortiguar una oposición que aparecía tanto más peligrosa cuanto que los terratenientes tradicionales ejercían, por medio del clero, un control ideológico sobre la mayoría de la población nacional, asentada en la sierra. Lo que explica, además, por qué los liberales tuvieron que recurrir permanentemente al fraude para "legitimar" su dominación.

Y en lo económico, nuestra burguesía sufrió una atrofia prematura, al no poder superar la fase agrariomercantil. Cuando las exportaciones de cacao produjeron una significativa acumulación de capitales, éstos no fueron invertidos en actividades realmente productivas, sino que se destinaron a la usura pura y simple, a través de un omnipotente sistema bancario que mediatizó al Estado y convirtió al fisco en fuente de enriquecimiento privado:

Hasta el último día del año de 1924 la deuda interna del Ecuador ascendía a S/. 39.834,541.70. De esta suma, cerca de 37.000,000 corres-

pondían sólo a los bancos. Pero había uno de éstos, sobre todo, que, siendo el mayor y más poderoso emisor de billetes, era a la vez el mayor y más poderoso acreedor del gobierno: el Banco Comercial y Agrícola, de Guayaquil. Hasta mediados de 1924, o sea, al terminarse la presidencia de José Luis Tamayo, esta institución de crédito anotaba, en contra del fisco ecuatoriano, la suma de S/. 21.772,253.27. No era, por cierto, que todos estos millones los hubiese recibido el gobierno, de contado, en beneficio de la administración. Eran intereses compuestos —diestra e implacablemente capitalizados, al 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año—, lo que, de un modo principal, había engrosado fabulosamente la deuda; pues el verdadero monto de préstamos concedidos por el Banco Comercial y Agrícola, en diferentes épocas de crisis fiscal, apenas ascendía a un poco más de S/. 10.000,000.¹

De este modo la burguesía logró consolidar su poder e implantar un “orden liberal” que, a partir del asesinato del líder de la revolución de 1895, general Eloy Alfaro, en 1912, presentó en su superficie política un desarrollo conforme a las reglas de juego democraticoburguesas, con mandatarios elegidos, diz que, por el pueblo, y que terminaban “normalmente” sus periodos de gobierno. Era que, como afirma el historiador Óscar Efrén Reyes:

Desde las candidaturas de presidente de la República y ministros de Estado hasta las de senadores y diputados, impuestas oficialmente, tenían que ser previamente conocidas y aprobadas por el poderoso banco (Comercial y Agrícola).²

Mas esta clase dominante era un gigante con pies de barro, ya que su suerte dependía del comercio exterior y, en particular, de las posibilidades de colocar su cacao en los mercados internacionales. Por eso, cuando a causa de la deflación de la posguerra el precio de dicho producto bajó en Nueva York de 26 $\frac{3}{4}$ centavos de dólar por libra en marzo de 1920, a 12 centavos en diciembre del mismo año, y a un mínimo de 5 $\frac{3}{4}$ centavos en 1921, el orden liberal comenzó a resquebrajarse. En 1916 se habían exportado más de un millón de quintales de cacao; en 1923, ya no se exportaron sino 600 000. Y la caída de los precios, sumada a la merma del volumen de exportaciones, hizo descender el valor de éstas, de 20.220,000 dólares en 1920, a \$ 9.360,000 en 1921, \$ 10.600,000 en 1922 y \$ 7.580,000 en 1923.

¹ Oscar Efrén Reyes. *Los últimos siete años*. Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1933, pp. 31 y 32.

² *Breve historia general del Ecuador*, tt. II-III, 6ª ed. rev. Quito, Ed. Fray Jodoco Ricke, 1960, p. 720.

Con ello, la base de la dominación burguesa estaba minada y el colapso de los regímenes llamados "plutocráticos" tanto más próximo, cuanto que la misma sociedad liberal había engendrado algunos agentes de cambio.

El año 1922 fue turbulento en nuestro país. Los trabajadores de los servicios públicos (transportes, energía eléctrica, etcétera) protestaron por la elevación del costo de la vida y declararon una serie de huelgas, que fueron generalizándose hasta culminar con la insurrección proletaria del 15 de noviembre de ese año, reprimida a sangre y fuego en Guayaquil.

Pero la burguesía no había procreado únicamente este grupo social, sino también un nuevo e importante sector de clase media, cuya primera promoción, formada al amparo de la democratización de la enseñanza, irrumpió por los años veinte. Gente de extracción popular, pero educada y llena de aspiraciones, se vio naturalmente frustrada dentro de una sociedad todavía inelástica, no preparada para ubicarla de acuerdo con sus expectativas, tanto porque el liberalismo había democratizado en mayor medida la superestructura cultural que la estructura económica, cuanto porque irrumpía precisamente en un momento de crisis.

Así que, en lugar de constituir una base de apoyo para el orden liberal, esta pequeña burguesía devino su impugnadora. La *intelligentsia* ecuatoriana tomó el socialismo como bandera de lucha y se proclamó aliada del incipiente proletariado, cuyos primeros sindicatos ayudó a organizar. En fin, el 9 de julio de 1925, la joven oficialidad, que en el ejército se había sentido tan relegada como el resto de la pequeña burguesía en el país (ascensos por "palancas" o en razón del apellido o la fortuna, según denuncia de los propios militares), dio un golpe de Estado de carácter ya no caudillista como los anteriores, sino de naturaleza "institucional" y destinado a instaurar un régimen reformista, manifiestamente opuesto a la "plutocracia" de Guayaquil.

La "revolución juliana", como se denomina a este movimiento, tuvo desde luego muchos tropiezos, pues ni siquiera el control político del Estado, obtenido *manu militari*, podía conferir a la clase media un poder igual al que por su control de los medios de producción y del comercio poseía la burguesía de la costa. Pero en fin, tanto por la crisis económica por la que ésta atravesaba como por el apoyo que la aristocracia terrateniente de la sierra le brindó, el gobierno "juliano" logró consolidarse; al precio, claro está, de no tocar la estructura agraria interandina. Mas ello le permitió tomar algunas me-

didadas contra la burguesía costeña, que consistieron principalmente en establecer mecanismos estatales de control de la banca y el comercio, con el fin de captar una parte de sus cuantiosos ingresos para el fisco. Así pudo también dictar algunas leyes en favor de los trabajadores asalariados de los sectores modernos de nuestra sociedad; aquéllos, justamente, que habían protagonizado la insurrección del 15 de noviembre.

Y como a partir de 1925 se presentó una coyuntura internacional favorable, que permitió que nuestras exportaciones volvieran a elevarse (a cerca de 16 millones de dólares en 1925; 11 y medio millones en 1926; 14 millones en 1927 y cerca de 15 millones en 1928), tales medidas dieron buenos frutos, sobre todo para la clase media. Tuvimos en esos años un Estado rico, cuyas crecidas rentas se emplearon en mantener una inflada burocracia. Antes de la "revolución" los empleos habían escaseado; mas con ésta "se crearon cargos sin función, o con funciones subdivididas, para mucha gente. Se triplicaron o cuadruplicaron los sueldos de la alta burocracia";³ "comenzó a circular en gran escala el dinero. Y se advirtió, principalmente en las clases medias, alguna sensación de bienestar".⁴

De suerte que la revolución "juliana" consiguió modificar parcialmente el panorama social y político del país. De una parte, debilitó el poder de la burguesía de la costa, al limitar sus facultades, antes omnímodas, de decisión política y económica. De otra parte permitió, acaso sin tomar cabal conciencia de ello, el robustecimiento político y hasta económico de la aristocracia de la sierra; lo primero porque contó con su apoyo y asesoramiento para gobernar; lo segundo, porque de tal "asesoramiento" se aprovecharon los terratenientes para obtener medidas como la ley de protección industrial, que les permitió transferir, en condiciones ventajosas, una parte de su renta agrícola a la industria.

Además, el peso sociopolítico de la clase media aumentó por las razones arriba indicadas. Y el problema obrero tomó un cariz institucional, gracias a las leyes laborales que se acababan de dictar.

Tal era la situación de nuestro país cuando sobrevino una nueva crisis, originada en la depresión del sistema capitalista.

2. IMPACTO ECONÓMICO DE LA DEPRESIÓN DEL 29

Los efectos económicos de la gran depresión internacional de 1929 no tardaron en hacerse sentir en nuestro país. El presidente del Banco

³ Oscar Efrén Reyes: *Breve historia...*, p. 749.

⁴ Oscar Efrén Reyes: *Los últimos siete años*, p. 179.

Central del Ecuador, en su Informe Anual correspondiente a 1930, describe en los siguientes términos la situación:

Contrariamente a las esperanzas que se alentaban en mayo y junio de 1930, acerca de la acentuada mejoría de los negocios en esta época del año, en que todas las actividades entran en la plenitud de su desarrollo, la realidad de las cosas ha desvanecido estas expectativas y presenta una situación muy diferente. Terminada la recolección del cacao de cosecha, que imprime transitorio alivio en los negocios, principalmente en las plazas de la costa, las de otros productos que siguen en importancia a aquél, no han logrado ejercer en el mercado la influencia decisivamente favorable que se esperaba, atenta la relativa importancia de su volumen. La enorme baja experimentada en el precio del café, que se ha derrumbado desde los S/. 70.00 que alcanzó en 1929, hasta los S/. 25.00 a que se cotiza actualmente, por quintal; la reducción, aunque en menor escala, experimentada igualmente en el precio del arroz, y, por este orden, en los otros productos de nuestro suelo afectados por la "crisis" que aflige a la mayoría de los países del globo, han determinado un nuevo decaimiento en las actividades generales de la nación y son, otra vez, causa de inquietud y desconcierto para el provechoso desenvolvimiento de los negocios.

El principal mecanismo a través del cual la depresión del 29 repercutió en nuestra economía fue, pues, la caída brusca de los precios de exportación. En los años 1930, 31 y 32, bajaron a alrededor de la mitad de lo que habían sido en 1927, y sólo a partir de 1933 comenzaron a repuntar. Pero aun este síntoma de "convalecencia" fue ilusorio, por cuanto los términos de intercambio nos fueron desfavorables, al elevarse en mayor medida los precios de importación:

CUADRO 1

INDICE DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

Años	Precios de exportación	Precios de importación
1927	100.0	100.0
1928	98.1	89.1
1929	83.3	80.2
1930	56.5	78.7
1931	49.0	73.0
1932	43.0	70.0
1933	75.1	124.8
1939	168.2	206.3

FUENTE: Luis Alberto Carbo. *Historia monetaria y cambiaria del Ecuador*. Quito, Imp. del Banco Central del Ecuador, 1953.

CUADRO 2

RELACIÓN DE PRECIOS DE INTERCAMBIO

Periodos	Precios de exportación	Precios de importación	Relación de precios de intercambio
1928-1929	100.0	100.0	100.0
1930-1934	78.2	98.8	79.3
1935-1939	128.7	202.8	63.2

FUENTE: Germánico Salgado. *El Ecuador y la integración latinoamericana*. Quito, Junta Nacional de Planificación y Coordinación, 1969.

Lo cierto es que, por las razones ya indicadas, el valor total de nuestras exportaciones se redujo notablemente, y las importaciones tuvieron que restringirse casi en la misma proporción.

CUADRO 3

VALOR DECLARADO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
(en miles de dólares)

Años	Exportaciones	Importaciones
1928	14.840	16.535
1929	12.681	16.866
1930	11.378	12.670
1931	6.835	8.728
1932	4.680	6.254
1933	4.248	5.355
1934	8.514	7.926
1935	6.611	9.709
1936	5.748	11.464
1937	10.974	11.978
1938	7.893	11.052
1939	7.524	11.200

FUENTE: Estadísticas de la Dirección General de Aduanas.

Y la caída abismal de las exportaciones vino a producir una semi-parálisis de la actividad económica del Ecuador. El sector agrario exportador fue obviamente el primer afectado, pero su singular importancia en la economía de un país como el nuestro, de tan incipiente industrialización, determinó que la crisis se extendiera a los demás sectores.

El medio circulante se restringió en una proporción apreciable, sobre todo porque el de origen externo, que al terminarse la década de los veintes representaba más del 60% del medio circulante total, experimentó un súbito descenso.

CUADRO 4

MEDIO CIRCULANTE POR FUENTES DE ORIGEN
(al 31 de diciembre, en miles de sucres)

Años	De origen interno	De origen externo	Total
1928	25.025	40.137	65.162
1929	21.341	35.668	57.009
1930	16.562	28.013	44.575
1931	21.423	15.537	36.960
1932	38.131	17.470	55.601
1933	63.138	19.035	82.173
1934	76.603	26.541	103.144
1935	56.995	42.941	99.936

FUENTE: Luis Alberto Carbo, *op. cit.*

Así que los medios de pago a disposición del público disminuyeron y la actividad financiera y comercial sufrió las consecuencias. En 1931 se liquidaron dos bancos: en abril, el de Iván Endara; en mayo, el Banco del Ecuador. En 1932: "La casi total paralización de todos los negocios del país es otro de los hechos más notorios y menos controvertibles."⁵ A partir de 1933 el medio circulante aumentó y la actividad comercial se revitalizó; pero merced a una devaluación monetaria que terminaría por transferir el costo de la crisis a los grupos sociales asalariados.

En efecto, por razones políticas⁶ el gobierno no devaluó de inmediato la moneda nacional; pero ante la presión de varios sectores de la burguesía interesados en ello, se abandonó el patrón de oro en 1932, y la devaluación comenzó. Dos años más tarde, el sucre había perdido más del cincuenta por ciento de su valor.

CUADRO 5

COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN EL MERCADO OFICIAL
(mes de diciembre)

Años	Sucres por cada dólar	Años	Sucres por cada dólar
1928	5.02	1934	12.00
1929	5.06	1935	10.50
1930	5.05	1936	10.50
1931	5.06	1937	13.80
1932	6.00	1938	14.40
1933	6.00	1939	15.00

FUENTE: Luis Alberto Carbo, *op. cit.*

⁵ Luis Alberto Carbo, *op. cit.*, p. 534.

⁶ "El mayor inconveniente relacionado con la inmediata adopción de una nueva unidad monetaria, equivalente a S/. 6.50 por dólar, sería su posible incomprensión

Y nuestra reserva de oro disminuyó rápidamente, quedando reducida primeramente a un tercio y luego, a menos de la mitad de lo que fuera en 1927:

CUADRO 6
RESERVAS DE ORO

Mes	Años	Sucres
Diciembre	1927	44.085,398
Diciembre	1928	38.029,256
Diciembre	1929	35.063,646
Diciembre	1930	28.915,153
Diciembre	1931	15.567,234
Diciembre	1932	17.408,987
Diciembre	1933	19.097,124

FUENTE: Luis Alberto Carbo, *op. cit.*

Incluso la desvalorización de la libra esterlina perjudicó directamente al Estado ecuatoriano. En el balance del Banco Central del Ecuador, correspondiente a 1931, se registra una pérdida de S/. 2.042,091, por concepto de "devaluación o pérdida en libras esterlinas en Londres y en billetes ingleses".

En fin, en este periodo los ingresos fiscales disminuyeron rápidamente y los egresos tuvieron que ser reducidos en consecuencia.

CUADRO 7
INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS DEL ESTADO
(en sucres)

Años	Ingresos	Egresos	Superávit
1929	64.479,700	63.294,500	1.185,200
1930	60.821,500	60.177,700	643,800
1931	45.270,400	45.176,800	93,600

FUENTE: Luis Alberto Carbo, *op. cit.*

En 1934 el presupuesto nacional fue de 48 millones de sucres, ya devaluados, y sólo en 1935 se igualó nominalmente con el de hace seis años. Es que, como se anota en una reflexión de esa época:

Los bajísimos precios que rigen en la actualidad para la mayor parte de la producción nacional y su consiguiente relativo estancamiento, tenían

por parte del público." *Exposición del director-presidente del Banco Hipotecario del Ecuador, en 1932; transcrita por Luis A. Carbo, en op. cit., p. 538.*

que producir inevitablemente menor rendimiento en las entradas netas de los Ferrocarriles del Estado, mayor dificultad en el cobro del impuesto a los predios rústicos y más escaso rendimiento del impuesto a la renta. Y la actual reducida actividad de los negocios tenía que mermar, asimismo, los ingresos fiscales provenientes de los impuestos a los actos y a las ventas; y es casi innecesario continuar demostrando las razones que han afectado, igualmente, el rendimiento del estanco de alcoholes y de los demás principales ingresos fiscales.⁷

En cuanto a los precios internos, ellos siguieron inicialmente una curva descendente hasta 1933. Pero a partir de 1934 comenzaron a elevarse. En 1937 los encontramos aumentados en más de un 50% en relación con 1929.

CUADRO 8

ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS

Años	Índice	Años	Índice
1927	100.0	1932	65.9
1928	91.9	1933	96.3
1929	93.1	1934	113.8
1930	86.7	1935	127.6
1931	55.8	1936	148.5

FUENTE: José A. Baquero C. *Causas de la depreciación monetaria en el Ecuador*. Quito, Imp. de la Universidad Central, 1941.

He ahí algunos datos reveladores del impacto de la depresión del sistema capitalista en la vulnerable economía del Ecuador. Impacto negativo cuyos efectos vinieron a sumarse a los de la crisis precedente, creando una situación problemática que se prolongará hasta fines de los años treinta. En un país de economía dependiente de las exportaciones de productos agrícolas, el simple hecho de que el valor total de ellas fuera, todavía en 1939, inferior en un 50% al de los años 1927-1928 —hecho agravado por el constante deterioro de los términos de intercambio— aseguraba al Ecuador un largo periodo de crisis económica, que no podía dejar de tener consecuencias sociales y políticas.

3. EFECTOS SOCIALES DE LA CRISIS

De entre las clases dominantes del país: aristocracia de la sierra y burguesía de la costa, la segunda fue, obviamente, la más afectada

⁷ Cf. Luis Alberto Carbo, *op. cit.*, pp. 533-534.

por la depresión. Compuesta en primer término por propietarios de plantaciones y comerciantes exportadores, era inevitable que de inmediato sufriera las consecuencias de una crisis que había producido justamente la disminución del volumen de exportaciones y la caída de los precios de los productos tropicales. La pugna que en los años 1931 y 1932 se establece entre el Estado —que dicha burguesía ha dejado de controlar en forma absoluta desde 1925, y que se empeña inicialmente en no devaluar la moneda por temor a una violenta reacción social— y esa burguesía, afanada en conseguir la devaluación para resarcirse de la caída de los precios de exportación, transfiriendo el costo de la crisis a otros sectores sociales, no hace más que corroborar nuestra afirmación.

Aun después de obtenida tal devaluación, el sector agrario exportador de la burguesía tuvo que enfrentarse a la dificultad de encontrar mercado para su producción. A este respecto, no deja de ser significativo el hecho de que uno de los más lúcidos representantes de la burguesía de Guayaquil, el señor Víctor Emilio Estrada, en su informe preparado para el presidente Velasco Ibarra en 1934, reclame en tono casi patético el aumento de los salarios, con el fin de crear mayor demanda interna de productos agrícolas, que compense siquiera en parte la restricción del mercado internacional. Refiriéndose a esta medida, Estrada habla claramente de una política de “protección a la producción”, al mismo tiempo que protesta porque la exportación ha estado:

Sujeta durante un tiempo largo a la expropiación de su valor a precio enteramente desvinculado del valor real de la moneda (devaluada por las emisiones de papel moneda) y aun sujeta a la expropiación de más o menos 35% de su valor (entre incautación y derechos de aduana) calculado a una paridad caprichosa.⁸

Por lo que demanda la “libertad de exportación”, punto sobre el cual difícilmente podría ceder un Estado en bancarrota, cuya suerte dependía tanto de aquellas emisiones como de la incautación de las divisas y el cobro de derechos sobre las exportaciones e importaciones.

Y si como propietaria de plantaciones y monopolizadora del comercio exterior la burguesía de la costa se vio afectada por la crisis, cosa igual le ocurrió en su calidad de comerciante importadora: al principio porque la depresión determinó la contracción del mercado

⁸ *El problema económico del Ecuador en 1934*. Guayaquil, Litografía e Imprenta La Reforma, 1934, p. 2.

para los artículos importados, y luego porque la devaluación de la moneda nacional creó un mecanismo de protección para los productos elaborados en el Ecuador.

El mismo Estrada, en otra de sus exposiciones, afirma que hay quienes “han descubierto que el alza inmoderada del cambio actúa como elemento protector, y protector en grado máximo, para elevar los precios de la producción interna, permitiendo que ellos se regulen no por el precio de costo aumentado con una utilidad proporcionada”, sino “por la enorme alza que el similar extranjero tiene en el mercado a causa de que el tipo de cambio lo encarece”. “Yo he sido, y continuaré siendo, un partidario del proteccionismo, pero no podré jamás ser partidario del extorsionismo”, concluye,⁹ refiriéndose, claro está, no a los precios de los productos agrícolas, sino a los de la incipiente industria nacional.

Hubo, por fin, un tercer sector de la burguesía de Guayaquil duramente afectado por la crisis: el sector financiero que, a través de su predominio en el sistema bancario, controlaba la mayor parte de los negocios del país. Disminuida la reserva de oro, contraído el circulante y consiguientemente mermado el volumen de las transacciones, ese sector sufrió fatalmente los efectos de la depresión. En 1932, Luis A. Carbo escribe:

Las considerables pérdidas de las reservas de oro... han producido, como en todas partes, la usual reducción extraordinaria de los depósitos de todos los bancos, ya que el público, para pagar el valor del oro o de los giros de oro que ha necesitado, se ha visto obligado naturalmente a retirar, en primer término, una parte considerable de los depósitos que tenía en los diversos bancos del país. Y el continuo y progresivo retiro de estos depósitos ha obligado a los bancos a reducir, paralelamente, el monto de sus préstamos y descuentos, dando por resultado la actual contracción extraordinaria del crédito bancario. Es indiscutible —agrega— que el actual volumen del crédito bancario líquido es menor del 50% de esa época (1926 a 1928); y que la circulación de billetes ha bajado, en números redondos, de 40 a 18 millones de sucres.¹⁰

Por su estructura, la burguesía de la costa no podía escapar a los efectos de la crisis en sus diversas fases. Productora-exportadora, intentó sanear su situación recurriendo a la devaluación monetaria; pero una vez que esta devaluación se produjo, creóse un mecanismo

⁹ Exposición presentada por el ministro de Hacienda, señor V. M. Estrada, ante la H. Cámara de Diputados, en la sesión del 17 de septiembre de 1934.

¹⁰ Transcrito por el mismo autor, en *op. cit.*, pp. 530 y 535.

de protección a la industria nacional, que la afectó en su calidad de comerciante importadora.

El hecho es que, en los años 1932 y 1933, el valor en dólares de las transacciones con el exterior (exportaciones más importaciones) apenas representaba la tercera parte de lo que había sido en 1928. En 1934, 1935 y 1936 osciló entre el 50 y 60% del año indicado como base (cuadro 3). Situación que golpeó duramente a la burguesía de Guayaquil.

Suerte un tanto distinta corrió la clase dominante de la tierra. Integrada básicamente por terratenientes dedicados a la agricultura de consumo doméstico, ni la contracción del mercado para los productos tropicales ni la caída de los precios de éstos la afectaron en igual medida que a su rival de Guayaquil. Y la relativa inelasticidad de la demanda de los artículos de primera necesidad que ella producía, le garantizaba que el mercado no se le restringiría más acá de cierto límite.

Por lo demás, al comparar la evolución de los diversos índices, una conclusión se impone: los precios internos no disminuyeron en la misma proporción que los precios de exportación. En 1930, mientras los segundos decayeron al 56.5% del precio alcanzado en 1927, los primeros se establecieron en un nivel equivalente al 86.7%. En 1931 la relación fue de 49.0% y 55.8% y en 1932, de 43.0% y 65.9%, respectivamente (cuadros 1 y 8).

Habida cuenta de que en la estructura de los precios internos se encuentran incluidos algunos de los productos tropicales, resulta evidente que los precios de los productos agrícolas de la tierra habían disminuido en mucho menor proporción que los de la costa.

Por otra parte, un porcentaje elevado de esa producción interna "protegida", contra la cual clamaba la burguesía de la costa, pertenecía a la aristocracia serrana que, al amparo de la legislación proteccionista de 1929, transfirió una parte de su renta agrícola a la industria. En 1934, por ejemplo, el 91.5% del capital industrial textil del país se hallaba invertido en la Sierra.¹¹

Aunque rudimentaria, la producción textil, de calzado, de harinas, etcétera, no sufrió los efectos de la crisis: por el contrario, la elevación del precio de los artículos importados la favoreció. El propio Estrada

¹¹ En la Sierra, 14.343,313 sucres; en la Costa, 1.332,405 sucres, según los datos recogidos por Juan Dávila E., en "El federalismo en el Ecuador", tesis doctoral publicada en la *Revista de Derecho y Ciencias Sociales*. Quito, Universidad Central del Ecuador, junio-julio de 1934, p. 325.

reconoce, como uno de los resultados positivos del abandono del patrón de oro, "el desarrollo halagador de ciertas industrias como reflejo de la dificultad de importaciones, del alza de precios y el aumento del circulante", aunque a vuelta de página protesta contra los "derechos de aduana cada vez más altos para mantener alejado al competidor extranjero; o tipos de cambio también altos para poder exportar con beneficio o detener la importación del similar extranjero".¹²

En un artículo de la época se llega a afirmar que:

El gobierno ha negado a los productores de la costa el derecho de importar productos similares a los de la industria del interior, a inferiores precios (harina, telas de algodón, etcétera), obligándoles a consumir los de la Sierra y dándoles, además, a los productores e industriales del interior, enorme protección aduanera y concediéndoles con gran facilidad divisas extranjeras al tipo de cambio oficial.¹³

O sea que, si como terrateniente dedicada a la agricultura de consumo doméstico la clase dominante de la Sierra fue menos afectada que la de la Costa por la crisis, como industrial su suerte fue mejor aún. Salió netamente beneficiada, tanto porque en sí misma la coyuntura era favorable al desarrollo de la industria nacional, cuanto porque la influencia de la clase interesada en él era suficientemente fuerte como para obtener que el Estado arbitrara las medidas adecuadas para impulsarlo. Ello no obstante, sería exagerado afirmar que en esta época se haya producido un gran desarrollo industrial (véase la nota 11, donde se señala el monto de las inversiones en la industria textil en 1934). La escala reducida del mercado consumidor, del que justamente estaban excluidos los campesinos de las haciendas andinas, así como el espíritu conservador de la clase alta serrana, impidieron que ésta fuera más allá de la zona de seguridad creada por la coyuntura y las disposiciones proteccionistas. Lo que se hizo fue más bien aprovechar al máximo la capacidad de la industria ya instalada.

En cuanto a los sectores populares del país, ellos también se vieron afectados en diferente grado según su situación en el proceso de producción y las etapas de desarrollo de la crisis.

Comencemos por analizar el caso del proletariado, entendiendo por tal a los asalariados del sector que podríamos llamar moderno de nuestra sociedad, o sean los obreros de industria y los trabajadores

¹² *El problema económico* . . . , pp. 11-13.

¹³ Hernán Escudero M. "Control de cambios", en *Revista de Derecho y Ciencias Sociales*, Universidad Central del Ecuador, Quito, julio de 1933, p. 210.

de los servicios públicos. En la primera etapa, hasta 1933, no sufrieron mayormente las consecuencias de la depresión: organizados en sindicatos y protegidos por la legislación laboral dictada en 1929, sus salarios no fueron disminuidos. Y tampoco sufrieron despidos porque la crisis, como ya se vio, no afectó al sector industrial, y los mentados servicios no podían suprimirse por razones obvias.

Así, la baja de los precios internos más bien los favoreció, hecho que explica por qué sólo "en el año 1934... se inicia el ascenso rápido de la organización sindical en el país y la generalización de las luchas obreras",¹⁴ cuando el costo de la crisis es transferido a los trabajadores asalariados a través del mecanismo de la devaluación de la moneda y la elevación de los precios internos (las huelgas obreras estallan en abril de 1934, cuando el índice de precios internos se ha elevado considerablemente, al pasar de 96.3, en diciembre de 1933, a 115.8 en abril de 1934).

Los campesinos, por su parte, corrieron suerte diversa según el sector agrícola al que se encontraban ligados. Los de la tierra fueron los menos afectados, no sólo en la medida en que la agricultura de consumo doméstico sufrió menos que la de exportación, sino también porque el sistema de remuneración predominante, en recursos naturales o en especies, era menos susceptible a las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, no parece aventurado afirmar, teniendo en cuenta los hechos políticos de 1932 a que luego nos referiremos, que una parte de estos campesinos, de la provincia de Pichincha sobre todo, que era la de mayor "desarrollo" por hallarse en ella la capital de la República, cayeron en la desocupación y tuvieron que emigrar a la ciudad de Quito. Ello debió ocurrir, sin duda, con los trabajadores ocasionales, que según una estimación hecha en 1927, ascendían a 300 000 en el país.¹⁵

En cambio, el campesino de la costa fue pronta y gravemente afectado por la depresión:

En épocas de una más o menos normal y satisfactoria actividad de los negocios, los productores de cacao han acostumbrado pagar un jornal diario de S/. 1,20 a S/. 1,40, mientras que en la actualidad (1932) no sólo han disminuido el número de peones empleados ordinariamente en dichas haciendas de cacao, sino que han bajado también su jornal a sólo S/. 1,00 por día.¹⁶

¹⁴ Pedro A. Saad *La CTE y su papel histórico*. Guayaquil, Ed. Claridad, s.f., p. 17.

¹⁵ Cf. Pío Jaramillo Alvarado. *Del agro ecuatoriano*. Quito, Imp. de la Universidad Central, 1936, p. 127.

¹⁶ Exposición de Luis A. Carbo, transcrita por el mismo autor, en *op. cit.*, p. 526.

Mas hay que observar que ni esa desocupación ni la baja del nivel de vida originaron conflictos graves en el agro, sino que motivaron el éxodo rural a la ciudad de Guayaquil. Por lo cual esta urbe, que entre 1909 y 1929 había aumentado su población a un ritmo anual de 1.45%, entre 1929 y 1934 la vio crecer a una tasa de 5.33%, porcentaje significativo aun si se le compara con el del periodo siguiente: 2.50% entre 1934 y 1946.¹⁷

Datos que nos permiten enunciar el efecto social a nuestro juicio más importante de la crisis de los años treinta, cual es la conformación definitiva de un sector *marginal* urbano.

En efecto, el éxodo rural a las ciudades de Quito y Guayaquil —a esta última sobre todo—, en un momento en que ninguna de dichas urbes se encontraba en condiciones de emplear esa mano de obra, equivalía a una transferencia de la desocupación del sector rural al urbano. Con ello se “descongestionaba” el agro, evitando que el conflicto estallara allí donde habría debido teóricamente estallar; pero esa descongestión tuvo su precio: la creación de áreas de tensión en las ciudades.

Por lo demás, los grupos “marginales” de las urbes no sólo se constituyeron con dicho contingente, sino también por el impacto de la depresión en los sectores populares de las mismas ciudades, que no gozaban de empleo estable, remuneración fija y garantías laborales como el proletariado. Los vendedores ambulantes, peones de obras, cargadores, estibadores y, en general, todos aquellos pequeños vendedores de bienes y servicios, que en el Ecuador constituyen la mayoría de la población urbana pobre, o cayeron pura y llanamente en la desocupación o vieron reducidos su campo de actividad y sus ingresos de manera considerable.

En esta forma se constituyó, por efecto de la crisis capitalista de los años treinta (y no por una crisis del “sector agrícola tradicional”, como corrientemente se afirma), un grupo de *sui generis* comportamiento sociopolítico, al que en adelante denominaremos *subproletariado*.

En fin, para completar esta visión panorámica de los efectos sociales de la crisis económica, señalemos el impacto que ella produjo sobre la clase media.

El sector independiente de esta clase —los medianos comerciantes, por ejemplo— sufrió naturalmente las consecuencias desfavorables de

¹⁷ Junta Nacional de Planificación y Coordinación. *Informe de factibilidad para el proyecto de rehabilitación de terrenos, Guayaquil, Ecuador*. Tudor Engineering Company, San Francisco California, junio de 1967.

la depresión; hecho tanto más grave en la medida en que la afección del sector privado ni siquiera podía compensarse con un incremento de los empleos en el sector público, dada la disminución de los ingresos fiscales.

En cambio los grupos ubicados en la burocracia antes de que la crisis se desencadenase, no fueron mayormente afectados por ella, ya que se hallaban protegidos por la remuneración y el empleo estables.

Mas, en conjunto, el poder económico, social y político de la clase media disminuyó, tanto por lo ocurrido con los sectores que trabajaban por cuenta propia, cuanto porque la penuria fiscal quitó viabilidad al recurso, utilizado en el periodo 1925-29, de consolidar una base de apoyo al gobierno de esa clase, ampliando cada vez más la maquinaria burocrática. Si la pequeña burguesía pudo desempeñar un papel político relativamente significativo en esta década, fue más bien en razón de la crisis de hegemonía que la crisis económica produjo, lo cual dio margen para el repetido "arbitraje" militar.

4. CONSECUENCIAS DE ORDEN POLÍTICO

Desde el comienzo de su vida republicana el Ecuador ha conocido un estado casi permanente de precariedad política, marcado por revueltas, insurrecciones y cuartelazos; cambios frecuentes de gobernantes. Sin embargo, y si se conviene en medir la inestabilidad política con este último indicador, ningún periodo de nuestra historia ha sido más inestable que el comprendido entre los años 1930 y 1939. Para que se tenga un punto de comparación recordemos que de 1900 a 1929 el país tuvo 16 gobiernos, y un número igual entre 1940 y 1969. En cambio, en los años treinta se sucedieron en el mando 17 gobernantes —presidentes constitucionales, encargados del poder o jefes supremos—, como puede comprobarse en el cuadro 9.

Triste *record*, pero muy elocuente sobre los efectos políticos de la crisis en nuestro país. En un solo año, el de 1932, desfilaron por el palacio presidencial cinco mandatarios, y el Ecuador sufrió cuatro días de guerra civil. Hubo, pues, encarnizadas luchas por captar el gobierno, que se explican teniendo en cuenta que en este momento crítico el control del Estado significaba más que nunca la posibilidad de tomar decisiones vitales para los grupos de poder.

El primer efecto importante de la crisis fue, en el plano político, la caída del gobierno presidido por el doctor Isidro Ayora, caída que marcó el fin de los regímenes reformistas nacidos de la "revolución

juliana" de 1925. En el capítulo 1 se vio cómo dicho reformismo había basado su acción en recortar una parte de los ingresos de la burguesía de Guayaquil, para redistribuirlos entre una inflada burocracia. En ello estribó su fuerza, pues logró crear así una base de apoyo de la clase media. Mas producida la crisis económica, tal recurso dejó automáticamente de funcionar. La brusca caída de las exportaciones e importaciones, así como la semiparálisis de las transacciones comerciales internas, determinaron una disminución notable de los ingresos fiscales, lo que obligó al Estado a recortar drásticamente su presupuesto (cuadro 7), hecho que a su vez produjo el descontento de muchos sectores que veían nuevamente frustradas sus aspiraciones de ascenso por los canales burocráticos. Perdida, pues, aquella base de apoyo, el régimen reformista se encontraba minado: unas cuantas manifestaciones estudiantiles y populares bastaron para que la situación política se deteriorara hasta el punto de obligar a los militares a derrocar a Ayora, en agosto de 1931.

CUADRO 9
MANDATARIOS DEL ECUADOR EN EL PERÍODO 1930-39

Nombre	Fecha de posesión	Fecha de terminación	Duración		
			Años,	Meses,	Días
Isidro Ayora	1-IV-1926	24-VIII-1931	5	5	24
Luis Larrea A.	25-VIII-1931	15-X-1931	0	1	20
Alfredo Baquerizo M.	15-X-1931	28-VIII-1932	0	10	12
Carlos Freile L.	28-VIII-1932	30-VIII-1932	0	0	2
Humberto Alborno	31-VIII-1932	1-IX-1932	0	0	2
Alberto Guerrero M.	2-IX-1932	4-XII-1932	0	3	2
Juan de Dios Martínez	5-VIII-1932	17-X-1933	0	10	12
Abelardo Montalvo	18-X-1933	31-VIII-1934	0	10	12
J. M. Velasco Ibarra	1-IX-1934	20-VIII-1935	0	11	20
Antonio Pons	21-VIII-1935	25-IX-1935	0	1	4
Benigno Flores	26-IX-1935	26-IX-1935	0	0	1
Federico Páez	27-IX-1935	23-X-1937	2	0	26
Alberto Enríquez	24-X-1937	9-VIII-1938	0	9	15
Manuel M. Borrero	10-VIII-1938	1-XII-1938	0	3	21
Aurelio Mosquera N.	2-XII-1938	15-XI-1939	0	11	13
Carlos Arroyo del Río	16-XI-1939	10-XII-1939	0	0	24
Andrés F. Córdova	11-XII-1939	31-XII-1939	0	0	20

FUENTE: Alfredo Costales Samaniego. *Estadísticas de sangre*. En revista *Panoramas*, México, núm. 18, noviembre-diciembre de 1965.

El fin del reformismo "juliano" desencadenó, como era de esperarse, una abierta crisis política, de la que los conservadores tratarían de sacar ventaja, alentados tanto por el desprestigio y debilitamiento de la burguesía liberal (que, recuérdese, sufrió el impacto de dos

crisis sucesivas), como por la falta de viabilidad manifiesta del reformismo de clase media en la actual coyuntura. Así que decidieron explotar el descontento que la crisis generaba en el pueblo, para lo cual constituyeron en Quito la llamada Compactación Obrera Nacional, movimiento de corte fascistoide que agrupaba, bajo la dirección de los terratenientes y el clero, a los sectores populares de la capital más afectados por la depresión: ex campesinos y artesanos empobrecidos o caídos en la desocupación, fáciles de controlar gracias al dominio ideológico de la Iglesia Católica en la sierra.

Con esta base los conservadores lanzaron la candidatura a presidente de la República del hacendado Neptalí Bonifaz, quien en octubre de 1931 obtuvo una amplia victoria electoral. Mas la situación se tornó difícil para los conservadores cuando, en el Congreso de 1932, que debía proclamar al elegido, los legisladores liberales plantearon su descalificación, alegándole ser de nacionalidad peruana (Bonifaz nació efectivamente en el Perú, pero sus padres eran ecuatorianos).

La descalificación se produjo y entonces, como la Compactación no era únicamente una organización electorera, sino una verdadera fuerza de combate, con ramificaciones incluso entre la tropa, los conservadores consiguieron sublevar algunos batallones de Quito, el 26 de agosto de 1932. De este modo se desencadenó la guerra denominada "de los cuatro días", que sembró de cadáveres las calles de la capital y terminó con la derrota de las fuerzas de Bonifaz.

Ahora bien, lo que importa poner de relieve es que los bonifacistas fueron vencidos por no contar con el apoyo de la oficialidad.¹⁸ Como una especie de paradoja había querido que, por haberse transferido el costo de la crisis a los sectores populares indicados y no al proletariado, la primera y más importante manifestación de descontento fuera de signo derechista y no izquierdista; en Quito se enfrentaron sangrientamente el pueblo "conservador" (civiles o gentes de tropa "que veían a la oficialidad como una clase enemiga, de izquierda")¹⁹ y los batallones controlados por oficiales progresistas de clase media, opuestos a que el poder fuera a manos de la aristocracia serrana.

¹⁸ "De los dieciocho batallones de que se componía el Ejército Ecuatoriano, sólo tres se pusieron del lado del señor Neptalí Bonifaz. En Quito hubo más civiles que militares en la defensa; la falta de oficialidad impidió a estas fuerzas realizar contrataques que habrían sido sumamente graves; pues, contaban con una superioridad de armamentos y municiones". José Alfredo Llerena: *Frustración política en veintidós años*. Quito, Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1959, p. 42.

¹⁹ José Alfredo Llerena, *op. cit.*, p. 105.

Este desenlace de la guerra "de los cuatro días" condujo al país a un callejón político sin salida. Por una parte, la aristocracia terrateniente pudo constatar, con esta aventura bélica, que si bien podía participar de ciertos beneficios del poder, pactando con la burguesía costeña como en el periodo "plutocrático", o aliándose a la clase media como en el periodo "juliano", no podía en cambio obtener el control directo del Estado mientras a ello se opusiesen precisamente esas dos clases sociales.

Por su parte, la burguesía se repuso parcialmente del golpe político que le asestara la "revolución juliana", gracias a la derrota de los conservadores y a la seguridad de que, en circunstancias extremas como la que acababa de presentarse, la clase media tomaría partido por el régimen democrático-burgués. Pero en un momento de crisis, y odiada como era por el pueblo, difícilmente podía gobernar sin un costo social demasiado elevado.

En cuanto a la clase media, ya veremos que ella tenía todavía un papel importante que desempeñar, por medio del ejército. Mas, por sí sola, tampoco podía arriesgarse a asumir el control del Estado, por las razones oportunamente anotadas (imposibilidad de jugar la carta reformista).

El vacío de poder era pues evidente, y lo que se hizo en lo inmediato fue formar un gobierno de coalición (burguesía y clase media, representada esta última por dos ministros socialistas) y convocar a nuevas elecciones. Éstas se realizaron en octubre de 1932 y, el elegido fue Juan de Dios Martínez Mera, candidato que triunfó gracias al fraude.

Un gobierno nacido en estas condiciones tenía que ser efímero, y así fue. La agitación continuó por parte de las masas "bonifacistas", que esta vez encontraron en el patriotismo un canal para expresar su malestar y su deseo vehemente de integración social (un conflicto fronterizo entre Perú y Colombia, en el que la oposición a Martínez reclamaba interviniera el Ecuador, dio lugar a ello).

Y eso no fue todo. "En Quito, bajo la dirección de 'los compactados'... se sucedían las manifestaciones callejeras."²⁰ "Grupos de muchachos y de gentes del hampa se creían autorizados, y sobre seguro, para gritarle injurias al Primer Magistrado de la Nación, arrojarle cáscaras y lanzarle apodos a su paso por las calles de la ciudad."²¹ Todo ello sucedía al mismo tiempo que la oposición

²⁰ Alfredo Pareja Diezcanseco. *Historia del Ecuador*, 2ª ed. Quito, Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1958, t. I, p. 412.

²¹ Oscar Efrén Reyes. *Breve historia...*, p. 760.

parlamentaria, formada por “bonifacistas” e izquierdistas, atacaba a Martínez Mera, acusándolo no sólo de su conducta “antipatriótica” en el asunto mencionado, sino también de haber ascendido al poder por medio del fraude.

“Compactados” y “gentes del hampa”, pues, según el decir de los historiadores; pero que en realidad eran ese subproletariado que acababa de formarse en Quito por efecto de la crisis y que, a estas alturas, ya no obedecía estrictamente las directivas conservadoras, sino que empezaba a manifestar un comportamiento político aparentemente sui géneris, que sin embargo se revelaría a la larga como el típico suyo. Desnortadas pero ya insumisas, esas masas habían encontrado, para esta fecha, un líder en el doctor José María Velasco Ibarra, caudillo fogoso que no tardó en convertirse en el jefe indiscutido de la oposición a Martínez.

Por eso, cuando éste se vio forzado a renunciar en 1933, Velasco no tuvo mayor dificultad en triunfar en las elecciones realizadas en ese mismo año. Por una parte contó con el apoyo amplio no sólo del subproletariado de Quito, sino también y acaso principalmente con el del subproletariado que se había formado en Guayaquil, por las razones expuestas en el capítulo anterior. Por otra parte, ni los conservadores ni los liberales se atrevieron a lanzar candidatos. Prefirieron ceder el paso a Velasco, porque este caudillo, que se decía liberal al mismo tiempo que cristiano, les pareció el mal menor en un momento en que ambos partidos se sentían incapacitados para asumir directamente el poder.

A la postre, sólo se opusieron a Velasco Ibarra un candidato socialista (apoyado por los liberales de izquierda, disidentes del partido) y otro comunista; pero el caudillo los apabulló. Frente a los 42 271 votos del triunfador, el candidato comunista no obtuvo sino 474 sufragios, hecho que pone de manifiesto la debilidad del movimiento obrero revolucionario ecuatoriano en esa época.

De este modo nació el *populismo* en el Ecuador, con base claramente subproletaria y en una coyuntura caracterizada no sólo por la crisis económica, sino también por una evidente crisis de hegemonía. Hito importante en la historia de un país que, desde entonces hasta ahora, registrará nada menos que cinco gobiernos velasquistas.

A pesar de su popularidad, Velasco permaneció poco tiempo en el poder. Una oposición combinada de la burguesía de Guayaquil y la clase media lo derrocó antes de que cumpliera el primer año de ejercicio presidencial y sin que sus electores hiciesen nada para

sostenerlo. Masa finalmente desorganizada y sin ideología, el subproletariado era una fuerza social efímera.

Luego del derrocamiento de Velasco la crisis de hegemonía se hizo sentir nuevamente. El poder fue encargado al ministro de gobierno Antonio Pons, quien renunció al poco tiempo, arguyendo que no quería asumir la responsabilidad de convocar a elecciones, ya que ello equivaldría a entregar el mando a los conservadores. Así que prefirió entregárselo al ejército, único grupo organizado que en esta coyuntura podía "arbitrar", y que lo hizo, nombrando jefe supremo a un civil, el ingeniero Federico Páez, hombre amorfo e incoloro pero que, dadas las circunstancias, parecía el indicado para superar el *impasse* político. Como dice un artículo de entonces: "Ninguno de (los contendores) había triunfado, pero ninguno tampoco cedió el campo al contrincante. Al fin de fines, valía más un tercero en discordia."²²

De suerte que nadie se hizo ilusiones sobre el jefe supremo, pero los protagonistas del *impasse* lo aceptaron a falta de una solución mejor. Si el "velasquismo" implicaba por lo menos cierta dosis de originalidad histórica (por la intervención del subproletariado), la designación de Páez no expresaba otra cosa que nuestra inercia política y social.

Federico Páez permaneció dos años en el poder. La oposición obrera —que ahora sí se hizo sentir, una vez que la elevación del costo de la vida transfirió los efectos económicos de la crisis a los asalariados—, y de la clase media, cuyo malestar era cada vez más creciente, llevaron al gobierno a la derecha, pese a sus veleidades "socialistas" del comienzo. Y cuando Páez se excedió en la represión a los sectores antedichos, el ejército lo derrocó y asumió directamente el mando. Fue nombrado jefe supremo el general Alberto Enríquez, quien orientó su gobierno en sentido parangonable con el de los regímenes "julianos": base de clase media, leyes en favor de los obreros sindicalizados, recortes en los ingresos de la burguesía.

Estábamos ya en 1937-38, cuando las exportaciones repuntaban y, en general, los efectos económicos, sociales y políticos de la crisis tocaban a su fin en nuestro país.

5. LA CONCIENCIA HISTÓRICA DE LA CRISIS

La crisis de los años treinta tuvo, pues, consecuencias importantes

²² Luis Robalino Dávila. "Meditaciones de ayer y de hoy: los últimos cuatro años." En *El Comercio*, de Quito, 4 de junio de 1939.

para el devenir histórico del Ecuador, aunque sólo fuese porque a su sombra se incubó el “velasquismo”, movimiento caudillista que, como ya se dijo, ha desempeñado un papel de primer orden en nuestra vida política. Esa crisis no ha dejado, sin embargo, impronta alguna en lo que podríamos denominar “conciencia histórica” del país.

En efecto, así como ningún historiador se exime ni se eximiría de establecer relación entre los acontecimientos políticos de los años veinte y la crisis económica de entonces; asimismo, todos parecen estar acordes en deslindar los dos órdenes de hechos —el económico y el político— al analizar la década siguiente. Desde los militantes comunistas²³ hasta los intelectuales abiertamente conservadores,²⁴ pasando por los “demócratas” o socialistas,²⁵ cuantos han escrito ensayos históricos sobre el Ecuador adoptan una actitud finalmente similar: o simplemente soslayan la crisis, o bien se refieren a ella, pero sin establecer relación causal con nuestra inestabilidad política, con la guerra civil de 1932 o el nacimiento del subproletariado y el populismo. Hay que recurrir a los escritos de banqueros como Luis Alberto Carbo o Víctor Emilio Estrada, ya citados, para enterarse de la magnitud del hecho que analizamos aquí.

Esta situación aparentemente insólita tiene desde luego explicación. No se trata sólo de debilidades teoricometodológicas de nuestros historiadores, que ciertamente puede haberlas, sino ante todo de un problema de experiencia vital de la crisis por cada clase social. Desde este punto de vista resulta comprensible que únicamente los representantes directos de la burguesía de Guayaquil hayan tomado conciencia cabal de lo que ella significaba, porque de entre los sectores en capacidad de analizar teóricamente su destino, dicha clase fue la más afectada. Los grandes damnificados, o sea aquellos grupos populares que en esta coyuntura devinieron subproletarios, obviamente no disponían de intelectuales que expresasen su situación (el subproletariado no aflora a la “conciencia histórica” nacional sino cuarenta años después de su irrupción en nuestra vida política y social).

En fin, y para no prolongar más este análisis, concluyamos observando que la conciencia de la dependencia ha sido hasta fecha re-

²³ Cf. Pedro Saad (*op. cit.*); Oswaldo Alborno (*Historia de la acción clerical en el Ecuador*).

²⁴ Cf. Gabriel Cevallos García (*Historia del Ecuador*); César Jaramillo Pérez (*Historia del Ecuador*).

²⁵ Cf. Alfredo Pareja Diezcanseco (*op. cit.*, y *La lucha por la democracia en el Ecuador*); Oscar Efrén Reyes (*op. cit.*); José Alfredo Llerena (*op. cit.*).

ciente muy débil en el país. Sólo ahora comienza a comprenderse que la historia de esta República con un siglo y medio de vida "independiente", es en realidad la historia de una sociedad semicolonial, determinada estructuralmente por el sistema al que pertenece.

6. DE LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA A LA CRISIS ACTUAL DEL SISTEMA

La década de los cincuenta fue un periodo de bonanza para el Ecuador. Las exportaciones, que en el decenio anterior alcanzaran un valor promedio anual de 26 millones de dólares, comenzaron a elevarse sensiblemente a partir de 1950. En este año, gracias a la coyuntura favorable creada por la Guerra de Corea, llegaron a ser de \$ 63.000.000, y en los cinco años siguientes aumentaron a un ritmo de 8%, gracias a lo cual su promedio anual llegó a ser de 85 millones de dólares en el decenio 1950-59. Fue la época del *boom* del banano, que permitió que en este periodo el producto por habitante creciera a una tasa media anual de 2.3; que se crearan fuentes de trabajo para sectores amplios de la población, se desarrollara la clase media como nunca antes y el sistema lograra estabilizarse políticamente.

Pero una "bonanza" basada en las exportaciones de productos agrícolas es sumamente deleznable y su fragilidad no tardó en ponerse de manifiesto en el mismo decenio de prosperidad. En la segunda mitad de éste, el ritmo de las exportaciones decreció; la tasa de inversión de los sectores público y privado disminuyó consiguientemente, y hubo ya signos de profundo malestar social, como la insurrección del subproletariado de Guayaquil en 1959.

En fin, la crisis estalló en 1961. En este fatídico año las exportaciones de banano disminuyeron en 5.8% en relación con 1960; "la caída de los precios internacionales fue general para el cacao, café y banano, los cuales registraron los niveles más bajos durante los últimos 12 años",²⁶ y "el efecto de los términos de intercambio con respecto a 1955 representó una disminución de 636 millones de sucres en el poder de compra de las exportaciones".²⁷ A consecuencia de lo cual, en 1961 el ingreso *per capita* bajó en 1.1% y la parte del producto dedicada a la remuneración de los asalariados en 1.5%. Los precios internos comenzaron a elevarse desde entonces, a ritmo

²⁶ Banco Central del Ecuador. *Memoria del gerente general*, correspondiente al ejercicio de 1966, p. 22.

²⁷ Junta Nacional de Planificación y Coordinación. *Resumen del Plan General de Desarrollo Económico y Social del Ecuador*. Quito, 1963, p. 9.

acelerado; agravóse el problema de la desocupación y el malestar social se generalizó. En esas circunstancias zozobró también la estabilidad política burguesa,²⁸ junto con la era de prosperidad que la había engendrado.

De esta manera entramos en una nueva etapa de crisis, que se prolonga hasta hoy y no carece de analogía con la de los años treinta: ambas han tenido origen en la dependencia estructural de la economía ecuatoriana, que vuelve a nuestro país extremadamente vulnerable a los altibajos del mercado capitalista.

Es cierto que esta vez la evolución de las exportaciones no ha seguido una curva constantemente descendente; pero sí presenta un ritmo de crecimiento netamente inferior al del decenio 1950-59, lo que ha determinado un grave debilitamiento en la formación de capital,²⁹ con el consiguiente estancamiento del desarrollo económico del país.

Además, la amenaza de una drástica restricción de las ventas de banano ecuatoriano en los mercados capitalistas sigue pendiendo como una espada de Damocles. El año pasado, sólo los daños sufridos por algunas plantaciones centroamericanas y de Formosa salvaron a la economía semicolonial del Ecuador del colapso total.

Por último, el fuerte poder de presión de la clase media, que consiguió que a pesar de la crisis se incrementara desmedidamente, la burocracia en los años 1963-66, con la Junta Militar de entonces, ha llevado al fisco al borde de la quiebra, por un déficit que en el año de 1970 alcanzará una cifra muy cercana a los 3 mil millones de sucres.

Todo esto, en un momento en que las reivindicaciones populares crean un clima explosivo en las ciudades, sobre todo de la costa, cercadas por amplios cinturones de miseria; el campesinado, antes elemento marginal de nuestra vida política, comienza a hacerse presente con una actitud combativa, manifestada por las constantes tomas de tierras; y los sectores estudiantiles, de mucho peso en un país cuya población es, en más de un 50%, menor de 18 años, presionan también en el sentido de una transformación estructural auténtica.

Presiones que amenazan desmoronar un sistema que no ensaya otra

²⁸ En 1961 fue derrocado el presidente Velasco Ibarra y en 1963, Carlos Julio Arosemena; una Junta Militar gobernó al país desde ese año hasta 1966; luego tuvimos dos mandatarios interinos y Velasco Ibarra fue elegido presidente, por quinta vez, en 1968.

²⁹ El coeficiente de inversión ha bajado de 15.2 en 1960 a alrededor de 13 en los años 1966, 67 y 68.

respuesta que la represiva, y que por su índole semicolonial cada vez más acentuada (que ya no sólo se manifiesta a través del mecanismo de exportaciones-importaciones sino también por la intervención creciente del capital monopolista extranjero), por sus estructuras internas anacrónicas y el carácter dependiente de su burguesía, es tan incapaz de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas como de avanzar por el camino de la justicia social.

EL PERÚ EN LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA

Aníbal Quijano Obregón

No existe, probablemente, en la historia peruana de este siglo, ningún momento en que las contradicciones y conflictos inherentes a esa sociedad en un determinado periodo, se haya expresado de manera tan perfilada y dramática como en los primeros años de la década del treinta. O, en otros términos, en que las tendencias de revolución y contrarrevolución, con sus agentes y características propios del periodo, se hayan enfrentado con tanta amplitud y violencia.

Esas circunstancias coincidieron con las de la más grave crisis económica internacional del capitalismo y, en cierta medida, fueron parte de ésta. Sería, sin embargo, erróneo considerar que fueron causadas únicamente por ella, aunque de allí derivaron, sin duda, su particular agudez. Aquéllas fueron el resultado de la convergencia entre los efectos económicos de la crisis y los procesos de cambio que, molecular pero intensa y rápidamente, venían afectando a la sociedad peruana desde el fin de la guerra con Chile y especialmente desde el término de la Primera Guerra Mundial.

Las más inmediatas raíces históricas de las tendencias que hoy se desarrollan y se enfrentan en el Perú, se constituyeron precisamente entonces. Aunque muchos otros elementos se han incorporado al escenario, sobre todo a partir de las modificaciones en las relaciones de dependencia posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ellos no han producido mucho más que el desarrollo y complejización del contexto historicosocial que cristalizó en aquel momento. Por eso, no es necesario insistir en el valor iluminatorio que la comprensión de ese periodo puede tener para la situación contemporánea. Este es un primero y provisorio ensayo en esa dirección.

LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE CAMBIO ENTRE 1895 Y 1930

Al finalizar la guerra con Chile, la desarticulación política resultante permitió, durante una década, la vuelta de los militares al con-

trol del Estado. Pero la relativamente rápida reactivación económica de los últimos años de esa década y el inepto empirismo de los militares en el poder, permitió la reconstrucción política de los grupos hegemónicos de la clase dominante, y ellos pudieron arrebatar violentamente el poder a los militares en 1895. Con eso, se inició en el Perú un proceso intensivo de cambios, cuya convergencia con los efectos de la crisis mundial iniciada en 1929, generó la crisis políticosocial peruana de los primeros años de la década siguiente. Entre 1895 y 1930, se pueden diferenciar dos periodos principales en el proceso histórico de la sociedad peruana. El primero corre hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, y el segundo desde entonces hasta la iniciación de la crisis peruana en 1930. Aquí, se tratará de mostrar las tendencias mayores en cada uno de ellos, esquemáticamente

PERIODO 1895-1919

Dos procesos dominan el escenario peruano de esa etapa: el comienzo de los cambios en las modalidades del sistema de relaciones de dependencia, y en la composición y en las características concretas de la clase dominante y muy en particular de sus grupos hegemónicos. Junto a esos procesos, sin embargo, comenzaban a desarrollarse otros que cobrarían toda su importancia sólo en el periodo siguiente, pero que contribuían ya entonces a configurar las peculiaridades de la situación.

1. Los cambios en las modalidades de dependencia

En los años finales de la década posterior a la guerra con Chile, comenzó un activo proceso de reorganización de la economía peruana y, fundamentalmente, de la región costera. Sobre todo a partir de 1893, en un lapso relativamente breve, se establecieron numerosos bancos, varias sociedades anónimas destinadas a la explotación agro-minera, comercial e industrial, comenzó la explotación del petróleo en el extremo norte de la costa, se reinició la explotación de minas, y en consecuencia se restableció y se expandió el comercio internacional y el comercio interno, urbano especialmente. Durante los primeros años del siglo xx, por breve tiempo, la explotación y el comercio internacional del caucho generó también un importante proceso de crecimiento económico de ciertas zonas de la región nor-oriental del país.

Desde el punto de vista que aquí interesa, el fenómeno de mayor significación en este proceso consiste en que éste se lleva a cabo ligado directamente a la expansión y a la profundización de la dominación económica del capitalismo británico en la economía peruana. En efecto, mientras que en el periodo anterior esa dominación se ejercía como un condicionamiento de la estructura económica peruana a través del control del mercado internacional de sus productos y a través del financiamiento del Estado por créditos desde fuera, en este momento el capitalismo británico penetra en la economía peruana a través de inversiones directas en los sectores económicos decisivos en ese periodo. El principal banco establecido después de la guerra con Chile, fue el Banco del Perú y Londres, perteneciente a capitales ingleses. Este banco controló desde el comienzo todo el mercado financiero del país, y de ese modo controló y orientó las inversiones más importantes, hasta su quiebra al comienzo mismo de la crisis mundial; por eso, su quiebra produjo drásticos perjuicios a la actividad agropecuaria hacia la cual las principales inversiones del banco se habían orientado. Junto al sector financiero, capitales británicos fueron también invertidos, bien que en escala mucho más reducida, en la explotación del petróleo, en la explotación del caucho y en el comercio internacional.

Esta expansión y profundización de la dominación económica del capitalismo inglés, que implicaba al mismo tiempo un cambio sustantivo en las modalidades de las relaciones de dependencia, significó también la cúspide de la hegemonía británica sobre la economía del Perú. Sin embargo, el progresivo debilitamiento de su posición en el sector dominante del capitalismo frente al poderío creciente de otras burguesías europeas y de la norteamericana, comenzó a reflejarse también en sus relaciones con América Latina en el preciso momento en que su hegemonía llegaba a su máximo nivel. En ese mismo periodo, capitales norteamericanos comenzaban a ser invertidos en el Perú, en áreas importantes de la agricultura de exportación, y en seguida afluirían esos capitales hacia la explotación minero petrolera principalmente. Esta competencia entre el capitalismo británico y el norteamericano, dentro de las nuevas modalidades de dependencia que comenzaban a establecerse en el país, dominaría el periodo hasta el eclipse británico a fines de la Primera Guerra Mundial. Y de esas nuevas modalidades de las relaciones económicas de dependencia, cuyo nuevo elemento era el control directo de las fuentes y recursos de producción desde dentro del país dominado, derivó hasta la Segunda Guerra Mundial una estructura económica

caracterizada por el predominio sin contrapeso de los sectores agro-extractivos, mientras de modo lento, reducido y errático, iba creciendo en un lugar muy secundario la actividad industrial urbana.

Este rearrreglo de las relaciones de dependencia, desencadenó los principales procesos de cambio en este periodo. De una parte, se inició el proceso de tecnificación y de modernización de la producción de los principales artículos de exportación de entonces: algodón, caña de azúcar, y muy poco después de los productos minerales y entre ellos principalmente del cobre. Al mismo tiempo, bien que en un nivel muy incipiente, comenzó a establecerse la actividad industrial en las principales ciudades, Lima en primer término; se expandió el comercio urbano y se fueron ampliando, inorgánica y erráticamente, las actividades administrativas del Estado.

Así, junto con la modernización de la actividad económica de la costa, central y norte especialmente, se inició lentamente un curso de diversificación incipiente y limitada de la estructura económica total del país.

2. Cambios en la composición y en las características concretas de la clase dominante

En muy estrecha y necesaria vinculación con los procesos descritos, con la contribución de factores de muy diverso origen, durante este periodo la clase dominante ingresó también en un proceso de cambios que podrían ser signados como de modernización y de incipiente diversificación, aunque es importante insistir en que esos cambios fueron moleculares y poco profundos relativamente, no obstante lo cual, bastante intensos y rápidos. El proceso afectó de modo fundamental a los grupos hegemónicos de la clase, mientras el resto permanecía casi invariante en su mayor parte o siguiendo a los primeros a una remota distancia.

Obviamente, los grupos hegemónicos eran los que controlaban los recursos de producción agrícola de exportación, concentrados en su parte fundamental en las zonas central y norte de la costa, vinculados al capital financiero establecido en Lima y, en mucho menor medida, a la actividad comercial en expansión y a la incipiente y reducida industrialización. Con todo, de una clase casi exclusivamente terrateniente, comenzaba a apuntar una clase cada vez más terrateniente-financiero-comercial con aún poco significativos grupos industriales. La modernización y la expansión de las actividades económicas, a las cuales la clase y sus grupos hegemónicos estaban principalmente

ligados, implicó inevitablemente la modernización también de los grupos hegemónicos de la clase; como grupos sociales, al par de su creciente y cada vez más profunda situación dependiente respecto de los grupos hegemónicos extranjeros. La clase dominante y, en primer término, sus grupos hegemónicos, al hacerse más dependientes se hacían también más modernos. Y es éste proceso de cambio el que protagoniza el más importante papel en el escenario peruano, por lo menos hasta los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, con posterioridad a la cual otros factores y otras fuerzas sociales entrarían al escenario disputando el papel protagónico.

Si bien este proceso encuentra su más importante núcleo de factores explicativos en las alteraciones ocurridas en las relaciones de dependencia y en las consiguientes en la estructura económica del país, otros factores contribuyeron a facilitarlos y a acelerarlos: específicamente, los efectos de la guerra con Chile.

Durante los años anteriores a la guerra con Chile, transformaciones importantes habíanse ya iniciado en la clase dominante, como consecuencia del restablecimiento del comercio exterior a partir del auge del guano, de la expansión del mercado internacional del algodón y del azúcar. Los negociados del guano y con los enormes empréstitos estatales del exterior, habían permitido el enriquecimiento de muchos grupos nuevos que de ese modo se incorporaban a la clase dominante. El nuevo poder económico derivado de todas estas coyunturas, había comenzado a generar ciertos cambios importantes en la composición de los grupos dominantes, cuyo carácter comenzaba a ser crecientemente el de una burguesía terrateniente comercial. Al mismo tiempo, había permitido el fortalecimiento de su capacidad política, hasta el punto de alcanzar, por primera vez desde la emancipación, el pleno dominio del poder político hasta entonces en manos de los militares. Pero todo este conjunto de procesos iniciados, fue bruscamente perturbado y cortado por la larga y desastrosa guerra con Chile.

La ocupación de Lima por las fuerzas invasoras, así como la ocupación repetida de amplias regiones de la costa central y norte durante la guerra, no solamente desarticulaban la economía próspera de la región en pleno auge, sino que, de ese modo, produjeron la ruina económica de numerosas familias terratenientes de gran poder y de antiguo linaje, por la destrucción de sus ingenios de azúcar y aguardiente, el saqueo de sus haciendas, y la consiguiente liquidación de su capacidad financiera. Las consecuencias de estos hechos fueron, primordialmente, las siguientes: a) después de la guerra, una mayor

concentración de la propiedad y de los recursos de producción en la costa; b) la fácil adquisición de buena parte de esos recursos por capitalistas extranjeros, en algunas áreas importantes de la costa; c) el recambio del personal de la clase, por el descenso de numerosas familias y su reemplazo por grupos familiares de origen comercial, que aportaban una subcultura de débil conexión con las tradiciones aristocratizantes de las anteriores, pero más apta para ingresar en el proceso subsecuente de modernización de la producción y de las características mismas de la clase.¹

Los miembros de las familias arruinadas pasaron a engrosar las filas de los rangos superiores de los nacientes grupos medios de la sociedad urbana, sea a través de la profesionalización o del ingreso en la burocracia administrativa del Estado y, acaso principalmente, en la diplomacia. Algunos de esos grupos aparecerán posteriormente interviniendo activamente en la política nacional y, en ciertos casos, proveyendo el liderazgo de los más importantes movimientos anti-oligárquicos, como en el ejemplo del más importante de éstos, el APRA.

Nadie ha estudiado aún, por otro lado, los efectos de esta incorporación de nuevos grupos familiares, sin tradición señorial significativa, a los primeros rangos de la burguesía terrateniente comercial peruana, y de modo particular la influencia de diferentes orientaciones educacionales en el proceso de cambios de la clase dominante y, sobre todo, de sus grupos hegemónicos. Se tienen muchas indicaciones que después de la guerra con Chile, las principales *elites* políticas de esta clase procedían de centros educativos europeos, norteamericanos y chilenos, y sin duda la investigación de este problema contribuiría mucho a esclarecer la conducta política de los grupos hegemónicos de esta clase dominante. Parecería desprenderse de lo ocurrido en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial, que este proceso de recambio del personal de los grupos hegemónicos, la

¹ Puede tenerse una gruesa idea de estos cambios en la composición de la burguesía terrateniente, mirando las estimaciones de Clavero a fines de siglo sobre la estructura social del país.

	1870	1894
Millonarios	18	0
Ricos	11 587	1 275
Acomodados	22 148	2 000
Mendigos	?	500 000
Trabajadores	1 236 000	345 000

(José C. Clavero. *El tesoro del Perú-Lima*, 1898. Citado por Jorge Basadre: *Historia de la República del Perú*, t. x, p. 4731. Véanse también pp. 4728-4734.)

incorporación de tradiciones educacionales distintas a la hispánica poscolonial del Perú, junto con los efectos de la modernización y diversificación incipiente de la actividad económica que dominaban, contribuyeron de modo destacado a afectar la cohesión política de estos grupos y de la clase en su conjunto. Eso puede explicar cierta parte de un proceso que se iría desarrollando a medida que los anteriores cristalizaban: la lenta iniciación del deterioro de la recién ganada hegemonía política oligárquica, que andando los años se traduciría, en otras circunstancias, en crisis abierta de esa hegemonía.

3. Organización de la hegemonía política oligárquica y deterioro de la cohesión política de sus "élites"

Análogamente a como ocurrió en el periodo previo a la guerra con Chile, la revitalización del comercio internacional y la reactivación general de la economía dominada por los grupos hegemónicos de la burguesía terrateniente comercial, fortaleció parejamente su capacidad política y eso cuenta en primer término para explicar por qué ellos, diez años después de la guerra, estuvieron en condiciones de desafiar exitosamente a los grupos militares y arrebatárles el control del Estado. Ése fue, sin duda, el factor principal; pero la propia situación del ejército después de la contienda y de su derrota en ella, hizo lo demás, como se verá más adelante.

Al retomar el pleno control del Estado, los grupos hegemónicos de la burguesía terrateniente comercial, que eran, precisamente, aquellos más estrechamente ligados a las relaciones de dependencia, trataron de poner orden en la administración pública y de orientar al Estado hacia una vía de modernización y de organicidad, desde el punto de vista de sus particulares intereses. Alejado en ese momento el peligro del único competidor real por el poder político que era el ejército, dadas las condiciones generales de la estructura de la sociedad peruana en que los grupos medios y proletarios estaban apenas comenzando a generarse y a expandirse, mientras la vasta masa campesina explotada por los sectores retardatarios de la clase terrateniente carecía de toda posibilidad de movilización política organizada y mientras el proletariado rural que se expandía en las plantaciones e ingenios de algodón y de azúcar en la costa tenía una demasiado reciente extracción campesina, la dominación que los grupos hegemónicos de la burguesía terrateniente comercial ejercían sobre el Estado, apoyados por el resto de la clase en el interior del país, no podía dejar de tener un claro carácter oligárquico, habida cuenta,

además, de las tradiciones aristocratizantes aún profundamente arraigadas en los más altos rangos de la clase.

De ese modo, comenzó a organizarse firmemente la hegemonía política oligárquica de la burguesía terrateniente comercial, y ésta pasó a ser, políticamente, una clase oligárquica, capaz en ese momento de tener el control directo del Estado a través de sus más lúcidos y característicos dirigentes, y de *elites* organizadas básicamente en dos partidos que se alternarían en el poder entre 1895 y 1919: el Partido Civilista, organizado desde antes de la guerra con Chile para competir con los militares por el control del Estado, y el Partido Demócrata, cuyo caudillo más importante tenía ciertos rasgos carismáticos que le permitían gran audiencia popular, y cuya participación en los años finales de la guerra, le había otorgado el prestigio necesario para encabezar la revuelta oligárquica y popular contra los militares y ganar para aquélla el poder político directo.

Casi inmediatamente, sin embargo, los factores antes mencionados que operaban en el curso de las transformaciones de las características concretas de los grupos hegemónicos de la burguesía oligárquica, y que comenzaban a oponer a éstos entre sí en corrientes "modernistas" y "tradicionalistas", fueron abriendo ciertas brechas incipientes, pero que pronto se tornarían importantes, en la cohesión política de la dominación oligárquica. Los grupos más estrechamente vinculados al comercio internacional y a las finanzas, sentían más profundamente los estímulos derivados de los cambios en el sistema de dependencia y pugnaban por la ampliación de éste, al propio tiempo que tentaban el más estrecho control del Estado para esas finalidades. Es probable, también, que las distintas orientaciones educacionales de sus principales líderes, contribuyeran de manera importante a acentuar las tensiones que se generaban en los anteriores factores. Sin duda, en la arena cotidiana los intereses específicos de cada uno de los grupos y tendencias se cruzaban y se sobreponían de manera mucho más compleja que como aparece en este esquema, pero éste tiene aquí la finalidad de destacar la lógica profunda en la que los hechos concretos se insertaban.

Las contrapuestas influencias de todos esos factores, comenzaron a manifestarse en los primeros años del siglo xx, no solamente en las pugnas concretas por el poder político inmediato, con frecuencia a través de llamamientos a los militares para ayudar a unos grupos contra otros, sino también en corrientes ideológicas que, sin ser necesariamente elaboradas de manera consistente y sin casi estar centradas en el problema central de la organización de la sociedad y del Estado,

expresaban las contradicciones y las ambigüedades de los intereses específicos que se desarrollaban. Tal fue, sobre todo, el sentido de las intensas polémicas a lo largo de las dos primeras décadas del siglo, sobre el problema de la educación y de la cultura nacional. Pero el desarrollo de esas tendencias ideológicas en el seno de la clase oligárquica se verá en otro lugar. Lo que por el momento importa es destacar el hecho de que apenas organizada la hegemonía oligárquica, la cohesión política de sus principales *elites* entraba ya en franco deterioro.

4. *El cambio en la posición y en la función de las fuerzas armadas*

El ejército peruano anterior al siglo xx no era todavía un ejército profesional. Surgido de las luchas por la emancipación, sus mandos se integraban con los hombres de más destacada actuación en esas guerras y más tarde en las numerosísimas conspiraciones políticas contra los militares que, eventualmente, detentaban el poder político. De modo distinto a como ocurriera en algunos países como Chile, los principales jefes militares no provenían precisamente de los rangos dominantes de la clase terrateniente; el contingente de soldados que se reclutaba en las guerras emancipatorias y en las posteriores guerras civiles, procedía de la población campesina india y mestiza y los mandos se reclutaban de los heterogéneos sectores medios que habían ido surgiendo y expandiéndose en los últimos tiempos de la Colonia, y que en el proceso de casi completa agrarización y desarticulación de la economía poscolonial, hasta bien entrado el siglo xix, había quedado en una situación marginal e inestructurada.

La desarticulación de la economía del país después de la emancipación, la falta de un sector capaz de articularla en su torno como la minería o el comercio durante sucesivos periodos coloniales, junto con la expulsión de la burocracia virreinal, crearon un completo vacío de poder político en la joven República, puesto que los terratenientes que heredaron el poder economicosocial no tenían en esas condiciones la posibilidad de constituir ningún sector hegemónico suficientemente integrado y cohesionado, como para heredar inmediatamente el poder político. Esa coyuntura permitió que el ejército disputara exitosamente el poder a las sucesivas selectas agrupaciones políticas terratenientes, y sirviera como canal de movilidad economicosocial a muchos grupos de los sectores medios aludidos, para irse incorporando a la clase terrateniente por medio del poder político. El ejército, no obstante su heterogeneidad, su inorganicidad y su

completa falta de cohesión, era sin embargo la única fuerza política con la capacidad suficiente para controlar el poder político, a través de algunos de sus grupos y jefes, sucesivamente. En la medida en que esos grupos no pusieron nunca en cuestión la naturaleza del orden de dominación economicosocial que se establecía, sirvieron a la clase terrateniente que se beneficiaba con ese orden; pero en aquel periodo no constituyeron exactamente un instrumento directo de esa clase para conservar el poder político contra las pretensiones de los grupos medios; por el contrario, sirvieron a éstos en buena medida como vehículos de movilidad economicosocial y política, dentro del marco del sistema de dominación a cuya clase dominante se asimilaban. Es decir, el ejército fue un competidor político de los terratenientes, aunque sirviera a ellos en la dimensión general de mantenimiento del orden de dominación. Historiadores peruanos han calificado esa conducta de los militares como un mecanismo de democratización en la sociedad; así puede parecer, en efecto, desde el punto de vista de ciertos grupos medios que se beneficiaron incorporándose a la clase terrateniente. Sin embargo, la única posibilidad real de democratización en esos periodos habría sido la de producir alguna importante alteración en la estructura básica de la sociedad; esto es, en la relación entre terratenientes y campesinos indígenas, aun cuando no se tratara necesariamente de una revolución agraria. Ni los militares fueron capaces de organizar el Estado de modo consistente, de orientarlo en una vía de participación democrática de los sectores fundamentales de la sociedad, ni de siquiera paliar la opresión señorialista de los terratenientes sobre el campesinado indígena. La simple vehiculación de algunos grupos medios hacia la clase dominante, no constituye un proceso de democratización.

A partir de la reactivación del comercio internacional, con el guano primero y luego con el azúcar y el algodón, los sectores terratenientes que se beneficiaron pudieron organizarse políticamente en un partido que se llamó, justamente, Civil, para disputar a los militares el poder político, y lo lograron hasta la guerra con Chile.

De la derrota en ese conflicto, el ejército peruano surgió no solamente desprestigiado sino desorganizado y maltrecho, a pesar de lo cual pudo volver al poder político por una década, mientras las condiciones ya descritas permitían el regreso de los terratenientes y comerciantes al poder. Apenas esto fue posible, la dominación oligárquica se empeñó en la reorganización del ejército y en su reeducación política. Inmediatamente se creó la Escuela Militar para profesionalizar y modernizar al ejército, no obstante la oposición de

muchos jefes militares que durante mucho tiempo siguieron despreciando a los egresados de la academia, porque no ganaban sus galones en los campos de batalla y porque, por el momento, se conformaban con el oropel de los desfiles. Por ese medio, la clase dominante tentó la “despolitización” de los militares, esto es, politizarlos de una nueva manera, al servicio de los intereses de mantenimiento de la dominación política civil oligárquica. Eso fue, en la práctica, logrado a pesar de que en el juego de las oposiciones entre los grupos hegemónicos de la burguesía oligárquica, unos y otros recurrieron a los militares para imponerse. Pero ya así, los militares aparecían dependiendo políticamente de los grupos civiles oligárquicos y no disputando el poder por cuenta propia. Allí comenzó, por consecuencia, el cambio en la posición y la función del ejército en la vida política peruana, lo que perduraría hasta los años recientes, en que la crisis abierta de la hegemonía oligárquica abrió un periodo nuevo en la función política de las fuerzas armadas.

5. *La emergencia y la movilización de los sectores medios y del proletariado*

La progresiva expansión del comercio urbano, la ampliación de la administración pública y la de la enseñanza universitaria, entonces monopolizada enteramente por los miembros de la clase dominante y los rangos superiores de los grupos medios provenientes de la declinación de familias terratenientes con la guerra del Pacífico, sirvieron como vehículos decisivos para el proceso de emergencia de los sectores medios, que a partir de la Primera Guerra Mundial se desarrollarían de manera importante.

La prédica de González Prada había ejercido una profunda influencia entre los intelectuales de estos grupos sociales desde fines del siglo xix, generando conatos de organización política de efímera duración, huérfanos de orientación definida y guiados sólo de una actitud de descontento frente al proceso de consolidación de la hegemonía oligárquica. Por eso, en realidad a lo largo de todos estos años hasta el término de la Primera Guerra Mundial, los grupos medios actuaron en dependencia política de los grupos hegemónicos de la clase dominante, que se disputaban la primacía en el control del Estado, aunque con una clara preferencia por los sectores modernistas. Su descontento se expresaba principalmente en la literatura. Es indudable, sin embargo, que ya a mediados de la segunda década del siglo xx comenzaron a ejercer una considerable influencia

política en las tensiones entre los grupos hegemónicos, y tuvieron una participación destacada en la aparición de los primeros intentos populistas de los sectores modernistas, en el caso característico del gobierno de Billinghurst.

Paralelamente, la incipiente industrialización fabril en Lima generaba los primeros núcleos de proletariado fabril, a los que se añadía el contingente de trabajadores artesanales y semifabriles, que eran sin duda la mayoría de la población de trabajadores asalariados. Y, de otro lado, la expansión de la explotación minera comenzaba a constituir un proletariado minero semiurbano en distintas zonas de la sierra, pero sobre todo en la sierra central, al mismo tiempo que la modernización de las haciendas y plantaciones de la costa, con su secuela de elevación de salarios, atraía a importantes contingentes migratorios de la población campesina de la sierra, que de ese modo comenzaban a establecerse como proletariado rural.

Al contrario de los grupos medios en ese periodo, los recientes núcleos de proletariado urbano y minero, entraron desde el comienzo del siglo en ebullición sindical y política sobre bases propias que, a pesar de la inevitable falta de estructuración consistente, empujaban a los trabajadores a levantar sus propias reivindicaciones economicopolíticas con bastante violencia. Desde muy temprano en este siglo, comienza el proceso de organización sindical de los trabajadores. En 1901 se realiza ya el primer Congreso Obrero de Lima; en 1904 se forma la Federación de Panaderos "La Estrella del Perú", de destacada actuación en las luchas posteriores de la clase obrera urbana; en 1911 se forma la Federación Obrera Textil Vitarte, que más adelante se convertirá por un tiempo en el eje de la movilización sindical y política del proletariado peruano. En esos mismos años se forman varias organizaciones sindicales, y a partir de 1904 no existe prácticamente un solo año en que no se produzcan huelgas más o menos violentas por reivindicaciones salariales primero y luego inmediatamente, a partir de 1913, por la consecución de la jornada de ocho horas de trabajo, reivindicación que movilizará a la naciente clase obrera urbanominera a lo largo de los próximos años hasta su obtención en 1919.

Además de una activa y rápida movilización organizada por derechos sindicales, el proletariado emergente participó plenamente en la actividad política del país, junto a los grupos medios más radicales, en apoyo de demandas de democratización política y de depuración de los vicios y corruptelas características de la dominación oligárquica, especialmente de la manipulación electoral y el usufructo

de los dineros públicos. Fue, así, parte activa de los paros políticos de 1911 y 1912.

La condición aún semifabril y artesanal de la masa mayoritaria del naciente proletariado impregnó sus luchas de características particulares, y facilitó la difusión entre sus miembros de las tendencias anarcosindicalistas que, en el mismo periodo, se difundían en el proletariado de todos los principales países latinoamericanos. Los contactos con el movimiento anarquista de Argentina, especialmente, la prédica de González Prada, y probablemente la influencia del IWW, fueron los principales canales de difusión de esa tendencia, que después de la revolución bolchevique y de su rápida influencia ideológica sobre el proletariado peruano, sería bastante prontamente erradicada en el Perú.²

6. *Las corrientes ideológicas antes de 1919*

Las dos mayores influencias ideológicas de este periodo fueron, indudablemente, el positivismo y el anarcosindicalismo, que entraban al Perú como parte de la difusión de ambas tendencias en toda América Latina, aunque ambas fueron, en general, de poco arraigo y de poca duración en el Perú, en comparación con otros países.

La corriente anarcosindicalista fue, por razones bien conocidas, particularmente marcada entre los primeros núcleos del proletariado fabril-artesanal de Lima, y ejerció una profunda influencia en el proceso de las primeras movilizaciones organizadas de esos grupos. A su difusión contribuyeron sindicalistas argentinos de origen italiano, como José Spagnolli y Antonio Gustinelli, delegados de la Federación Obrera Regional Argentina en gira de propaganda por los países del Pacífico, que tuvieron destacada actuación como agitadores en la huelga de los trabajadores portuarios por la jornada de ocho horas en 1913.³ Pero esta tendencia impregnó también, de modo importante, parte de la crítica encabezada contra la dominación oligárquica por Manuel González Prada, desde el término mismo de la guerra con Chile.

González Prada era un hombre salido de las propias filas de la clase terrateniente, si bien no de sus grupos hegemónicos, cuya educación principalmente europea le había permitido adquirir un nuevo horizonte de ideas y de conocimientos. Combatiente de los años

² Ricardo Martínez de la Torre. *Apuntes para una interpretación marxista de la historia del Perú*, t. 1, pp. 395 y ss.

³ Delfin Lévano. "Las primeras batallas de las ocho horas vistas por un dirigente obrero", en R. Martínez de la Torre, *op. cit.*, pp. 403-415. Véase también, sobre este periodo, James Payne. *Labor and Politics in Peru*, Yale University, 1965.

finales de la guerra, dueño de un estilo literario excepcionalmente vigoroso y bruñido, fue el primero en iniciar y difundir una violenta campaña de crítica a la incapacidad y a la corrupción de la aristocracia terrateniente para organizar y conducir a la sociedad peruana, y con él aparece, por primera vez en nuestra historia, el cuestionamiento de la legitimidad de la dominación oligárquica. La derrota contra Chile había descubierto despiadadamente la endebles de la capacidad dirigente de la clase terrateniente, su ineptitud para sobrepasar el reducido horizonte de intereses familiares y de pequeño grupo y para hacerse cargo de los problemas de organización de la sociedad en su conjunto, aun para los fines propios de su dominación, la corrupción de sus miembros en las horas más álgidas del hundimiento del país; se dramatizaba así la responsabilidad de una clase dominante pero inhábil para dirigir y organizar el país como nación. González Prada no le ahorró ninguna diatriba. Si bien su prédica estuvo, indudablemente, centrada en un plano moralista, entrevió certeramente la necesidad de reorganizar la sociedad peruana a partir de la incorporación de los trabajadores urbanos y de las masas indígenas campesinas a una posición de mayor influencia en el manejo del Estado. La suya fue la primera tentativa de poner en tela de juicio la legitimidad de la dominación oligárquica; su impacto sobre los recientes grupos de profesionales e intelectuales de los grupos medios y sobre los primeros grupos del proletariado urbano, fue eficaz y profunda, y constituye el hito inicial del desarrollo de las corrientes políticoideológicas antioligárquicas que se desarrollarían en el periodo siguiente y que se cristalizarían en la crisis de los años treinta.

Simultáneamente, por vía de la influencia europea, francesa en particular, en la educación de muchos de los miembros de los grupos hegemónicos de la clase oligárquica, así como entre muchos de los intelectuales procedentes de los estratos terratenientes provincianos y de las familias arruinadas en la guerra, se hizo presente el positivismo como la principal tendencia filosófica de los sectores modernistas de los grupos hegemónicos. Su arraigo efectivo fue, en el Perú, relativamente poco profundo e intenso y menos perdurable que en otros países hispanoamericanos, probablemente en correspondencia con la debilidad de los grupos modernos dentro de la burguesía terrateniente comercial.

No obstante, permitió una vía de crítica de la situación peruana y de los estilos tradicionales de dominación, la cual, para los intelectuales ligados directa o indirectamente a los intereses oligárquicos, suponía la ventaja de preconizar la modernización de la sociedad y

del Estado, sin tener que cuestionar la posición dominante de su propia clase. Algunos de sus principales portavoces se replegaron muy rápidamente en posiciones ideológicas de corte clerical-señorial, apenas las corrientes antioligárquicas fueron ganando más amplia audiencia. Unos pocos continuaron con su labor de difusión de modelos modernistas de pensamiento social, aunque el principal interés de éstos estuvo enfocado a los problemas de la educación y de la cultura del país; de ese modo, a la postre, la polémica sobre estos problemas fue el eje de la influencia positivista en el Perú, y su intensidad en algunos momentos refleja en cierta medida las discontinuidades que comenzaban a ahondarse en la cohesión de las altas esferas políticas de la burguesía terrateniente comercial. Los positivistas preconizaban una política educativa que suponía el abandono de la tradición de enseñanza intelectualista, de eruditismo gratuito y esotérico, y su sustitución por un modelo que vigorizaba la enseñanza científica y técnica, apta para contribuir al desarrollo de una economía moderna. Los otros, herederos de las tradiciones señorialistas de su clase, sostenían la necesidad de una educación elitista, destinada únicamente a los miembros de la clase dominante, fundada en la formación eticohumanística de la *elite*, y la inconveniencia de difundir la educación media y universitaria a las clases populares, y de manera especial, a la población indígena, acerca de la cual dieron curso impreso a todo el cúmulo de sus prejuicios de clase.⁴

LAS PRIMERAS BRECHAS EN LA COHESIÓN POLÍTICA OLIGÁRQUICA

Las discontinuidades de intereses específicos y de estilos de dominación, originados en los cambios descritos entre los grupos hegemónicos de la clase dominante, y en las todavía difusas pero ya violentas presiones que emergían desde los sectores medios en expansión y del proletariado, alcanzaron sus primeras manifestaciones abiertas inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial.

Al finalizar el primer gobierno de Augusto B. Leguía (1908-1912), representante del Partido Civil, éste levantó la candidatura de uno de sus más conspicuos miembros, Antero Aspíllaga, rico terrateniente de ascendencia chilena. A ella se le opuso inicialmente la del viejo

⁴ La polémica entre Manuel Vicente Villarán, defensor de la educación técnica y popular, y Alejandro Deustua, de la educación elitista, fue la más destacada. Puede verse sobre ella la evaluación de J. C. Mariátegui en *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Lima, 1927. De Villarán, véase sobre todo "El factor económico en la educación nacional" (1907) y "La educación nacional y la influencia extranjera" (1908). De D. Deustua, los estudios contenidos en *La Cultura Nacional*, donde se destila todo el mundo de prejuicios oligárquicos sobre el indio.

caudillo del Partido Demócrata, Nicolás de Piérola, que luego renunció a la candidatura acusando al partido del gobierno de tratar de impedirle el paso por medio de las habituales manipulaciones electorales. Entonces el alcalde de Lima, Guillermo Billinghurst —acaudalado empresario comercial educado en Chile en un colegio inglés, que desde su posición de alcalde había manifestado ya algunas actitudes de atención a los problemas populares— decidió lanzar su propia candidatura por el Partido Demócrata, sobre la base del prestigio ganado en su gestión edilicia.

La candidatura Billinghurst alcanzó inmediata popularidad, y en mayo de 1912 se realizó una inmensa manifestación popular que enarbolaba la figura de un enorme pan como símbolo de la identificación de la candidatura con las necesidades populares. Esa manifestación callejera, denominada la del “Pan Grande”, fue sin duda la primera ocasión de la presencia popular efectiva en el escenario político peruano, que se movilizaba en la vía de las presiones por la modernización del Estado y la democratización de la vida política, bien que aún estaba bajo el alero de una de las tendencias de la propia clase dominante. Posteriormente, los días de las elecciones, el temor de la manipulación electoral por el Partido Civil motivó la organización del primer paro general político de la población de Lima, y con esta presión el Congreso eligió a Billinghurst presidente de la República. Las divisiones internas en el Partido Civil y, probablemente, las reticencias del propio gobernante Leguía, que ya formaba en su partido una tendencia de intereses que eran en general coincidentes con los que Billinghurst representaba, facilitaron el triunfo del candidato del Partido Demócrata.

Billinghurst era un hombre que se caracterizaba por ciertas actitudes demagógicas, unidas a ideas que favorecían modelos nuevos de relaciones entre la clase dominante y los trabajadores, y de modernización de la administración pública, y de supresión de las prácticas de corrupción electoral. En el lenguaje actual, su régimen y sus tendencias personales, podrían ser caracterizados como de un incipiente populismo *avant la lettre*.

Intentó desde el gobierno desarrollar una política de difusión de la enseñanza popular, sin éxito; creó una Escuela de Enseñanza Doméstica y estimuló un primer intento de extensión cultural para el pueblo, ofreciendo actuaciones gratuitas de cine, conferencias sobre problemas de actualidad, en las poblaciones obreras. Prosiguió con poco éxito una política de construcción de casas populares, ya

iniciada desde la Alcaldía de Lima, para lo cual diseñó un sistema de financiamiento que el brusco fin de su régimen frustró.

Naturalmente, estas actitudes levantaron inmediatamente una gran oposición de todos los grupos políticos oligárquicos. Pero, sin duda, lo que enconó la oposición en su contra, fue su relativa pasividad frente a las huelgas obreras que se generalizaron inmediatamente iniciado su gobierno, y que su reticencia a la represión contribuyó a estimular en alguna medida. En enero de 1913 se produjo la primera huelga por la jornada de ocho horas, entre los trabajadores de los muelles del Callao, y Billinghurst concedió inmediatamente la reivindicación para ese grupo de trabajadores. Las huelgas se generalizaron a todos los otros gremios de Lima y Callao, y con ese motivo Billinghurst promulgó el primer decreto de reglamentación de las huelgas, cuyo contenido no podía sino despertar en aquel periodo el escándalo de la clase dominante. El decreto autorizaba la formación de sindicatos en todos los centros de trabajo, el establecimiento de tribunales arbitrales formados parejamente por patrones y trabajadores, y establecía la legalidad de las huelgas, con determinadas condiciones.⁵ A pesar de que el decreto contenía, además, medidas restrictivas a las huelgas, por lo cual los jefes sindicales anarquistas lo criticaron acremente, en las condiciones peruanas de aquel periodo el decreto no podía dejar de aparecer como extremo y avanzado, y por lo tanto grandemente peligroso para los grupos dominantes.

Una huelga decretada en noviembre de 1913 por la Federación Obrera Marítima del Callao, permitió a los patrones levantar grandes presiones para la represión, y el prefecto del Callao reprimió violentamente la huelga, aunque sin heridos ni muertos. El presidente Billinghurst se negó a las demandas patronales para someter a los trabajadores al fuero militar, y los comerciantes del Callao en represalia organizaron un ostentoso homenaje al prefecto del Callao, coronel Arenas, autor de la represión.

Posteriormente, se sucedieron huelgas entre los trabajadores petroleros de Talara, Negritos, Lobitos, Lagunitas y entre los mineros de Morococha, sin que se desataran las represiones que la clase dominante demandaba.

A esa conducta del presidente Billinghurst, se añadió otro paso que los grupos terratenientes no podían admitir. El jefe militar, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, mientras ocupaba la subprefectura de Chucuito (en Puno), entre 1904 y 1905, había ya actuado en favor

⁵ Véase R. Martínez de la Torre, *op. cit.*, p. 402.

de los indios contra los abusos de los terratenientes, motivando que el propio González Prada le dedicara un artículo con el título de "Autoridad humana". En 1912, Gutiérrez Cuevas era jefe militar de Canas y fue comisionado por Billinghurst para que estudiara la situación de los indígenas en la sierra del sur. En respuesta, los terratenientes acusaron a Gutiérrez de sublevar a los indios, y denunciaron las revueltas indígenas de la zona; y la misión terminó allí. Pocos años más tarde, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, con el nombre de Rumi Maqui (Mano de Piedra), encabezó la primera importante insurrección de los campesinos indígenas en este siglo, en Puno.

Ninguno de estos actos del presidente Billinghurst, cristalizaron en medidas efectivas de cambio de la situación de los trabajadores campesinos y urbanos, así como el breve tiempo que se le permitió mantenerse en el poder impidió, probablemente, que llevara a cabo sus proyectos de difusión de la educación popular, y de saneamiento de la administración pública, y de institucionalización de sus proyectos de establecer un presupuesto funcional, así como es probable que sus propias ideas no fueran muy claramente definidas sobre estas materias. Es claro, sin embargo, que las tendencias políticas iniciadas por su régimen no podían dejar de levantar la más enérgica y pronta oposición de los grupos conservadores de la clase dominante. Esa oposición cristalizó luego en un llamamiento a la insurrección militar; un golpe de Estado encabezado por el entonces coronel Óscar Benavides, en febrero de 1914, con la participación del capitán Luis M. Sánchez Cerro, obligó a Billinghurst a dimitir y exiliarse en Chile. Fue a vivir a Iquique y murió un año después.

En los últimos meses de su gobierno, Billinghurst intentó recurrir a un plebiscito popular para sostener su régimen y se dijo, inclusive, que pensaba entregar armas al pueblo para defenderlo. No llegó a hacer lo uno ni lo otro, pero el solo hecho de haberlo pensado, muestra a un personaje alejado de modo notable de las tradiciones características de la dominación de su clase. En efecto, por su actividad comercial, el origen de su fortuna y su procedencia educacional, Billinghurst era casi como un extranjero para el resto de los miembros de su propia clase. Sin duda, esos factores contribuyeron decisivamente a que apareciera encabezando, por un intenso momento, el primer atisbo de crisis de la dominación oligárquica en el Perú.

El coronel Benavides y la oficialidad del ejército fueron objeto de un homenaje público de los representantes de todas las tendencias políticas de la clase dominante. Elegido por el Congreso como presidente provisorio, Benavides proclamó la independencia del ejército

respecto de las banderías existentes. Sin embargo, en las elecciones del año siguiente, un jefe militar, el general Pedro Muñiz se erigió como candidato a la presidencia de la República y frente a él, pasada la hora del temor a la agitación popular, todos los partidos de la clase oligárquica volvieron a coligarse en torno de la figura de su más conspicuo representante José Pardo, quien resultó en consecuencia vencedor de las elecciones de 1915. La cohesión política oligárquica parecía restablecida. No obstante, pronto las grietas en su seno se ahondaron irremediable y definitivamente, hasta producir, al final del periodo de Pardo, la ruptura abierta entre las tendencias oligárquicas más estrechamente asociadas a los intereses de los cursos nuevos de la dependencia que se desarrollaban a lo largo de la Primera Guerra Mundial, y aquellas más profundamente ligadas a las tradiciones e intereses señorialistas de la clase.

Entre tanto el proceso de movilización de la naciente clase obrera no hacía sino ensancharse y fortalecerse, hasta alcanzar después de violentas y largas huelgas y luchas callejeras, que el gobierno legalizara la jornada de ocho horas de trabajo para todos los trabajadores peruanos. Paralelamente, se iniciaban también las primeras manifestaciones del descontento entre el proletariado rural de la costa central y norte, sangrientamente reprimidas por el gobierno en 1916; y el campesinado indígena de la sierra del país ingresaba en un periodo de enfrentamiento violento con los terratenientes en diversas regiones, pero especialmente en el sur. De estas primeras luchas modernas del campesinado indígena, la de mayores repercusiones y, con seguridad, la de propósitos más definidos, fue encabezada por Teodomiro Gutiérrez Cuevas (Rumi Maqui), en las provincias de Azángaro y Huancané, en Puno, con un programa de reforma agraria y de retorno de la propiedad de la tierra al campesinado indígena, en 1915.

La hegemonía política oligárquica no se enfrentaba, pues, solamente a sus propios problemas de división entre sus grupos principales y, a la consiguiente pérdida de su cohesión política y de su capacidad de alternar en el poder a sus *élites* civiles, hegemoníicamente, en el poder político, sino a crecientes presiones de los dos sectores de trabajadores por la modernización y la democratización de la estructura economicosocial de dominación.

PERIODO 1919-1930

A lo largo de la Primera Guerra Mundial, las tendencias en curso se desarrollaron más profundamente; pero ello implicó la modificación de las fundamentales y la cristalización de ciertos procesos que

ya se anunciaban en el periodo anterior. Al terminar la guerra, pues, otro cuadro ingresaba a la escena peruana.

1. *La hegemonía norteamericana y el desarrollo de las formas de dependencia iniciadas en el periodo anterior*

Sociedad dependiente en el orden capitalista internacional, el Perú recibió, como todos los demás países latinoamericanos, los impactos derivados del desplazamiento de poder que durante la guerra ocurrió entre los países, o mejor, entre las burguesías nacionales metropolitanas. La hegemonía británica sobre la economía peruana se eclipsaba definitivamente y las relaciones de dependencia se rearticulaban en torno de la hegemonía norteamericana.

El proceso no supuso innovaciones sustantivas en las modalidades de dependencia ya iniciadas a fines del siglo XIX, pero sí la expansión y el desarrollo de ellas. La acentuación de la hegemonía norteamericana, dadas las exigencias características del capitalismo industrial de ese periodo en aquel país, condujo a la expansión de la explotación mineropetrolera y, como resultado, la estructura productiva del Perú pasó de una fase casi puramente agrícola a una agrominera. Cristalizó definitivamente la característica forma de dominación imperialista de la economía peruana, con la organización en gran escala de "enclaves" económicos controlados y administrados directamente por el capital extranjero, sobre cuya base se ejercería en adelante el control de la economía dominada en su conjunto, y que perdura hasta hoy junto con nuevas modalidades surgidas después de la Segunda Guerra Mundial al paso de la mayor diversificación de la estructura productiva del país.

Sobre la base de estas nuevas formas de dependencia, el comercio exterior peruano tendió a ampliarse considerablemente. Nuevos elementos participaban, ahora, en esta expansión. El mercado de Londres era crecientemente sustituido por el de Nueva York para los productos peruanos de exportación; los productos mineropetroleros emparejaron primero y luego comenzaron a sobrepasar a los productos de origen agrícola y, junto a todo ello, a la importación de los tradicionales productos ingleses de vestuario y de ornamento, se añadía ahora la creciente importación de productos de tipo mecánico, de origen norteamericano. Es decir, la estructura del comercio de exportación y de importación estaba modificándose, dentro del reducido marco de los productos primarios en un caso y de productos de uso y de consumo personal y doméstico en el otro, como parte de la sustitución del eje metropolitano de las relaciones de dependencia.

La economía peruana continuaba concentrada en el predominio absoluto de sus sectores primarios, pero éstos se habían ensanchado y diversificado mientras se acentuaba su control por la burguesía norteamericana. Esta limitada, pero importante diversificación de la economía produjo consecuencias significativas en todos los órdenes institucionales de la sociedad. En primer término, la expansión de la actividad minera permitió a un importante sector de las regiones serranas del país una ligazón inmediata con la dominación imperialista, y de ello resultó un primer proceso incipiente de más profunda articulación de la economía regional costeña con la de las zonas serranas del interior, obligando la ampliación de las líneas de transporte y de comunicación entre una y otra. En la medida en que los yacimientos mineros de la sierra central eran, de lejos, los de mayor importancia; fue ésta la zona más profundamente afectada por los efectos de la actividad minera y por una más estrecha y directa articulación, con la economía costeña, y ante todo, con la capital de la República. Esto es, la articulación regional de la economía peruana y de ésta con el sector metropolitano del capitalismo comenzó así a modificarse, y los efectos de este proceso sobre los cambios en la red urbana del país y en el desplazamiento migratorio de su población, pronto serían manifiestos. Esos nuevos factores, impulsaron también el lento proceso de modernización de las comunidades campesinas de la sierra central, fenómeno especialmente resaltante en el conjunto de los cambios socioculturales de la población campesinoindígena del país.

En otro orden de problemas, la expansión minera aparejó también la expansión del proletariado minero que se reclutaba entre la población indígena de las mismas zonas en que se establecían los "enclaves" mineros, generando un proceso de flujo y reflujo migratorio de los campesinos entre las minas y sus comunidades de procedencia, que indudablemente estuvo en la base de las primeras etapas del proceso de "cholización" de un amplio sector de la población india. Pero, en aquel periodo, la más importante consecuencia de la formación de un amplio proletariado minero fue su presencia en la primera línea de las luchas del proletariado peruano en éste y en los siguientes periodos.

La expansión del comercio exterior dejó sentir bien rápidamente sus efectos en la ampliación del aparato administrativo del Estado, con la consiguiente expansión de los grupos medios que usaban este canal social; del mismo modo, la mayor importación de productos y los cambios en la composición de la importación, generaron una

rápida expansión del comercio urbano e interregional del país, a través de lo cual se fortalecieron los grupos comerciales de la burguesía y los sectores medios ligados a esa actividad. La actividad industrial comenzaba a expandirse también, aunque reducidamente.⁶

Todo ese conjunto de cambios fue alterando la fisonomía de los sectores urbanos del país y, principalmente, de la ciudad capital. A esta etapa corresponde la primera gran corriente migratoria, procedente de las ciudades menores y de los pueblos urbanos hacia Lima, y de las capas terratenientes y medias de la población. Los sectores medios urbanos y el proletariado, textil especialmente, se incrementaron de manera apreciable. Este crecimiento demográfico de Lima generó una revalorización de la propiedad urbana que benefició a los dueños de las tierras hacia las cuales se expandía la ciudad, desatando un alza de los alquileres y un intensivo movimiento especulativo con el valor de las tierras de las haciendas colindantes al casco urbano original de la ciudad, así como un auge de la construcción urbana. La mayor importación de vehículos motorizados, añadida a los procesos de urbanización ecológicodemográfica en el área de Lima-Callao, obligó a la construcción de nuevas avenidas, a la pavimentación de muchas de ellas y a la modernización del rostro urbano de la ciudad. Naturalmente, la actividad comercial e industrial de Lima se expandió considerablemente con estos fenómenos.

Tanto este proceso de renovación de la estructura ecológica de la ciudad capital, como las necesidades de ampliación de las vías de transporte y de comunicación exigidas por la expansión del comercio interregional y las nuevas formas de articulación económica entre la costa y algunas áreas de la sierra, empujaron al Estado a hacerse cargo de estas tareas. Para ello, el Estado eligió la adquisición de créditos fuera del país, y eso llevó al rápido crecimiento de la deuda externa, que a fines de 1929 ascendía ya a 111 millones de dólares solamente con los Estados Unidos. Pero el incremento de la deuda externa implicó, también, la sustitución de Inglaterra por los Estados Unidos como el principal acreedor, de modo que esa suma correspondía al 77% de la deuda externa total del país. Los servicios de la

⁶ Véase de Alejandro Garland, *Reseña industrial del Perú*. Lima, 1905; R. Martínez de la Torre, *op. cit.*, pp. 11-23. Según Basadre: "En 1923, publicáronse cifras según las cuales, el capital invertido en las fábricas de tejidos de algodón, de lana, de harina, de jabones, de velas, de fósforos, cigarrillos, sombreros y otras especies, ascendía a cerca de 29 millones de soles, ocupaba a más de 30 000 obreros, usaba una fuerza de 7 482 HP y producía casi 230 millones de soles." Véase, Jorge Basadre, *op. cit.*, t. x, p. 4721. Debe añadirse que la manufactura textil era la rama dominante, pero estaba en poder de capitales ingleses y norteamericanos, Duncan and Fox y W. R. Grace.

deuda externa, que en 1920 llegaban al 2.63% del presupuesto, a fines de esa década habían saltado a cubrir el 21% del presupuesto fiscal.⁷

Brevemente, la hegemonía norteamericana sobrepasaba largamente, en profundidad y en amplitud, a la que pudo lograr la británica en el momento de su máxima dominación sobre la economía peruana.

2. *La ruptura definitiva de la cohesión política oligárquica*

La ya vacilante y deteriorada cohesión política de los grupos hegemónicos de la clase oligárquica, que por un breve interregno había parecido recuperarse con la coalición de todos los grupos en torno de la figura de José Pardo, después de la dimisión de Billinghamurst, no había hecho sino continuar corroyéndose a lo largo de los años de la guerra europea, como consecuencia de la profundización creciente de los procesos arriba señalados. Al término de la guerra esos factores generaron una ruptura abierta, y esta vez definitiva, en la cohesión política de la burguesía terrateniente comercial.

Al finalizar el periodo de Pardo en 1919, los dos principales candidatos a la presidencia de la República provenían del mismo partido gobernante, el Partido Civil. Antero Aspíllaga, presidente del partido y representante de los sectores más característicamente terratenientes, y Augusto B. Leguía, líder de los grupos más vinculados al comercio y a los intereses de las nuevas formas de dependencia y a la hegemonía norteamericana. No obstante su manifiesta ventaja electoral, sospechoso de las intenciones del ala conservadora de su partido y del gobierno, Leguía decidió dar un golpe de Estado con la complicidad de un sector de las fuerzas armadas, y se adueñó del poder, que por medio de sucesivas reelecciones mantendría hasta la crisis económica mundial.

Leguía era sin duda el más prominente ejemplo del ascenso de los grupos vinculados al mundo del comercio y de las finanzas a los primeros rangos de la clase dominante, a pesar de su carencia de tradición señorial, y también el más definido representante de los intereses del nuevo eje metropolitano. Nacido en 1836, estudió algún tiempo en Valparaíso en un colegio inglés, combatió en el último momento de la guerra con Chile en la defensa de Lima y, posteriormente, se dedicó enteramente a la actividad comercial, en estrecha liga con la burguesía inglesa y norteamericana. Fue, sucesivamente,

⁷ International Bank for Reconstruction and Development. *Peru's External Public Debt History*. Prepared by James J. Lynch, January 1, 1949, pp. i-ii.

exportador de arroz y de cueros a los mercados de Londres y de Nueva York, agente de la New York Life Insurance Company, a cuyo servicio viajó ampliamente por América del Sur. Casado con una rica heredera de apellido inglés, Swayne, viajó a Londres en calidad de representante de la Testamentaria Swayne y arregló con la Casa Lockett la organización de la poderosa empresa agrícola British Sugar Co. Ltd., que fue propietaria de las haciendas azucareras de Cañete y Nepeña, en la costa. Posteriormente, fue gerente de la Cía. de Seguros de América del Sur, ministro de Hacienda de los gobiernos de Candamo y de Pardo y presidente de la República entre 1908-1912. Dotado de evidentes habilidades personales, había ascendido muy rápidamente hasta formar parte de los grupos hegemónicos principalmente comerciales de la clase dominante, y ya desde los años de su primer gobierno canalizaba una tendencia cada vez más divorciada del estilo de dominación señorialista de su clase y más proclive a la sumisión al imperialismo.⁸

Tras su golpe de Estado en 1919, inauguró un periodo de once años de duración que él bautizó, ilustrativamente, como el de la "patria nueva". El más profundo significado histórico de ese régimen fue la liquidación de los grupos políticos más tradicionales de su clase, por medio de la persecución y el destierro, la más completa y obsecuente sumisión a los requerimientos del imperialismo norteamericano y el intento de estimular la expansión de los grupos burgueses comercial-urbanos, como base del nuevo poder, por medio de la corrupción administrativa más franca y el usufructo privado de los recursos públicos, al mismo tiempo que se enfrentaba mediante una represión persistente y decidida a las primeras movilizaciones populares definitivamente antioligárquicas.

Su periodo se inició con algunas posturas demagógicas de corte populista, que parecían caracterizar el naciente régimen como equivalente al de los coetáneos movimientos irigoyenistas y alesandrista en Argentina y Chile. Pero mientras que en estos países el desarrollo relativamente importante de los grupos burgueses urbanos permitía una diferenciación suficientemente clara entre éstos y los grupos más oligárquicos, y, en consecuencia, otorgaba a los grupos modernizantes de la burguesía la capacidad de arrastrar detrás suyo a los sectores populares antioligárquicos, en el Perú de ese periodo los grupos modernistas eran aún de desarrollo relativamente débil y su diferenciación con los otros era poco visible, por causas en general conocidas

⁸ M. A. Capuñay. *Leguía*. Lima, 1952; Jorge Basadre, *op. cit.*, t. VIII, pp. 3553-55.

a las que no fueron ajenos los avatares de la guerra con Chile. Los grupos modernistas de la burguesía peruana, por lo tanto, no solamente no podían tener la capacidad de atraer bajo su alero a los sectores populares que comenzaban a movilizarse políticamente en una dirección antioligárquica, sino que tampoco podían tener una perspectiva política muy claramente diferenciada de la de los otros grupos de su propia clase. Por lo mismo, Leguía fue, explicablemente incapaz de sobrepasar las limitaciones impuestas por esas circunstancias y liderar, como pudieron en cambio hacerlo Irigoyen o Alessandri, también a la parte popular de la movilización antioligárquica. Su “patria nueva” no pasó de ser una “patria volteada y remendada”. En éste, como en otros sentidos, con las diferencias específicas derivadas del contexto en el cual surgió, el régimen de Belaúnde presenta notables analogías con el de Leguía.

Es correcto interrogarse por qué —si no había una diferenciación suficiente entre los grupos modernizantes y los otros dentro de la clase oligárquica peruana y si los primeros no podían, por lo tanto, constituir una base de poder propia, sobre todo sin contar con el apoyo popular— el régimen de Leguía pudo perdurar tanto sin ser depuesto por las *élites* alternativas de la clase dominante. La respuesta no es, quizás, excesivamente difícil. De un lado, los otros sectores de la clase estaban siendo trabajados por las mismas tendencias que habían originado el leguismo y en consecuencia sus *élites* políticas tradicionales no podían continuar expresándose como antes y era demasiado pronto para el desarrollo de las nuevas que, por su lado, no podían dejar de encontrarse representadas, aun de manera incompleta, por el régimen establecido. De otro lado, como el leguismo no había sido capaz de enganchar detrás de su carro a la parte popular de la movilización antioligárquica, muy rápidamente el régimen como la clase en su conjunto se vieron enfrentados por el desarrollo político de los sectores medios en expansión y del proletariado urbanominero y rural, que se movilizaban bajo sus propias banderas en una corriente definitivamente antioligárquica de la magnitud suficiente como para poner en riesgo la entera dominación oligárquica y no solamente uno de sus sectores. Los grupos antileguiístas de la clase dominante no podían, en consecuencia, enfrentarse al régimen imperante sin asegurarse de no abrir un proceso que sobrepasaría sus expectativas. Pero, por lo mismo también, el régimen no podía permitirse una política más decididamente modernizante, que habría afectado la dominación terrateniente. Durante el periodo, pues, fue inevitable en la práctica un mutuo reforzamiento de los gru-

pos hegemónicos de la clase dominante, entre sí y con los grupos medios de terratenientes señorialistas del interior del país, con todas las ambigüedades y reticencias a que las circunstancias obligaban. Por todo ello, y acaso fue este factor el decisivo, el régimen de Leguía sólo podía sostenerse plenamente por medio de una completa sumisión a la hegemonía imperialista del capitalismo norteamericano, obteniendo de él los recursos financieros para sostener su administración y entregando en cambio los recursos productivos más significativos del país en ese momento. Ése es, en el fondo, el sentido del gigantesco y violento incremento de la deuda externa con los Estados Unidos, y la práctica colonización económica del país por la burguesía norteamericana, que marcaron el periodo leguista.

Asegurada así una base "propia" de poder, el régimen leguista aceleró la desintegración de las viejas *élites* políticas de su clase por medio de la persecución y del destierro, y trató de expandir las bases sociales de su poder estimulando el crecimiento numérico y económico de los grupos burgueses comercialurbanos usando los recursos públicos, en gran parte provenientes de los préstamos a la burguesía extranjera, de los que se sirvió también para corromper a la prensa y al parlamento y para contentar al ejército.

Como contrapartida, durante este régimen se materializó la entrega de los yacimientos de la Brea y Pariñas a la International Petroleum Co., tras un laudo arbitral de la corona británica que sólo confirmaba la situación existente; se entregaron a perpetuidad los ferrocarriles del Estado a la Peruvian International Co., organizada por los tenedores ingleses de la anterior deuda externa del Perú; se colocó durante buen tiempo la administración de las aduanas del país al control norteamericano; se entregó a la Marconi el monopolio de los servicios de correos y telégrafos; se hicieron múltiples concesiones a las empresas mineras de propiedad norteamericana, mientras los capitales extranjeros penetraban también los recursos agrícolas de la costa y monopolizaban su comercialización. Es decir, se dio curso a una práctica colonización económica del país.

Paralelamente, la política externa del leguismo se caracterizó por permitir la abierta intervención norteamericana en el arreglo de todos los problemas fronterizos con los países vecinos, con la consecuencia normal de una considerable reducción del patrimonio territorial del país en cada caso. Por si eso fuera poco, en las reuniones interamericanas de La Habana y de Washington (1928 y 1929), la posición peruana fue de una completa obsecuencia y sumisión a los dictados

norteamericanos. La colonización económica abría inevitablemente el paso a la colonización política.

Los arrestos populistas del régimen se redujeron a la promulgación de un texto constitucional en que se incorporaron de manera difusa e incongruente, algunos de los postulados y mecanismos de la Constitución de Weimar, estableciendo garantías sociales e individuales que, obviamente, nunca pasaron del papel a la vida. Igual cosa ocurrió con los códigos promulgados durante el régimen, y con todas las medidas formalmente destinadas a estimular la educación popular y a proteger los derechos de las comunidades indígenas. Podría quizás, en su beneficio, indicarse que en este periodo se intentó tímida y confusamente establecer un régimen aduanero de protección a la naciente industria nacional, y dar un gran impulso a la expansión de la red vial del país. Sólo que ambas medidas sirvieron a la postre para beneficiar a los grupos terratenientes más retardatarios de la sierra y a los grupos de más altos ingresos de la burguesía urbana. Las tarifas proteccionistas imponían iguales impuestos a los productos industriales de importación que servían para el consumo ostentoso de los más ricos, que a los que servían a las necesidades de los grupos medios y populares. La política vial, que se materializó en una ley de trabajo obligatorio por medio de la conscripción popular para la construcción de caminos y carreteras, fue usada por los terratenientes provincianos favorecidos del régimen para obligar a los indios a construir gratuitamente las vías de transporte que beneficiarían a las haciendas.

Con todo, será preciso no olvidar que aquí terminó el control directo de las *élites* más tradicionalistas de la clase burguesa oligárquica, de las más altas instancias del poder político; se fraccionó definitivamente la cohesión política de la clase y su hegemonía sobre la sociedad peruana no podría en adelante continuar por vías normales. La clase dominante y su dominación oligárquica se debilitaron políticamente durante el régimen y a la caída de éste su rearticulación estaba ya impedida por la consolidación y la organización de los movimientos populares antioligárquicos. Las consecuencias de este proceso de ruptura de la cohesión política oligárquica, sin que sus grupos modernistas fueran capaces de captar el apoyo popular como, en otros países, determinarían que en adelante la hegemonía burguesa en el Perú sólo pudiera ejercerse por mediación militar en el control del Estado, pues, en efecto, después del 30 no ha habido en el Perú más que un gobierno civil que terminara su periodo de mandato.

3. *La movilización popular antioligárquica*

Mientras que en el periodo anterior los sectores medios emergentes y, en general, el resto de los sectores populares que podían participar en los mecanismos institucionales de la vida política del país, expresaron su difuso descontento con la dominación oligárquica de la burguesía terrateniente comercial a través de su apoyo a los grupos modernizantes de la clase dominante, como en el caso particular de Billingham primero y poco después en la propia campaña electoral de Leguía en 1919, en el periodo posterior a esta fecha inician un claro proceso de diferenciación política respecto de ambos grupos hegemónicos de la clase dominante, y dan nacimiento a corrientes de nacionalismo populista lindante con la revolución y, en menor escala, a corrientes socialistas.

Por una parte, la completa entrega de la economía del país a la dominación imperialista norteamericana, sin que al mismo tiempo ocurriera ninguna modificación sustantiva en la estructura económico-social y sin que, por lo tanto, las nuevas tendencias políticas del sector dominante de la clase terrateniente comercial presentaran ninguna diferenciación importante y visible con los estilos e intereses políticos del resto de la clase, no podía por modo alguno satisfacer las demandas de modernización de la vida política que los sectores medios propugnaban. Y, al propio tiempo, las superficiales innovaciones formales en las relaciones obreropatronales y el mantenimiento de las relaciones señorialistas entre terratenientes y campesinos indígenas, no podían tampoco servir como señuelo de manipulación política de los grupos obreros urbanomineros y rurales.

El proceso de concentración de la propiedad de la tierra en el campo, que se había iniciado con la emancipación, no solamente no había menguado, sino que había cobrado un nuevo impulso a favor de la expansión del comercio interregional y urbano del país, en el proceso de rearticulación de las relaciones económicas interregionales y urbanorrurales que la expansión de la minería y el crecimiento urbano implicaban.

Era, pues, inevitable que los sectores medios y populares, principalmente urbanos, reaccionaran a esas circunstancias enfrentándose al mismo tiempo a todas las corrientes políticas de la clase oligárquica. Pero el proceso se vio fortalecido por las influencias ideológico-políticas de los principales acontecimientos históricos en el mundo de ese momento. La Revolución mexicana, de un lado, y la Revolución socialista soviética en Rusia, del otro, golpearon al mismo

tiempo la imaginación de los sectores populares peruanos y encontraron en ellos un terreno fecundo.

De ese modo, a lo largo del oncenio leguista aparecieron los primeros núcleos políticos e ideológicos definidamente antioligárquicos, que acogían al grueso de los sectores medios y populares y también los primeros núcleos políticos organizados de definición antiburguesa. Es claro que estas nuevas corrientes politicoideológicas de los sectores populares y medios, no cristalizaron en su forma final sino en las postrimerías del periodo. Sin embargo, sus primeras manifestaciones estaban ya contenidas en las movilizaciones políticas de estos sectores desde el comienzo mismo de esta etapa.

Las principales manifestaciones del descontento de los sectores medios emergentes se encauzaron al comienzo del periodo en la lucha por la democratización y la modernización de la enseñanza universitaria, que como secuela de la revuelta estudiantil de Córdoba (1918) constituyó uno de los principales problemas políticos del régimen leguista. Ya los estudiantes de la Universidad de San Marcos habían estado presentes solidariamente en las luchas obreras durante la huelga obrera de Lima en 1919; y el futuro caudillo principal de la movilización estudiantil, primero, y política, después, contra la hegemonía oligárquica, Haya de la Torre, participó en la delegación estudiantil de ese momento. Pero en el mismo año se organizó la Federación de Estudiantes y el año siguiente se celebró el Congreso Nacional de Estudiantes del Cuzco, bajo la presidencia de Haya de la Torre. La lucha por la Reforma Universitaria constituyó el hito inicial de la definición antioligárquica de los sectores medios y populares y sus líderes constituyeron el núcleo dirigente de sus organizaciones políticas posteriores.

Paralelamente, la influencia ideológica de la Revolución soviética era recogida por grupos de intelectuales y obreros que se empeñaron con éxito en la organización sindical y política de la clase obrera bajo las banderas socialistas, logrando rápidamente la erradicación de la anterior predominancia anarquista. En 1919 se organizó la Federación Obrera Regional Peruana, que organizó después el Segundo Congreso Obrero en 1927, y más tarde, en 1929, el Comité para la Organización de la Confederación General de los Trabajadores del Perú; ese mismo año, una delegación de obreros peruanos participó en el Congreso Sindical Latinoamericano de Montevideo.⁹

Como parte de la difusión de la ideología socialista, además de efímeros y distorsionados intentos de organización de un partido obre-

⁹ Ricardo Martínez de la Torre, *op. cit.*, t. III, pp. 15-81.

ro por intelectuales y políticos al servicio de la burguesía, en 1920 se organizó un Partido Socialista (más tarde transformado en Partido Comunista Peruano) bajo la égida de José Carlos Mariátegui, que ya para entonces era el más preclaro ideólogo del socialismo revolucionario peruano. En 1929, una delegación peruana participaría en la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas Latinoamericanos en Buenos Aires.

Las luchas de los estudiantes por la reforma universitaria y las de los obreros por su sindicalización y su organización política aparecieron convergiendo en movilizaciones solidarias, cuya demostración más efectiva fue la gran manifestación callejera del 23 de mayo de 1923 contra la consagración del Perú al Corazón de Jesús, que el gobierno y la Iglesia preconizaban. La represión del gobierno causó la muerte en esa ocasión de un estudiante y de un obrero, y esas muertes simbolizarían para todo el futuro la solidaridad obrero-estudiantil nunca desmentida desde entonces hasta la actualidad en el Perú.

El gobierno enfrentó estas movilizaciones obreroestudiantiles con la represión callejera y la presión y destierro de los principales dirigentes estudiantiles y, en primer lugar, de su más importante líder, Haya de la Torre. Éste inició de ese modo, un circuito de viajes que lo llevaría a participar en los afanes educacionales de Vasconcelos en la Revolución mexicana y a visitar la Rusia Soviética y otros países europeos. En el transcurso adquirió sus principales ideas políticas y acopió la influencia de todos los principales movimientos políticos de ese momento y ganó un extenso renombre que fundó su calidad de jefe indiscutido de la más importante organización política anti-oligárquica después de la caída de Leguía, que él mismo fundó en el destierro, el APRA.

Por su parte, Mariátegui viajó a Europa con una modesta beca del gobierno, y allí aprendió todo lo necesario para convertirse a su regreso en el eje y canal de la difusión del pensamiento marxista en el Perú. A su regreso fundó la revista *Amauta*, hasta hoy la más importante revista que el país haya tenido, y desde sus páginas ejerció la mayor influencia intelectual de ese periodo, contribuyendo a la crítica del orden burgués oligárquico y moderno, e inició el proceso de reconstrucción del pensamiento social peruano y de revisión crítica de la historia economicosocial del Perú. Antena alerta a todo lo que sucedía en el mundo de su tiempo, Mariátegui se esforzó por mantener informados a la clase obrera y a los intelectuales avanzados del país sobre el proceso de la lucha de clases en la escena

internacional; desde su revista y desde la tribuna de las universidades populares González Prada luchó por la educación revolucionaria del proletariado peruano. La suya fue, sin duda alguna, la más lúcida y perdurable influencia ideológica en el Perú: el curso posterior de la vida política peruana y de los partidos populistas que en esa hora nacieron muestra que la obra de Mariátegui constituye realmente la base misma de una teoría posible de la revolución peruana y latinoamericana, no superada hasta hoy. Sin embargo, el giro que ya a fines de este periodo tomaba el curso de la política de los partidos comunistas, bajo la hegemonía del Partido Comunista Ruso, impuso sobre el naciente socialismo revolucionario peruano, elementos que le impedirían, por largo tiempo, disputar al populismo nacionalista y reformista el liderazgo de la movilización política popular.

En otro nivel, el proceso renovado de concentración de la propiedad agraria en la sierra, empujaba a los campesinos indígenas agrupados en las "comunidades indígenas", a enfrentarse contra los terratenientes en defensa de sus tierras usurpadas por medio de la violencia o del control de los resortes judiciales del país. Como resultado, el periodo se caracterizó, en este aspecto, por numerosas rebeliones campesinas contra los terratenientes, especialmente en el área del sur del territorio. Otra vez, en el mismo escenario de la revuelta de Rumi Maqui en 1915, los campesinos de Azángaro y Huancané, Puno, protagonizaron la más importante revuelta campesina de esos años, en 1923. Otras áreas fueron también afectadas por la rebeldía campesina a la voracidad terrateniente; pero, en la mayor parte de ellas, especialmente en la sierra del Norte, la rebelión se expresaba en la forma de generalización del bandolerismo campesino. La disputa de propiedades entre los propios terratenientes, agudizó este fenómeno, y algunos de los más importantes bandoleros rurales fueron terratenientes despojados de sus tierras y perseguidos por las autoridades. Los nombres de Benel y de Luis Pardo, en Cajamarca y Ancash, generaron una perdurable leyenda teñida de romanticismo. La represión gubernamental y terrateniente fue drástica y se produjeron masacres de campesinos en diversos lugares.

La insurgencia campesina, junto con los factores anteriores, estimuló el desarrollo de ciertas corrientes de pensamiento entre los intelectuales de los sectores medios, que preconizaban una revalorización de la cultura india y de su historia como hecho dominante de la historia y de la sociedad peruanas. Esa corriente, denominada "indigenismo", encontró sus expresiones más importantes en la literatura narrativa, en la poesía y en las artes plásticas, sus elementos

sirvieron para robustecer la rebeldía política antioligárquica, y para dar los primeros pasos en la revisión crítica de la historia peruana, a pesar de su carácter más bien vago e incongruente. Muchos de sus seguidores pretendieron ver en el problema social de la población indígena un problema de educación y de integración cultural a la cultura dominante, por encima de los efectos de la dominación terrateniente de la propiedad agraria y de la economía rural. A esa corriente se opuso prontamente el "hispanismo" de los intelectuales de la clase oligárquica o de los sectores medios ligados a ella, proclamando el carácter sagrado de la herencia hispánica y haciendo de ésta el basamento mismo de la sociedad y de la cultura nacional. Los ecos de estas polémicas resuenan aún hoy día, en parte de la obra de los intelectuales peruanos.

De ese modo, populismo nacionalista-reformista y socialismo revolucionario, se constituían como las corrientes politicoideológicas de mayor influencia en la movilización y organización política de los sectores medios y obreros, y junto con ellas, entretejiéndose con ellas de muchas maneras, el indigenismo representaba los primeros efectos de las luchas campesinas en la conciencia social de la *intelligentsia* peruana de ese periodo.

4. *Las conspiraciones oligarquicomilitares contra el régimen leguista*

Si es cierto que las fracciones oligárquicas no tuvieron antes de 1930 la fuerza suficiente para derrocar violentamente a Leguía o para obligarlo a alternar el poder electoralmente, eso no significó que no lo intentaran repetidamente.

Las élites tradicionales no podían permanecer quietas frente a su casi completo despojo de poder y de influencia política en favor de una nueva oligarquía comercial, exclusiva usufructuaria de las arcas fiscales y de los cuantiosos empréstitos norteamericanos; todo ello, exacerbado por las sucesivas reelecciones de Leguía. Sin duda también, para muchos grupos la corrupción administrativa y el arribismo desatado por el leguismo, la deificación de Leguía llevada hasta los más ridículos y groseros extremos por la cáfila de beneficiarios del favor palaciego, debieron producir una irritación que la impotencia hacía más aguda.

Los grupos oligárquicos tradicionales estaban en franco proceso de desintegración, y las persecuciones, prisiones y destierros de sus principales voceros políticos, aceleraban el proceso. Sin embargo, a partir de 1921 tentaron permanentemente la vuelta al poder. Se

sucedieron conatos de sublevación en 1921, 1922, 1923 y 1924.¹⁰ Dos de ellos con la participación de jefes militares, entre los que ya se destacaba Luis M. Sánchez Cerro. Los otros dos fueron encabezados por característicos representantes de las viejas *élites* (Durand en 1923 y Osores en 1924); en éstos se intentó volver a usar la experiencia de las sublevaciones de fines del siglo XIX, en que grupos de campesinos armados en pequeñas guerrillas al servicio de uno u otro grupo de políticos oligárquicos formaban las llamadas "montoneras", y en las cuales se basó buena parte de la lucha oligárquica por la recuperación del control del Estado de manos de los militares después de la guerra con Chile. Eso ilustra, en cierta forma, la completa desorientación de los grupos terratenientes antileguiístas sobre el cambio total de las condiciones de la vida política peruana después de 1919, pues de allí en adelante, la reconquista del poder o su mantenimiento frente al embate de los movimientos populares no podría hacerse de modo alguno sino a través del ejército. Para ganar el apoyo de los más fuertes sectores del ejército era todavía muy temprano, mientras la disponibilidad de recursos financieros permitía a Leguía mantener contentos a la mayoría de los jefes militares. De allí que, en las ocasiones en que algunos jefes militares, como Sánchez Cerro, fueron convencidos para sublevarse, no tuvieron éxito en ese momento.

Ésas eran las características del contexto histórico del Perú cuando estalló la crisis económica mundial en 1929: una completa desarticulación política de la clase dominante, un inmenso descontento popular que se canalizaba en la vía de la movilización antioligárquica, tanto contra las viejas como contra las nuevas *élites*, una absoluta dependencia del Estado de los recursos del crédito extranjero, la colonización económica por el imperialismo norteamericano, y un ejército cuyas funciones políticas se habían modificado totalmente, socializado al servicio del mantenimiento de la dominación económica y política de la burguesía terrateniente comercial.

LA CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA DE 1930-1933

Las consecuencias de la crisis económica del capitalismo, iniciada en octubre de 1929 con el pánico de la Bolsa de Nueva York, repercutieron inmediatamente tanto en el Perú como en toda América Latina. Sus primeros efectos sobre la economía peruana fueron la

¹⁰ Jorge Basadre, *op. cit.*, t. VIII.

caída de los precios de los principales productos agropecuarios de exportación, algodón, azúcar y lanas, en el mercado internacional, lo que generó la brusca contracción del comercio de importación y la baja de la moneda nacional. Las restricciones crediticias originadas por la inestabilidad de la moneda y la falta de liquidez financiera redujeron el comercio interno y, sobre todo, el comercio urbano. La ilusión de bonanza y de progreso que había alimentado al régimen desde 1920 cedía el paso a un descontento generalizado.

El gobierno de Leguía, cuya principal fuente de recursos eran los empréstitos de los financieros norteamericanos, se encontró repentinamente imposibilitado de colocar la segunda serie del empréstito de cien millones de dólares, en el preciso momento de la reducción de los ingresos fiscales provenientes de la tributación sobre el comercio internacional. Era ahora imposible continuar con los peculados que caracterizaban al régimen y continuar contentando a los jefes del ejército y, en consecuencia, el propio régimen entró en una fase de descomposición, ya iniciada poco antes con motivo de los problemas de la última reelección de Leguía.

El gobierno se enfrentaba, de ese modo, a un doble frente de oposición. Uno, que en ese momento carecía de la fuerza y de la organización necesarias para tentar el poder, era formado por los movimientos de los sectores medios y obreros que se orientaban hacia una política antioligárquica. Éstos, a su vez, estaban divididos en dos tendencias: el nacionalismo populista, liderado por los mismos dirigentes que encabezaron la lucha por la reforma universitaria de los años veintes, muy fuertemente impregnado en ese momento por el marxismo, que postulaba una revolución democrático-nacionalista profunda; y, de otro lado, la tendencia socialista, en la que al borde de los años treinta la hegemonía soviética era ya definida y que se consolidó por la muerte de Mariátegui (16 de abril de 1930). Ésta provocó el abandono de sus principales ideas sobre las vías propias de la revolución peruana y latinoamericana.

El otro frente de oposición correspondía a la propia clase dominante, dividido, por una parte, en los restos inorgánicos de las antiguas *élites* preleguístas y, por la otra, en grupos disidentes del propio régimen que hacían parte del proceso de descomposición de éste. Sin embargo, todos estos grupos carecían de cualquier organización política partidaria, y así la oposición antileguísta dentro de la clase dominante se presentaba desarticulada e informe, y no podía tener ningún otro camino que el de utilizar a los jefes del ejército para el cumplimiento de sus propósitos. En esta tarea, los descontentos den-

tro del propio grupo gobernante estaban en ventaja frente al completo desgaste y desorientación de los representantes de las tendencias señorialistas de la clase.

Así, desde que los primeros efectos de la crisis mundial comenzaron a hacerse presentes en el país, algunos de los más influyentes hombres del régimen se dieron a la preparación de un golpe de Estado, con la participación de algunos jefes del ejército, aprovechando las dificultades financieras del gobierno para mantener contentos a los jefes militares. El primer intento fue encabezado por el propio jefe de la casa militar de Palacio, el general Eulogio Castillo, pero fracasó. El segundo, encabezado por el teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro, jefe del Batallón de Zapadores de Arequipa, el 20 de agosto de 1930, tuvo pleno éxito. Leguía dimitió y, prisionero en la Penitenciaría de Lima, murió poco después. Con este acto se abrió un periodo de crisis política en cuyo proceso se decidió el destino de la sociedad peruana por los próximos 40 años. La crisis económica operaba como catalizador de las tendencias que se habían desarrollado en la sociedad peruana.

LA CRISIS ECONÓMICA

Los principales efectos de la crisis económica mundial sobre la economía peruana fueron la bancarrota financiera del Estado, la contracción del comercio internacional de exportación e importación, la devaluación monetaria, la restricción del crédito, la descapitalización del país y la desocupación. No se intenta aquí hacer un examen exhaustivo de estos fenómenos ya que no cabría en los límites de este trabajo y, por ello, se dejarán señalados solamente los hechos más resaltantes en cada uno de aquéllos.

1. *La bancarrota financiera del Estado*

Durante el régimen leguista, el presupuesto nacional se había incrementado aceleradamente año tras año, pasando desde 51.619,470 soles en 1919 hasta 140.987,192 soles en 1930. Sistemáticamente, el monto de los ingresos fiscales fue también año tras año cada vez más dependiente de las operaciones de crédito del gobierno con los financieros extranjeros. De ese modo, desde 3.326,970 soles que en el presupuesto de 1919 provenían del crédito, la cifra ascendió para 1928 a un total de 102.323,380 soles para un presupuesto

de 111.136,510 soles. Al comenzar la crisis mundial en 1929, Leguía se encontró con que no podía colocar la segunda serie del empréstito de cien millones de dólares para ese año, y la cifra de los ingresos provenientes del crédito en ese año sólo llegó hasta 9.720,000 soles, para un presupuesto calculado en 125.836,360 soles. Esto es, el Estado comenzó a encontrarse, bruscamente, con que no tenía los recursos necesarios para atender a sus obligaciones.

La devaluación monetaria del año 1930, acompañada del cambio de la libra peruana (equivalente a diez soles oro) por el sol peruano como signo monetario nacional, hizo subir las cifras del presupuesto en ese año a 140.987,192 soles; pero el valor real calculado en dólares, mostraba que de US\$ 50.334,544 en 1929, la cifra del presupuesto nacional había descendido a US\$ 48.616,273 en 1930. En los años siguientes, la cifra continuó descendiendo para comenzar a recuperarse sólo en 1934, como se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO 1
PRESUPUESTOS GENERALES 1928-1936

Años	Soles	Dólares
1928	111.136,507	44.454,603
1929	125.836,361	50.334,544
1930	140.987,192	48.616,273
1931	140.987,192	39.163,109
1932	96.928,296	16.154,716
1933	95.438,044	21.208,454
1934	111.199,437	24.710,986
1935	131.313,490	32.027,680
1936	139.715,120	34.928,780

FUENTE: Extracto estadístico del Perú. Ministerio de Hacienda y Comercio. Lima, 1939.

La disminución de los ingresos fiscales, originada por la imposibilidad de contratar nuevos empréstitos en el extranjero y por la reducción de los rendimientos de los impuestos al comercio exterior, hizo que a lo largo de los años de crisis el presupuesto estuviera permanentemente desfinanciado. Para amortiguar los efectos del problema, a la caída de Leguía, el Ministerio de Hacienda contrató con la International Petroleum Co. un préstamo de 1.500,000 soles, por un plazo de seis meses y un interés de 6% anual. Naturalmente, cuando llegó el plazo convenido el fisco no estaba en condiciones de pagar esa deuda y obtuvo de la IPC un anticipo de 300,000 soles a cuenta de los derechos sobre importación y exportación.

Paralelamente, el mismo año de 1931 se emitieron bonos al por-

tador por la suma de tres millones de soles libres de impuestos, con 6% de interés anual y pagaderos en cinco años en un 20%, y luego se emitieron vales aduaneros, mientras se intentaba reducir la abultada cifra presupuestal. A pesar de los esfuerzos, el presupuesto no pudo ser disminuido ese año; pero el total de los ingresos disponibles en ese momento era sólo poco mayor que 66 millones de soles, en tanto que la cifra global del presupuesto era mayor que 140 millones de soles. En los años siguientes, los ingresos continuaron descendiendo hasta 1934, puesto que la mala situación de los productos agrícolas de exportación a partir de 1931 obligó a la administración pública a suspender los impuestos sobre la agricultura.

La primera consecuencia importante de esta situación financiera del Estado fue que en marzo de 1931 se ordenó la suspensión de los servicios de la deuda pública, que ascendían a más de 22 millones de soles por año; la Caja de Depósitos y Consignaciones, entidad privada encargada de la recaudación de los ingresos fiscales, otorgó al Estado un préstamo de más del 80% de los fondos necesarios para cubrir la deuda interna, de cuyo modo se continuó pagando parte de ella, mientras los servicios de la deuda externa quedaban totalmente suspendidos y no se renovarían sino hasta 1947.

Pero los ingresos fiscales eran además tan exiguos que la mayor parte de los funcionarios del Estado comenzó a permanecer impaga, calculándose que para abril de 1932 el Estado debía por concepto de sueldos y pensiones alrededor de 12 millones de soles, especialmente a los rangos más bajos de la administración pública, llegando los empleados de provincias a permanecer impagos por más de tres meses consecutivos, como afirmó en 1933 el ex ministro de Hacienda Ignacio Brandariz, sobre lo que encontró al asumir en 1932 el Ministerio de Hacienda. En ese mismo año, el ministro saliente de Hacienda, J. Cateriano, afirmó:

El nuevo gobierno ha encontrado desvalorizada la moneda, suspendido el servicio de la deuda pública, impagos en gran parte los haberes y pensiones, paralizadas las obras públicas, creciente la desocupación, exhausto el Tesoro, disminuida la confianza y casi totalmente agotado el crédito.¹¹

Y era, sin duda, una cabal descripción de la bancarrota financiera del Estado.

Inevitablemente, se dispuso el curso forzoso de los billetes y la

¹¹ Jorge Basadre, *op. cit.*, t. xi, pp. 352-356.

inconversión de ellos, así como de los giros, en oro. La inconversión monetaria, si bien permitió al Estado disponer del recurso de los billetes inconvertibles, afectó naturalmente el valor de la moneda, y la capacidad económica de los sectores populares; pero, probablemente, redujo la exportación de capitales a través de giros pagaderos en oro, que había alcanzado un enorme volumen hasta la prohibición de la convertibilidad monetaria.

2. La contracción del comercio internacional

El comercio internacional peruano, que había continuado expandiéndose durante el oncenio, tras una corta y no muy seria reducción en los años 1925-26, a partir de 1930 fue seriamente afectado por las dificultades del mercado internacional, y el deterioro se acentuó en los años de 1931, 32 y 33, y sólo comenzó a recuperarse lentamente a partir de 1934, sin alcanzar sino en la década siguiente el valor anterior a la crisis. El cuadro siguiente ilustra claramente el proceso.

CUADRO 2

COMERCIO INTERNACIONAL DEL PERÚ, 1924-1938
(valor en miles)

Año	Exportaciones		Valor del sol en dólares	Importaciones	
	Soles	Dólares		Soles	Dólares
1924	251,144	101,713	.4050	180,294	73,019
1925	217,507	87,460	.4021	182,730	73,476
1926	239,758	89,693	.3741	195,609	73,177
1927	311,977	116,617	.3738	193,642	72,383
1928	315,188	125,145	.39705	176,266	69,987
1929	335,081	134,032	.4000	189,852	75,914
1930	241,133	88,255	.3660	140,261	51,336
1931	197,417	55,277	.2800	102,479	28,694
1932	178,529	38,027	.2130	76,089	16,207
1933	256,969	48,567	.1890	107,437	20,306
1934	305,094	70,172	.2300	171,253	39,388
1935	308,923	73,802	.2389	181,066	43,257
1936	335,812	83,617	.2490	200,500	49,924
1937	365,440	92,091	.2520	235,206	59,272
1938	342,129	76,705	.2242	260,159	58,328

FUENTES: United States Tariff Commission. Foreign Trade of Latin America. Washington, 1940.

Esta contracción del comercio exterior afectó a la economía peruana principalmente en relación con el comercio de exportación, cuyo crecimiento en las dos últimas décadas había permitido, en gran parte, la ilusión de una prosperidad económica plena durante el oncenio. Sin embargo, los efectos de la reducción del comercio de exportación fueron en el Perú relativamente menores que en otros países latinoamericanos y, sobre todo, fueron de corta duración.

Desde fines de la Primera Guerra Mundial, la estructura del comercio de exportación se había venido modificando en favor del predominio de los productos mineropetroleros sobre los productos agropecuarios, a medida que se profundizaba la hegemonía norteamericana. Pero esta diversificación de la producción primaria exportadora no significó un beneficio real para el país, desde el punto de vista del ingreso de divisas, puesto que el rendimiento de los productos mineros en el mercado internacional no volvía al Perú y se quedaba en los Estados Unidos en poder de las empresas dueñas de los "enclaves" mineropetroleros en el Perú. Cuando se acentuó la crisis económica mundial y la contracción del comercio peruano de exportación se agudizó en 1931, los productos mineropetroleros, especialmente los mineros, fueron los más severamente afectados, mientras que los productos agrícolas, sobre todo el algodón y en menor medida el azúcar, pudieron mantenerse relativamente dentro de la reducción general. En consecuencia, la depresión del comercio peruano de exportación no llegó a tener efectos excesivamente severos sobre la balanza de pagos del país, a pesar de su evidente deterioro.

Ciertamente, no obstante que el volumen de la exportación de algodón y de azúcar se mantuvo relativamente estable, los precios de esos productos en el mercado internacional se vieron fuertemente reducidos, y en el caso del algodón esa disminución alcanzó casi un 50% (desde 21.15 ctvs. de dólar por libra en 1929, hasta 10.56 ctvs. de dólar por libra en 1932). Pero este hecho fue compensado para los terratenientes peruanos por la desvalorización del signo monetario y la reducción del costo de vida interno, lo que permitió una marcada disminución de los costos de producción agropecuaria, como fue explícitamente reconocido por ellos en la *Memoria* de la Cámara de Comercio de Lima en 1933.

La exportación peruana de petróleo crudo descendió de 7.7 millones de barriles en 1929 a 4.7 millones en 1932, y el valor promedio por unidad, en el mismo periodo, descendió aproximadamente en la misma proporción. Después de 1932, esa exportación volvió a incrementarse tanto en cantidad como en valor, de modo que en 1938

sobrepasaba el nivel que había tenido en 1929, por casi dos veces y media.

En contraste, la exportación de cobre en barras, que ascendía en 1929 a 61,186 toneladas cortas, declinó en 1932 a solamente 24,835 toneladas cortas, y los precios descendieron de 18.413 ctvs. de dólar en 1929 a 5.62 ctvs. de dólar en 1932. Después de este año, la exportación de este producto comenzó a incrementarse gradualmente por la subida regular de los precios, aunque sin alcanzar sino mucho más tarde las cifras correspondientes a 1929.¹²

En conjunto, la contracción de la exportación peruana fue relativamente poco pronunciada y su momento más intenso fue también de corta duración. En cambio, el comercio de importación fue reducido en forma bastante fuerte. En 1929 la importación peruana era de aproximadamente 76 millones de dólares y en 1932 había descendido hasta 16 millones de dólares. A partir de 1932 hubo un lento crecimiento de las importaciones peruanas, pero a fines de la década las cifras de 1929 no habían sido aún igualadas.

Es interesante anotar que, dentro del cambio de la composición del comercio exterior peruano que la crisis implicó, entre exportación e importación, se produjeron variaciones notables en las relaciones comerciales del Perú con los demás países, especialmente con Europa y los Estados Unidos. Así, mientras que entre 1919 y 1929, los Estados Unidos habían pasado a ser el principal mercado de exportación del Perú, como consecuencia de la tendencia al predominio de los productos minerales en la exportación del país, durante los años de crisis Inglaterra volvió a ocupar el primer lugar como mercado de los productos de exportación peruanos, como resultado del mantenimiento del volumen de exportación del algodón mientras los minerales caían. Esa situación se mantuvo, con tendencia a la recuperación del mercado norteamericano, hasta 1937. Así, en 1929 los Estados Unidos absorbían el 33.3% de la exportación, mientras Inglaterra había bajado al 18.3%; pero en 1932 los porcentajes eran de 17.3 y de 36.1 respectivamente. No sucedió, sin embargo, lo mismo en lo que se refiere al comercio de importación, pues los Estados Unidos mantuvieron siempre el primer lugar como proveedores del Perú de productos manufacturados en los años de crisis, y sólo en 1932 estuvo Inglaterra bastante cerca de equiparar esa posición. Este periodo de crisis permite observar, además, la creciente aparición de Alemania en el comercio peruano de importación; este país llegó a

¹² U. S. Tariff Commission. *Foreign Trade of Latin America*. Washington, 1940, pp. 15-18.

ocupar el segundo lugar como proveedor de manufacturas en el Perú —posición que había tenido Inglaterra— entre 1936 y la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, lo más importante de los efectos de la crisis sobre el comercio de importación del Perú, reside en la disminución de la importación de cierto tipo de productos manufactureros, especialmente de tejidos y de productos alimenticios, como consecuencia del crecimiento de la producción industrial interna de estos productos. Sin llegar al volumen de producción sustitutiva de importaciones que la crisis originó en los principales países de América Latina, el mismo fenómeno aparecía también en el Perú, aunque el débil desarrollo comercial y la descapitalización producida a partir de la penetración norteamericana, sobre todo, impidieron un ritmo más vigoroso del proceso de sustitución de importaciones. Particularmente los tejidos de algodón descendieron desde 18.771,000 soles en 1929 a sólo poco más de 8 millones en 1932, y mientras todos los demás rubros de importación sobrepasaban a fines de esta década las cifras de 1929, los tejidos de algodón tendían a crecer en la importación sólo en forma muy moderada.

Por otro lado, apenas recuperada la capacidad importadora del país, durante el año 1933 comenzó a cobrar impulso la importación de bienes de capitalización y de transformación, declinando correspondientemente la importación de bienes de consumo. Así se reconoció en la *Memoria* del Banco Central de Reserva en 1935. Desde este punto de vista, el comportamiento del comercio de importación puede verse en el cuadro que sigue.

CUADRO 3

VALOR DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICADAS SEGÚN SU FINALIDAD,
1929 - 1935
(en millones de soles)

Años	Consumo	%	Transformación	%	Capitalización	%	Total
1929	97.583,550	51.4	26.362,380	13.8	66.006,530	34.8	189.852,460
1930	71.683,056	51.1	17.176,872	12.2	51.401,319	36.7	140.261,247
1931	48.985,831	47.8	22.819,102	22.2	30.673,647	30.0	102.478,580
1932	40.813,500	53.6	16.708,091	22.0	18.567,336	24.4	76.088,927
1933	53.316,497	49.6	22.664,679	21.1	31.455,634	29.3	107.436,810
1934	68.689,931	40.1	28.304,798	16.5	74.257,823	43.4	171.252,552
1935	74.240,509	41.0	28.500,268	15.7	78.324,746	43.3	181.065,523

FUENTE: Extracto estadístico del Perú, Ministerio de Hacienda. Lima, 1939.

Mientras que, por lo tanto, el comercio de exportación del Perú no se había modificado en forma alguna al recuperarse después del periodo más intenso de la crisis, el comercio de importación emergía con una tendencia de alteración en su composición entre los principales tipos de bienes, paralelamente a la expansión, pequeña y lenta pero no menos real, de la producción industrial interna.

3. *La devaluación monetaria, la quiebra bancaria y la descapitalización del país*

La caída de los precios de los principales productos peruanos de exportación produjo en febrero de 1930 la decisión del gobierno de Leguía de modificar el signo monetario, sustituyendo la libra peruana (equivalente a 10 soles oro) por el sol de oro, para estabilizar el precio de la moneda peruana ya en declinación a partir de comienzos de ese mismo año. Pero la estabilización no se produjo, pues inmediatamente la moneda comenzó a cotizarse en relación con la libra esterlina con un 80% de desvalorización y con relación al dólar bajó de 40 centavos a 36 centavos de dólar. A partir de ese momento, el valor de la moneda fue decayendo ininterrumpidamente, y a fines de 1930 se cotizaba en 20 centavos de dólar.

A fines de ese año, el presidente del Banco de Reserva propuso la contratación de la Misión Kemmerer, que ya había estado actuando en varios otros países de América Latina, y en efecto, la Misión llegó al Perú poco después, y sus tareas se prolongaron hasta el mes de abril de 1931. La Misión Kemmerer recomendó una nueva desvalorización monetaria, que se produjo por un decreto-ley de la Junta Nacional de Gobierno, fijando el precio del sol en 28 centavos de dólar, lo que equivalía a una depreciación del orden del 30% respecto de la que se fijó en 1930. En ese mismo decreto-ley se restablecía el patrón oro, abandonado en el Perú desde 1914 y que sería vuelto a abandonar en el año siguiente.

Como consecuencia del abandono del patrón-oro en 1932 se acentuó la inestabilidad de la moneda, que a partir de entonces fue perdiendo su valor hasta llegar a 16 centavos de dólar a fines de 1933; no comenzaría a recuperarse sino a partir de entonces, alcanzando una relativa estabilidad en 1934.¹³

La cantidad de dinero circulante, tanto entre el público como en

¹³ Rómulo Ferrero, "La historia monetaria del Perú en el presente siglo." En: *Visión del Perú en el siglo XX*, de José Pareja Paz Soldán (ed.), Lima, 1962, pp. 123-145.

los fondos bancarios, se redujo apreciablemente. En el sector bancario, la cantidad de dinero líquido en 1929 ascendía a más de 25 millones de soles, y en 1930 se redujo a poco más de 18 millones de soles, continuando la declinación en los años siguientes (poco más de 8 millones en 1931-1932), hasta 1933 en que las cifras comenzaron a subir lentamente.¹⁴

Las dificultades financieras de los bancos se hicieron agudas ya a partir de 1930, tal como puede observarse en el cuadro siguiente.

CUADRO 4

CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES DE LOS BANCOS 1929 - 1934

Años	Número de bancos	Capital y reservas	Utilidades
1929	13.	67.942,530	6.032,220
1930	12	56.955,963	4.159,928
1931	10	39.764,244	2.149,797
1932	9	38.863,241	1.496,081
1933	9	39.163,783	2.207,759
1934	9	40.120,666	2.451,226

FUENTE: Extracto estadístico del Perú. Ministerio de Hacienda, 1939.

Esas dificultades originaron la quiebra de algunas instituciones bancarias, tal como puede verificarse en el cuadro; en octubre de 1930 se produjo la del Banco de Perú y Londres, el más importante de los bancos existentes en el Perú hasta entonces, y esta quiebra trajo consigo la paralización de gran parte de la actividad agrícola, a la que estaba principalmente ligado, así como la del comercio de importación. La agricultura destinada al mercado interno recibió en mayor medida el impacto, puesto que no pudo beneficiarse con el mantenimiento del mercado internacional, como en el caso de la agricultura de exportación, la que, sin embargo, fue también duramente afectada. No obstante, en este último caso, aparte del mantenimiento relativo de su mercado externo, la baja de la moneda le proporcionó un importante alivio que, en cambio, reforzó las dificultades de la agricultura para el mercado interno.

Frente a estas circunstancias, La Junta Nacional de Gobierno aceptó en 1931 las recomendaciones de la Misión Kemmerer acerca de la nueva legislación bancaria, y en mayo de ese año se promulgó la primera ley de bancos del país. Como parte de ella se creó el Banco

¹⁴ Ministerio de Hacienda. *Extracto estadístico del Perú*, Lima, 1939, p. 132 y cuadro 132.

Central de Reserva, en sustitución del Banco de Reserva establecido en 1922, y se restringieron fuertemente los créditos, afectando el movimiento comercial interno y la actividad agrícola ligada a éste. El Banco Central de Reserva, formado por capitales privados y fiscales, con predominio de los primeros, estaba destinado a ejercer funciones de control de la moneda y de las emisiones monetarias, unificando el sistema monetario y el bancario sin que, sin embargo, se acogiera la unidad hacendariofinanciera recomendada enfáticamente por la Misión Kemmerer.¹⁵

La política de restricción crediticia, la disminución del monto de las obligaciones a plazos y el correlativo aumento de las obligaciones inmediatas permitieron a los bancos mantener sus beneficios dentro del mercado de su reducción general; pero, naturalmente, la solidez relativa del capital financiero sólo pudo lograrse a costa de la paralización del resto de la actividad económica no inmediatamente ligada a la exportación.

La agricultura de exportación se benefició, además, con la creación en agosto de 1931, del Banco Agrícola, a petición de la Sociedad Nacional Agraria dominada por los exportadores. Éste se formó sobre la base de la transferencia de parte de los capitales fiscales en el Banco Central de Reserva, iniciando sus actividades en ese mismo año y en casi exclusivo beneficio de los mayores terratenientes del país.¹⁶

Hacia el final del periodo de crisis, en enero de 1933, se creó también el Banco Industrial para fomentar la producción nacional de artículos de importación, fuesen éstos agrícolas, ganaderos o manufactureros. El capital originario de este nuevo banco consistió en una suma de 20 millones de soles del fisco, para lo cual las mercaderías que ingresaban al país se gravaron en un 6% *ad valorem*, por concepto de derecho consular. Sin embargo, el banco no entró en funciones sino en noviembre de 1936, y su actividad posterior de fomento de la industria fabril del Perú fue realmente muy débil.

Los problemas financieros del Perú durante la crisis, sin embargo,

¹⁵ Carlos Camprubí Alcázar. "La depresión económica peruana", en *Revista Histórica*, t. xxvii, 1964.

¹⁶ Según los datos de las *Memorias del Banco Agrícola* desde 1932 a 1946, resulta que los pequeños agricultores obtenían sólo un porcentaje despreciable de los créditos del banco. En 1932-33, sobre un total de más de 11 millones prestados, sólo 5 pequeños agricultores obtuvieron 7 000 soles; en 1934-35, sobre un total de casi 47 millones de soles otorgados a grandes terratenientes, los otorgados a los pequeños agricultores sólo sumaban poco más de 149 mil soles divididos entre 1932 agricultores. Esta desventaja se acentuó en los años siguientes (*Memorias del Banco Agrícola*, 1932-46, Lima, 1946).

no se redujeron a estos fenómenos. A diferencia de otros países de América Latina, en que los recursos de capital en manos de nacionales permitieron el fortalecimiento de la actividad industrial —que fue sin duda el más importante fenómeno económico latinoamericano originado en la crisis— en el Perú los capitalistas nacionales se dedicaron durante este periodo a la remisión de sus capitales al exterior, temerosos de los efectos de la inestabilidad monetaria y ajenos por completo a la capacidad empresarial demostrada por sus congéneres de Brasil, Argentina, Uruguay o Chile. No se dispone de la información precisa para conocer el monto del capital remitido al extranjero, pero se sabe que ya a comienzos de 1931 los giros convertidos en oro para su remisión al exterior sobrepasaban los 20 millones de soles oro, cifra cuya magnitud en ese momento representaba una enorme descapitalización de la economía peruana, sumada a la que se producía por la vía de las remesas al exterior de las empresas extranjeras que operaban en el país. Es probable que la medida de in conversión de los billetes circulantes y de los giros-oro haya permitido reducir las remisiones de capitales peruanos al extranjero; pero es poco probable, dado el control de las instituciones bancarias y administrativas del país por los grupos burgueses terratenientes durante esos años, que esa tendencia haya sido realmente reducida sino cuando la crisis fue pasando. Así, en diciembre de 1934, en la *Memoria* del Banco Central de Reserva, se hacía constar que en ese año se observaba una creciente repatriación de capitales nacionales, junto con la afluencia de capitales extranjeros.¹⁷

4. *La desocupación y la reducción de los salarios*

La paralización de las obras públicas, que en el régimen leguista habían tomado un gran impulso, la reducción de la actividad agrícola en todos sus sectores y, sobre todo, en el que correspondía al mercado urbano interno, la drástica reducción de la actividad minera y, en general, las dificultades económicas de los sectores urbanos de actividad económica durante 1930-1933 generaron una desocupación en gran escala, especialmente en las áreas costeras y dentro de ellas en sus principales centros urbanos.

No se dispone de información adecuada para estimar el total de la población lanzada a la desocupación en todo el país, y las cifras que existen son indudablemente poco fiables, dada la práctica inexis-

¹⁷ *Memoria del Banco Central de Reserva*, Lima 1934.

tencia de estadísticas apropiadas en ese periodo; con todo, pueden servir para dar una idea aproximada de la magnitud del fenómeno.

Solamente en Lima, el número de desocupados inscritos en la Junta Departamental pro desocupados, fue de 13 202 en 1931, de 19 053 en 1932, y de 20 619 en 1933. Se desconocen cifras para las demás ciudades, aunque el volumen de la desocupación urbana debió ser tan considerable como para originar la reocupación de la clase dominante, consignada en cuanto documento oficial se encuentra sobre aquel periodo, y como para obligar a los terratenientes y comerciantes que se reunieron en la Conferencia Económica del Sur del Perú, en febrero de 1932, a proponer la división de las tierras del Estado entre los desocupados.¹⁸

Se puede pensar que en la agricultura de exportación, que había retenido gran parte de su mercado, el desempleo no llegó a ser de muy gran volumen, aunque no dejó de ser importante, a juzgar por las cifras que se conocen acerca de lo ocurrido en la producción azucarera (no se dispone de datos sobre las demás actividades del sector). En cambio, en la producción minera, el desempleo alcanzó en el peor momento de la crisis hasta casi al 60% de la población trabajadora de 1929. Véase el cuadro que sigue.

CUADRO 5

POBLACIÓN OCUPADA EN EL AZÚCAR Y LA MINERÍA 1929 - 1934

Años	Número de trabajadores	Salario por obrero	Número de trabajadores	Total de salarios
1929	30 156	2.41 soles	32 321	31.730,389
1930	(a)	(a)	28 137	29.867,264
1931	24 646	2.21	18 142	20.091,278
1932	24 560	1.84	14 197	20.884,854
1933	28 254	2.02	15 551	21.937,114
1934	27 547	2.14	17 734	21.135,543

FUENTE: Extracto estadístico. Ministerio de Hacienda. Lima, 1939.

(a) No existe información.

De modo que para la población trabajadora del país no solamente sobrevino la desocupación sino también la reducción de los salarios, tal como puede observarse en el cuadro. Si se recuerda que esos

¹⁸ Conclusiones aprobadas por la Conferencia Económica del Sur sobre el problema de la desocupación (*Conferencia Económica del Sur*, Arequipa, 1932, pp. 105 y ss.). En esta conferencia, los agricultores y comerciantes del sur criticaron duramente al gobierno, denunciaron el carácter proimperialista de las medidas Kemmerer; véase pp. 33-44.

salarios nominales corespondían, además, al mismo periodo en que el valor de la moneda descendía apresuradamente, se puede comprender la profundidad de la catástrofe que recaía sobre los trabajadores, y explicar el descontento expresado en sus movilizaciones, sobre las cuales los sucesivos gobiernos hicieron recaer sucesivas masacres.

Para enfrentar la desocupación, junto con la represión violenta, el Estado dispuso que se creara en 1931 la Junta Departamental pro desocupados, que debía organizarse en cada departamento, y cuyas rentas debían provenir de una serie de nuevos impuestos que recaían sobre el comercio, de las utilidades de las empresas y de una estampilla de curso obligatorio en el correo nacional e internacional. A pesar de que esas contribuciones fueron creadas para durar solamente ese año, los empresarios se negaron a pagarlas, aduciendo sus propias dificultades, y las rentas que fueron recolectadas se distribuyeron mucho más en beneficio de los propios empresarios y sirvieron para el peculado de los caciques políticos de cada departamento.¹⁹

Como era normal, el peso de la crisis fue lanzado sobre los hombros de los trabajadores. Puede explicarse, así, la satisfacción con que en las *Memorias* de la Sociedad Nacional Agraria se da cuenta de que la disminución de los costos de producción permitió a los terratenientes exportadores amortiguar los efectos de la reducción de precios en el mercado internacional; la disminución de salarios posibilitada por la desocupación masiva fue obviamente el mecanismo principal para disminuir los costos de producción.

De algún modo, la reducción de los salarios pudo ser quizás compensada por una sostenida baja del costo de vida durante esos años; sin embargo, el precario beneficio que ese hecho podía generar para los trabajadores tenía que esfumarse, necesariamente, por los efectos de la desocupación y de la depreciación monetaria.

LA CRISIS POLÍTICA. REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN HASTA 1933

La crisis económica aceleró violentamente la cristalización de todas las contradicciones y conflictos que venían madurando en el seno de la sociedad peruana, y nunca como entonces el Perú estuvo al borde mismo de una revolución popular. Desorganizada políticamente la clase oligárquica, debilitada económicamente por los efectos

¹⁹ J. Basadre, *op. cit.*, t. XI, p. 91.

de la crisis, ausente la capacidad imperialista para intervenir en defensa de sus intereses, fraccionado el ejército por las ambiciones de caudillos momentáneos, los sectores populares parecieron, por un momento, tener la vía abierta hacia el poder. Sin embargo, la revolución fue derrotada, lo que descubrió la debilidad de las organizaciones políticas antioligárquicas, la ambivalencia ideologicopolítica del liderazgo de la más importante de ellas en ese momento, así como la tendencia a la pérdida de piso en la realidad peruana de la primera organización del socialismo peruano. A pesar de ello, revolución y contrarrevolución se enfrentaron por primera vez en la historia republicana del Perú: el fragor de esa contienda dominó el periodo. Sus consecuencias se prolongan aún, de muchas maneras, en el escenario actual.

1. *Las tensiones dentro de la burguesía oligárquica y dentro del ejército. La consolidación del ejército como instrumento político de la dominación oligárquica*

Al terminar el periodo de Leguía, los diversos grupos hegemónicos de la clase dominante se presentaban políticamente desorganizados y divididos en múltiples facciones. Las viejas élites habían sido desintegradas y su influencia había desaparecido casi completamente, y las que provenían de la descomposición del régimen leguista como consecuencia de la crisis y de las desavenencias surgidas con la reelección de Leguía en 1929, eran indudablemente las mejor colocadas para la conspiración política, a pesar de su falta de organicidad.

De ese modo, algunos de los hombres de mayor influencia en el círculo gobernante, como Foción Mariátegui, comenzaban a buscar la colaboración de algunos jefes militares para dar un golpe de Estado. Fracasado el primer intento del general Eulogio Castillo en Lima, usaron al teniente coronel Sánchez Cerro, y esta vez el intento tuvo pleno éxito.

El aura popular inicial que rodeó a Sánchez Cerro, además de los rasgos físicos de marcada raíz indígena del personaje, han permitido que muchos en el Perú crean hasta hoy, que la sublevación de Arequipa en 1930 fue un gesto autónomo de un sector militar que encabezaba Sánchez Cerro, como expresión de los intereses populares, pero que la habilidad oligárquica y la falta de toda ideología clara del jefe militar permitieron a aquélla ganar a éste y desnaturalizar el gesto.

Ciertamente, Sánchez Cerro por sus rasgos físicos de mestizo ain-

diado, pudo ser sin duda visto por muchos sectores populares, especialmente por los menos conscientes y menos politizados, como un hombre de los suyos en el poder y, por eso, como una garantía de que sus intereses serían defendidos. Sin embargo, ni Sánchez Cerro provenía del pueblo, ni su golpe de Estado fue un gesto autónomo. Provenía de una familia que sin ser terrateniente formaba parte, sin embargo, de los sectores medios directamente ligados a los intereses de la clase dominante. Su abuelo materno era abogado y notario de prestigio en la ciudad de Piura, en un periodo en que el prestigio de esas profesiones no podía ganarse sino en dependencia de los intereses terratenientes; su tío materno fue senador de la República en varios periodos, hombre de empresa, dueño de diarios en Trujillo y Piura, condiciones todas que, en el marco de la época, implicaban necesariamente la identificación con los intereses dominantes. Nada hay, pues, para sostener seriamente el origen popular del caudillo sublevado.

Todo ello, no obstante, no es lo fundamental para decidir si Sánchez Cerro encarnaba las aspiraciones populares, por vagas que ellas hubieran podido ser, en un gesto autónomo de insurrección contra la dominación oligárquica. El hecho es que la sublevación de Arequipa fue preparada y auspiciada por diversos sectores dominantes y, de modo inmediato, por un grupo descontento dentro del propio régimen leguista. No se podría explicar de otra manera por qué, a pesar de la probada participación de Sánchez Cerro en un intento sedicioso contra Leguía, Foción Mariátegui consiguiera que se le hiciera regresar al país para nombrarlo jefe del Batallón de Zapadores de la Guarnición de Arequipa, a fines de 1929, y se le ascendiera a teniente coronel a comienzos de 1930 en el mismo cargo, en una guarnición de la cual habían ya partido varios golpes de Estado exitosos en diversos momentos de la historia peruana. Pero, sobre todo, uno de los hombres más íntimamente ligados a Sánchez Cerro, el diputado Alfredo Herrera, afirmó en 1932 que su jefe participaba en actividades conspirativas en Lima en 1929, apenas regresado al Perú, en conexión con hombres representativos de los grupos hegemónicos de la clase dominante.²⁰ Es decir, fue un hombre escogido por algunos de los grupos dominantes, descontentos con el régimen de Leguía, por su probada y confesada ambición política y su popularidad en el ejército, derivada de su fama de

²⁰ Véanse los datos biográficos de Sánchez Cerro en Pedro Ugarteche, *Sánchez Cerro. Papeles y recuerdos de un presidente del Perú*, t. 1, Lima, 1969. Véase también de Carlos Quezada: *Sánchez Cerro y su tiempo*, Buenos Aires, 1947, pp. 2-4; sobre la declaración de Herrera, J. Basadre, *op. cit.*, t. xi, p. 16.

temeridad. Excepto la personal ambición, su gesto no tuvo, evidentemente, nada de autónomo. Por el contrario, la sublevación militar de Arequipa, hecha en connivencia con personajes e intelectuales cuya formación personal distaba mucho de una identificación con los intereses populares, muestra plenamente la socialización de los jefes militares al servicio político de los terratenientes comerciantes, y consolida el uso que la clase oligárquica había aprendido a hacer de las ambiciones personales de los principales jefes militares, lo que sería el principal mecanismo en adelante para enfrentar al ejército contra la movilización popular revolucionaria y reformista.

El Manifiesto de Arequipa, lanzado el día mismo de la sublevación, redactado por el abogado arequipeño José Luis Bustamante y Rivero, proclamaba en un lenguaje encendido la necesidad de volver el país a la moralidad administrativa y de terminar con el despotismo, pero excepto una breve referencia a la necesidad de estimular la actividad económica nacional para "sacudir el yugo del acreedor extranjero", no contenía ningún programa definido de acción política y de cambios en la estructura misma de la sociedad, mientras, por otra parte, declaraba al ejército como "la parte más fuerte de nuestras esperanzas" y que "ofender a él es atentar contra la nación".²¹ Su tono y sus afirmaciones expresaban principalmente el descontento de muchos sectores medios y oligárquicos contra la corrupción administrativa, contra la grosería de la deificación de Leguía y las vagas aspiraciones de modernización política, más bien que cambios efectivos que permitieran la viabilidad del proceso.

Sin embargo, ni el ejército ni la burguesía oligárquica emergían cohesionados políticamente, a pesar de que frente a la agitación social encabezada por el proletariado y frente a la agitación política encabezada por el APRA, todos coincidieran en la represión.

Por su lado, la burguesía oligárquica aparecía dividida en los grupos remanentes del régimen leguista, que se habían ido desarrollando como un sector burgués comercial urbano principalmente, en los grupos controladores de la producción agrícola exportadora de la costa central y norte, que habían sido despojados del control directo del Estado por el leguismo, y los grupos de terratenientes y comerciantes de la sierra y especialmente de la región sur del país.

A pesar de que, sin duda, en la gestación del golpe de Arequipa, hombres del régimen leguista habían tomado parte destacada, la

²¹ "Manifiesto de Arequipa". Reproducido en Pedro Ugarteche, *op. cit.*, pp. 113-117.

impopularidad del régimen y la oposición frente a él por parte de todos los grupos de la burguesía terrateniente comercial eran tan profundos que apenas establecida la Junta de Gobierno presidida por Sánchez Cerro, al finalizar agosto de 1930, su primer acto fue el establecimiento de un Tribunal de Sanción contra todos los que directamente habían sido beneficiados por el gobierno de Leguía. Esto es, la política del nuevo gobierno se dirigía a destruir a los nuevos grupos burgueses urbanos usufructuarios de las rentas públicas, y a través de ella los grupos terratenientes regresaban a una posición de poder y de control efectivo del Estado, bajo el amparo del gobierno militar.

Los grupos afectados por el Tribunal de Sanción no tuvieron la posibilidad de resistir de modo efectivo esa política, castigados como estaban por la bancarrota fiscal que los había dejado sin recursos desde mediados de 1929, porque muchos de esos grupos habían despilfarrado la fortuna tan fácilmente ganada y porque en el momento de perder el poder carecían de los recursos necesarios para enfrentarse al nuevo poder o de tentar a otros jefes militares para hacerlo. Sin embargo, parece probable que, por lo menos en dos casos, trataron de obtener el apoyo de sectores militares para derrocar a Sánchez Cerro; el 2 de febrero de 1931 se sublevó la guarnición del Callao al mando del general Pedro Pablo Martínez, ligado a los grupos leguístas, y el mismo mes se produjeron conatos de sublevación en Piura, Cuzco y Lambayeque, el último encabezado por el general Eulogio Castillo, el mismo que encabezó desde la Jefatura de la Casa Militar de Leguía el intento de golpe anterior al de Sánchez Cerro. Esos intentos fueron rápida y fácilmente reprimidos.

Sánchez Cerro fue convencido para convocar a elecciones de una Asamblea Constituyente y al mismo tiempo de presidente de la República, cargo para el cual era el lógico candidato. Este acto produjo una inmediata reacción tanto de los grupos civiles de la burguesía como de varios jefes militares que tenían sus propias ambiciones, o que estaban al servicio de una u otra facción de la clase dominante. Se sucedieron, en consecuencia, numerosos intentos de golpe militar, el principal de los cuales fue el de Arequipa, al mando de los jefes militares Carlos Beytía y Antonio Dianderas, en febrero de 1931, que resultó en la formación en esa ciudad de una Junta de Gobierno dividida en una parte civil y otra militar.

Esto es, al mismo tiempo que ocurrían las sublevaciones militares

en el norte del país, presuntamente en conexión con los grupos remanentes del régimen derrocado, en el sur ocurría lo mismo, en vinculación con los grupos terratenientes provincianos; al marchar contra los facciosos del norte, el ministro de Gobierno de Sánchez Cerro, el comandante Gustavo Jiménez, y la Marina peruana se levantaron proclamando su oposición a que se derramara más sangre en la develación de la sublevación. Todo ello obligó a Sánchez Cerro a dimitir el poder en manos de un terrateniente poderoso de la costa, Ricardo Leoncio Elías, presidente de la Corte Suprema, acompañado del jefe del Estado Mayor del Ejército, Ruiz Bravo y del jefe de la Marina, Alejandro Vincés. El caudillo triunfante del primer golpe de Estado exitoso contra Leguía había perdido rápidamente toda posibilidad de consolidarse en el poder, no obstante sus ambiciones; pero su dimisión y su posterior viaje a Europa le permitieron mantener su popularidad para las elecciones de ese mismo año.

Inmediatamente, el comandante Gustavo Jiménez, a quien se le suponían tendencias populistas y ambiciones personales de gobierno, mal servidas por un temperamento fogoso pero arbitrario, se sublevó al mando de la tropa con la que había tratado de sofocar la insurrección en el norte; depuso a Elías y decidió entrar en negociaciones con los insurrectos de Arequipa; como consecuencia, el jefe de la Junta Civil de Arequipa, el rico terrateniente don David Samanez Ocampo, viajó a Lima y recibió el mando del gobierno, formándose una Junta Nacional de Gobierno, que se instaló en marzo de 1931 con el propio Jiménez como ministro de Guerra.

Así, en el lapso de seis meses después de la caída de Leguía, habían ocurrido seis sublevaciones militares, el gobierno había pasado por cinco manos; el 23 de marzo, los clases y soldados del cuartel de Santa Catalina, en Lima, decidieron sublevarse al mando del sargento Víctor Huapaya, atacaron el Palacio de Gobierno, pero fueron finalmente derrotados ese mismo día. La particularidad de ese hecho es que por primera vez se produjo en las calles la confraternización de obreros y soldados insurrectos, bajo la dirección del Partido Comunista.²²

En torno de la Junta Nacional de Gobierno se cohesionó la mayor parte de los dirigentes civiles que representaban a la clase dominante, y eso produjo una breve estabilidad política que permitió al gobierno hacerse cargo de manera sistemática de los problemas originados por la crisis económica y por la agitación social y política popular.

Si bien durante los seis primeros meses después de la caída de

²² Ricardo Martínez de la Torre, *op. cit.*, t. 1, pp. 380-391.

Leguía, las pugnas entre los propios grupos oligárquicos y los sectores militares asociados a ellos habían generado la inestabilidad política, y sólo de modo precario los grupos hegemónicos terratenientes de la costa habían comenzado su reingreso al control del Estado, a partir de la Junta Nacional de Gobierno se hacía cada vez más definida la presencia preponderante de esos grupos en la dirección política del nuevo gobierno; ese proceso no haría sino consolidarse a partir de entonces. Notablemente, los grupos descontentos del leguismo habían permitido el éxito del golpe contra Leguía pero se demostraban incapaces de retener el poder, mientras que los grupos terratenientes de la costa, beneficiados por el relativo mantenimiento del mercado internacional de sus productos y de la baja de sus costos de producción por la depreciación monetaria y la baja de salarios, recuperaban rápidamente su capacidad política e ingresaban plenamente a dirigir la cosa pública en nombre de sus intereses. Las pugnas intraoligárquicas tocaban, así, a su fin, y aunque los grupos terratenientes y comerciantes del sur del país podían todavía expresar su descontento frente a las circunstancias, en la Conferencia Económica del Sur, en 1932, carecieron de toda capacidad para disputar el poder, o para compartirlo, castigados como estaban por los efectos ruinosos de la crisis económica sobre sus actividades. En adelante, los grupos terratenientes de la costa central y norte pudieron cohesionar al ejército en su torno y enfrentarse a la marea revolucionaria desatada a partir de las elecciones de 1931; así, orientaron la política económica exclusivamente en su propio beneficio.

En efecto, todas las medidas descritas anteriormente para enfrentar los efectos de la crisis económica fueron planeadas enteramente en provecho de los intereses de los terratenientes de la costa central y norte con el concurso de la Misión Kemmerer, y en provecho de la dominación imperialista del capitalismo norteamericano. La devaluación de la moneda, la legislación tributaria que exoneraba de impuestos a la producción agrícola de exportación, fueron explícitamente reconocidas como hechas en servicio de los intereses terratenientes en la *Memoria* de la Sociedad Nacional Agraria, correspondiente a 1934-35, así como en la *Memoria* del Banco Central de Reserva de 1934. Era, por cierto, normal que así ocurriera, pues todos los principales cargos en la dirección de la política económica del país desde 1930 estuvieron en manos de los más típicos representantes de los intereses oligárquicos y del imperialismo, como Pedro Beltrán, Manuel Olaechea, Gustavo de la Jara, miembros del directorio del Banco Central de Reserva.

2. Las tendencias revolucionarias

La movilización política antioligárquica de los sectores populares se canalizó hacia el final del oncenio leguista en dos cauces ideológicos y orgánicos. Por un lado, la corriente de nacionalismo-populismo, encabezada por los mismos dirigentes de las luchas por la reforma universitaria y cuyo máximo líder era Víctor Raúl Haya de la Torre. Por el otro, el socialismo revolucionario, cuyo máximo representante era José Carlos Mariátegui.

No obstante sus múltiples coincidencias durante la primera fase de la definición política de la movilización popular, estas corrientes fueron profundizando sus divergencias a través de una acre polémica, en torno del carácter de clase de la revolución peruana, de las formas más adecuadas de organización política y de las vías concretas de la lucha por el poder. Haya de la Torre, desde el exilio, preconizaba la necesidad de dar forma de partido al Frente Antiimperialista en que se cobijaban todas las tendencias revolucionarias del Perú, mientras Mariátegui sostenía la inconveniencia de ese paso, la necesidad de mantener el carácter de "frente" que permitiera la acción mancomunada de socialistas y nacionalistas antioligárquicos.

Haya de la Torre, como los demás miembros de su tendencia, bajo la influencia de la Revolución soviética difundía una literatura fuertemente impregnada de la influencia marxista, reconociendo la realidad de la lucha de clases y la necesidad de una revolución al mismo tiempo antioligárquica y antiimperialista. Sin embargo, después de su visita a la Rusia soviética y su estadía en Europa, desarrolló una posición política esencialmente nacionalistapopulista, en que se combinaban de modo incongruente reclamos de antiimperialismo anticapitalista con el reconocimiento de la necesidad del desarrollo capitalista de la sociedad peruana, que él consideraba como predominantemente feudal. Más tarde, en el principal texto político en que se exponían los fundamentos de su ideología política, al propio tiempo que sostenía que "somos antiimperialistas, porque somos anticapitalistas", sostenía también que, inversamente a como ocurría en Europa, el imperialismo era en América Latina la primera etapa del capitalismo y que, en consecuencia, su desarrollo en estos países era todavía una fase histórica indispensable que no se podía saltar.²³ Al margen

²³Ya en 1927, en el Congreso Antiimperialista de Bruselas, Haya de la Torre había sostenido estas tesis, si bien sólo en *El antiimperialismo y el APRA* (Santiago de Chile 2ª ed., 1936), escrito en 1928, las formularía con claridad y rotundidad. Véase especialmente, pp. 20-23 y 145-159.

del radicalismo y de la rotundidad del lenguaje, de este núcleo contradictorio de ideas partía una tendencia ideológica que, en el fondo, mostraba toda la ambivalencia de las expectativas de los sectores medios emergentes que buscaban la modernización de la sociedad peruana a través de la cancelación del estilo de dominación oligárquica; pero que se detenían en el umbral mismo en que la dominación burguesa como tal —oligárquica o no— requería ser puesta en cuestión. Las peculiares condiciones de la sociedad peruana de ese momento obligaban a una fuerte impregnación de esa tendencia de las reivindicaciones propias de los trabajadores obreros y campesinos; pero esas impregnaciones se subordinaban, necesariamente, a los intereses de una burguesía moderna expresándose en las expectativas de los sectores medios. Desde este punto de vista, el ejemplo de la Revolución mexicana servía a esta corriente de nacionalismopopulismo como el modelo principal de referencia. Era, pues, parte de la lógica profunda de este movimiento la tendencia a combinar, en el programa y en la estructura orgánica de un solo partido, los a largo plazo contradictorios intereses de los sectores medios modernizantes y del naciente proletariado urbano y rural, que la lucha contra el imperialismo y la dominación oligárquica hacían converger en la coyuntura bajo el liderazgo de los primeros.

Mariátegui y sus seguidores, por su parte, preconizaban la necesidad de una política antiimperialista en que todos los sectores de intereses opuestos al imperialismo convergirían en un frente común; pero dentro del cual la posición dirigente correspondiera a los intereses del naciente proletariado, como garantía de que la lucha contra el imperialismo y la oligarquía no se detendría en la modernización de la sociedad bajo un régimen de dominación burguesa moderna, de la misma manera que en México o en la China del Kuo Ming Tang de ese periodo. Para eso, era indispensable una completa definición ideológica revolucionaria que asegurara una lucha concreta sobre vías populistas revolucionarias para la captura del poder, dada la debilidad del naciente proletariado como clase en el Perú de ese momento, pero bajo la más clara conciencia del carácter final de clase, de la naturaleza socialista de la revolución peruana.²⁴ Sin embargo, ya en 1929 la hegemonía soviética sobre la conducta del socialismo peruano comenzaba a establecerse, y ese proceso correspondía, al mismo tiempo, al rechazo de las principales tesis de

²⁴ Sobre las principales ideas de Mariátegui acerca de estas cuestiones, véanse los artículos compilados en *Ideología y Política*, Biblioteca Amanta, 1969, Lima; sobre todo, "Punto de vista Antiimperialista", *op. cit.*, pp. 87-95.

Mariátegui acerca de las características propias que debía asumir la lucha revolucionaria en el Perú y en América Latina, tanto en la Conferencia Sindical de Montevideo como en la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina, en Buenos Aires, ocasiones en las cuales Mariátegui fue ásperamente criticado y acusado de populismo y romanticismo pequeñoburgués, según el estilo consagrado. Correlativamente se imponía sobre el naciente socialismo peruano una política de total rechazo de toda acción conjunta con el APRA, que acababa de ser fundada en México por Haya de la Torre.

Infortunadamente para el socialismo peruano y latinoamericano, Mariátegui era un hombre corroído ya por una enfermedad grave, que ocasionaría su muerte muy poco tiempo después, el 16 de abril de 1930; es decir, en el preciso momento en que su clarividencia y su genial comprensión de las peculiaridades que la situación histórica peruana imponía a la lucha revolucionaria eran más necesarias. Inmediatamente el Partido Socialista fundado por él se transformó en Partido Comunista y se afilió a la Tercera Internacional dominada por el estalinismo; hombres enteramente sujetos a la hegemonía soviética, que en ese momento llegaban del exterior, tomaron el control de la organización. Eudocio Ravines fue el principal de los líderes que heredaron la organización de Mariátegui. Con eso se inicia el proceso de estancamiento del primer movimiento socialista peruano, su pérdida de comprensión adecuada de la realidad nacional en aras de su sujeción a las necesidades de la política internacional de la Unión Soviética; sin duda ello contribuyó en muy alto grado al éxito fácil del APRA y de Haya de la Torre para canalizar por su tendencia el grueso de la movilización popular antioligárquica del Perú.

En 1931 Haya de la Torre retornó de su exilio, precedido de un amplio renombre, habiendo acopiado las fórmulas organizativas de los principales movimientos políticos europeos y rodeado de una falange de líderes de gran talento de organización y de agitación política. En breve tiempo estuvo a la cabeza de una vasta movilización popular y de una organización partidaria de gran cohesión y de gran disciplina; recorrió el país en una campaña electoral sin precedentes en la historia peruana, y compitió en las elecciones de 1931 contra Sánchez Cerro.

Entretanto, el Partido Comunista había heredado la Confederación General de Trabajadores del Perú, fundada por Mariátegui, y fue capaz de movilizar al proletariado urbano y minero en la lucha por las reivindicaciones salariales, contra la desocupación y el costo

de la vida. El proletariado se enfrentó a la dictadura militar y a la Junta de Gobierno en la arena sindical revolucionaria; pero bajo la conducción de los nuevos líderes del Partido Comunista, careció en ese momento de una dirección política capaz de elaborar un programa de lucha concreto y adecuado por el poder en conjunción con las fuerzas antioligárquicas que el APRA movilizaba vastamente, para tentar la dirección de las luchas revolucionarias en el momento mismo en que se desarrollaban en toda su amplitud. Un conjunto de *slogans* acerca de la necesidad de la autonomía política de *quechuas* y *aymaras*, de la necesidad de entregar el poder al proletariado y a los soviets de obreros y de campesinos, sirvió a Eudocio Ravines y sus seguidores para diferenciar su labor política frente al APRA y para impedir, en la práctica, toda posibilidad del socialismo de un frente común con el movimiento aprista para derrotar a la clase oligárquica, en cuyo proceso pudo haber alcanzado una posición de poder capaz de profundizar la revolución y de impedir su conversión en otra versión de la Revolución mexicana. A pesar de ello, el proletariado peruano se enfrentó permanentemente a la dictadura de esos años, en demanda de sus reivindicaciones sindicales. No mucho tiempo más tarde, aun éstas se canalizarían bajo el APRA y las principales organizaciones sindicales del proletariado pasarían a ser dominadas por ésta.

3. *La agitación sindical del proletariado urbanominero. La agitación político electoral del APRA. La represión gubernamental*

Inmediatamente derrocado Leguía, creció la agitación del proletariado en defensa de la estabilidad en el empleo, del mantenimiento de sus salarios y de sus niveles de vida. La represión gubernamental cayó sobre los trabajadores con gran violencia. En septiembre de 1930 un funcionario norteamericano de la empresa minera de Cerro de Pasco mató a un dirigente obrero en las discusiones sobre el peligro de reclamos de los obreros mineros que pedían alza de salarios y diversos beneficios. La protesta masiva de los obreros fue contestada por las tropas con la masacre de seis obreros y decenas de heridos. Simultáneamente, la Confederación General de Trabajadores, dirigida por el Partido Comunista, organizó un congreso de los trabajadores mineros que se reunió ese mismo mes, con la participación de Eudocio Ravines y de Esteban Pavletich, dirigentes recientemente vueltos al país, en conexión con la Tercera Internacional. Los miembros del congreso minero fueron apresados, y ante la amenaza de un

paro general de los trabajadores del país, el gobierno de Sánchez Cerro los puso en libertad. Los obreros regresaron a pie desde Lima hasta sus centros de trabajo en la Sierra Central, y en el trayecto las tropas masacraron a docenas de ellos en las localidades de Oroya y Mal Paso. Como respuesta, el pueblo de esos lugares y de todos los centros mineros, así como delegaciones desde Lima, organizaron imponentes manifestaciones de protesta bajo la dirección de la CGTP y del PCP.²⁵

En enero del año siguiente, los campesinos del Departamento de Ayacucho fueron masacrados por el gobierno, sus dirigentes sometidos a prisión y a largo juicio que fue suspendido en 1933.

La agitación obrera comenzaba a extenderse por todas las ciudades y centros de trabajo, en las minas, en las haciendas e ingenios de la costa; la Junta Nacional de Gobierno, presidida por el terrateniente David Samanez Ocampo, se enfrentó a esa movilización sindical revolucionaria de los trabajadores, con la aplicación, primero, del estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales, después del descubrimiento de la organización de una huelga general revolucionaria que se gestaba en Lima y el Callao en junio de 1931. Posteriormente, la huelga de los choferes del servicio colectivo en Lima contra el monopolio de la Metropolitan Co. del transporte urbano, la huelga general de Arequipa y las huelgas en Chiclayo, Cañete, Chancay, Canta y otros lugares de la costa, así como las protestas indígenas en Cuzco y Lauramarca, fueron objeto de represión violenta en que decenas de trabajadores fueron muertos y numerosos de sus dirigentes sometidos a prisiones y torturas. El PCP fue perseguido y clandestinizado.

La represión callejera y las sucesivas masacres y prisiones de trabajadores fueron el inicio del brutal baño de sangre que la oligarquía y el ejército a su servicio desatarían en el país poco después; esta sangría de la vanguardia política del proletariado peruano, alistado bajo las banderas del socialismo revolucionario, permitió sin duda el debilitamiento de su presencia política en el curso del proceso revolucionario que se desarrollaría más adelante.

En el mismo periodo, durante 1931, se desarrollaba también una intensa campaña electoral para elegir al futuro presidente de la República y a los miembros de la Asamblea Constituyente. Los principales candidatos que se enfrentaban eran el propio Sánchez Cerro

²⁵ Una buena documentación de las luchas obreras en este periodo y de la dirección asumida por el PCP, puede encontrarse en Ricardo Martínez de la Torre, *op. cit.*, t. III.

y Haya de la Torre, junto con otras figuras de menor importancia, todas ellas vinculadas a diversos grupos de la burguesía terrateniente, directa o indirectamente.

La Junta Nacional de Gobierno había tratado de impedir el regreso de Haya de la Torre y de los líderes apristas en el exilio, apresando a algunos de ellos a su regreso y reenviándolos al exilio, así como había también tratado de obstaculizar el regreso de Sánchez Cerro. Ambos regresaron finalmente al país y se enfrentaron en una campaña en que, por vez primera, el pueblo organizado tenía la oportunidad de hacerse presente con sus propias banderas. El Partido Comunista, ilegalizado y perseguido, decidió no participar en las elecciones y criticó por igual todas las candidaturas, incluyendo la de Haya de la Torre, por cuya tendencia, sin embargo, se orientaba la parte más politizada y combativa de los sectores populares que participaban en la campaña electoral.

Finalizados los escrutinios, en octubre de 1931, el Jurado Electoral proclamó el triunfo de Sánchez Cerro por 152 062 votos contra 106 007 de Haya de la Torre, de un total de 323 632 electores efectivos. Un apreciable porcentaje (17%) se abstuvo de votar. El APRA desconoció el valor de esas cifras y proclamó que se había cometido fraude electoral. Dadas las circunstancias, es casi indudable que así sucediera, aunque no existe manera de verificarlo hasta el momento. Los apristas solicitaron la nulidad de las elecciones, pero todos los grupos se agrupaban ahora en torno de Sánchez Cerro, y los candidatos menores no se demoraron en hacer público su respaldo a él.

4. *La guerra civil. Ascenso y derrota de la revolución popular*

La protesta popular por los resultados de las elecciones se expresó en manifestaciones callejeras que fueron prontamente reprimidas por el ejército; pero la tensión política fue en aumento mientras el clima de violencia crecía. El nuevo gobierno de Sánchez Cerro preparaba la represión de los líderes apristas y en diciembre de 1931 se produjo un intento de asesinato de Haya de la Torre y la muerte de varios de sus compañeros. Como consecuencia, Haya de la Torre se clandestinizó.

En febrero de 1932, el gobierno hizo aprobar en la Asamblea Constituyente, pese a la enconada oposición de la Célula Parlamentaria Aprista y de otros, una Ley de Emergencia destinada a reprimir las movilizaciones y las organizaciones políticas populares; poco después, el combativo grupo aprista fue expulsado de la Constituyente.

La Ley de Emergencia desató una ola de protestas populares que encabezaron los obreros de la CGTP y la Federación Universitaria de San Marcos. Haya de la Torre difundió un extenso manifiesto en que explicaba los postulados de su partido, su programa de acción gubernamental, y protestaba contra el despotismo que se instalaba en el país. El 6 de marzo de ese mismo año, el joven aprista José Melgar intentó dar muerte a Sánchez Cerro a la salida de la Iglesia de Miraflores, y como represalia el gobierno condenó a muerte a Melgar y a otros dirigentes apristas prisioneros, por una corte marcial, si bien la pena fue conmutada en el mes siguiente por la de internamiento, bajo la presión de una intensa campaña pública en favor de los prisioneros.

El atentado de Miraflores contra Sánchez Cerro agudizó la persecución de los dirigentes y militantes apristas en todo el país. El 6 de mayo fue hecho prisionero el propio Haya de la Torre en una casa de Miraflores y sometido a juicio por sus ideas políticas, lo que motivó una amplia e intensa movilización de la opinión democrática internacional en su favor, en que participaron ilustres figuras de intelectuales y escritores de todo el mundo.²⁶

Entretanto, la marinería de los barcos Gray y Bolognesi se sublevó contra el gobierno. Sofocado el motín, una corte marcial los juzgó pasando por encima de todas las formalidades legales, decretó la condena a muerte de ocho de los marineros, que fueron prontamente fusilados en su prisión de la Isla de San Lorenzo, conocida como El Frontón, ante la indignación popular. Simultáneamente, el gobierno decretó la clausura de la Universidad de San Marcos, donde el estudiantado había sido en buena parte ganado a la causa aprista, había impuesto el primer ensayo concreto de reforma universitaria y comenzaba a convertirse en lo que sería, en adelante, el grupo más militante del aprismo, hasta 1956.

En esas circunstancias, ilegalizado y perseguido, desaforados sus representantes de la Constituyente, prisionero su jefe, víctima de propaganda adversa y calumniosa en todos los órganos de prensa, el APRA comenzó a preparar la insurrección armada contra Sánchez Cerro. Se ha afirmado que ya desde diciembre de 1931 Haya preparaba la insurrección en Trujillo, en conexión con ciertos jefes militares y con un importante trabajo de penetración en la tropa de la guarnición de esa ciudad.²⁷ Parece, sin embargo, probable que el

²⁶ La documentación de este proceso, consta en *Proceso Haya de la Torre* (publicaciones del Partido Aprista Peruano, Guayaquil 1933).

²⁷ Víctor Villanueva. *El militarismo en el Perú*, Lima 1962, p. 75. Villanueva, fue expulsado del ejército con el grado de mayor por su filiación aprista, y estuvo

liderazgo aprista y el propio Haya de la Torre carecieran en ese momento de una posición definida y coherente frente al problema de la lucha por el poder y, en particular, frente al de la insurrección armada; no habría existido, pues, una decisión coherente y explícita de llevarla a cabo. Sin embargo, al mismo tiempo se hacían contactos con jefes militares y se dejaba entender dentro de la militancia aprista que la revolución armada era necesaria. Parece más probable, en consecuencia, que fuera un grupo de dirigentes regionales los que entonces, como después en 1948, decidieron por cuenta propia la organización y la realización de la insurrección. No podría entenderse de otro modo el que en un partido de rigurosa organización y de cohesiva disciplina, la insurrección no hubiera sido coordinadamente organizada en todos los centros en que el partido disponía de recursos y de militantes para llevarla a cabo y, sobre todo, el hecho de que en el momento mismo de la insurrección popular en Trujillo, el máximo dirigente regional, Agustín Haya de la Torre, declarara que no estaba enterado previamente de lo que iba a ocurrir.²⁸ La experiencia aprista se repetiría persistentemente entre la violencia y el acomodo electoral, entre el trabajo en las masas populares y los arreglos por encima de ellas, todo lo cual forma parte del propio corazón incongruente de movimientos populistas, y que en el caso aprista se fortalecía por las características de la personalidad de su jefe.

De todos modos, el 7 de julio de 1932, las masas populares apristas formadas por trabajadores asalariados de las haciendas cercanas a Trujillo, por los estudiantes del Colegio Nacional de la ciudad y por militantes urbanos de sectores medios, asaltaron el cuartel O'Donovan de la ciudad de Trujillo, dominaron a sus defensores y tomaron el control de la ciudad; era el primer intento organizado de lucha por el poder de los trabajadores peruanos. El jefe de la insurrección, Manuel Barreto, apodado El Búfalo, murió en la acción.²⁹

El estallido insurreccional popular de Trujillo no fue seguido inmediatamente por ningún acto equivalente en otra parte, y en la capital el gesto no encontró el inmediato eco necesario en el proletariado y los militantes de las dos principales corrientes revolucionarias íntimamente ligado a la acción conspirativa del APRA y a su penetración en el ejército.

²⁸ Jorge Basadre, *op. cit.*, t. XI, p. 272.

²⁹ Recientemente, la hija de Barreto, Irma Barreto Vásquez, publicó una carta (*Revista Ahora*, núm. 26, mayo 1969, p. 30), acusando a los líderes actuales del APRA de calumniar la memoria de su padre y cita una declaración de Andrés Townsend Ezcurra, líder aprista en el Parlamento, en que se afirma que Barreto llevó a cabo la insurrección sin conocimiento del comando nacional del APRA.

rias. Visiblemente, el movimiento no estaba organizado y planeado previamente a escala nacional. Por otra parte, los jefes de la insurrección no hicieron tampoco nada para ampliar la base del movimiento por medidas de reforma agraria en la zona controlada u otras equivalentes.

Por una acción combinada entre la aviación y las tropas de infantería, el gobierno sitió la ciudad, obligó a la fuga de los principales líderes y tomó por asalto la ciudad. Tomando como pretexto el fusilamiento y presunta mutilación de los jefes del cuartel O'Donovan después de su rendición, el gobierno y el ejército tomaron contra la población popular de Trujillo la más bestial represalia. En el baño de sangre que sucedió a la derrota de la insurrección popular, murieron por igual mujeres y varones, jóvenes, ancianos y niños, en una cacería sistemática casa por casa, aparte de los propios insurrectos en armas que fueron sometidos a fusilamiento inmediato en las ruinas prehispánicas de Chan Chan. Los apristas calcularon en 4 000 los muertos populares. El ejército y la policía sufrieron 34 bajas en la madrugada del 10 de julio, cuando Agustín Haya de la Torre, el capitán Rodríguez Manfaut y Víctor Silva Solís, que ejercían el mando político de la ciudad, se habían fugado y la ciudad quedó en poder del pueblo, rodeado del ejército.³⁰

Las Cortes Marciales decretadas por el gobierno condenaron a muerte a 97 personas, de las cuales 44 fueron fusiladas de inmediato porque estaban prisioneras, mientras que las demás estaban fugitivas. Muchos otros fueron condenados a penas de penitenciaría.

En los días siguientes a la derrota de la insurrección popular de Trujillo y a la masacre del pueblo, conatos de insurrección popular que se registraron en Huaraz y Huari (Departamento de Ancash) fueron fácilmente dominados y sus jefes fusilados inmediatamente. El primer intento organizado de lucha por el poder popular en el Perú había terminado. Junto a los muertos de Trujillo y Huaraz, las cárceles estaban llenas de presos apristas, torturados y maltratados permanentemente.

Las repercusiones de la revolución popular de Trujillo fueron sin duda muy intensas en la vida política posterior del país. El APRA ganó definitivamente el respaldo de las masas populares del país y se convirtió de hecho en el más caudaloso canal de movilización popular antioligárquico durante muchos años. Pero, por eso mismo, en adelante no sería ya posible para la burguesía oligárquica tener

³⁰ Una descripción minuciosa de la insurrección de Trujillo, es la recientemente publicada de J. Thorndike. *El año de la barbarie*, Lima 1969.

el control directo del poder político; el ejército se convirtió también definitivamente en el instrumento de intermediación para el control político de la burguesía oligárquica. Cuando las transformaciones moleculares de la sociedad peruana fueron empujando al APRA a sentirse cada vez más identificado con el orden de dominación burguesa, las masas populares agrupadas detrás del liderazgo aprista impedirían al ejército y a la burguesía perdonar totalmente a este partido, no obstante todas las obsecuencias de sus líderes, el primer gran susto de su historia.

La derrota de la insurrección popular marca el inicio del proceso de estabilización política del Perú bajo el control del ejército y en servicio de los intereses de la burguesía terrateniente-comercial del país y del imperialismo norteamericano. Los sucesos posteriores hasta 1933, no alterarían de modo importante la tendencia. En marzo de 1933, el comandante Gustavo Jiménez, ex ministro de Guerra de la Junta de Sánchez Cerro y de la Junta Nacional de Samanez Ocampo, se sublevó en Cajamarca, con un manifiesto en que declaraba su propósito de restituir la finalidad popular al golpe de Estado de 1930. Falto de apoyo dentro del ejército y en el pueblo, fue prontamente derrotado y muerto en acción, aunque la versión oficial fue que se suicidó después de su derrota. Una corte marcial condenó a muerte a los principales colaboradores de Jiménez y la sentencia se cumplió, otra vez, en el escenario infausto de Chan Chan. No está aún suficientemente establecido el significado de la actuación del comandante Jiménez en este intenso periodo. Parte de su conducta puede ser, en cierta forma, interpretada como una vaga tendencia populista, y su último gesto parece corroborar esta posibilidad. Ello implicaría que en el seno del ejército una fracción minoritaria correspondía, limitada e inconsistentemente, a las mismas tendencias que el APRA significaba en ese momento en el país. Sin duda, a eso se debió, además, el hecho de que en los años posteriores y, sobre todo, a partir de 1945, el APRA lograra tener una extendida influencia entre los oficiales jóvenes y entre las clases y soldados del ejército, que los insurrectos de 1948 trataron de emplear sin éxito.

El proceso de consolidación de la hegemonía oligárquica en el poder político, por mediación de las fuerzas armadas, fue acentuándose visiblemente. En abril de 1933 fue promulgada la Constitución que ha estado vigente desde entonces. A pesar de la derrota de la revolución popular, los congresales constituyentes se vieron precisados a incorporar a su texto, de manera reticente e incongruente, algunas de las aspiraciones por las cuales se movilizara el pueblo,

mientras por otra parte, ilegalizaba permanentemente a los partidos revolucionarios, por la inclusión del célebre artículo 53, que prohibía la existencia en el Perú de los partidos políticos internacionales. El APRA y el PCP caían bajo esa denominación.

El 30 de abril de 1933 Sánchez Cerro fue asesinado a la salida del Hipódromo de Santa Beatriz. De su muerte fue culpado Abelardo Mendoza Leyva, que había caído muerto en el tiroteo y de quien se presumió pertenecer al partido aprista. A la muerte de Sánchez Cerro, el Congreso Constituyente eligió al general Óscar R. Benavides como presidente provisional, y éste se mantuvo en el poder hasta 1939, por medio de la anulación de las elecciones que el candidato apoyado por el APRA ganó en 1936.

Entretanto, en el curso de 1933 la tendencia de recuperación del poder económico terrateniente era cada vez más firme. Al final de ese año, la Cámara de Comercio de Lima afirmó que la situación económica del país había sido satisfactoria en comparación con el cuadro del resto de la economía mundial. La restricción crediticia comenzaba a flexibilizarse, los precios del algodón comenzaban a subir en el mercado externo. El Banco Central de Reserva, en sus memorias del año siguiente, comprueba que en 1933 los capitales nacionales comenzaban a ser repatriados y que la afluencia de capital extranjero era creciente.⁸¹

La crisis económica tocaba a su fin, y la revolución había sido, por el momento, derrotada.

⁸¹ *Memoria del Banco Central de Reserva*, Lima 1934; *Memoria de la Cámara de Comercio de Lima*, 1933.

PAISES DEL CONO SUR



LA ARGENTINA EN LA DÉCADA DE LOS TREINTA

Rodolfo Puiggrós

Como *década infame* se conoce en la historia argentina desde que José Luis Torres así lo bautizó —el tiempo comprendido entre los golpes militares del 6 de septiembre de 1930 y del 4 de junio de 1943. El lapidario calificativo se abrió camino y hoy lo hacen suyo los investigadores ubicados en el plano nacional y popular. Puede objetársele —si se lo acepta como definición absoluta del periodo— que omite la existencia, en su transcurso, de fuerzas en germinación que lo negaron y prepararon el paso a la etapa posterior. De todos modos, da una idea cabal de lo que fueron los gobiernos de entonces, mancillados por el fraude y la violencia en las elecciones y sometidos a una planificación económico-financiera dictada por Londres.

En la medida que afectó al conjunto del sistema, la gran crisis del capitalismo de los años 1929-1933 influyó externamente sobre la caída del gobierno nacionalista-popular de Hipólito Yrigoyen (6 de septiembre de 1930), a la que siguió la *década infame*. No fue, sin embargo, su causa determinante, como todavía lo sustenta una vieja escuela historiográfica que ve en los procesos sociales latino-americanos el mero reflejo de los fenómenos mundiales. El impacto de la crisis general contribuyó a acelerar el estallido de las contradicciones internas de una sociedad agroexportadora dependiente del imperialismo inglés, contradicciones cuya particularidad contenía la universalidad de las contradicciones inherentes al sistema capitalista total. Debemos iniciar, pues, el análisis de la *década infame* con la investigación de sus causas dentro del propio país.

APOGEO Y CRISIS DE LA COLONIZACIÓN CAPITALISTA

La Argentina es hija de la colonización capitalista (1862-1930) injertada en la débil y arcaica estructura de la sociedad creada por la colonización española del siglo xvi. Sus extraordinarios progresos

iniciales tanto asombraron al escritor portugués José Duarte Ramalho Ortigão, al visitar el país en 1887, que resumió su impresión en la frase: "O mais grande fenômeno da raça latina no século XIX".

Los 57 millones de hectáreas de la pampa de los pastos tiernos ofrecían, por una parte, campos de abastecimiento e inversión a las potencias imperialistas que se disputaban los mercados y, por la otra, prometían riquezas a los campesinos pobres de Italia y España que se aventuraban a "hacer la América". Las siguientes cifras certifican la magnitud y el ritmo de la colonización capitalista:

La superficie sembrada con cereales y lino aumentó de 580 000 hectáreas en 1872 a 2 459 120 en 1888; a 2 989 400 en 1890; a 4 835 620 en 1895; a 7 431 000 en 1901; a 8 410 000 en 1902; a 13 452 815 en 1919-20, y a 19 962 422 en 1930-31.

El número de ovejas se incrementó de 66 706 000 en 1888 a la cifra máxima de 120 000 000 en 1901 —con un crecimiento del 33% anual y subiendo de 40 a 250 animales por kilómetro—, superando a los rebaños de Australia, los Estados Unidos y Rusia Europea. Después el decrecimiento fue vertical y constante —67 300 000 en 1908, 43 200 000 en 1914, 36 200 000 en 1922 y 44 400 000 en 1930—, con excepción de este último año. A la vez, la exportación de lana ascendió de 38 294 014 libras en 1859-60; a 144 877 792 en 1869-70; a 215 027 386 en 1879-80; a 261 084 348 en 1889-90, y a 522 828 674 en 1899-1900.¹

Al comenzar la década del 70 la agricultura seguía siendo tan pobre que se importaban cereales y otros productos de Europa, los Estados Unidos, Chile y Australia. Pero de un año a otro se obtuvo el autoabastecimiento y se pasó a ocupar los primeros lugares en las exportaciones del mundo. De la nada la exportación de trigo se elevó a 109 toneladas en 1878, a 237 866 en 1887 y a los siguientes promedios anuales en quinquenios posteriores: 1 500 000, 1900-04; 2 800 000, 1905-09; 2 100 000, 1910-14; 2 400 000, 1915-19; 3 700 000, 1920-24, y 4 200 000, 1925-29. La exportación de maíz que fue de casi 20 000 toneladas en 1878 y de 361 458 en 1887 alcanzó en 1925-29 el promedio anual de 5 500 000, mientras la de lino registró en las tres fechas indicadas 10 481 184 y 1 600 000 toneladas.²

Cayó en irremediable decadencia la antigua ganadería, con vacunos de origen hispánico, y se clausuraron los saladeros, productores

¹ En 1865 la República Argentina era la primera nación exportadora de lana del mundo.

² Ricardo M. Ortiz: *Historia económica de la Argentina*, Ediciones Pampa y Cielo, Buenos Aires, 1964, t. II, p. 89. Louis Guilaine: *La République Argentine Physique et Economique*, Paris, 1889, p. 90.

de tasajo. La importación de ejemplares ingleses (Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus) y, a fines de siglo, la instalación de los frigoríficos, primero argentinos e ingleses, a los que después se sumaron los norteamericanos, colocaron a la Argentina al frente de los países criadores y exportadores de ganado. Las exportaciones de carnes ovinas congeladas subieron de 7 500 reses en 1883 a 150 000 al año siguiente y a 2 500 000 en 1889, y las vacunas congeladas de 28 reses en 1884 a 113 000 cuartos en 1889. A partir de la guerra de los boers en África del Sur (1899-1902) que fue el *élan* para la ganadería argentina, porque comenzó la gran demanda inglesa— las exportaciones se multiplicaron: en 1899 un equivalente de 28 000 cabezas en cuartos; en 1905 alrededor de 500 000; en 1910-14 un promedio anual de 1.278,629, y en 1930-34 más de 2 500 000 también por año.³

Desde 1857 hasta 1914 ingresaron 3 300 000 inmigrantes. Hubo épocas en las que ciudades como Buenos Aires y Rosario contaban con más extranjeros que argentinos y en los pueblos fundados por inmigrantes los hijos del país constituían pequeñas minorías. Entre 1860 y 1913 se invirtieron capitales extranjeros por un monto de 10,000 millones de dólares (a la cotización de 1964).

El suelo se valorizó fabulosamente, cuando con la expulsión de los indios desapareció la tierra libre y nació la renta absoluta. En la provincia de Buenos Aires “un peso invertido en tierra en el año 1836, se convirtió en 4.380 pesos en el año 1927”.⁴ Si abarcamos un periodo más corto y nivelamos el valor de la moneda tenemos estos dos ejemplos típicos de la zona cerealera: el precio de la hectárea ascendió en Junín de 8 pesos 24 centavos en 1866 a 550.29 en 1929 y en Rosario, durante el mismo lapso, de 9.14 a 647.89.⁵

La red ferroviaria se extendió de 10 kilómetros en 1857 a 6 700 en 1887, a 16 600 en 1900; a 33 500 en 1914, y a 38 634 en 1930. Salvo las líneas del Estado y de tres compañías francesas, las vías férreas fueron construidas, en su mayor parte, por empresas inglesas obedeciendo al plan de organizar el transporte en función del desarrollo de una economía agroexportadora, con centro en el puerto de Buenos Aires.

En 1900, treinta y ocho años después que los ingleses instalaron sus primeros bancos, el número y la distribución de esos estableci-

³ Rodolfo Puiggrós. “Libre empresa o nacionalización en la industria de la carne” *Argumentos*, 1957, Buenos Aires, p. 20.

⁴ Jacinto Oddone: *La burguesía terrateniente argentina*, Buenos Aires, 1936. José Boglich: *El problema agrario y la crisis actual*, Buenos Aires, pp. 150 y ss.

⁵ *Ibidem*.

mientos eran los siguientes: 6 de capital extranjero (5 ingleses y 1 alemán); 5 de capital de los inmigrantes (3 de italianos, 1 de españoles y 1 de franceses), y 12 nacionales (del Estado y de los particulares).⁶ Un cuarto de siglo más tarde, el censo de 1925 documentó el funcionamiento de 91 bancos de depósito y descuentos, de los cuales 5 (Nación Argentina, Provincia de Buenos Aires, Español del Río de la Plata, Francés del Río de la Plata y Tornquist) disponían del 60.3% del capital, del 57.5% de los préstamos, del 60% de los depósitos y del 56.7% de las existencias. El proceso de concentración que se infiere de esos datos se hace más notorio al analizar la parte correspondiente al Banco de la Nación Argentina—institución financiera al servicio de la ganadería y el comercio y muy renuente a ayudar a la industria—, con capital y reservas, préstamos, depósitos y existencias superiores a los de los otros 4 bancos reunidos. También caracterizó al periodo la incorporación de los bancos norteamericanos al sistema financiero del país y la fundación de bancos hipotecarios (15 en 1925: 12 argentinos con el 68% de los capitales y 3 extranjeros que totalizaban el resto).⁷

El capital bancario nacional (incluido el acumulado con los aportes de los inmigrantes definitivamente asimilados por el país) pudo, antes de la *década infame*, desenvolverse con autonomía frente al capital imperialista, por ser el instrumento financiero de las clases sociales que dominaban la economía del litoral: los estancieros, los chacareros y los intermediarios. No sucedió lo mismo en materia de ferrocarriles, tranvías, frigoríficos, electricidad, gas y seguros, donde la participación de los pioneros argentinos que los iniciaron quedó reducida a cifras insignificantes o sometida a los *trusts* anglonorteamericanos.

Solamente un tipo de industria mereció la protección, a la vez, del Estado argentino y de la banca extranjera: la que elaboraba los productos de la ganadería y la agricultura (curtiembres, molinos harineros, fábricas de aceite, bodegas de Cuyo, ingenios de Tucumán, etcétera). Pero a pesar del libre cambio que las colocaba en condiciones de inferioridad frente al competidor extranjero, otras ramas —la textil y la metalúrgica, en primer término— se abrieron camino en medio de grandes dificultades, aunque favorecidas por la interrupción de las importaciones durante la Primera Guerra Mundial.

Del desarrollo agropecuario, dentro de la esfera del comercio enri-

⁶ *Anuario Pillado*, año 1900.

⁷ Ricardo M. Ortiz, *op. cit.*, II, pp. 304-306.

quecido a su costa, emergieron monopolios internos que se proyectaron hacia el exterior. Citaremos los dos más importantes:

a) El de los cereales integrado por cuatro firmas (Bunge & Born, Luis Dreyfus, La Plata Cereal y Luis de Ridder, las dos últimas subordinadas a la primera), que controlaban la totalidad de las compras y de los embarques de granos y anularon a tal punto la libre concurrencia, que de los 3 900 cerealistas que había en 1920 en la provincia de Buenos Aires quedaban 750 en 1930, manejados por el monopolio. Bunge & Born llegó a poseer cincuenta empresas, 800 000 hectáreas de estancias e importantes industrias primarias.

b) El de la familia Bemberg que comenzó en Buenos Aires con una modesta fábrica de cerveza y que en la década del 30 era dueña del Puerto de Rosario, del Ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano y, en Francia, de la Société Industrielle et Financière pour l'Amérique du Sud, además de socia de los fabricantes de armamentos Schneider y de Wandel. Los Bemberg convirtieron y unificaron, en 1935, la deuda interna y externa de la Provincia de Buenos Aires con la consecuencia de que este Estado argentino perdió 503.074,634.83 pesos (a 4 pesos el dólar de entonces) y ellos cobraron de comisión 14.917,004.53 pesos. Poseían 250 000 hectáreas de campos y, solamente en Buenos Aires, 40 fábricas. Durante más de veinte años eludieron el pago de impuestos, a razón de 200 millones de pesos por año. El gobierno de Perón les expropió sus bienes en 1948 para cobrárselos.

Tarea imposible es averiguar las ganancias de los monopolios y de los intermediarios, las rentas de los terratenientes y los ingresos de los chacareros. Los amparaba el secreto comercial, y las empresas extranjeras acostumbraban falsear sus contabilidades. Pero sí puede afirmarse que con un capital mínimo los monopolios obtenían beneficios colosales; también está fresco el recuerdo de terratenientes que, sin mover un dedo, vieron multiplicarse varias veces el valor de sus campos o el de chacareros que se hacían millonarios con una buena cosecha y de almaceneros de ramos generales que sojuzgaban económicamente a pueblos enteros.

Espejo de las contradicciones de la realidad social que hemos descrito someramente era la ciudad de Buenos Aires. Al crecimiento de su población —de 177 000 habitantes en 1868 a más de 2 millones en 1930— acompañó su completa modernización (obras sanitarias, gas, electricidad, teléfonos y un amplio servicio de transportes urba-

nos —por el que viajaron en 1930 cerca de mil millones de pasajeros—, al que en 1913 se había incorporado el subterráneo). En ella se entrecruzaban la creación nacional y la abrumadora presión de los monopolios extranjeros. Paraíso de intermediarios y especuladores, seguía siendo el ágora de los pronunciamientos populares. Nacieron en su recinto los partidos políticos que rivalizaban en la conquista de la opinión de la República y los sindicatos obreros que se extendieron por el país como denuncia y antítesis del orden establecido.

El orden establecido nunca gozó de la salud prometida por la oligarquía ilustrada que lo planificó a mediados del siglo pasado. Al estar encadenado al imperialismo inglés, acusó los impactos de las crisis cíclicas del capitalismo. Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Constitución organizadora de 1853, pronto descubrió que el régimen social emergente de ella no era inmune a las crisis. Al principio creyó que se debían al atraso de la sociedad argentina; pero después de la de 1873-76 vislumbró su conexión con la crisis mundial, no como su reflejo abstracto, sino como resultado de las contradicciones internas del sistema total.⁸ De esta crisis, como de las de 1882, 1890, 1900, 1907 y 1920, salieron acentuados tanto el proceso de concentración monopólica del capital extranjero como el autodesarrollo económico nacional, es decir los dos polos de la contradicción principal. Se las denominó “crisis de progreso”, y el progreso se medía por la expansividad de la colonización capitalista, con prescindencia de las fuerzas contrarias que ella misma creaba (clase obrera, intelectualidad nacionalista, industria, etcétera).

En cambio, nadie se atrevería a afirmar hoy que la crisis de 1930 se superó e impulsó a la Argentina hacia adelante. Hay consenso general respecto a sus efectos deteriorantes sobre una sociedad organizada como satélite del imperio británico. Las opiniones varían en cuanto a si fue nada más que la interrupción del destino histórico del país y que éste, por lo tanto, retornará algún día a “los buenos tiempos de antes”, o si marcó la decadencia definitiva de la colonización capitalista y no queda otra esperanza que el cambio revolucionario del orden social.

Una economía estructurada sobre la base de la venta al exterior de carnes y cereales tenía que ser necesariamente muy sensible a los altibajos de la demanda de los mercados consumidores de esos pro-

⁸ Juan Bautista Alberdi: “La crisis argentina de 1860, La crisis argentina de 1866, Crisis permanente de la República Argentina”, en *Estudios Económicos*, 1895, Buenos Aires, Imprenta Europea.

ductos. A la inversa de la economía de naciones menos dotadas por la naturaleza, pero con sus producciones diversificadas y orientadas en lo fundamental al mercado interno, la de la Argentina era a tal punto vulnerable a los cambios externos que los gobiernos creían que si se apartaba de “la división internacional del trabajo” existente, que la convirtió en “la canasta de pan del mundo”, el país se precipitaría en la bancarrota. Se arraigó en políticos y economistas la idea de que esa “división internacional del trabajo” se prolongaría *ad vitam aeternam*.

La colonización capitalista de las décadas anteriores a 1930 —objetivo y fundamento de la organización nacional— dejó el saldo no solamente de una estructura socioeconómica y de una red de comunicaciones moldeadas para satisfacer las necesidades del mercado inglés, sino también de una superestructura institucional y política, a la cual la conciencia de las clases dominantes atribuía el progreso y la riqueza de los vertiginosos años de las “vacas gordas”. Era innegable la relación causal de la superestructura demoliberal con la modernización a la inglesa de la Argentina. Los políticos y economistas, aferrados al utilitarismo o al positivismo, juzgaban beneficiosa y permanente la subordinación al principal emporio financiero de aquella época, por cuanto se traducían en la opulencia de la nación como totalidad abstracta —opulencia que no anulaba la división en pocos ricos y muchos pobres— y que se fincaba en la erradicación de la “barbarie” heredada de los orígenes indohispánicos.

Los rápidos y sensacionales progresos del periodo ascendente equivalieron a una revolución burguesa que, bajo la égida del imperio británico, se concentró en la economía agroexportadora. La oligarquía terrateniente que se enriqueció a su sombra tenía las características de una gran burguesía rural. Unió su suerte a la de la burguesía intermediaria o comercial. Ambas, librecambistas por su naturaleza de clase, se opusieron tenazmente a la protección a la industria, arguyendo que ésta era, en la Argentina, “artificial” y “anti-económica”.⁹ Cuarenta años después persisten en entorpecer el autodesarrollo integral del país, en nombre de una concepción estática y anacrónica del mercado mundial y de la realidad argentina.

La cronicidad de la crisis de la economía agroexportadora argentina (1930-69) se evidencia en el hecho que los niveles de las exportaciones de productos agropecuarios del quinquenio 1925-29 (el 95% del total de las exportaciones) —los más altos de nuestra histo-

⁹ Eduardo Laurencena: *Debemos salvar nuestras industrias rurales*, Paraná, 1949, pp. 40, 136 y 179.

ria— no fueron recuperados posteriormente. Durante ese lapso se vendió al exterior el 77% de la producción agrícola-ganadera de la pampa húmeda y el 51% de la del conjunto del país. Ocupó entonces la Argentina el primer lugar en el mundo como productora y exportadora de lino, como exportadora de maíz (el segundo como productora, a continuación de los Estados Unidos) y como exportadora de carnes vacunas.¹⁰

Es casi un lugar común de los estudios económicos publicados en los últimos tiempos fijar, en el año 1930, el paso de la economía condicionada por el mercado exterior (centrífuga) a la economía orientada hacia el autodesarrollo nacional (centrípeta). Esta opinión adolece del determinismo económico típico de economistas no marxistas, determinismo que ellos imputan injustamente a los marxistas. El paso de la dependencia a la independencia, del desarrollo subordinado a la demanda extranjera al autodesarrollo, no se dio ni se dará espontáneamente, por la mera acción de los factores económicos. Viven de ilusiones los políticos y economistas que esperan que una milagrosa y pacífica evolución, encauzada por el poder político, salve al país de los cambios por vía revolucionaria.

La crisis casi cuarentenaria tiene por causa esencial el antagonismo entre las tendencias hacia el autodesarrollo integral y una estructura agroexportadora que se lo impide, por estar organizada para abastecer una demanda del exterior que ha perdido el dinamismo del periodo ascendente. La demanda expansiva externa era antes la que determinaba la extensión de los cultivos e invernadas. Al llegar en 1930 a un límite insuperado se originó el estancamiento de la producción de granos y carnes y el desvío hacia el mercado interno en expansión de una parte creciente de ella. Por otra parte, la inmigración —uno de los pilares de la colonización capitalista, según vimos— se redujo casi a la nada a partir de 1930, mientras aumentaba constantemente el éxodo de trabajadores del campo a la ciudad, atraídos por una vida mejor y los salarios de la industria.

La oligarquía agroexportadora comprendió que se le escapaba de las manos el dominio económico, del mismo modo que se le había escapado el dominio político con el advenimiento del yrigoyenismo. Sus voceros achacaron la crisis, entre otras razones, al exceso de habitantes —en un territorio semidesierto con incalculables riquezas

¹⁰ José Alfredo Martínez de Hoz (h). *La agricultura y la ganadería en el periodo 1930-1960*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1967. Compárese ese 77% de la producción agropecuaria de la pampa húmeda que en 1930 se destinó a la exportación —punto máximo de la parábola— con estos otros: 55% en 1900 y 30% en 1962.

inexplotadas— que generaba a la clase obrera y con ella a las ideas revolucionarias. Vio que dos peligros mortales se cernían sobre su porvenir: la progresiva autoconciencia de las masas populares y la quiebra del esquema de la economía agroexportadora. Decidió entonces librar la batalla por su supervivencia. Sus armas fueron el fraude electoral y el pacto con Inglaterra.

LA DÉCADA INFAME.

El presidente Yrigoyen cayó del gobierno el 6 de septiembre de 1930, víctima del primer pronunciamiento militar triunfante en 68 años de legalidad constitucional. Él mismo había conspirado junto a militares a favor de la soberanía popular, durante el tránsito de un siglo al otro y antes que la oligarquía lo atrajera hábilmente al terreno electoral, lo comprometiera con el régimen y lo dejara gobernar, pero conservando ella el poder tras el trono. Este poder solapado de la oligarquía se reflejó en la política ambivalente de don Hipólito, con particular relieve a mediados de su primera presidencia (1916-22), pues siendo el caudillo de mayor arraigo en las grandes masas, se manchó con la represión de la huelga de la Semana Trágica y con las matanzas de obreros en el Chaco y la Patagonia. El fantasma de la Revolución rusa recorría la República y los oligarcas utilizaron al presidente para espantarlo.

La crisis de 1930 encontró a Yrigoyen tambaleante en la Casa Rosada. Había duplicado en las elecciones del 1º de abril de 1928 los votos de sus adversarios, pero el apoyo de la mayoría popular no bastaba para conducir el país en una coyuntura histórica que exigía cambios revolucionarios. La oligarquía, que venía preparando su revancha desde catorce años atrás, comprendió que llegaba su oportunidad. No le perdonaba al anciano caudillo la devoción que despertaba en las gentes humildes y temía que, a la inversa de 1919, el presidente fuera impulsado por la ola popular más allá de los límites del régimen. Tampoco los Estados Unidos le perdonaban la nacionalización del petróleo y su férrea defensa de la autodeterminación argentina frente a un panamericanismo agresivo y totalizador. Inglaterra compartía los temores de sus socios, los oligarcas nativos, y segura de que, en última instancia, le correspondería dictaminar, se sumó a la partida antiyrigoyenista y esperó tranquilamente que el país retomara el camino tradicional de la legalidad formal y de la democracia postiza.

Ni la oligarquía ni los imperialistas podían por sí mismos derrocar

a un caudillo que acababa de ser plebiscitado. Necesitaban intermedios y ejecutores. Los partidos políticos en su totalidad (incluida una parte del yrigoyenismo) y el movimiento estudiantil se prestaron a la maniobra de envolvimiento que aisló y entumeció a Yrigoyen, y prepararon el tiro de gracia a cargo de los militares. Con la colaboración de la gran prensa y desde todas las tribunas no le ahorraron al presidente inerme ningún ultraje.

Así conquistó fácilmente el gobierno el general José Félix Uriburu. Lo acompañaron los nacionalistas aristocráticos —entre los cuales se destacaba el poeta Leopoldo Lugones—, discípulos de Charles Maurras, León Daudet y la Action Française. Proyectaba instaurar una dictadura militar, disolver los partidos, destruir el parlamentarismo demoliberal y organizar un sistema corporativo a la usanza fascista, pero ni siquiera pudo dar los primeros pasos en ese sentido. Lo llevó al fracaso no solamente su impopularidad, sino también la oposición de los dirigentes políticos, así como la resistencia de los oligarcas e imperialistas que le exigían “el retorno a la normalidad constitucional”. Sometido a una presión tan completa, se vio obligado a convocar a elecciones. Escogió antes como campo de prueba para auscultar a la opinión pública a la Provincia de Buenos Aires, donde el 5 de abril de 1931, a los siete meses de la caída de Yrigoyen, los yrigoyenistas obtuvieron la mayoría de votos. Anuló esta victoria, y consciente de que si se realizaban elecciones nacionales los yrigoyenistas reconquistarían el gobierno, se avino al procedimiento propuesto por los conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes, partidarios de la candidatura presidencial del general Agustín P. Justo: bajo las apariencias de la más perfecta legalidad, y una vez vetados los candidatos yrigoyenistas, se fraguaron comicios en los cuales —mediante el cambio de los votos de las urnas en las oficinas del Correo— se impuso el mencionado general. Fue la inauguración del “fraude patriótico”, del “fraude para impedir que la plebe se apodere del gobierno”. Duró una década, la *década infame*.

El fraude dio a la oligarquía agroexportadora una provisoria e inestable base política para gobernar. Le quedaba aún, sin embargo, el rabo por desollar: restablecer los intercambios con Inglaterra que habían sufrido esos meses considerables deterioros y salvarlos del peligro de un quebrantamiento mucho mayor.

Las carnes representaban el *item* crítico de esos intercambios. Inglaterra, que se llevaba casi el 90% de nuestras exportaciones, disminuyó sus compras de 932 000 a 611 000 toneladas entre 1927 y 1932, mientras los precios bajaron en un 53% durante el mismo

periodo. También descendieron nuestras importaciones de Inglaterra, pero los precios sólo disminuyeron en un 40%.

Con ser grave el problema que creaba a la oligarquía agroexportadora la declinación del volumen y de los precios de las carnes exportadas, más lo era todavía para ella la amenaza implícita en la política iniciada por el gobierno de MacDonald en relación con los dominios imperiales. La constitución de la Comunidad Británica de Naciones por el Estatuto de Westminster (noviembre de 1931) y la Ley de Impuestos a la Importación instituían un sistema proteccionista multinacional que excluía del mercado inglés a los países ajenos a aquella "Comunidad". Para colmar la desesperación de la oligarquía agroexportadora, la Conferencia de Otawa (agosto de 1932) aprobó un régimen discriminatorio, a favor de Australia y Nueva Zelândia, que reducía las compras de carnes congeladas a la Argentina y el Uruguay en un 35% por debajo del nivel mínimo del periodo, el del año 1º de julio de 1931-30 de junio de 1932.

La crisis se extendía al conjunto de la economía nacional. Sólo en el primer semestre de 1933, comparado con el semestre anterior, las exportaciones de cereales y lino bajaron en un 28% en cantidad y en un 35.6% en valor. La Dirección de Economía Rural y Estadística daba cifras impresionantes acerca de la descapitalización del agro. Estimaba el costo de producción del quintal de trigo en \$ 7.20 y su venta en \$ 5.04, del lino en \$ 10.65 y \$ 9.14 y del maíz en \$ 4.90 y \$ 4.33, respectivamente. Las reservas metálicas de la Caja de Conversión disminuyeron de 650 millones a 260 millones de pesos oro desde 1928 a 1932. En el país de la abundancia, El Dorado del sueño de los inmigrantes, 300 000 desocupados se agolpaban en improvisadas villas de lata, madera y cartón de Buenos Aires y Rosario. Estallaba una huelga tras otra: tranviarios, empleados de comercio, telefónicos, frigoríficos, petroleros, calzado, madereros, agricultores arrendatarios. Estos últimos hicieron fracasar el plan del ministro De Tomaso de desalojar a los morosos en el pago de los arriendos y reducir el área sembrada.¹¹

Los asesores del gobierno de Justo diagnosticaron que el desbarajuste económico y el malestar social tenía por causa el deterioro del intercambio con Inglaterra. Hubo profesores universitarios que lamentaron desde sus cátedras que no formáramos parte de la Comunidad Británica de Naciones para gozar de los privilegios de los dominios. Si aquella era la enfermedad, la terapéutica no podía ser

¹¹ Rodolfo Puiggrós. *La democracia fraudulenta*, Editorial Alvarez, Buenos Aires, 1968, p. 111.

otra que pactar con Inglaterra un *modus vivendi* que salvara de la bancarrota a la economía agroexportadora. Tal fue el objetivo de la misión despachada a Londres, encabezada por el segundo magistrado de la República, el vicepresidente Julio A. Roca.

El Pacto Roca-Runciman, firmado en Londres el 1º de mayo de 1933, correspondía al planteo de una política totalizante frente a la problemática argentina. Se proponía, en síntesis, una planificación monopólica que protegiera a la economía agroexportadora. Hasta entonces las relaciones argentino-británicas habían quedado libradas a un *laissez-faire* astutamente manejado desde Londres, sin otro punto de referencia que el Convenio de 1825 que aseguraba a Inglaterra el trato a la nación más favorecida. Con el Pacto de 1933 los intercambios entre los dos países se supeditan a los Acuerdos de Otawa, pero colocando a la Argentina en condiciones de inferioridad en relación a los dominios británicos. Por ejemplo: si Australia y Nueva Zelandia introducían sus carnes en el mercado inglés en competencia con las argentinas, el gobierno británico no imponía ninguna restricción; y, a la inversa, imponía restricciones a las carnes argentinas en el caso que desplazaran a las procedentes de los dominios. Era proteccionista para Inglaterra y librecambista para la Argentina. Además, resolvía que Inglaterra dispusiera de "la suma total de cambio en libras esterlinas proveniente de la venta de productos argentinos en el Reino Unido" para cobrarse las ganancias de los ferrocarriles, puertos, frigoríficos y otras de sus empresas monopólicas. A pesar de tales concesiones, mantenía las restricciones a las exportaciones de carnes argentinas estabilizándolas al nivel mínimo, el cual, como hemos señalado, fue el del año 1º de julio de 1931-30 de junio de 1932.

La Convención sobre las carnes era el eje de una planificación monopólica más vasta de la economía y de las finanzas argentinas. A la planificación del comercio exterior se sumó, con el mismo sentido, la planificación de los transportes y del sistema bancario.

En los años anteriores, las empresas ferroviarias y tranviarias habían perdido terreno debido a la competencia de los transportistas privados nacionales (ómnibus y colectivos). Un Protocolo Adjunto del Pacto Roca-Runciman obligó al gobierno de Justo, mediante las leyes números 12.311 y 12.346, a crear la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes, eufemismos que no lograban ocultar el proyecto de expropiar en masa las líneas y vehículos a los transportistas argentinos para traspasarlos al monopolio inglés, cuyo capital fue

escandalosamente inflado. A pesar de la decidida y constante movilización de los perjudicados, con la combativa solidaridad popular, el monopolio inglés consiguió, mediante la intervención judicial y policial, quedarse con las tres cuartas partes de los colectivos; los dueños de los restantes huyeron con sus coches. Nunca el Gran Buenos Aires tuvo peores servicios de comunicaciones y la mentada "coordinación" no pudo extenderse al orden nacional, porque el desastre hubiese sido completo. Los tranvías se caían de viejos; en 1939, hacía 17 años que la Compañía Anglo, cabeza del monopolio, no invertía un centavo en nuevas líneas o en la modernización del material rodante.¹² Por último, el gobierno militar surgido del golpe militar del 4 de junio de 1943 anuló, por decreto, los efectos de las leyes monopólicas, suspendió las expropiaciones y rescató para el país el transporte urbano.

Otra de las imposiciones adicionales del Pacto Roca-Runciman apuntaba a prohibir la construcción de caminos que compitieran con los ferrocarriles, de tal modo que, en muchos casos, las carreteras principales se trazaron a distancia de los pueblos que tenían estaciones de trenes. Es un signo de la época que el número de automotores descendiera en la República de 435 822 a 322 147 unidades entre los años 1930 y 1933, y que la primera cifra recién se recuperara en 1940.

La planificación financiera giró en torno del establecimiento del Banco Central de la República Argentina, por el cual el sistema bancario argentino perdió la autonomía y se sometió al Banco de Inglaterra. El doctor Manuel Fresco, presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina, se enteró en Londres, antes que se supiera en Buenos Aires, de la creación del Banco Central y del nombramiento del doctor Raúl Prebisch como gerente.¹³

Para proyectar y llevar a la práctica el nuevo régimen bancario y monetario se designó una comisión integrada por representantes de tres poderosos consorcios financieros —Baring Brothers, Leng Roberts y Morgan¹⁴— y abogados y técnicos del país adscriptos a las empresas británicas. Se encomendó la supervisión a sir Otto Niemeier, funcionario del Banco de Inglaterra y director de la fábrica

¹² Luis V. Sommi: "Crítica al monopolio del transporte urbano", revista *Argumentos*, mayo de 1939, núm. 7, Buenos Aires.

¹³ José Luis Torres: *La oligarquía maléfica*, Buenos Aires, 1953, p. 126.

¹⁴ Baring Brothers estaban vinculados a la Argentina desde el empréstito inglés de 1825; Leng Roberts representaron a Baring Brothers en casi todos los empréstitos ingleses a la Argentina; y Morgan significaba General Electric, United States Corporation, International Harvester, etcétera.

Vickers de armamentos y buques de guerra, a la cual el gobierno de Justo le encargó la construcción del acorazado "La Argentina". Así nació el Banco Central para asumir el control de la moneda y de los cambios de los créditos, de la industria, del comercio interior y del intercambio externo, con privilegios que ni en la India habían obtenido los ingleses. A su lado se creó el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, cuya misión se contrajo a salvar de la ruina a grandes terratenientes y empresas e impulsar el proceso de concentración monopólica del capital extranjero. A tal efecto, invirtió los 702 millones de pesos deducidos de la baja del peso papel de 44 a 20.59 centavos oro en la compra a su valor nominal de pagarés incobrables.

Las leyes de creación del Banco Central y del Instituto Movilizador, y las complementarias de reorganización de los bancos de la Nación e Hipotecario Nacional y la de Bancos, se aprobaron sin ruido en la calle y sin polémica en el Congreso. El gobierno tomó precauciones. Amordazó a los diarios con la concesión de cambios preferenciales a la importación de papel. Convocó a ambas Cámaras a sesiones extraordinarias, sin mencionar los proyectos que tenía en carpeta.

Al revés de lo que podría pensarse —teniendo en cuenta que los ministros y asesores del gobierno, como Federico Pinedo, Raúl Prebisch y otros, se declaraban liberales—, la *década infame* no se caracterizó por el liberalismo económico. El liberalismo estaba en coma. Quienes lo añoraban seguían el ejemplo de Keynes, que para justificar sus tesis antiliberales les asignaba una vigencia provisoria y a corto plazo, a la espera de una imposible restauración liberal. Con el gobierno de Justo se inició en la Argentina el dirigismo económico, a través de la intervención del Estado como pantalla de los intereses monopólicos extranjeros. El Pacto Roca-Runciman lo demuestra cabalmente.

El gobierno de Justo aplicó una política terapéutica, es decir una política que consideraba a la sociedad argentina un cuerpo enfermo, al que debían suministrársele remedios que restablecieran su salud de otros tiempos. Pero con esos remedios sucedió lo que con las drogas que comienzan por ser medicamentos y crean vicios que no pueden abandonarse más. Era una medicina alopática que pretendía curar el liberalismo con dosis de antiliberalismo.

El control de cambios fue uno de esos remedios. Se le implantó después de decretar la inconvertibilidad a oro del peso papel. Puso a disposición del Estado las divisas procedentes de las exportaciones.

Se combinó, por decreto del 28 de noviembre de 1933, con la compra por la Junta Reguladora de Granos —organismo estatal creado por el mismo decreto— del lino, el trigo y el maíz a los productores y su venta a los exportadores. La diferencia entre los precios de compra y de venta se destinaba, entre otros fines, a cubrir los déficit de la balanza de pagos.

También se constituyeron las Juntas Reguladoras del Vino, de las Carnes, del Algodón, de la Leche y de la Yerba Mate, que favorecieron la concentración monopólica, a costa de la quiebra de las empresas medianas y pequeñas y de la destrucción de riquezas. En la Provincia de Mendoza se derramó vino en las acequias, se arrancaron cepas, se abandonaron viñedos y se enterró uva en los camellones, mientras tres grandes bodegas —Giol, Arizu y El Globo—, apuntaladas por Leng Roberts y la Junta Reguladora, se adueñaban del mercado; en la Provincia de Catamarca el número de fábricas de vino y aguardiente descendió de 300 a 20; en el valle superior del Río Negro muchos vitivinicultores se arruinaron debido a la ley que quintuplicó el monto de los impuestos; en el mercado interno de la carne los frigoríficos anglonorteamericanos instalaron cadenas de carnicerías, por medio de las cuales practicaban el *dumping* y desalojaban a los abastecedores y comerciantes del país; en la industria azucarera tucumana los cañeros y pequeños ingenios cargaron con las deudas de los grandes ingenios enfeudados a los bancos; y en todo el país la “regulación” económico-financiera tendía a liquidar la libre concurrencia e impulsar la concentración capitalista.

Con respecto a los ganaderos la política gubernamental acentuó la división en dos sectores. Desde principios de siglo las empresas anglonorteamericanas favorecían a un pequeño grupo de invernadores, a expensas del gran número de criadores. Estos últimos vendían sus novillos a aquéllos, quienes a su vez los preparaban para entregarlos a los frigoríficos. Los invernadores —entre los que se contaban accionistas, directores y abogados de las empresas— percibían precios de privilegio, pero como en la época del Pacto Roca-Runciman había bajado la cotización del ganado, el gobierno de Justo les acordó un subsidio de 30 millones de pesos (equivalentes a 6 000 millones de la actualidad). Una sola firma recibió un millón y medio.

El artículo 3º del Protocolo del Pacto condenaba al país a no desarrollar su propia industria frigorífica, viejo anhelo de la mayoría de los criadores de ganado. Establecía que:

El gobierno del Reino Unido está dispuesto a permitir a empresas (del gobierno argentino o de ganaderos argentinos), *siempre que no persigan primordialmente fines de beneficio privado*, la importación hasta el 15% de la cantidad total importada de la Argentina al Reino Unido.

Como ya las importaciones de dos empresas nacionales —el Frigorífico Gualeguaychú y el Frigorífico Municipal de Buenos Aires— cubrían el 10% de la cantidad total, los ingleses sólo “permitían” una participación del 5% restante a las cooperativas.

Ni los más altos funcionarios del gobierno de Justo se atrevieron a negar el carácter leonino del Pacto. El vicepresidente Roca, que lo había firmado, confesaba que se vio obligado a “satisfacer las demandas británicas tanto en lo que respecta a la regulación de cambios como en las rebajadas solicitadas a nuestras tarifas”. El ministro de Agricultura De Tomaso declaró al diario *La Nación* (4 de mayo de 1933): “El Tratado no nos complace en nuestras demandas iniciales.” El canciller Saavedra Lamas expresó en la Cámara de Diputados: “Estamos en una dolorosa dependencia de los mercados exteriores.”

Correspondió al senador santafesino Lisandro de la Torre la crítica demoledora del Pacto, al que calificó de “golpe de gracia para la ganadería argentina”. Con la solidaridad de los criadores del interior, de los obreros de la carne y de la opinión pública, el líder demócrata progresista realizó una investigación durante seis meses, venciendo los obstáculos que le oponían los ministros y funcionarios del gobierno, las empresas anglonorteamericanas y los invernadores de la Sociedad Rural. Descubrió, entre otras cosas, que un frigorífico argentino —el Gualeguaychú de la firma Grondona—, con 45 000 pesos de capital y una exportación de apenas el 0.67% de la cuota total, pagaba impuestos a los réditos por valor de 24 300 pesos; mientras al Anglo, la más poderosa de las compañías extranjeras, el Estado sólo le cobraba 3 700 pesos.

El doctor De la Torre llegó a las siguientes conclusiones:

1. Los frigoríficos norteamericanos e ingleses instalados en la Argentina habían organizado un monopolio que abarcaba desde la compra del ganado en las estancias (o la recepción en las fábricas a precio fijo) hasta la venta de la carne en los mercados de consumo.

2. El monopolio frigorífico había logrado: *a)* acaparar las bodegas de los barcos frigoríficos y distribuir los embarques entre seis empresas; *b)* fijar los precios de compra del ganado, favoreciendo a un grupo selecto de invernadores y expoliando a la inmensa mayoría

de los criadores; c) ocultar los costos de producción, mediante una doble contabilidad y la negativa a exhibir libros y correspondencia; d) defraudar al fisco, eludiendo el pago de réditos, maniobrando con los cambios y haciéndose perdonar multas; e) corromper a los funcionarios y seleccionarlos de acuerdo con su obsecuencia al monopolio; f) prohibir la constitución de compañías argentinas dedicadas a la industria y el comercio de la carne; g) apoderarse del mercado interno de consumo; h) imponer a los obreros bajos salarios y condiciones inadecuadas de trabajo; i) obtener enormes utilidades que compensaban las pérdidas sufridas en Australia, Nueva Zelandia y Brasil.

3. El Estado argentino protegía al monopolio.

4. Una alta burocracia de funcionarios, asesores y técnicos, dirigidos por el doctor Raúl Prebisch, estaba al servicio incondicional del monopolio frigorífico.

5. Las leyes de carnes se habían instrumentado en provecho de los frigoríficos anglonorteamericanos y del pequeño grupo de inverna-dores.

6. Cualquier ley o medida que se aprobara sin antes "torcerle el pescuezo al monopolio" sería contraproducente y favorecería al mismo monopolio.

7. La única solución efectiva de la crisis crónica de la ganadería estaba en la expropiación y la nacionalización de los frigoríficos extranjeros, en la nacionalización del comercio exterior y en la organización de los productores de ganado en grandes cooperativas de venta e industrialización de la carne.

Es importante subrayar que el análisis crítico y la solución propuesta provenían de un político liberal, hasta entonces ferviente partidario del individualismo económico manchesteriano. La investigación del problema de la carne le abrió la perspectiva de la realidad y le obligó a revisar las ideas que sustentara toda su vida. Cuando se disponía a proponer en el Senado la solución de fondo del punto 7, un sicario pagado para asesinarlo interrumpió el debate y por error mató a balazos a su correligionario y discípulo Enzo Bordabehere, también senador por Santa Fe.

Inhibido por su formación aristocrática de encontrar el camino de las masas trabajadoras y de superar las limitaciones del liberalismo clásico, Lisandro de la Torre renunció a su banca del "Senado de la decadencia" y el 6 de enero de 1939 se suicidó. Fue una de las

grandes víctimas de la *década infame*. El año anterior habían puesto fin a sus vidas los dos poetas máximos de la Argentina: Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni.

Y EL FINAL DE LA ETAPA

El general Agustín P. Justo pudo conservar el poder durante el tumultuoso sexenio 1932-38 debido a que las fuerzas opositoras no ofrecían al pueblo salida alguna fuera del esquema partidocrático tradicional. El yrigoyenismo se desgastó y desacreditó en una lucha estéril, incapaz de recuperar por sí mismo el poder perdido. Sus rebeliones fueron fácilmente sofocadas; en los comicios sólo se contaban los votos de sus partidarios en la medida que sirvieran de comparsas a los introducidos clandestinamente en las urnas por los funcionarios del gobierno. La bandera del extinto caudillo parecía arriada para siempre. Sus epígonos invocaban a su favor una mayoría en potencia, pero que estaba excluida de representatividad auténtica y que no se sentía dispuesta a pelear por el poder. Para colmo de males, el liderato vacante por la muerte de Yrigoyen fue ocupado por Marcelo T. de Alvear, quien así se convirtió de cabeza del antiyrigoyenismo en dirigente del yrigoyenismo. Alvear, hombre de confianza de los monopolios anglonorteamericanos, tenía los pocos gloriosos antecedentes de haber apoyado el Pacto Roca-Runciman y ordenado a los concejales de su partido que votaran la prórroga del contrato con el *trust* de la electricidad, uno de los negociados más escandalosos que se recuerdan en la Argentina.

Tampoco el justismo tenía porvenir. El "fraude patriótico" no podía ser eterno. Descomponía la administración pública. Provocaba inestabilidad social. Extendía la corrupción a las fuerzas armadas; hubo jefes degradados y encarcelados por robos y un caso de espionaje. Sin embargo, a pesar del divorcio del gobierno y el pueblo y de la anarquía institucional, el general Justo hizo valer su autoridad militar para subordinar las fuerzas armadas al fraudulento poder civil y completar su período en la Casa Rosada, a la sombra de la imperial Inglaterra.

A las elecciones presidenciales del 5 de septiembre de 1937 se presentaron dos candidatos: Marcelo T. de Alvear y Roberto M. Ortiz. Ambos gozaban de las simpatías de las grandes empresas (electricidad, teléfonos, ferrocarriles, frigoríficos, Bunge & Born, Dreyfus, Bemberg y otras igualmente "democráticas"), que repartieron

salomónicamente su contribución para la campaña electoral entre uno y otro. Ganó "el caballo del comisario", esto es el doctor Ortiz, laureado por la Cámara de Comercio Británica y favorito del general Justo. Alvear denunció el fraude y la violencia como causas de su derrota.

Los dos campos antagónicos —democracia o fascismo en el orden internacional— se entrecruzaban dentro del país. El aliadófilo y fraudulento Ortiz se encontró, al asumir el poder el 20 de febrero de 1938, ante la imperiosa necesidad de optar entre el continuismo de la burla a la voluntad popular o la reimplantación de la pureza electoral. Colocado entre el justismo, que quería seguir gobernando y le imponía condiciones, y los militares nacionalistas, enemigos de la partidocracia y defensores de la naturalidad en la política internacional, intentó zafarse de las presiones de aquél y de éstos. Tendió un puente al radicalismo —dirigido por Alvear, su adversario de meses antes— y prometió el voto libre. Las intervenciones a las provincias de Catamarca y Buenos Aires, que derrocaron a gobiernos conservadores y anularon los resultados de comicios fraudulentos, así como sus declaraciones a favor de los aliados, le atrajeron la solidaridad de radicales, demócratas progresistas, socialistas y comunistas. La gran prensa alabó sus pasos hacia la "normalidad constitucional". Pero la consigna "elecciones libres" era abstracta —sobre todo manejada por un conocido abogado de las empresas británicas—, mientras que la inactualidad de los partidos tenía un significado concreto que se revelaba en la inercia de las masas respecto a ellos. Ya enfermo y con licencia, el presidente arrepentido no aceptó el ofrecimiento que le hicieron algunos generales de dar un golpe de palacio para hacer a un lado al vicepresidente Castillo y recobrar la plenitud del poder. No se sentía con energías físicas, ni contaba con fuerzas políticas (no obstante la adhesión de la mayoría del Congreso y de los mencionados dirigentes de los partidos), como para decidirse por tan arriesgada acción.

Ramón S. Castillo, vicepresidente en ejercicio de la presidencia y, después de la renuncia y la muerte de Ortiz, presidente efectivo, practicó el continuismo del fraude. Tuvo algunos éxitos: los conservadores ganaron a los radicales las elecciones de la Provincia de Buenos Aires (diciembre de 1941), por más de 100 000 votos; y, al año siguiente, los socialistas obtenían en la Capital Federal 141 968 sufragios contra 124 328 de los radicales. Los comicios de las provincias dieron, también en 1942, el siguiente número de diputados al Congreso Nacional: 49 conservadores, 23 radicales y 12 socialistas.

El desplazamiento definitivo de Ortiz no significó manos libres para Castillo, debido a la gravitación de la personalidad política del ex presidente Justo, quien le impuso como ministros al general Tonazzi (Guerra), Roca (Relaciones Exteriores), Culaciati (Interior) y Pinedo (Hacienda). Aseguraba, con estos funcionarios, la prolongación del fraude y de la política próimperialista de la *década infame*. Sin embargo, la pugna entre Justo y Castillo por el comando político no tardó en manifestarse e hizo crisis en enero de 1941, al renunciar a sus carteras Federico Pinedo y Julio A. Roca.

La situación política interna, en los meses anteriores al golpe militar del 4 de junio de 1943, pasó por las siguientes alternativas:

1. Castillo no tenía otra posibilidad que el fraude para seguir gobernando e imponer su sucesor en la Casa Rosada. Pero el general Justo y sectores del conservadurismo (Rodolfo Moreno) y del antipersonalismo recorrieron el mismo camino de Damasco que el ex presidente Ortiz y se unieron a la oposición en el reclamo del "retorno a la democracia".

2. Las fuerzas opositoras (con excepción de un núcleo de radicales de la Provincia de Córdoba, que era abstencionista y neutralista por fidelidad al pensamiento de Yrigoyen) marchaban hacia la unidad con el doble objetivo de incorporar a la Argentina al frente antifascista mundial y asegurar en el futuro la libertad del voto.

3. Castillo se esforzó en ganar la confianza del ejército. Mantuvo frecuentes reuniones con jefes de las tres armas. Para complacerlos defendió la política de neutralidad del país en la guerra mundial y, a través del canciller Enrique Ruiz Guñazú, hizo fracasar en la Conferencia de Río de Janeiro de 1942 la propuesta norteamericana de ruptura colectiva de relaciones de los países iberoamericanos con las potencias del Eje. Asimismo, adoptó algunas medidas de positivo valor, como la nacionalización del puerto de Rosario y la creación de la Flota Mercante del Estado.

4. El reemplazo en el Ministerio de Guerra del justista general Tonazzi por el general Pedro Pablo Ramírez fue una tentativa de Castillo de tranquilizar al ejército, que si bien aún no se había unificado con propósitos golpistas, presionaba sobre el presidente.

5. La muerte del general Justo, en enero de 1943, significó, en el orden político, la pérdida del principal dirigente de los aliadófilos y, en el orden militar, el fortalecimiento de las corrientes neutralistas, así como de las nazis.

6. Castillo quedó ubicado entre dos fuegos. Los militares le exigían el mantenimiento de la neutralidad, mientras los conservadores y antipersonalistas que lo acompañaban coincidían con la casi totalidad de los partidos opositores —unos y otros bajo la influencia de los imperialismos anglosajones— en la posición aliadófila y rupturista.

7. Los opositores (salvo el mencionado grupo radical cordobés) se preparaban para participar en las elecciones nacionales de ese año con absoluto olvido de la existencia de las fuerzas armadas. Confían de nuevo en que el caudal de votos de los partidos unidos arrollaría al fraude e inmovilizaría a los militares. Castillo, en cambio, sentía la presencia activa de éstos y para complacerlos adoptaba medidas represivas contra los opositores, tales como prohibir sus reuniones y encarcelar a los comunistas Codovilla, Ghioldi y Real, gestores de la Unión Democrática en la Casa Radical.

8. Se ha dicho que Castillo, consciente de lo insostenible de su situación, nada hizo por impedir, y hasta estimuló, el golpe militar. La verdad es que dio el paso destinado a provocarlo, al insistir en su padrinazgo de la fórmula presidencial Patrón Costas-Irondo (fórmula oligárquica, aliadófila y rupturista, que sólo podía triunfar mediante el fraude) —vetada por los mandos del ejército y la marina— que la Convención del Partido Demócrata Nacional (Conservador) hubiera proclamado el 4 de junio de 1943, de no producirse ese día la toma del poder por las fuerzas armadas.

LOS AÑOS TREINTA EN BRASIL

Manuel Correia de Andrade

I

LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS DE LA VIEJA REPÚBLICA

Brasil presenta una particularidad política que lo distingue de cualquier otro país de América Latina: su independencia se logró casi sin lucha, prácticamente por evolución, y se organizó políticamente bajo la forma monárquica de gobierno, permaneciendo por más de 60 años como el único imperio del Continente Americano.¹

En realidad, el cambio de sede de la monarquía portuguesa al Brasil en 1808 y la permanencia de la familia real en Río de Janeiro, fue la causa principal de la identificación que se dio entre la familia real y la aristocracia portuguesa que la acompañó y la aristocracia rural brasileña. Por esta razón se frustraron los movimientos autonomistas de influencia regional y de tendencia republicana. Esto explica la separación por evolución entre Portugal y la Colonia, aprovechando la decadencia de la metrópoli con consecuencia de la ocupación francesa y de la dependencia económica en que vivía en relación con Inglaterra; a través de la elevación del Brasil a la categoría de reino, unido al de Portugal y Algarve en 1815, y por la separación de Portugal durante la Independencia en 1822. La independencia se llevó a cabo por el príncipe heredero portugués, que permaneció en el país como príncipe regente, después del regreso de D. Juan VI a Lisboa, y la realizó después de haber sido convencido por el hábil político José Bonifacio de Andrada. Éste, ligado a los intereses de la aristocracia rural, pudo postergar hasta la época de la regencia —de 1831 a 1840— la explosión de una serie de revueltas regionales de intención agraria y a veces republicana. La mayoría del segundo emperador consolidó el poder de la aristocracia rural que conservó el régimen esclavista hasta 1888, cuando ya no era tan importante para los grandes sectores de esa aristocracia, y permitió la proclamación de la República apenas en 1889.

¹ En realidad, en toda América Latina, además del Brasil, sólo México fue monarquía durante dos cortos periodos, en 1822 con Iturbide y en 1864-67 con Maximiliano.

La aristocracia rural iba a dominar en realidad la vida del país hasta 1930 —durante la vieja República— pero aún en el siglo pasado, comenzó a desarrollarse en el país una burguesía urbana que acumularía capital en el comercio y en las primeras actividades industriales protegidas, a partir de 1847, por las tarifas aduaneras obtenidas a través de la ley Alves Branco. Esa burguesía y la clase que de ella dependía —formada por empleados de mayor categoría, profesionistas, militares y burócratas— comenzaron a tener expresión política durante las tres últimas décadas del siglo XIX. Estas fueron las clases que contribuyeron a la elaboración del Manifiesto Republicano en 1870, a la formación de un partido republicano y apoyaron la campaña abolicionista guiada en su mayor parte por jóvenes, como Joaquim Nabuco, que provenían de la aristocracia rural. La República, —proclamada en 1889 por el mariscal Deodoro da Fonseca por medio de un golpe militar— no consultó los intereses de estas clases en formación. Al romper el equilibrio y la estabilidad existente, permitió que ellas trataran de obtener una mayor participación en la vida política del país y para eso contaron con el decidido apoyo del ministro de Hacienda del gobierno provisional Ruy Barbosa, quien instruido de las ideas liberales, estimuló una verdadera fiebre industrialista en el país.² El periodo 1889-1894, es decir, el periodo del gobierno provisional, fue el primer cuatrienio republicano durante el cual el gobierno estuvo en manos de dos militares, el mariscal Deodoro da Fonseca (1889-91) y el mariscal Floriano Peixoto (1891-94). Este periodo representa para el sociólogo Guerreiro Ramos³ “el ascenso de los círculos pequeñoburgueses al poder”, ya que durante el gobierno del primer mariscal:

La acción de Ruy Barbosa como ministro de Hacienda, es francamente alentadora de la industria, o sea, de actividades urbanas que crean oportunidades de empleo para la clase media. La política financiera de Ruy Barbosa, desde el punto de vista social, es una tentativa de distribuir los recursos del sector latifundista para la industria. Por otro lado, el gobierno de Floriano Peixoto tuvo como misión principal sacar a las viejas oligarquías de los puestos de mando, como se notó en las represiones a las revueltas dirigidas por altos mandos de la marina.

La población urbana no tenía en aquel entonces gran peso en la vida nacional; algunas de las grandes ciudades estaban estancadas

² Bastos, Humberto. *Ruy Barbosa, Ministro da Independencia Econômica do Brasil*. Casa de Ruy Barbosa, Río de Janeiro, 1949 e Viana Filho, Luis en *A Vida de Ruy Barbosa*, pp. 209-238. Cia. Editora Nacional. São Paulo s/d.

³ *A Crise do Poder no Brasil*, pp. 25-6 Zahar Editores. Río de Janeiro, 1961.

en su crecimiento demográfico y fue fácil para los viejos latifundistas aliarse al pequeño grupo de industriales (casi siempre por relaciones de familia) a los comerciantes y a los altos funcionarios, para restablecer, a partir del segundo cuatrienio, el dominio político de los terratenientes.

Cuando se proclamó la República, sólo tres ciudades —Río de Janeiro, Recife y Salvador— contaban con más de cien mil habitantes; al entrar el siglo xx, este número se había extendido a cuatro ciudades, y en 1920, al comenzar la decadencia de la primera República, este número se elevó a seis ciudades de las cuales dos poseían más del medio millón de habitantes. El periodo 1920-1940 —infelizmente no hubo censo en 1930— fue de gran crecimiento urbano, ya que en 1940 teníamos diez ciudades con más de 100 000 habitantes, entre las cuales dos ya habían sobrepasado el millón.

Este hecho —la pequeña expresión numérica de la población urbana— y el control de la población rural por los grandes propietarios, permitieron que el gobierno de Prudente de Morais restaurara en toda su plenitud el dominio de los señores rurales, que lo retendrían, al principio con facilidad y después con serios problemas, hasta 1930. En realidad Prudente de Morais pacificó al país, calmando a los monárquicos y antiflorianistas que luchaban contra el gobierno del segundo mariscal, reprimió movimientos populares de orientación política indefinida —Canudos—, absorbió a los republicanos más radicales y eligió a un hombre de su confianza —Campos Sales— para que lo sucediera. Campos Sales, republicano histórico que había participado en la Convención Republicana de Itu en 1873, era un hombre ligado a los grandes hacendados del café de São Paulo; no sólo restauró las finanzas del país sino también fortaleció a los gobernadores de los Estados al crear la llamada política de los gobernadores. Gracias a esta política pudo fortalecer a las oligarquías del Estado que elegían a los gobernadores, ya que al funcionar las unidades políticas como partidos, una vez desaparecidos los partidos nacionales del periodo imperial, posibilitó el dominio de los Estados ricos y muy poblados sobre los Estados de escaso valor demográfico. Por esta razón Barbosa Lima Sobrinho⁴ demostró que solamente dos Estados podían aspirar con posibilidades de éxito a la presidencia de la República —São Paulo y Minas Gerais— y apenas tres a la vicepresidencia —Pernambuco, Bahía y Río de Janeiro. Río Grande do Sul que deseaba, sin éxito, la presidencia rehusaba, o

⁴ *A Verdade sobre a Revolução de Outubro*, pp. 261-262. Edição Unitas. São Paulo, 1933.

mejor no disputaba, el segundo puesto. Si observamos la población de los distintos Estados del Brasil en los censos realizados durante la "Vieja República" (tabla 1) y teniendo en cuenta que el número de electores depende del número de habitantes, debemos reconocer que el esquema paulista-mineiro fue muy bien planeado y por esta misma razón funcionó, con algunos contratiempos, durante casi 40 años.

TABLA I
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS DEL BRASIL DE 1890 A 1920

Estados	Población		
	1890	1900	1920
Amazonas	147 915	249 756	363 166
Pará	328 455	445 356	983 507
Maranhão	430 854	499 308	874 337
Piauí	267 609	334 328	609 003
Ceará	805 687	849 127	1 314 228
R. Grande do Norte	268 273	274 317	537 135
Paraíba	457 232	490 784	961 106
Pernambuco	1 030 224	1 178 150	2 154 835
Alagoas	511 440	649 273	978 748
Sergipe	310 926	356 264	477 064
Bahía	1 919 802	2 117 956	3 334 456
Minas Gerais	3 184 099	3 594 471	5 888 174
Espírito Santo	135 997	209 783	457 328
Río de Janeiro	876 884	926 035	1 559 371
Distrito Federal ¹	522 651	811 443	1 157 873
São Paulo	1 384 753	2 282 279	7 592 188
Paraná	249 491	327 136	685 711
Santa Catarina	283 769	320 289	668 743
R. Grande do Sul	897 455	1 449 070	2 182 713
Goiás	227 572	255 284	511 908
Mato Grosso	992 827	118 025	246 612
BRASIL	14 333 915	17 438 434	30 675 605

¹ Actual Estado de Guanabara.

Fuente: Anuário Estatístico do Brasil 1968.

Los Estados de Minas Gerais y São Paulo, que reunían los dos juntos un tercio de la población brasileña —32% en 1890, 33% en 1900 y 34% en 1920—, atraían hacia su área de influencia a un Estado mediano a quien daban la vicepresidencia y a algunos Estados pequeños que recibían otras compensaciones, resolviendo así el problema de la sucesión. Esta es la razón por la cual durante el periodo de 1894 a 1930 hubo una serie de presidentes electos sin competencia o con una competencia insignificante, que obtenían de este modo una votación superior al 80% del electorado. Pocas veces, como en

1910, el candidato oficial tuvo que hacer un esfuerzo para vencer al opositor, también representante del grupo dominante. Esta política de los gobernadores de permitir el sistema de voto restringido a una pequeña área de la población, los fraudes generalizados en la votación y en el cómputo y el reconocimiento de los electos por el Congreso, sujeto éste a la influencia del Poder Ejecutivo consagraban al sistema, fortaleciendo el dominio de la aristocracia rural, de los hacendados del café de São Paulo y de los ganaderos de Minas Gerais. Este esquema político se llamaba “café con leche”. La tabla II demuestra lo efectivo del sistema al indicar el porcentaje de votos obtenidos por los candidatos a la presidencia de la República y de dónde provenían.

TABLA II

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BRASIL: 1894-1930

Año de las elecciones	Nombre de los presidentes	Origen del pres. electo	% de la votación del electo sobre el competidor
1894	Prudente de Moraes	paulista	84.29
1898	Campos Sales	paulista	90.93
1902	Rodrigues Alves	paulista	91.71
1906	Alfonso Pena	mineiro	97.92
1910	Hermes da Fonseca	gaúcho	57.07
1914	Venceslau Brás	mineiro	91.59
1918	Rodrigues Alves	paulista	99.06
1919	Epitácio Pessoa	paraibano	71.00
1922	Artur Bernardes	mineiro	56.03
1926	Washington Luis	fluminense	97.99
1930	Julio Prestes	paulista	57.74

FUENTE: Guerreiro Ramos. *A crise do poder no Brasil*.

Como se puede ver, de once presidentes electos, seis eran “paulistas”, si consideramos como tal al señor Washington Luis, que estudió e hizo su carrera política en São Paulo, y tres eran “mineiros”. Hubo apenas un “gaúcho” cuya candidatura fue el producto de una ruptura en la oligarquía dominante con la consiguiente atracción política de los militares; y un “paraibano”, electo para completar el segundo mandato del presidente Rodrigues Alves, que murió antes de la toma de posesión. Sólo cuatro veces, en las once elecciones, el candidato electo logró menos de cuatro quintos de los votos: en 1910, en ocasión de la Campaña Civilista en la que Rui Barbosa le disputó la presidencia al mariscal Hermes da Fonseca; en 1919, cuando nuevamente Rui Barbosa le disputó el cargo a Epitácio Pessoa; en 1912,

cuando Nilo Peçanha, con el apoyo de Rio de Janeiro, de Bahía y de Rio Grande do Sul, al frente de la famosa Reacción Republicana, le disputó el poder a Artur Bernardes; y finalmente en 1930 cuando se rompió el eje São Paulo-Minas Gerais, Getulio Vargas, con el apoyo de Paraíba, de Minas Gerais y de Rio Grande do Sul, disputó la preferencia del electorado al candidato paulista Julio Prestes. Muchos de estos presidentes llegaron a la elección como candidatos únicos, por lo cual se entiende la facilidad con la que obtuvieron unánimemente al electorado, como fue el caso de Rodrigues Alves, Alfonso Pena y Washington Luis.

Para caracterizar aún más el dominio de los grandes Estados conviene relacionar también a los vicepresidentes de la República durante el periodo de 1894-1930, con sus respectivos lugares de origen: Manoel Vitorino de Bahía; Rosa e Silva de Pernambuco; Silviano Brandão que murió antes de la toma de posesión y Alfonso Pena, "mineiros"; Nilo Peçanha, "fluminense"; Venceslau Brás, "mineiro"; Urbano Santos del Estado de Maranhão; Delfim Moreira que murió antes que concluyera el periodo de gobierno y Bueno de Paiva, "mineiros"; Estácio Coimbra de Pernambuco; Melo Viana, "mineiro"; y Vital Soares, "bahiano". Tenemos entonces que, el Estado de Minas Gerais, además de tres presidentes, eligió vicepresidentes durante la Vieja República en cuatro periodos de gobierno.

El desarrollo económico del país, el crecimiento de una industria liviana y la formación de una clase media urbana y de un proletariado industrial, iban a provocar rupturas en el sistema, ya que nuevos elementos sin condiciones favorables para llegar al poder deseaban hacerlo, a pesar de las estructuras establecidas. Esta fue la causa de las grandes agitaciones de 1910 provocadas por la Campaña Civilista, de las intervenciones militares en varios Estados durante el gobierno de Hermes da Fonseca y de las rebeliones que sacudieron al país durante el periodo posterior a la Gran Guerra, y que culminó con la caída del régimen en 1930.

II

LA DECADENCIA DE LA VIEJA REPÚBLICA Y LAS INSURRECCIONES MILITARES

La unanimidad de votos obtenidos por el dúo Rodrigues Alves-Delfim Moreira en 1918 no anunciaba las agitaciones que iban a ocurrir durante ese cuatrienio. La elección de Epitácio Pessoa como

el candidato para suceder al presidente electo, muerto antes de la toma de posesión, provocó la reacción de Rui Barbosa, quien se presentó como candidato de la oposición. Sin embargo, no pudo hacer una campaña con el ardor y la receptividad que había tenido en 1910, y obtuvo menos del 30% de los sufragios.⁵ Epi-tácio Pessoa, hombre de gran cultura e intensa vida social, era, á raíz de su formación, profundamente autoritario y tan civilista que nombró un gabinete compuesto exclusivamente por civiles, como ocurría frecuentemente en el imperio. Este hecho disgustó naturalmente a los militares, y un grupo de jóvenes oficiales comenzó a protestar contra los actos del gobierno. Estas protestas obtuvieron mayor repercusión, debido al apoyo dado por oficiales superiores del ejército, como el ex presidente mariscal Hermes da Fonseca, y al descrédito que el régimen había alcanzado en los centros urbanos, donde al lado de la burguesía comercial e industrial estaban los obreros que realizaban manifestaciones, a veces pidiendo mejores salarios y condiciones más humanas de trabajo, a veces orientadas políticamente por corrientes anarquistas y, a partir de 1922, comunistas.

En realidad, la influencia obrera que iba en aumento desde el Congreso Obrero de 1906, provocó la formación de sindicatos y la aparición de algunos periódicos en los cuales se hacía, hasta 1920, propaganda de las ideas anarcosindicalistas.⁶ La Revolución rusa iba a tener gran repercusión en el país,⁷ como en todo el mundo, haciendo que tanto Epi-tácio Pessoa como sus sucesores reprimieran con fuerza al movimiento comunista. La expresión electoral de este partido era pequeña, no sólo por el reducido número de electores dentro de las clases menos favorecidas sino por la influencia en la capital de la República de políticos radicales aunque no comunistas, como Mauricio de Lacerda.

La sucesión de Epi-tácio Pessoa y la candidatura anterior del gobernador de Minas Gerais fueron muy agitadas, sobre todo después de la divulgación en el *Correio da Manhã* de una carta falsa que se atribuyó al candidato Artur Bernardes,⁸ en la cual se ofendía a las fuerzas armadas, poniendo en duda sus bríos militares. Se organiza-

⁵ Viana Filho, Luis, *ob. cit.*, pp. 403 y ss.

⁶ Pereira, Astrogildo. *Formação do PCB*, pp. 13 y ss. Vitória, Río de Janeiro, s/f.

⁷ Bandeira, Muniz, Melo, Clovis e Andrade, A. T. en *O Ano Vermelho. A Revolução Rusa e seus reflexos no Brasil. Civilização Brasileira.* Río de Janeiro, 1967.

⁸ Rodrigues, José Honório. *Teoria da História do Brasil* (Introdução Metodológica), vol. II, pp. 509-19, 2 ed. Livraria Editora Nacional São Paulo s/f y Silva, Hélio en 1922. *Sangue na Areia de Copacabana*, pp. 59-99. Editora Civilização Brasileira S. A., Río de Janeiro, 1964.

ron comisiones para analizar la autenticidad de la carta; la prensa, divididas las opiniones, explotó considerablemente el asunto, y los militares, agitados, comenzaron a hacer severas críticas al presidente. Después de las críticas, las peleas callejeras y los actos de indisciplina, que culminaron con la prisión del mariscal Hermes da Fonseca, los militares pasaron a la rebelión que estalló simultáneamente en la Escuela Militar y en el Fuerte de Copacabana. Una vez fracasada la rebelión, que culminó con la salida del Fuerte, de los 18 últimos revolucionarios para enfrentarse a las tropas del gobierno, Epitácio Pessoa trató de reprimir con energía a los revoltosos. Esperaba de esta manera, mantener el orden y la estabilidad del régimen. Gracias a su acción enérgica pudo entregarle el gobierno a su sucesor el 15 de noviembre de 1922, a pesar de la agitación general del país.

Si Epitácio Pessoa, por ser muy enérgico y celoso de su autoridad, no fue capaz de poner en marcha las reformas que el país necesitaba, su sucesor, lleno de odio, trató de vengarse de las ofensas sufridas durante la campaña electoral, sofocando cualquier tendencia contraria a su voluntad y sus puntos de vista. En seguida después de su toma de posesión como presidente de la República, se vengó de su opositor, Nilo Peçanha, al intervenir y deponer al gobierno del Estado de Rio de Janeiro. No se atrevió a intervenir en el Rio Grande do Sul pero sí obligó al presidente del Estado, el doctor Borges de Medeiros, a celebrar un acuerdo con la oposición que había apoyado la candidatura de Bernardes en la campaña presidencial, que minaba el poder político del viejo dirigente "gaúcho". Para completar la obra reaccionaria de Pessoa, que había comenzado con la ley contra los comunistas y con la ley de prensa, agregó Bernardes otras medidas como

La reforma constitucional en el sentido de la restricción de las garantías jurídicas de los derechos individuales y también para ampliar las facultades de la Unión ante los Estados; quitó a los jurados de su competencia un tanto compasiva el que juzgaran crímenes políticos, considerados como imprescriptibles, cuando el reo se encontrara fuera del país. Aconsejó la pena de muerte en una declaración solemne, en los mensajes presidenciales.⁹

Esta actitud llevaría a los jóvenes militares, bajo el mando del venerado general Isidoro Dias Lopes, a una nueva revolución en São Paulo el 5 de julio de 1924. Este segundo 5 de julio tendría mayor

⁹ Lima Sobrinho, Barbosa, *op. cit.*, p. 4.

repercusión que el primero, ya que los revolucionarios pudieron ocupar por 24 días la ciudad, segunda en importancia del país. El presidente de la República, con el apoyo del presidente del Estado de São Paulo, que había abandonado su ciudad para no caer prisionero de los rebeldes, llegó al extremo de bombardear la capital "paulista". Este hecho provocó el repudio de la población civil, como lo atestigua Macêdo Soares, inclusive el de la clase conservadora, la que tuvo ocasión de comparar la actitud respetuosa de los revolucionarios que ocuparon la ciudad durante varios días, con la actitud del gobierno, que al bombardear la ciudad no tuvo el menor respeto por la vida y los bienes de la población. Tan notorio fue este hecho que cuando entraron en la ciudad las "fuerzas de la legalidad fueron acogidas por la población urbana con la frialdad que se recibe a las fuerzas enemigas vencedoras".¹⁰

Después de perder a uno de sus líderes, Joaquín Távora, y entre otras razones para evitar el sitio que gradualmente se imponía por las fuerzas movilizadas por el gobierno federal y estatal, los rebeldes abandonaron la gran ciudad y se dirigieron hacia los barrancos del Río Paraná, al oeste del Estado del mismo nombre, en espera de que otros levantamientos previstos en otros Estados les ofrecieran mejores condiciones para continuar la lucha.

Ahí permanecieron hasta el 27 de abril de 1925, en espera de las guarniciones acuarteladas en el interior de Río Grande do Sul, que marchaban a su encuentro bajo el mando del capitán Luiz Carlos Prestes.

Era sumamente difícil la permanencia al oeste del Paraná de las fuerzas rebeldes, por las grandes dificultades en la comunicación y el abastecimiento y por el combate contra las fuerzas legalistas bajo el mando del general Rondon, quien poseía una gran experiencia y un gran conocimiento de la vida en el interior del país. Cuando las tropas sublevadas se unieron a los revolucionarios paulistas el 24 de octubre de 1924 en Santo Angelo, después de la victoria de los legalistas en Catanduva, comprendieron que era imposible sostener una guerra de posiciones que los mantenía ocupando una porción del territorio nacional; adoptaron la táctica de hacer una guerra de movimiento que podía ser sostenida por una pequeña tropa mal armada siempre que tuviera el apoyo de la población. Esta decisión hizo que algunos oficiales rebeldes que no estaban de acuerdo, se exiliaran, mientras que la mayoría de la oficialidad deliberaba sobre si se debe-

¹⁰ Silva, Hélio - 1922 *Sangue na Areia de Copacabana*, p. 389. Editora Civilização Brasileira. R. de Janeiro, 1964.

ría atravesar la República del Paraguay para comenzar la marcha en Mato Grosso, donde los contingentes legalistas eran débiles. Enviaron al general Isidoro Lopes a Buenos Aires, donde serviría de elemento de enlace con el exterior, ya que por su avanzada edad no estaba en condiciones de participar en una marcha tan dura, y atravesaron el territorio paraguayo en siete días, volviendo al territorio brasileño por el sur del Estado de Mato Grosso el 3 de mayo de 1925.

Una vez en Mato Grosso, las tropas "gaúchas", que constituían el mayor contingente de la columna, se alegraron con el regreso al campo, parecido al de Rio Grande do Sul, y con el encuentro de grandes contingentes de población provenientes de su Estado que ahí se habían establecido en migraciones sucesivas. Sin embargo, surgió un serio problema entre los dos jefes militares: Miguel Costa de los "paulistas" y Luiz Carlos Prestes de los "gaúchos" debido a las divergencias sobre la táctica que debía ser empleada. El primero opinaba que la columna debía marchar hacia Río de Janeiro para tratar de derrotar a las fuerzas legalistas y deponer al presidente, mientras que el segundo, comprendiendo la debilidad de sus fuerzas, prefería hacer una guerra de movimientos, recorriendo los sertones, sublevando a los descontentos y desmoralizando a los legalistas. La columna tuvo que adoptar una de las dos estrategias y optó por la segunda. Se organizó un mando unificado que debería conducirla por los difíciles caminos de los sertones brasileños. Una vez unificado el mando, ocupó el puesto de comandante el oficial de más alto grado, el general Miguel Costa, mientras que el Estado Mayor, compuesto por los mayores Paulo Kruger e Gerí, por los capitanes Costa y Landucci y por los tenientes Sadi, Nicácio y Morgado, tenían como jefe al coronel Luiz Carlos Prestes, como subjefe al coronel Juarez Távora y como secretario al licenciado Lourenço Moreira Lima. Las tropas estaban divididas en cuatro destacamentos respectivamente, al mando de Cordeiro de Farias, João Alberto, Siqueira Campos y Djalma Dutra,¹¹ todos ellos jóvenes y experimentados en las luchas revolucionarias desde 1922.

La marcha que la columna iba a iniciar por regiones inhóspitas y poco pobladas, a pie o a caballo, enfrentando enemigos, tanteando un terreno desconocido, fue una hazaña épica, contada con gran entusiasmo por los más diversos escritores como Jorge Amado,¹² Caio

¹¹ Lima, Lourenço Moreira. *A Coluna Prestes (Marchas e Combates)*, 150 pp. Editora Brasiliense S. A. São Paulo, 1945.

¹² Vida de Luiz Carlos Prestes. *El Caballero de la Esperanza*. Editorial Claridad, Buenos Aires, 1942.

Prado Junior,¹³ y por los mismos participantes como Moreira Lima Landucci¹⁴ y João Alberto.¹⁵ Sin embargo, estos hechos fueron analizados con cierta frialdad por Barbosa Lima Sobrinho, cuando afirmó que la "Columna inició sus *raids* aventureros, desde los desiertos del Mato Grosso hasta los llanos del Piauí, en un esfuerzo, más notable por los sacrificios que por el mérito militar".¹⁶ Por el contrario, Caio Prado Junior hace hincapié en su alta significación política y afirma que la columna:

Dejó una marca profundamente grabada en nuestra evolución histórica. Para reconocerlo, no es necesario que seamos historiadores; los hechos ocurrieron ayer y actualmente vivimos un momento para el cual la Columna Prestes contribuyó directa o indirectamente. ¿Acaso no fue su resultado la Revolución de 1930? ¿No sentimos aún hoy las consecuencias inmediatas de este último acontecimiento?¹⁷

Después de Porto Lindo, lugar por donde la columna penetró en Mato Grosso, marcharon hacia el norte, luego hacia el oeste atravesando la parte meridional de Goiás para poder penetrar en la parte occidental de Minas Gerais. Durante esta primera etapa, se enfrentó, con algún éxito militar, no sólo a las fuerzas federales del ejército sino a la policía estatal y a los matones armados por los hacendados que movilizaban verdaderos ejércitos particulares con el apoyo del gobierno federal. El mayor Klinger, el mismo que años más tarde sería la figura central de la Revolución Constitucionalista de São Paulo, se iba a destacar como uno de los más decididos enemigos de la columna en Goiás, donde contaba con el apoyo de las fuerzas armadas por la familia Caiado que dominaba políticamente al Estado. La población, ignorante, enferma, que vivía en condiciones económicas miserables y que estaba dominada por los grandes propietarios, recibió a la columna con cierta indiferencia, refugiándose a su paso en los matorrales, o recibéndola en sus ciudades y villas con misas y fiestas. Solamente algunos líderes de la oposición se sentían inflamados a su llegada y promovían misas y mítines; algunos voluntarios se incorporaron a ella. Esta actitud se explica por el temor que existía a las represiones por parte de las fuerzas legalistas, después del paso

¹³ En Prefacio al libro de Lourenço Moreira Lima, *op. cit.*, pp. 11-15.

¹⁴ *Cenas e Episódios da Coluna Prestes*, 2ª ed. Editora Brasiliense S. A. São Paulo, 1952.

¹⁵ *Memórias de um Revolucionário*, 1ª Parte - A marcha da Coluna. Editora Civilização Brasileira. 1953.

¹⁶ *Op. cit.*, p. 5.

¹⁷ *Op. cit.*, p. 11.

de la columna y por los frecuentes pedidos que la misma columna hacía de abarrotes y de animales, que dañaban los intereses de los propietarios.

El 12 de septiembre la columna invadió Goiás una vez más, en marcha hacia el norte para alcanzar el Estado de Maranhão, donde esperaba obtener refuerzos y sublevar a los poblados. Durante este recorrido ocupó por algunos días la ciudad de Pôrto Nacional, y de ahí partió hacia Carolina por donde cruzaron el Río Tocantins el 15 de noviembre. Después de abandonar el territorio de Goiás, la columna estuvo en Maranhão y en Piauí, Estados en los que permaneció hasta el 22 de enero de 1926, pues fue ahí donde recibió las mayores adhesiones. El mismo Moreira Lima afirma que:

los hechos probaron más tarde que él (Prestes) tenía razón, pues solamente en Maranhão y en Piauí la columna tuvo adhesiones considerables. En los demás Estados del norte las poblaciones huían a los matorrales o se colocaban del lado del gobierno, atraídas por el derroche de dinero que Bernardes había ordenado hacer en esas regiones por intermedio de sus partidarios. El número de voluntarios que se presentó fue ridículo.

Nuestros compatriotas, que vivían bajo el azote de las oligarquías reinantes, se mantuvieron en sus casas o escondidos en la oscuridad, mientras peleábamos contra fuerzas muchas veces superiores a las del bandolerismo al cual debíamos enfrentarnos.

Este alejamiento fue el resultado lógico de la profunda e innumerable ignorancia de nuestros "sertanejos", que están completamente desposeídos de patriotismo.

Además, en el Brasil actual no existe un verdadero sentimiento cívico, ni siquiera en las grandes ciudades del litoral.

En el interior del país el pueblo es semibárbaro y no tiene noción clara de lo que significa una patria. Aún está dominado por el sentimiento de la esclavitud y vive aterrorizado ante el señor que se les presenta bajo la forma de justicia, les quita los bienes y los mete en las prisiones, del *governo* que los *escorcha* de los *dêritos*, que les pega y los asesina en masa cuando osan insinuar el más leve gesto de rebelión contra sus prepotencias.¹⁸

Las adhesiones recibidas en los dos Estados hicieron que los revolucionarios pensaran en apoderarse de estos para fortalecer la acción

¹⁸ *Op. cit.*, pp. 181-2.

revolucionaria, pero esa esperanza se les fue a tierra cuando fue aprehendido el mayor Paulo Kruger, coordinador del movimiento en Maranhão, cuando se aproximaba a la ciudad de Grajaú. Rumbo a Piauí sitiaron la capital del Estado donde las tropas gobiernistas esperaban oponer una seria resistencia. Ahí cayó prisionero el coronel Juárez Távora, subjefe del Estado Mayor de la columna. Después del fracaso de Terezina los revolucionarios marcharon hacia el oeste y entraron en el Estado de Ceará por Poti el 22 de enero de 1926. A esta altura de los acontecimientos el gobierno armaba a los caciques y a los "cangaceiros" del sertón con tal que combatieran a la columna por parte de las fuerzas legales. Entre los jefes "seranejos" convocados, que lucharon contra la columna, se destacó Floro Bartolomeu, diputado federal y lugarteniente del padre Cícero Romão de Ceará;¹⁹ Horacio de Matos, un caudillo que durante muchos años dominó y asoló la región del sertón de Bahía;²⁰ José Honorio Granja y Francklin de Albuquerque.²¹ Sin embargo la columna, con gran movilidad, presentaba pequeños combates y trataba de acercarse a los centros urbanos del litoral donde esperaba provocar sublevaciones encabezadas por oficiales jóvenes. Por esta razón cruzaron el Ceará y entraron a Río Grande do Norte en dirección oeste-este. Al doblar hacia el sur la columna invadió Paraíba, combatiendo constantemente con los elementos gobiernistas, hasta que el 8 de febrero encontraron una seria resistencia en la ciudad de Piancó. Esta resistencia era encabezada por el padre y diputado y jefe político Aristides Ferreira da Cruz quien murió en combate después de haber organizado una emboscada contra el destacamento de Cordeiro de Farias. Rumbo al sur, la columna cruzó Pernambuco esperando una sublevación que había sido coordinada en Recife por el joven teniente Cleto Campelo. Cuando la sublevación falló, su jefe fue muerto en la ciudad de Gravatá mientras caminaba con algunos compañeros en busca de la columna. Después del fracaso de Cleto Campelo no quedaba ninguna posibilidad de una sublevación general; a la columna no le quedaría otra salida que la de recorrer el territorio brasileño, cansada, mal armada y pobre de municiones, siempre perseguida por fuerzas legales bastante superiores, bajo el mando del general Mariante y de los jefes rurales.

¹⁹ Lima, Lourenço Moreira, *ob. cit.*, pp. 243 y ss.

²⁰ Moraes, Walfrido. *Jagunços e Heróis*, pp. 181-203. Editora Civilização Brasileira S. A. Rio de Janeiro, 1963.

²¹ Carneiro, Glauco. *História das Revoluções Brasileiras*, vol. II p. 306. Edições O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 1965.

armados y adiestrados por el ejército, que estaban al mando de matones, como Horacio de Matos, Francklin de Alburquerque y Abílio Volney.

El 26 de febrero la columna cruzó el Río San Francisco e invadió Bahía, siguiendo hacia el sur por la margen derecha de este río hasta llegar al norte de Minas Gerais. Si hubiese estado mejor equipada habría podido parecer que caminaba en la dirección de la capital federal, para presentar su última y decisiva batalla. Sin embargo, comprendiendo su debilidad material, regresó hacia el norte, desorientando a los que la perseguían, y volvió a entrar en territorio bahiano sin dejar de enfrentarse a las fuerzas legales, a los "sertanejos" aguerridos y a las emboscadas, en una región de clima semiárido y con vegetación de sabana, donde las dificultades para el abastecimiento eran enormes y las posibilidades de encontrar escondites para recuperarse de las largas marchas diarias que variaban entre 30 y 60 kilómetros, eran nulas.

El 30 de julio de 1926, la columna cruzó otra vez el Río San Francisco y regresó a territorio de Pernambuco. Durante más de cuatro meses había estado en constante movimiento en los territorios de Minas Gerais y Bahía, por los que recorrió 5 022 kilómetros en un promedio de 1 250 kilómetros por mes y de 41 kilómetros por día. Comienza entonces una nueva etapa de la columna: el viaje a través de un país de dimensiones continentales hacia la frontera, hacia el exilio, siempre perseguida por numerosas fuerzas que no le dieron tregua. La valentía de sus soldados y la indudable competencia de sus jefes la condujeron una vez más a través de los sertones de Pernambuco, penetrando en Piauí de donde se dirigieron hacia el sur, por una región donde prácticamente no había carreteras; invadieron el oeste de Bahía, por el municipio de Corrente, el 15 de agosto. En Formosa los esperaba, otra vez, el caudillo Honório de Matos, y poco después el caudillo Abílio Volney en territorio de Goiás, que la columna nuevamente debía cruzar. Los revolucionarios marchaban hacia la frontera boliviana. Lucharon en Goiás y en Mato Grosso, y el 3 de febrero de 1927, la columna, con 620 hombres que no estaban en condiciones de seguir la lucha, se internó en territorio boliviano con todo su Estado Mayor. El destacamento Siqueira Campos, que se había separado del grueso de la columna el 25 de octubre de 1926, había recorrido otra ruta, a marcha forzada para alcanzarla; se internó en territorio paraguayo por Bela Vista el 23 de marzo de 1927 con 65 hombres. El objetivo de esta separación era cumplir algunas misiones tácticas y establecer

contacto con el general Izidoro Lopes, que estaba en el exilio. La marcha de la columna llegaba a su fin, después de hacer un recorrido a través de diez Estados de Brasil que el mismo Prestes calcula en 36 000 kilómetros, es decir, aproximadamente 1 440 kilómetros por mes, con un promedio de 46 kilómetros diarios.

Aunque no obtuvo victorias militares ni entusiasmó a las grandes masas del interior del país, ni alertó a los habitantes del campo sobre las reivindicaciones de sus derechos postergados durante siglos, la columna tuvo consecuencias de gran peso y una gran influencia en los acontecimientos políticos del país hasta nuestros días. Sembró las ideas de reformas políticas que se llevarían a cabo con la revolución de 1930. No pocos de sus jefes participarían activamente en las subsecuentes transformaciones políticosociales. Es muy interesante subrayar el hecho que aunque la columna fue clasificada como un movimiento de izquierda en relación con la situación política dominante, no presentaba una ideología que pudiera orientar las transformaciones políticas y sociales para modernizar al país. En la época en que la columna recorría el sertón, existían enormes divergencias ideológicas entre sus jefes, ya que Juárez Távora era católico practicante, Miguel Costa, espiritista, y Cordeiro de Farias, Siqueira Campos, João Alberto y Luiz Carlos Prestes “daban la impresión de no preocuparse por la existencia de Dios o del alma”.²² A eso se debe que los héroes de la columna tomaron luego los más diversos rumbos políticos, tomando Juárez Távora y Cordeiro de Farias posiciones políticas de centro-derecha, mientras que João Alberto se iba a revelar un liberal, Miguel Costa, socialista y Luiz Carlos Prestes, el líder de los comunistas brasileños durante treinta años.

La columna, gracias a su gran movilidad que le permitió durante treinta meses recorrer el territorio brasileño de norte a sur, pudo derrotar en ocasiones a la fuerza enemiga y huir del cerco cuidadosamente preparado por generales del ejército y por caciques latifundistas, acostumbrados a la pelea. Sin embargo, no pudo ser detenida.

La columna constituye una experiencia formidable de guerrilla y de guerra de movimientos en América Latina, durante el periodo anterior al uso de la aviación militar en gran escala. Por otra parte fue la circunstancia que preparó la semilla que sacudió los cimientos de las instituciones políticas, y que contribuyó a su derrumbe en 1930.

²² Lima, Lourenço Moreira, *ob. cit.*, p. 318.

LA PRESIDENCIA DE WASHINGTON LUIS Y EL DRAMA DE SU SUCESIÓN

La nación estaba cansada después de los cuatro años del periodo del presidente Bernardes, que transcurrieron en permanente estado de sitio. El presidente dominó al país con mano de hierro, deportó a los revolucionarios presos a la isla deshabitada de Trinidad en el Océano Atlántico y al penal de Cleveland en la Amazonia; pero con todo, no pudo extinguir la revuelta. La columna dejó el territorio brasileño y la lucha cuatro meses después de la toma de posesión de su sucesor. Los políticos, que no habían sido callados por la fuerza, lo apoyaron y no tuvieron la valentía, salvo raras excepciones, para denunciar la dictadura que se estaba implantando en el país.

Respetando la política del "café con leche", Bernardes señaló como su candidato a la sucesión a un ex presidente del Estado de São Paulo, que lo había apoyado en forma decisiva en su ascenso al poder. Éste, sin competidor, fue electo por casi unanimidad de votos (98%). Washington Luis, a quien llamaban el "paulista de Macaé",²³ era un hombre excesivamente rígido y muy celoso de su autoridad; tenía fama de buen administrador y experiencia como regente de la segunda ciudad del país y presidente del Estado más rico de la Federación. Se le atribuía la frase "gobernar es hacer carreteras" a causa de la atención predominante que le daba a la cuestión de transporte por carretera.

Barbosa Lima Sobrino,²⁴ quien a la agilidad mental de periodista unía la sutileza y la minuciosidad del historiador, hizo un serio análisis del carácter del nuevo presidente, haciendo hincapié en sus "predicados de rectitud y sencillez". Agrega además, que:

Hombre leal, incapaz de subterfugios o de maldad, posee un sentido psicológico elemental. No se da cuenta de la complejidad de las almas, de los secretos y las sutilezas de la astucia. Para él el mundo se divide en dos categorías, la de los hombres malos de quienes se aleja y a los que combate sin tregua, y la de los hombres buenos para quienes reserva todos los premios. En lo que se refiere a la división de clases, cede ante conclusiones apresuradas y elementales y solamente las revisa ante hechos consumados y por lo general irremediables.

²³ Se le llamaba así porque había nacido en la ciudad de Macaé, en el Estado de Rio de Janeiro, pero realizó toda su carrera política en São Paulo.

²⁴ *Ob. cit.*, pp. 55-56.

Al tomar posesión del cargo de presidente de la República dio libertad de acción a sus escasos oponentes, respetó la libertad de prensa y dejó que terminara el estado de sitio sin darle prórroga. Después de su viaje a Europa como presidente, y aterrorizado por el comunismo, hizo que en 1927 se votara contra esa ideología una ley más dura aún que la de 1921; cuentan que en cierta ocasión dijo que la "cuestión social es asunto de la policía". No trató de encaminar al Parlamento leyes que atendieran las reclamaciones de los trabajadores que ya estaban organizados en sindicatos en las principales ciudades. En esta misma época, un pequeño partido comunista se aliaba con políticos de izquierda que tenían influencia popular en Rio de Janeiro y formaban coaliciones con el Bloque Obrero para poder competir en elecciones en las grandes ciudades.²⁵ Entre los dirigentes de este partido, obreros e intelectuales, se destacaban Astrogildo Pereira, Leônidas de Rezende y Cristiano Cordeiro. Vivía clandestinamente y adoptaba líneas políticas profundamente sectarias. Entre los políticos que participaron en el bloque destacó Azevedo Lima, y entre las organizaciones, el Centro Político Proletario de la Gavea y el Centro Proletario de Niterói. Además, estos gremios que se aliaron a los comunistas sostenían un programa que defendía como principios básicos: *a*) una política de la clase obrera que fuese independiente de la influencia burguesa; *b*) crítica y combate sistemático a los intereses de la plutocracia; *c*) lucha contra el imperialismo inglés y americano; *d*) el reconocimiento *de jure* de la Unión Soviética; *e*) amnistía para los presos políticos; *f*) lucha por la promulgación de un Código del Trabajo; *g*) lucha por la derogación de las leyes de excepción (Ley Adolfo Gordo, Ley de Expulsión de los Obreros Extranjeros, Ley de Prensa); *h*) disminución del impuesto de consumo y elevación del impuesto a la renta; *i*) reforma monetaria que hiciera posible el abaratamiento del costo de la vida; *j*) necesidad de una política de habitación, enseñanza y educación que beneficiara a la masa obrera y, finalmente, *k*) consagración del principio del voto secreto.

Además de las organizaciones que integraban el Bloque Obrero, que aunque poseían poca expresión electoral organizaban huelgas de gran repercusión en las principales ciudades, existían otras organizaciones proletarias o semiproletarias, de origen reformista o anarquista, que tuvieron una gran actuación contra la política gubernamental que se negara a manifestar cualquier tipo de interés por la

²⁵ Pereira, Astrogildo. *Formação do P. C. B.* pp. 87 y ss. Editorial Vitória, Rio de Janeiro, s/f.

cuestión social. Entre estas organizaciones se destacaban el Partido Socialista, el Centro Político de los Obreros del Distrito Federal, el Centro Político de los Choferes y el Partido Unionista de los Empleados de Comercio. El orador y panfletista Mauricio de Lacerda tenía gran influencia en los medios populares aunque siempre rehusó participar en el Bloque Obrero. Este último, más tarde llamado Bloque Obrero y Campesino (BOC), tuvo tanto éxito en las elecciones de 1928 que sus miembros lo sobreestimaron y cometieron el error de lanzar la candidatura de dos de sus miembros para el puesto de presidente y vicepresidente de la República, en marzo de 1930; igualmente lo hicieron para los cargos de senador y diputado federal,²⁶ sin contar con la menor posibilidad de éxito, cuando sus fuerzas apenas alcanzaban para elegir unos pocos miembros en la alcaldía de las grandes ciudades.

Al final del gobierno de Washington Luis el movimiento obrero tenía poca expresión tanto en el sector político donde, como ya dijimos, tenía poca influencia entre las masas y estaba muy dividido, como en el sector sindical, donde en una población obrera de 1 500 000 trabajadores, sólo 100 000 estaban sindicalizados, de los cuales el 40% vivía en Rio de Janeiro, capital de la República. Entre las federaciones de sindicatos, había solamente la Federación Sindical Regional de Rio, la Unión General de los trabajadores de Pernambuco y la Federación Poligráfica, que tenía alcance nacional. Mientras que la policía reprimía las manifestaciones y reivindicaciones obreras, Washington Luis trataba de realizar la reforma monetaria, obra que consideraba la más importante de su gobierno. Por esta razón, 18 días después de su ascenso al poder envió al Congreso el proyecto de reforma financiera que se hizo ley, con el número 5 108, el 18 de diciembre de 1926. Esta ley determinó la quiebra del patrón monetario de 27d (paridad establecida en 1846) y lo cambiaba a 5 115/128 peniques por cada mil "réis", tasa inferior a la del último quinquenio.²⁷ Washington Luis sucedió al gobierno inflacionista de Bernardes con la preocupación de limitar los egresos, normalizar la balanza del comercio exterior y regularizar la deuda pública. Su gran preocupación era estabilizar la moneda. El fracaso total de su plan financiero se demostró en 1929, cuando la crisis económica internacional comenzó a reflejarse en Brasil. Fue así como una brusca depreciación de la moneda provocó el rápido consumo de las reservas del depósito en oro que "de 796 mil *contos* en enero de 1920 se

²⁶ Pereira, Astrogildo. *Ob. cit.*, p. 103.

²⁷ Barbosa Lima Sobrinho, *ob. cit.*, pp. 18-19.

redujeron a 343 mil *contos* en abril, y a 134 mil *contos* en agosto".²⁸ El economista Humberto Bastos, al analizar la situación económica del país,²⁹ nota que:

mientras la fortuna pública de 1914 a 1926 había subido en Alemania de 310 a 350, en Francia de 245 a 295, en Italia de 90 a 119, en Suiza de 24 a 47, en Canadá de 46 a 110, en los Estados Unidos de 831 a 1 763, en Brasil apenas se había incrementado de 50 a 70. Nuestras reservas en oro estaban agotadas. El saldo en libras de nuestra balanza comercial bajó de 14 378 (en £ 1 000) a 8 178 en 1929. Los capitales ingleses y norteamericanos fueron retirados en masa. Mientras tanto, nuestra industria liviana persistía, diversificándose progresivamente, sin una base técnica, sin el apoyo de las fuentes de energía como el carbón, el petróleo, el gas natural, la electricidad. La producción de caucho bajó de 43 mil toneladas a 28. La zafra del café disminuyó de 28 834 en la zafra de 1927/28 (1 000 sacos de 60 kilos) a 23 172 en la zafra de 1928/29. Debemos pensar en la importancia de esta violenta caída en la producción, ya que el 71% del valor oro de nuestra exportación provenía del café.

Sin embargo, el gran problema que preocupaba al presidente Washington Luis era el de su sucesión. La antipatía personal que le dedicaba a Antônio Carlos, de Minas Gerais, lo conducía hacia un candidato paulista, sobre todo después de 1927, cuando eligió para este cargo a su amigo y discípulo político Julio Prestes. El presidente de Minas Gerais, conocido por la habilidad política de la familia a la cual pertenecía —los Andrada e Silva— y que ejercía gran influencia en el país desde la independencia, trató de insinuarse junto al presidente de la República, a tal grado que llegó a aceptar la reforma financiera que iba en contra de principios que había defendido en un libro que se hizo famoso.³⁰ Siendo además presidente de Minas Gerais era en términos de la política del "café con leche" el sucesor natural de un presidente paulista. Washington Luis preparaba a su candidato, postergando la discusión del problema de la sucesión y buscando atraer la simpatía y el apoyo del presidente del tercer Estado de la Federación, Río Grande do Sul. Con esta intención nombró como ministro de Hacienda a un diputado federal "gaúcho" que le demostraba un gran afecto y que poseía gran habilidad política —Getulio Vargas— en 1926, y lo ayudó en su elección

²⁸ Barbosa Lima, *ob. cit.*, núm. 22.

²⁹ *A Economia Brasileira e o Mundo Moderno*, p. 220. Livraria Martins Editora. São Paulo, 1948.

³⁰ *Os Bancos de Emissão no Brasil*. Livraria Leite Ribeiro, Rio, 1923.

para presidente de su Estado en 1928. Sin embargo, mientras el presidente preparaba su plan, Antônio Carlos, más hábil y aconsejado por políticos jóvenes como Francisco de Campos, Virgílio de Melo Franco y João Neves da Fontoura, trataba de despertar en Getulio Vargas el interés por la sucesión de Washington Luis, llamando la atención de los políticos "gaúchos" sobre la posibilidad de que el próximo presidente fuera de Río Grande do Sul.

Getulio Vargas y el jefe político del Partido Republicano Rio-grandense al cual pertenecía —el doctor Borges de Medeiros— titubearon en aceptar el juego, pero el diputado João Neves da Fontoura y el secretario de estado Osvaldo Aranha establecieron compromisos sucesivos con los "mineiros" de los cuales el presidente "gaúcho" no pudo huir. Getulio Vargas, tan hábil como era, no creía en la victoria del candidato de la oposición, sobre todo después del fracaso de la Campaña Civilista de Rui Barbosa en 1910 y de la reacción republicana de Nilo Peçanha en 1922. Por esta razón, Vargas trató de mantener, por medio de cartas, la amistad personal y los compromisos políticos con el presidente de quien había sido ministro, aun después de su candidatura.³¹ Trató de frenar el entusiasmo de sus partidarios; evitaba acompañarlos en la campaña electoral por todo el país, a tal grado que les fue muy difícil convencerlo de que fuera de Porto Alegre a Río de Janeiro con el fin de leer en la Esplanada do Castelo su plataforma política, y de ir a São Paulo, donde fue recibido con grandes manifestaciones populares.

Una vez proclamado Julio Prestes como candidato oficial, bajo la protección del propio presidente, los candidatos de la oposición resultaron en una situación desfavorable y minoritaria. Contaban con el apoyo de tan sólo tres Estados —Río Grande do Sul, Minas Gerais y Paraíba— de los cuales el último proporcionó el candidato a la vicepresidencia, su presidente, el doctor João Pessoa. No era difícil adivinar que el candidato oficial cubriría con los votos de los 17 Estados que le eran favorables, los votos de los tres Estados que apoyaban al candidato de la oposición, sobre todo si se considera que las elecciones eran generalmente fraudulentas. No había esperanzas para la oposición a pesar de que Río Grande do Sul estaba unido a su presidente y que São Paulo estaba dividido, debido a la formación de un nuevo partido, el Partido Democrático, que se oponía al viejo Partido Republicano Paulista.

Frente a esta situación las cabezas de la oposición, organizadas en

³¹ Silva, Hélio. 1926. *A Grande Marcha*, p. 276 y Lima Sobrinho, Barbosa. *Ob. cit.*, p. 127.

una Alianza Liberal,³² optaron por entrar en contacto con los jóvenes oficiales exiliados y se prepararon para la lucha armada en caso de ser derrotados en las elecciones. El objetivo era una revolución y se decía en la época que “Minas iba a elegir al candidato y Río Grande do Sul se encargaría de que llegara al poder”. Getulio Vargas tímidamente agregó en su plataforma política, que leyó en la Esplanada do Castelo, algunos principios de las reivindicaciones que reclamaban estos oficiales, como ser: a) voto secreto; b) que se creara una justicia electoral; c) la necesidad de formular una legislación laboral que asegurara al trabajador estabilidad y amparo en la enfermedad y en la vejez, respetando el compromiso hecho con el *Bureau International du Travail*.³³ Los propagandistas de la candidatura de Vargas recorrieron el país de norte a sur hablando al pueblo, chocando con la policía de los Estados y pregonando con toda claridad la victoria en las urnas o la lucha por las armas. Entre los propagandistas más exaltados se destacaban los grandes oradores “gaúchos” João Neves da Fontoura, Batista Luzardo y Flôres da Cunha y el “carioca” Mauricio de Lacerda. La Cámara se transformó en el teatro de largos duelos verbales que a veces llegaban hasta la calle. La animosidad entre los representantes del pueblo era tanta, que el diputado “gaúcho” de la oposición Simões Filho, asesinó dentro del recinto de la Cámara al diputado de Pernambuco, representante de la posición oficial, Souto Filho. Una vez realizadas las elecciones, Vargas fue derrotado aunque contaba con el apoyo de tres expresidentes de la República, Venceslau Brás, Epiácio Pessoa y Artur Bernardes. Obtuvo apenas el 42% de la totalidad de los votos. El mismo Vargas reconoció la derrota mientras que sus partidarios afirmaban que la diferencia obtenida a favor del presidente “paulista” no era de 430 000 como indicaban los resultados oficiales sino de 270 000 votos.³⁴ Getulio Vargas contó en realidad con la unanimidad de votos en su Estado, Río Grande do Sul, que se unió a él; pero en el Estado de Paraíba, de poca expresión electoral, obtuvo apenas dos tercios de la totalidad de los votos, y el Estado de Minas Gerais, que debería haberlo elegido por unanimidad, se dividió debido al apoyo dado a Julio Prestes por el ala del Partido Republicano que encabezaba el vicepresidente Melo Viana. Una vez ganada la elec-

³² Silva, Hélio. 1930. *A Revolução Traída*, pp. 41-2. Editora Civilização Brasileira. Rio. 1966.

³³ Silva, Hélio. 1926. *A Grande Marcha*, pp. 402-3. Editora Civilização Brasileira, S. A. Rio. 1965.

³⁴ Silva, Hélio. *A Revolução Traída*, pp. 66-7. Editora Civilização Brasileira, S. A. Rio. 1966.

ción en São Paulo, en el Distrito Federal y en Bahía, Julio Prestes sumó a estos votos los de los demás Estados de menor expresión electoral y ganó el pleito. Los votos del Estado de Bahía se lograron gracias a que el candidato de la posición oficial a la vicepresidencia era el doctor Vital Soares, natural de ese Estado. A pesar de la acusación de reaccionario y fascista que pesaba sobre él,³⁵ Julio Prestes comenzó los preparativos para asumir el poder el 15 de noviembre de 1930.

IV

LA ALIANZA LIBERAL Y LA REVOLUCIÓN

Es imposible comprender los acontecimientos de 1930 y analizar los hechos que le siguieron sin examinar la composición de la Alianza Liberal, partido que se formó en 1929, para luchar por la candidatura de Getulio Vargas y condenar los hábitos políticos de la República vieja. En realidad la alianza era una amalgama, como decía el mismo Vargas, de hombres con ideas y con pasado muy distintos. De la alianza participaban los Partidos Republicanos de la Paraíba, de Minas Gerais y de Río Grande do Sul —que hasta ese momento habían sido aliados de los demás Partidos Republicanos del país— el Partido Democrático, recientemente formado en São Paulo donde se oponía al Partido Republicano Paulista, y el Partido Libertador del Río Grande do Sul que obedecía a la orientación del doctor Assis Brasil. Alrededor de estos partidos se iban a reunir los opositores de los más diversos matices; en una palabra, los descontentos. Lo que los unía era la ambición de poder de los políticos que se sentían relegados en su sueño de llegar al Catete —como era el caso de Antônio Carlos— o los activos, que no perdían una oportunidad de llegar a la presidencia —como era el caso de Getulio Vargas. A ellos se unieron hombres como João Pessoa, que había sido el fiscal militar encargado de acusar a los tenientes de 1922 y 1924, expresidentes de la República como Eptacio Pessoa y Artur Bernardes, que a pesar de tener cualidades personales positivas se portaron en el poder como hombres que quisieron cerrar el país a las ideas nuevas y que reprimieron con mano de hierro las aspiraciones de los jóvenes oficiales y políticos, más o menos comprometidos con el sistema por lazos de familia o compromisos políticos, pero que consideraban que la única forma de seguir manteniendo ese sistema era abrirlo a las ideas nue-

³⁵ Silva, Hélio. *A Grande marcha*, 1926, pp. 187-8.

vas. En esta situación se encontraban hombres como Virgilio Melo Franco, Batista Luzardo, Osvaldo Aranha y João Neves da Fontoura. Se les juntaron en la conspiración durante y después de la campaña, oportunistas de todo tipo y la mayoría de los revolucionarios de 1922, de 1924 y de la Columna Prestes como Siqueira Campos, João Alberto, Estilac Leal, Juarez Távora y los jóvenes tenientes recién egresados de la Escuela Militar, con actuación e influencia en las unidades que comandaban, como Juraci Magalhães, Jurandir Mamede y Agildo Barata.

La propaganda se hizo sobre todo alrededor de pretensiones políticas y no de reformas económicas, ya que a los acaparadores de los puestos gubernamentales se les criticaba el abuso del poder, la corrupción y la interferencia en la elección de sus sucesores. Los revolucionarios pretendían solucionar la situación del país que se agitaba en medio de una gran crisis, con la institución del voto secreto, de la justicia electoral para vigilar la probidad de las elecciones, y con la amnistía de los revolucionarios de 1922 y 1924, prometiéndole al proletariado de las grandes ciudades algunas leyes que reconociesen sus derechos frente al poderío de la burguesía industrial que se formaba. Estas promesas significaban muy poca cosa frente al desafío que presentaba el momento histórico en el que vivíamos, mientras en Europa, las fuerzas de izquierda, victoriosas en la Unión Soviética y las de derecha en Italia, ofrecían al mundo soluciones nuevas y contradictorias sobre la cuestión social. Tan obvia era la situación que el pequeño grupo comunista y su líder, Astrogildo Pereira, no sólo se mantuvieron fuera de la conspiración sino que obtuvieron de Luiz Carlos Prestes, el más popular y prestigioso líder de los "tenientes", llamado el Caballero de la Esperanza, que no participara en el movimiento.

El resultado del cómputo de los votos dejó claro dos hechos: la victoria de los candidatos oficiales —Julio Prestes y Vital Soares— y el uso de fraude por parte de los dos competidores. Los representantes de la posición oficial en los Estados llevaron a cabo las elecciones en la forma que más les convenía y el cómputo se efectuó de modo que la mayoría de votos favoreciera a sus candidatos. En algunos Estados, como en Río Grande do Sul, el fraude se realizó en proporciones tan exageradas que el número "oficial" de electores alcanzó un porcentaje nunca visto (99%), que hasta el día de hoy no ha sido superado en ninguna elección. Con este electorado Getulio Vargas obtuvo 298 627 votos contra 982 votos que obtuvo Julio

Prestes.³⁶ En el Estado de Paraíba el presidente João Pessoa retiró a jefes políticos de gran prestigio de la lista de candidatos para diputados federales del Partido Republicano, entre los cuales se encontraba su antecesor en la presidencia del Estado, el doctor João Suasuna. Los representantes de la posición oficial también cometían todo tipo de fraude en los Estados que dominaban; pero como estaban seguros de la victoria no se veían obligados a llegar a tales extremos. Después del cómputo el Congreso debía reconocer a los candidatos electos. El gobierno fue entonces implacable, respetando sólo a la delegación "gaúcha", dañando a la delegación "mineira" y eliminando prácticamente a la delegación "paraibana". Dueño de la victoria, Washington Luis no supo ser generoso con el vencido. Por el contrario, trató de vengarse de las ofensas recibidas durante la campaña, alejando a sus opositores del campo de la lucha. Esta actitud no hizo más que exacerbar los ánimos, justamente cuando la crisis económica internacional alcanzaba al país y no teníamos mercado para el café. Al no poder mantener la política de protección a este producto, el presidente perdió el apoyo de su Estado, São Paulo. La atmósfera de odio y crisis llevaba a los jóvenes políticos a unirse cada vez más con los militares alejados del servicio activo y aun con la gente fiel al gobierno que ocupaba puestos de mando, como el general Gois Monteiro, con el propósito de llevar a cabo la revolución. Con todo, existían políticos como Borges de Medeiros y el propio Getulio Vargas, que preferían reconocer el veredicto de las urnas antes que arriesgarse y sufrir un fracaso militar o las consecuencias siempre imprevisibles de una revolución. João Pessoa, conservador acérrimo, se rehusaba a tener contacto con los oficiales conspiradores y decía que prefería "diez Julios Prestes a una revolución".

Las persecuciones políticas, los ánimos exaltados y la falta de fe del pueblo en las instituciones políticas anunciaba grandes acontecimientos. No faltaba sino la oportunidad, el hecho propicio que diera comienzo a las hostilidades. Este hecho ocurrió el 26 de julio de 1930, cuando João Dantas, un político de Paraíba que había sufrido una terrible persecución por parte del gobierno de su Estado y que vivía exiliado en Recife, mató en un restaurante de esta ciudad al presidente de Paraíba, João Pessoa. Esta fue la gota que provocó el desborde. A partir de este momento los exaltados se hicieron más violentos y los moderados aceptaron, poco a poco, la idea de la revo-

³⁶ Basbaum, Leoncio. *Historia Sincera da Republica*, vol. II, p. 304. Livraria São Jose, Rio, 1958.

lución: se cuenta que el viejo Andrada, político muy hábil y conservador, había dicho "hagamos la revolución antes que el pueblo la haga".

Una vez programada la revolución, el héroe de la Columna Prestes fue invitado para que la encabezara, pero éste, que se había convertido al marxismo durante su exilio, se negó a participar, alegando que la revolución que se tramaba no era la deseada por sus compañeros de armas de 1922 a 1927, y que los jóvenes oficiales iban a ser fácilmente engañados por los políticos. Por esta razón Prestes analizó la situación política brasileña en un manifiesto de mayo de 1930, y condenó al latifundio y al imperialismo como los responsables de la opresión y la miseria que pesaban sobre el pueblo brasileño. Criticaba el programa liberal por ineficaz y proponía una tercera revolución que favoreciese a "un gobierno de todos los trabajadores, con fundamento en los consejos de los trabajadores de la ciudad y del campo, soldados y marineros".³⁷ Como podemos ver, Prestes, que conocía la situación dominante en el campo, se portó con mucha frialdad respecto a la revolución, criticándola por motivos que el tiempo se encargó de confirmar. Sin embargo, fue incapaz de plantear soluciones aplicables a un país donde los trabajadores urbanos no tenían conciencia de sus fuerzas, donde los trabajadores rurales estaban desorganizados y donde los soldados y marineros eran escasos y poco politizados. Prestes no se dio cuenta que al contrario de lo que creía, las condiciones en que se encontraba Brasil eran muy distintas a las que Lenin encontró en Rusia en 1917. El manifiesto de Prestes desilusionó a la mayoría de sus compañeros de la columna que ya estaban comprometidos con el movimiento revolucionario y provocó un manifiesto en contra, cuyo autor, Juárez Távora, estaba a favor de cambios en los dispositivos constitucionales por medios extralegales, pero no estaba de acuerdo con una revolución social. El general Gois Monteiro, que hasta ese momento había sido gobiernista, fue atraído por este último argumento al lado de los conspiradores, quienes lo pusieron al mando de la revolución en la región de Río Grande do Sul.

La revolución fue programada con toda minuciosidad,³⁸ y debería estallar el mismo día en los tres Estados aliados, hecho que ocurrió con bastante precisión el día 3 de octubre en Porto Alegre y Belo Horizonte, capitales de los Estados de Río Grande do Sul y de

³⁷ Silva, Hélio. 1930. *A Revolução Traída*, pp. 417-21.

³⁸ Monteiro, Gois. *A Revolução de 30 e a Finalidade Política do Exército*, pp. 37-103. Anderson Editores, Rio, s/f.

Minas Gerais respectivamente, y el 4 en Paraíba. Después de algunas horas de lucha en Porto Alegre y en Paraíba y de una fuerte resistencia del 12º Regimiento de Infantería durante cinco días en Belo Horizonte, las tres ciudades fueron ocupadas. De estas tres ciudades partieron tropas hacia otros Estados con el fin de destituir a los gobiernos. La columna más fuerte fue la formada en Río Grande do Sul, por la policía del Estado, las fuerzas del ejército partidarias de la revolución y un gran número de voluntarios. Esta columna invadió el Estado de Santa Catarina y lo ocupó casi totalmente; lo mismo ocurrió en el Estado de Paraná. Getulio Vargas estableció su cuartel general en la ciudad de Ponta Grossa y se detuvo en la frontera del Estado de São Paulo, donde los legalistas lo esperaban en Itararé.

En el norte del país y en Recife hubo lucha con numerosa participación popular desde la madrugada del día 4 hasta la tarde del 5, cuando el presidente Estacio Coimbra huyó a bordo de un remolcador hacia Bahía.³⁹ En los demás Estados fue fácil para los rebeldes tomar el poder. En Piauí el comandante Areia Leão tomó el poder sin lucha el 4 de octubre, mientras que Juvenal Lamartine caía el día 6 en el Estado de Río Grande do Norte; el 8, el presidente Matos Peixoto abandonó el poder en Ceará; el 9 cayó Pires Sexto en Maranhão; el 10 Alvaro Pais abandonó el gobierno de Alagoas y huyó hacia Bahía seguido el día 16 por el presidente de Sergipe, el doctor Manoel Dantas. Solamente resistió a los rebeldes el Estado de Pará. Su presidente, Eurico Vale, los expulsó de la capital y se mantuvo en el poder por mucho tiempo, cuando la revolución ya había obtenido la victoria en el resto del país. El presidente Washington Luis no comprendió la debilidad de los presidentes de los Estados del norte y no quiso recibir a ninguno de los que acudieron a él. Aunque en la mayoría de los Estados no hubiera movimientos populares como en Recife, fue patente el completo agotamiento del gobierno. Las autoridades no gozaban de la simpatía popular, las milicias estaban mal preparadas tanto militar como psicológicamente y las fuerzas federales se pasaban al lado de la revolución, bajo el mando de los oficiales jóvenes. Había llegado el momento en que el gobierno, divorciado del pueblo y sostenido por las fuerzas armadas, se venía abajo por falta de apoyo, ya que la colectividad no lo aceptaba. En el sureste la situación no era muy distinta a la del norte. Las fuerzas de Minas Gerais invadieron a Espírito Santo el 14 de octubre, y el 19 ya habían ocupado casi sin

³⁹ Barbosa Lima Sobrinho, *ob. cit.*, p. 125.

lucha la ciudad de Victoria, la capital. Poco tiempo después invadían el Estado de Rio. Como aún conservaba el Distrito Federal y los Estados de São Paulo, Amazonas, Pará y Bahia, el presidente Washington Luis se mantenía optimista y se negaba a llegar a un entendimiento con los rebeldes. La situación empeoraba día con día. La población de la capital era hostil al gobierno, que para colmo convocó a la reserva para poder detener el avance de los rebeldes.

Sin embargo, Lindolfo Collor conspiraba desde el 10 de octubre con algunos generales influyentes que detentaban el mando de las tropas en la capital federal. El general Collor pretendía deponer al presidente por medio de una acción que se justificaba como una medida adoptada para evitar el derramamiento de sangre. A medida que los rebeldes avanzaban, los jefes militares preparaban con mayor intensidad la conspiración que estalló el 24 de octubre a las 17 horas, cuando el presidente fue depuesto. Washington Luis, con toda dignidad, dejó el Palacio en compañía del cardenal Leme, y después de despedirse de sus ministros, que lo acompañaron hasta el último instante, salió hacia el Fuerte de Copacabana en calidad de prisionero, de donde partió luego al exilio. Se organizó entonces una Junta Militar formada por los generales Tasso Fragoso, Mena Barreto y el almirante Izaías de Noronha, quien asumió el poder en carácter provisional. La caída de la capital de la República provocó a su vez la caída de los presidentes de Estado que aún permanecían en el poder como Julio Prestes en São Paulo, Manuel Dantas en Rio de Janeiro y el coronel Federico Costa en Bahia. Los últimos presidentes de Estado depuestos por la revolución fueron Brasil Caiado de Goiás el 26, y Aníbal Toledo de Mato Grosso, el 27.⁴⁰

Con la caída del presidente surgió un problema: ¿quedaría el gobierno en manos del candidato liberal derrotado o de la Junta Militar que le dio el golpe de gracia a la República Vieja? Una vez más Vargas titubeó y no marchó con sus fuerzas sobre São Paulo y Rio de Janeiro. Instigado por sus partidarios más radicales envió a Osvaldo Aranha a Rio con el fin de que llegara a un entendimiento con los generales y exigiese que le fuese transferido el poder. Según el general Klinger, el resultado de este entendimiento fue un acuerdo por el cual Vargas concedió a la Junta 48 horas "para hacer las maletas", estuvo de acuerdo en que los ministros militares que la Junta había nombrado permanecieran en sus cargos y admitió tomar posesión

⁴⁰ Barbosa Lima Sobrinho, *ob. cit.*, pp. 209-251.

del mando en calidad de gobierno provisional, como consecuencia de un movimiento militar y no de una elección.⁴¹

Al referirse a este hecho el general Góis Monteiro afirmaba algunos años después que⁴² el golpe de la Junta Militar fue, “desde el punto de vista de la operación la hipótesis más favorable dada la sublevación en la capital federal; sin embargo, desde el punto de vista militar, la dirección fue alterada en perjuicio de la revolución brasileña, por culpa de la intromisión de aprovechadores sagaces que cambiaron la situación a su favor”. En estas condiciones, Getulio Vargas se dirigió hacia Rio y el 3 de noviembre, un mes después de comenzada la revolución, tomó posesión del cargo de presidente. Comenzaba en ese instante un gobierno que se extendería durante 15 años —hasta el 29 de octubre de 1945— a veces bajo la forma de una dictadura, a veces bajo la forma de presidente constitucional, y que llegaría a ser uno de los periodos más discutidos de la historia brasileña.

v

EL “TENIENTISMO” Y LOS POLÍTICOS; LA LUCHA POR EL PODER

Una vez ganada la revolución, los revolucionarios quedaron perplejos e indecisos sobre cómo iban a conducir el gobierno del que se habían apoderado. En seguida comprendieron que la unión que habían obtenido durante la lucha se desintegraba por la heterogeneidad de las fuerzas que detentaban ahora el poder. Era visible, entre los aliados, la diferencia de puntos de vista entre los “tenientes”, nombre que se les daba a los oficiales jóvenes que desde 1922 se habían rebelado, y los políticos liberales. Los primeros aspiraban, ingenuamente, a moralizar la vida pública brasileña por medio de reformas políticas, mientras que los segundos esperaban reorganizar las estructuras políticas anteriores mediante algunas concesiones a los “tenientes”, como el decreto de amnistía para las personas implicadas en los movimientos políticomilitares de la década de 1921-30, y la aceptación del voto secreto y de la justicia electoral. Sin embargo, como todos ellos provenían de una forma u otra, de la estabilidad relativa de la República vieja, lo que en realidad deseaban era un rápido retorno al régimen constitucional, por medio de elecciones para formar una asamblea constituyente. Además, los militares que

⁴¹ Silva Hélio. *A Revolução Traída*, 1930, pp. 409.

⁴² *Ob. cit.*, pp. 86-87.

le dieron el golpe final a Washington Luis y que durante mucho tiempo habían sido los defensores de la legalidad, aspiraban a tener influencia en la vida política de la nueva República.

Mientras duró el entusiasmo el gobierno trató de justificar el movimiento revolucionario castigando a los políticos caídos en desgracia, a quienes llamaban los "carcomidos". El 29 de noviembre nombró un Tribunal Especial de 5 miembros para juzgar a los "carcomidos". Sin embargo, muchos de los políticos perseguidos, en los días de lucha ya se habían refugiado en las embajadas y consulados extranjeros —como en el caso de Julio Prestes— o ya habían partido al exilio. En el Tribunal Especial fueron denunciadas figuras muy importantes que habían apoyado la candidatura de Julio Prestes, como Antônio Azerêdo, Cunha Vasconcelos, José Augusto, José Maria Belo, Gilberto Amado, João Mangabeira, Manoel Vilaboim, y también partidarios de la candidatura de Vargas, como los ex presidentes Artur Bernardes y Epitácio Pessoa.⁴³ Entre las personas denunciadas, algunas fueron absueltas y a otras les suspendieron los derechos políticos durante 5 años. Los políticos liberales, como Osvaldo Aranha, Lindolfo Collor y más tarde Mauricio Cardoso, consiguieron obtener cargos en el Ministerio del Gobierno Revolucionario. Otros obtuvieron cargos de interventores en diversos Estados, como el caso de Flôres da Cunha, que fue interventor de Río Grande do Sul, Olegario Maciel de Minas Gerais y Carlos de Lima Cavalcanti, de Pernambuco. Los "tenientes" consiguieron obtener cargos federales o ser interventores en los Estados del norte. Juárez Távora, el más influyente de los "tenientes", después de rechazar un puesto en un ministerio se transformó en una especie de superinterventor de los Estados del norte, desde el Amazonas hasta Bahia. Sin embargo, la lucha más encarnizada fue por el puesto de interventor en el Estado de São Paulo, por el cual pelearon los "tenientes", con el apoyo de Osvaldo Aranha, y del aguerrido Partido Democrático que trataba de cobrarle a Getulio el apoyo que le había dado durante la campaña electoral.

Getulio se mantenía indeciso entre las distintas corrientes en lucha, favoreciendo ya a uno ya a otro grupo. En el caso de São Paulo trató de huir, mientras pudo, al compromiso con el Partido Democrático, y nombró al fin para el cargo al capitán João Alberto Lins e Barros, "pernambucano" de nacimiento, que además no tenía la menor experiencia en cuestiones administrativas. Sin embargo, el

⁴³ Silva Hélio. *Os Tenentes no Poder*, 1931, pp. 108, 130 y 136. Editora civilização Brasileira, Rio, 1966.

favorecido supo rodearse de un secretariado compuesto por eminentes figuras de la vida económica y política del Estado abanderado, ligados al Partido Democrático. De inmediato comenzaron a surgir resentimientos, ya que los políticos e intelectuales "paulistas" denunciaron que a su Estado se le estaba tratando como a un país conquistado por el enemigo.⁴⁴ Comenzaron entonces las divergencias entre los partidos que ya existían antes de la revolución y la Legión Revolucionaria del general Miguel Costa. Poco tiempo después, el capitán João Alberto ya estaba enemistado con grandes sectores de la opinión pública, lo cual provocó una unión entre los democráticos y los partidarios del Partido Republicano, que estaba fuera del poder desde 1930. Esta unión pedía el nombramiento de un interventor "civil y paulista". João Alberto no estaba en condiciones de mantenerse en el poder durante mucho tiempo, y fue sustituido en julio de 1931 por el interventor, paulista y civil, Laudo de Camargo, quien poco tiempo después fue reemplazado por el coronel Manuel Rabelo y por el doctor Pedro de Toledo. La situación se había complicado, y los "paulistas" se unieron contra la dictadura, favoreciendo la guerra civil que iba a estallar el 9 de julio de 1932.

La inestabilidad del gobierno y las dificultades por las que atravesaba el país entre octubre de 1930 y julio de 1932, eran el resultado de la falta de orientación politicoideológica y de la repercusión de la crisis económica internacional de 1929. En una entrevista concedida al periódico *O Correio da Manhã* el 5 de noviembre de 1930, el ministro de Justicia, Osvaldo Aranha, confesó que el gobierno no tenía ningún programa, y que:

no tengo, personalmente, ningún programa de trabajo. Mi programa es la revolución. Aquí estoy como un delegado del pueblo. No haré nada en contra de sus intereses y obedeceré sus deseos. Hasta el día de hoy el pueblo obedecía los programas del gobierno, de hoy en adelante el gobierno obedecerá al pueblo. El pueblo quiere el programa de la revolución y eso es lo que debemos hacer. El programa de la revolución es, bajo el punto de vista administrativo, moralizar y ahorrar. Lo cumpliré. Seré inflexible contra todo aquello que sea superfluo y terminaremos con los despilfarros.⁴⁵

Como podemos ver, el brillante ministro de Justicia y organizador de la revolución huía a una respuesta objetiva, porque no sabía cómo darle al gobierno una orientación ideológica. Getulio Vargas

⁴⁴ Silva, Hélio, *ob. cit.*, pp. 100 y ss.

⁴⁵ Silva, Hélio. 1931. *Os Tenentes no Poder*, pp. 56. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1966.

no se definía. Apoyaba a los políticos —como cuando entregó el Ministerio de Justicia a Mauricio Cardoso, con el único fin de realizar la reforma electoral— y en ocasiones a los “tenientes” —como cuando no castigó a los responsables de la destrucción del Diario Carioca el 24 de febrero de 1932 porque era gente ligada al Club 3 de octubre—. Las dos corrientes políticas que se disputaban a Europa —el fascismo y el comunismo— tenían simpatizantes entre las principales figuras del gobierno que, a su vez, no tomaba una actitud definida. João Alberto, cuando fue interventor de São Paulo, fue liberal con los comunistas y les permitió que se organizaran y que realizaran mítines. Por otro lado, se declaró abiertamente en favor de la cuestión social, adaptó soluciones a la realidad brasileña y vigiló de cerca los contratos de trabajo,⁴⁶ lo cual molestó a los industriales enemigos de la justicia social.

El general Gois Monteiro acusaba también a Miguel Costa de tener simpatías por la misma corriente ideológica.⁴⁷ El 27 de julio de 1931, Francisco Campos, Gustavo Capanema, y Amaro Lanari fundaron en Belo Horizonte la Legión Mineira orientada hacia la derecha y el fascismo. Decían que su finalidad era “mantener y fortalecer el espíritu de unidad nacional y propagar y desarrollar los altos sentimientos y virtudes humanas”.⁴⁸ Organizaban manifestaciones al modo fascista y usaban camisas oscuras. Fue el antecedente del Movimiento Integralista que iba a tener gran influencia en la vida política brasileña de 1932 a 1938. Gilberto Amado, un político ligado al antiguo régimen llegó a decir que “no había ya lugar en el mundo para los liberales”. El presidente Olegario Máciel de Minas Gerais se presentó en el balcón del Palacio de la Libertad en Belo Horizonte con una camisa oscura del mismo color que usaban en aquel entonces los partidarios de Hitler en Alemania. Una serie de políticos e intelectuales como Osvaldo Aranha, Plinio Salgado, Santiago Dantas, Augusto Frederico Schmidt y Helio Viana pensaban en fundar un partido de derecha de tipo fascista.⁴⁹ Llegaron a discutir sobre quién sería el jefe nacional, y sobre cómo formar un gran consejo, semejante al Gran Consejo Fascista que existía en Italia y que se compondría de los revolucionarios que participaron de la revolución de octubre.⁵⁰

⁴⁶ Silva Hélio, *ob. cit.*, pp. 119, 122, 125 y Sodré, Alcindo. *A Guerra da Desordem*, pp. 97 y 98. *Civilização Brasileira*, S. A., Rio.

⁴⁷ Silva, Hélio, *ob. cit.*, p. 349.

⁴⁸ Silva, Hélio, *ob. cit.*, pp. 155-6.

⁴⁹ Silva, Hélio, *ob. cit.*, p. 74.

⁵⁰ Silva, Hélio, *ob. cit.*, pp. 5-6-7 y Rosa, Virgilio Santa, en *O sentido do Tenentismo*, pp. 14 y ss. *Civilização Brasileira*, S. A., Rio, s/f.

El general Gois Monteiro, que gozaba de un gran prestigio por haber sido el jefe militar de la revolución, mostraba tendencias poco liberales cuando defendía la idea de extender la dictadura con el fin de consolidar un "gobierno radicalmente nacionalista" que tuviera como objetivo la "eliminación de los enquistes latifundistas y otras excrescencias muertas que, al igual que el carácter mal formado, producen las mayores infecciones en nuestro organismo".⁵¹ Su admiración por los regímenes fuertes y por los líderes totalitarios lo llevó a decir que "Mussolini, Hitler, Mustafá Kemal Pachá, Roosevelt y Salazar... Todos ellos son para mí grandes hombres porque quieren realizar una idea nacional de acuerdo con las aspiraciones de las colectividades a las que pertenecen".⁵²⁻⁵³ Obviamente Roosevelt está muy mal acompañado, ya que su orientación política es muy diferente a la de sus compañeros. La sola elección de los hombres que admiraba, indica la pobre preparación politicoideológica de un hombre que por más de veinte años tuvo gran influencia en la política brasileña.

Mientras tanto la crisis económica mundial que se reflejaba en nuestro país provocó serios conflictos financieros y agudizó la cuestión social. El gobierno revolucionario heredó de la República vieja el gran problema conocido como la "crisis del café", que era una consecuencia de la política adoptada por el gobierno brasileño durante el periodo en que tenía el monopolio de la producción mundial de café. Esta política era la de mantener estables los precios de este producto que se cotizaba tan alto en el mercado mundial. Por esta razón el gobierno compraba la zafra a los productores y controlaba la exportación. Pero el elevado precio estimuló la producción de café en los países competidores, lo que a su vez provocó la sobreproducción mundial del producto. Esta crisis contribuyó al fortalecimiento del Partido Democrático en São Paulo. Este partido acusaba al gobierno de no interesarse por los cultivadores del café y de tratar de denigrar el prestigio del presidente Washington Luis.⁵⁴ ¿Qué actitud podía tomar el gobierno ante un problema tan grave? Brasil estaba frente a un dilema: o se dedicaba a producir materias primas de exportación y sacrificaba cada vez más el nivel de vida de la población brasileña o se dedicaba al mercado interno, revolu-

⁵¹ Monteiro, general Gois. *A Revolução de 30 e a finalidade política do Exército*, pp. 100 y 102. Anderson Editôra, Rio, s/f.

⁵² Monteiro, general Gois, *ob. cit.*, pp. 129, 180, 195.

⁵³ *Idem*, *ob. cit.*, p. 187.

⁵⁴ Barbosa Lima Sobrinho. *A Verdade sôbre a Revolução de Outubro*, pp. 105-112.

cionando sus estructuras económicas y políticas y librándose de una economía colonial.

Al analizar la situación, Caio Prado Junior⁵⁵ afirma que:

Fue después de 1930 que todo este proceso de transformación se acentuó. La crisis mundial que se había desencadenado el año anterior repercutió gravemente en Brasil. El valor de los productos fundamentales sobre los cuales se apoyaba su vida económica (particularmente el café) cayó brusca y considerablemente. En consecuencia las exportaciones se redujeron. El promedio anual de los años 1926 a 1930 fue de 88.200,000 en libras oro; en los siguientes cinco años (1931-1935) bajó a 38 millones. Al mismo tiempo el flujo regular de los capitales extranjeros que antes alimentaban normalmente la economía nacional, y que ya eran indispensables para el equilibrio de sus finanzas, se interrumpió, y el proceso se invirtió debido a que los grandes centros financieros internacionales estaban en crisis y retiraron del exterior toda su disponibilidad financiera.⁵⁶

Todo esto precipitó el desequilibrio de las cuentas externas del país, el déficit presupuestal y la desvalorización de la moneda, provocando el empobrecimiento de las clases medias e inferiores que dependían de sueldos fijos.

Se agravó entonces el choque de intereses entre las fuerzas progresistas que clamaban por reformas en la estructura y las fuerzas de la reacción que proponían la represión policiaca en el sector político y porque el país tratara de vender en el mercado internacional otros productos de exportación, como naranjas, piñas, plátanos, algodón y minerales,⁵⁷ con el fin de salvar el sistema económico vigente. Este tipo de exportaciones tuvo éxito en algunas ocasiones, como el algodón, en el periodo anterior a la guerra de 1939-45, cuando se vendió en gran cantidad a los países del Eje —Alemania, Italia y Japón—, que estaban acumulando estratégicamente sus reservas para la guerra.

Getulio Vargas, que ante todo deseaba conservar el poder y mantener las estructuras existentes, con las cuales estaba comprometido por su formación cultural y política, demostró una gran habilidad al inaugurar y ampliar una política laboral que en realidad trataba

⁵⁵ *História Econômica do Brasil*, 4ª edición, p. 295. Editora Brasiliense, S. A. São Paulo, 1956.

⁵⁶ Caio Prado Junior. *Ob. cit.*, p. 296.

⁵⁷ Costa, Aguinaldo. *Algumas verdades sobre nossas Leis Trabalhistas*, pp. 23-4. Livraria Brasiliense, São Paulo.

de atenuar las reivindicaciones de los trabajadores y de darles un mínimo de derechos y garantías. Por esta razón creó, en los primeros días del gobierno revolucionario, el Ministerio del Trabajo, Industria y Comercio, y lo puso en manos de otro "gaúcho", Lindolfo Collor.

Desde antes de 1930 los trabajadores habían obtenido la promulgación de una serie de leyes que los favorecían, aunque sólo se aplicaran en las grandes ciudades. Existía ya una autorización para que se organizaran sindicatos agrícolas (1903) y de todas las profesiones (1907) y cooperativas. Se promulgaron, además, leyes para la organización de cajas de jubilación y pensiones para ferrocarrileros (1923), trabajadores de empresas telegráficas (1923) y portuarios (1926), el Instituto de Seguro Social para los funcionarios del gobierno (1927). Existían además leyes que garantizaban a los trabajadores contra accidentes de trabajo (1919), un reglamento sobre el trabajo de menores (1923), etcétera. Después de 1930, gracias a la crisis económica e institucional, los trabajadores pudieron presionar al gobierno por medio de sus sindicatos para que aplicara y complementara con nuevas leyes los derechos que reclamaban. La presión fue tan fuerte que el dictador recalcó la necesidad de hacer:

La reglamentación de las horas de trabajo; garantías para que se le dé al trabajador un salario adecuado; protección para los trabajadores contra enfermedades o accidentes en el trabajo; protección a la infancia, a los adolescentes, a las mujeres; pensiones para la vejez y la invalidez; libertad sindical, etcétera.⁵⁸

Siendo tan perspicaz y tan hábil como político, Getulio se dio cuenta de que el apoyo popular le iba a ser muy útil, y trató de aplicar estas leyes con el propósito de contar con la simpatía de las masas en la crisis que se aproximaba: la Revolución paulista. Cuando esta revolución estalló, trató de demostrarle al pueblo que los paulistas eran reaccionarios y separatistas, y publicó de julio a diciembre de 1932 una serie de decretos-leyes que lo pusieron ante los ojos de la mayoría del proletariado nacional como jefe y protector. Creó además las Oficinas de Inspección Regional del Ministerio de Trabajo para vigilar la ejecución de las leyes laborales (1-8-32), hizo un reglamento sobre préstamos que otorgaba la Caja de Jubilación y Pensiones (24-8-32) y poco tiempo después los servicios médicos y de hospital de la misma caja (26-10-32); reglamentó la duración del tra-

⁵⁸ Vargas, Getulio. *A Nova Política do Brasil*, 3 vols., p. 140. Livraria José Olympo Editora, Rio de Janeiro, s/f.

bajo y del descanso semanal de los empleados del comercio (28-10-32), reglamentó el trabajo de las mujeres y de los menores (3-11-32), creó las Juntas de Conciliación y Arbitraje (25-11-32), etcétera.⁵⁹

Respecto a medidas que adoptó y que alteraban la vida económica, estableció cuotas de producción (22-11-32), creó la Comisión para la Defensa de la Producción del Azúcar, que pretendía garantizar un precio justo para el producto (7-12-31), etcétera.⁶⁰ Como podemos ver, aunque la revolución no tenía una ideología definida, la presión de los acontecimientos la llevaba a intervenir en el campo económico, lo cual provocaba que de una democracia liberal, consagrada por la Constitución de 1891, se pasara a una democracia social, planteada con bastante timidez en la Constitución de 1934. Los acontecimientos arrastraban a los grupos dominantes hacia reformas y concesiones, que les permitían mantenerse en el poder. Nuevas crisis los obligarían a hacer nuevas concesiones.

VI

LA GRAN CRISIS, LA REVOLUCIÓN PAULISTA

La evolución de la crisis económica que provocó consecuencias tan graves para el país, la repercusión de los movimientos de reivindicación obrera y la agresividad de los “tenientes” reunidos en el Club 3 de Octubre, contribuyeron a atemorizar a la burguesía rural de los Estados más ricos, São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. Algunos meses después de la victoria de la revolución, los liberales inconformes, frustrados, ya querían el fin de la dictadura y elecciones para una Asamblea Constituyente. Este hecho era muy importante, sobre todo en los Estados que tenían partidos políticos organizados y donde los “tenientes” no pudieron mantenerse en el poder. En ese caso se encontraban Rio Grande do Sul —partidos Republicano y Libertador— y São Paulo —partidos Republicano y Democrático—. Se formó, entonces, entre los dos Estados, el frente único a favor de la Constitución.

Getulio Vargas, que era un verdadero estadista, trataba de no comprometerse; en ocasiones halagaba a los políticos, en otras a la masa trabajadora y también a los militares. Por medio de estas maniobras trataba de consolidar su poder y eliminar rivales.

⁵⁹ Costa, Aguinaldo, *ob. cit.*, p. 30.

⁶⁰ Venâncio Filho, Alberto. *A Intervenção do Estado no Domínio Económico*, pp. 82-108. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 1968.

Los políticos, desesperados, resolvieron recurrir a la conspiración y atrajeron con facilidad hacia su bando a los militares fieles al antiguo régimen y aun a aquellos que en octubre de 1930 habían derrocado a Washington Luis, cuando comprendieron que el presidente ya no estaba en condiciones de resistir a las fuerzas que marchaban sobre la capital. Una vez armada la conspiración, los conspiradores esperaron el momento oportuno. Sin embargo, un incidente entre militares provocó la rebelión antes de la fecha convenida. El incidente ocurrió porque el dictador sustituyó al ministro de la Guerra, un general ligado al grupo de la Junta Militar de octubre de 1930, por un general retirado —Espíritu Santo Cardoso. El general Klinger, que había participado en la Columna Prestes en 1926 y en el derrocamiento de Washington Luis, protestó contra el nombramiento del nuevo ministro y le negó obediencia. Inmediatamente renunció al comando del territorio de Mato Grosso.

El 9 de julio, la fuerza pública del Estado, las fuerzas federales acuarteladas en São Paulo y el gobierno paulista, apoyado por el pueblo, se levantaron en armas para exigir la constitucionalización del país. Pedro de Toledo renunció a su cargo de interventor federal en el Estado y fue aclamado gobernador. La opinión paulista era francamente favorable a la revolución, y el pueblo salió a las calles para aclamar a los líderes revolucionarios y a la Constitución.⁶¹

Sin embargo, ni el entusiasmo popular, ni los alistamientos masivos de la población, ni las señoras y muchachas que acudieron a los puestos de colecta de fondos para donar sus joyas en la campaña "oro para el bien de São Paulo", ni la industria que se movilizó para producir material de guerra, nada de esto fue suficiente para derrocar a la dictadura, para vencer a las fuerzas federales.

Los revolucionarios no tardaron en recibir el apoyo personal de políticos de otros Estados que fueron a São Paulo para pelear al lado de los paulistas en favor de la revolución constitucionalista, como el "gaúcho" João Neves da Fontoura y el pernambucano Eurico de Souza Leão. No recibieron el apoyo de fuerzas sustanciales. El apoyo de los gobiernos de Minas y Rio Grande do Sul, que se contaba como seguro, falló. Getulio Vargas acusó entonces a la revolución de reaccionaria, al principio, y más tarde, de separatista.⁶² Consiguió el apoyo de Olegario Maciel, presidente de Minas Gerais y de Flores da Cunha, interventor de Rio Grande do Sul, e inmediatamente movilizó las fuerzas federales y de los dos Estados en contra de los

⁶¹ Picchia, Menotti del. *A Revolução Paulista*, pp. 9 y ss. 4ª edición, São Paulo, 1932.

⁶² Silva, Hélio. 1930. *A Guerra Paulista*, p. 85. *Civilização Brasileira*. Rio, 1967.

paulistas. São Paulo, que no tiene fronteras con otros países y que tenía el puerto de Santos bloqueado por la escuadra federal, quedó aislado, contando apenas con la guarnición de Mato Grosso, Estado de poca expresión demográfica y económica, para luchar contra los restantes 18 Estados de la Federación. Los jefes militares paulistas, conscientes de la inferioridad militar en que se encontraban, desecharon la idea de marchar sobre Rio de Janeiro para tratar de derrocar al dictador en un golpe de audacia. En cambio, establecieron líneas defensivas en el territorio del Estado. Esperaron entonces algún acontecimiento externo como "recibir recursos bélicos del exterior, sublevación en otros Estados, sobre todo en Rio Grande do Sul, Minas y Distrito Federal, un pronunciamiento por parte de la escuadra, o un entendimiento con la dictadura, que tampoco estaba en buena situación".⁶³ Cualquiera de estas alternativas, en el caso que ocurriesen, podría salvarlos o por lo menos ayudarles a encontrar una salida decorosa. El dictador no descansó. Recibió la solidaridad de todos los interventores, movilizó las tropas, formó un cuerpo de voluntarios y organizó la resistencia en la Sierra de la Mantiqueira, al nordeste de São Paulo y al sur bajo el mando del general Waldomiro Lima. Al estar sitiado, São Paulo no pudo recibir ayuda del exterior. A pesar de que el ex presidente Artur Bernardes trató de sublevar las fuerzas del Estado de Minas y el ex presidente Veneslau Brás trató de forzar al gobierno Mineiro de que tomara una actitud neutral, São Paulo recibió todo el peso de las fuerzas de este Estado con cuya neutralidad contaba al principio.⁶⁴ En Rio Grande do Sul la sublevación hecha por el viejo político Borges de Medeiros y por Batista Luzardo en Tupaciretã en agosto, fracasó gracias a las medidas enérgicas de Flôres da Cunha. Mauricio Cardoso trató de encontrar una solución conciliadora, pero no tuvo éxito. Mientras todo esto ocurría, muchos brasileños de todos los rincones del país luchaban y morían en las trincheras.

La lucha, las privaciones impuestas por las contingencias de la guerra a la población del Estado rebelde lo indujeron a adoptar posiciones políticas cada vez más radicales. El gobierno federal aprovechó esta ocasión para acusar a los paulistas de reaccionarios. Se acusaba a los rebeldes también de pretender volver al régimen de la República vieja, de ser separatistas porque deseaban la independencia de São Paulo, la secesión del país. Los paulistas acusaban al gobierno

⁶³ Klinger, Gral. Bertholdo. *O Alto Comando eu nós e a Ditadura*, p. 20, São Paulo, s/d.

⁶⁴ Silva Hélio - 1930. *A Guerra Paulista*, p. 100.

porque pretendía perpetuar la dictadura y porque trataba a São Paulo como a un enemigo vencido, como si fuera territorio ocupado. Los paulistas se presentaban como defensores de la legalidad, de la necesidad de instaurar un régimen constitucional de gobierno. Sin embargo, muchos de ellos, entre los cuales se encontraban prominentes intelectuales, exigían la separación o al menos una mayor descentralización política por medio de la transformación de la Federación en una Confederación. Monteiro Lobato, una de las más ilustres figuras de la literatura brasileña contemporánea, propuso al jurisculto Waldemar Ferreira, uno de los jefes civiles de la revolución, que estableciera una hegemonía paulista sobre la Federación o bien la separación definitiva.⁶⁵ Menotti del Pichia, poeta, político y ensayista, un poco más moderado, confesó años después: "Yo me inclinaba por la confederación o por cualquier otra forma de federación que garantizara a cada Estado un máximo de autonomía local."⁶⁶ El historiador Alfredo Ellis Junior no encontró otra solución para el problema paulista que la transformación del país en una confederación o la separación del Estado de São Paulo.⁶⁷ Después de la victoria de la dictadura sobre la revolución, hombres como el ministro Costa Manso, que ocupaban posiciones muy importantes, confesaban públicamente que eran separatistas.⁶⁸

Pero la resistencia paulista no soportó los tres meses de lucha a pesar del heroísmo que demostraron sus hijos en varios frentes de batalla. Cuando las fuerzas federales amenazaron a la ciudad de Campinas, los dos comandantes en jefe trataron de llegar a un acuerdo. El general Klinger, de las fuerzas paulistas y el general Gois Monteiro, de las fuerzas federales, se reunieron para discutir la rendición. El 27 de septiembre, antes que los jefes llegaran a un acuerdo, la fuerza pública, bajo el mando del teniente coronel Herculano de Carvalho, aceptó la paz por separado, y el 28 el general Klinger aceptó la rendición incondicional, alegando que era militarmente imposible que la lucha continuase.

El general Gois, por medio de una hábil maniobra, nombró al teniente coronel Herculano gobernador militar de São Paulo y le ordenó que sacara del poder al gobierno revolucionario. El 2 de octubre los revolucionarios abandonaron el poder. Cuando el pueblo se enteró de la capitulación, salió a la calle a manifestar su deseo

⁶⁵ Silva, Hélio - 1932. *A Guerra Paulista*, p. 282.

⁶⁶ *Ob. cit.*, p. 22.

⁶⁷ Ellis Junior, Alfredo. *Confederação ou separação*, 3 edição. Liga Confederalista, São Paulo, 1934.

⁶⁸ Silva, Hélio, *ob. cit.*, p. 227.

de seguir peleando, de resistir hasta el fin, acusando al mismo tiempo a los traidores. El coronel Euclides de Figueiredo, comandante de las fuerzas del Valle de Paraíba intentó evitar la rendición durante los últimos días de septiembre; alegaba que las tropas bajo su mando aún estaban en condiciones de luchar. Sin embargo, no pudo convencer ni al comandante en jefe ni al comandante de la fuerza pública. A pesar del esfuerzo hercúleo que había hecho, São Paulo cayó. Las tropas de la dictadura ocuparon nuevamente el Estado, y los principales líderes fueron exiliados. Pero el sacrificio no fue en vano; en 1933 se realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente y al año siguiente el país volvió al régimen constitucional.

El gran vencedor fue Vargas. Pudo derrotar al Estado más rico y poderoso de la federación y exiliar a sus principales dirigentes y políticos, a sus competidores en potencia. Lo mismo ocurrió con los políticos "gaúchos" que lo ayudaron a subir al poder pero que se opusieron a la perpetuación de la dictadura. Lindolfo Collor, Raul Pila, Batista Luzardo, João Neves da Fontoura, etcétera, tuvieron que resignarse al exilio, yendo al encuentro de los "carcomidos" que ellos mismos habían contribuido a derrocar en 1930.

El resultado de la guerra significó una derrota muy seria para la oligarquía rural, que durante el gobierno de Vargas se reconcilió con la burguesía urbana y con algunos sectores del proletariado, con el fin de estabilizar la situación política nacional durante diez años. Vargas instituyó una República de tipo corporativista, que se llamó Estado Nuevo (1937-45). En 1945 fue depuesto Vargas, pero al año siguiente fue elegido senador por el Estado de São Paulo con gran mayoría de votos.

VII

LA CONSTITUCIÓN DE 1933 Y LA II REPÚBLICA

La situación económica se agravaba día a día. El café no encontraba mercado y el gobierno tuvo que adquirir la producción y guardarla. De 1931 a 1935 treinta millones de sacos de café tuvieron que ser destruidos. A pesar de estas medidas el precio del saco de 60 kilos que costaba £ 1,86 en 1931 se depreció a £ 1,21 en 1935. Junto con el precio también disminuyó el volumen de exportación de café, ya que en 1931 habíamos exportado cerca de 9 591 000 sacos y en 1935 la exportación se redujo a 6 989 000.

Mientras el valor y el volumen de las exportaciones bajaba, el valor y el volumen de las importaciones subía.⁶⁹ Esta situación le creaba serios problemas al gobierno y lo obligaba a emitir papel moneda y a recurrir a préstamos internos a través de la emisión de títulos con el fin de cubrir los déficit presupuestales. Los saldos de la balanza comercial cada vez eran menos favorables y en el periodo entre 1931 y 1934, alcanzaron cincuenta y tres millones trescientas mil libras, suma que apenas alcanzaba para cumplir con los compromisos de las deudas externas. La inflación alcanzaba proporciones cada vez mayores; pero permitió, sin embargo, el desarrollo de la industria de la construcción civil, sobre todo en los centros urbanos, y la expansión de nuevos cultivos como el del algodón en São Paulo. A partir del periodo posterior a 1930 se observa que, a pesar de la permanente inestabilidad política y económica, hubo dentro del mercado interno una expansión razonable de la industria ligera. Sin embargo, a los dueños del poder no se les ocurrió estudiar la problemática brasileña y planear programas que orientaran la reorganización económica y política del país. Justamente porque no había una orientación política, las leyes iban saliendo según las presiones del momento. Aunque surgieron grupos y subgrupos políticos, ningún movimiento politicoideológico pudo afianzar su prestigio en el periodo anterior a las elecciones para el constituyente. Intelectuales y políticos propusieron programas para los partidos. Lo mismo hicieron los izquierdistas de distintos matices, que al principio se agrupaban en el Club 3 de Octubre y después en la Alianza Nacional Libertadora, y la derecha que se dividía en monárquicos, organizadores del movimiento Patria Nueva, corporativistas que participaron en el movimiento integralista y católicos que se distribuían entre los distintos partidos que disputaban el poder, sin dejar de estar vinculados a la Liga Electoral Católica.

Cuando el dictador comprendió la fuerza que tenían estos nuevos grupos y que los antiguos políticos de antes del 30 podían usarlos para su provecho, trató de reforzar a sus partidarios e incitar a los interventores de los Estados para que organizaran las fuerzas políticas locales disponibles, mientras él trataba de atraer hacia su órbita de influencia a los enemigos de ayer, los paulistas.

Al ver que São Paulo se rebelaba con la presencia de un interventor militar y "gaúcho", el general Valdomiro Lima, y que los resentimientos estaban generando una fuerte corriente separatista, el dicta-

⁶⁹ Belo, José María. *Panorama do Brasil*, p. 233. Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1935.

dor se reconcilió con la vieja oligarquía paulista y entregó el cargo al ingeniero Armando Sales de Oliveira. Esto provocó que el deseo de lucha de muchos líderes de la revolución del 32 se volviera a encender contra la posibilidad de un nuevo movimiento armado, organizado por los elementos radicales de los demás Estados. Ya se sabía que la única forma de superar a la dictadura era mediante luchas políticas.

Mientras tanto, varios interventores trataron de organizar en sus Estados partidos políticos con distintos nombres, Social Democrático, Republicano Liberal y hasta Socialista. Estos partidos eran sostenidos por los alcaldes y los jefes políticos municipales en lugar de los políticos tradicionales de la Vieja República.⁷⁰ Si a esto agregamos que los municipios dependían directamente del gobierno, ya que los alcaldes eran nombrados por los interventores, entenderemos entonces por qué los nuevos dueños del poder se hicieron poderosos con tanta facilidad. Después de la promulgación de la Constitución estas mismas personas tuvieron la oportunidad de ser elegidos gobernadores. Los políticos viejos, destituidos en 1930, que no tenían nada nuevo que decirle al pueblo, no consiguieron mucho del electorado que votó el 3 de mayo de 1933. La mayoría de los interventores se transformaron en los jefes políticos de sus Estados durante espacios de tiempo que variaron entre cuatro y veinte años.

Bajo la influencia del corporativismo y del fascismo, Getulio Vargas se preocupó por atraer a las clases proletarias de los centros urbanos que pudiesen caer bajo la influencia del izquierdismo. Por esta razón continuó la tarea de promulgar leyes laborales y sugirió que se formara una representación de la clase obrera en el Congreso, idea que encontró una fuerte resistencia por parte de los amigos de Vargas. El año de 1933 fue un año de gran agitación política, al extremo de que sorprende el hecho de que las elecciones se realizaran el 3 de mayo y que la Constituyente haya podido ser inaugurada el 10 de noviembre.

El periodo entre 1932 y 1933 fue muy fértil en el terreno de las discusiones ideológicas. Los periódicos y las revistas discutían los problemas nacionales e internacionales, tratando de orientar las opiniones hacia la Constitución que iba a ser elaborada. Los católicos, encabezados por Alceu Amoroso Lima, presidente del centro D. Vital, condenaban al laicismo de la Vieja República y abogaban por una nueva constitución promulgada en el nombre de Dios, que estableciera la validez jurídica del casamiento religioso y que permitiera la

⁷⁰ Silva, Hélio. 1933. *A Crise do Tenentismo*, pp. 113 y 119. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 1968.

enseñanza religiosa en las escuelas públicas. También defendían la indisolubilidad del casamiento civil.⁷¹

Éstos eran los temas que se discutían todos los días en la prensa, en los congresos y en la tribuna de la Constituyente. La corriente católica demostraba una gran simpatía por las fuerzas de la derecha y combatía a los simpatizantes del socialismo que proliferaron a partir de 1930.⁷²

Los católicos organizaron la Liga Electoral Católica que se encargaba de recoger opiniones sobre algunos principios de los candidatos de los distintos partidos inscritos para la elección. Luego señalaban a los electores los candidatos por los que no debían votar porque no aceptaban los principios defendidos por la LEC. Como podemos ver, con este procedimiento se ahorraban el trabajo de organizar un partido católico.

La Constituyente, que había sido elegida en mayo de 1933, estaba compuesta por políticos del periodo anterior a la revolución, elegidos por el pueblo y por diputados de las clases trabajadoras elegidos por los sindicatos de patronos y empleados,⁷³ por políticos y por "tenientes" que habían surgido con la revolución. Era una concesión a las ideas en boga en Europa. Se quería demostrar el fracaso de la democracia liberal y sustituirla por la democracia social. Aunque el proyecto de constitución que se le entregó a la Asamblea mantenía los principios abstractos generales de una democracia burguesa y no proponía reformas estructurales, indicaba el propósito de buscar un acercamiento con la Iglesia y de absorber el movimiento obrero por medio de concesiones. Desde entonces la cuestión obrera fue considerada como una cuestión social y no un simple problema de la policía.

La tendencia laica fue abandonada. Los constituyentes comenzaron el texto de la Constitución invocando la "fe en Dios". Consagraron la indisolubilidad del matrimonio, reconocieron la validez jurídica del casamiento religioso, permitieron la enseñanza religiosa con una regularidad optativa en las escuelas públicas, permitieron la asistencia religiosa a los militares en los hospitales y prisiones y concedieron personalidad jurídica a diversas asociaciones religiosas. La Constitución incluyó en su texto un tema, el V, Sobre el Orden Económico y Social, en el cual autoriza a la unión a que monopolice

⁷¹ Lima, Alceu Amoroso. *Indicações políticas*, p. 36. Civilização Brasileira, S. A. Rio de Janeiro, 1936.

⁷² Lima, Alceu Amoroso. *Ob. cit.*, p. 60.

⁷³ Basbaum, Leoncio. *História Sincera da República*, vol. III, p. 71, Editora Edalgit, São Paulo, 1962.

por motivos de interés público algunas industrias, asegura la pluralidad y la autonomía sindical, establece el salario mínimo, la jornada de trabajo de 8 horas diarias, el descanso semanal obligatorio, las vacaciones remuneradas, la indemnización por despido sin causa justa, la asistencia, la licencia para las mujeres embarazadas y la justicia laboral.

Sin duda alguna, la Constitución representaba un adelanto sobre la Constitución del 1891. Absorbía varias reivindicaciones y trataba de reflejar los principios formulados por distintas corrientes políticas. Sin embargo, sólo significó una tregua entre las fuerzas en pugna. La elección del dictador para presidente y de la mayoría de los interventores como gobernadores de los Estados agravó las presiones existentes. Por esta razón sólo pudo ser aplicada durante un corto tiempo. En 1935 se suspendió su aplicación en ocasión del decreto de estado de sitio, y en 1937 fue revocada por una constitución corporativista. Los tres años que rigió, fueron tres años de luchas ideológicas y políticas entre los grupos de la izquierda y los de la derecha. Después de la sublevación de la izquierda, en noviembre de 1935, las fuerzas de la derecha resultaron victoriosas y consolidaron su poder en 1937 con el establecimiento del llamado Estado Nuevo, de orientación fascista.

VIII

EL INTEGRALISMO, LA ALIANZA NACIONAL LIBERADORA Y LA PREPARACIÓN DEL GOLPE DE 1937

El periodo posterior a la promulgación de la Constitución de 1937 encontró dificultades económicas y de agitación política. Los acontecimientos en la política europea repercutían en el Brasil cada vez más. Mientras tanto el valor de las exportaciones seguía bajando y el precio de la mercancía subía,⁷⁴ fenómeno que provocaba el descontento y la desilusión ante los resultados de la revolución de 1930. El gobierno y la oposición se hacían trizas en la Cámara, en el Senado y en la prensa. Infelizmente las peleas se daban más por posiciones políticas, por intereses personales, que por principios ideológicos. Muchos factores contribuyeron al éxito en la formación de un partido brasileño de tendencia francamente fascista que se llamó Acción Integralista Brasileña. Entre estos factores debemos nombrar la

⁷⁴ Bastos, Abguar. *Prestes e a Revolução Social*, p. 292. Calvino Ltda. Rio de Janeiro, 1946.

propaganda fascista italiana y portuguesa, el ascenso de Hitler al poder en Alemania y las graves dificultades por las que atravesaba el gobierno republicano español. Plinio Salgado, jefe de este partido, tuvo más éxito que sus antecesores, quienes trataron de organizar movimientos semejantes: en Minas Gerais, Francisco Campos, y en Ceará, Severino Sombra. Salgado contaba con un equipo de intelectuales que escribieron decenas de libros contra la democracia liberal, el sistema de votación,⁷⁵ el imperialismo americano y el inglés y sobre todo el comunismo, doctrina que se señalaba como la hija directa del capitalismo. En sus libros defendía la forma totalitaria de gobierno⁷⁶ y declaraba que su posición tenía una visión integral del hombre. Acusaba al judaísmo como el responsable de los males que sufría la humanidad⁷⁷ y se proponía resolver los problemas sociales con un gobierno corporativista. Su programa era copiado de aquellos elaborados en Italia por Mussolini que agregaban una parte preparada en función de algunos estudios sumarios sobre la realidad brasileña y de las ideas defendidas por pensadores nacionales como Alberto Torres, Oliveira Vianna y Jackson de Figueiredo. Este programa comprendía los siguientes principios:

Los cuatro primeros, heredados del fascismo, son:

1. La nación es un organismo político, económico y étnico, por lo cual la representación no puede ser exclusivamente política.
2. El sindicato debe ser persona del derecho público.
3. La economía debe ser dirigida por el Estado.
4. Se debe asignar una función social a la técnica capitalista y a la propiedad.

Se sumaban a los principios ya mencionados otros cinco, exclusivos para Brasil:

- a) Unidad en la Federación.
- b) Representación política de carácter técnico, simultánea a la económica; pero que ambas sean la expresión de fuerzas productoras y culturales de las distintas regiones.
- c) Autonomía administrativa en los municipios.
- d) Integración de los grupos profesionales en el Estado de abajo hacia arriba.

⁷⁵ Reale, Miguel. *ABC do Integralismo*, pp. 32 y ss. Livraria José Olympio Editora, Rio, 1935.

⁷⁶ Salgado, Plinio. *O que é o integralismo*, pp. 27-8. Schmidt Editör, Rio, 1933.

⁷⁷ Reale, Miguel, *ob. cit.*, p. 118 y Barroso, Gustavo, *Brasil, Colônia de Banqueiros*, 3ª edição. Civilização Brasileira, S. A. Rio, 1935.

- e) Exclusión de cualquier tiranía que el Estado ejerza contra el individuo y sus proyecciones morales.⁷⁸

Cuando hoy leemos a los autores integralistas, con la perspectiva histórica que el tiempo nos ha dado, observamos que los jóvenes derechistas de aquella época trataron de adaptar una respuesta fascista al desafío de la realidad brasileña. Fanáticos y dueños de una impresionante violencia verbal apuntaban en sus críticas la base de los problemas nacionales. Intentaban demostrar que nuestro país era explotado por los banqueros internacionales, que el voto secreto que tanto entusiasmaba a los "tenientes" no mejoraba las condiciones de vida de las clases humildes y que la formación ideológica de los políticos profesionales carecía de espíritu público. Aceptaban en sus filas a personas de todos los matices que se adhiriesen al integralismo por convicción filosófica, por sentimientos anticomunistas o porque simplemente creían que los integralistas iban a llegar al poder. Recibían los más diversos tipos de apoyo, lo cual originó tendencias muy diferentes dentro del movimiento. Los métodos que usaban eran los mismos de los fascistas europeos: un lenguaje exaltado, amenazas a quienes no los apoyaran, organizaban desfiles a los que iban vestidos con camisetas verdes, utilizaban el sigma como emblema y juraban obediencia incondicional al jefe nacional.

Getulio Vargas buscaba motivos para suprimir la Constitución y permanecer en el poder; por esto vio con simpatía al movimiento integralista. No trató de impedir las agitaciones que promovían dentro del país y en escala internacional trató de mejorar la situación económica por medio de la intensificación del comercio con los países del Eje, sobre todo con Alemania. Este país compró algodón brasileño⁷⁹ en gran escala y en condiciones muy ventajosas, mientras se estaba preparando para la guerra y trataba de crear reservas estratégicas. Los capitalistas también comprendieron que el fascismo era una solución favorable a sus intereses y resolvieron ayudar a financiarlo. Por otra parte representaba una garantía contra el posible progreso de los sectores de izquierda y la seguridad de que el propio movimiento integralista no tomaría represalias en su contra. El integralismo contó también con las simpatías de los católicos, aunque el movimiento era espiritualista y deísta, porque otorgaba libertad de credos a sus adeptos. Durante esta época, católicos como

⁷⁸ Reale, Miguel. *Perspectivas integralistas*, pp. 42-3. Livraria Editora Odeon, São Paulo.

⁷⁹ Bastos, Abguar, *ob. cit.*, pp. 292 y ss.

Alceu Amoroso Lima ⁸⁰ hicieron la apología de este movimiento y criticaron a la democracia liberal y al socialismo marxista. Hoy, el autor mencionado, forma parte de las filas liberales deseosas de reformas sociales.

La amenaza del integralismo nacional y el progreso del fascismo en Europa ocasionó que los hombres de izquierda de los más diversos matices se unieran en un frente único a la manera del que existía en Francia bajo el gobierno de Léon Blum y que se llamó Alianza Nacional Libertadora. El Partido Comunista del Brasil participó en esta alianza, hecho que demostró el abandono de una política sectaria por una más abierta. El frente único estaba encabezado por Luiz Carlos Prestes y por políticos radicales de gran prestigio popular como Mauricio de Lacerda, socialistas como Abguar Bastos y João Mangabeira y de "tenientes" como Agildo Barata y Herculino Cascado. A pesar de que contaba, entre sus filas, con numerosos intelectuales, la alianza nacional no poseía la disciplina interna del integralismo y sus intelectuales no alcanzaban a organizar una doctrina que interpretara la evolución historicosocial del país. Con excepción de algunos libros y artículos contra el fascismo, sólo el libro del historiador Caio Prado Junior ⁸¹ trató de interpretar la evolución política del país según el materialismo histórico. El programa político de la alianza estaba fundamentado sobre los siguientes principios:

I. Suspensión definitiva del pago de las deudas imperialistas del Brasil, ya que deben considerarse liquidadas; que el monto de esas deudas se aplique en beneficio del explotado pueblo del Brasil.

II. Nacionalización inmediata de todas las empresas imperialistas —que son trampas— para las cuales los brasileños trabajan como perros, mientras que las ganancias terminan en los bolsillos de los magnates extranjeros.

III. Protección para los pequeños y medianos propietarios y labradores: que se entreguen las tierras a los campesinos y trabajadores rurales que la cultivan, porque ellos la han valorizado con su trabajo y por lo tanto son los únicos y legítimos propietarios.

IV. Que el pueblo goce de las más amplias libertades, así como los extranjeros que aquí trabajan y que son explotados al igual

⁸⁰ *Indicações Políticas da Revolução à Constituição*. pp. 187-220. Civilização Brasileira, S. A. Rio, 1936.

⁸¹ *Evolução Política do Brasil*. 1ª edição. São Paulo, 1934.

que los brasileños. Estas libertades han sido conquistadas por el pueblo, que sin embargo nunca ha podido gozarlas en toda su plenitud. Hoy el pueblo las reclama en legítimo derecho, no importa lo que cueste.

V. Constitución de un gobierno popular, guiado por los intereses del pueblo brasileño, en el cual podrá participar cualquier persona en la medida en que su colaboración sea eficaz.⁸²

La Alianza Nacional Libertadora logró un gran apoyo en el medio obrero, intelectual y en la baja clase media de los grandes centros urbanos. Sin embargo, no pudo afianzarse a consecuencia de las divergencias internas, sobre todo entre comunistas y no comunistas y la infiltración policial.⁸³ La política italoalemana provocó una marcha mundial hacia la derecha, que se debió en parte al temor de la burguesía de una revolución socialista, a la presión de la Iglesia, en aquel entonces muy conservadora, y en Brasil además, a los integristas. Todo esto condujo a Getulio Vargas a prohibir su propaganda y a clausurar el movimiento. Esto provocó a personas moderadas como el alcalde del Distrito Federal, el doctor Pedro Ernesto, a apartarse del movimiento, y que los exaltados se encarnizaran y se prepararan para la revolución, encabezados por el Partido Comunista. Tiempo atrás, Prestes había entrado clandestinamente en el país acompañado por su esposa alemana Olga Benario y por algunos asesores extranjeros ligados a la Internacional Comunista como el alemán Harry Berger, el americano Alan Baron y el argentino Rodolfo Ghioldi. Sin embargo cayó en el error de sobrestimar el prestigio de la alianza entre las filas del ejército y el prestigio de su nombre, y creyó que cualquier intento militar sería apoyado inmediatamente por una huelga general de los trabajadores y seguido en consecuencia por la toma del poder. Comenzó entonces a conspirar, a preparar la revolución, que estalló en noviembre de 1935 en las ciudades de Natal, Recife y Rio de Janeiro. Sin embargo, las fuerzas federales no tardaron en sofocarla.

Getulio, con la habilidad que lo caracterizaba, comprendió que había llegado el momento de actuar, de dar un golpe que lo perpetuara en el poder. Contaba para eso con un Parlamento dócil, atemorizado, que no tuvo otro remedio que conceder un "estado de sitio" para todo el territorio nacional y leyes de excepción que fueron aplicadas a los sublevados y a toda persona que tuviera una

⁸² Bastos, Abguar, *ob. cit.*, p. 285.

⁸³ Henriques, Alfonso. *Asenção e Queda de Getulio Vargas, o Maquiavélico*, vol. 1, p. 336. Distribuidora Record. Rio, São Paulo, s/f.

simpatía no comprobada por la Alianza Nacional Libertadora. Censuró la prensa, y las prisiones se llenaron. El empleo de torturas se generalizó. La mujer de Prestes fue entregada a la Gestapo alemana y murió en un campo de concentración nazi. Desaparecieron las garantías individuales. Para tratar de despistar al pueblo sobre sus propósitos dictatoriales, Getulio permitió que se llevara a cabo una campaña electoral para su sucesión. La disputaron el gobernador de São Paulo y el ingeniero Armando Sales de Oliveira, conservador⁸⁴ ligado a los grandes cultivadores de café y a la industria, como candidato de la oposición. El abogado José Américo de Almeida, un representante de los hombres que hicieron la revolución de 1930, que se había hecho famoso por su integridad moral y por el éxito que había tenido una novela suya de tipo regional intitulada: *A bagaceira* y, finalmente, el jefe nacional de los integralistas, el escritor Plinio Salgado, disputaba con José Américo las simpatías del presidente.

Mientras se llevaba a cabo la campaña por la sucesión, Vargas pronunciaba discursos en los cuales aludía continuamente a su próximo alejamiento del gobierno y trataba de averiguar si tendría el apoyo necesario del ejército y de los gobernadores de Estado para un golpe. Le encargó al jurisconsulto Francisco de Campos la elaboración de una Constitución. El pretexto para el golpe de Estado iba a ser la necesidad de salvar al Brasil, un país cristiano, de los peligros del comunismo. Para darle más autenticidad al pretexto se usó un documento falso, conocido con el nombre de Plan Cohen, que anunciaba que el gobierno iba a ser derrocado y que se iba a instaurar un gobierno comunista.⁸⁵ La divulgación del documento dio a Vargas la oportunidad de obtener del Parlamento el decreto de un "estado de guerra" y en seguida después la disolución del Congreso y del Senado y la proclamación del Estado Nuevo.

IX

EL GOLPE DEL 10 DE NOVIEMBRE Y LA CONSTITUCIÓN DE 1937

El golpe de Estado del 10 de noviembre que instauró en el poder a un gobierno fuerte con tendencias corporativistas, se había pre-

⁸⁴ Jornada Democrática (Discursos políticos), Livraria José Olympio Editora. Rio de Janeiro, 1937.

⁸⁵ Coutinho, Lourival. *O General Gois depõe*, pp. 298-303. Livraria Editora Coelho. Rio de Janeiro, 1956.

parado desde 1935, según confesó el general Góis Monteiro.⁸⁶ Lo que ocurrió fue que Getulio Vargas y sus seguidores más activos facilitaron la acción de los comunistas para luego poder tener un pretexto⁸⁷ para adoptar medidas de excepción que favorecieran el golpe y para luego infiltrar elementos de su confianza en el grupo integralista con el fin de realizar el mismo trabajo. Mientras preparaba el golpe, Getulio Vargas comprendió que los gobernadores lo iban a apoyar porque estaban deseosos de permanecer en sus cargos. Además, lo apoyaba la mayoría absoluta de sus ministros y de los jefes militares. Sabía, además, que el Parlamento se portaría dócilmente ante su voluntad. Trató de obtener entonces el apoyo de los integralistas, lo cual resultó sumamente fácil. Plinio Salgado esperaba realizar al lado de Vargas la misma hazaña que Hitler había logrado junto a Hindenburg en Alemania. Después del golpe, cuando comprendió que sus esperanzas se venían abajo, trató de conseguir que lo nombraran ministro de Educación en recompensa por los servicios prestados.⁸⁸

Vargas, astuto, trató de llevar a cabo el fascismo en el Estado Nuevo, pero naturalmente sin el jefe nacional.

Las etapas del golpe se cumplieron con éxito. Primero se divulgó el Plan Cohen en los periódicos con el propósito de atemorizar al pueblo y de preparar el espíritu de la clase media según la conveniencia de los sectores militares legalistas. Después con la ayuda de los ministros de Guerra y de Marina, Vargas solicitó al Parlamento que decretara el "estado de sitio". El decreto fue aprobado en la Cámara por 138 votos contra 52 y en el Senado por 22 votos contra 3, el 1º de octubre de 1937. Lo más curioso es que hombres como João Neves da Fontoura, que conocían de cerca al presidente y que tenían experiencia revolucionaria desde los años 1930 y 32 se dejaron engañar por los acontecimientos y votaron a favor de las medidas excepcionales propuestas por el Ejecutivo. Vargas trató de anular las posibilidades de acción de sus probables competidores y colocó a la Brigada Militar de Rio Grande do Sul y a la policía de São Paulo bajo el control del ejército. El gobernador "gaúcho", Flôres da Cunha, comprendió que sus días estaban contados, abandonó el poder y se refugió en Argentina. Cuando el golpe ya estaba por ocurrir, Getulio prohibió la divulgación del manifiesto de Armando Sales de Oliveira en el que denunciaba al país todas las anormali-

⁸⁶ Henriques, *ob. cit.*, pp. 336 y 468.

⁸⁷ *Idem*, *ob. cit.*, p. 455.

⁸⁸ *Idem*, *ob. cit.*, pp. 469 y ss.

dades que presentía. Vargas comprendió que había llegado el momento de actuar. El 10 de noviembre sitió al Parlamento para impedir la entrada a los diputados. El golpe se había consumado. Los gobernadores de Pernambuco, Carlos Lima Cavalcanti, y de Bahía, Juracy Magalhães, que no estaban de acuerdo, fueron sustituidos por los comandantes de las regiones militares. El presidente, recién transformado en dictador, habló a la nación para justificar su actuación. Dijo que había obrado con el deseo de librar al país de la falta de unión y del dominio comunista. En esta ocasión y como lo había hecho el primer emperador del Brasil, otorgaba al país una nueva constitución, elaborada por el jurisconsulto Francisco de Campos a quien nombraba su ministro de Justicia. La dictadura se consolidó el 2 de diciembre por medio de un decreto que prohibía el funcionamiento de todos los partidos políticos, incluyendo a la Acción Integralista Brasileña. Los integralistas trataron de organizar un contragolpe, encabezado por sus miembros más radicales y con el apoyo de los políticos enemigos del Estado Nuevo, como Otavio Mangabeira y el almirante Euclides de Figueiredo. El 11 de mayo de 1938 tomaron por asalto el Ministerio de la Marina, la Radio Mayrink Veiga y el Palacio de la Guanabara, residencia del dictador. Después de 5 horas de indecisión entre atacantes y atacados los primeros fueron derrotados, hechos prisioneros y fusilados.⁸⁹ Así terminó la última resistencia armada contra el Estado Nuevo, y Vargas pudo construir entonces su máquina dictatorial y de propaganda que lo mantendría en el poder hasta 1945, y que lo transformó en una figura de gran prestigio popular hasta el día de su trágica muerte en agosto de 1954.

La Constitución de 1937 absorbió varios principios que el fascismo defendía en Europa: centralizó el gobierno, eliminó la autonomía de los Estados, que quedaron en manos de los interventores nombrados por el dictador, y se prohibió el uso de banderas o himnos estatales. La duración del mandato presidencial se prorrogó de cuatro a seis años. Aunque la Constitución mantuvo el sistema representativo de gobierno y un Parlamento formado por la Cámara de Diputados y por el Consejo Federal, nunca se efectuaron elecciones y el Parlamento nunca se reunió. El dictador era el que legislaba por medio de decretos y leyes. El jefe de Estado tenía una serie de funciones legislativas que fortalecían al Ejecutivo. Los burócratas, inclusive los vitalicios, los magistrados y los maestros universitarios perdieron

⁸⁹ Basbaum, Leoncio. *Historia Sincera da República*, vol. 3, pp. 12 y ss. Editora Edaglit, São Paulo.

sus garantías desde el momento en que un artículo de las disposiciones transitorias de la Constitución autorizaba al dictador a destituirlos o jubilarlos como medida de seguridad. En lo que se refiere al orden económico, el gobierno tomó el camino del corporativismo. Se inspiró para eso en la Carta del Lavoro de la Italia Fascista, y como consecuencia se prohibieron las huelgas de obreros, se crearon contratos colectivos de trabajo, se estableció el salario mínimo, se eliminó la pluralidad sindical, se determinó que la organización sindical estaría orientada por el Ministerio del Trabajo y se creó la Justicia Laboral.

Sin embargo, la aplicación de estos principios no se hizo de manera uniforme en todo el país. Dependía de la mayor o menor fidelidad de cada interventor en los Estados. El interventor no los aplicaba en su totalidad sino en la parte más conveniente para la consolidación de su poder personal. Por ejemplo, nunca se aplicó el principio que establecía que el pueblo debería pronunciarse cada dos años por medio de un plebiscito para aprobar o condenar al interventor. Con el enorme apoyo con que contaba, Getulio Vargas creó un Departamento de Prensa y Propaganda encargado de la censura de la prensa. Se pretendía con esto que la prensa nacional no divulgara ideas democráticas y socialistas, y que se creara una atmósfera favorable de apoyo al Estado Fuerte o Nacional como el profesor Francisco de Campos lo llamaba.

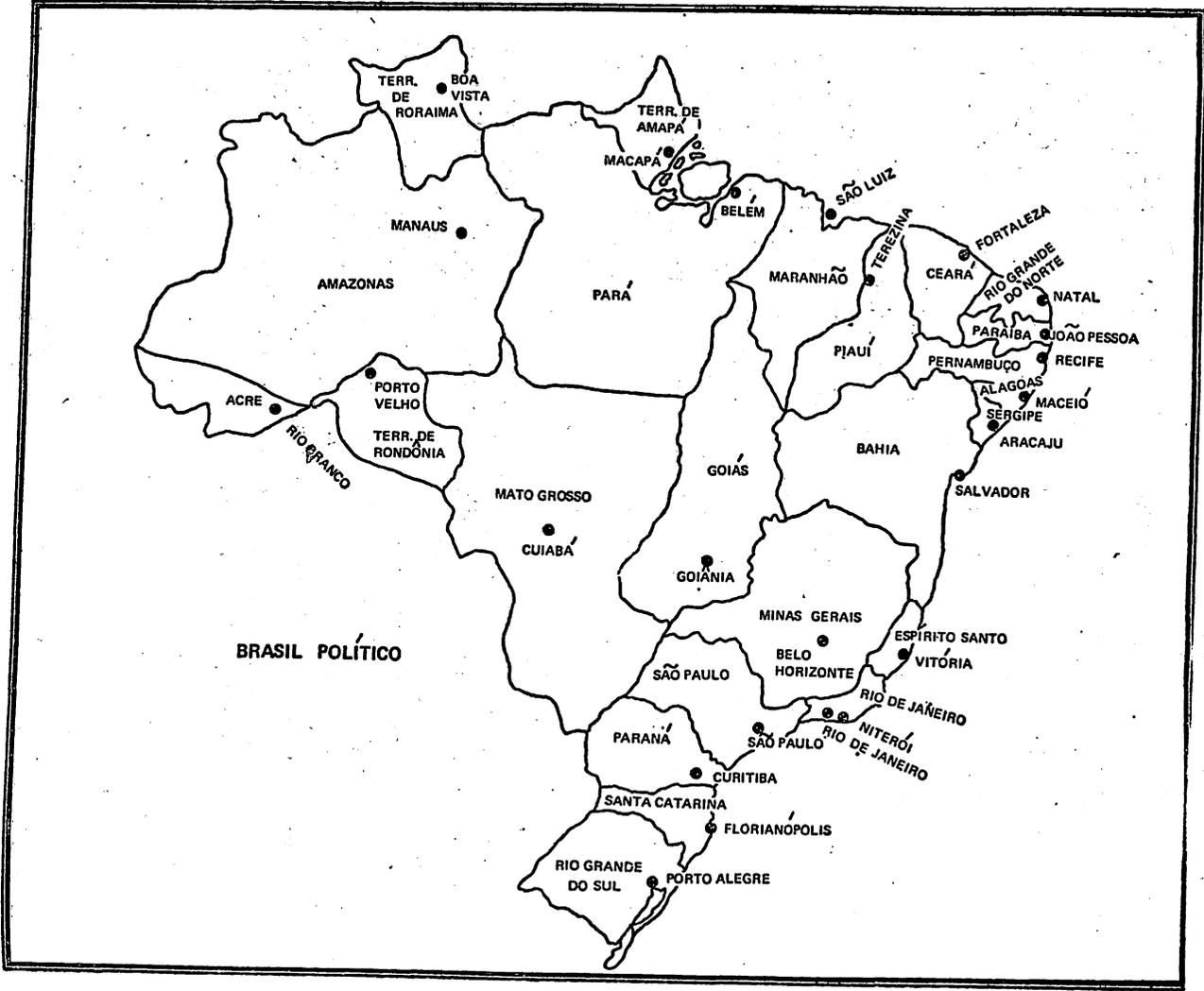
x

CONCLUSIONES

Los acontecimientos que se desarrollaron en Brasil entre 1922 y 1937 tuvieron gran influencia en la vida política y económica nacional, ya que provocaron mayor movilidad política y social. El país, que poseía una economía predominantemente agrícola y una aplastante mayoría de población rural se industrializó; su población urbana corresponde actualmente a más del 40% de la población total. Sin embargo su tragedia se debe al hecho de que los gobiernos que se sucedieron de 1930 a 1968 no hicieron reformas estructurales en el campo y aún mantienen el viejo sistema colonial de latifundios que cultivan productos tropicales para exportación. Por esta razón existe un desequilibrio entre la agricultura y la industria, entre el campo y la ciudad, que impide el desarrollo de la última por falta de un amplio mercado consumidor y que dificulta en gran medida el suministro de productos alimenticios en las grandes ciudades.

Políticamente podemos ver hoy en día una mayor participación de la clase media y del proletariado urbano en la vida del país. Esta participación se logró a través de elecciones o de presiones sobre el Parlamento en favor de determinadas leyes. Los militares comenzaron a tener una mayor actuación política. En octubre de 1945 derrocaron al dictador y más adelante a varios presidentes y vicepresidentes en ejercicio, como en 1954 cuando volvieron a derrocar a Vargas, en 1955 cuando derrocaron a Café Filho y a Carlos Luz y en 1964 a João Goulart. Todavía queda el caso de Jânio Quadros que por motivos inexplicables renunció a la presidencia de la República el 25 de agosto de 1961. Las constituciones se mantenían en vigor durante cortos periodos y luego eran sustituidas. La Constitución Imperial estuvo vigente durante 65 años y la Constitución de la República Vieja, durante 39 años; las constituciones posteriores a 1930 duraron muy poco tiempo. La de la segunda República duró de 1931 a 1937, la del Estado Nuevo, de 1937 a 1946, y la de la tercera República, de 1946 a 1967. La que rige actualmente tiene apenas dos años de aplicación. Estas constituciones oscilaron siempre entre dos tendencias, una descentralizadora y otra centralizadora. Aunque todas otorgan gran poder al Ejecutivo se observa en las constituciones de 37 y de 67 que fortalecen este poder y restringen la autonomía de los Estados. La legislación social, que se consolidó en 1943 y que fue muy modificada a partir de 1965, mantiene aún en gran parte la orientación que la inspiró.

Consideramos que la Revolución de 1930 fue un acontecimiento fundamental de la historia brasileña, ya que amplió los horizontes y permitió el ascenso de las clases menos favorecidas, a pesar de algunos periodos de retroceso. Aunque no fue la causa directa, la revolución creó un ambiente favorable para las modificaciones estructurales que poco a poco se están realizando, con adelantos y con regresiones, sobre las viejas estructuras coloniales que presidieron la formación brasileña. La revolución es el acontecimiento más importante en la historia brasileña de este siglo.



EL MOVIMIENTO POPULAR CHILENO Y EL SISTEMA DE ALIANZAS EN LA DÉCADA DE LOS TREINTA

Hugo Zemelman M.

INTRODUCCIÓN

En este estudio son dos los aspectos que hemos destacado. El carácter de la clase dominante, sus relaciones con el imperialismo y el empleo del aparato estatal para mantener su hegemonía, y, por el otro lado, el surgimiento de un movimiento popular a través de sus organizaciones sindicales, líderes y partidos políticos. Y ubicándose entre ambas fuerzas la pequeña burguesía, esa "clase de transición en la cual se embotan simultáneamente los intereses de dos clases que hace que se sienta por encima de las contraposiciones de las de transposiciones de clases",¹ y que se desplaza entre ambas configurando alianzas con una u otra. O alianzas que contribuyan a ampliar la base de apoyo del sistema de dominación vigente, o que se enfrenten a éste cuando estrecha lazos con los sectores de trabajadores (empleados, obreros, campesinos), aunque orientándose hacia la participación en el aparato de Estado más que al desplazamiento de la clase dominante.

Desde este punto de vista las capas medias cumplen el papel de intermediarias entre la clase dominante y los trabajadores, ya sea que estas últimas actúen como clases cohesionadas o fraccionadas. Pero esta intermediación que disfraza la cruda realidad de las relaciones entre las clases polares, es en parte el producto de la creciente burocracia del Estado, ya que éste facilita que se conformen grupos sociales cuyo poder y privilegios están determinados por su ubicación en tal superestructura que los transforma en verdaderos agentes del poder.

Lo anterior es consecuencia de la gran dependencia de la clase dominante de la estructura jurídico-institucional que ella misma ha creado, que está determinada por su débil capacidad de acumulación que la obliga, de una u otra forma, a descargar en el aparato de Estado la tarea de mantener e intensificar este proceso.

La clase dominante ha estructurado al Estado como instrumento de desarrollo, desde mediados del siglo pasado, aunque sus contradicciones internas la inhibieron de continuar en esa dirección proteccionista. Constituyendo una clase de carácter principalmente co-

¹ Marx, en *El 18 Brumario*.

mercial, estuvo orientada siempre hacia el comercio, nacional o internacional, según los periodos históricos, con lo que cualquiera nueva actividad productiva está desde la partida marcada por el hecho de ser accesoria de su actividad principal.

La crisis de 1930 no hace sino retomar un camino abandonado por causas de la gran expansión de las exportaciones, primero de productos agrícolas después de la minería.

No obstante, el aprovechamiento del Estado genera sus propias contradicciones. El fortalecimiento de las capas medias ubicadas en sus distintos niveles de funcionamiento transforman al Estado en la base de grupos cada vez más independientes del núcleo oligárquico, que desarrollan sus propias exigencias de participación en los beneficios del sistema. Estas contradicciones se resuelven ampliando la base de ejercicio del poder mediante el mecanismo de delegación, que además sirve a la necesidad que tiene la clase dominante que controla el poder en términos oligárquicos, por efecto de la concentración económica, de ampliar sus bases de apoyo social.

Definido en estos términos, el problema de la lucha política queda circunscrito a forjar una alianza de fuerzas que sea ajena, independiente de la dominante, entendida como núcleo oligárquico y su captación de capas medias.

El primer germen de este nuevo estilo de alianzas lo constituyó el Frente Popular, que no prosperó como fuerza de cambio, y que, por el contrario, por la gravitación de sectores de capas medias superestructurales, o burguesía de servicio, enquistadas tanto dentro como fuera del gobierno, se orientó hacia una alianza restauradora.

A pesar de ello, durante la década de 1930 se puede apreciar el surgimiento de grandes movimientos de masas que no encontraron, lamentablemente, una vanguardia política organizada capaz de hacer la inversión ideológica necesaria para transformarlas en protagonistas de los cambios que entonces ya se esbozaban.

Se evidencia una ideología sin la capacidad política consecuente. Por primera vez se manifiesta el fenómeno de disociación entre un pensamiento ideológico y una voluntad de acción política. Mientras por un lado se efectuaban los análisis justos que el momento exigía, por el otro se caía en la turbulencia de la política contingente, sin perspectivas y distorsionándose el potencial revolucionario de las clases populares.

Es un movimiento popular que surge con sello propio, pero que se diluye con el compromiso del Frente Popular. Desde entonces esta fuerza nueva ha corrido los riesgos de contagiarse de los valores de

movilidad social que se desarrollarán todavía más con el acelerado proceso de industrialización.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La idea aceptada comúnmente es que una de las consecuencias más importantes de la crisis fue la sustitución de la economía "hacia afuera" por la economía hacia adentro, precipitada por el quiebre de las exportaciones. Durante decenios las exportaciones habían desempeñado el papel de la "gallina de los huevos de oro", facilitando a los grupos dominantes eximirse de toda clase de tributación interna. Sólo en 1924 se establece el impuesto a la renta, aunque el peso del financiamiento continúa descansando, fundamentalmente, sobre las utilidades provenientes de las exportaciones e impuestos indirectos pagados por los grupos dependientes.

La tesis de que la industrialización se inicia en este periodo (hoy descartada por diversos investigadores) vincula el proceso con el surgimiento de una burguesía que se consolida en el poder. Sin embargo, la emergencia de fuerzas sociales nuevas y la organización del Frente Popular, que impulsa una política de independencia del mercado externo, no puede interpretarse como reflejando un fenómeno de esta naturaleza, pues ello supondría aceptar que el periodo constituye la culminación de una lucha por el poder que se resuelve con el desplazamiento de la "oligarquía terrateniente". En el supuesto de la argumentación se relaciona industrialización con burguesía, a partir de la idea de que se entabla una lucha de clases entre ésta con el grupo dominante tradicional, de extracción agraria.

Para entender el significado social y político que tuvo la industrialización en ese periodo, y los supuestos sociales que le son correlativos, hay que remontarse a algunos años antes de la crisis.

Según el testimonio de diferentes investigadores del tema, ya durante el siglo XIX la clase dominante chilena impulsó una política con clara orientación proteccionista,² utilizando para ello el aparato estatal jurídicamente estructurado por Portales en 1833.

Hay precedentes de una actitud desarrollista y proteccionista, con patrocinio del Estado, en la estructura administrativa de la colonia española, tanto en su ideología mercantilista como estatista. Esta especie de continuismo es explicable considerando que el grupo económico dominante durante la Colonia continúa siéndolo durante la

² Aníbal Pinto, *Chile, una economía difícil*, p. 157, Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

Independencia. Según Cardoso y Faletto,³ la capacidad de la clase dominante para imponer un orden nacional estará determinada por su proceso histórico de constitución en el periodo colonial, es decir, por la forma como se expresa "la dependencia económica" durante el desarrollo de la economía chilena. En este sentido, la mayor posibilidad de legitimar el nuevo orden "post-colonial" la tuvieron aquellos grupos dominantes que controlaban las actividades económicas básicas (exportación, por ejemplo), o que no estaban en tan estrecha relación de dependencia, o que su vinculación con algún centro hegemónico no fuera tan dominante para un desenvolvimiento relativamente más autónomo.

La tesis de que el grupo comercial exportador para afianzar su poder requiere de un sistema de alianzas con las oligarquías locales, no directamente integradas al sistema comercial o financiero orientado "hacia afuera",⁴ supone que hay dos grupos (o clases) en cuya alianza se basaba el poder. En el caso de Chile, creemos, tal supuesto no se cumple porque "la imposición de un orden nacional", logrado con Portales, que reemplaza al desbaratado aparato colonial, pone en evidencia el predominio de la clase terrateniente.⁵

Pero los propietarios agrícolas nunca han revestido el carácter de una oligarquía agrícola, en sentido estricto, pues mantienen estrechas vinculaciones con las actividades comerciales, que van acentuándose a medida que avanza el siglo XIX.

Simultáneamente con adoptar una serie de medidas de carácter proteccionista, como el impulso dado a los ferrocarriles públicos y la creación de organismos de crédito (la Caja de Crédito Hipotecario), la clase dominante impulsa un cierto desarrollo manufacturero.

Mientras la actividad comercial estuvo equilibrada con la actividad agropecuaria se dieron las condiciones para estimular el desarrollo de la infraestructura que requerían sus actividades comerciales, incluso de industrias que restringieran las importaciones de bienes de consumo que podían abastecer. Este proceso se refleja en las estadísticas, donde puede apreciarse que "en cinco años las importaciones aumentaron cinco veces"; las importaciones de materias primas y maquinarias "aumentan su participación desde poco más del 10% (4.5, 5.5 y 9%) en 1870, hasta 50.3% en 1907 (34 y 16.3%), mientras que las importaciones de bienes de consumo (en términos relativos) bajan desde 89.6 a 48.5% en el mismo periodo. Debe

³ Faletto y Cardoso, *Dependencia y desarrollo de América Latina* (Ensayo de interpretación sociológico), Instituto Latinoamericano de Planificación Económico-Social, 1967, mimeografiado (p. 147).

⁴ Faletto y Cardoso, ob. cit., p. 49.

⁵ Aníbal Pinto, ob. cit., p. 157.

acotarse, sin embargo, que las importaciones de maquinarias no constituyen un buen indicador, ya que seguramente iban destinadas a la minería, aunque el aumento en las importaciones de materias primas resulta difícil explicar si no es por un incremento de los productos manufactureros.”⁶

El rápido desarrollo de la industria es, en parte importante, producto de inversiones británicas. Como lo observa un autor, “los apoderados de estas firmas (Morht, Humphrey and Dirkinson; Lever, Murphy and Co.; Balfour, Lyon and Co.; Hardie and Co., y Morrison and Co.) consideraban sus negocios más como partes integrantes de la economía chilena que como segmentos de una extranjera”. Ello se explica por el hecho de que el centro metropolitano de dependencia —en ese periodo Inglaterra— se caracterizaba por ser un capitalismo comercial-financiero que orientaba sus inversiones fundamentalmente a “controlar la comercialización de la periferia, sin sustituir a la clase económica local, que hereda de la Colonia su base productiva” (exceptuando la explotación minera).

Lo anterior permitió el fortalecimiento de grupos productores nacionales, pues el polo hegemónico no interfería, más aún, hasta pudo estimular la expansión del sistema productivo local.⁷

El desarrollo en un sector manufacturero incipiente durante una parte del siglo xix (especialmente durante los gobiernos conservadores) corresponde al periodo en que el sistema económico nacional era más autónomo. Pero el crecimiento del mercado capitalista y su efecto en la actividad comercial exportadora determinan un cambio en las bases de sustentación de la clase dominante. Se produce un abandono de la incipiente manufactura para afianzarse en la actividad comercial exportadora, basada en la agricultura, cuyos productos, en especial el trigo, constituían una fracción significativa en las pautas de intercambio.⁸ Esta actividad agrícola comercial le permitía al grupo dominante incrementar sus ganancias exclusivamente sobre la base de explotar la mano de obra interna, que era barata, y los precios externos, eximiéndose así de cualquier esfuerzo por continuar impulsando el crecimiento de una infraestructura.

Históricamente tiene lugar entonces una oscilación de la clase dominante: primero, desde la actividad agrícola-comercial a la manufacturera, aliada o no con inversiones extranjeras, y después un regreso y afianzamiento en su condición comercial-exportadora, lo que culmina al abrirse las puertas al auge de la minería.

⁶ Ricardo Lagos, *La industria en Chile: antecedentes estructurales*, Editorial del Pacífico, Santiago, s/f.

⁷ Faletto y Cardoso, ob. cit., pp. 48-49.

⁸ R. Lagos, ob. cit., p. 28.

El abandono de un proteccionismo incipiente como resultado del auge de la actividad comercial tiene su expresión ideológica en el liberalismo (Rep. Liberal, 1870), que frena el desarrollo manufacturero.

El liberalismo con su política librecambista es reflejo de la inserción de la economía chilena en un sistema mundial que la configura como economía dependiente, monoexportadora, lo que coincide, en el ciclo largo, con la sustitución de Inglaterra por EE. UU. como centro hegemónico y que se traduce en que la inversión extranjera no coexiste con el productor nacional, sino que lo reemplaza.

Esta situación la refleja un editorial de *El Mercurio*. En él se expresa que "Chile puede ser industrial, pues tiene capitales, brazos y actividad, pero le falta la voluntad decidida de querer ser. Hay un fuerte capital extranjero representado en la importación de manufacturas. Este capital está y estará siempre dispuesto a poner todo obstáculo que tenga en sus manos al establecimiento de la industria en el país. El proteccionismo debe ser la leche que amamante a toda naciente arte o industria; el alma que les dé su real animación positiva; porque sin él todo naciente adelanto queda expuesto desde la cima a los embates furiosos y bien combinados de la importación extranjera que está representada en el libre comercio".⁹

Antes de que se consolidaran grupos internos, el libre comercio sirve para integrar la economía chilena al mercado capitalista mundial. El diario *El Mercurio* aparece entonces como vocero del grupo de agricultores y comerciantes orientados a ramificar sus actividades hacia la esfera de las manufacturas, pero que terminan pronto desplazándose hacia los rubros más lucrativos y menos exigentes en cuanto a necesidad de inversiones adicionales.

Otros antecedentes ilustran sobre la frustración del desarrollo manufacturero en el siglo XIX: El Gobierno aprueba una ley que dispone que los ferrocarriles comprarán equipo en otros países en todos los casos en que los precios chilenos fuesen un 10% más altos que los del equipo extranjero. La consecuencia de esta política fue que se pidieron en 1898 locomotoras a EE. UU., en una época cuando, según el cónsul británico, "a muchos de los establecimientos excluidos de pagar impuestos les ha sido imposible el establecimiento de otras industrias"; y agregaba que "sólo mediante el apoyo directo del Gobierno podría abrirse el camino a la industria nacional que ha probado ser

⁹ Citado por Andrés G. Frank, Chile, el desarrollo del subdesarrollo, revista *Monthly Review*, enero-febrero 1968 (del libro de Hernán Ramírez Necochea, *Historia del imperialismo en Chile*).

capaz de desempeñar satisfactoriamente tales deberes y con economías para el Estado".¹⁰

Sin embargo, estos obreros olvidaban que la ganancia de la clase dominante se basaba en la explotación barata de la mano de obra nacional y en los precios de productos de fácil venta en el exterior que no exigían grandes inversiones, como asimismo en su participación en el producto de las explotaciones mineras controladas por inversionistas extranjeros.

La clase dominante continúa de ese modo siendo agraria-comercial, pero vinculada con los sectores inversionistas extranjeros a través de los tributos a la explotación minera, que asegurándole un adecuado financiamiento al aparato estatal garantiza emplearlo como instrumento para captar sectores emergentes, sin necesidad de promover un esfuerzo interno de capitalización.

Las consecuencias de este proceso son fundamentalmente dos:

Primero, ilustra sobre el carácter comercial del grupo dominante que, ubicado en la actividad de menor riesgo, aseguraba la mayor tasa de ganancia; lo que, a su vez, determina la necesidad de inversiones extranjeras que suplan el esfuerzo de acumulación nacional. Esta circunstancia deriva en un incremento de la penetración de capitales extranjeros y del carácter dependiente de la economía chilena.

La segunda consecuencia consistió en que frustraría, mucho antes que estallara la crisis de 1929, el desarrollo industrial de Chile.

A pesar de que a fines de siglo se observan indicadores de un incipiente desarrollo manufacturero, los sectores más dinámicos de la economía entre 1900 y 1930 eran la agricultura y la minería. Sólo la crisis en la balanza de pagos obliga a regresar a la vieja política proteccionista de mitad del siglo XIX.¹¹ Solamente cuando el Gobierno se enfrenta a la crisis del comercio exterior, recurriendo primero a las reservas de oro del Banco Central de Chile,¹² y después a elevar los aranceles aduaneros o, simplemente, prohibir las importaciones de ciertos productos, se rompe la práctica mantenida desde 1861 de dejar que "opere la mano invisible de A. Smith", manifestándose todos los partidos políticos como "ardientes defensores del liberalismo económico".¹³ Lo dicho corresponde a la afirmación de que el liberalismo, como postura política, es un producto

¹⁰ R. Lagos, ob. cit., p. 28.

¹¹ R. Lagos, ob. cit., p. 35.

¹² Las reservas del Banco Central se redujeron de 458,7 millones de pesos oro a 156,2 millones, entre el 29 de mayo de 1929 y el 31 de marzo de 1933.

¹³ R. Lagos, ob. cit., p. 23.

histórico del periodo en que la economía de Chile se inserta en el mercado capitalista mundial en virtud del auge de la minería de fines de siglo.

Los datos disponibles acerca del desarrollo industrial hasta antes de 1930 señalan que en veintidós años la producción se duplica, mientras que la población (desde 1907 hasta 1930) aumenta sólo en un 33%, provocándose en consecuencia un aumento neto de producción por habitante.¹⁴

A pesar de tal desarrollo, su incremento efectivo se inicia recién a partir de la crisis, con la etapa de sustitución de importaciones, originándose una industria liviana dedicada al consumo, pero que, al no contar con una infraestructura, estaba limitada en sus posibilidades de desenvolvimiento. Es entonces cuando se vuelve a constatar la utilización que del aparato de Estado hace la clase dominante. Se entra a un nuevo periodo de intervencionismo estatal en el proceso productivo. Hasta ese momento su papel había sido servir para robustecer la base de sustentación del poder mediante financiamiento proveniente de las exportaciones mineras, aunque permaneció totalmente ajeno a cualquier ingerencia en el desarrollo económico.

No obstante, la industrialización post-crisis no puede caracterizarse como el producto de una conducta consciente y deliberada,¹⁵ como habría tenido que ser si hubiera correspondido al surgimiento de una *bourgeoisie conquérant*, que toma el poder político y lo ejerce en beneficio de sus intereses de clase. El proceso constituye, más bien, la respuesta para impulsar nuevas fuentes de producción que le permitan a la oligarquía agrícola-comercial desarrollar actividades de intercambio en el marco del mercado interno que reemplaza al comercio internacional en quiebra.

La base de este nuevo intercambio exigía el desarrollo de una infraestructura que tenía que resultar de un esfuerzo de inversión financiado fundamentalmente por los sectores sin acceso a los medios de producción,¹⁶ obtenido mediante un ágil empleo del aparato estatal.

En efecto, el Gobierno de Alessandri abusó del sistema de los impuestos indirectos. "El 7% a las ventas, el 5% a la base... alcanzaba en la práctica a un 10 o un 12%", afectando gravemente los intereses de la pequeña industria y comercio, y, en general, de los consumidores, que son los que, en última instancia, pagan los impuestos. Mientras el 5% a la base rendía 141 millones de pesos en 1937, los

¹⁴ R. Lagos, ob. cit., p. 29.

¹⁵ R. Lagos, ob. cit., p. 6.

¹⁶ Julio César Jobet, *Ensayo crítico del desarrollo económico y social de Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1955 (pp. 194 y 203).

grandes propietarios agrícolas pagaban como impuesto territorial al Fisco la suma de 62 millones de pesos, menos de la mitad.¹⁷ En general la política seguida determina que, tanto en la agricultura como en la industria, la pequeña propiedad decrece, siendo eliminada por la grande. El pequeño propietario se debate en la angustia por falta de crédito, que, en el caso de los agricultores, puede verse por el control ejercido por los señores de la tierra sobre la Caja de Crédito Hipotecario para su exclusivo beneficio.¹⁸

El resultado es el surgimiento de una economía mixta. Esta constituye la forma de organizar la economía propia de clases dominantes que se apoyan en el aparato de circulación. Un sistema que pretende utilizar al Estado como agente de capitalización canalizando los recursos provenientes de los sectores económicamente más débiles. El estatismo intervencionista no es sino otra forma de fortalecer el poder de un sector oligárquico que se mantenía intacto. Es el Estado, a través de sus inversiones, que crea las condiciones para recomenzar un nuevo ciclo de comercialización de mercadería, ahora para el consumo interno.

CRISIS SALITRERA, ANTESALA DE LA GRAN CRISIS

Entre 1925 y 1927 se produce la crisis salitrera como resultado de la competencia del salitre sintético. Se desata una pugna entre los inversionistas ingleses y norteamericanos que se proyecta en una división de la clase dominante.

El Gobierno, apoyándose en el imperialismo norteamericano, pretende superar la crisis mediante una ruptura del control que los ingleses ejercían sobre los precios a través de la Asociación de Productores de Salitre, instaurando el sistema de ventas libres que favorecería directamente los intereses norteamericanos en lucha por controlar esa riqueza. La banca norteamericana, por su parte, otorga empréstitos que se destinan a obras públicas. Los ingleses mantienen algunas posiciones menores, como ser el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.

Los intereses norteamericanos, fortalecidos por el sistema de ventas libres (mayor potencialidad financiera y exclusividad del método Guggenheim), entran a controlar toda la actividad salitrera por intermedio de la COSACH, a la cual el Gobierno entrega todos los terrenos salitreros del Estado, a cambio de participación en sus beneficios, eximiéndola del pago de todos los derechos de explotación.

La COSACH con este respaldo impone una drástica política de

¹⁷ J. C. Jobet, ob. cit., p. 194.

¹⁸ J. C. Jobet, ob. cit., p. 203.

racionalización y maquinización, con graves consecuencias sociales para la clase trabajadora y el país en general.

La producción salitrera, que en 1927 se duplica, es restringida para mantener los precios: en diciembre de 1929 se producen 285.500 tons., mientras que en septiembre de 1930 se baja a 181.500 tons. El comercio del norte empieza a hacer crisis cuando entra a competir con el sistema de abastecimiento de la COSACH. La población minera (salitre y cobre), que en 1927 era de 90.300, en 1930 de 71.800, llega a 39.400 en 1931. El resultado es una restricción violenta del mercado interno, con la consiguiente crisis del comercio y otras actividades que entran en quiebra. El mercado interno también se restringe para la agricultura, la industria y los transportes. El Estado pierde sus derechos de exportación del salitre. El rendimiento del impuesto a la renta se hace crítico (baja de 55 millones a 28 millones). La deuda externa llega a cifras siderales (420 millones de dólares). En estas condiciones los empréstitos no se renuevan y el Gobierno debe suspender el pago de la deuda externa, junto con iniciar una política de economía que se traduce en el despido de empleados y en la rebaja de los sueldos.

Ante la crisis, la clase dominante ofrece dos respuestas: aquellos más vinculados a la industria del salitre pretenden superar la crisis manteniendo el mercado americano, lo que los lleva a respaldar una política de desvalorización monetaria para favorecer las exportaciones; y otros que eligen como fórmula la ampliación del mercado interno, transfiriéndose a otras ramas de la producción, que se oponen a la desvalorización monetaria y son proteccionistas. Con este grupo aparece vinculado el imperialismo inglés, interesado en la ruptura de la COSACH.

Estas dos líneas expresan las contradicciones internas de la clase dominante y los caminos diferentes que elige para *negociar* con los intereses externos procurando arreglos para el pago de la deuda pública. "El Gobierno de Ibáñez expresa estas vacilaciones pasando de la COSACH a la moción Planet (de constituir un frente unido de gobierno latinoamericano) y a la tentativa de detener la crisis agraria con la fijación de primas a las exportaciones de trigo y la prohibición de importar ganado para el consumo."¹⁹

El fraccionamiento de la clase dominante, reflejo de la pugna entre los dos grandes intereses imperialistas, se proyecta en determinados fenómenos políticos (candidatura presidencial de Montero, vinculado a los intereses ingleses, y posterior candidatura de Alessandri). Esta división facilita la maduración de dos procesos: primero, que

¹⁹ Tesis del Buró Sudamericano de la Internacional Comunista, p. 11.

la base económica del poder se traslada a rubros de actividad directamente relacionados con el mercado interno, que por ser reducido exigirá gradualmente su ampliación; y segundo, va a exigir un control sobre los sectores sociales que puedan afectar las exiguas tasas de ganancia de la clase dominante. Por ello este traspaso de intereses exigirá un fortalecimiento del aparato estatal tanto como mecanismo de canalización de inversiones como de control político.

El robustecimiento de la burocracia estatal al incrementar la cantidad de funcionarios fortalece, a su vez, a esas capas medianas (burguesía de servicio) que cada vez serán más importantes para que la clase dominante mantenga su hegemonía a través del manejo del aparato del Estado. La necesidad de manejar la economía interna obliga a una mejor utilización del Estado, con lo cual crea las condiciones para el establecimiento de una relación con los sectores enquistados en su estructura burocrática. De este modo el Estado de mecanismo de control del poder comienza también a mostrarse como base material para la consolidación de una alianza dirigida al ejercicio del poder.

La conquista del poder por el Frente Popular es un ejemplo de cómo los sectores sociales que con el movimiento de 1938 emergían al ejercicio del poder político no constituían una fuerza antagónica coherente sino un conglomerado de sectores determinados por la propia actividad económica del grupo dominante. Sólo aspiraban a ser incorporados a la estructura institucional del poder; o, menos que eso, simplemente convertirse en burócratas de ejecución de una política cuyos centros de decisión les eran ajenos.

CLASE DOMINANTE Y GRUPOS MEDIOS

Con la sustitución de Inglaterra por EE.UU. como centro metropolitano, la inversión extranjera, que hasta 1940 se concentra en los sectores primarios (agrícolas y mineros) y los ferrocarriles, correspondiendo al carácter colonial exportador de las economías latino-americanas (materias primas y productos agrícolas), se traslada al sector manufacturero. La inversión "se integra en forma cada vez más intensiva en los sectores industriales",²⁰ reemplazando al grupo de productores nacionales, mientras que el centro metropolitano deja de constituir un "enclave colonial y exportador, al tiempo que cambia la división internacional del trabajo entre la producción de

²⁰ Theotonio dos Santos, *El nuevo carácter de la dependencia*, Centro de Estudios Socio-Económicos, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, Cuaderno N° 10, 1968, p. 11.

materias primas, por parte de los países subdesarrollados, y la producción de manufacturas, por parte de los países desarrollados”.

La entrada de las inversiones extranjeras en el sector manufacturero se ve facilitada tanto por la fractura de la clase dominante como por la necesidad, en especial del sector no directamente vinculado a la exportación, de modificar su estructura de apoyo sin el obligado esfuerzo acumulativo interno. Para ello la alianza con el imperialismo y el aprovechamiento creciente del Estado facilitan que se “traslade” desde la agricultura y exportación en crisis hacia la industria de sustitución, proceso que no se compadece con lo que podría propugnarse una burguesía industrial, sino, más bien, con la política aventurera de grupos fraccionados que basan su actividad en la ganancia fácil.

Si la industrialización, en efecto, hubiera correspondido a la emergencia de una burguesía industrial cohesionada y autónoma, frente a la oligarquía terrateniente tradicional, y no a una mera consolidación del núcleo dominante sobre otras bases, el proceso habría asumido características que jamás tuvo: a) un enfrentamiento efectivo con la oligarquía terrateniente (lo que no sucedió); y b) se habría buscado el crecimiento del mercado interno basándose en una redistribución del ingreso, y no, como ocurrió, en el reemplazo indiscriminado, de las importaciones,²¹ transformando al Estado en el agente creador de la infraestructura que la industrialización, por liviana que fuera, requería y que podía orientarse hacia la misma estructura de ingresos.

Los desplazamientos económicos de fracciones del grupo dominante, después de la gran crisis, no afectan a su núcleo oligárquico, que permanece intacto. No obstante, se producen en su torno desplazamientos de grupos a otros sectores económicos, como puede apreciarse examinando las cifras sobre la división de la propiedad agrícola por causa de venta.

El cuadro resultante es el siguiente:

SUBDIVISIÓN DE LA PROPIEDAD

1919	78 000	prop. agríc. de 1 a 50 Has.
1925	87 000	
1930	120 000	
1938	150 000	

Se produce además la transformación de otros estratos, como el caso del desaparecimiento de la industria artesanal y su absorción en formas superiores de manufactura.

²¹ Bol. Esc. Nac. Unid., p. 83.

De acuerdo con lo planteado, en primer término, la agricultura continúa dominada por un núcleo oligárquico de 626 grandes propietarios de más de 5.000 Has., dueños de 14 millones de hectáreas con un avalúo equivalente a 1,051.025,833 pesos y con una superficie promedio de 23.141 Hás. La importancia de este hecho se manifiesta en que es capaz el núcleo de obtener una política favorable a sus intereses. El mejor indicador de lo dicho es la evolución de los precios agrícolas.

PRECIOS AGRICOLAS

% de aumento de precios de los productos agrícolas (año base: 1931 = 100)		
1932	:	144.3
1933	:	189.5
1934	:	181.0
1935	:	207.4
1936	:	245.3

FUENTE: Rev. *Rumbo*, febrero 1940.

En contraposición, 129.227 propiedades tienen 608.785,3 Hás., con un avalúo de 752.214,707 pesos, y con una superficie promedio de 1.6 Ha. (Cita: Fundamentación para el Proyecto de Reforma Agraria del P. S., 1939).

Por su parte, en la rama industrial son 40 o 50 miembros destacados de la plutocracia nacional quienes dirigen y controlan los monopolios (J. C. Jobet, Rev. *Rumbo*, febrero 1940).²²

²² La lista de los principales consorcios extranjeros del momento y de los monopolios "nacionales" es la siguiente:

CONSORCIOS EXTRANJEROS

Grace Du Pont Co.
Guggenheim Co.
Bethlehem Steel Corp. (Hierro El Tofo).
Consolidated Ltd.
International Telephone and Telegraph Co. (Cía. de Teléfonos).
Anaconda Copper Mining C. (Chuquibambilla).
Braden Copper (El Teniente).
Duncan Fox (ingleses).
Williamson Balfour (ingleses).

MONOPOLIOS NACIONALES

1. Cía. Carbonífera de Fundición Schwager — carbón.
2. Cía. Carbonífera e Industrial de Lota — carbón.
3. Cía. de Gas de Santiago — cobre y gas.
4. Cía. de Gas de Valparaíso — cobre y gas.
5. Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y Sociedad Ganadera.

Por su parte, el quiebre de la empresa artesanal y el mayor desarrollo de las empresas fabriles adquieren especial relevancia entre 1925 y 1940 cuando el aumento del empleo en las industrias manufactureras sube desde 82 000, en 1925, a 138 000 trabajadores en 1940; mientras se aprecia una baja de la fuerza de trabajo en las industrias artesanales desde 198 000 personas activas a 140 000 en el mismo periodo.²³

El incipiente desarrollo del sector secundario no permitía que absorbiera la mano de obra proveniente de otros sectores. Lo que ocurrió fue una transferencia de trabajadores desde las empresas artesanales a las fabriles. Se produce una absorción de la artesanía por la manufactura que venía desarrollándose desde el siglo pasado, y que, a su vez, se proyecta, después de la crisis, en una expansión de las industrias de bienes de consumo que no requerían de grandes cantidades de capital ni de técnicas muy avanzadas (toda vez que estaban fuertemente protegidas), como tampoco de mano de obra altamente calificada.

En general, la industria de bienes de consumo está en condiciones de utilizar los conocimientos y la experiencia adquiridos por los artesanos de las industrias domésticas, mucho mejor que la industria de bienes de capital. Es el camino fácil de la industrialización característico de nuestra clase dominante.

Simultáneamente se observa un fuerte crecimiento del sector servicios, de utilidad pública, aunque su significación en el producto nacional bruto fuera escaso,²⁴ y, en general, del sector servicios en comparación con otras ocupaciones. Las siguientes estadísticas sirven para aclarar lo dicho:

6. Gente Grande — ganado y lana.
7. Cía. General de Electricidad Industrial.
8. Fca. de Cemento El Melón — cemento.
9. Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones — papel.
10. Cía. Refinería de Azúcar de Viña del Mar.
11. Cía. Cervecerías Unidas.
12. Cía. Chilena de Fósforos.
13. Cía. Chilena de Tabacos.
14. Cía. Sudamericana de Vapores.
15. Cía. de Seguros de Vida La Chilena Consolidada.
16. Bco. Chile.
17. Bco. A. Edwards.
18. Bco. Español-Chile.

²³ R. Lagos, ob. cit., Tabla 13.

²⁴ R. Lagos, ob. cit., Cuadro 41, p. 146.

OCUPACIÓN POR SECTORES ²⁵
(porcentaje total de ocupados)

	Agrícolas Industriales	No-agrícolas No-industriales	
1925	37.4	20.7	41.9
1930	36.4	18.0	45.6
1935	35.5	16.0	48.5
1940	34.5	16.8	48.7

Los hechos anteriores: *a*) mantenimiento del núcleo oligárquico; *b*) reubicación de fracciones del grupo dominante en actividades industriales que no exigían una radical ampliación de mercado, a través de una redistribución de ingresos; *c*) el quiebre de la empresa artesanal; *d*) la creciente importancia del aparato estatal; y *e*) el surgimiento de una vasta gama de actividades de servicio, crean las condiciones para que, junto con la concentración del poder económico, vaya emergiendo una cantidad de capas pequeñoburguesas que oscilan entre la clase dominante y los sectores sociales populares que la penetración imperialista y la concentración económica impulsan hacia una rápida madurez política.

Llegar a entender el comportamiento de esta pequeña burguesía es indispensable para comprender el significado que asume el “movimiento popular” en la década, especialmente por la gran importancia de sus liderazgos.

Cuando se produce la división de “la clase dominante”, el segmento de ésta que se relaciona más con el desarrollo interno estrecha vínculos con la pequeña burguesía por su necesidad de ampliar las bases sociales de sustento del sistema de dominación. A medida que tiene lugar este proceso, esta pequeña burguesía sin acceso a los bienes de producción va afirmándose cada vez con mayor fuerza. Cumple el papel de mediatizar el antagonismo principal entre el grupo dominante y las clases populares incorporándose a la estructura vigente a través del aparato del Estado, del sistema de educación, o cualquiera otra forma que suscite sus desviaciones arribistas.

Pero esta relación que se establece para absorber segmentos de pequeñoburgueses entra inevitablemente en contradicción con el proceso económico cuyo rasgo es precisamente su carácter oligárquico. De ahí que paralelamente con transformarse en apoyo de la “burguesía dominante”, la pequeña burguesía, también, en la medida que sufre las consecuencias del deterioro económico de la crisis, encabeza

²⁵ *El proceso de industrialización*, CEPAL, p. 144.

movimientos de oposición que nunca llegan más allá de exigir una coparticipación en el ejercicio del poder institucionalizado.

En este contexto hay que analizar el movimiento popular de la década. Se desprende para su estudio una doble perspectiva de enfoque. Por una parte, la movilización de sectores pequeñoburgueses, empujados por la crisis y que se orientan a disputar el poder a las fracciones dominantes (voluntarismo, espontaneísmo frente a las masas, golpismo, etcétera); y segundo, la movilización de las masas populares (fundamentalmente obreras y mineras), que continúan una trayectoria de lucha anterior a la crisis, determinadas por contradicciones inherentes a un régimen basado en la explotación del trabajo y no en simples coyunturas críticas, catalizadoras pero transitorias.

La tendencia a una fácil radicalización por parte de esta pequeña burguesía la convierte en cabeza de movimientos con raigambre popular y receptáculo de corrientes ideológicas profundamente heterogéneas. La gran difusión del trotskismo y del anarquismo, tanto como el surgimiento de líderes personalistas,²⁶ son algunos indicadores de la permeabilidad de la pequeña burguesía a adoptar formas diversas pero radicales de comportamiento político.

Si atendemos a la importancia que este sector social adquiere, no es del todo ilógico pensar que un movimiento popular organizado no escaparía en sus comienzos a un contacto entre capas radicalizadas de esta pequeña burguesía con obreros y campesinos. Sin este contacto no se daban las condiciones para ninguna alianza de fuerzas sociales antagónicas respecto del núcleo oligárquico. Es el ingrediente pequeñoburgués dominante precisamente el que confiere al movimiento popular de la época su carácter de personalista, espontaneísta, algo de mesiánico y muy poco ideológico; pero es este ingrediente el que marca también las limitaciones en que se encuadra el movimiento popular, ya que la dirección impuesta por la pequeña burguesía no está influida por la presión de las bases populares, sino, principalmente, por sus propias contradicciones internas. Su creciente importancia como apoyo al grupo dominante determina que sus contradicciones se resuelvan, no a través de su antagonismo con el orden establecido, sino mediante su transformación en agente delegado del poder oligárquico.

La alianza que se establece con la burguesía se hace más fuerte a medida que ésta recurre y se somete más y más al aparato de Estado, creando todo un mecanismo de participación en el poder político como manera de legitimar un control oligárquico del poder econó-

²⁶ Como ejemplo de estos líderes de la época podemos citar los nombres de Manuel Hidalgo, P. León Ugalde, Marmaduke Grove, entre otros.

mico. Esta suerte de delegación asume diversas modalidades (burocracia estatal profesionalizada, gerentes de empresas, profesionales, políticos, etcétera); es decir, toda una gama de ocupaciones que constituyen una variedad de grupos de presión que ejercen funciones en esferas determinadas de la vida pública, pero sobre la base de que el sistema se mantenga.

Lo anterior es el resultado de un proceso acumulativo de ampliación de las bases sociales del sistema de dominación vigente que se refuerza cuando existen una burocracia estatal consolidada y una fuerte dependencia del grupo oligárquico respecto de esta superestructura que le confiere mayor importancia.

La misma complejidad creciente en la organización de la sociedad para atenuar las tensiones sociales disocia el control del poder propiamente tal de su ejercicio. Para eso se incorporan los componentes sociales de este estatismo cada vez más complejo, cuya base material de diferenciación no descansa en la infraestructura económica sino en el conjunto de instituciones que la sirven.

Si bien puede aceptarse que el movimiento popular pasó por la etapa de estos liderazgos pequeñoburgueses, la forma y rapidez con que es superada tienen gran significación para su futuro desenvolvimiento. Es con el propósito de evaluar el movimiento popular chileno desde esta perspectiva que tiene interés analizar la década de 1930.

EL TRASFONDO DEL MOVIMIENTO POPULAR

Habíamos señalado que entre 1925 y 1940 se produce un quiebre de la industria artesanal acompañado de un auge de las manufacturas que absorbe el contingente desplazado de las primeras, y que, además, sirve de base para el desarrollo a la industria de bienes de consumo. En el año 1925 la industria artesanal representaba el 70.7% de los ocupados industriales y la fabril sólo el 29.3%, mientras que en 1940 los porcentajes son 50.4 y 49.6%, respectivamente.

Simultáneamente con tener lugar este proceso en el área industrial, se aprecia en el agro una creciente división de la propiedad en los estratos sociales inferiores, ya que los grandes se mantienen relativamente estables. Como lo anotáramos, el número de propiedades entre 1 y 50 hás., que en 1925 era de 85 000, sube en 1938 a 150 000, mientras que las mayores de 5 000 hás. entre 1932 y 1939 se mantienen más o menos en la misma cantidad (599 a 626 propiedades).²⁷

²⁷ Rev. *Rumbo*, febrero 1940: J. C. Jobet, *La penetración imperialista en Chile*; y Tesis del Buró Sudamericano (1932).

En cuanto al sector trabajador, durante el mismo lapso se observa un mayor incremento de los servicios que en el resto de las ramas ocupacionales.

Mientras el total de ocupados en la agricultura en 1925 equivalía al 37.4% del total de ocupados, en la rama industrial era de 29.7% y en los servicios de 41.9%. Comparando con 1940, los porcentajes bajaron, en el caso de la agricultura y la industria, a 34.5 y 16.8%, respectivamente, en tanto que en los servicios subía a 48.7%.²⁸

Las cifras anteriores nos proporcionan un cuadro de la potencialidad de un movimiento popular. (Ver nota al pie de página.) El rápido desarrollo de la fuerza obrera y minera, la enorme gravitación numérica del campesinado y el pauperismo de sectores de propietarios (industrias artesanales y pequeños propietarios agrícolas) marcan un conjunto de fuerzas sociales que entran a representar una posibilidad de una alianza política antagónica con el sistema de dominación. Son las fuerzas sociales que constituyen la base para un nuevo modelo de desarrollo encuadrado en un esquema caracterizado por la penetración imperialista que apoya el afianzamiento del grupo oligárquico y la emergencia de un sector servicios cada vez más importante.

Los datos son por sí mismos elocuentes. El mantenimiento de un núcleo de grandes propietarios y la consolidación de una serie de consorcios extranjeros y de monopolios internos son reflejo de la penetración imperialista. En efecto, si se analizan las inversiones extranjeras, tenemos el siguiente cuadro global:

INVERSIONES EXTRANJERAS
(en millones de dólares)

Salitre	218.9
Cobre	175.3
Comunicaciones	151
FF. CC.	121.6
Electricidad	56
Comercio	37
Teléfonos	26.3
Ind. Manufacturera	18

²⁸ *El proceso de industrialización, CEPAL, op. cit.*

Nota: A fines de la década encontramos cifras más exactas sobre la población trabajadora. El total de asalariados agrícolas es de alrededor de 201 168, que se descompone en:

106 371 trabajadores, peones o gañanes, parientes de inquilinos o empleados; y 94 797 afuerinos, peones o gañanes, que no son parientes de inquilinos o empleados; por su parte, los inquilinos suman 107 906.

La población de trabajadores industriales, tomando base en datos de la Inspección General del Trabajo de enero de 1939, puede estimarse en 226 681 como mínimo.

Como puede apreciarse, la inversión sobre actividades de servicio, además, de la minería, es enorme, lo que puede explicar el auge de esta última actividad, con todas las consecuencias sobre un robustecimiento del papel que cumplen las capas medias sobre el movimiento de obreros, mineros y campesinos durante la década.

En ese momento estos sectores protagonizan un activo movimiento sindical que representa la respuesta cada vez más independiente y agresiva y sus condiciones materiales. Pero estas fuerzas no inician su lucha después de la crisis de 1930, ni siquiera de 1920, sino que continúan una tradición mucho más antigua. La diferencia es que, ahora, sus movimientos pueden cuestionar las bases del sistema de dominación, en virtud de la debilidad del grupo dominante, como resultado, primero, de la crisis salitrera de 1925-27, y después, por la gran crisis internacional de 1930. Su escisión constituía una brecha para un movimiento popular, pero en tanto éste fue mediatizado por los liderazgos pequeñoburgueses, se dio tiempo para que se consolidara nuevamente el grupo dominante.

La tradición de las luchas sindicales nace con los movimientos mutualistas de los artesanos, a fines del siglo XIX, y con las mancomunales de los mineros, a comienzos del siglo XX. Las primeras reconocen ya un embrión de agrupación, como afirma Jorge Barría, "en un núcleo llamado Unión Socialista fundada en 1896 y que conmemora por primera vez el 1º de mayo de 1898". Las mancomunales, por su parte, inician una política de agitación y movilización que culmina con una huelga general en diciembre de 1907.

Pero es recién en 1909 cuando se organiza la primera central sindical. El 18 de septiembre de 1909 se funda la Federación Obrera de Chile (FOCH), sobre bases mutualistas, "con finalidades de asistencia social, de mejoramiento económico (formas cooperativas de producción y consumo, seguro de cesantía, fomento del ahorro, lucha contra el alcoholismo, seguro contra enfermedades, de vida, etcétera), y perfeccionamiento moral y cultural (escuelas, bibliotecas, periódicos, dictado de conferencias, etcétera). Pero además luchaba por el horario de ocho horas y el establecimiento del salario mínimo. Propiciaba además crear una Oficina del Trabajo para facilitar la contratación de trabajo para el elemento obrero".²⁹

Después de sus primeras convenciones efectuadas en 1911, en Santiago, es superado este carácter estrictamente mutualista con el ingreso a la FOCH de las mancomunales organizadas por L. E. Recabarren en el Norte. De este modo asume un contenido de lucha

²⁹ *Rumbo*, agosto 1939, núm. 3.

más claro, hasta que finalmente en su Congreso de Concepción, el 25 de diciembre de 1920, se reorganiza la FOCH orientándose hacia el comunismo bajo la inspiración del mismo Recabarren. Un año después se adhiere a la Internacional Comunista.

Mientras la FOCH experimentaba cambios que la transformaban prácticamente en un instrumento del Partido Comunista (lo que fue objeto de graves críticas por el propio Buró Sudamericano de la Internacional), otras corrientes ideológicas, como el anarquismo, buscaban sus propios cauces de expresión. Así fue como en 1919 se funda la IWW (Trabajadores Industriales del Mundo), con gran influencia en los gremios marítimos, de albañiles, estucadores, zapateros, y que propiciaba como método de lucha la huelga, el sabotaje y el boicot.

La intensa actividad organizativa de centrales sindicales era indicador de un activo movimiento de trabajadores en proceso de masificación. Puede citarse como ejemplo la primera huelga de maestros en 1918, que cuatro años después se repite, dando lugar a la Asociación General de Profesores de Chile, la que se esfuerza por llegar "al seno de la clase obrera propiciando que la organización integral de los trabajadores manuales e intelectuales debía ser obra de ellos mismos".³⁰ También puede recordarse el movimiento huelguístico que duró ochenta y tres días en la zona del carbón apoyada por la FOCH.

Obreros y empleados comenzaron a expresar su voluntad de lucha sobre bases orgánicas cada vez con una visión ideológica más estructurada. Conocida es la obra que en este sentido realizó Recabarren entre los mineros del salitre. Pero asimismo está el caso de otros sectores de trabajadores, como los empleados, que alcanzan, independientemente de los maestros, fuertes organizaciones sindicales. Es el caso de la Unión de Empleadores de Chile,³¹ en cuya declaración de principios, aprobada en mayo de 1925, se expresaba: "la base del capital es el trabajo, que no debe ser una mercancía, que la explotación del hombre por el hombre es un crimen". Propugnaba luchar por el salario vital y abogaba por la nacionalización del comercio y de la industria.

En los mismos términos se expresaban los gremios de los obreros. La Federación Ferroviaria, en su Congreso extraordinario de San Bernardo, celebrado los días 21 a 29 de febrero de 1925, declaraba "que la Federación Obrero Ferroviaria de Chile tiene por finalidad

³⁰ En 1928 fue disuelta por Ibáñez.

³¹ La documentación consultada se refiere a este organismo como de "empleadores", a pesar de tratarse de un gremio de asalariados.

la supresión total de la explotación del hombre por el hombre, aboliendo la causa fundamental que la genera, es decir, la propiedad privada. En consecuencia su lucha tenderá siempre a conseguir la socialización de los medios de producción y transporte, a fin de imponer una forma de convivencia social donde el trabajo sea obligación de todos".⁸²

El movimiento sindical de obreros y empleados alcanza ya en 1925 considerable fuerza. Se contabilizan alrededor de 214 sindicatos con unos 204 000 afiliados. La FOCH solamente controla más de 100 000.

A fines de año surge una nueva organización, cuya misión era agrupar a los sindicatos y gremios de obreros, empleados y maestros. Se constituye la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile (USRACH), que es integrada por la Asociación General de Profesores, la Unión de Empleadores de Chile, ligas de arrendatarios, sindicatos, etcétera, y que es capaz de movilizar gran capital de fuerzas sociales hasta llegar a promover la candidatura presidencial de José Santos Salas, en oposición al candidato del grupo oligárquico, Emiliano Figueroa.

Más tarde, con el Gobierno de Ibáñez se inicia una persecución de las organizaciones políticas y sindicales. Se destruyen la USRACH y la FOCH, que baja de 100 000 a 25 000 afiliados; igualmente se persigue y elimina a numerosos dirigentes (Barrios, Vilarín, Sáez, Sabala, Quezada, Ravanales y otros). Mientras tanto se organiza la Confederación Republicana de Acción Cívica (CRAC), en un intento por controlar el movimiento sindical.

La CRAC representa el esfuerzo por organizar a las capas medias y obreras con el objeto de mantenerlas dentro de la esfera de influencia del aparato estatal, que no sólo es el instrumento estricto de control de una clase, sino, además, la base de un compromiso entre sectores de pequeña burguesía y el grupo dominante para, a través de la CRAC, procurar extenderla a sectores populares.

La necesidad de ampliar la base de apoyo a estratos obreros se expresa también en otros aspectos. La constitución de los sindicatos legales, por ejemplo, que al término del periodo de Ibáñez alcanzan a unos 250, agrupando a 50 000 obreros aproximadamente, y cuya constitución intensifica la pugna con el sindicalismo libre.

En efecto, desde que en 1924 fue aprobado el Código del Trabajo, que reglamentó la organización de los sindicatos, se inicia una intensa lucha entre dos corrientes sindicales: la de los sindicatos legales y la del sindicalismo libre, o en resistencia, bajo orientación anarquista. Estos últimos hacen que la IWW se divida en 1925, organizándose

⁸² *Rumbo*, agosto 1939, núm. 3.

la Federación Obrera Regional de Chile (FORCH), que agrupa a sindicatos como la Unión en Resistencia de Estucadores, Carpinteros, Metalúrgicos, Pintores, la Federación de Obreros de Imprenta, etcétera.

La tendencia sindical en resistencia impulsa incluso movimientos en contra de las leyes sociales dictadas como consecuencia del golpe de 1924. Se organiza por la FORCH una huelga que dura quince días en contra de la Ley 4054 (Caja de Seguro Obrero), bajo el alegato de que ella no cautela el salario de los obreros porque no cubre el riesgo de cesantía, ya que el obrero recibe su salario total sólo durante la primera semana y a partir de la tercera no recibe más que la cuarta parte de su salario hasta completar veintiséis semanas, a contar de las cuales pierde legalmente el derecho a subsidio; y segundo porque las empresas apenas requieren un desahucio de seis días, sea cual fuere el tiempo servido por el obrero, para dejarlo cesante.

Como resultado de esta pugna en octubre de 1931 la tendencia anarquista propicia la Confederación General del Trabajo sobre la base de la IWW y de la FORCH. Con la CGT se abre una lucha frontal con la FOCH, controlada por el Partido Comunista, el que se venía orientando como un grupo de presión que se traducía en la política de organizar numerosos sindicatos destinados a ampliar su esfera de influencia cuando no estaba en condiciones de entrar a controlar sindicatos ya existentes. Así es como nacen diversas organizaciones, tales como la Federación de Maestros, la Federación de Empleados, la Federación Ferroviaria, etcétera. Política que culmina con la proliferación de una gran cantidad de dirigentes, pero desvinculados de las masas.

El Partido Comunista mantiene su política rígidamente hasta 1935, a pesar de haber sido denunciada como inconveniente por el propio Buró Sudamericano, en un informe en 1932. El cambio de política, a partir de 1935, se explica porque corresponde a su incorporación a un frente unitario que respondía a la estrategia de impulsar la línea frente-populista como alianza de fuerzas para enfrentar las elecciones presidenciales de 1938.

En ausencia de una dirección política menos sectaria se observa el espontaneísmo de obreros y empleados que se traduce en la gran cantidad de sindicatos organizados. Casi inmediatamente después de la constitución de la CGT se organiza, en noviembre de 1931, la Confederación de Sindicatos Industriales de Santiago, y en abril de ese mismo año, la Federación Nacional de Sindicatos y Organizaciones del Trabajo.

Las luchas ideológicas entre anarquistas y comunistas y entre estos últimos y los trotskistas, la proliferación de sindicatos, el predominio del espontaneísmo por la carencia de una política de clase que renuncie a juegos de grupos de presión, permitieron que se impusiera una dirección de origen pequeñoburgués como el Partido Socialista.

En el fragor de las luchas intestinas de la clase trabajadora aparecen numerosos grupos, liderados por sectores pequeñoburgueses, que tratan de encauzar un movimiento popular unitario en contra de la oligarquía.

Fue la incapacidad del Partido Comunista para dirigir un movimiento obrero lo que frustró a éste de tener una dirección política en sus propias filas. El vacío creado es llenado por líderes provenientes de las capas medias, liderazgos que imprimen su tónica espontaneísta y personalista, claudicante y pragmática al momento popular de la época.

No obstante, estos líderes representaron la realidad de un agrupamiento de fuerzas dirigido en contra del grupo dominante, pero limitado a una participación en el ejercicio del poder político, lo que culmina en el modelo político del Frente Popular.

El Partido Socialista, que era expresión de este fenómeno, vigoriza un proceso de unidad sindical que ya había comenzado a gestarse. Su primera manifestación en la Confederación Nacional de Sindicatos de Chile, en el año de 1934.

En su declaración de principios, la Confederación Nacional establecía "que el presente regimen social capitalista hace crisis por estar fundamentado en la propiedad privada de los medios de producción y cambio, y por la absoluta ineptitud, falta de moral y justicia de la minoría poseedora; que mientras esta clase explotadora viva en la abundancia y, además, maneje en su exclusivo beneficio el poder público, merced a la influencia económica y a la complicidad de las fuerzas reaccionarias de la sociedad, la enorme mayoría, o sea, la clase trabajadora, vegetan en la escasez; que la transformación de estas condiciones odiosas puede ser llevada a la realidad mediante el empuje de los obreros manuales, empleados e intelectuales..."

Desde su convención en septiembre de 1934 la Confederación lucha por poner término a la división de la clase trabajadora chilena, organizando con este propósito el Congreso de Unidad Sindical de junio de 1935, celebrado en Valparaíso. Como resolución de este Congreso nace el llamado Frente de Unidad Sindical, que integran la Confederación Nacional de Sindicatos de Chile, la FOCH y la Asociación de Empleados de Chile (ASECH). Como tarea se propuso organizar el Segundo Congreso de Unidad Sindical, que se

realiza en Santiago entre el 24 y el 26 de diciembre de 1936. De este Congreso nació la Confederación de Trabajadores de Chile, que incorpora todos los gremios, con excepción de la CGT, que se mantuvo independiente, apoyada por los trabajadores de orientación anarquista.⁸³

La unidad sindical alcanzada en diciembre de 1936 es el producto de diversos factores:

En primer lugar, refleja un fortalecimiento orgánico del movimiento sindical que resulta de enfrentar los sectores de trabajadores, condiciones de trabajo y de vida cada vez más críticas;⁸⁴ pero también es un producto coyuntural sellado por el acuerdo de constituir el Frente Popular. No es concebible la constitución de un frente político sin un apoyo orgánico en el frente sindical. En este sentido la CTCH es un producto del nacimiento del Partido Socialista y del viraje del Partido Comunista de agosto de 1935, que lo hace abandonar su política aislada de poder.

Sin embargo, como el movimiento sindical durante todos esos años se había caracterizado por un fuerte espontaneísmo reflejado en su acentuado gremialismo y la penetración del anarcosindicalismo, el trasfondo ideológico donde debe operar la alianza política no es favorable, debiendo entrar a veces en pugna con la orientación de los sindicatos.

Este conflicto entre los partidos y el carácter del movimiento sindical se agudiza cuando se constata la heterogénea composición social de la alianza Frente Popular, que reduce la dirección política al papel de trasmisor de las reivindicaciones gremiales, en vez de constituir su vanguardia. Se orientó a satisfacer los requerimientos dentro de los márgenes que el ejercicio del poder político le permiten; en este sentido trabaja por ampliar la alianza pequeñoburguesa hacia los sectores populares.

En cualquier caso, ideológicamente, representa un paso hacia adelante, toda vez que sobre la base de la alianza socialista-comunista la orientación marxista se impone dentro del cuadro general sobre la anarcosindicalista.

A medida que las luchas sindicales fueron haciéndose más pro-

⁸³ *Rumbo*, agosto 1939, Nº 3.

⁸⁴ Como ilustración, digamos que el salario vital en septiembre de 1938 era de 16.37 pesos, aunque el salario mínimo, según la tabla de Medicina Preventiva, debía ser de 45.83 pesos. De lo cual puede deducirse que todas las familias que ganaban menos de 45.83 pesos estaban subalimentadas (D. Estadística). A lo anterior agreguemos que en diciembre de 1939 había 828 232 trabajadores que ganaban menos de 10 pesos diarios (Inspección del Trabajo, enero 1939), y que el promedio de vida era de veinticuatro años (*Rumbo*, enero 1940, Salvador Allende).

fundas se produce un natural acercamiento con la orientación ideológica de los partidos marxistas, lo que se obtiene mediante un largo y difícil proceso donde la relación entre sindicato y partido pasa por diversas oscilaciones, según predomine uno u otro, hasta culminar con la experiencia actual de la Central Única de Trabajadores, donde, dentro del respeto legítimo a la autonomía sindical, ha madurado una alta identidad de propósitos con los partidos de ideología marxista.

LOS SECTORES MEDIOS Y EL MOVIMIENTO POPULAR

Durante el proceso de robustecimiento del movimiento obrero y de su combatividad consiguiente, ¿qué sucede con los sectores medios? Siempre se ha interpretado la elección presidencial de 1920 como la fecha de inicio del ascenso de las capas medias al poder y el desplazamiento del grupo oligárquico tradicional.

Una correcta interpretación acerca del significado real de este hecho (y de los golpes militares sucesivos) se logra si no se pierde de vista el esquema de que siempre los sectores han perseguido asimilarse a las estructuras controladas por el grupo dominante, y que las esporádicas alianzas con obreros obedecerán a su propósito de buscar una nueva relación de fuerza con respecto a la clase dominante, pero no para antagonizar sino para integrarse. Durante las primeras décadas del siglo xx, cuando el movimiento minero se agita, organiza y presiona, siendo motivo de las peores represiones, las capas medias se mantienen alejadas. En 1919 el diario *El Mercurio* editorializaba que "la clase media tradicionalmente ha permanecido ajena a la agitación social y política",³⁵ porque preocupada de proteger su propia dignidad secularmente había defendido las posiciones de los grupos dominantes.

El primer intento por conferir a la clase media el carácter de grupo cohesionado fue la constitución en 1919 de la Federación de la Clase Media. En su programa se advertía a la oligarquía refrenarse en algunos de sus abusos, aunque nada decía acerca de ayudar o colaborar con las "clases bajas".

Un diputado radical de la época (Pinto Durán) afirmaba que su partido debía transformarse en un instrumento de reforma social; pero agregaba que "pocos radicales" comparten esta opinión. Enrique Mac-Iver, destacado dirigente de ese mismo partido, sostenía que

³⁵ Raúl Alarcón Pino, Tesis de Comercio, citado por Pike en *Chile and the United States*, p. 286.

el triunfo de Alessandri en las elecciones presidenciales de 1920 traía la ruina a Chile al incorporar a la vida política a las clases bajas ("la querida chusma"), pues podrían colocar en peligro a las "clases que saben gobernar Chile".

Los demócratas, nacidos bajo el sello del movimiento artesanal, aparecían divididos "entre aquellos interesados en las reformas sociales y los que estaban preocupados simplemente con avanzar en sus carreras".

El espíritu de ascenso social de estos sectores, o como alguien lo llamara,³⁶ su "admiración por el modo de vida de la aristocracia", los ha caracterizado en su convicción de que ningún propósito común los vincula con las clases bajas. Un periodista observaba en 1930 que "en cualquier profesión" que se incorporen, los elementos de clase media buscan siempre esconder su humilde origen y convertirse ellos mismos, aun a riesgo del ridículo, en aristócratas y oligarcas (Jorge Gustavo Silva), sea a través de la adquisición de riquezas o de alianzas matrimoniales convenientes. Este ha sido un tema que ha preocupado, incluso, a la novelística chilena, en lo que toca al arribismo criollo.

Colocados en la perspectiva de que los sectores medios están más interesados por incorporarse al poder que a desarrollar sus propias contradicciones, pueden comprenderse mejor el "triunfo popular" de 1920 y las interrupciones a la legalidad oligárquica con los sucesivos golpes militares de 1924, y posteriores, con la sola excepción del golpe del 4 de junio de 1932.

Compartiendo la tesis de que a través de estos golpes se disputaba el poder político a la oligarquía tradicional, no se modificaban las condiciones estructurales en que descansaba, sino que se afianzaba el mismo orden de cosas. Alessandri, representando aquel sector de la pequeña burguesía que se orientaba hacia un entendimiento con los ingleses, siempre estuvo de acuerdo con los conservadores que reclamaban contra el sufragio universal, señalando que "el viejo sistema era todavía fundamentalmente viable y que los moldes básicos de la jerarquía social y política y la estratificación podrían ser preservados".³⁷

El triunfo de Alessandri es un reflejo de la capacidad del grupo dominante para responder al reto planteado por un movimiento obrero cada vez más organizado y politizado, a través de los liderazgos pequeñoburgueses.

³⁶ R. Alarcón Pino, Tesis de Comercio, citado por Pike, ob. cit., p. 286.

³⁷ Pike, ob. cit., p. 177.

Lo anterior queda de manifiesto con el entendimiento que alcanza con estos sectores pequeñoburgueses emergentes. Esto se demuestra analizando la composición de la Alianza Liberal (combinación de partidos que apoyaban a Alessandri), que abarcaba desde liberales³⁸ hasta demócratas, pasando por radicales. El Partido Liberal, como anota J. C. Jobet.³⁹ y el Partido Conservador (que integraba la Unión Nacional) “son agrupaciones de idéntica composición social y defienden los mismos intereses del gran capital”. La totalidad de sus directivas y parlamentarios pertenece a la antigua aristocracia chilena; son los poseedores de la mayor parte de las propiedades agrícolas, donde radica su fuerte base electoral; son los mismos que dominan en las directivas de las sociedades industriales y bancarias”.

El régimen alessandrista requería para cumplir con sus promesas liberales un cambio drástico en la política de tributaciones: establecer impuestos a las clases altas. No obstante, prefiere continuar con el sistema paternalista financiado con los recursos ordinarios provenientes de las exportaciones del salitre y eximiendo a los grupos de altos ingresos de pagar impuestos directos.⁴⁰

La coyuntura del año 1920, aunque representa la necesidad de admitir a los de abajo en la vida política,⁴¹ no alteraba el modelo clásico de aprovechamiento del Estado como canal de absorción, financiado, o por las inversiones extranjeras, o por los sectores obreros o medios; en cambio, aseguraba la mantención de las mismas relaciones de poder. Así, por ejemplo, las estadísticas de 1930 dan el siguiente cuadro sobre la estructura agraria:

	<i>Superficie</i>	<i>%</i>	<i>Nº predios</i>	<i>%</i>
Latifundio (más de 1.000 Has.)	21.281.000	78%	2.620	2%
Predios medianos (50-1.000 Has.)	4.807.000	18%	23.260	16%
Predios pequeños (5-50 Has.)	1.224.273	4%	120.364	82%

Si se comparan estas cifras con las de 1869, en ese año 2 037 propietarios, el 7% del total, acaparaban el 70% de la tierra cultivable,⁴² comparado con el 2% y 78%, respectivamente, de 1930. Esta concentración paralela al deterioro de la industria artesanal y su inte-

³⁸ J. C. Jobet, ob. cit., p. 184.

³⁹ J. C. Jobet, ob. cit., p. 184.

⁴⁰ Pike, ob. cit., p. 177.

⁴¹ Pike, ob. cit., p. 179.

⁴² J. C. Jobet, ob. cit., p. 203.

gración a las empresas fabriles corresponde al proceso general por el cual "tanto en la agricultura como en la industria, la pequeña propiedad decrece, siendo eliminada por la grande".⁴³

Este desarrollo sirve para comprender cómo el ascenso de las capas medias no descansaba en su opción de transformarse en una burguesía antagónica frente a la oligarquía comercial exportadora tradicional, sino en aliarse al grupo dominante a través de su participación en la ampliación de los rubros de actividades en que éste se desenvolvía (agricultura, comercio, manufactura, minería, finanzas), o sea, llegando a adquirir el carácter de burguesía una vez incorporadas al sistema y no antes disputando el poder. Las luchas por el poder político en 1920, 1924 y 1926 no modifican, en este sentido, un ápice el carácter dominante del núcleo que nunca fue estrictamente ni agricultor, ni minero, ni industrial.

Un cuadro vivo de estas alternativas en que capas medias protagonizan movimientos orientados a provocar desplazamientos en el poder, para terminar, después, con la frustración de estos conatos, ya sea civiles o militares, lo proporciona Grove en un discurso pronunciado en el Senado el 23 de mayo de 1934:

"Se ha dicho que intervine en política para derrocar el Presidente constitucional de Chile en 1924, señor don A. Alessandri. Eso es inexacto y mi primera figuración fue posterior.

"Mi primer paso en la vida pública fue en la fecha en que al verse desviado el movimiento militar de la oficialidad joven se trató de devolver a éste su impulso primero.

"La revolución de septiembre de 1924 fue acogida con júbilo por la derecha y aplaudida por sus prohombres. El Partido Conservador fue el eje de ese movimiento y se creyó el usufructuario legítimo de la obra laborada en la sombra por las sociedades secretas de la derecha llamadas "La Tea" y "La Cabaña". Entre sus mentores estuvieron los ciudadanos Óscar Dávila, Fco. Huneeus y otros políticos unionistas . . . , los conservadores y la derecha se alborozaron con el movimiento del general Altamirano en 1924. Para contrarrestar esta reacción interviene el 23 de enero.

"La agitación producida en la opinión avanzada de los chilenos y la candidatura de don Ladislao Errázuriz Lazcano a la Presidencia de la República motivaron un estallido de indignación entre los obreros, intelectuales y estudiantes.

"El Ejército había servido en apariencia los intereses reaccionarios. Con motivo de esta alarma, la oficialidad joven propició la idea de traer de nuevo al país al Presidente Alessandri.

⁴³ J. C. Jobet, ob. cit., p. 203.

"A su regreso se opuso don A. Edwards, que representaba entonces la opinión conservadora de los jefes de la Marina. En ese tiempo el señor Alessandri era un réprobo, y merecía para sus actuales aliados los más duros y descorteses calificativos."

La frustración alessandrista del año 1920 abre las puertas a una serie de alternativas, en cuanto a alianzas, que no prosperaron por el carácter dependiente de las capas medias. Porque no constituían verdaderamente una burguesía cohesionada, sino una aglomeración de capas fluctuantes en torno de la clase dominante, o de sus fracciones, adoptan formas de comportamiento, no sólo oportunistas, sino fuertemente influenciadas por la ideología dominante.

Con el golpe militar de 1924 los oficiales formularon una política que representaba el intento de nuevas alianzas de las capas medias con la clase obrera para enfrentarse con el núcleo de poder. Así fue como procuraron plantear una revolución de "revitalización nacional";⁴⁴ adoptaron medidas de control de precios; subieron los salarios de los trabajadores; crearon el Ministerio del Trabajo, y finalmente tomaron contacto con el proletariado urbano y las organizaciones del trabajo.⁴⁵

Pero es muy clara la incapacidad por empujar un proceso hasta provocar la crisis del sistema de dominación. De las propias palabras de Grove se desprenden las contradicciones de estos sectores en forma de caer fácilmente en maniobras del grupo oligárquico (movimiento del general Altamirano), limitándose a una suerte de liderazgo esporádico por reivindicaciones ante una situación económica insostenible para numerosas capas medias y proletarias. Es el mismo tipo de liderazgo que aparece después de la crisis, aunque revestido con un mejor articulado caparazón ideológico (el caso del P. Socialista).

La entrega del poder a Alessandri y las elecciones presidenciales de 1925 (donde es elegido Emiliano Figueroa Larraín, con 184 000 votos, 71.6%) representan el retorno a la "civilidad oligárquica". Esta nueva consolidación de la constitucionalidad representa un quiebre entre dos sectores de la pequeña burguesía; por un lado, aquellos que se incorporan (representados en la figura de Alessandri), que entran a formar parte como "agente delegado" de las estructuras de poder; y segundo, los que se mantienen excluidos que, con apoyo de organizaciones sindicales (como la USRACH), dan forma a

⁴⁴ Pike, ob. cit., p. 180.

⁴⁵ Pike, ob. cit., p. 181.

un movimiento de enfrentamiento a través de la candidatura de José Santos Salas (75 000 votos, 28.3%).⁴⁶

Los primeros vigorizan los cuadros del Partido Radical y del Partido Demócrata: los segundos se orientan según esquemas socialistas de pensamiento, aunque sin romper su inercia social, como se demostró claramente durante el Frente Popular.

Los diferentes conatos por arrebatarse el poder a la oligarquía no modifican el modelo de desarrollo político. El golpe de Ibáñez de enero de 1927 constituye una réplica a la ineficiencia del "civilismo" de Emiliano Figueroa, mediante la utilización del aparato estatal para imponer un poder disciplinario; pero también dando lugar a una expansión de su esfera de actividades para abordar los problemas sociales que ponían en tensión a los estratos populares.

Se observa con claridad cómo el aparato estatal no sólo es un instrumento de dominación (como diría J. Edwards Bello: "sin un control firme nuestro pueblo nunca ha producido buenos resultados"); sino, además, la base material para una alianza cada vez más necesaria y fuerte entre las capas pequeñoburguesas (especialmente entre aquellas ubicadas en la burocracia) y el núcleo oligárquico que detenta el poder real.

Con Ibáñez el núcleo oligárquico procura alcanzar un control cada vez más exclusivo del poder político. En este sentido es posible distinguir dos etapas en su gestión gubernativa. Con anterioridad a febrero de 1927 se aprecia el predominio de la pequeña burguesía que caracteriza al Gobierno por sus vacilaciones frente a los grandes movimientos de masas y huelgas; y después de febrero, cuando se establece la vinculación directa de la burguesía con el imperialismo norteamericano, impulsada por el "temor al comunismo y a las ideas avanzadas de los grupos asalariados que apoyaron la candidatura presidencial de José Santos Salas" (discurso de Grove, mayo de 1934).

Este segundo periodo corresponde al intento por dar respuesta con el concurso de líderes pequeñoburgueses y el apoyo del imperialismo norteamericano, que desplaza a los ingleses, a las exigencias planteadas por la efervescencia social y la inestabilidad política que comenzaba a abrumar al país como consecuencia de las crisis internas y externas. Como réplica a estos hechos Ibáñez perpetúa la misma práctica de abrirse a las inversiones extranjeras, conservando el Estado el carácter de órgano fuerte de la mayoría "plutocrática".⁴⁷

⁴⁶ *Antecedentes cuantitativos sobre América Latina*, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, noviembre 1966, Santiago de Chile.

⁴⁷ J. C. Jobet, ob. cit., p. 179.

Así es como las inversiones directas de EE. UU. durante 1930 ascienden a 440 millones de dólares, de los cuales 330 millones están en empresas mineras, 66 millones en comunicaciones y transportes, mientras que los títulos chilenos colocados en EE. UU. ascendían, aproximadamente, a 260 millones, lo que hacía un total de inversiones igual a 708 millones de dólares.⁴⁸ El conjunto del capital extranjero excedía el total de la inversión nacional de manufacturas, industrias y minas, y no estaba muy por detrás de la inversión nacional en el comercio.⁴⁹

El aparato estatal es utilizado exclusivamente en beneficio de los grupos dominantes. Se crea el Instituto de Crédito Industrial; logra avances en la producción de las materias primas que interesan a los inversionistas extranjeros (cobre, hierro, salitre y carbón); se inicia un vasto plan de obras públicas financiado con empréstitos externos, pero que ofrece alternativas de trabajo. Se establecen tarifas proteccionistas y fáciles condiciones de crédito para la industria liviana, que permiten que por primera vez en la historia de Chile el capital industrial exceda a la inversión en la agricultura.

Toda esta política no corresponde a los intereses de un grupo que dispute el poder, sino a una reacomodación del grupo dominante que, manteniendo intacta la estructura agraria como base de su poder electoral, no vacila en promover el desarrollo manufacturero liviano para transformarlo en una actividad económica complementaria; proceso que, por lo demás, es financiado casi exclusivamente por la banca extranjera, por cuanto se gestionan préstamos por más de 96 millones de dólares.

Pike ha caracterizado el Gobierno de Ibáñez como un régimen donde "la aristocracia permanecía sin tributar, en gran medida, y donde la clase media fue apoyada a través de planes de viviendas, seguridad social y planes de pensiones",⁵⁰ todo sobre la base de ayuda externa y de una política tributaria regresiva.

Se incorporan sectores sociales al costo de excluir otros que, de este modo, a medida que la situación se deteriora, entran en abierto antagonismo con el Gobierno. Solamente entre 1929 y 1932 los salarios reales bajan en un 40%.

Durante el año salitrero de 1928-1929 los salarios fluctuaban alrededor de 12 pesos, que al cambio de 6 d. por persona significaban 1.50 dólar; en el año salitrero 1936, los salarios fueron de 21.50 pesos

⁴⁸ Las inversiones inglesas ascendían a 330 millones de dólares.

⁴⁹ Pike, ob. cit., p. 198.

⁵⁰ Pike, ob. cit., p. 198.

término medio, que al cambio de 11|21 representaban 85 centavos de dólar. Para "la masa total de trabajadores salitreros (26 000) supone un robo de 5 millones de dólares, más o menos de 125 millones de pesos moneda corriente". Cualquier reajuste nominal es burlado por la desvalorización monetaria.

El Gobierno de la revitalización nacional se resquebraja en su papel de mascarón del núcleo oligárquico tradicional, ya que "no puede crear un desarrollo económico propio basado en la industrialización del país, el cual permaneció siendo proveedor de materias primas y subordinado a la economía norteamericana".⁵¹ Las ventas del salitre y cobre, que representaban el 70% del ingreso nacional, declinan desde 27 millones en 1929 a 3.5 millones en 1932; lo que tiene su contrapartida en las importaciones, que entre octubre de 1929 y octubre de 1930 caen en un 88% y que todavía en 1932 eran menos de un quinto de lo que representaban en 1929.⁵² La crisis impide al Gobierno cancelar la deuda externa, lo que hace que se le nieguen nuevos empréstitos. Estrangulado económicamente y con más de 150 000 cesantes, "el Gobierno se desploma".⁵³

CAÍDA DE IBÁÑEZ Y SUS REPERCUSIONES

La pequeña burguesía, en su lucha por participar del ejercicio político del poder, desenvuelve liderazgos como el de Ibáñez, que transforma en su caudillo. Pero a medida que cualquier forma de gobierno no revolucionario termina por entenderse tarde o temprano con el imperialismo, desde el momento que el Gobierno comienza a depender cada vez más de éste, surge la contradicción con su apoyo social en la pequeña burguesía en ascenso.

La dependencia del imperialismo pasa por los sectores de la burguesía más relacionados con la actividad financiero-industrial, lo que culmina rápidamente con el desplazamiento de la pequeña burguesía como base social de apoyo. Este proceso se ve acelerado por la creciente concentración de capitales y corresponde a dos momentos del Gobierno de Ibáñez: antes y después de febrero de 1927.

A medida que el Gobierno depende en grado creciente de la burguesía comprometida con el imperialismo, su grado de autonomía es menor. Así fue como la crisis de 1930 tuvo consecuencias profundas, produciendo el descalabro de todo el aparato financiero.

⁵¹ Los capitales extranjeros aumenten su volumen en Chile, desde 723 millones de dólares en 1925 a 1.017 millones de dólares en 1930. Pike, ob. cit., p. 198.

⁵² Pike, ob. cit., p. 209.

⁵³ A. Chelén Rojas, p. 59.

Se abre entonces el cauce a diversas reacciones de la burguesía desplazada. Las masas populares carecían de canales propios de expresión y movilización política. El Partido Comunista estaba debilitado por la dictadura y dividido en una fracción trotskista y otra stalinista. El Partido Socialista recién se fundaba como expresión más bien pequeñoburguesa que popular.

La situación se supera a través de un retorno al civilismo y de movimientos policlasistas impulsados por el núcleo oligárquico. La elección de Montero y Alessandri son dos ejemplos.

El civilismo que surge después de la caída de Ibáñez refleja el esfuerzo por superar las contradicciones derivadas de la excesiva dependencia externa, a través del distanciamiento de la relación de explotación caracterizado por el intento de incorporar tanto masas proletarias como de pequeña burguesía.

Esta modalidad de legitimación, basada en que nuevos grupos se inserten en el aparato del poder político, crea las bases para que germinen, a nivel de la superestructura, una cantidad de núcleos de manipulación ideológica sin apoyo de masas efectivo. La gran cantidad de estos núcleos que aparentan aceptar los cambios en cuanto se limitan a cumplir las posibilidades de participación política ha sido coexistente con el mantenimiento inamovible de la misma estructura económica. Ubicados en la superestructura institucional, protagonizan formas de radicalismo ideológico sin que se corresponda con una efectiva polarización de las fuerzas sociales. Es el caso de la pequeña burguesía ideologizada que entra a canalizar movimientos de masas que, o responden a una ampliación de la base de apoyo del núcleo oligárquico (Montero, Alessandri), o reflejan alianzas de enfrentamiento con el sistema pero que terminan frustrados (grovismo, movilizaciones del Partido Comunista). Como dice un analista del momento, "el izquierdismo pequeñoburgués crece a costa de una vanguardia efectivamente popular".

La crisis económica, que se prolonga durante el Gobierno de Juan E. Montero,⁵⁴ intensifica la formación de una oposición pequeñoburguesa de izquierda que se convierte en la vanguardia de conglomerados proletarios y que inicia un movimiento que, tras diversas coyunturas (golpe del 4 de junio, elección de A. Alessandri), culmina con la alianza frentepopulista.

⁵⁴ "La cesantía se agrava y sobrepasando los cuadros del proletariado alcanza a los cuadros de la llamada clase media (profesionales, intelectuales, etc.), proletarizándolos y obligando a muchos ingenieros a acogerse al reparto de víveres en crudo y algunos hasta a recibir sus alimentos en las ollas comunes." (Informe de Jorge Lavín, p. 49.)

"La radicalización de esta pequeña burguesía es producto de la crisis del régimen

Esta pequeña burguesía excluida, para contraponerla a la que se incorpora al aparato político a través de los movimientos caudillescos de la derecha, se radicaliza ideológicamente, aunque socialmente tiene escasa gravitación. Entra o a organizarse en una multiplicidad de partidos (el Socialismo Marxista, Obrero Socialista, Socialista Unificado, Socialista Republicano, Nueva Acción Pública, Socialista de Chile, Socialista Internacional, afiliado a la II Internacional, Laborista, Acción Socialista, etcétera), o bien a dividir antiguos partidos (Radical Socialista, Democrático, etcétera), transformándose en cabeza de oposición al régimen. Por su carácter dependiente y periférico de la gran burguesía no puede antagonizar con ésta, sino tan sólo contribuir a debilitar el apoyo de masas a la oligarquía, rompiendo toda clase de intermediaciones populistas y así, en consecuencia, dejando al desnudo la contradicción dominante.

En efecto, la pequeña burguesía oscila entre dos polos extremos (por un lado, la alta burguesía, y por otro, los proletarios) comportándose con una gran movilidad política y económica que se traduce en la división fácil de sus propios partidos políticos. Debemos entender que estas oscilaciones corresponden a la política del grupo dominante por ampliar sus bases de apoyo a través de nuevas capas pequeñoburguesas para así afianzar la legitimidad de su dominación; lo que logra promoviendo movimientos de masas, o comprometiendo a la vanguardia de movimientos paralelos a los propios, lo cual es siempre viable por la gran capacidad de absorción de la superestructura institucional.

La capacidad de absorción del Estado hay que comprenderla en tanto que no es sólo un factor de poder clasista, sino la base para el surgimiento de capas sociales cuya situación objetiva está determinada por los niveles de funcionamiento de la propia estructura burocrática. De esta manera se facilitan las alianzas para el ejercicio del poder que objetivamente cumplen la función de respaldar el dominio del núcleo oligárquico, a través del compromiso de toda esta burguesía de servicio con el sistema de dominación vigente.

En este sentido el Estado, cuando ha alcanzado un alto grado de desarrollo burocrático, no sólo encarna un instrumento de poder clasista, sino que, paralelamente, constituye un mecanismo de control de alianzas basadas en la disociación control-ejercicio del poder.

oligárquico encabezado por Montero, donde se produce una baja de los salarios por la instalación oficial del salario fiscal en las obras de camino a base de 3 pesos al día, medida del Fisco que se acompaña de un aumento a las contribuciones indirectas y una rebaja de los impuestos directos a la renta, además del mantenimiento artificial de los precios al detalle, y una amplia libertad de especulación." (Informe de Jorge Lavín, p. 52.)

El Estado es más burocrático como sistema en la medida en que el proceso de concentración económica se acompaña de una débil capacidad de acumulación por parte de la clase dominante, pues se genera entonces una dependencia de ésta respecto de su propia superestructura institucional.

Todo este proceso que incorpora sectores de pequeña burguesía y excluye otros se expresa en fenómenos como el civilismo (Montero), que vuelve a encubrir las verdaderas relaciones de poder de la oligarquía, después de haber pasado por la experiencia ibañista, y que se continúa posteriormente con el segundo Gobierno de Alessandri. Son ejemplos de movimientos de ampliación, de base umbilicalmente vinculados con el núcleo oligárquico.

El golpe militar del 4 de junio, en cambio, representa una coyuntura que rompe esta continuidad en las formas de legitimidad impulsada por los sectores "radicalizados", que se orientan hacia una alianza con sectores trabajadores; aunque limitada a "incorporar a las masas al rodaje administrativo del Estado" sin alcanzar a profundizar ningún cambio en las bases materiales.

Para una descripción viva de los acontecimientos que sacudían al país en vísperas del golpe es interesante recurrir al testimonio de un observador directo, que si bien puede adolecer de impresionista, tal vez por lo mismo nos proporciona un cuadro de cómo se apreciaba el ambiente en ese momento: ⁵⁵

"Más de la mitad de los chilenos no saben estampar su nombre sobre un papel, y la estadística comparada nos marca con índices sobresalientes en mortalidad infantil, en tuberculosis, en sífilis, en alcoholismo, en prostitución. En cuanto a las riquezas naturales, una buena parte se encuentra en poder de extranjeros, y el standard de vida de la generalidad de los chilenos es miserable.

"¿Cómo explicar este resultado? ¿Cómo tanta sabiduría y honestidad han podido producir tanto desastre? ..."

Destacando más adelante las condiciones sociales y económicas posibles para un rápido desarrollo de nuestra economía, señala: "En este medio favorable, gobernantes con mediana inteligencia y visión del porvenir, con dotes modestas de verdaderos estadistas, habrían formado una democracia culta, un pueblo sano, una nación próspera y poderosa. Sin embargo, quien haya descendido hasta los barrios bajos o quien haya presenciado los grandes desfiles populares en las últimas campañas eleccionarias, no habrá podido menos que experimentar una profunda tristeza: los estigmas degenerativos y la mirada

⁵⁵ Jorge de la Cuadra Poisson, *La revolución que viene*, Imprenta Nascimento, Santiago, 1931.

extraviada de esa inmensa masa del proletariado, de la taberna y del presidio. Esos rostros no tienen impresa la línea firme del español o del indio, sino la huella del abandono y de la miseria. Esas turbas rebeldes y harapientas son algo más que instrumentos de agitadores: son cien años de vilipendio y explotación que despiertan y gritan.”

En este proceso de alianzas, el 4 de junio representó una combinación de fuerzas para enfrentarse con el sistema, ya que produce, aunque momentáneamente, la unión de las masas proletarias y de la clase media, sellando la unidad entre los trabajadores manuales e intelectuales, que después se traduce en el gran movimiento de masas que fue el grovismo.

El 16 de junio, con la caída de la Junta y su reemplazo por Carlos Dávila, representó la imposición de los sectores pequeñoburgueses proclives al compromiso con el núcleo oligárquico.

Una buena caracterización de lo que planteamos se encuentra en un documento de 1933: ⁵⁶

“El apoyo social efectivo que tenía el Gobierno de Grove era el correspondiente a todas las clases pequeño-burguesas y por lo tanto sin trabazón efectiva alguna, sin conciencia de clases y sin unidad de intereses, ya que tal sector se caracteriza precisamente por la diversidad de intereses de los componentes; unos tiran para convertirse en burgueses hechos y derechos, otros para mantenerse por lo menos y los más se proletarizan, y este conglomerado heterogéneo, fielmente representado en la amalgama socialista erigida en Gobierno, no podía, porque estaba económica y socialmente imposibilitado, presentar un frente de batalla propio contra nadie.” ⁵⁷

Bajo el imperio de esta ambigüedad social e ideológica la pequeña burguesía provoca el golpe del 4 de junio, que doce días después termina con el contragolpe de Carlos Dávila. Éste se orienta por un entendimiento con la gran burguesía, preparando las condiciones para un nuevo movimiento civilista de recuperación del ejercicio del poder por el grupo oligárquico, que se materializa con la elección de Arturo Alessandri en 1932.

En este movimiento participan las fuerzas sociales pequeñoburguesas que permitieron la elección de Montero y que fueron víctimas de la crisis desatada durante su periodo, que, al repetirse nuevamente con Alessandri, las empuja a una alianza con sectores trabajadores, ahora respaldados por un fuerte aparato sindical, y con partidos que, o han cimentado una dirección con dirigentes pequeño-

⁵⁶ Informe político del Comité Central del Partido Comunista, de Jorge Lavín. Se trata de la división trotskista del Partido Comunista.

⁵⁷ Informe J. Lavín, p. 59.

burgueses radicalizados (Partido Socialista), o han superado sus divisiones internas (Partido Comunista).

El golpe de Dávila fortalece a los sectores de la pequeña burguesía menos proclives a un compromiso, facilitando que asuman el liderazgo de obreros, artesanos y campesinos. Esta asunción de un liderazgo más estructurado ideológicamente se cumple en dos etapas: la primera, que llamaremos grovismo, se extiende hasta el retiro de la candidatura de Grove a la presidencia (1938), y la transformación del Bloque de Izquierda en Frente Popular; y la segunda empieza con la elección presidencial de Pedro Aguirre Cerda, abanderado del Frente Popular.⁵⁸

La etapa del grovismo tiene el significado de una alianza entre capas medias y trabajadores conformando un bloque de oposición con el núcleo oligárquico de rasgos populistas, pero débil considerando la situación de clase de obreros y de campesinos.

Mientras el predominio de la pequeña burguesía y de la burguesía de servicio es aplastante, la clase obrera se encuentra en un proceso de consolidación al pasar recién desde la etapa de empresa artesanal a la fabril; por su parte el campesinado no cuenta, controlado como está por el sistema cerrado de la hacienda paternalista, pero agravada su marginación y pasividad por la carencia de una política bien orientada.

La tendencia de los sectores pequeñoburgueses de formular una alianza para acceder al aparato político del poder obliga a marginar al campesinado no tanto por su agresividad como clase sino por ser la base social del poder de la oligarquía, que aún no había transferido el grueso de sus intereses desde la agricultura al sector secundario y de servicios, y para lo cual, en consecuencia, era básica la tranquilidad en el campo.

El grovismo, con ser una expresión de la pequeña burguesía radicalizada, representó en el plano ideológico el germen de una alianza frontal contra el sistema de dominación, aunque limitado por la estructura de clases imperante. Para saber si el grovismo se hubiera podido traducir en algo más habría sido necesario responder algunas preguntas como las siguientes: de continuar consolidándose el movimiento grovista, ¿habría dado lugar a la transferencia real de la dirección hacia los sectores populares?; tal transferencia ¿habría supuesto la participación organizada de la clase obrera?

⁵⁸ Etapa que se prolonga durante los gobiernos siguientes, caracterizados por la formación de lo que Gramsci denominara alianzas restauradoras y que culmina con el Gobierno de la Unidad Popular.

El Partido Comunista, que era la otra fuerza política capaz de impulsar un enfrentamiento y que había venido desarrollando desde antes de 1930 una fuerte campaña proselitista y de organización sindical, logrando transformarse en el grupo político más vinculado con la clase obrera, cejó en su esfuerzo por orientarla fuera del esquema de alianzas por consideraciones internacionales. Frente a esta desviación el Partido Socialista, a pesar de su euforia ideológica y de canalizar un fuerte movimiento de masas, objetivamente nada podía corregir por su misma composición social: producto de grupos pequeñoburgueses que buscaban su lugar de dirección, en circunstancias en que el movimiento de trabajadores se encontraba sometido a fuertes tensiones internas.

El modelo político, aceptable desde la perspectiva internacional, ignoró que se aplicaba en un trasfondo caracterizado por una serie de alianzas dominadas por una pequeña burguesía con clara orientación mesocrática, que objetivamente en el ciclo histórico largo cumplía la función de mediatizar las contradicciones con el grupo oligárquico.

Se traduce esta mediatización en que los conflictos se limitan a disputas de acceso al ejercicio del poder político, pero donde su manejo no puede afectar los intereses materiales hegemónicos, ya que, al ser éstos los verdaderos depositarios del poder, la forma de ejercerlo es sólo una modalidad de legitimación, mas no de transferencia. En este juego es donde hay que comprender la incorporación de nuevos estratos que entran para ampliar las bases sociales del sistema de dominación vigente.

De acuerdo con este planteamiento, el grovismo representó la posibilidad de un enfrentamiento con el sistema, pero considerando el origen de clase de sus dirigentes, dominados todavía por la confusión entre transferencia de poder y mero acceso a su ejercicio. Es por eso que su frustración significó, más allá de lo coyuntural, determinado por la necesidad de enfrentarse al fascismo, el triunfo de una estrategia que la izquierda, ininterrumpidamente, aunque con algunas variantes, ha seguido durante los últimos treinta años, y que puede resumirse en el encubrimiento de las alianzas que sectores pequeñoburgueses y burguesía de servicio impulsan para acceder al poder con el apoyo de movimientos populares.

La segunda etapa, retiro de Grove como candidato a la presidencia y elección en su reemplazo del candidato del Partido Radical, Pedro Aguirre Cerda, representó la hegemonía de los sectores medios más próclives a un entendimiento contemporizador de clases. Este hecho respalda la transferencia del poder hacia esos sectores, que al utili-

zarlo simplemente como mecanismo de participación en el sistema de dominación, no hacen, en la medida que la clase obrera no asume un papel dirigente efectivo, sino consagrar sucesivas alianzas de integración al sistema. Cuando se efectúa transferencia de poder real, se hace a nivel local y parcial, en estructuras que, como los sindicatos, por su mismo carácter, son engranajes de la institucionalidad vigente, convirtiéndose de facto en mecanismos que coadyuvan a la legitimación del poder a medida que facilitan la difusión de la ideología dominante.

De lo dicho se dibujan dos vertientes para el movimiento popular: una de enfrentamiento y otra de alianza.

El embrión de la primera lo representó el grovismo, la segunda quedó para siempre marcada por el sello del Frente Popular, sea cual fuere su estructura política en distintos periodos.

El análisis del periodo que se extiende entre 1933 y 1937 nos enfrenta con algunas reacciones ante la disyuntiva: primero, aquella representada por los grupos más radicalizados ideológicamente, que, como los trotskistas, formulán juicios certeros acerca del estancamiento que la línea frente-populista significaba para el movimiento popular, pero sobre la base de una falsa interpretación de la estructura de clase; otra, representada por el Partido Comunista, que, con efectiva base obrera, antepone consideraciones internacionales y de grupo de presión a los intereses del movimiento popular en su conjunto. En una palabra, por una parte los grupos marginales radicalizados, aunque sin peso social efectivo; por otra, grupos con apoyo social, pero orientados a consolidarse como estructuras de poder dentro de la institucionalidad.

En una mano, la palabra vigilante, en la otra, el martillo necesario para golpear. Resultado: un movimiento popular embrionario dividido que, de no mediar estas circunstancias, habría quizás impedido que, a través de la grieta de su división, la pequeña burguesía nuevamente impusiera su hegemonía.

En este contexto, el grovismo fue el aluvión multitudinario, polí-clasista, la tierra fértil para el germen de un movimiento popular. Nunca tanto como entonces el Partido Socialista mostró tan claramente su naturaleza de movimiento más que de partido leninista, de vanguardia.

EL SURGIMIENTO DE NUEVAS IDEOLOGÍAS

La crisis de 1930 contribuye a generalizar la idea del socialismo como respuesta a la catástrofe económica y social. Se hace claro que

la depresión demostraba que era la consecuencia inevitable del capitalismo, especialmente norteamericano; que si el individualismo había procurado un orden social aceptable, el socialismo debía constituir el camino para lograr la justicia económica y social. El diario *El Mercurio* editorializaba sosteniendo que una combinación de socialismo y capitalismo sería necesaria para producir armonía en el orden social. Joaquín Edwards Bello⁵⁹ clamaba por una especie de comunismo nacionalista, libre de ataduras con la Unión Soviética. Otros sostenían que solamente el socialismo podía remediar los males que el capitalismo había traído al mundo occidental, permitiendo, según otros, la conservación de los valores culturales tradicionalmente poseídos por Chile que, a veces, se identificaban con patrones cristianos.

La difusión de la idea socialista se extiende desde aquellos grupos de ideología marxista, que se fusionaron para fundar el Partido Socialista, hasta aquellos de orientación cristiana.

La afiliación al ideario socialista fue un factor determinante, incluso, en la emergencia de la Falange Nacional, antecesora del actual Partido Demócrata Cristiano, que se desgaja del viejo Partido Conservador⁶⁰ en su lucha por combatir el materialismo y deshumanización atribuidos al capitalismo.

El Socialismo

En este contexto aparece a la vida pública el Partido Socialista. Nace como expresión de aquellas capas medias que buscaban definir una alianza de clase con los sectores obreros para oponerse a la oligarquía tradicional; pero, al igual que los anteriores intentos (como lo fuera la primera elección de Ibáñez), termina por someterse a las relaciones de poder existentes.

Si el nacimiento de las ideologías es enfocado desde la perspectiva de las alianzas de clases, concluiremos que algunas de ellas, a pesar de sus contradicciones, tienen una misma raíz social. Si tomamos al radicalismo y al socialismo, por ejemplo, el primero puede interpretarse como expresión de los sectores que se han incorporado a la alianza dominante, mientras que el segundo representa a los excluidos que fortalecen sus posiciones aliándose con la clase obrera. Esta última participando en condiciones subalternas debido al imperio de los liderazgos pequeñoburgueses, no obstante aportar su larga tradición de luchas sindicales.

⁵⁹ Conocido escritor y ensayista chileno.

⁶⁰ Pike, ob. cit., p. 259.

Este compromiso con el ideario socialista no podía ser ajeno con la adopción simultánea de una profunda actitud nacionalista.

La tónica del nacionalismo es un ingrediente de las nuevas ideologías de crítica que las clases dominantes tratan de incorporar a su propio acervo, y el rasgo distintivo de Partido Socialista.

El Nacismo

En efecto, como respuesta al socialismo aparecen otras manifestaciones ideológicas que reflejan la ambivalencia de las capas medias en relación con el grupo dominante. Nos referimos al nacismo.

El nacismo constituía la ideología que respondía por una parte a la lucha de la pequeña burguesía y otras capas medias por participar en el ejercicio del poder; y de otra parte, a la política del grupo oligárquico tradicional por constituir un frente político capaz de contrarrestar la alianza clase obrera-pequeña burguesía radicalizada que, con extraordinario vigor, irrumpe especialmente después de la organización del Partido Socialista y de la unidad del movimiento sindical.

Estas dos caras de la ideología fascista se traducen en hechos aparentemente contradictorios, ya que mientras, por un lado, servía de "punta de lanza" en contra del movimiento popular, finalmente se vuelca hacia el Frente Popular apoyando a Pedro Aguirre Cerda con el retiro de Ibáñez, que era el candidato de la Alianza Popular Libertadora, su organización política.

El nacismo organizado surge en Chile como consecuencia de la coyuntura creada por la depresión mundial. Sin embargo, no puede desconocerse que ya antes el fascismo italiano, con su idea del Estado corporativo, había encontrado acogida en sectores aislados, aunque sin alcanzar ninguna expresión orgánica. Para muchos, incluyendo connotados políticos como Conrado Ríos Gallardo, Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Ibáñez, el fascismo constituía la única fuerza capaz de promover la renovación nacional, ya que significaba la contención del comunismo a través de un rápido desarrollo. La Italia de Mussolini era un ejemplo del Estado ordenado, próspero y dinámico que había logrado este objetivo a través de su propio avance económico. Es la crisis de 1929 la que hace madurar las condiciones para que estas imágenes e ideas tomen la forma estructurada que les permitiría llegar a tener alguna importancia política.

Dos factores convergen para hacer del nacismo un movimiento con cierto apoyo; primero, la influencia de la filosofía europea del

nacionalsocialismo; y segundo, el nacionalismo económico que aparece como reflejo de la crisis.

Esta última da la razón a quienes sostenían que el capital extranjero era indicador de decadencia nacional, pues dejaba al país en una situación de manifiesta debilidad. El quiebre del apoyo externo como base para estructurar el poder puso de manifiesto este temor, vigorizando una tendencia nacionalista que se conecta en dos estructuras diametralmente opuestas en su propósito: al Movimiento Nacional Socialista, en abril de 1932, y un año después, al Partido Socialista. Ambas organizaciones procuran encauzar el espíritu nacionalista despertado por el sacudimiento provocado por la crisis, el cual pone en peligro el equilibrio político celosamente guardado por la clase dominante.

Situado en estas condiciones, el nacismo representa la legitimación de la hegemonía del núcleo dominante sobre la base de un enfoque nacionalista. Pero la dinámica propia de una coyuntura donde se enfrenta una nueva forma de constitución del poder nacional determina que algunos sectores se vuelquen hacia un frente político más antagónico, como es el Frente Popular.

Lo anterior explica que, a pesar de representar el nacismo una forma de ampliación de la base de sustentación de la clase oligárquica dominante, ideológicamente se oriente hacia un cuestionamiento de sus bases, lo que entrañaba una contradicción con los objetivos atribuidos a tal movimiento por la derecha tradicional.

Esta ambigüedad del movimiento nacist se pone de manifiesto cuando estudiamos sus diferentes aspectos.

En primer término, junto con sus rasgos de afinidad con la derecha al afirmar que a las "clases bajas debía asegurárseles las condiciones materiales y de educación para así convertirlas en trabajadores eficientes", propugnaba que debía mantenerse en su lugar y enseñárseles para que no desafiaran a sus superiores y no pretendieran ascender más arriba de la posición que les correspondía. Además, sus cuadros eran reclutados entre la juventud de la clase alta y contaba con el apoyo de la prensa, lo que le confería "gran respetabilidad" comparada con la que habían logrado otros grupos dedicados también a reformas drásticas.

La clase dominante percibía en el Movimiento Nacional Socialista un instrumento efectivo para detener el "comunismo ateo". Es así como durante el Gobierno de Alessandri, que repone a los grupos dominantes en el control del poder político sobre la base de buscar apoyo interno de masas, el nacismo es amparado y aparece como la contraofensiva frente a la pujanza con que irrumpía la alianza más

decididamente antagónica representada por el auge del Partido Socialista.

Su finalidad programática de revivir el Estado "portaliano" reproduce la antigua ideología de las clases dominantes de utilizar su estructura, pero sin que la ampliación social alcance un grado de institucionalización tal que dé lugar a la formación de núcleos paralelos al poder central. Esta vuelta al poder sin contrapesos institucionales corresponde al cambio experimentado en las bases del poder político como consecuencia de la crisis, por cuanto hasta ese momento, desde los comienzos del liberalismo, a fines del siglo XIX, había descansado en el apoyo externo. Es a partir del resquebrajamiento de este apoyo que se transforma también la estructura del Estado, que vuelve a ser el canal mediante el cual se realiza el esfuerzo interno de acumulación (lo que después se conocerá como Estado desarrollista).

La ideología fascista del "Nuevo Estado" con un alto grado de centralización es compartida, aunque con diferencias, por los sectores católicos más tradicionalistas, quienes plantean la creación de un Estado fuerte pero de estilo corporativo.

No obstante haber coincidencias en cuanto a mantener el sistema de dominación, se observan contradicciones en el plano ideológico sobre el grado de centralización que el Estado debe alcanzar. Esto se explica porque la Iglesia desea conservarse autónoma del poder central. Cuando analizábamos la función intervencionista del Estado durante el siglo pasado, no se planteaba el problema en tanto Iglesia y Estado se identificaban. En cualquier caso la discrepancia ideológica es resultado de una oposición entre grupos de presión internos a la oligarquía dominante.

El Movimiento Nacional Socialista, con todo el apoyo que la derecha le facilitara para su trabajo, no alcanzó nunca a superar los 18 000 votos, ni a elegir, en el momento de su mayor apogeo, más de tres diputados. A pesar de que sus dirigentes afirmaban que contaban con más de 40 000 afiliados juveniles, en su mayoría provenientes de las mejores familias, pero que no contaban con la mayoría de edad para votar.

La declinación del Movimiento empieza a gestarse cuando, por influencia de una tendencia extremista, modifica el tono y contenido de sus planteamientos dejando de lado el estilo cauteloso de que los cambios tendrían que impulsarse dentro de cierta normatividad y en forma progresiva comienzan a formularse planteamientos abiertamente favorables a la violencia y a la revolución. Es interesante anotar cómo estos planteamientos dejan al descubierto el papel real que

el nacionalsocialismo cumplía en el juego de las alianzas. Como dijo un autor, "la violencia de sus planteamientos lo aleja de los sectores medios, consistentes defensores en esa época de la aristocracia y de sus valores";⁶¹ con lo cual deja de cumplir la función de allegar "masa" que apoye el sistema de dominación vigente. Por el contrario, comienza a perfilarse como un peligro si, por contribuir ideológicamente a abrir los cauces a un proceso social que desborde los controles institucionales, llega a transformarse en una alternativa en lugar de continuar siendo un respaldo social y político al orden establecido.

Al estudiar la declinación del nazismo en Chile es significativo destacar el temor creciente que la clase alta tiene de que éste se transforme en una alternativa de poder. No puede contemplar indiferente que el nacionalsocialismo insista en la constitución de una nueva élite que no se legitima ni en el nacimiento ni en la riqueza, rompiendo así con las bases sociales de la dominación imperante y transformándose en un partido poderoso que haga peligrar, en vez de respaldar, el acostumbrado equilibrio político tradicionalmente satisfactorio para las clases altas. Todo este proceso culmina con la organización de la Alianza Popular Libertadora (APL), que levanta la candidatura presidencial del general Ibáñez, a quien su Ministro de Relaciones había calificado como "el Mussolini del Nuevo Mundo", durante su pasada presidencia, y que se opone a la candidatura del núcleo oligárquico tradicional encarnado en la persona de Gustavo Ross Santa María.

Mientras tanto, el movimiento socialista, producto de la alianza entre sectores medios y clase obrera, desencadena cada vez más nítidamente sus contradicciones internas. Éstas quedan de manifiesto cuando se confrontan las alternativas de evolución que tuvo con las acciones políticas elegidas.

EL GOLPE DEL 4 DE JUNIO

Condiciones socioeconómicas

Es dramático el trasfondo en que se desarrollan el movimiento social y el surgimiento de las diversas ideologías. Como simple información de referencia es útil incluir algunos datos estadísticos acerca de las condiciones de vida durante el decenio.

Así, por ejemplo, el costo de vida (tomando como base mayo de 1938 = 100), que en 1930 era de 109.4, sube a 138.1 en 1933, llegando a fines de 1938 a 180.0.

⁶¹ Pike, ob. cit., p. 208.

La mortalidad (por cada mil habitantes) sube de 22.0 en 1931 a 26.8 en 1933, llegando a fines de la década (1937) a 24.0. Por su parte, la mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos), que en 1928 era de 212, sube a 258 en 1933, pero baja ligeramente hacia fines de la década a 241.

En cuanto a la educación, en 1933 hay 409 846 niños entre 7 y 15 años que no concurren a ningún establecimiento educacional, llegando en 1938 el número de analfabetos de más de 9 años a 771 485.

El hacinamiento en que vive el pueblo queda patentizado dramáticamente por una encuesta que comprueba que en sólo 16 manzanas de la comuna de Santiago existen 51 conventillos con 455 piezas, donde viven 1 456 personas que disponen de 789 camas, lo que lleva a observar los siguientes casos extremos:

Núm. de personas	Camas	Núm. de casos
3	1	32
4	1	22
4	2	67
6	2	12
7	2	5
8	2	1
12	2	2

A fines de la década se estimaba que del total de 540 000 personas que vivían en la comuna de Santiago, 250 000 lo hacían en conventillos. Estos, sin embargo, constituían un estupendo negocio. Mientras que por las viviendas salubres la renta percibida variaba entre el 3 y el 5% del capital invertido, en cambio por las pocilgas y viviendas insalubres oscilaba entre el 14 y el 17% del capital; es decir que por las peores viviendas se recibía mayor renta.

En lo que respecta al vestuario, el 78% de los trabajadores no disponen de ingresos para adquirir el mínimo de vestuario aceptable, pues siendo el salario inferior al establecido en las Tablas de Medicina Preventiva (como lo señaláramos en otro momento), se encuentran en la imposibilidad de gastar más del 2% de su ingreso en vestirse. El resto lo gastan en alimentación (80%) y vivienda (15%).

Lo dicho configura una condición de familias subalimentadas. Es así como en una encuesta sobre alimentación popular (publicada en la *Revista Chilena de Higiene y Medicina Preventiva*, de octubre-diciembre 1938) se constata que sobre 31 grupos familiares, 15 están manifiestamente subalimentados, 7 reciben una cantidad apenas suficiente de calorías y 9 una cantidad que puede bastar a un trabajo muscular medio.

Finalmente la natalidad, de alguna manera reflejo del cuadro descrito, que en 1928 era de 43.6, baja el año 1933 a 33.4, manteniéndose durante el resto del decenio con ligeras variaciones (1934: 33.8; 1935: 34.1; 1936: 34.6; 1937: 33.5).⁶²

Teniendo como fondo este cuadro se pueden leer los juicios del señor De la Cuadra, que, con toda su retórica y subjetivismo, constituyen una descripción viva de los gobiernos de la oligarquía responsables de la situación que las cifras nos retratan.

"Hoy día, en presencia de la inquietud de las masas, los hombres graves de Chile no se dan cuenta de cómo han podido generarse estos fermentos y lo atribuyen a las causas más simples, aplicando a su cerebro la ley de la economía de la fuerza: es propaganda comunista, es el oro de Rusia, dicen. Ignoran que las semillas disolventes sólo prenden en los terrenos preparados por largos años de inepticia gubernativa.

"La verdad es que en Chile no ha habido legisladores ni estadistas dignos de estos nombres. Agricultores maliciosos y bonachones, hijos de familia locuaces y cómodos, han desempeñado esos cargos con los resultados que fatalmente tenían que producirse.

"Un grupo de elegidos se repartió familiarmente los ministerios, las senadurías, las diputaciones, las intendencias, etcétera. A los más jóvenes, y por ser hijos de Fulano o Zutano, se les daba para sus gastos un puestecito en alguna oficina pública, y cuando eran parloteros y chistosos se les consideraba con mérito suficiente para ocupar un sillón en el Congreso.

"Así (sin hipérbole alguna) se dotó de empleados la administración y se proveyó de miembros al Parlamento.

"Ha sido desde las alturas del solio presidencial de donde extendió sus raíces por todos los resquicios de la administración y de la política esta oligarquía que se adhirió como molusco al presupuesto de la nación. Y desde allí hizo vida opaca y parasitaria. La máquina administrativa comenzó a crecer para dar cabida a los nuevos señoritos que solicitaban empleo o a los viejos patricios tronados.

"Porque la oligarquía chilena ni siquiera utilizó el poder para llevar a cabo grandes empresas en beneficio propio. Se contentó con sueldos y gratificaciones fiscales, y sus escándalos consistieron en coimas de compañías extranjeras, en estafas bursátiles o abusos administrativos."

Más adelante, al referirse a los efectos de la crisis mundial, plantea la incidencia que ha tenido en ella la política seguida por estos gobiernos de la oligarquía.

⁶² Inspección General del Trabajo, Encuesta Dragoni-Burnet, de la Sociedad de Naciones, Encuesta Gebhardt, Estadísticas de defunciones. Censo General de 1938 (Rumbo, febrero 1940).

“La situación angustiosa del comercio, de la industria o de la agricultura, se explicaba en la prensa de Gobierno con la cantinela de la crisis mundial”, en circunstancias de que, a su juicio, “estuvo determinada en una proporción considerable por la falta de previsión y por el desgobierno.”⁶³

La acomodación egoísta y carente de una visión hacia el futuro de la clase dominante, que se reflejaba en una creciente inoperancia del Gobierno, no daba lugar a que otros grupos sociales surgieran con fuerza suficiente para definir alternativas distintas. La decadencia del grupo dominante acarrea la de las capas medias, en la medida que éstas siempre han sido proclives a entendimientos que faciliten su participación en el poder antes que impulsar conductas de oposición a la oligarquía.

“La descomposición moral de la clase media es mucho más peligrosa que la corrupción de la oligarquía, porque en ella se despiertan deseos no satisfechos, se desbordan apetitos contenidos, y surge, con mayor energía, el ansia de placeres acicateada por los refinamientos de la intelectualidad.”⁶⁴

Frente a la inoperancia y minoría del Gobierno (J. Esteban Montero), que buscaba “tomar de modelos a los viejos patriarcas, a los viejos políticos... sin advertir que la mentalidad popular ha cambiado...”; frente a un Gobierno que está “inerte y atemorizado” ante los problemas que debe afrontar, “que no halla soluciones o que no cree en la eficacia de las que se encuentran”⁶⁵ se diría estar en vísperas de una coyuntura propicia “a los fermentos revolucionarios”, porque, “cuando no se pueden adoptar medidas salvadoras, porque tal o cual entidad no lo permite, entonces el pueblo reacciona en forma violenta y busca más allá de las normas legales”.⁶⁶

Producto de este estado de ánimo fue el golpe del 4 de junio de 1932.

Entretelones del golpe

En abril de 1932 circuló un documento secreto, firmado por el Director Nacional de la Armada Nacional, dirigido a los diversos jefes, en que se formulaban juicios muy esclarecedores sobre la situación política nacional.

⁶³ J. de la Cuadra P., ob. cit., p. 38.

⁶⁴ J. de la Cuadra P., ob. cit., p. 44.

⁶⁵ J. de la Cuadra P., ob. cit., p. 42.

⁶⁶ J. de la Cuadra P., ob. cit., p. 44.

“Apreciación de la situación”⁶⁷

“Situación política interna

“1º El Gobierno pasado,⁶⁸ que la opinión pública consideró apoyado por las Fuerzas Armadas, fue derrocado por la acción de la civilidad y como consecuencia de la mala situación de la hacienda pública;

“2º Así se generó el actual Gobierno,⁶⁹ cuya legalidad fue sancionada por una elección presidencial posterior llevada a cabo bajo los auspicios de la misma bandera del civilismo con que nació;

“3º Muy pronto los políticos de profesión, los malos elementos y los caídos del régimen entraron en acción y al amparo de la siempre incomprensida “libertad”, con la cual se levantan y derrocan todos los Gobiernos, han ido cambiando uno a uno, por intereses personales o doctrinarios, los ideales con que se inició el actual Gobierno;

“4º De esta manera, paulatinamente, se han ido formando en la opinión pública grupos de resistencia al actual Gobierno, los cuales, por las razones expuestas en párrafos anteriores, pueden fácilmente encontrar simpatías dentro del personal de las Fuerzas Armadas;

“5º Estas simpatías son posibles dentro de nuestras instituciones armadas como consecuencia de haber tenido la desgracia de participar, obligadas por las circunstancias, en cambios de Gobierno o en el Gobierno mismo del país y de la campaña que hacia ellas dirige el elemento civil descontento;

“6º En consecuencia, en el evento de producirse un movimiento político al actual Gobierno, se debe tener presente esta situación, antidisciplinaria, si se quiere, pero existente de hecho en el espíritu del personal y exteriorizada por los acontecimientos producidos en los últimos ocho meses;

“7º El motín de la Armada no es en el fondo sino una manifestación en el personal de baja fuerza de este espíritu inquieto y revolucionario;

“8º Este sentir anormal no puede suprimirse de la noche a la mañana, por la fuerza, porque es producto de la situación general del país y no particular del personal de las instituciones armadas. Por este motivo no debe producirnos asombros, y, mientras exista, debemos contar con él como un hecho tal vez desgraciado, pero inevitable;

⁶⁷ Alfredo Guillermo Bravo: 4 de junio. *Festín de los audaces*, Empresa Letras, Imprenta Universitaria, Santiago, 1932. El señor Bravo se desempeñaba como Ministro de Educación del presidente Montero, pp. 25-28.

⁶⁸ Se refiere al Gobierno de Ibáñez.

⁶⁹ Gobierno de J. Esteban Montero.

“9º Sin embargo, se estima poco probable que las instituciones armadas tomen la iniciativa en un movimiento en contra del Gobierno, por disciplina y por conciencia que el personal de ellas tiene de que un Gobierno militar, sin el apoyo de la opinión pública, es imposible.

“Fuerzas que tomarían parte

“10. De acuerdo con la apreciación de la situación política, el elemento civil descontento (izquierda e ibañistas principalmente) podría intentar derrocar al actual Gobierno, aprovechándose de la situación moral actual ya expresada del personal de las Fuerzas Armadas;

“11. Esto podría llevarlo a cabo contando con parte de una o de varias instituciones armadas (ejemplo: la guarnición de Santiago); pero, la comunidad de sentimientos entre el personal de las Fuerzas Armadas, el conocimiento mutuo de sus fuerzas, el instinto de conservación y la experiencia del pasado, indican que, en un caso como el supuesto, habría pocas probabilidades de que el resto de las fuerzas se opusiera por la fuerza a ello, y que lo más probable es que adopten una actitud pasiva en espera de los acontecimientos;

“12. La situación de la Armada no puede definirse con la certeza de las demás instituciones por estar alejada y aislada de los centros políticos y por el mismo carácter de su personal que, instintivamente, repudia participar en luchas o movimientos políticos.

“Actitud de la Armada

“13. La Armada no tiene fuerzas en tierra o de desembarco capaces de defender por las armas al Gobierno;

“14. En la actualidad sus fuerzas están constituidas por una flotilla de destructores y una de submarinos con su buque-madre. El O'Higgins está en Talcahuano en reparaciones y tiene su dotación reducida;

“15. En tierra sólo tiene el Cuerpo de Artillería de Costa con su personal reducido al mínimo y diseminado en los fuertes de Talcahuano y Valparaíso.

“16. Las demás reparticiones de la Armada en tierra no poseen personal especial ni para su propia defensa;

“17. De lo anterior se deduce que la Armada, aisladamente, sin el apoyo de la fuerza de tierra, no constituye una fuerza material capaz de ofrecer una resistencia seria en contra de un movimiento de opinión determinado (izquierdas), y mucho menos si en él participan fuerzas del Ejército, Carabineros y Aviación;

“18. En consecuencia, la actitud de la Armada debe ser, por principio, de lealtad al Gobierno; pero en el caso de que éste sea derrocado por fuerzas extrañas, necesariamente deberá considerar su situación

material con relación a las demás fuerzas armadas a que se ha hecho referencia, y proceder, en todo caso, de acuerdo con ellas, a fin de ahorrar mayores males al país;

“19. Asimismo, con el objeto de evitar la falta de unidad de pensamiento dentro de la situación y la influencia de agentes políticos o de carácter social entre el personal, principalmente en los primeros momentos, se estima recomendable el alejamiento de las unidades a flote, de los centros de propaganda y evitar las comunicaciones con tierra del personal.”

De la lectura del documento se concluye que las Fuerzas Armadas continuaban en una onda de profunda inquietud social y política, fruto de su participación en el fracasado Gobierno de Ibáñez y en los anteriores golpes. Estas experiencias las habían comprometido más directamente con el proceso social y político del país, impulsándolas a adoptar claras posturas de crítica, incluyendo levantamientos como el de la marinería. Como resultado de estos hechos su disciplina interna se habría quebrantado, o, a lo menos, debilitado su carácter de grupo impermeable a influencias extrañas que las sumían en hondas contradicciones internas.

Esta situación por la que atravesaban las Fuerzas Armadas sirvió para intensificar las tensiones sociales, producto de las diferentes tendencias provocadas por los desplazamientos de capas medias hacia posiciones antagónicas frente a la oligarquía. En conjunto ambos factores contribuían a hacer cada vez más precaria la estabilidad del Gobierno de Montero.

En relación con los desplazamientos de capas sociales citaremos las palabras de un observador contemporáneo de los acontecimientos: “¿Qué se le exigía a Montero? Los radicales —algunos— gritaban que se acabe el contubernio con el conservantismo. Y era de ver cómo hombres sedicentes, convencidos de una doctrina que es todo lo contrario de lo irracional, de lo inicuo, de lo inconsecuente, tronaban porque el Presidente no barría de la vida nacional a los miembros de una colectividad política, como el Partido Conservador, que había sido un pilar para su ascensión al mando y un eficiente sostenedor de su Gobierno. Es decir, que para realizar el negocio partidista de conquistar la presidencia para el radicalismo, aceptamos todas las ayudas, sin remilgos de antagonismos ideológicos, y cuando ya la cosa estuvo hecha, desconocieron a sus cooperadores del día anterior y clamaron por su retiro en nombre de las fuerzas doctrinarias.”⁷⁰

⁷⁰ A. G. Bravo, ob. cit., p. 50.

Se trataba de redefinir una nueva alianza para enfrentarse con el grupo dominante, para lo cual era preciso un entendimiento con "la izquierda que clamaba porque se fueran los oligarcas y se gobernara con elementos populares", y que contaban con el descontento de las Fuerzas Armadas.

Simultáneamente otros propugnaban conservar la misma base de apoyo del Gobierno manteniendo al Partido Conservador, pero alejando del Gobierno "a todo competente sobre el cual pesara, con razón o sin ella, el *preconcepto popular de oligarquía*... algunos buenos amigos del Presidente, pundonorosos caballeros y competentes colaboradores, para así no dar a los instigadores el motivo para influir sobre el pueblo con el estímulo a que éste siempre menos sabe resistir: el odio al potentado, la inquina contra el gran señor".⁷¹

Encontrándose el Gobierno bajo el embate de intereses antagónicos, paralizado frente a la situación económica y con unas Fuerzas Armadas que eran reflejo de la crisis cada vez más grave, buscaba equilibrarse en torno a una legalidad ya resquebrajada por las tensiones sociales. En esta situación la noche del 3 de junio tuvo lugar el alzamiento del coronel Marmaduke Grove Vallejos, a la cabeza de la Fuerza Aérea, que derribó al Gobierno para colocar en su reemplazo a una Junta Revolucionaria.

Conviene detenerse a examinar cómo se desencadenaron los acontecimientos con el propósito de aclarar el significado político de la figura del coronel Grove, que tantas proyecciones tendría en la estructuración del movimiento socialista.

De acuerdo con un folleto inédito titulado *¿Por qué cayó Grove?*, impreso por esos días, es posible tener una imagen de la conducta de este militar, de su pensamiento y conexiones políticas:

"Se ha propalado por la reacción... que el coronel Grove traicionó con su actitud revolucionaria al presidente Montero. Los hechos demuestran abiertamente lo contrario. Por ese mismo tiempo y por más de dos meses el coronel Grove se sentía en el deber de informar al señor Montero de la situación de desgobierno absoluto, del clamor general, del descontento que se agigantaba por la falta de medidas encaminadas a detener el hambre y la miseria espantosa que azotaba al pueblo; le hizo ver que los ibañistas repudiados, aprovechándose de esta situación de descontento, preparaban un golpe, contando con la ayuda inconsciente de los desamparados que aspiraban de cualquier modo terminar con el régimen oligárquico e indiferente que encarnaba el señor Montero; le habló de la necesidad imprescindible de encaminar su Gobierno hacia un régimen de mayor justicia y

⁷¹ A. C. Bravo, ob. cit., p. 51.

equidad social. Desgraciadamente los palaciegos, que viven de intrigas y siembran odios, ayudaron a creer que la sana intención del coronel Grove se alzaba con visos de caudillismo.”⁷²

En conocimiento Grove de las maquinaciones de los ibañistas por exaltar al poder a don Carlos Dávila, exembajador de Ibáñez en EE.UU., quien reiteradamente había buscado su apoyo, informó de la situación al ministro de Defensa; pero confundido el Gobierno de que se tratara de un caudillismo de avanzada, procedió a destituirlo de su cargo de Director General de los Servicios Aéreos. Desengañado, Grove optaba por retirarse del servicio “cuando un grupo de oficiales que sustentaban como él los principios que más tarde habrían de llevarlo al Gobierno” le pidieron reiteradamente que no abandonara su cargo, expresándole que los jefes de la Aviación, a quienes el Gobierno había designado para sucederle, se negaban a aceptar, y que la oficialidad estaba dispuesta a acompañarlo para implantar el régimen que en esos momentos se perfilaba como la salvación del país. “Grove aceptó asumir la responsabilidad del momento y ordenó que se constituyera El Bosque en Cuartel General de las Fuerzas Revolucionarias Socialistas.”⁷³

Después de algunas gestiones se pliegan al movimiento la casi totalidad de las unidades militares, exceptuando la Escuela de Aplicación de Infantería, que aparentaba cumplir órdenes del Gobierno. En circunstancias que hacían que el movimiento se difundiera, esta unidad propuso como condición para plegarse al movimiento que se incluyera a Dávila en el Frente Revolucionario.

“La hora era difícil, cualquier vacilación podría comprometer el éxito de la empresa, y aun cuando el nombre de Dávila fue objeto de seria resistencia por parte de Grove y los propulsores del movimiento . . . , hubo de aceptarse la transacción”.⁷⁴

Los acontecimientos se precipitan y la tarde del 4 de junio la Junta Revolucionaria llega a La Moneda. Con el respaldo del pueblo, que avivaba al Ejército y a Grove . . .

Cuando empezaban a cumplirse una a una las aspiraciones populares que encarnaba el Gobierno Socialista,⁷⁵ comenzaba también

⁷² ¿Por qué cayó Grove?, Anónimo, p. ? Talleres Gráficos de La Nación, s/f.

⁷³ ¿Por qué cayó Grove?, p. 4.

⁷⁴ ¿Por qué cayó Grove?, p. 5.

⁷⁵ La Junta se había propuesto, entre las primeras medidas, algunas como: a) devolución de los objetos empeñados; b) crédito a los comerciantes cuyo capital de giro fuese menor de 200,000 pesos, hasta por el 50% del activo; c) abordar el problema de la residencia y alimentación popular, y d) venta de la bencina a un precio mínimo (1 peso) el litro (Núcleo, mensual órgano de la Seccional de Valparaíso del Partido Socialista, 1º de junio de 1934: *Discurso de Grove en el Senado*, mayo de 1934).

a organizarse la conspiración para derrocar a Grove. Ésta se inició con la presión de un grupo de oficiales, encabezado por el Comandante en Jefe del Ejército, general Agustín Moreno, quien pretendió ejercer presión sobre éste para "exigirle una participación más directa en la política de la Junta de Gobierno . . . , a fin de evitar el caos a que podemos precipitarnos".

El día jueves 16 de junio, doce días después del movimiento revolucionario, se instauró la dictadura de Dávila, que derrocó a la Junta Revolucionaria.

El movimiento revolucionario que forjara la primera, pero fugaz, República Socialista de Chile y América Latina, contó con gran apoyo, que constituye una prueba combinada de todas las especies de oportunismos. Uno de los incitadores fue el propio A. Alessandri, que a través del golpe pretendía recoger el mando que había perdido Montero por un acto revolucionario. "Hombres de todas las trincheras políticas y sociales prestaron su adhesión al nuevo régimen." Como lo dijera el propio Grove algún tiempo después, el diario *El Mercurio* dio su "consabido apoyo" a los pocos días de implantarse el Gobierno Socialista, y el propio arzobispo de Santiago, a través de don Juan de Dios Morandé, manifestó "que se haría un deber de cooperar con la obra cristiana" en que estaba empeñada la Junta Revolucionaria.⁷⁶

¿Quién era Grove?

En una publicación de 1937, con motivo de la proclamación de Grove como candidato a la presidencia por el Partido Socialista (enero, 1936), se decía: "Grove significa unidad del pueblo, liberación de los trabajadores."⁷⁷

Nacido en Copiapó en 1878, ingresa a la Escuela Naval, de donde es expulsado dos años después por solidarizar con unos compañeros en huelga. Posteriormente entra a la Escuela Militar, haciendo una rápida carrera. Más tarde, la superioridad militar lo envía al extranjero en viaje de perfeccionamiento desde 1905 hasta 1910. El año 1912 ingresa a la Academia de Guerra, donde permanece hasta 1915.

Cinco años después es nombrado subdirector de la Escuela Militar, en la cual impone prácticas novedosas por su carácter democrático. Se implanta por primera vez el derecho de los alumnos de decidir en

⁷⁶ *Discurso de Grove en el Senado* (mayo de 1934).

⁷⁷ *Grove a la Presidencia* (Secretaría Nacional de Cultura y Propaganda, Partido Socialista, Santiago, 1937).

votación secreta el nombramiento de los profesores, quienes debían efectuar una exposición pública delante de una comisión *ad hoc*.

Cuando la agitación de 1920 atemoriza al Gobierno, que ordena una movilización militar, Grove la critica por inconsulta, siendo objeto de sanción por el Ministro de Defensa, don Ladislao Errázuriz, quien dispone su traslado como segundo comandante al Regimiento Miraflores de Traiguén, cargo en el cual permanece hasta abril de 1921.

En noviembre de 1924 es nombrado súbitamente comandante del Regimiento de Artillería de La Serena, hasta que el golpe del 23 de enero de 1925 lo eleva al cargo de Comandante en Jefe de la Aviación, con el título de Director General del Servicio.

Habiendo entrado en pugna con el Ministro de Defensa de Emiliano Figueroa, el general Carlos Ibáñez, es relevado de sus funciones y enviado al extranjero como jefe de la Misión de Aviación en Europa y adicto militar y aéreo en Suecia.

Después de muchas órdenes y contraórdenes, el Gobierno termina instruyéndolo para que fije su residencia en Londres. Estando allí, es exonerado por cable de su puesto con prohibición absoluta de regresar al país. Más tarde el Senado lo expulsa de las filas del Ejército.

En el año 1929 se traslada a Buenos Aires, donde se había organizado un Comité Revolucionario que preparaba una expedición libertadora. Integran ese Comité elementos como A. Alessandri, Gustavo Ross y A. Edwards, entre otros.

Grove se incorpora al Comité y en conjunto con otros parte en avión (el famoso avión rojo) hacia Chile en septiembre de 1930.

Aquí son apresados por elementos militares y desterrados a la Isla de Pascua, en la cual quedan recluidos hasta poder ser evacuados a Francia, a donde llegan un día después de la caída de Ibáñez.

Regresa Grove a Chile para ser, casi de inmediato, en febrero de 1932, designado Comandante en Jefe de la Aviación.

Un retrato del hombre en su estructura psicológica, y en su modo de apreciar y percibir los problemas, lo hace un testigo de los acontecimientos protagonizados por él, pero antagonista suyo: "Hay en este hombre, inquieto como pocos, una irreductible inclinación mesiánica. Aun en sus periodos de mayor eficacia profesional (disciplina a la jerarquía militar) no declinó jamás su afición a declamar sobre toda suerte de materias, exhibiendo llagas y señalando remedios, siempre radicales, implacables, de un notable simplismo e ingenuidad."⁷⁸ Más adelante: "Es un ejemplar curioso de revolucionario, de

⁷⁸ Ramón Vergara Montero, *Por rutas extraviadas*. Imprenta Universitaria, Santiago, 1933, p. 142.

cálida palabra, aunque vulgarísimo en la forma, que vive pontificando sobre todas nuestras miserias y sobre la urgencia impostergable de cambiar cuanto existe a nuestro alrededor. La estructura que ha de reemplazar la que ha de ser demolida, materiales, procedimientos, no le preocupan ni conturban la impetuosa corriente de su credo, más lírico que real. Hay ciertamente una rotunda desproporción entre su palabra y su acción de revolucionario. Es que a pesar de su engañoso y bravío exterior, en el fondo de su espíritu sería el buen burgués con su arsenal de sentimientos ancestrales".⁷⁹ Constantemente oscilaba "entre su tendencia espontánea hacia lo tradicional y las exaltaciones de típico hombre de pasión".⁸⁰

Importancia de Grove

Grove por su origen y formación es el prototipo del líder pequeño-burgués que hemos bosquejado.

"Sin preparación política ni ideológica, espontaneísta, mesiánico y personalista, a pesar de ello, Grove representó un papel decisivo en la expansión del socialismo en Chile... Su gravitación personal alcanzó enormes proporciones, concitándole la adhesión de diversos sectores sociales y la más absoluta lealtad de las masas desheredadas",⁸¹ lo que fortaleció al Partido Socialista, que emergía como un vasto movimiento "agrupando en sus filas a los obreros, campesinos, estudiantes, empleados, profesionales, pequeños agricultores, industriales y comerciantes, oprimidos por la dictadura de la oligarquía nacional y la explotación imperialista".⁸²

El Partido, con el auge del movimiento desencadenado por Grove, experimenta alzas extraordinarias. En 1932 tiene el 2.9% de la votación, subiendo al 14.7% en 1937, para llegar al 23.1% en 1941; comienza a declinar en 1945, cuando obtiene solamente el 7.2% de los votos. Esta oscilación electoral es interesante contraponerla con la experimentada por el Partido Comunista, que en 1937 tiene sólo el 4.1% y en 1941 el 11.8%; pero que, en cambio, estabiliza su votación en un 10.5% en 1945.⁸³

Lo dicho marca la diferencia cualitativa entre un partido aluvio-

⁷⁹ Ob. cit., p. 143.

⁸⁰ Ob. cit., p. 144.

⁸¹ J. C. Jobet, Rev. Arauco Nº 69, octubre, 1965.

⁸² *Grove a la Presidencia* (Sec. Nacional de Cultura y Propaganda, P. Socialista, Santiago, 1937).

⁸³ Ricardo Cruz Coke, *Geografía electoral de Chile*, Ed. del Pacífico, Santiago, 1952.

nal, incapaz orgánicamente de retener el caudal desencadenado por sus líderes, y un partido orgánico, cerrado, en que cada paso es una consolidación del anterior.

Grove precipita un movimiento con indudables características multiclassistas. Es un componente de la alianza entre grupos medios y "la clase trabajadora emergente", por obtener participación en el poder político, tal como ya estaban haciéndolo otros sectores medios, como los radicales y los demócratas. El compromiso posterior del Partido Socialista, al ceder en su política para elegir la línea del Frente Popular (1936), representó el predominio de estos sectores que, apoyados en los obreros, se alzan hasta el poder. Todo lo cual fue posible gracias a la fuerte gravitación que tenían en el mismo seno del Partido, aunque en la etapa que hemos llamado grovismo pudo elegir una alternativa que significara no girar en torno de los sectores medios. La contradicción entre el plano ideológico y social de sus dirigentes se hizo evidente, culminando con la frustración del movimiento socialista que se iniciaba.

El grovismo representó el germen de un movimiento social que descargado del peso de sus liderazgos pequeñoburgueses pudo desafiar objetivamente, y que en un momento desafió, al poder oligárquico. Fue el periodo de la formación del Bloque de Izquierda, que desaparece para ser reemplazado por la fórmula Frente Popular.

La canalización del grovismo por el Partido Socialista crea las condiciones para el desarrollo de una fuerza política ajena a las prácticas tradicionales, y libre de las "ramas de la oligarquía", entre las cuales ya se encontraban operando partidos como el Radical y el Demócrata. Entre los años 1932 y 1938 poseía el Partido Socialista el respaldo más poderoso que partido alguno de la clase obrera haya tenido nunca en Chile, como lo demuestra su extraordinario crecimiento electoral.⁸⁴ "Poseía aquella mística fervorosa y espontánea en las masas que fue llamada grovismo y que permitió al Partido penetrar en todos los sectores de la tierra, bajar a los piques de las minas, recorrer las pampas, subir los riscos, y llegar hasta donde hubiera un hombre que deseara un poco de justicia y bienestar. Eran años de encontrada lucha por la organización de un Partido de la clase obrera".⁸⁵

Faltaba encontrar el equilibrio entre un liderazgo de masas y un partido con sólida base de clase. Pero en un país como Chile, con tendencia a un claro predominio de las fuerzas mesocráticas, los liderazgos de masas se afianzan por su arraigo en las capas medias.

⁸⁴ Ver datos aumento electoral, pp. 81-82.

⁸⁵ II. Mendoza. *¿Y ahora qué?*, p. 179.

Esta circunstancia facilita que aparezcan líderes sin control de los partidos con base social homogénea entre los trabajadores, o que, si lo están, lleguen a adquirir suficiente autonomía como para doblar la línea de las organizaciones partidarias. Por eso una política consecuentemente clasista lleva en una primera etapa a un aparente aislamiento, mientras se consolida la organización política como expresión de la clase; para después, en posesión de la fuerza que proporciona un respaldo consciente y organizado, llegar a través de liderazgos propios, a alianzas con otras fuerzas.

Las tendencias mesocráticas asumen tal gravitación que frustran este proceso imponiendo a los líderes de masa.

Durante el periodo que analizamos, ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista estaban en condiciones de una alianza. El primero, porque sirvió de organización a un liderazgo pequeñoburgués, que habría podido cumplir una misión histórica de trascendencia de haber tenido en el Partido un contrapeso; es decir, en la medida que el Partido hubiese sabido y podido transformar el aluvión en una fuerza social y política activa. Por su parte, el Partido Comunista se encerró en una política de poder estrecha que confundió el fortalecimiento del Partido con el de la clase, precipitándose en una alianza en que los trabajadores no podían avanzar sino a través de una consolidación de liderazgos pequeñoburgueses.

La articulación de una política popular sobre estas bases estaba destinada a asfixiar en vez de encauzar las potencialidades contenidas en el movimiento social que se había desencadenado personificado por Grove.

EL COMPROMISO SOCIALISTA

El Partido pudo precipitar la constitución de una alianza diferente, centrada, no en las capas medias, sino en los sectores de trabajadores. Sin embargo, cedió a la participación inmediata en el ejercicio del poder forzado por una coyuntura internacional muy compleja: la lucha contra el fascismo.

Cabe preguntarse, en todo caso: ¿cómo una concepción nacionalista y latinoamericana se plasmó en una efectiva dirección política del movimiento popular en ascenso?

El Partido Socialista, que había defendido esta posición como un rasgo distintivo, elude su mandato histórico de apoyarse en la fuerza del grovismo para conducirlo a niveles superiores de conciencia, reemplazando una auténtica dirección política de masas por el predominio de liderazgos pequeñoburgueses.

Volvemos aquí a lo señalado reiteradamente: la disyuntiva del movimiento popular se definía entre una política de profundización y oposición al sistema de dominación vigente, o de alianzas. La primera disyuntiva suponía una sustitución en el carácter y bases de los liderazgos; la segunda, un afianzamiento de los mismos líderes pequeño-burgueses que venían dominando la escena en los últimos años.

El Partido Socialista, en vez de mantener intransigentemente la candidatura presidencial de Grove, como núcleo de reagrupamiento de los trabajadores, y llegar a forjar una fuerza de ruptura del *statu quo*, concilia, ante la presión de radicales y comunistas, retirando a Grove.

Con ello elegía una acción política en contradicción con las posibilidades objetivas que se le presentaban de haber seguido en el rumbo del grovismo. En vez de orientarse por una política de polarización social y esclarecimiento ideológico, prefirió capitular ante la fuerza que propugnaba conquistar el poder político dentro del orden establecido.

La capitulación resultaba de haber aceptado, ya en 1936, la línea frente-populista que hizo posible que el grovismo sirviera para que crecieran partidos como el Radical y el Comunista; impidiendo que esa masa que instintivamente había llegado hasta el Partido Socialista pudiera ser organizada y guiada políticamente. El grovismo fue reemplazado por el frentismo. Un movimiento social de abierto desafío al orden institucional por un movimiento orientado al compromiso con el sistema de dominación vigente.

La entrega de la candidatura de Grove y el rompimiento del Bloque de Izquierda provocaron en el socialismo una oposición de izquierda que pocos años después culmina con la corriente inconformista; tendencia crítica que se margina del Partido después de expresarse con violencia en el IV Congreso Ordinario, celebrado en diciembre de 1939.

El inconformismo cita a un Congreso Extraordinario, en mayo de 1940, fundando el Partido Socialista de Trabajadores, como oposición a la línea colaboracionista. Se encamina a recuperar la militancia para el socialismo a fin de darle contenido, forma y expresión revolucionarios. Se coloca en una posición de tajante antagonismo con la política de conciliación practicada por los partidos Socialista, Comunista y Radical. Sin embargo, no supo perseverar en su lucha para impulsar el desarrollo de una conciencia política de nuevo contenido, porque, ante el temor de quedar sin representación parlamentaria en el Congreso, presenta candidatura a la elección parlamentaria de 1941. Habiendo solidarizado con la Unión Soviética cuando fuera

atacada por Alemania, le significa el apoyo electoral del Partido Comunista. Así, después de tres años de su nacimiento, cae en las mismas prácticas electorales que repudiara, lo que parece ser el destino implacable de todos los grupos políticos que se someten al sistema para romperlo pero que terminan afianzándolo.

POSICIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA FRENTE AL

GROVISMO

Durante los acontecimientos que se precipitan con la caída de Ibáñez, el Partido Comunista se encuentra afectado por las discusiones surgidas en el seno del comunismo soviético, que provocan su división interna en dos fracciones: una encabezada por Lafertte, representando el partido oficial, reconocida por la Internacional Comunista y que impone su política frente-populista como resultado del llamado "gran viraje"; y la otra, denominada fracción Hidalgo, que constituía la izquierda comunista de orientación trotskista, se encamina hacia la constitución del Bloque de Izquierda, a cuya formación contribuye también en medida importante el Partido Socialista.

Cada una de estas fracciones se arroga la representación de la Internacional, produciendo confusión entre sus militantes y frustrando la posibilidad de que el Partido se transforme en una organización de masas e influya en los acontecimientos. Ya nos habíamos referido al hecho de que la marejada producida después de la caída de Ibáñez, al no existir organizaciones populares capaces de encauzarla, dió nacimiento al movimiento civilista que capitaliza la derecha. El Partido Comunista facilita este proceso cuando las dos fracciones levantan candidaturas presidenciales en 1931, que abren las puertas para el triunfo de Montero.

No obstante, la actitud de la fracción Hidalgo frente al movimiento iniciado por Grove, después de 1932, se orientó hacia la unificación de las corrientes más avanzadas; mientras que la fracción de Lafertte se opuso. Sostenían los primeros que "desperdiciar la popularidad del nombre de Grove era favorecer por un largo tiempo la derrota de la revolución socialista", pues el 4 de junio había representado "el primer grito del parto violento de la revolución proletaria". La candidatura de Grove de 1932 surgía entonces como la de mayor incentivo para crear a través de ella un poderoso movimiento revolucionario, lo que no es aprovechado, entre otros factores, porque la fracción Hidalgo fue incapaz de capitalizar la efervescencia de las masas en virtud de su debilidad orgánica.

En lugar de integrarse a este movimiento para hacer posible el desplazamiento del núcleo oligárquico y de sus aliados mediante la sustitución de la capa dirigente pequeñoburguesa, el Partido Comunista (fracción laferrista) se aisló, acusándolo de pequeñoburgués.

La crítica, justa desde el punto de vista ideológico, no se traducía en una conducta adecuada de las vanguardias políticas que, con una base social homogénea entre los trabajadores, pudieran desmontar esos liderazgos afincados en el movimiento popular.

La base teórica de la crítica estaba contenida en un Informe del Buró Sudamericano de la Internacional Comunista, donde se decía “que las agrupaciones pequeñoburguesas . . . que no representan nada en Chile, entrañan sus peligros muy grandes, ya que intentan por todos los medios encabezar el movimiento espontáneo de las masas; y agregaba: “todas las agrupaciones pequeñoburguesas, que buscan adaptarse a la radicalización de las masas, toman la ideología trotskista para combatir con toda fuerza la formación del partido de clase del proletariado”.

Preocupado por liberar a las masas populares de los líderes pequeñoburgueses (Hidalgo, Mendoza, de tendencia trotskista; Ugalde y otros, de afiliación socialdemócrata; Grove, socialista) se olvidó de las masas, dejándolas liberadas al espontaneísmo de estos liderazgos, que el Partido Socialista, por debilidad orgánica y contradicciones internas, no sería capaz de corregir.

De este modo el Partido Comunista sacrifica la constitución de un movimiento popular centrado en la clase obrera y en el campesinado, precisamente por una alianza con la pequeña burguesía. Es exactamente la crítica que se formulaba, pocos años antes, por el Buró Sudamericano a las fracciones extremistas de la pequeña burguesía cuando afirmaba que para “descomponer la verdadera base de la revolución (alianza de obreros y campesinos) se apoyan en la teoría menchevique de Trotsky de que el proletariado es capaz de realizar la revolución sin la alianza con las masas campesinas explotadas”.⁸⁶

Cuando el Frente Popular llega al poder, el movimiento campesino es frustrado en sus potencialidades, quedando reducida la base social de apoyo a la clase obrera.

Los obreros representaban sólo el 16.8% de la población activa contra un 34.5% de los campesinos. Esta debilidad numérica de la clase obrera adquiere dimensiones mayores cuando se compara con la enorme proporción de población activa en el sector de servicios (48.7%), que, directa o indirectamente, es parte del aparato estatal,

⁸⁶ *Las grandes luchas del proletariado chileno* (Tesis del Buró Sudamericano de la Internacional Comunista). Ed. Marx-Engels, Santiago, 1932.

o depende de su funcionamiento. Sus mismas características hacen que, objetivamente, no pueda asumir una conducta política respaldada por una clara y madura conciencia de clase; por el contrario, su tendencia será siempre obtener las mayores ventajas dentro del *statu quo*.

La gravitación de estos sectores sociales constituye el trasfondo determinante en su inercia de acomodación al orden establecido, que no podía ser contrarrestada sino a través de una dirección política forjada a partir del propio movimiento de obreros y campesinos. Los primeros, a pesar de su fuerte organización sindical, carecían de significación numérica y no salían todavía de sus fuertes pugnas internas.

El campesinado, la otra fuerza para contrastar el peso de esta pequeña burguesía, permaneció marginado por decisión de los propios partidos populares por las razones ya expuestas.

EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR

El proceso histórico que hemos descrito culmina con el Gobierno del Frente Popular. Se manifiesta en diversas formas. Los intentos de recuperación del poder por la derecha, apoyada por sectores componentes del Gobierno, una vez elegido Aguirre Cerda; la permanencia en puestos claves de la administración del Estado de personeros al servicio de una política antipopular; la incapacidad de la combinación de Gobierno por tomar un control efectivo del aparato estatal; las contradicciones de la política campesina, y la significación que tuvo para el surgimiento de un nuevo clima ideológico y cultural, fueron algunas de sus expresiones.

Después de su fracaso golpista, con el conato del general Ariosto Herrera, pasa la oligarquía a la ofensiva para destruir por dentro al Gobierno intentando la imposición de un gabinete de centro integrado por radicales, liberales y demócratas. El propósito es promover una política de centro que anule el triunfo de octubre, a través de "un ministerio integrado por el rossismo,⁸⁷ por personeros de los terratenientes, de la banca y de los consorcios imperialistas en contubernio con una fracción del Partido Radical".⁸⁸ De haber triunfado esa política se habría provocado una división de la combinación de Gobierno.

Lo sintomático de este hecho es que ya se aprecia que "hay una

⁸⁷ Gustavo Ross, ex ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, y candidato a la presidencia por la derecha en las elecciones de 1938.

⁸⁸ *Rumbo*, noviembre, 1939, núm. 6.

fracción del radicalismo que comienza a abdicar o ha abdicado ya de los postulados que fueron la base del triunfo de octubre”, y que opta por entenderse con la derecha.

El entendimiento es protagonizado no sólo por elementos derechistas del P. R., sino además por elementos bajo su órbita de influencia y altos funcionarios mantenidos en cargos de influencia política, con la anuencia de ministros, a pesar de su claro compromiso con los partidos de la oligarquía. Así es como el Comité Central del P. S., en enero de 1940, denuncia el hecho de que las derechas conservaron más del 50% de los cargos fiscales y semifiscales, lo que hace que “numerosos funcionarios enemigos del régimen continúen todavía en sus puestos haciendo obra de zapa y de desprestigio clandestino contra el Gobierno”.⁸⁹

Todo lo cual imprime al proceso una gran lentitud. No sólo la oligarquía sabotea. Las principales iniciativas son también simultáneamente obstruidas por elementos emboscados en el Frente Popular.⁹⁰ Ello confirma el juego político que activan sectores medios enquistados en el aparato estatal, ya sea que provengan de la anterior administración o del Gobierno del Frente Popular, en cuanto a servir los intereses de la gran burguesía. Son parte de esas capas que usufructúan del servicio a las clases poseedoras de los bienes de producción, pero cuya base material está determinada por la superestructura institucional. Al pertenecer al engranaje del poder, aunque sin participar efectivamente en su ejercicio, son impulsadas por la inercia de obtener ventajas del sistema. Es por eso que su comportamiento asume los caracteres oportunistas de todas las capas determinadas por sus intereses para ascender social y económicamente. No es de extrañarse, entonces, que teniendo una fuerte gravitación, tanto dentro como fuera de los partidos del Frente Popular, promuevan entendimientos con la derecha y faciliten las maniobras de ésta por neutralizar la política gubernativa. En este sentido, en el órgano oficial del Partido Socialista se formularon claras advertencias sobre la necesidad de “terminar con la complacencia reverencial que hombres de izquierda han adoptado en el Gobierno y fuera de él para con los elementos de la reacción”;⁹¹ o aquella otra acerca de los personeros de la derecha introducidos en la izquierda para promover dificultades y fomentar la destrucción de la unidad, “como son aquellos viejos políticos gastados en el arte de la cábala que entor-

⁸⁹ *Rumbo*, enero, 1940: Declaración del Comité Central del Partido Socialista.

⁹⁰ *Rumbo*, febrero, 1940: Luis Zúñiga.

⁹¹ *Rumbo*, febrero, 1940.

pecen (desde un sector del radicalismo) todo impulso de alcance social beneficioso para las masas.⁹²

Este cuadro de infiltración del Gobierno por instrumentos de la derecha, a través de los cuadros de esta pequeña burguesía ambivalente, determina que el Gobierno vaya tomando una orientación confusa y las críticas se vayan sumando.

Después de un año de gobierno el balance de la situación podía resumirse en aspectos como los siguientes: altos precios de los alimentos y arriendos; cesantía provocada por los despidos; permanencia intacta de los monopolios; acción impune de los especuladores; persecución de campesinos y bajos salarios en las faenas agrícolas; y, por último, desigualdad en los sueldos de la administración pública, no habiéndose adoptado medidas que establezcan un tope a éstas, conservando sus posiciones los "grandes duques" y persistiendo la práctica de acumular cargos y sueldos. Es así como proliferan las críticas.

En noviembre de 1939, un analista político observaba la debilidad intrínseca de la política del Gobierno en virtud más que todo de su falta de política. "En la época del imperialismo, esperar que exista una política que logre combinar los intereses de los explotadores con los de los explotados . . . , es tanto como esperar el santo advenimiento de la revolución." Y se preguntaba: "¿Dónde está el poder . . . para ir a la liquidación de los monopolios, dónde está la intervención del Estado en aquellas industrias vitales para la población, como la del azúcar, paño, carbón, papel, cemento, etcétera?"⁹³

Pero las vacilaciones del Gobierno eran reflejo de su propia composición social.

Una excelente ilustración de lo que decimos lo constituye un examen de las políticas económica, agraria y educacional, del Frente Popular, que continuaban enmarcadas en el molde "liberal burgués".

A pesar de que las leyes permitían controlar a los grandes monopolios industriales, haciendo uso de mecanismos tales como la fijación de derechos aduaneros,⁹⁴ determinación de las cuotas de divisas sobre el exterior, etcétera, cualquier posible intervención contaba con la cerrada oposición del ministro de Hacienda, don Roberto Wach-

⁹² *Rumbo*, febrero, 1940.

⁹³ *Rumbo*, noviembre, 1939: Humberto Mendoza.

⁹⁴ No nos atrevemos ni siquiera a pensar lo que habría significado la aplicación del Decreto Ley núm. 520, de agosto de 1932, que ha sido el instrumento utilizado por el actual Gobierno de la Unidad Popular para intervenir, requisar y expropiar industrias.

holtz, quien además mantenía en cargos importantes del Ministerio a funcionarios de confianza del régimen anterior.⁹⁵

La política financiera hacía el juego a los intereses bancarios. Así el aprovechamiento de los encajes bancarios propiciados por el Ministro constituía de hecho una emisión de papel moneda a largo plazo, con lo cual se acrecentaba el ritmo de desvalorización monetaria. La política de consolidación de las emisiones a largo plazo, mediante su colocación en bonos y acciones, fue resistida fundamentalmente porque suponía, entre otras medidas, una rebaja general de la tasa de interés bancario y un Plan Coordinado y definido por parte del Gobierno. En su reemplazo se continuó con la política de emisión de los gobiernos anteriores, de Montero y Alessandri, llegando el circulante emitido a constituir una fuerte presión inflacionaria. Como antecedente, puede decirse que el 92% del circulante en Chile correspondía a papel moneda emitido a largo plazo.⁹⁶

La orientación impresa a CORFO correspondía al mismo criterio de prestar dinero a los grandes inversionistas o a las firmas con título nacional y dependencia extranjera. Son los primeros pasos de una política que después se ha continuado, de transformar a CORFO en el gran instrumento de apoyo para levantar, con recursos estatales, complejos industriales que más tarde serían traspasados al sector privado.⁹⁷

⁹⁵ Los señores Roberto Vergara, Desiderio García, Julio Pistelli y otros, "los mismos que han conspirado y han tratado de precipitar el gabinete de Centro" (*Rumbo*, noviembre, 1939), y que se habían desempeñado como consejeros de Gustavo Ross.

⁹⁶ El papel moneda en circulación en 1870 representaba el 2% del circulante total existente a principios de 1939, siendo el aumento entre ambos años de un 4.300%, es decir, aumentado en 50 veces. *Rumbo* (octubre, 1939, núm. 5: Mario Antonioletti.)

⁹⁷ La lista de acusaciones en contra del ministro Wachholts cubría toda una vasta gama: a) continuador de Gustavo Ross, o sea, de los designios de los bancos nacionales y extranjeros; b) instrumento de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo; c) agobiar a la agricultura con los altos intereses bancarios; d) organizador de la COPEC, que nace a la vida de los negocios en pago de servicios políticos prestados a Ross por miembros de las ex milicias republicanas; e) no ayudar a la minería del Norte, paralizada por la falta de fletes para los centros consumidores por causa de la guerra mundial, a través de aportes fiscales respaldados con la propia producción minera, tal como se practicara el auxilio fiscal salitrero el año 1920; f) mantención de connotados rossistas en la administración del Gobierno, incluso en cargos representativos, como el caso de Mariano Riveros, en calidad de representante de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo en Europa; g) aceptar imposiciones del presidente de los grupos salitreros controlados por los hermanos Guggenheim, Medley Whelpley, cuando vetó la designación del diputado Pedro Opitz para Director Fiscal, en la Corporación; y finalmente, h) propiciar la ideología de "hacer gobierno de izquierda con hombres de derecha" (*Rumbo*, enero, 1940); "representar la penetración derechista en las altas esferas del Estado" (*Rumbo*, noviembre, 1939); "querer identificarse con los elementos de las clases privilegiadas de Chile... en vez de mantenerse adicto al pueblo, que es de donde viene" (*Rumbo*, noviembre, 1939).

Sin embargo, es la política agraria la que mejor ilustra sobre el carácter ambiguo del Gobierno.

Su hito más significativo es la celebración del Congreso de Agricultores que se llevó a cabo en Santiago con la participación de varios ministros del Gabinete.

Después del 25 de octubre los hacendados habían tenido un momento de estupor y desconcierto porque creyeron de buena fe . . . que empezaría el reajuste social, tan temido. Tal cosa quedó de manifiesto al leerse el acuerdo del Consejo de la SNA del 17 de abril de 1939, que decía: "el acuerdo tomado el año anterior de organizar un Congreso de Agricultores quedó su cumplimiento suspendido por la situación política".

Estabilizada la situación, se deciden a actuar.

"Hoy, ante la urgencia y gravedad de las situaciones que se han producido en las labores del campo, ha acordado (la SNA) realizar el Congreso" (acta del 17 de abril de 1939).

Las situaciones graves a que se refiere el acta son las reuniones que los campesinos han tenido para organizarse, defenderse y detener el boicot de los propietarios. Éstos habían iniciado una reducción de la superficie sembrada de cereales, despido de grandes cantidades de campesinos, fichaje de obreros agrícolas, para cerrarles las puertas de los fundos, etcétera, como represalia al triunfo de octubre, a lo que los trabajadores respondían organizándose.

El Congreso de Agricultores había sido convocado específicamente para presionar "en contra de los derechos sindicales de los trabajadores", y obtener del Gobierno un decreto de suspensión de la tramitación de la constitución de sindicatos legales. El Gobierno se doblegó ante la presión "para no perturbar la plácida digestión de los caballeros propietarios de la tierra", según las expresiones de Emilio Zapata, diputado y dirigente campesino socialista.

El planteamiento de los agricultores objetaba que, dentro del régimen sindical del Código del Trabajo, los trabajadores del campo tuvieran derecho a sindicalización, porque ese derecho se reconocía sólo a los obreros de la ciudad. Los dirigentes de izquierda replicaron que la Ley lo habría dicho en forma textual como lo hizo al referirse a los obreros que prestaban sus servicios al Estado, a las municipalidades o en empresas fiscales. El problema no consistía, por tanto, en negar el derecho a sindicalizarse de los campesinos, sino en adecuar las disposiciones del Código del Trabajo "a las modalidades propias y diferenciales del trabajo agrícola". De ahí, entonces, que la respuesta del Gobierno debía ser dictar un decreto reglamentando la constitución y funcionamiento de los sindicatos agrícolas. Sin

embargo, se transó con el argumento de que una mayoría parlamentaria opositora obstruía e incapacitaba al Gobierno para cumplir con el programa levantado como bandera para la conquista de la presidencia, en un esfuerzo por eliminar las asperezas entre posiciones sociales antagónicas.⁹⁸

En el mismo sentido anterior, es digno de mención el discurso de Bernardo Ibáñez, Secretario General de la CTCH, pronunciado en noviembre de 1939. En su discurso, el máximo dirigente sindical hace un llamado a los propietarios agrícolas para que tengan frente a la masa de trabajadores “una actitud de tolerancia y comprensión, guardando con los trabajadores consideraciones elementales y estableciendo relaciones más humanas”, para evitar la beligerancia de clase que los propietarios tratan de suprimir mediante métodos de fuerza; y agregaba: “mientras mayor sea la resistencia patronal a repeler el derecho de organización campesina . . . , más lejos se hallarán los señores agricultores de la armonía social que propugnan en las palabras”.

Los paliativos para suavizar los antagonismos sociales, la transformación del sindicato en un mecanismo para obtener ventajas, dentro del orden establecido, y la sumisión a la ideología hegemónica, parecen ser ingredientes dominantes en la ideología de lucha de los dirigentes de izquierda. ¿Acaso no es buen arquetipo de los liderazgos predominantes? ¿O respondía a un estado en la evolución de la conciencia de clase en el periodo histórico que se trata? ¿Dónde están los contraideólogos surgidos del seno mismo del movimiento popular?

El campesinado fue transado porque todavía los agricultores constituían un soporte básico del sistema de dominación. El traspaso hacia los sectores industrial y comercial de sus intereses por la clase dominante estaba recién en sus comienzos.⁹⁹

La educación, por su parte, continúa sometida a los cánones liberales. No se introducen modificaciones y sigue entregada a la tuición de hombres adversos al nuevo régimen. Tanto es así que en la IV Convención de la Unión de Profesores de Chile se solicitó (aunque

⁹⁸ A. Chelén R., *op. cit.*, pp. 76 y 199.

⁹⁹ Llegaba la población rural, en diciembre de 1939, a 2 168 224 habitantes, contra 2 119 221 de población urbana. Los campesinos pobres sumaban más o menos 300 000 familias, llegando los inquilinos y medieros a unas 103 000 familias.

En cuanto al salario campesino, éste fluctuaba de 60 centavos diarios a 2 pesos cincuenta. El goce de una cuadra de siembra representaban entre 200 y 500 pesos anuales. La alimentación podría evaluarse en 1 peso por día. La suma de jornales más regalías daba un salario medio equivalente a 4.50 pesos diarios. Si consideramos el promedio disponible para la vida de cada persona dependiente del trabajo del campesino, no alcanza a 1 peso diario (*Rumbo*, noviembre 1939).

sin éxito por la oposición de radicales y comunistas) la expulsión del ministro de Educación (Ortega Masson) por amparar a funcionarios de confianza del equipo Alessandri-Ross, todavía enquistados en la buracracia del Ministerio, con los cuales "no se podía pensar en impulsar escuelas renovadas y (menos) educación popular"; además de distinguirse como perseguidores de los maestros durante la administración anterior.

En relación al control que sectores provenientes de la administración anterior continuaban ejerciendo sobre el sistema educacional, es preciso destacar las consecuencias de este hecho.

El control del grupo dominante sobre los resortes de la educación integral¹⁰⁰ se manifiesta en una orientación alienadora de ésta. La educación aparece muy claramente como instrumento que coadyuva a la legitimación de las relaciones de poder, disfrazadas por la presencia de aquellas capas medias que se ubican entre los sectores de trabajadores y el núcleo oligárquico.

El alto porcentaje de jóvenes obligados a continuar estudios humanísticos, "por la falta de un organismo gubernativo encaminado a difundir los conocimientos técnicos de la industria moderna",¹⁰¹ no es casual. Responde a una desviación ideológica de la educación que así contribuye a aliviar las presiones sobre la estructura económica que se manifiestan en demanda cada vez mayor por ocupaciones calificadas, que no podía satisfacerse por la falta de perspectivas industriales.

Pero no se limita a cumplir este papel. Estimula también el arribismo, entendido como aceptación de la ideología dominante, a través de la tendencia a la movilidad social individual, que acelera la pérdida de cohesión interna del grupo, facilitando de ese modo ser absorbido por el sistema. Lo anterior adquiere mayor trascendencia cuando la movilidad se orienta de acuerdo con los patrones de prestigio dominante, hacia las ocupaciones en la administración pública controladas por el grupo dominante y financiadas por el Estado.

El joven que entra a un sistema educacional llamado a cumplir estas funciones aprende una cultura abstracta, que lo induce a desarrollar una sobreestimación personal que lo aleja de su propio origen "y lo hace ambicionar ocupaciones burocráticas", o "una situación económica brillante al amparo de las fortunas burguesas".¹⁰²

Es importante destacar este aspecto porque ningún movimiento popular que pretenda cambios profundos es tal si no es capaz de

¹⁰⁰ *Rumbo*, febrero 1940.

¹⁰¹ *Rumbo*, febrero 1940.

¹⁰² *Rumbo*, febrero 1940: Meynestrel.

forjar a la vez su propio movimiento cultural. En tal sentido cobran plena vigencia las palabras de Gramsci de que las clases deben expresarse a través de sus propios "intelectuales", y romper con la categoría de los que, provenientes de las fluidas capas medias, abrazan cualquier ramaje ideológico, pero siempre sujetos al tronco de la ideología dominante.

¿Dónde se encuentra la nueva política cultural y educacional del Gobierno del Frente Popular? ¿Qué nuevos canales se abren para que los jóvenes puedan emanciparse de la ideología dominante?

Lo anterior proporciona una descripción bastante expresiva, aunque en ningún caso exhaustiva, de la significación concreta que adquirirían las políticas del Gobierno del Frente Popular, de sus contradicciones y vacilaciones, ambivalencias y tentativas de equilibrio.

Pero allí maduraron los gérmenes de un proceso que ha vuelto a aflorar con vigor renovado, en una coyuntura que le abre distintas perspectivas históricas.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones se pueden agrupar en dos clases: primero, las que se refieren a estructura de poder y alianza de clases; y segundo, las que están referidas específicamente al carácter, papel y orientación del movimiento popular chileno.

A. Conclusiones sobre estructura de poder y alianza de clases

1. El Estado fue estructurado por la clase dominante, como un instrumento de desarrollo, desde mediados del siglo XIX; sin embargo, su carácter contradictorio le impidió continuar en esa dirección. La contradicción consistió en que siendo básicamente de carácter comercial estaba orientada principalmente hacia el mercado nacional o internacional, por lo que cualquier nueva actividad productiva que iniciara estaba desde su partida marcada por el hecho de ser complementaria de su actividad comercial.
2. La función proteccionista del Estado pudo desarrollarse hasta el momento en que las actividades de exportación insertaron la economía del país en una economía internacional, en razón de la apertura de nuevos mercados que, además, tuvo como consecuencia que la propia clase dominante se insertara en una alianza de clases que sobrepasaba los límites nacionales.

3. En este proceso de ampliación del sistema de alianzas se aprecian contradicciones entre el segmento que impulsó algún tipo de desarrollo industrial (probablemente vinculado con extranjeros) y el grupo comercial, en sentido estricto, que era mayoritario y que proyectaba la tradición económica, proveniente de la Colonia.
4. Nunca hubo un intento serio de industrialización, ya que por el carácter comercial financiero del grupo dominante, su evolución debe estudiarse en el trasfondo de la gradual inserción de la economía en el mercado mundial y del consiguiente tipo de alianza con el extranjero.
5. La clase dominante reconoció diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con el rubro que constituyó la base de su comercio, pero sin que llegaran a formarse clases antagónicas.
6. La industrialización de la década del 30 es la respuesta para impulsar nuevas fuentes de producción que permitieran desarrollar actividades de intercambio en el ámbito de un mercado interno que remplazara al mercado internacional que se encontraba en crisis.
7. Este proceso es impulsado por el Estado, financiado por una vasta capa de sectores medios y de trabajadores. El Estado está al servicio del propio desenvolvimiento del grupo dominante, tal como lo fuera en el siglo pasado cuando facilitara las tareas de exportación.
8. La utilización de la maquinaria estatal ejerce su propia dinámica, porque condiciona el surgimiento de toda una gama de grupos vinculados al funcionamiento de su estructura y a los servicios que presta. El problema entonces de la alianza dominante es impedir que la dinámica del Estado determine la emergencia de uno o más sectores que le disputen su control.
9. Este conflicto potencial es resuelto a través de una constante incorporación de nuevos sectores, para así ampliar la base social de sustentación de la alianza dominante, lo que es posible sólo en virtud de un entendimiento con el imperialismo. Desde este punto de vista, la industrialización de los años 1930-40 constituye una modificación en las bases económicas de la alianza que facilita la inclusión de nuevos grupos.
10. El problema político central es definir una alianza de clase forjada fuera de la alianza dominante para que pueda enfren-

társele. El primer germen de esta alianza con el Frente Popular no fructificó, por cuanto los sectores medios fueron absorbidos y muchos trabajadores promovidos a esta condición (para lo cual el sindicato y el partido fueron instrumentos eficaces).

B. Conclusiones relacionadas con el carácter y orientación del movimiento popular

1. Durante la década del 1930 se puede apreciar el surgimiento de grandes movimientos de masas, que no encontraron una vanguardia política capaz de hacer la inversión ideológica necesaria para transformar a esas masas en protagonistas de los cambios que en ese momento fueron esbozados.
2. Se evidencia una ideología sin la capacidad política consecuente. Por primera vez se manifiesta el fenómeno de disociación, entre un pensamiento ideológico y una voluntad de acción política. Mientras por un lado se efectuaban los análisis justos que el momento exigía, por la otra se caía en la turbulencia de la política contingente, sin perspectivas y distorsionándose el potencial revolucionario de las clases populares.
3. Desde entonces el movimiento popular chileno ha caído en una ininterrumpida serie de retrocesos tácticos que, de hecho, han frustrado cualquier estrategia definida conceptualmente por dirigentes que, casi nunca, han podido conciliar la idea con la *praxis*.
4. Durante esa década se dieron las condiciones para la iniciación de un movimiento popular revolucionario, que se ha tratado de reiniciar en diversas oportunidades posteriormente, siempre bajo el impulso de las mismas fórmulas ideológicas ya planteadas en ese momento. El periodo constituyó el momento en que se dio, por primera vez, un enraizamiento de las masas con partidos de clara ideología revolucionaria, pero que no pudieron desprenderse del influjo social de los sectores medios.
5. La falta de comprensión del papel de las clases, la incapacidad para modificar la correlación de fuerzas y el predominio de una conciencia por un cambio social restringido, supeditan el ímpetu de las masas populares a un propósito meramente reformista de los sectores de clase media. El afán acomodati-

cio de los sectores pequeñoburgueses apoyados en la fuerza de los trabajadores transforma este empuje en un deseo de incorporación al sistema, estimulado por una capa dirigente que lentamente, víctima de su entendimiento con la clase media, representada por el Partido Radical, sucumbe al juego de ésta por hacerse parte de la alianza de poder dominante.

6. En ese periodo surge un movimiento popular con sello propio que se diluye en el compromiso del Frente Popular. Desde entonces esta fuerza nueva se contagi6 de todos los valores de movilidad social que se desarrollarán todavía más con la intensificación del proceso de industrialización. La tarea no emprendida ha sido recuperar esa fuerza, lo que se ha logrado sólo esporádicamente y por breves periodos.

BIBLIOGRAFÍA

- ANÓNIMO, *¿Por qué cayó Grove?*, Talleres Gráficos de La Nación, Santiago de Chile, s/f.
- Antecedentes cuantitativos sobre América Latina, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Santiago de Chile, noviembre, 1966.
- BARRÍA, JORGE, *Chile en el siglo XX* (Un ensayo de interpretación histórica), Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILARI), Santiago de Chile, 1967.
- Boletín Económico de América Latina*, vol. ix, núm. 1, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1964.
- BRAVO, ALFREDO G., *4 de junio. Festín de los audaces*, Empresa Letras, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1932.
- CONTRERAS LABARCA, CARLOS, *Unidad para defender la victoria*, Ed. Antares, Santiago de Chile, 1938.
- CRUZ COKE, RICARDO, *Geografía electoral de Chile*, Editorial del Pacífico, Santiago de Chile, 1952.
- CHELÉN R., ALEJANDRO, *Trayectoria del socialismo* (Apuntes para una historia crítica del socialismo chileno), Editorial Astral, Argentina, 1967.
- DE LA CUADRA POISSON, JORGE, *La revolución que viene*, Imprenta Nascimento, Santiago de Chile, 1931.
- Discurso de M. Grove* (Pronunciado en el Senado el 23 de mayo de 1934), Imprenta Aurora de Chile, Valparaíso, 1934.
- DOS SANTOS, THEOTONIO, *El nuevo carácter de la dependencia*, Centro de Estudios Socio-Económicos, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, Cuaderno núm. 10, Santiago de Chile, 1968.
- FALETTO Y CARDOSO, *Dependencia y desarrollo de América Latina* (Ensayo de interpretación sociológica), Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Santiago de Chile, 1967.
- FRANK, ANDRÉS G., *Chile, el desarrollo del subdesarrollo*, revista *Monthly Review*, enero-febrero, 1968.
- GODOY URRUTIA, CÉSAR, *Qué es el inconformismo*, Imprenta Victoria, Santiago de Chile, 1940.
- Informe y Tesis política del Partido Comunista* (trotskistas, Jorge Lavín, 1933).
- JOBET, JULIO CÉSAR, *Ensayo crítico del desarrollo económico y social de Chile*, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1955.

- La palabra de Oscar Schnake V. en la Convención Radical de La Serena*, Depto. de Publicaciones, Secretaría Nacional de Cultura del Partido Socialista, Santiago de Chile, 1939.
- LAGOS, RICARDO, *La industria en Chile: antecedentes estructurales*, Ed. del Pacífico, Santiago de Chile, s/f.
- Las grandes luchas revolucionarias del proletariado chileno* (Tesis del Buró Sudamericano de la Internacional Comunista), Edit. Marx-Engels, Santiago de Chile, 1932.
- Manifiesto del Partido Socialista* (enero de 1940), Depto. de Publicaciones, Secretaría Nacional de Cultura del Partido Socialista, Santiago de Chile, 1940.
- MENDOZA, HUMBERTO, *¿Y ahora qué?*, Santiago de Chile, 1942.
- PIKE, FRÉDÉRIC, *Chile and the United States*, Notre-Dame, 1963.
- PINTO, ANÍBAL, *Chile, una economía difícil*, Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
- ¿Quién dividió el Grupo Avance?*, Ed. Lucha de Clases, Colección Polémica, Santiago de Chile, s/f.
- Reforma Agraria*, Depto. de Publicaciones del Partido Socialista, Santiago de Chile, 1939.
- VERGARA MONTERO, RAMÓN, *Por rutas extraviadas*, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1933.
- Revista *Arauco*, núm. 69, octubre, 1965, Santiago de Chile.
- Revista *Rumbo* (de junio de 1939 a junio de 1940), Santiago de Chile.

EL URUGUAY EN LOS AÑOS TREINTA

*Isaac Ganón **

I. EL PAÍS Y SU GENTE

Los años treinta constituyen un periodo decisivo en el decurso historicosocial del Uruguay; a tal punto importa su conocimiento y evaluación objetivos que, de omitirlo, ni el historiógrafo ni el sociólogo podrían explicar por sus antecedentes positivos la situación del presente uruguayo.

Sería preciso, por lo tanto, considerar ese periodo en sus coordenadas aludidas, de manera que puedan verse con claridad sus condiciones de emergencia y los hechos que de ahí surgieron para constituir la coyuntura nacional de los años posteriores.

Como todo periodo histórico, su principio y su fin no son cabalmente cronológicos. Los hechos que se incluyen en él se han producido antes y terminan después de la decena temporal; eso sí, lo más próximo antes y después, ya que de otro modo desaparecería, diluyéndose en la causación general, el decurso que por su particularidad se desea tener en cuenta.

El tiempo histórico, por otra parte, pertenece a una sociedad global —en nuestro caso el Uruguay— que funciona como la unidad sociológica en proceso de cambio, entonces como antes y después. Esa unidad, como sociedad global, es un hecho social total o, para decirlo con una palabra, una estructura.

Esto quiere decir que debemos considerarla en su integridad, si bien sintéticamente; y antes que nada, en una dimensión espacial, dentro de sus coordenadas propias y rodeada de otras unidades sociológicas que son como otros tantos puntos de su historia.

Así vista, la sociedad uruguaya ha seguido un proceso de cambio cuya dirección está significada en los resultados alcanzados, ya en la década que se considera, ya posteriormente, como respuesta a las condiciones pasadas y como premisa para las manifestaciones pos-

* Profesor titular de Sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo (Uruguay).

teriores que no la rectifican en sus sentidos principales. Desde luego, la calificación de las metas direccionales ha sido cuidada, para evitar las sobrecargas especulativas y emocionales del sentido que va inevitablemente mezclado en toda operación de esa especie.

1. *La unidad sociológica*

Está constituida por la sociedad uruguaya de esos años treinta, también llamada, para abreviar o evitar redundancias, *el país*.

Las características fisiográficas del Uruguay son, desde tiempo atrás, las mismas que quedaron encerradas por sus límites con el Brasil (fijados por los tratados de 1851), con la Argentina (*statu quo* Ramírez-Sáenz Peña de 1910 y Convenio Brum-Moreno de 1916) y con el mar de su pertenencia soberana. Por esos tres términos de su historia queda configurado su territorio, una constante historico-social confirmada por la utilización de todo su suelo útil (unos 17 millones de hectáreas) desde los comienzos del siglo.

Solamente la población ha variado, aunque lentamente, hasta alcanzar, precisamente en el decenio considerado, la unidad y homogeneidad que son hoy sus características sobresalientes. La Ley de 1932, fuertemente restrictiva de la imaginación, selló formalmente lo que en los hechos estaba ya impuesto: no habría trabas para los inmigrantes que eran exiliados políticos de los países de América, pero sí se tendría exigencias para los demás, tanto más duras cuanto más alejados de los Estados que más aportaron a la formación étnica del Uruguay (España, Italia).

El volumen de la población del país, en los años treinta, puede ser estimado en unos dos millones de habitantes; poco más de 1 800 000 al comenzar la década y poco menos de 2 200 000 al terminar. La tasa de natalidad anual, en promedio, era de un 20% y el crecimiento de un 11%. Con otras palabras, en esos años operaban ya los factores demográficos negativos cuyos efectos acusamos hoy con toda su intensidad.¹

Lo demuestra más claramente el análisis del movimiento demográfico de los dos quinquenios comprendidos en nuestro estudio, cuya exactitud, por otra parte, no es absoluta, debido a las dificultades informativas con que tropezaban los meritorios trabajos consultados por nosotros.

¹ I. Ganón. *Estructura social del Uruguay*. Montevideo, As, 1967.

<i>Periodo</i>	<i>Población Anual media</i>	<i>Natalidad Prom. anual</i>	<i>Mortalidad Prom. anual</i>	<i>Crecimiento Prom. anual</i>
1931-1935	1:979.329	21.55%	10.40%	11.15%
1936-1940	2:118.507	18.84%	9.73%	9.11%
1931-1940	2:048.918	20.19%	10.06%	10.13%

¿Cuáles habrían sido los factores coincidentes, en el sentido negativo indicado?

Sin pretender la exactitud, ni ser completos en la enumeración, es claro que deben tenerse en cuenta, por lo menos, los siguientes:

1. Crisis económica generalizada en el periodo, pero generada en el decenio precedente.
2. Inestabilidad política insinuada a finales de la década anterior, acentuada por el golpe de Estado de 1933 y mantenida por la oposición hasta el movimiento de 1935.
3. Mentalidad neomalthusiana, sostenida culturalmente e incluso amparada oficialmente en los hospitales de la Asistencia Pública.
4. Impunidad penal del aborto, sancionada por el Código Penal de 1934.
5. Restricciones a la inmigración.

Permítasenos insistir sobre algunos puntos comprendidos entre los factores de baja natalidad mencionados.

La obra legislativa del gobierno surgido del golpe de Estado de 1933 se caracterizó, en lo referente a la organización de la familia, por medidas contradictorias en parte, y en conjunto por una tendencia proteccionista de la restricción. El Código Penal, como vimos, declaraba impune el aborto consensual; pero ante la presión de varios sectores sociales fue modificado en esa parte por una Ley de 1938, que lo declaró delito; pero con tantas reservas —como la facultad judicial de atenuar y aun de eximir de pena en caso de motivos graves de salud, de peligro de vida, móvil de honor o por angustia económica, y también las complicaciones procesales creadas para dificultar el procesamiento del médico imputable— que en los hechos poco fue lo que se consiguió en la prevención de ese delito y, como es obvio, para el crecimiento del tamaño de la familia.

De esos años data también el Código del Niño, por el cual se facilita la investigación sumaria de la paternidad y se aumentan las cargas familiares, en particular por vía de la supresión del trabajo

de los menores de 14 años e imposición de la escolaridad obligatoria hasta esa edad; pero no se dieron las compensaciones correlativas (que vendrán recién en la década subsiguiente, bajo la forma de consejos de salarios y de compensaciones familiares), por lo que las familias modestas no hallaron ningún estímulo y sí cargas para su crecimiento.

La crisis económica tuvo también su gravitación sobre la nupcialidad, como habremos de verlo, que en el decenio bajó a menos de seis matrimonios por cada mil habitantes, para reascender lentamente en la década siguiente.

Desde el punto de vista cualitativo, la población uruguaya es ya un conjunto homogéneo, con predominio altamente mayoritario de los habitantes nativos sobre los extranjeros. La población con rasgos mestizos ha quedado estacionada en cifras prácticamente inamovibles, por lo que año con año disminuye proporcionalmente al volumen total de aquélla.

Dos censos departamentales de Montevideo (1930 y 1941) señalan la importancia de ese proceso demográfico unificador desde el punto de vista étnico; si bien las operaciones se circunscribieron al Departamento de la capital, los resultados son aprovechables en alto grado, a causa de que aquí se concentraba la tercera parte de la población del país, y debido a que las estimaciones relativas a la población del interior sugerían la preponderancia casi total de los nativos sobre los inmigrados.

Nacionalidad	1930		1941	
	Cifra	%	Cifra	%
Uruguayos	507.085	77.40	594.646	80.02
Argentinos	14.385	2.19	16.310	2.19
Brasileños	3.183	0.48	4.034	0.55
Españoles	56.611	8.63	48.584	6.54
Italianos	39.306	5.99	29.418	3.95
Otros	34.819	5.31	50.182	6.75
Totales	655.389	100.00	743.174	100.00

FUENTE: Datos del Gobierno Departamental de Montevideo.

N. B. Las cifras precedentes difieren de otras estimaciones, debidas a otros servicios estadísticos y aun al propio gobierno departamental informante. Pero no alteran en lo fundamental las conclusiones vertidas en el texto.

Los años treinta son tiempos de fuerte restricción migratoria, sea en los países de partida, sea en el Uruguay como país de llegada.

En España, la proclamación de la República primero, y la Guerra Civil después, determinaron una fuerte restricción. Otro tanto puede

decirse de Italia, bajo el fascismo, en los años previos a la guerra de Etiopía y a la Segunda Guerra Mundial.

El caudal correspondiente a otras nacionalidades, en su casi totalidad europeas, señala el acrecimiento motivado por las persecuciones raciales en el Viejo Continente, sobre todo en Alemania y países ocupados por ésta, e Italia hacia el final de la década.

El volumen de habitantes oriundos de otros países de América muestra el estacionamiento proporcional de los argentinos y el aumento de los brasileños, lo cual es un reflejo de la situación política reinante por entonces en sus respectivas patrias.

En los años sesenta, que vivimos, ese proceso de unificación étnica parece concluido. El censo general de población de 1963 mostró un 93.5% de población nativa, y el 4.8% de extranjeros latinos e iberoamericanos, lo que deja, para habitantes de otras procedencias, apenas el 1.7%.

El espacio. Detengámonos algunos momentos en la consideración de varios aspectos del proceso de cambio transcurrido, retomando, para empezar, la del espacio que fue escenario de los acontecimientos. Dos dimensiones cardinales, cuantitativa una, cualitativa la otra, la del propio país y la del continente donde éste se halla ubicado, deben repasarse.

Las características del espacio social uruguayo, lo hemos dicho, quedaron fijadas desde tiempo atrás, por sus límites políticos y sus limitaciones ecológicas; los primeros escapan a la voluntad nacional, pero las últimas dependen de ésta, al punto que es la retracción del esfuerzo productivo lo que ha llevado al país a su situación de estancamiento económico.

Las características del espacio continental, de América Central al sur, eran críticas ya en la tercera década del siglo; la excepción de México es parcial, porque esta nación se hallaba, por entonces, consolidando su revolución. Es digno de hacer notar, que ésta había empezado en la misma época que la transformación evolutiva del Uruguay a comienzos del segundo decenio, y que los dos países culminaron constitucionalmente el mismo año, 1917. El Uruguay fue el último Estado en ahogarse en el mar de dictaduras que anegaba al continente, valga la expresión de E. Frugoni.

Sin embargo, de todos los golpes de Estado producidos por aquel entonces, los más influyentes, por su cercanía, fueron los de Argentina y Brasil, ambos en 1930; en este mismo año, en Perú se producía otro golpe militar y en la República Dominicana R. L. Trujillo ascendía a la presidencia.

En los años siguientes, hasta 1933, se produjeron nuevas conmociones políticas en Chile y Brasil (1931), en Cuba (1933), y estalla la guerra del Chaco (1932) entre Bolivia y Paraguay.

El Uruguay era así alcanzado por las crisis estructurales de que los golpes de Estado eran indicadores políticos de singular intensidad, antes de que se atinara a efectuar los cambios necesarios.

Descartamos, entonces, como factor positivo de primera magnitud, la imitación que hubiera podido suscitar en el futuro dictador uruguayo la ola golpista que recorría el continente. A lo sumo, actuó secundariamente, para sugerir operaciones que por otros motivos más poderosos estaba ya dispuesto a ejecutar.

El tiempo. El tiempo histórico abarcado por la cuarta década del siglo que corre, arranca del año 1929 y concluye en 1943, cuando han terminado su impulso los hechos que tuvieron lugar durante los años treinta.

Aquel año de 1929, no es solamente el de la crisis financiera norteamericana; es políticamente, en el Uruguay, el de la muerte de José Batlle y Ordóñez, cuya obra, encaminada en las décadas precedentes, se interrumpirá sin remedio cuatro años después. El año 1943 es el del ascenso de J. J. Amézaga a la presidencia de la República, acontecimiento que cierra el periodo abierto por el golpe de Estado ejecutado diez años antes por G. Terra y liquidado por el de A. Baldomir en 1942.

Cronológicamente, son catorce o quince años, según se cuente; y podrían ser los diez de la década, si no importaran tanto el 1929 y el 1942.

El suceso de 1933 no habría sido posible sin la desaparición física de Batlle y Ordóñez; y no es esto pura ucronía, ni se trata de rendir culto a la personalidad. Tampoco de postular un determinismo sociológico sin atenuaciones.

Lo que haya de ucronía en tal afirmación, resulta de las probabilidades que habría tenido G. Terra para ser presidente, y llegando a serlo, de ejecutar el golpe de Estado. Como habrá de verse, la reforma constitucional no fue sino el pretexto político para evitar que las medidas tomadas por los poderes constitucionales contra la crisis fueran más adelante, y forzaran la transformación de las estructuras sociales y políticas de un modo parecido a la modificación del régimen político ya obtenida.

Con ello se ve que tampoco se trata de presentar a Batlle y Ordóñez como el demiurgo de la democracia uruguaya, porque él no actuó solitariamente en la escena política nacional; si su gestión es

en buena parte la obra de su personalidad dinámica y realizadora, es también un resultado de la colaboración que recibió de partidarios y adversarios, pertenecientes unos y otros a su propio partido y al partido contrario.

Finalmente, los acontecimientos políticos de ese tiempo eran también fenómenos sociales, con protagonistas de este carácter y ejecutores individuales. No era fatal que aquéllos tuvieran lugar, contra la voluntad nacional expresada por sus grupos que querían sinceramente el cambio, y estaban dispuestos a luchar contra la reacción. Pero fallaron los dispositivos mentales para la acción, embotados como estaban por una propaganda pertinaz en el sentido de identificar la crisis con las instituciones políticas, y en particular contra el Consejo Nacional de Administración, que había acometido la tarea de luchar bravamente contra aquélla.

La dirección. La dirección del proceso parecía fijada, en lo que al Uruguay se refiere, por los acontecimientos que estaban ocurriendo en el continente, desde comienzos del siglo o, para ser más precisos, desde la segunda década de éste. Esa dirección era la de la *reforma social*, a partir de la transformación del Estado en sentido solidarista, preconizado por las doctrinas sociológicas y jurídicas de fines del siglo pasado.²

El Uruguay había hecho su experiencia histórica de la violencia, con las guerras civiles; éstas eran, para el país, sinónimo de aquélla y de revolución; por ello, al concluir éstas en 1904, se entendió terminar con la primera, causante de innumerables males que aquejaban al país. Estaba, por otra parte, de acuerdo con doctrinas predominantes en los círculos universitarios, máximos centros de la cultura nacional: el racionalismo filosófico, el evolucionismo científico, el positivismo sociológico y político.

La reforma alcanzó a vastas áreas de la estructura social: transformó al Estado, cuya constitución se reformó en 1917; renovó el impulso educacional de la reforma vareliana (1878), mejorando la enseñanza en sus tres grados: escolar, secundaria, superior; reafirmó la eficacia del derecho, creándose y prestigiándose las magistraturas judiciales reclamadas por el avance institucional; varios problemas institucionales muy serios fueron resueltos en sentido favorable al Estado y a los organismos afectados: las relaciones con la Iglesia, las fuerzas armadas y los partidos entraron en un cauce amplio de

² I. Ganón. *Introducción a la sociología nacional*. Montevideo, CED, 1966, especialmente capítulos II y III, *Del pensamiento social uruguayo*.

autonomía respetada, de respeto mutuo y de cooperación sincera; fue iniciada una etapa de la industrialización del país.

Solamente quedó fuera del movimiento innovador lo relativo a las estructuras regionales del país, sobre todo el área rural. Debe significarse que Montevideo acusó el estímulo de la industrialización, desarrollándose urbanísticamente hasta la macrocefalia.

Fue, repetimos, la estructura rural del país, la que resistió toda afectación, incluso modificaciones evolutivas como la del impuesto sobre la tierra, que Batlle y Ordóñez había proyectado, siguiendo la doctrina de H. George, una de las más prestigiadas entonces, y de las menos sospechables de "socialismo" por aquel tiempo.

Se manifestará, en este siglo, por primera vez, el proceso reiterado posteriormente, de intentar superar el estancamiento económico del país, sin contar con el apoyo del agro; antes bien, teniéndolo en contra y contemplándolo lo más posible con medidas fiscales y legislativas, una de cuyas máximas expresiones, hacia el final de los años veinte, fue la creación del Frigorífico Nacional (1928).

Por su parte, otros sectores refractarios de la economía, vinculados a la banca privada y a las concesiones extranjeras, resentidos por la expansión del dominio industrial, comercial y bancario del Estado, aguardaban el momento de la revancha, prontos a aliarse con el primer sector reaccionario que se manifestase fuerte y capaz de lograr los objetivos comunes a sus ambiciones.

Esos sectores reaccionarios tenían defensores políticos en el gobierno y en las cámaras legislativas, además de sus propios centros de presión. Para todos ellos, el modelo del Estado seguía siendo el liberal decimonónico; y aunque no se les escapaba comprender que en los sectores alcanzados por la modernización el proceso era irreversible, hacían de su esperanza verdad, esto es, sostenían firmemente que para sus intereses no podría llegar el cambio, que con respecto a ellos el Estado debía dejar hacer, dejar pasar, que era compatible la ya manifiesta asincronía entre el sector tradicional y los sectores modernizados con la transformación alcanzada. Por eso, para ellos, ante la evidencia de la dirección que el proceso llevaba, no era la reforma lo que se necesitaba, sino todo lo contrario, aunque para ello fuera preciso llegar al golpe de Estado y a la situación de fuerza subsiguiente; para ellos, la dirección del proceso no era la reforma social, sino la dictadura política.

Se confirmaba, de esa manera, la proposición sociológica que con visos de ley habría de inducir K. Mannheim, de hechos políticos que por ese entonces y en otro contexto social y cultural se estaban pro-

duciendo: "El mecanismo de la sociedad liberal prepara por sí mismo el camino a una solución dictatorial de sus problemas."³

Con penetrante lucidez, así lo había anunciado también G. Gallinal, en sus discursos y artículos, reelaborados en su libro titulado, precisamente, *El Uruguay hacia la dictadura* (1938). "La dictadura de Terra —dice ahí— fue posible por el trabajo secreto de fuerzas económicas complotadas contra el interés nacional."⁴

En suma, la crisis de los años treinta sobrevino como una manifestación de la contradicción existente entre las estructuras sociales reformadas (sobre todo las políticas y culturales) y las pendientes de transformación (en particular las económicas del agro, la banca privada y el comercio exterior); éstas se convirtieron en un obstáculo al desarrollo integral del país.

Con todo, no le damos al estancamiento de la estructura agropecuaria una importancia absoluta, ni le reconocemos una gravitación decisiva por sí misma; la admitimos, en la medida que obsta al desarrollo armónico de las restantes estructuras articulares de la sociedad global; en sentido figurado, juega un papel análogo a la dolencia de un órgano importante, que repercute sobre todo el organismo, al que por ello se considera enfermo, sin que lo estén necesariamente las otras partes, que continúan sanas en sí mismas y resistentes a la expansión de la enfermedad.

Tal es el sentido final que emerge de los hechos que serán referidos brevemente en los capítulos que subsiguen. En éstos se verá que más de uno de aquéllos parecen repetirse, y que vuelve alguna que otra fase del proceso entonces vivido. Ahora, como entonces, parece que el país hubiera sido contenido en su desarrollo y alcanzado por la crisis de sus estructuras *liberales* antes de que pudiera por sí mismo efectuar los cambios necesarios.

II. LA CRISIS ECONÓMICA DE LOS AÑOS TREINTA

1. *El primer quinquenio*

En 1930 la economía uruguaya no se había repuesto todavía de las fluctuaciones negativas ocurridas en el decenio precedente, cuan-

³ K. Mannheim. *Libertad y planificación*. Te., México, FCE, 1942, p. 438 (1ª ed., holandesa, 1935; 2ª ed., inglesa, 1940).

⁴ G. Gallinal. *El Uruguay hacia la dictadura*. "Preparación del golpe de Estado." Montevideo, Nueva América, 1938, p. 25.

El autor pertenecía al Partido Nacional Independiente, y era miembro del Consejo Nacional de Administración a la fecha del golpe de Estado de 1933.

do empezaron a actuar los nuevos factores de depresión. Los años veinte habían debutado con fuertes retracciones: la guerra terminada, disminuyeron las exportaciones a los países combatientes y cayeron los precios de éstas; los créditos acumulados durante el conflicto, a cargo de las potencias europeas aliadas, no fueron satisfechos de inmediato, y por ello los ahorros son absorbidos por los débitos al exterior; ante la falta de divisas, cae el valor de la moneda, que era legalmente mayor que el del dólar.

La situación dura hasta 1923, en que se insinúa la reacción: la restricción y selección de las importaciones y la colocación internacional de nuestros productos permiten un repunte al signo monetario y los primeros síntomas de una recuperación. A esto se agregan dos hechos favorables: el pago por Francia, de su deuda de guerra, y la concertación de dos empréstitos (1926) en dólares, uno para el gobierno nacional, y otro para el municipio de Montevideo. Pese a ello, la balanza de pagos continúa siendo desfavorable (servicios de la deuda externa, dividendos y regalías de capitales extranjeros, giros de inmigrantes, saldos turísticos negativos), lo que repercutirá con toda su intensidad a fines de 1928, cuando concluye el breve periodo de auge y la balanza comercial va a acusar un saldo en contra.

Para hacer frente a esa situación y sostener el valor de la moneda, se concierta un nuevo empréstito Hallgarten (1930) y el Banco de la República echa mano a sus reservas de oro, lo que unido a un repunte de las exportaciones da por un momento la impresión de que otra vez va a superarse el contratiempo.

Es entonces cuando interviene el hecho negativo decisivo, al cual se atribuye tanta importancia en la crisis económica de esos años: el pánico bursátil de Nueva York (octubre 1929), cuyos efectos en nuestro país deben ser cuidadosamente analizados, para no atribuirle mayor gravitación que la que en realidad tuvo.

Lo que sucede en el Uruguay, a partir de esa fecha, pertenece ya a los años treinta; la crisis económica empieza a comienzos de ese año fatídico; y pese a las medidas adoptadas de inmediato, la economía uruguaya declina inconteniblemente a mediados de 1931, para reestablecerse recién a mediados del decenio.

Además de las mencionadas, el gobierno constitucional de la época tomó otras disposiciones, como son: nueva exportación de oro, moratoria de la deuda externa y suspensión de giros para dividendos y regalías de capitales extranjeros en el país, nuevas restricciones de importaciones, contralor de cambios, creación de un instituto regulador de los futuros pagos al exterior (Caja Autónoma de Amorti-

zación, 1932), política de cuotas o contingentes para los cambios e importaciones, etcétera.

En los años treinta, la economía uruguaya es todavía preponderantemente agropecuaria, con bajos niveles de producción y consumo por habitante, y dependiente en alto grado de las variaciones del mercado internacional.

Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, se había tentado con éxito la reforma del Estado, cambiando muchas de sus funciones, de liberales a sociales, dentro del marco democrático. Se inició asimismo el proteccionismo económico, sobre todo para las industrias que empleaban materias primas nacionales; se formó el dominio industrial, comercial y bancario del Estado; se perfeccionó el sistema educacional público; se sancionaron numerosas leyes de protección laboral, de asistencia pública y de previsión social.

Las condiciones generales, en esos años, como se ha dicho, son de retracción y de crisis, sufrida con toda su intensidad durante los cinco primeros años de la década. La crisis del año 1929, sobre todo el *crack* bursátil de Nueva York, no le alcanza de lleno todavía: el país estaba preparado para el impacto, gracias a los empréstitos y cobros de deudas de guerra mencionados. En medio de las dificultades, hay tiempo para reflexionar sobre las causas de fondo de la crisis, en particular de sus características nacionales; y de esas reflexiones surge pujante el estímulo para continuar la industrialización y modernización del país, pese a los factores de resistencia localizados fuertemente en el sector primario.

Los ganaderos agremiados en la Federación Rural formaron un Comité de Vigilancia Económica, cuya actividad consistió en la crítica de las medidas tomadas por el Consejo Nacional de Administración y el Poder Legislativo en materias de presupuesto y de política social, ampliando la protección laboral y asistencial de los trabajadores, así como sus remuneraciones (salario mínimo, mayor descanso semanal, jubilaciones generales, recargos de impuestos, como el de herencias, protección del trabajo nacional).

Ese movimiento vino a ser más político que económico, pues llegó a publicar un manifiesto de adhesión a ciertas candidaturas a la presidencia de la República, con rechazo de las proclamadas por el batllismo, al que imputaba la principal responsabilidad en la iniciativa de aquellas medidas.

Esa campaña contrastaba con otras decisiones de los mismos órganos de gobierno y legislativos, amparando a los ganaderos en la comercialización de sus haciendas y creándoles el Frigorífico Nacional

(1928) con el objeto de industrializar, exportar y vender productos y subproductos agropecuarios, así como faenar en régimen de monopolio los animales vacunos, ovinos y porcinos destinados al abasto de Montevideo. El Estado lo dotó además de capital y de recursos fiscales, y organizó la dirección y administración del frigorífico con representantes de los ganaderos, que irían en aumento hasta alcanzar la mayoría, a medida que crecieran el capital accionario y los accionistas estancieros. La principal finalidad del frigorífico fue, desde el primer momento, defender el precio de los ganados en el mercado de haciendas, contra la concurrencia de los compradores extranjeros.

Las disponibilidades ganaderas del país, por otra parte, no eran muy grandes, en 1930: poco más de siete millones de vacunos y veinte millones y medio de ovinos, para hacer frente al consumo interno de 1 876 600 habitantes, y para exportar. A comienzos de la década, las exportaciones ascendían a estas cantidades y proporciones en millones de pesos:

<i>Exportaciones</i>	1930	%	1931	%
Ganadería	\$ 84:2	83.4	\$ 64:8	82.8
Agricultura	„ 10:6	10.5	„ 7:5	9.5
Otras	„ 6:1	6.1	„ 5:9	7.7
Totales	\$ 100:9	100.0	\$ 78:2	100.0

Surge del cuadro la otra dependencia de la economía uruguaya: su tendencia a la monocultura o dedicación abrumadoramente pecuaria, y dentro de ésta a un corto número de renglones, que confirma este otro análisis de las exportaciones respectivas, en millones de pesos.

<i>Exportaciones</i>	1930	%	1931	%
Carnes	\$ 47:0	55.8	\$ 33:7	52.0
Lanas	„ 26:2	31.1	„ 20:5	31.6
Cueros	„ 11:0	13.1	„ 10:6	16.4
Totales	\$ 84:2	100.0	\$ 64:8	100.0

Para contrarrestar los efectos de esa doble dependencia, el entonces Consejo Nacional de Administración se trazó un camino que le permitiría al país alcanzar un acusado, aunque reducido, desarrollo industrial, ya desde el segundo lustro de la década. Todos sus actos se cuentan entre las decisiones adoptadas por los poderes constitucionales ante la crisis, que el gobierno surgido del golpe de Estado de 1933 no tendría más remedio que continuar. *

Al asumir las características económicas del momento, decía el ministro de Industrias, en 1932:

El estancamiento en calidad y cantidad de nuestra producción exportable y la baja pronunciada de su valor, especialmente en los dos últimos años, ha ocasionado un fuerte déficit económico y ha dejado al país sin medios de pago para continuar adquiriendo en el exterior la masa de artículos de cuyo consumo y utilización se habituó después de la guerra europea, como consecuencia de la disponibilidad de las considerables ganancias obtenidas entonces y de los recursos provenientes de los empréstitos realizados con posterioridad.⁵

Entre otras características económicas y financieras del momento, señalaba el ministro: disminución del poder adquisitivo internacional de nuestra moneda; baja del valor de nuestros productos calculados en oro; pérdidas comerciales, desocupación; y, podría haber agregado, gravitación negativa sobre los gastos gubernamentales y aumento de éstos.

En sus trabajos sobre la economía y las finanzas del gobierno *de facto*, E. Acevedo Álvarez admite los déficit presupuestales que éste le imputara al Consejo Nacional de Administración, por los siguientes ejercicios y cantidades:⁶

Diferencias del ejercicio 1930-31	\$ 7:431.036
Diferencias del ejercicio 1931-32	\$ 4:546.017
Diferencias del 2º semestre 1932	\$ 6:941.408
Total	\$ 18:918.461

Esos desniveles tienen su origen, parcialmente, en gastos del Estado correspondientes al decenio anterior, en que fueron aplicadas sumas importantes a gastos burocráticos, como también a fines de asistencia y previsión sociales.

El déficit, por supuesto, no se detuvo allí; creció en los años 1933 y 1934 hasta llegar a \$ 28.191,606, por virtud de los factores económicos adversos de la época y a las primeras medidas presupuestales del gobierno *de facto*.

A partir de 1935, la situación parece cambiar; el presupuesto de ese año cierra con un superávit de \$ 10.217,455. ¿Qué había sucedido? Sencillamente, mayores exacciones fiscales, con un más severo ajuste de las recaudaciones, unido a medidas devaluacionistas (revalúo del oro) de que se hará mención.

⁵ En el *Mensaje* del Consejo Nacional de Administración a la Asamblea General, al inaugurarse la XXXI Legislatura. Montevideo, Imp. Nal., 1932.

⁶ E. Acevedo Álvarez. *La economía y las finanzas públicas después del 31 de marzo*. Montevideo, 1937, p. 86.

Pero en 1936 el superávit será menor, unos 5 millones solamente. Y ya en 1937 reaparece el déficit, cercano al millón de pesos, que se acentúa en 1938, hasta alcanzar, al final de la década —1939 y 1940— a 4 millones de pesos cada año.

No se detiene ahí el déficit; el desnivel se extiende a la deuda pública, la cual entre 1933 y 1940 aumenta un 40%,⁷ con tendencia a crecer, debido a la naturaleza de las medidas preconizadas para enjugar los déficit presupuestales o atender los gastos extraordinarios, a saber, emisiones de títulos, letras de tesorería, y empréstitos disfrazados, como ciertos adelantos de impuestos que se impondrán a institutos de previsión social, al Banco de la República y a particulares.

El gobierno constitucional de los años 1930-1933, sin embargo, no atribuía la responsabilidad de la crisis y de los déficit a la coyuntura internacional, solamente, ni en modo predominante; en autocrítica saludable, reconocía que la crisis había venido incubándose en la década precedente.

Nuestra protección aduanera había dejado hace tiempo de constituir una defensa eficiente para la industria nacional. Comprando excesivamente en el exterior, el país dejaba sin trabajo o no lo proporcionaba a sus obreros, y sostenía a los de las manufacturas transoceánicas (*ibidem*).

No deja de ser sugestivo, en la indagación etiológica de la crisis económica, la escasa referencia a la gran depresión norteamericana, la cual no actuó directamente sobre nuestra plaza, sino a través de la retracción que determinó en los mercados europeos, nuestros principales clientes y proveedores. Es más, se reconoce que el impacto directo de la gran depresión llegó aquí atenuado por el empréstito Hallgarten contratado en 1930.

De todas maneras, es lo cierto que los efectos de la crisis nacional se vieron reforzados por los de la crisis norteamericana, actuando ésta directamente o a través de su acción sobre los mercados europeos. Aquí, como en los Estados Unidos de América, tales efectos no se limitaron al campo economicofinanciero; repercutieron claramente sobre la estructura social, modificando actitudes, relaciones, actividades diversas, como puede verificarse por los indicadores demográficos (descensos de la nupcialidad, la natalidad y del crecimiento natural) expuestos en los cuadros subsiguientes.

⁷ *Marcha*. Montevideo, 24-I-1941.

A fin de facilitar la comprensión del proceso demográfico y su interpretación, nos remontamos unos años en la década de los veinte, y mostramos en pormenor el primer quinquenio de los treinta y resumidamente el segundo quinquenio de esta década. La razón de ello está en que los efectos de la crisis se hicieron notar con particular intensidad en ese primer lustro, en que también se organiza la defensa economicofinanciera del país y se produce el golpe de Estado del 33.

Años	Popl. media	Matrimon.	% Habit.	Nacimientos	% Habit.
1926	1:699.077	9.565	5.63	43.091	25.36
1927	1:741.459	10.243	5.88	42.845	24.60
1928	1:785.368	11.026	6.17	44.632	25.00
1929	1:829.208	11.731	6.44	44.236	24.18
1930	1:876.606	11.799	6.29	45.718	24.36
Quinq. Prome.	1:786.343 1:786.343	54.364 10.863	6.08 6.08	220.522 44.104	24.69 24.69
1931	1:922.240	11.168	5.81	44.850	23.33
1932	1:955.828	9.900	5.06	44.036	22.51
1933	1:981.744	9.520	4.80	41.650	21.02
1934	2:006.637	10.676	5.32	41.337	20.65
1935	2:030.198	11.305	5.56	41.426	20.40
Quinq. Prome.	1:979.329 1:979.329	52.565 10.513	5.31 5.31	213.303 42.661	21.55 21.55
Quinq. Prome. 1936/40	2:118.507	14.024	6.62	39.914	18.84

FUENTE: F. Capurro Calamet: "Dinámica de la población del Uruguay", en A. Ruano Fournier (Dir.): *Historia y Análisis estadístico de la población del Uruguay*. Montevideo, Facultad Derecho y Ciencias Sociales, 1939, pp. 167 y 99.

Dirección General de Estadística y Censos: *Anuario estadístico*. Montevideo, 1942.

En cuanto al crecimiento natural, las cifras, sintéticamente expuestas, son las siguientes:

Quinquenio	Cifras	Promedios % Hab.
1926/1930	24.795	13.88
1931/1935	21.278	11.77
1936/1940	21.278	10.04

FUENTE: Las precedentemente citadas.

Puede advertirse que el primer quinquenio de los treinta debuta con una caída de la nupcialidad, que se recupera al final de la década.

En cambio, las tasas de natalidad y crecimiento natural se mantienen bajas durante todo el decenio, recuperándose luego muy lentamente; lo que indica, para la crisis demográfica, la existencia y persistencia de factores que no son solamente los de la crisis económica, y asimismo que esos descensos de valores no dependen únicamente de ésta.

Otro dato de interés lo representa el aumento de la natalidad ilegítima, registrado durante el decenio, que pasó del 27.94% de los nacimientos en 1930, al 29.83% de los mismos en 1937.

Como asimismo, en ese periodo, se ha dado un leve aumento de los reconocimientos y legitimaciones, puede inferirse de ahí que éstos han tenido su influencia en el crecimiento de la nupcialidad que se observa en el segundo quinquenio. El número de legitimaciones llega a casi el 20% de los nacimientos ilegítimos.

2. *El segundo quinquenio*

Este periodo se caracteriza por la gradual recuperación del país, auspiciada por las medidas tomadas dentro del lustro precedente y las que seguían adoptándose. Entre los resultados más destacados, se halla la movilización industrial, que fue orientada hacia la sustitución de importaciones por la fabricación de artículos que se podían producir en el país, sobre la base de materias primas nacionales, o de materias primas o semielaboradas traídas del exterior. Quiere decir que aquellas medidas no solamente influyeron positivamente para la salida de la crisis, sino también para el próximo desarrollo del país.

Claro está que los productores, de todos los sectores, percibieron la remuneración correspondiente a sus actividades. Los hacendados, por ejemplo, cobraron su esfuerzo bajo la forma de primas al ganado, que ascendió, en 1935, a más de 5 millones y medio de pesos, aparte, naturalmente, del precio de las haciendas, cuyos beneficios subieron, incluida dicha prima, a más de 31 millones de pesos, esto es, más de lo percibido el año anterior. La zafra lanera y su colocación dieron también buenos resultados, exportándose 50 385 toneladas a un precio remunerador. En cambio, los productos agrícolas acusan, en 1935, un descenso prolongado.

La balanza comercial volvió a ser favorable, y con sus resultados pudieron ser saldadas deudas y cambios diferidos, reforzando así la obra realizada hasta entonces por la Caja Autónoma de Amortización, liquidada el año 1934 con saldo favorable para la economía y las finanzas del país.

La nota destacada de los años 1936 y 1937, aparte la lenta recuperación, fue la intervención oficial (a través del Banco de la República) para contener la valorización de la moneda uruguaya. Con este procedimiento, dice E. Acevedo Álvarez, se favorecían las exportaciones, y se obtenían mayores beneficios en la negociación de las letras, compradas a un tipo oficial más bajo y vendidas a uno dirigido más alto que el de cotización en el mercado libre de cambios.⁸

Un antecedente de tal procedimiento radica en el año 1934, en que por una ley de "reajuste económico y financiero" se había fijado un nuevo valor, más bajo, al peso uruguayo, mediante una operación de *revalúo* (en rigor, una devaluación) que liberó una suma próxima a los diez millones de pesos oro en beneficio del Estado; operación que fue complementada más adelante, terminándose así de elaborar por alquimia financiera, la fórmula más funesta de nuestra historia económica, pues la misma se aplicaría después, no ya para contener la valorización determinada por los hechos del crecimiento, sino para reconocer y aun precipitar las sucesivas depresiones ocasionadas por dispendios e imprevisiones de los gobiernos.

Al finalizar el decenio, la carne se cotiza mejor, y la lana, muy valorizada, mantiene la demanda; la deuda pública (en su casi totalidad sometida a conversión el año 1937) se cotiza cerca de la par; la industria y el comercio parecen desenvolverse fructíferamente, lo que se refleja en las cotizaciones bursátiles, los bancos operan ventajosamente. En síntesis, el país recibe una impresión de prosperidad...

Sin embargo, agrega E. Acevedo Álvarez:

...la riqueza está mal repartida. El país estará bien en su conjunto, pero nunca ha habido tanta desocupación y tanta miseria en las clases modestas. Hemos asistido, en estos últimos tiempos, a un enorme encarecimiento de la vida. Herida por los impuestos y por un régimen de cambios insoportable para el consumo, la familia obrera tiene que hacer prodigios para cubrir sus presupuestos... El dinero está cada vez más concentrado en manos de unos pocos privilegiados. Ellos son los únicos beneficiarios de este periodo próspero para el Uruguay.⁹

Unos meses más, y la Segunda Guerra Mundial les permitirá a esos privilegiados acrecer sus beneficios, acentuando aún más la desigualdad económicosocial.

⁸ E. Acevedo Álvarez, *op. cit.*, p. 38.

⁹ *Idem*, *op. cit.*, pp. 55-6.

La movilización industrial

Volvamos un trecho, para destacar del proceso descrito, la movilización industrial que se proyecta desde esos años treinta hacia mediados del siglo.

El desarrollo del país ha dependido de sus exportaciones de productos naturales, proveedoras de las divisas necesarias para la importación de artículos indispensables, como los combustibles, las materias primas a elaborar, ciertos bienes industriales y de consumo (como los medicamentos). La situación, aún hoy, continúa en gran parte en las mismas condiciones, a pesar de los esfuerzos realizados en contrario. Afuera y dentro del país hay quienes sugieren esta vía de desarrollo: que se estimulen las producciones primarias, y se abandonen las secundarias, cuyos artículos podrían ser importados con los resultados de aquéllas.

Pero eso constituye, justamente, la razón de nuestra dependencia económica del mercado internacional, que fija los precios de compra de nuestros productos y los precios de venta de los artículos manufacturados, según los intereses de los países más desarrollados, *dueños* precisamente de ese llamado mercado internacional.

De ahí la reanudación de los debates de política económica, sobre la eficacia del proteccionismo y las ventajas de la división internacional del trabajo, con su consecuencia aparente: la economía abierta, cuyo juego, libre sólo en apariencia, lleva a la distorsión del crecimiento en los países subdesarrollados, como es el caso del Uruguay.

De donde resulta que se distorsiona la economía en lo que produce, acentuando unas producciones porque así lo exige el mercado internacional; y se distorsiona también, en lo que no produce, pudiendo hacerlo porque se obtiene en aparentemente mejores condiciones desde el exterior. Acelera ciertas inversiones, ciertas producciones y ciertos empleos; desalienta otras inversiones, producciones y ocupaciones. En ambos casos lo hace por imperio del mercado internacional, cuya crisis, cualquiera que fuese su magnitud, y más siendo grande podía poner en peligro todo el complejo económico social nacional.¹⁰

Eso fue, corrobora Faroppa, “lo que ocurrió al comienzo de los treinta: la baja de las exportaciones impuso la disminución de los ingresos en moneda extranjera, y éstos exigieron la restricción de las compras en el exterior” (*ibidem*).

¹⁰ L. A. Faroppa: *El desarrollo económico del Uruguay. Tentativa de explicación*. Montevideo, CECEA, 1965, pp. 35-7.

La vía que escogió el país en 1931 fue la de escapar, siquiera por una puerta estrecha, al círculo de hierro de la dependencia exclusiva de las exportaciones de sus productos naturales; esa dependencia, no podía ser de otro modo, continuaría; pero, por otra parte, se mantendrían los consumos y el nivel de vida de la población, sustituyendo en todo lo posible las importaciones por la producción nacional.

Los medios empleados por el gobierno constitucional de la época fueron legislativos y administrativos. Propició y obtuvo de las cámaras disposiciones aduaneras y arancelarias protectoras, medidas cambiarias, orientaciones crediticias; y encauzó la iniciativa pública y la privada en favor de la industria nacional. Uno de los mayores logros, en este último campo, fue la creación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (1931), con facultades monopólicas, que entró de inmediato en funciones.

Sin embargo, debe anotarse un resultado no querido, cuyas condiciones se dieron con las diversas medidas de política económica aplicadas: se creó un "desequilibrio entre una demanda insatisfecha y una oferta interna que no estaba en condiciones de abastecerla totalmente"; desequilibrio tanto más pronunciado cuanto que las barreras proteccionistas arancelarias y cambiarias impedían anteconcurrencialmente o hasta cierto margen aceptable aquella demanda; dicho de otro modo, "se dieron condiciones propicias para un alza de precios".¹¹

Del alza de precios a la inflación no había más que un paso, si no se adoptaban las medidas adecuadas para evitarlo; lo que infortunadamente no se hizo.

Sobre la importancia de aquel factor inflacionario, ha puesto su acento el Fondo Monetario Internacional, en su diagnóstico de la crisis económica actual. Para el FMI, en efecto, ésta deriva del "crecimiento de la demanda por encima de la oferta de bienes y servicios". La inflación se genera, por ende, "en una capacidad de demanda superior a las posibilidades inmediatas de la producción interna y a la capacidad para importar" manifestada en un excesivo apoyo monetario a los eventuales adquirentes de mercaderías y servicios.¹²

El alza de precios estimuló al establecimiento, primero, y a la ampliación, después, de industrias para cuyas producciones el pequeño mercado nacional no les aseguraba absorción total, ni el

¹¹ *Idem*, *op. cit.*, p. 51.

¹² A. Couriel y S. Lichtensztein. *El FMI y la crisis económica nacional*. Montevideo, Bib. de Cultura Universitaria, 1967, pp. 64 y 126.

mercado internacional (siquiera el de la región) la colocación de los excedentes.

Con todo —volvamos a lo positivo del proceso— “la movilización industrial, luego de un periodo de aceptación, logró generar un crecimiento y un desarrollo industriales” (Faroppa), como lo demuestra la evolución del producto bruto interno, en el cual podemos distinguir dos periodos: de 1935 a 1945, de movilización, durante el cual el sector manufacturero marcha detrás del agrario y de 1945 a 1955, de crecimiento, en el que el primero contribuye más que el segundo al producto bruto interno.

Después de 1955, ha continuado el predominio del sector manufacturero, aunque ya visiblemente estacionario; el sector de la construcción, que acompañaba a aquél en su dinamismo, en cambio, comienza a descender rápidamente desde 1962.

De la comparación entre ambos sectores del proceso —el agrario y el industrial—, según lo revelan las estadísticas cuya transcripción omitimos, surgen elementos que permiten indagar cómo fue financiado el desarrollo industrial. Es así que Faroppa se inclina a sostener que ha sido el agro lo que financió la movilización industrial durante los años treinta, mediante un trasiego de ingresos que duró hasta 1940, fecha en que tal trasiego se invierte, pasando desde la industria manufacturera al agro.

Y agrega que en ambos periodos se benefició la ganadería: en el primer periodo, cuando la movilización, contribuyendo menos; y en el segundo, cuando el crecimiento, absorbiendo más. Dicho de otro modo, fue la agricultura la que aportó más a la financiación de la industria, y la que recibió menos ingresos cuando la situación se invirtió.¹³

La industrialización se financió también con recursos internos, esto es, con recursos propios, de origen estatal, bajo forma de exenciones y de subvenciones, y con una política de créditos bancarios especiales.

Entre los recursos internos más eficientes para la movilización, sobresale el bajo nivel de salarios percibidos por los trabajadores, el cual se mantuvo hasta casi el final del primer periodo (1943), en que se sanciona la ley sobre consejos de salarios, y éstos comienzan a elevarse. El funcionamiento regular y periódico de dichos consejos, empero, sólo pudo llevar las remuneraciones a niveles cercanos al costo de la vida; además, por ese hecho de fijar y definir oficialmente las principales condiciones del trabajo, impuso cierta rigidez al mer-

¹³ L. A. Faroppa, *op. cit.*, p. 63.

cado laboral. Puede concluirse, como lo sostiene el autor citado, que los trabajadores han financiado la movilización industrial de los años treinta, sin percibir por su esfuerzo, como lo recibieran otros sectores, una compensación especial.

Destaquemos, finalmente, que el desarrollo industrial fue también favorecido por las restricciones impuestas al comercio internacional por la Segunda Guerra Mundial (entre los años, recuérdese, 1939 y 1945), y durante cuyo transcurso el país acumuló reservas de divisas y créditos en condiciones económicas aún más favorables que las permitidas por la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, ni el agro ni la manufactura lograron un desarrollo propio y autónomo, en el sentido natural propiciado por el proceso económico nacional, como lo demuestran las estadísticas posteriores a los años treinta. De haberlo conseguido, la situación actual no presentaría los niveles críticos que ofrece, ni la dependencia habría alcanzado dimensiones tan deprimentes.

Veamos ahora, rápidamente, las condiciones y repercusiones demográficas del proceso descrito, en la medida que está a nuestro alcance.

La industrialización del Uruguay tuvo por escenario principal el Departamento de Montevideo, capital del país. La población que sostuvo ese proceso y que, desde el punto de vista laboral y social, experimentó sus efectos inmediatos, representaba la tercera parte de la población general, estimada, de la República; en realidad debió de ser mayor esa proporción, por lo que vinieron a revelar las operaciones censales posteriores. En el decenio considerado (más 1940), habría sido éste el movimiento demográfico registrado:

Año	Población media	Nupcialidad % Habit.	Natalidad % Habit.	Crecimiento % Habit.
1930	653.145	8.41	22.21	8.34
1931	660.521	8.90	21.48	7.24
1932	659.340	7.22	20.79	7.43
1933	663.091	6.83	18.93	5.58
1934	662.250	7.41	19.35	6.24
1935	668.151	7.65	18.83	5.05
1936	676.162	8.18	18.95	6.09
1937	685.720	9.73	18.72	4.39
1938	696.505	10.01	19.52	5.55
1939	705.304	10.03	19.92	7.16
1940	705.832	9.74	20.40	6.65

FUENTE: "Concejo Departamental de Montevideo: Boletín de Estadística", enero-diciembre 1960 (cuadros retrospectivos).

No tomamos en consideración las estadísticas del movimiento de pasajeros (entradas y salidas), a causa de su escaso valor indicativo. En general, muestran un leve saldo favorable, que no puede tomarse en cuenta debido a que muchos de los entrados por Montevideo se dirigen al interior del país o salen por puertos distintos de la capital, o por la frontera con el Brasil.

Como los censos de Buenos Aires (República Argentina) y de Río Grande del Sur (Brasil) muestran un número constante, si no creciente, de uruguayos, se infiere de ahí la existencia de un movimiento emigratorio de uruguayos hacia dichos Estados limítrofes, reflejado indirectamente en las estimaciones demográficas referenciadas.

A pesar de sus defectos, en el cuadro transcrito puede advertirse el impacto de los factores de la crisis, de los años 1931 en adelante, sobre todo en lo que se refiere a la natalidad. Desde luego, como ya lo hemos advertido, no todos esos factores adversos proceden de la crisis: los hay que son comunes a ésta y al desnivel demográfico acusado; de todas maneras, puede admitirse que la crisis ha acentuado su repercusión sobre éste.

III. LA CORRELACIÓN ENTRE CLASES Y PARTIDOS POLÍTICOS

1. *Clases y partidos*

Al comenzar la cuarta década del siglo, la sociedad uruguaya presentaba ya las características que habrían de verificar investigaciones posteriores.¹⁴ El primer desarrollo industrial y la ampliación de los fines del Estado, con la urbanización y burocratización consiguientes, la multiplicación de comercios, la difusión de la instrucción pública en todos sus grados con el anexo aumento de establecimientos y personal enseñante (escuelas, liceos departamentales, cursos preparatorios, enseñanza industrial, facultades y escuelas universitarias, universidad para mujeres), las jubilaciones generales y las pensiones a la vejez, etcétera, habían contribuido a una redistribución del ingreso nacional, sin afectar mayormente a las grandes fortunas agropecuarias, industriales, bancarias, rentísticas, en beneficio de los grupos

¹⁴ Unión Panamericana. *Materiales para el estudio de las clases medias en América Latina*. Washington, UP, 1950. El estudio correspondiente al Uruguay fue realizado por A. M. Grompone (t. 1).

I. Ganón. *Estratificación y movilidad sociales en Montevideo*. Montevideo, INCISO, 1959.

sociales más modestos. Se había producido así un crecimiento y diversificación de los estratos medios y una elevación de los sectores populares, por lo menos en lo que a su seguridad material se refiere, que desproletarizaba grupos sociales cada vez más numerosos.

Debe significarse, además, que a comienzos de los años treinta existía un alto número de desocupados, estimado en 30 000, lo que hacía, en cifras redondas un 15%, porcentaje elevado para la época, atento al reducido mercado de trabajo manufacturero, a la saturación del burocrático y a la expulsión de mano de obra que venía y siguió causando el sector primario. Añádase a ello la crisis de la vivienda, que dio lugar a medidas sobre arrendamientos y desalojos (1927) prorrogadas varias veces, y a la retracción en la construcción, no obstante las facilidades y estímulos otorgadas a los interesados en general (exenciones tributarias) y a los funcionarios públicos y jubilados en particular (Ley Serrato), y se tendrá una idea aproximada de la situación creada a los estratos medios y a las clases populares, con mucho la mayoría de la población del país.

Por su parte, las clases altas presionaban para que el gobierno suspendiese su política de favorecimiento a aquellas clases, y les otorgase a ellas, las pudientes, nuevos beneficios en vista de la crisis, cuyos efectos se experimentaban, como vimos, bajo la forma de caída de las exportaciones, depreciación de los productos naturales del país, desvalorización del signo monetario, parálisis del comercio, etcétera.

Resultado de sus actividades economicopolíticas fueron numerosas manifestaciones de opinión y el ya mencionado Comité de Vigilancia Económica, así como la inclinación a sus pretensiones de algunas fracciones partidarias.

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. En 1929 estallaron huelgas en número muy crecido, que terminaron en su mayoría favorablemente a las reivindicaciones laborales. Ese mismo año quedó constituida la Confederación General del Trabajo, y se acentuaron, dentro de los partidos tradicionales, las tendencias izquierdistas, con formación de fracciones políticas estables y con órganos de publicidad propios.

Las clases medias, por su lado, reforzaban los cuadros políticos tradicionales. Su potencialidad económica se revelaba en la estadística del ahorro nacional, que fue creciendo a lo largo de los años veinte, hasta llegar a su máximo en 1930. Los depósitos en los bancos públicos eran mayores que los de los bancos privados, pero los de éstos eran superiores relativamente a cada uno de aquéllos, como lo demuestra el siguiente cuadro, de 1926 a 1930:

Año	Banco de la República	Bancos privados	Caja Nal. de Ah. Postal	Banco Hipot. Nacional	Total
1926	\$ 35:497.003	\$ 28:787.902	\$ 222.801	\$ 4:678.850	\$ 69:186.556
1927	\$ 41:015.146	\$ 32:089.409	\$ 1:019.536	\$ 5:554.900	\$ 79:678.991
1928	\$ 45:970.931	\$ 35:859.788	\$ 2:183.337	\$ 6:662.700	\$ 90:676.756
1929	\$ 49:571.890	\$ 42:895.098	\$ 4:890.189	\$ 7:938.000	\$ 105:295.177
1930	\$ 50:213.549	\$ 50:441.358	\$ 7:959.002	\$ 9:200.450	\$ 117:814.359

FUENTE: Edo. Acevedo. *Anales Históricos del Uruguay*. Montevideo, Barreiro, 1936, t. vi, p. 538.

No se podría, entonces, decir que existiera un partido de las clases medias, pues éstas votaban en todos los partidos, aun los no tradicionales, como la Unión Cívica (católica), el Partido Comunista y el Partido Socialista. Pero resultaba indudable que la gran mayoría de aquéllas se inclinaba por los partidos tradicionales (Colorado y Nacional), y aseguraba la permanencia del primero en el poder.

Es más, puede agregarse que las simpatías de las clases medias no iban más allá del centro o del centro-izquierda de esos partidos, como lo revela la escasa votación registrada para las fracciones izquierdistas o radicales de los mismos; incluso las fracciones ubicadas a la derecha del panorama político nacional contaban con votos de las clases medias y aun de las populares (así, en el medio rural).

Las elecciones de 1930 son suficientemente indicativas al respecto. Se debía elegir para los siguientes cargos: presidente de la República, 1/3 del Consejo Nacional de Administración (3 miembros y 1/3 del Senado (6 miembros).

Votaron entonces 318 760 electores, todos masculinos, con el siguiente resultado:¹⁵

Partido Colorado,	165 827 votos.
Partido Nacional,	150 642 votos.
Partido Comunista,	2 291 votos.

Por ello, al primer lema (partido) se le adjudicó la presidencia de la República (contra cuya candidatura triunfante se había publicado el manifiesto del Comité de Vigilancia Económica), y dos consejeros electos por la mayoría. El tercer consejero, de la minoría, fue adjudicado a una fracción distinta a la del candidato presidencial nacionalista recomendado por dicho manifiesto. En cuanto a los

¹⁵ J. T. Fabregat. *Elecciones uruguayas*. Montevideo, Poder Legislativo, 1950, pp. 133 y ss. Todos los datos relativos a elecciones que se citarán, provienen de esta obra, en varios volúmenes, que abarcan desde 1925 a 1966.

cargos de senadores, cuatro correspondieron al Partido Nacional y dos al Partido Colorado, lo que se explica por tratarse, en este caso, de circunscripciones departamentales y no nacionales.

Ahora bien, ninguno de los electos se podría considerar "izquierdista", siquiera levemente; para caracterizarlos a la europea, se dirían "moderados", con matices populistas en alguno más que en otro, rasgo dominante en el Partido Colorado Batllista, que recogió las mayorías.

Al año siguiente (1931) se realizaron elecciones de representantes nacionales (diputados), concejos departamentales y asambleas representativas (ambos órganos municipales) y juntas electorales (departamentales). Ateniéndonos a los resultados de la primera, de representantes, tenemos que de las 123 bancas, 55 fueron adjudicadas al Partido Nacional más 1 al Partido Blanco (segregado del primero); 45 al Partido Colorado, más 7 al Riverismo, 5 al Sosismo y 3 al Vierismo, fracciones las tres destacadas del primero; subtotal, 56 a los Blancos y 60 a los Colorados; las restantes fueron adjudicadas así: 3 a los cívicos (católicos), 2 a los comunistas y 2 a los socialistas.

Con relación a la Asamblea Representativa de Montevideo, importante para nuestro estudio, por tratarse de la ciudad capital, la más densamente poblada del país y por lo tanto la más industrializada, urbanizada, etcétera, los resultados fueron estos:

Partido Colorado	40		
Partido Riverista	4		
Partido Sosista	3		
Partido Vierista	2	Subtotal	49
Partido Nacional			31
Partido Comunista			4
Partido Socialista			4
Partido Unión Cívica			3
			—
		Total	91

Si vamos a calificar las tendencias políticosociales de los electos, por lo que conocemos personalmente de su actuación —procedimiento muy discutible y subjetivo— los "izquierdistas" definidos no llegan al 10% del total de los cuerpos representativos. Eso, por otra parte, tampoco bastaría para calificarlos desde el punto de vista de la estratificación social, pues, por lo que sabemos de sus ocupaciones

(profesionales-liberales, funcionarios públicos, profesores) pertenecían a algún estrato de las clases medias.

Finalmente, en 1932 se realizaron las últimas elecciones bajo el gobierno constitucional derrocado por el golpe de Estado de 1933; se debía elegir a un tercio del Consejo Nacional de Administración y un tercio del Senado. Para estos últimos, la ley había cambiado el régimen electoral, que de indirecto (colegios electores) pasaba a ser directo o por el pueblo, a mayoría simple de votantes, mediante el sistema del doble voto simultáneo y con las garantías del sufragio. Las elecciones fueron ganadas otra vez por el Partido Colorado, que por eso se adjudicó dos cargos de consejero y cuatro de senador. Hubo una fuerte abstención de las fracciones adversas al colegiado, particularmente dentro del Partido Nacional; los votos pertenecientes a socialistas y comunistas no alcanzaron, para esta elección (nacional), a once mil en el conjunto de 160 625 votantes, y para la de senadores (departamentales, como se dijo) no llegaron a 800 sufragios. Todo lo cual, en suma, confirma lo que hemos expresado con relación a la procedencia social (estratificación) de los gobernantes y legisladores electos, y a las preferencias ideológicas de los votantes, según las clases sociales a que presumiblemente pertenecían.

2. Reformas electorales

Durante la década que estudiamos, y antes, tuvieron lugar varias reformas electorales, de distinto alcance y significado. Unas, como vimos, solamente variaron el procedimiento electoral, que de indirecto pasó a directo (elección de senadores); otras tuvieron como resultado ampliar la participación cívica, haciendo entrar como electores a las mujeres y a los extranjeros casados y con arraigo, aunque éstos no tuvieran carta de ciudadanía.

Todas esas reformas, y otras abiertamente electoreras, solamente perseguían fines políticos, o sea de reforzamiento de las posiciones de los partidos tradicionales, mayoritarios según vimos. Si el aumento de la participación política tuvo efectos sociales (no podía ser de otro modo), ello fue secundario en los propósitos de los autores de cada reforma o modificación del régimen electoral.

Se alcanzó así el estadio llamado por G. Germani de "democracia representativa con participación ampliada", previa a la de "participación total", estadio éste aplazado desde finales de los años cincuenta por la crisis que el país soporta desde entonces. Veamos ahora con algún detalle esas reformas.

La modificación del régimen electoral del Senado (19 miembros, uno por cada Departamento de la República) tenía como finalidad aparente uniformar los procedimientos electorales, habiéndolos todos directos. Pero el verdadero motivo, experimentado por los partidos tradicionales, radicaba en el interés de evitar sorpresas por coaliciones accidentales formadas en el seno de los colegios electores, formados por miembros pertenecientes a fracciones distintas de los mismos partidos, momentáneamente distanciadas y dispuestas a combinaciones con el adversario tradicional, para favorecer a la postre a un tercero o un "neutral"; además, y no era poca desventaja, el senador así elegido se consideraba "independiente" y poco dispuesto a responder a las solicitudes de la "solidaridad partidaria".

Desde el punto de vista sociológico, la modificación del régimen electoral significaba un progreso; el procedimiento del colegio elector era un resabio del estadio caracterizado como "democracia representativa con participación limitada u oligarquía", etapa en que también el presidente de la República era elegido indirectamente, por el gran colegio elector que era la Asamblea General Legislativa, formada por su predecesor (llamado por eso el "Gran Elector") a ese efecto. Pero en el estadio siguiente, cuando las más altas magistraturas de gobierno —presidente de la República y Consejo Nacional de Administración— eran elegidas directamente por el pueblo (ciudadanos, se entiende), no había razón para mantener ese procedimiento, que además de arcaico solía dar resultados contraproducentes.

Otra reforma de importancia es la que condujo, por modificaciones sucesivas, unas legales (incluso constitucionales), otras convencionales o de acuerdo entre los partidos tradicionales, a la neutralización de la Corte Electoral. Ésta debía componerse de miembros nombrados por los partidos y de miembros "neutrales". El progreso consistió en que el número de éstos llegase a ser mayor (cinco) que el de aquéllos (cuatro).

De la mayor trascendencia política y social ha sido la extensión del sufragio a la mujer, establecido, de acuerdo con la Constitución de 1917, por la Ley del 16 de diciembre de 1932, y cuya primera manifestación tuvo lugar, una vez formados los padrones respectivos, en las elecciones de 1938. Lamentablemente, no se tienen medios para verificar las tendencias del voto femenino en cada comicio, salvo indirectamente, pues no se establece siquiera el número de hombres y de mujeres que concurren al mismo. Se conjetura, a lo sumo, sobre sus inclinaciones tradicionalistas (como las de los hombres) dado que la situación de los partidos mayoritarios no ha variado

desde que la mujer empezó a votar. La alternancia de aquellos en el ejercicio del poder, no podría, por lo tanto, ser atribuida a la influencia del voto femenino.

Incluso, parece que las mujeres están conformes con el predominio abrumador de los hombres en los cargos electivos y las más altas posiciones burocráticas (cargos de confianza). Parecería, para decirlo con otras palabras, que con el voto femenino, solamente haya tenido lugar una ampliación cuantitativa del cuerpo electoral; a tal punto subsisten las correlaciones sexo-edad-ocupación-clase social a partido político.

Con todo, la principal reforma electoral, entre todas, es la famosa Ley de Lemas, así conocida aunque algunas de sus disposiciones sean constitucionales, pues a ella se debe la subsistencia formal de los partidos tradicionales.

El antecedente remoto de dicha ley es el sistema del doble voto simultáneo, con arreglo al cual se vota al mismo tiempo, o por el mismo sufragio, por un partido (lema) y por un candidato o grupo de candidatos; por lo tanto, es posible votar, dentro de un mismo lema (partido) por otro u otros candidatos o grupos de candidatos, siempre que éstos se distingan del primero por un sublema (nombre de una fracción del partido bajo lema); y aun es posible una ulterior separación, dentro del sublema, mediante distintivos u hojas de votación diferentes. De esa manera, cada partido se puede dividir o despedazar hasta el desmenuzamiento, sin que pierda un solo voto válido para ganarle al adversario.

Ahora bien, el problema nace de aquí: ¿a qué fracción pertenece el lema (partido)? Esto es lo que vino a decidir la Ley de Lemas promulgada el 5 de mayo de 1934, y complementada por la del 11 de diciembre de 1935, sancionadas ambas bajo el gobierno surgido del golpe de Estado y por cuerpos legislativos electos con ausencia de amplias fracciones de los partidos existentes.

Según la primera ley citada, el lema pertenece exclusivamente a la mayoría de los componentes (votantes) del partido, representada por la mayoría de los legisladores elegidos bajo el mismo y expresada en una reunión convocada expresamente al efecto. Por la segunda ley citada, se declara personas jurídicas a los partidos políticos que de acuerdo con la Ley del 5 de mayo de 1934 tengan la propiedad del lema partidario.

La principal finalidad perseguida, fue la facultad de autorizar o negar el uso del lema partidario, a una o todas las fracciones disidentes de la fracción "propietaria" del lema; o sea, la posibilidad de

decretar la prescripción partidaria, aun a riesgo de perder la próxima elección frente al adversario tradicional.

Otra consecuencia, no menos importante, y en realidad la que ha prevalecido, es la posibilidad de reunir bajo el lema tradicional a fracciones que antes le pertenecían, pero que por motivos políticos o históricos venían votando separadamente, bajo otros lemas.

Generalmente, como decíamos, ha predominado la preocupación de luchar con todos los efectivos posibles contra el adversario tradicional, y aun contra los no tradicionales. De ahí que el lema partidario sea autorizado a todas las fracciones, subtradicionales y "cooperativas" de votos que por algún motivo reúnen un número de sufragios y, sea por cociente entero, sea por restos (2º y 3er. escrutinio), confían alcanzar una posición electiva (por lo común de diputado).

Se advierte, por lo dicho, que también su parte de "aliciente" y de "culpa" la tiene también el sistema de representación proporcional integral, que rige para los cargos legislativos hasta que quede uno de éstos por adjudicar y un resto de votos por contemplar.

El resultado es así un gobierno y una legislatura cuyos miembros sólo tienen en común la participación nominal en un partido, y en particular un interés concreto, que es la posición personal y la vinculación con el grupo de electores (concurrentes más o menos asiduo o identificables al "club" o "comité partidario") que propició su elección. Esos electores, por su parte, tratan también de alcanzar algún objetivo particular: empleos, resoluciones administrativas, exenciones fiscales, pensiones, leyes favorables, sin importárseles los efectos que ello pudiere ocasionar sobre la sociedad global u otros grupos particulares (incluso la propia clase social).

Se diría que no existe, o cuando menos falla, la conciencia social global, y que la correspondiente al grupo o clase en particular se va distorsionando, presionada por las expectativas individuales, familiares o locales.

Más clara, como expresión de conciencia de clase o posición socio-económica, es la actuación de otros grupos, que han buscado, sea por amenazas subversivas, sea por procedimientos electorales, la seguridad, al menos momentánea, de las clases a que pertenecen sus dirigentes omnímodos.

De este tipo han sido las insinuaciones subversivas del saravismo (fracción del nacionalismo) antes de la elección presidencial de 1930, y las del herrerismo (otra fracción del nacionalismo) con pos-

terioridad a esos comicios que perdió su candidato epónimo; manifestaciones ambas desautorizadas por dirigentes del Partido Nacional.

De ese tenor ha sido, también, la actividad del movimiento ruralista asociado al Comité de Vigilancia Económica, así como el pacto del riverismo (fracción colorada anticollegislista) con las autoridades batllistas del Partido Colorado, pacto según el cual bastaba que aquél alcanzara el 17½% de los votos de este partido, para que el candidato batllista triunfante renunciara y el candidato riverista pudiera así obtener la primera magistratura.

En su lugar, se ha mostrado la clara vinculación de dicho Comité y de las clases altas, dueñas de los medios de producción e intercambio (grandes ganaderos y agricultores, industriales, comerciantes, banqueros, rentistas), fracciones “derechistas” en la política, con los candidatos partidarios —después de la elección perdida— de la subversión y el golpe de Estado. “Las fuerzas ultraconservadoras que representaba (ese comité) —dice G. Gallinal— fueron parte en la empresa de ruptura del orden jurídico nacional y acompañaron la abstención y encararon con aplauso y esperanza el advenimiento de la dictadura.”¹⁶

Llegaron incluso, como lo dice el autor citado, a *impresionar* a una parte de las clases medias, aunque la mayoría de éstas y de las clases populares estuvieran siempre vinculadas a las fracciones populistas y progresistas de los partidos tradicionales, y “en la ciudad y en el campo fuera hostil a la aventura desde la primera hora” (*ibidem*).

Es de toda evidencia, sin embargo, que sin el beneplácito del presidente de la República electo en los comicios de 1930, la agitación que preparó el golpe de Estado no habría pasado de cierto punto; y que sin su participación principalísima en “la aventura”, ésta no habría tenido lugar.

El partido a que pertenecía el presidente, el batllismo, se encontraba social y políticamente en contraposición con las fuerzas conservadoras; su candidatura, incluso, había sido condenada y combatida por las clases opulentas, que apoyaban a las fracciones adversarias. ¿Cómo fue entonces posible esa alianza entre sectores sociales y políticos diferentes, y entre políticos hasta ayer adversarios encarnizados?

¹⁶ G. Gallinal, *op. cit.*, p. 320. Otra fuente documental, desde 1935 en adelante, lo constituyen los volúmenes editados por V. Pérez Pallas. *El libro de Bernardo García y La gran mentira*. Montevideo, 1938 y siguientes.

IV. LA CRISIS POLÍTICA DE LOS AÑOS TREINTA

1. *El golpe de Estado de 1933*

El acontecimiento ostensible más importante de los años treinta ha sido el golpe de Estado del 31 de marzo de 1933; más que la crisis económica, que por ese año estaba todavía en una de sus fases agudas; más que la reforma constitucional, que fue su pretexto más reiterado.

El golpe fue ejecutado por el presidente de la República, a quien apoyaron sus recientes adversarios, excandidatos a dicha magistratura. A consecuencia del mismo fueron disueltos el Consejo Nacional de Administración, cuyos componentes pertenecían a las fracciones partidarias contrarias al presidente y a sus ocasionales adictos, las cámaras legislativas, mayoritariamente partidarias del Consejo y contrarias a las "medidas extraordinarias" adoptadas por el presidente en la víspera del golpe, y los cuerpos municipales (concejos departamentales y asambleas representativas).

La fuerza ejecutora del acto fue la policía, la cual, además, contó con la pasividad de las fuerzas armadas, cuyos efectivos estaban, como formalmente ocurre en las constituciones latinoamericanas, bajo el mando supremo del presidente, aunque para su comando efectivo se necesitaba la autorización de la Asamblea General Legislativa, otorgada por dos tercios de votos.

Según los partidarios o los adversarios del suceso, éste ha sido llamado "revolución de marzo" o "del machete", y también *cuartelazo*; técnicamente, sin embargo, no fue más que eso, un golpe de Estado.

La "doctrina" revolucionaria está expuesta en una serie de discursos del presidente-dictador,¹⁷ y en artículos periodísticos escritos por él mismo o por sus seguidores.¹⁸ Hechos dispares, como la crisis económica, los defectos de la Constitución vigente entonces, los "reclamos del pueblo", etcétera, hasta motivaciones psicológicas (como la situación política y humana de sometimiento, si no de humillación, en que querían poner al jefe de Estado los dirigentes partidarios, pretendiendo que gobernase de acuerdo con ellos) fueron invocados como factores que determinaron el acto de fuerza.

Examinadas objetivamente las circunstancias del mismo, el golpe

¹⁷ G. Terra. *La revolución de marzo*. Buenos Aires, Gleizer, 1938.

¹⁸ Ver las colecciones de *El Pueblo*, *El Debate* y *La Mañana*, de esos años (1933 a 1935). Confrontar con las de los diarios y periódicos opositores, de esa época, tanto de la capital como del interior del país.

de Estado fue simplemente la salida política forzada por los problemas sociales y económicos, sobre los cuales venían actuando los poderes constitucionalmente encargados de hallarles solución, esto es, los derrocados Consejo Nacional de Administración y Poder Legislativo.

El país había pasado por situaciones semejantes, en las décadas precedentes; pero las mismas habían sido resueltas oportunamente, ya por intervenciones del Estado, ya por pactos entre los partidos. Claro está que en todos los casos se había tratado de soluciones transitorias; pues los problemas tenían raíces estructurales que reclamaban medidas de este orden, y no simples decisiones políticas.

En el entendimiento de todos estaba, en 1933, que los "viejos" problemas habían reaparecido, con más dramatismo, debido a las características de "la crisis"; esos problemas, por ser sociales, afectaban a la estructura de poder de la sociedad, de la cual el poder político es uno de sus aspectos, pero no todo aquél.

Para ser históricamente exactos, sería preciso remontarse al periodo final de las guerras civiles, en las cuales se combatía por algo más que por afirmar la autoridad del gobierno, por un lado, o conquistar la libertad política, por el otro. Al terminar aquéllas, la victoria del país consistió en que los problemas nacionales, disputados en esas luchas fratricidas, se dilucidarían en adelante políticamente, mediante acciones (electorales, parlamentarias, administrativas, convencionales) de esa índole. Pero los mencionados problemas no quedaron resueltos por el triunfo del Partido Colorado, ni por la pacificación aceptada por el Partido Nacional, ni por la organización política articulada en la Constitución y en las leyes que siguieron. La estructura del poder social quedó como antes, afirmada en sectores militantes en ambos partidos tradicionales.

El cambio social auspiciado por el gobernante vencedor de las luchas civiles era resistido, no solamente por el partido adversario, sino también por dirigentes y votantes de su propio partido. La fracción de éste que le apoyaba, con ser la mayoritaria, más el grupo, minoritario, del partido contrario, y otras opiniones independientes, no fueron nunca suficientes para imponer la reforma en todas las estructuras de la sociedad global.

A comienzos del siglo (1904), en que terminan las guerras civiles, el país conservaba la estructura agropecuaria, de tipo más bien colonial, con tendencias al estancamiento, que hemos descrito en otros lugares de este trabajo. Para modificar este estado de cosas, significamos también que fueron articulados varios proyectos evolutivos:

inmigración, colonización, expropiación con indemnización, impuesto progresivo, y otros. Todos fracasaron, o —los que llegaron a ser sancionados— alcanzaron una aplicación reducida para la vastedad de lo que se necesitaba.

Todos comprendían que las crisis frecuentes que debía enfrentar la producción agropecuaria, sobre todo por las fluctuaciones del mercado internacional y el débil poder de compra del mercado interno, sólo cesarían, o al menos se espaciarían, permitiendo la industrialización del país, siquiera moderadamente, en variedad y en extensión. Pero asimismo se advertía que la reforma agraria y la modernización industrial, en cuanto afectaban el equilibrio del poder, no podrían marchar sin las “compensaciones” adecuadas, o sin las debidas “garantías” políticas. Dicho de otra manera, no habría cambio, si con éste se afectaba la propiedad de la tierra, si se rebajaban los precios del ganado y de la lana, si de algún modo se alteraban los márgenes económicos de la comercialización de los productos naturales. Y con respecto a los capitalistas —nacionales o extranjeros— la industrialización vendría si se les aseguraba cierto monopolio del mercado interno, protección adecuada a la concurrencia desde el exterior, ventajas diversas como admisiones temporarias o retornos, exenciones fiscales, y otras disposiciones favorables.

Esos beneficios y garantías se dieron. Al comienzo de toda política económica de esa especie, es posible otorgar a unos y otros las ventajas que solicitan; pero al crecer y aproximarse sus respectivos radios de influencia, ya no se puede contemplarlos sin sacrificar una parte de aquéllas, o sin imponer a un tercero —el consumo, el Estado, o ambos— las cargas del nuevo arreglo.

Se ve entonces bien claro, que es todo un problema estructural el que se ha planteado, al comenzar los treintas, a las clases partidarias del *statu quo*, empeñadas en mantener, si no aumentar su participación en el ingreso nacional; para ello debían defender la estructura del poder social y político, y combatir toda eventual ruptura del equilibrio entre las distintas clases sociales y grupos ocupacionales. ¿Cómo llevar a buen fin, para las clases conservadoras, esa lucha, sino concentrándola en el campo político, donde contaba con hábiles y tenaces defensores?

La conversión, mejor dicho, el disfraz de la cuestión social en un problema político fue la obra de Gabriel Terra, presidente de la República, a quien como electo por la mayoría del batllismo le tentaba recoger la herencia política dejada por Batlle y Ordóñez, a su fallecimiento en 1929. Además, conforme a la Constitución (1917) al cargo

obtenido no le correspondían todas las competencias ejecutivas, pues las de carácter administrativo y financiero le habían sido atribuidas al otro órgano del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Administración; pero desaparecido éste, la presidencia asumiría todos los poderes.

Lo fue también de L. A. de Herrera, caudillo del Partido Nacional y de P. Manini Ríos, jefe de la fracción anticolegialista del Partido Colorado. El primero tomó a su cargo la campaña de desprestigio de las instituciones, que muy poco antes elogiara, y de incitación al presidente, para que acatara el mandato primario de la soberanía... El segundo orientaba el movimiento de las fuerzas agropecuarias, cuyo comando había sido trasladado de la federación gremial a ese comité *ad hoc*; para la vigilancia económica y la visibilidad política, que ha sido mencionado.

Las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Administración parecían comprometedoras o al menos riesgosas, para las clases pudientes. En su gran mayoría, se trataba de disposiciones fiscales, de exacción a los poderosos, de contención de gastos suntuarios y de trabas a operaciones especulativas, destinadas a contener el déficit presupuestal y de la balanza de pagos, con muy poco para repartir a los desposeídos. Por eso, la obra de los poderes constitucionales responsables fue mirada con animadversión por unos, y con indiferencia o pasividad por otros. Frente al Consejo Nacional de Administración, autor y ejecutor de la política económica y financiera del régimen, la presidencia de la República aparecía como una reserva de poder para contrarrestar aquellas medidas, en el caso de que la Asamblea General Legislativa o, en su defecto, el pueblo, directamente, lo autorizara a ello.

El presidente capitalizaba así, en su favor, el descontento y la prevención que motivaban los actos del Consejo, para conjurar la crisis, y concitaba las esperanzas de alivio que por diferentes motivos expresaban los grupos económicamente poderosos y las clases populares. Pero en lugar de aplicar esos sentimientos en sentido favorable a la confianza pública en las instituciones, colaborando con el Consejo Nacional, acentuó las críticas que a éste le dirigían los afectados por su gestión y se puso en la situación de "hombre providencial" o señalado por el destino para salvar a la República.

La reforma constitucional apareció entonces como la medida que permitiría apartar al Consejo Nacional del poder, y autorizar al presidente a asumir las competencias de éste, para cambiar la política económica y social condenada. La solución política era así el prerre-

quisito de las soluciones económicas y sociales reclamadas por todas las clases sociales.

La Constitución sancionada en 1934 restableció, en consecuencia, la organización ejecutiva unipersonal o presidencial, y su titular reelecto —el mismo que la había promovido— pudo ejercitarlas a sus anchas. Pero en vez de aplicarlas, unido a los grupos políticos que lo acompañaron, para alcanzar los fines enunciados en su campaña reformista, las empleó para excluir a sus adversarios, opositores, de toda posibilidad de éxito electoral; a tal punto fueron deprimentes las condiciones que buscó imponerles. La respuesta, como habremos de verlo, fue la abstención y la conspiración revolucionaria.

Es más, para castigar a la oposición y evitar cualquier actividad política dentro de las condiciones que imponía, sobre todo impedir la coalición de las fuerzas adversas; la recién sancionada Constitución fue objeto de enmiendas (1936, 1938), algunas de ellas contradictorias entre sí, por lo que debieron ser anuladas por un fallo de la Corte Electoral, no obstante recibir las votaciones plebiscitarias correspondientes.

Las fracciones dominantes, asimismo, se habían asegurado la “propiedad” y la personería de los partidos a que pertenecían, votando en Cámaras la famosa “ley de lemas” (1934, 1935), a que se ha hecho mención.

Con todo, las fuerzas opositoras hallaron la manera de influir sobre la situación política creada por las primeras escisiones del oficialismo, en punto a suceder a G. Terra en la presidencia de la República, “arrimándole” a uno de los candidatos, parte de sus votos. Ese candidato, el general A. Baldomir, había prometido públicamente reencauzar al país por la vía de la conciliación política, a fin de que cesara la abstención de las fracciones opositoras y éstas pudieran, bajo una Constitución y leyes democráticas, reconquistar las posiciones a que tuviesen derecho.

Esa explicación tiene el triunfo de dicho candidato en las elecciones de 1938, oportunidad en que, como lo recordamos, votaron por primera vez las mujeres. Y a la luz de ese triunfo se explica también el abortado motín de la madrugada del 29 de marzo de ese año, cuya inspiración se atribuyó al deseo de evitar que el candidato triunfante, una vez en el poder, cumpliera sus propósitos; los agentes del suceso, en efecto, formaban parte del círculo más cercano y adicto al todavía presidente Terra.

Entretanto, se aceleraba la disgregación de los partidos oficialistas, y se producían los primeros enfrentamientos entre Baldomir y

el herrerismo, con quien, en virtud de la Constitución de 1934, el primero estaba obligado a gobernar y legislar.

En 1940, el presidente Baldomir forma una Junta Consultiva para la reforma constitucional con delegados de todos los partidos, excepto del herrerismo, el cual, no obstante sus cargos dentro del gobierno y el Poder Legislativo, pasa a la oposición. Al año siguiente renuncian los ministros herreristas, por lo que el gabinete se volvió monocolor. En las Cámaras Legislativas, herreristas y blancoacevedistas (éstos eran sucesores de la fracción más adicta al expresidente Terra) redoblan su oposición. El presidente, entonces, se vuelve a las fracciones blanca (nacionalista independiente) y colorada (batllista) desalojadas del poder en 1933, y con sus representantes forma la Junta Consultiva de Reforma Constitucional. Por entonces, sólo le queda a Baldomir menos de un año de gobierno constitucional.

Antes que ese periodo concluya, el 21 de febrero de 1942, el presidente disuelve las cámaras legislativas y crea un Consejo de Estado asesor del Poder Ejecutivo. De los partidos invitados a integrarlo, solamente acepta el batllismo, con reservas; el nacionalismo independiente y la unión cívica no aceptan. Las elecciones generales, obviamente, son aplazadas hasta fin de año, en que finalmente se realizan.

Entretanto terminan los trabajos de la reforma constitucional y el proyecto respectivo es publicado. Asimismo, los partidos proclaman sus candidatos; dentro del Partido Colorado se produce una convergencia de opiniones favorable a la lista de acuerdo, que triunfa en los comicios. Con el ascenso de J. J. Amézaga a la presidencia de la República, se cierra el ciclo abierto por el golpe de Estado de 1933.

En adelante habrá reformas constitucionales, sin actos de fuerza explícitos; incluso se adoptarán medidas extraordinarias, pero éstas serán aprobadas por la Asamblea General, o levantadas por el Poder Ejecutivo antes de que aquélla encuentre la oportunidad de manifestarse al efecto.

Así se van renovando los gobiernos y legislaturas, e incluso alternándose los partidos políticos tradicionales en el poder, sin ruptura de la continuidad institucional.

Se dio asimismo un doble cambio de régimen constitucional, sin mayores consecuencias: la Constitución de 1942, una de las mejores, técnicamente, que haya tenido el país, no duró diez años; fue reemplazada por la de 1951, que con acuerdo del herrerismo restableció el colegiado ejecutivo, pero entonces en forma integral. Esta carta,

a su vez, fue sustituida por la Constitución de 1967, que es la que actualmente rige al país, cuya novedad principal es la reinstalación de la presidencia de la República como órgano ejecutivo único.

Según se ha podido mostrar, todas las preocupaciones públicas son para la política. Las estructuras sociales y económicas experimentan poco cambio, el suficiente para salir del paso y aplazar el desencañamiento de la crisis generalizada, que finalmente se ha producido. Ha resultado más fácil cambiar la Constitución que sancionar una ley de reforma agraria, o un ordenamiento económico-financiero justo y equitativo, que auspicie el desarrollo armónico del país y la cooperación de los grupos sociales que lo integran.

2. Actos de represión y violencia gubernamentales

La década, con posterioridad al golpe de Estado de 1933, fue pródiga en actos de represión y violencia gubernamentales. Las detenciones de gobernantes, legisladores y ciudadanos opositores comenzaron ese mismo 31 de marzo, a pocas horas de rechazadas por la Asamblea General Legislativa, las "medidas extraordinarias" tomadas en la víspera, por el presidente. Un solo consejero nacional no pudo ser aprehendido, Baltasar Brum, que resistió, con armas, la acción de la policía; rechazó asimismo refugiarse en alguna legación extranjera; y finalmente se suicidó.

Numerosos detenidos fueron alojados en calabozos comunes y allí torturados; después se les dio la opción del exilio, pero en los hechos equivalía a la deportación. Los que prefirieron quedarse, o pudieron escapar a las comisiones policiales lanzadas en su búsqueda, se dieron a la conspiración, o a la manifestación pública reprimida brutalmente por las autoridades.

La prensa fue sometida a censura, y en oportunidades clausurada. Aparecieron nuevos órganos de publicidad opositores, y fueron sometidos a idénticas persecuciones.

La ciudadanía comparó la dictadura nacional con las tiranías extranjeras (latinoamericanas y europeas) de entonces, cuyo común denominador era el *fascismo*. Sus manifestaciones contra éstas fueron, por ello y por simpatizar los gobernantes con sus representantes, prohibidas y reprimidas.

La prensa situacionista auspiciaba la persecución de los rebeldes y la benevolencia, incluso el premio, para los sumisos. Se asistió a espectáculos deprimentes y a tremendas desilusiones. La nota la dio el diario oficialista *El Pueblo*, con un editorial que elevaba a doc-

trina del régimen el castigo a la altivez cívica y el incentivo a la sumisión. El título de ese editorial fue, precisamente, "Amansarse para vivir, o rebelarse y morir"; para los que optaban por lo último, habría dictadura; para los otros "dictablanda".

La ciudadanía, por cierto, no aceptó la cínica definición de la nueva convivencia impuesta por la dictadura, e hizo frente a los esbirros de ésta, en la Universidad y en los caminos.

Los estudiantes con el Decano E. Frugoni, manifestando contra la situación, "tomaron" la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; a consecuencia de ello, el digno profesor fue detenido y luego deportado a Buenos Aires.

Los políticos opositores expresaban su resistencia en todos los planos; J. C. Grauert, Francisco Guichón y P. M. Minelli enfrentaron a la policía en plena carretera, siendo heridos; poco después, el primero moría a consecuencia de las lesiones, sin recibir la asistencia médica debida.

Unas semanas después de plebiscitada la Constitución de 1934, se dio una amnistía a procesados, desterrados y emigrados políticos. Ello permitió el regreso a la patria de numerosos ciudadanos, quienes continuarían aquí sus tratativas para derrocar a la dictadura ahora convertida en gobierno constitucional.

A consecuencia de una huelga de gráficos y periodistas contra todos los diarios (situacionistas y de oposición) asociados en la patronal respectiva, fue limitada la entrada de diarios y revistas extranjeros, y restringida la libertad de prensa. La represión sindical, que nunca había cesado, recrudeció.

Al año siguiente, como respuesta al movimiento de enero, encabezado por Basilio Muñoz, recomenzaron las persecuciones a los partidos y ciudadanos opositores. Un número de éstos fue confinado en la Isla de Flores, exlazareto, de donde posteriormente fueron deportados a Buenos Aires. Nuevas clausuras de diarios precedieron a la Ley de Imprenta (28 de junio de 1935), cuyas disposiciones, en parte, rigen todavía.

El ánimo liberticida de esa ley trascendió a las reuniones públicas, que seguían severamente fiscalizadas por la policía. Fue así que una ley de 1936 prohibió toda reunión no autorizada para hacer demostraciones o críticas favorables o desfavorables a la política de un Estado extranjero; y el Poder Ejecutivo negó al Ateneo el permiso para realizar un acto público de homenaje a las víctimas de la represión desatada en Brasil.

El gobierno acompasaba sus actos persecutorios a la ola de reac-

ción mundial, de la que se sentía afín e incluso simpatizante con sus protagonistas y enviados. Propició así la Ley de inmigración de 1936, modificativa de la ya restrictiva de 1932, acentuando las limitaciones y prohibiciones hasta la expulsión de extranjeros, aunque tuvieran carta de ciudadanía uruguaya, en los casos que los mismos formaran parte de asociaciones o movimientos que por la violencia tendiesen a destruir las bases de la nacionalidad.

3. *Movimientos de descontento*

La resistencia contra el golpe de Estado de 1933 comenzó en la prensa y las manifestaciones populares, desde que se tuvo la certidumbre de su proximidad; culminó con un manifiesto, publicado en el diario *El Día*, del 30 de marzo, debido a cincuenta ciudadanos cuyos nombres figuraban al pie y entre los que se contaban miembros del Consejo Nacional de Administración y del Poder Legislativo, censurando la conducta del presidente Terra y expresando sus temores sobre la inminencia de la dictadura. En la tarde de ese mismo día, el gobernante aludido adoptó las "medidas extraordinarias", comunicándolas al Parlamento.

La Asamblea General, en cuyo seno predominó la condenación de los acontecimientos, después de agitada sesión resolvió, por 64 votos contra 42, que la presidencia de la República dejase sin efecto, de inmediato, las medidas extraordinarias tomadas en la víspera.

La respuesta del ejecutivo censurado, no se hizo esperar: instaló su despacho en el cuartel de Bomberos, y desde allí ordenó la disolución de los poderes constitucionales adversos, la detención de la mayoría de sus miembros, y comenzó a gobernar dictatorialmente.

A pesar de que el rumor del golpe de Estado se había difundido y transformado en temor antes de su acontecimiento, la población quedó estupefacta al tener la certeza de su ejecución. Pero, sumado a ésta el llamamiento que significó el suicidio de Brum, la reacción de la ciudadanía fue tomando consistencia y expresándose por los distintos actos que han sido referidos. El país llegó así a dividirse en partidarios y adversarios del régimen *de facto*, entre "situacionistas" y "opositores".

Los últimos hicieron de la prensa, la radio, la calle, las instituciones civiles, otros tantos focos de agitación y lucha contra la dictadura. Lamentablemente, no era mucho más lo que podían hacer, privados como estaban de recursos materiales, de instrucción en el

manejo de las armas, de organización, de preparación, en suma, para la insurrección.

Sin embargo, algunos conatos de levantamientos se registraron. Uno de ellos fue preparado a finales del mismo año 1933. En 1934 existió una conspiración en el ejército; y a principios de 1935 tuvo lugar el movimiento conocido por "revolución de enero". Todos ellos abortaron o fracasaron. Sobre todo el último, efectuado a la manera de las guerras civiles históricas, y al que la aviación militar del régimen no tuvo mayor trabajo en desbaratar.

Se llegó también al atentado personal contra el dictador, en ocasión de uno de los actos de agasajo a Getulio Vargas, presidente del Brasil, que por entonces visitaba oficialmente el país.

Entre las manifestaciones callejeras más importantes, es preciso destacar la que tuvo lugar en ocasión del sepelio de J. C. Grauert, muerto por la policía en la carretera a Minas. La multitud, llevando a pulso el féretro, desvió el cortejo para depositar aquél al pie de la Estatua de la Libertad, en pleno centro de Montevideo, sin arrendarse por la represión policial.

Otra manifestación contra el régimen, preparada por batllistas y nacionalistas independientes (agosto de 1934) fracasó por obra de una huelga de gráficos, en el transcurso de la cual el diario situacionista *El Pueblo* publicó el convenio suscrito por las empresas editoras de los diarios montevidianos, oficialistas y opositores, en defensa de sus intereses económicos.

Le cupo a la Universidad, en pie de resistencia desde el primer momento, lograr la primera victoria contra el régimen. Éste había hecho sancionar por la Comisión Legislativa Permanente de la Asamblea Deliberante (órgano sucedáneo de las cámaras disueltas) una ley orgánica de la Universidad (2 de marzo de 1934), cuya nota saliente era la designación del rector y los decanos por el Poder Ejecutivo. En realidad, este órgano de gobierno tenía ya, bajo la Constitución abrogada, cierta participación en el nombramiento del rector. Pero ahora las condiciones habían cambiado; a tal punto, que la oposición del claustro universitario obligó al gobernante a dejar en suspenso la aplicación de la ley y a aceptar como rector al doctor Carlos Vaz Ferreira, propuesto por el Consejo Central Universitario a instancias de aquel órgano, el claustro, de creación extralegal y de existencia espontánea.

Otra institución, el Ateneo de Montevideo, se constituyó también, desde el primer instante, en un digno baluarte para la reivindicación

de las libertades conculcadas, no atreviéndose el gobierno a clausurarlas.

Para terminar esta enumeración, un gigantesco desfile, de más de 200 000 personas (mitin de julio, 1938), recordó al presidente Balmir su promesa de nueva constitución y leyes democráticas, a que se ha hecho referencia precedentemente.

Debe tenerse presente, que si bien todos esos actos y expresiones tenían una apariencia política, las protestas y reclamaciones tenían un inequívoco carácter social. Las reivindicaciones de esta índole, como las económicas y laborales, no tenían otra manera de exponerse que ésa y los artículos periodísticos, aparte las manifestaciones sindicales. De ahí sus proporciones, que denunciaban la participación popular y la demanda incontenible de cambios en la situación.

La acción más importante, desde el punto de vista de sus efectos políticos, fue, sin embargo, la abstención electoral decretada por los partidos antigolpistas, negándose a concurrir a las elecciones convocadas por el gobierno surgido del golpe de Estado. Tal negativa a cohonestar una de las principales decisiones del gobierno, obró como una condenación permanente y enérgica al régimen y sus sostenedores.

Además, los hechos de todo orden que venían produciéndose en el país, y fuera de éste, sumaban su eficacia contra el régimen, mostrando, ya la inutilidad del golpe de Estado, ya los motivos válidos de la abstención. La crisis económica iba cediendo, y en su lugar aparecían nuevos estímulos al trabajo y la inversión reproductiva, todo lo cual era considerado como efecto de las medidas adoptadas oportunamente por los poderes constitucionales derrocados por la dictadura. Además, la opinión pública mundial iba acentuando su condenación del fascismo, y se manifestaba, cada vez con mayor vigor, contraria a los gobiernos de fuerza.

Veamos ahora las cifras electorales que abonan esas afirmaciones nuestras.

El Registro Cívico Nacional, en 1930, alcanzaba a la cifra de 398 169 ciudadanos hábiles para votar, habiéndolo hecho un total de 318 760. Al año siguiente, de 419 271 inscriptos votaron 309 048. En el subsiguiente (1932) hubo, como se dijo, una fuerte abstención: de 431 192 inscriptos votaron 160 625. Ésa fue una abstención antidemocrática, preparatoria de la insurrección herrerista o del golpe de Estado presidencial que se daría el año siguiente.

En las primeras elecciones convocadas por el gobierno *de facto* (1933), para la Asamblea Nacional Constituyente, de 425 597 ins-

criptos votaron sólo 246 885. Con relación a 1930 y 1931 hay abstención, lo que sí con signo distinto a la de 1932; en este año hubo garantías para el sufragio, pero en 1933 y 1934 no las hubo, ni para el voto, ni para la actividad política opositora.

Esa abstención antidictatorial continúa, con mayor intensidad, en las elecciones siguientes, que son plebiscitarias (ratificación constitucional), y para candidatos a los nuevos poderes: de 422 865 inscriptos, votan en el plebiscito 232 269, y para representantes nacionales unos miles más: 239 125. Vale decir que debido a la persistente abstención (de inscripción en el Registro Cívico y de voto en la elección), no se alcanzan todavía las cifras electorales anteriores al golpe de Estado de 1933.

Para las elecciones de 1938, el Registro contaba 636 171 inscriptos (hombres y mujeres); puede estimarse que un tercio del mismo correspondía a éstas. En el plebiscito de reforma votaron 357 187; para presidente de la República 357 205; y para representantes nacionales 375 771 (como dato curioso, se consigna que el Partido Feminista obtuvo 107 votos, solamente).

El cuadro siguiente sintetiza el movimiento electoral expuesto.

Año	Inscriptos	Votantes p/ Cargos electivos		Votantes, % S/1930 Año índice
		Números	% Inscr.	
1930	398.169	318.760	80.05	100.00
1931	419.271	309.048	73.71	97.00
1932	431.192	160.625	37.25	50.40
1933	425.597	246.885	58.00	77.50
1934	422.865	239.125	56.55	75.01
1938	636.171	375.771	59.07	118.00

En síntesis, la abstención de las fuerzas opositoras continuaba con firmeza, obligando, en 1938, al presidente electo, a cumplir su promesa de “nueva constitución y leyes democráticas”. Así se lo recordó la población, en el mitin de julio (1938), al cual respondió el gobernante con una frase —“sin precipitaciones y sin dilaciones”— que quería significar su propósito de cumplir, pero no antes de haber ejercido el poder durante el periodo de gobierno para el que había sido electo.

Fue lo que aconteció, y para lo cual incluso se tomó algún tiempo más del constitucionalmente previsto.

V. LAS CORRIENTES IDEOLÓGICAS PREDOMINANTES

La sociedad uruguaya de los años veinte y comienzo de los treinta vive intensamente politizada, electoralizada si cabe el término, pues acude anual o bianualmente a elecciones. Nos ha parecido posible, por ello, estudiar las ideologías del tiempo a través de las doctrinas sustentadas por los partidos que disputan electoralmente las posiciones públicas, sin perder de vista las ideologías foráneas que son aceptadas por dirigentes y por sectores de dichos partidos, sea porque algunas de sus aspiraciones se originan en las mismas, sea por motivos oportunistas.

Una exposición completa de las ideologías preponderantes debería tener en cuenta: I. Las ideologías internas: 1) las corrientes tradicionalistas, A) blancos y B) colorados; 2) las corrientes no tradicionalistas: A) socialistas, B) democristianos y C) comunistas. II. Las ideologías externas: 1) las corrientes autoritarias, A) marxistas, B) fascistas; 2) las "rectificaciones democráticas" (por ejemplo, E. Barthélemy y Tardieu, en Francia).

Las exigencias del tema principal y las limitaciones del espacio no nos permiten exponer todas las corrientes mencionadas; por ello, las últimas serán tácitamente tenidas en cuenta, a fin de dar un breve desarrollo a las corrientes ideológicas internas, por ser las de mayor importancia en nuestro país.

Pero antes de entrar al tema, pongámonos de acuerdo con una acepción lo suficientemente amplia de ideología. Por tal vamos a entender, no solamente la *doctrina* política de cada partido, tal como la define en su Carta Orgánica o su Declaración de Principios, sino también la orientación neológica de sus dirigentes y de los grupos cuyas aspiraciones de poder tratan de satisfacer, sea directamente (por sus candidatos), sea indirectamente (por sus manifestaciones no políticas).

En el caso de los partidos políticos uruguayos, actuantes en la cuarta década del siglo, tales referencias, esquemáticamente, son las siguientes:

A. Los partidos tradicionales, Blanco y Colorado, nacen de las luchas por la conquista del poder político, una vez constituido el Estado (1830), y se caracterizan simplemente por divisas (1836) impuestas por sus jefes o caudillos: la divisa blanca, por Oribe, y la colorada por Rivera; unos se proclaman "defensores de las leyes", y los otros "defensores de la Constitución". Desde el primer momento hay en una y otra bandería, conservadores y liberales, mode-

rados y radicales, reformistas y antirreformistas, votantes rurales y votantes urbanos.

B. Los partidos no tradicionales nacen de circunstancias sociales más precisas. El Partido Socialista surge de las luchas laborales de fines del siglo XIX, con el despertar de la conciencia de clase como distinta a la de partido por motivos tradicionales; su congreso fundacional data de diciembre de 1910.

El Partido Unión Cívica del Uruguay es el sector político de la Unión Católica formada en ocasión de la controversia religiosopolítica que siguió a los documentos pontificios de la segunda mitad del siglo pasado y de la acentuación de la secularización del Estado que habría de culminar con la separación de éste de la Iglesia (1917). La constitución de la Unión Cívica data de 1911, siendo su Carta Orgánica de 1912.

El Partido Comunista nace a raíz de aceptar la mayoría del Partido Socialista las 21 condiciones de admisión impuestas por la III Internacional. Eso sucede en abril de 1921, tras varios congresos; y a raíz del cambio de denominación, la minoría siguió actuando políticamente con el nombre de Partido Socialista.

En sus respectivas cartas orgánicas y declaraciones de principios, cada partido, como decíamos, define su concepto y su estructura institucionales, así como su régimen interno y sus funciones y finalidades. Desde luego, por sí solos, esos documentos no nos permiten conocer lo que podríamos llamar su "ideología básica"; pero ésta se puede inferir del contexto de aquéllos y de su actuación histórica.

Aa. Los partidos tradicionales

Ninguno de los partidos tradicionales constituyó siempre una asociación política homogénea o indivisible; el sistema electoral (mayoritario, doble voto simultáneo, ley de lemas) hizo seguramente más por la unidad partidaria que los propios dirigentes o los principios invocados. Con mucho, y a pesar de sus votaciones abrumadoramente mayoritarias, lo que mostraba sus arraigos en todas las clases sociales, y de los intentos de organización desde la base (por ejemplo, el batllismo) son partidos de cuadros y no de masas.

a) *El Partido Colorado*. Al comenzar los años treinta se hallaba dividido en varias fracciones: la mayoritaria, el batllismo, y las minoritarias, electoralmente decisivas: riverismo (formada en 1913), radicalismo o vierismo (1918), tradicionalismo o sosismo (1925). Tras

el golpe de Estado, las dos últimas se diluyen, reuniéndose parte con el batllismo y parte con la nueva fracción terrista que se escinde en 1938 para formar los partidos Libertad y Justicia (blancoacevedismo) y "Para servir al país" (baldomirismo); la primera fracción minoritaria se disuelve también, para integrarse en el baldomirismo y resurgir en 1942 con nueva denominación, "Por la Patria".

De todas las mencionadas, la más estable ha sido el batllismo, cuya Carta Orgánica y Programa de Acción data de febrero de 1928 (la última), esto es, viviendo Batlle y Ordóñez; fue reeditada en 1936 y posteriormente, no habiéndola afectado las ulteriores subdivisiones partidarias. Se compone de dos partes, la orgánica y la dogmática, y ésta comprende las obras realizadas y las por realizar, expresadas bajo forma de aspiraciones y propósitos en particular, ya que en general "la acción del Partido Colorado se rige por sus tendencias históricas de libertad y de justicia".

La ideología del partido es la del liberalismo progresista y democrata del primer cuarto del siglo, cuando a las declaraciones meramente programáticas del pasado se añade la técnica intervencionista del Estado y la posición en primer plano de lo que antes se consideraban sus "fines secundarios".

Por ello, entre las obras realizadas y que mantener, esto es, en su ideología, se cuentan las instituciones democráticorepublicanas, la separación del Estado y la Iglesia, garantías electorales de la libertad política, laicismo y gratuidad de la enseñanza, derechos sociales a la asistencia, del trabajo y a la seguridad, nacionalización de bienes y servicios públicos, divorcio, investigación de la paternidad y derechos de los hijos naturales, supresión de espectáculos en que se provoque el sufrimiento de animales como atractivo, y otras.

Entre las obras por realizar, algunas de las cuales fueron después realidad, sin que por ello dejen de ser parte de la ideología, para presentarse como utopías, se cuenta la supresión de la presidencia de la República y el establecimiento del gobierno colegiado íntegro, la elección directa de los altos magistrados del Poder Judicial, institutos de democracia directa (iniciativa, plebiscito, revocabilidad, etcétera, populares), voto activo y pasivo de las mujeres, mejoramiento y control de las condiciones del trabajo de adultos, mujeres y niños, de la asistencia pública, etcétera. Otras iniciativas conciernen a la instrucción pública, abarcando desde pagos extraordinarios a maestros rurales y urbanos y subvenciones a los padres de alumnos, para mantener alta escolaridad, hasta la integración de los consejos u órganos de la enseñanza por profesores y estudiantes. También sobre im-

puestos, suprimiéndose los que graven al trabajo nacional, y gravándose la propiedad territorial sin mejoras, las herencias, la importación, los capitales invertidos en el país cuyos dueños residan en el exterior. Sobre tierras públicas, en fin, fijando una política de ampliación y conservación del dominio público; pero sin establecer la forma y los medios de adquisición y destino, salvo el arrendamiento al mejor postor.

Debe destacarse, siquiera brevemente y para completar ese resumen, que el pensamiento de algunos conductores del partido era más avanzado que el programa de éste, empezando por el propio Batlle y Ordóñez. Otros, como D. Arena y J. C. Grauert, representantes de la "guardia vieja" y de "los nuevos", no silenciaban sus discrepancias, el primero en nombre del humanismo que inspiraba al líder epónimo, y el segundo afirmado en las corrientes social-demócratas que se abrían paso en todos los partidos liberales del mundo, incluso dentro de los partidos tradicionales uruguayos.

Por lo tanto, no es de ahora que se echan de ver las insuficiencias del programa, aun para la época en que fue adoptado; porque si bien hay referencias a la fiscalidad, no hay una alusión siquiera a la reforma agraria, a la extensión de la industrialización que el propio partido había auspiciado, a la racionalización administrativa, a las limitaciones sociales de la propiedad, a la modernización, en una palabra. La preocupación predominantemente política del programa muestra un retraso con respecto a la función social de los partidos, que las doctrinas sociológicas y jurídicas señalaban ya como ineludible, dentro del Estado.

Ab. El Partido Nacional

Al comenzar los años treinta, el Partido Nacional había sufrido ya una segregación, la del Partido Blanco Radical, encabezado por el líder izquierdizante Lorenzo Carnelli, y tenía dos escisiones en ciernes: la del Partido Nacional Independiente y la de la Agrupación Nacionalista Demócrata Social, ésta orientada por Carlos Quijano, quien en vísperas de las elecciones de 1958 va a manifestarse socialista; estas escisiones quedan firmes a raíz del golpe de Estado, acompañado por el herrerismo, del cual en 1938 se separará un grupo conducido por J. A. Otamendi y A. Patrón. La fracción herrerista, mayoritaria y *dueña* del lema, aprobó en marzo de 1934 una Carta Orgánica que, con modificaciones posteriormente aprobadas, rige todavía.

La Declaración de Principios del Partido Nacional abarca materias de política económica, financiera, agraria y social, fundamentadas según la ideología liberal moderada de todas las épocas:

a) Entre sus principios básicos se destacan los de nacionalidad y patria, la familia, la tradición partidaria, las instituciones democrático-republicanas, la libertad de enseñanza, de creencias y cultos, la moralidad administrativa y otros.

b) Entre los principios de política económica y financiera, se cuentan el reconocimiento de la iniciativa privada como fundamento de la estructura económica, la moderación gradual del estatismo, la limitación racional y progresiva del dirigismo económico, la estabilización monetaria, la planificación de las inversiones públicas, creación del impuesto a la renta como sustitutivo del régimen impositivo actual, supresión de impuestos al consumo.

c) Entre los de política agraria incluye la defensa de las industrias agropecuarias como básicas de la economía, y revisión de las normas impositivas y cambiarias que las afectan; créditos al agro, obras camineras, reforestación, mantenimiento y recuperación de los recursos naturales del suelo.

d) En materia de política social, se cuenta la participación en las utilidades de las empresas para los obreros y empleados de la industria y el comercio, creación de tribunales de conciliación y arbitraje, seguros sociales, represión de los vicios sociales, protección legal contra trustes y monopolios.

No se precisa más, para caracterizar al nacionalismo como fuerza de conservación social, de resistencia al cambio en el sector agropecuario, y de independencia política en lo nacional como en lo internacional. Los acontecimientos, sin embargo, le reservarían a este partido una dura prueba, en la oportunidad de alternar al partido Colorado en el poder; entonces, esa independencia en cuya declaración se mostraba enfático, declinaría para las soluciones más favorables al imperialismo en sus formas, sobre todo, económica y financiera (*Reforma monetaria y cambiaria de 1959*, influencia del FMI en las decisiones de política económica y financiera).

B. Los partidos no tradicionales

Representan una parte muy reducida del electorado efectivamente votante, nunca más del 10% y frecuentemente menos de ese porcentaje. Las respectivas ideologías, por otra parte, son internacionales,

sustancialmente idénticas a las de los partidos socialistas, comunistas y democristianos del occidente europeo, principalmente francés, belga o italiano. Acusan, por ello, la influencia de las corrientes demócratasociales, comunistas y tradicionalistas cristianas, que atenúan o acentúan con elementos de la historia interna del país; un ejemplo de esa "conciliación" con elementos ideológicos foráneos se muestra en las inclinaciones fascistas en los dirigentes políticos uruguayos, sobre todo entre los situacionistas de entonces.

Ba. La declaración de principios del Partido Socialista refleja las concepciones del marxismo social-democrático; combina, por lo tanto, la crítica de la sociedad actual (de ese momento) hecha en términos del materialismo histórico (lucha de clases, propiedad de los medios de producción y de cambio, desarrollo social) con la adopción de métodos políticos-democrático-liberales, progresistas, para alcanzar las metas que se propone. En el campo gremial, entiende que la lucha de clases debe conservarse al margen de las parcialidades políticas, sin perjuicio de hacerles llegar la influencia orientadora del criterio socialista. La política económica se dirige a la reforma agraria, promoviendo la desaparición del latifundio, mediante medios evolutivos como el impuesto territorial progresivo, la expropiación con indemnización procedente de un fondo constituido con dicho impuesto y otros recursos. Otros principios afirman el anticlericalismo del partido, su tendencia a restringir el poderío jurídico del capital, absorber la renta del suelo, respetar la pequeña propiedad, realización de la sociedad socialista, etcétera.

Bb. El programa de principios de la Unión Cívica del Uruguay contiene tres declaraciones fundamentales: 1) su actividad responde a la defensa de los intereses católicos; no por esto, entienden sus intérpretes principales, la Unión Cívica es un partido católico; 2) vela por la integridad del concepto de patria y rechaza toda solicitud contraria al sentimiento de nacionalidad; con esto, entiende el partido contravertido la calificación de partido internacional; 3) proclama su fe en el orden democrático, en los derechos ciudadanos, en la educación cívica; rechaza, por lo tanto, los odios y la violencia. Sobre ese trípode —religión, patria, democracia— asientan los restantes principios y aspiraciones: libertad de comercio o industria, derecho de propiedad, dominio industrial del Estado, legislación protectora del trabajo, impuesto a la renta, sistema fiscal degresivo, supresión de impuestos al consumo, reducción del costo de los servicios públicos fundamentales, racionalización presupuestal, reducción del

funcionarismo, solución de la "cuestión social" entre el capital y el trabajo, etcétera.

Bc. El Partido Comunista se autodefine como el partido político de la clase obrera, sobre la base del marxismo-leninismo y la solidaridad internacionalista proletaria, lo que no excluye a los campesinos y los sectores progresistas (intelectuales, profesionales y otros grupos o capas medias y populares) en su marcha hacia la revolución agraria y antiimperialista. En consecuencia, acepta los conceptos fundamentales de aquella doctrina (lucha de clases, materialismo dialéctico, movimiento internacional, necesidad de un partido de vanguardia), concilia el internacionalismo y el patriotismo, la lucha revolucionaria y los medios evolutivos. Persigue la reforma agraria, la supresión de los monopolios capitalistas y del imperialismo, reclama el cambio radical de las estructuras económica y política, defiende la soberanía y la economía nacionales, busca la satisfacción de reclamos populares de todo orden: salarios, retiros, asistencia, educación y otras reivindicaciones.

Sin embargo, de que se pudieran contar, no una, sino varias ideologías, en aquellos años treinta, erraría quien creyese encontrar alguna en la Constitución plebiscitada en 1934 y modificada en 1936 y 1938; original, se entiende; porque, en rigor mantuvo la que ya informaba a las instituciones existentes bajo la Constitución de 1917, acentuando su conservadurismo y su resistencia al cambio.

Se contestará que la Carta de 1934 es bien diferente de la de 1917, tanto en su parte orgánica (enumeración y articulación de poderes) como en su dogmática (sobre todo en lo relativo a la declaración de derechos, deberes y garantías). Ello es exacto, pero la pequeña historia de esa diferencia es bien desalentadora. Los autores que se han ocupado del acontecimiento, se encargan de demostrarlo.

E.V. Haedo, que lo caracteriza como "la caída de un régimen", no encuentra diferencia entre la situación de 1933 y otras como las de 1886 y 1897, esto es, anteriores a la reforma del Estado efectuada desde 1911:

En países como el Uruguay —dice— ... las crisis nunca sobrevinieron por conflictos entre doctrinas sociales antagónicas, ni las motivaron realidades económicas, sino problemas políticos. Ni fueron las revoluciones de 1886 y 1897 como tampoco lo fue la de 1933, sacudimientos ideológicos de derechas o de izquierdas. No pudieron ser aquéllas, porque entonces, los problemas sociales se reducían únicamente a los relacionados con la libertad política. No lo fue la de 1933 porque no había

en el país, definido y preciso, pleito de aquella índole... Ni aquéllas ni ésta fueron provocadas por diferencias de ideas, sino de conductas. No fueron doctrinas las que se abatieron ni las que triunfaron, sino estados de conciencia inconciliables, modos de hacer el gobierno y no de tenerlo... etcétera.¹⁹

Frente a ese reconocimiento de uno de los dirigentes del herrerismo, ¿cómo puede extrañar que los partidos golpistas careciesen de un proyecto común, o de proyectos particulares coincidentes, de reforma constitucional, salvo el propósito de suprimir el colegiado?

Es un hecho, y no una opinión interesada, lo que establece G. Gallinal, dirigente del Nacionalismo Independiente:

Las fracciones coligadas en 1932 y 1933 para la campaña de agitación reformista llegaron al 31 de marzo sin poder redactar un plan unánime. Su campaña fue, principalmente, de desprestigio de las instituciones vigentes, identificadas sofisticadamente con la crisis económica que azotaba al país y a todos los países del mundo... Como los generales que Anatole France pinta irónicamente, reuniéndose bajo la tienda, después de la batalla, para escribir su plan, los agitadores de 1933 se reunieron, después del golpe, en el cuartel de bomberos para ponerse de acuerdo sobre este punto secundario: cuáles eran las instituciones cuya implantación urgente justificaba el golpe de Estado ya consumado.²⁰

Demostración de lo expuesto serían las enmiendas constitucionales de 1936 y 1938; fresca estaba la tinta con que fuera impresa la Carta de 1934; ni había transcurrido un periodo de gobierno —4 años—, cuando ya se sentía la necesidad de modificar la obra recientemente sancionada, a fin de evitar que las fuerzas opositoras se reunieran y triunfaran dentro de las condiciones impuestas constitucionalmente por el propio régimen. De lo que se trataba, entonces, era de consolidar el acuerdo entre las fuerzas coautoras del golpe de marzo, a través de un pacto político entre las fracciones gobernantes.

Para aquellos que votaban obedeciendo órdenes partidistas, no había más que actos políticos; pero para los que seguían el proceso vivido por el país, arrancado el disfraz parlamentario o constituyente, continuaban el problema social y económico y las soluciones impuestas por aquellas fuerzas, que pactaban enmiendas constitucionales de consolidación a través de sus representantes políticos.

¹⁹ E. V. Haedo. *La caída de un régimen*. Montevideo, Institutos Penales, 1936, p. xv.

²⁰ G. Gallinal, *op. cit.*, pp. 276-7. Véanse también: E. Frugoni, *La revolución del machete*. Buenos Aires, Claridad, 1934. M. Legnani, *Lo que debemos temer*. Montevideo, Casa de Batlle, 1935.

Todo ello sucedía a sabiendas de los más ilustrados, que se estaba atrasando la hora del desarrollo nacional y de que se constituionalizaban fórmulas juridicopolíticas ya superadas. Se reconocía que la democracia liberal y el individualismo económico habían cumplido su ciclo histórico en nuestro país como en el resto del mundo; pero al prestar como técnicos su concurso, limitaban las funciones del Estado como si rigiera todavía la doctrina del *laissez faire*, reclamando la intervención del poder público, pero "sin llegar a la estadización". Dicho con otras palabras, un Estado para la vitrina o el discurso, sin poder para imponer soluciones de bien común, sin el supremo recurso para obligar al particular opulento a hacer lo que puede y debe realizar en favor de la sociedad.

VI. LAS UTOPIAS DOMINANTES

En las ideologías dominantes se hallan ya los elementos utópicos que complementan la concepción del mundo y el plan de acción que están en la base de las primeras. Un poco por contraste, otro poco libremente, la imagen que se forjan los dirigentes, revolucionarios o no, del futuro inmediato, está sugerida por las críticas de la situación actual, de la que parte el incentivo para la actuación.

En los programas de principios de los partidos políticos —indicadores de las ideologías preponderantes— se encuentra la distinción entre lo realizado y lo por realizar. La referencia de esa distinción es la realidad misma del país y de sus grupos, en sus relaciones recíprocas y con el todo social.

En los años treinta, no hay casi revolucionarios en el Uruguay; no los hay, salvo en el sentido impropio que se va a explicar.

Esos años debutan, como se ha referido en páginas anteriores, por una crisis de características graves, que los poderes constitucionales tratan de conjurar, unos por medidas de gobierno y legislación propias de sus competencias, y otro —el presidente de la República, con sus exadversarios electorales— mediante "la revolución". Ya hemos visto, también, que ésta, por su naturaleza, no fue más que un golpe de Estado.

A su turno, las fracciones políticas desplazadas por ese acto de fuerza tratan de recuperar el poder, mediante procedimientos calificados también de "revolucionarios", pero que sólo tienen de tales su técnica compulsiva, insurreccional, en el grado más intenso de su manifestación.

Ahora bien, todas las fracciones políticas —las situacionistas como

las opositoras— han salido, se han desprendido, de los mismos partidos, para seguir, electoralmente, dentro de éstos, según los antecedentes respectivos; al punto de que las fracciones situacionistas “dueñas” del poder, sancionan una ley —la Ley de Lemas— para asegurarse “la propiedad” del nombre partidario y excluir a las rivales del uso del mismo.

Los restantes partidos constituyen minorías impotentes por sí solas para conmocionar revolucionariamente al país, siquiera en el grado insurreccional que pueden alcanzar, solas o juntas, las fracciones tradicionalistas. Añádase a ello, que uno de éstos no es revolucionario por programa, y otro lo podría ser ocasionalmente; y el tercero lo podría ser también ocasionalmente; pero vinculado a un plan mundial o por lo menos internacional, con el cual juzga mientras tanto compatible la actividad parlamentaria interna.

Quedan los intelectuales, para quienes la revolución no solamente es pensable, sino también hacedera; desde luego, no por ellos, al menos únicamente.

Como la movilización revolucionaria, de los grupos activos o de “las masas”, depende del país real y no del país imaginario, esto es, más de lo que aquéllos son que de lo que se cree que son, el resultado es siempre el mismo, el del comienzo, a saber: en el Uruguay de los años treinta no es posible más “revolución” que la restauración de la situación *ante*, o previa al golpe de Estado de 1933.

Desalentadas las perspectivas insurreccionales con el fracaso de la “revolución de enero” (1935), no quedaba más que la maniobra política de entendimiento con fuerzas situacionistas, o desprendidas de éstas. Fue lo que sucedió entre la oposición y Baldomir, con su consecuencia inevitable: en todo pacto o transacción no se pueden sacar más que determinadas ventajas, en contraprestación a renunciamientos propios; con el agravante, en este caso, que aquellas ventajas consistían en lo que Baldomir y las fuerzas que lo respaldaban estaban dispuestos a otorgar. Así aconteció, tanto con respecto a la nueva Constitución (1942), como con relación a los candidatos a los primeros puestos electivos, seleccionados, en lo nacional, del núcleo adicto al presidente Baldomir, y en lo departamental más importante (Montevideo) del grupo moderado del batllismo, cuyo líder condujo las negociaciones desde el primer momento. Esto se hizo dentro del Partido Colorado, que se suponía habría de triunfar en las elecciones, como en realidad sucedió. Pero no se crea que las cosas eran distintas, en cuanto a la “moderación” de los candidatos, en las restantes fracciones de los partidos tradicionales.

Aun cuando se hubiera dado entrada a las fracciones radicales o "izquierdistas" de los partidos tradicionales, en la solución del problema político, y más particularmente del electoral, el resultado, condicionado como estaba por las fuerzas sociales-económicas (y también políticas), contempladas en la Constitución reformada, no habría sido distinto, esto es, una *restauración* parcial de la situación anterior y posterior al golpe de Estado, al menos en su espíritu.

Lo demuestra la acción cumplida por los gobiernos batllistas posteriores a Amézaga, en que todo se hizo, o se dejó de hacer, acatando aquel espíritu.

Espíritu en el que se creía sublimado cuanto de más vivo y de mejor del pensamiento y la obra de J. Batlle y Ordóñez parecía destinado a perdurar; obra y pensamiento de reformador, como bien se le ha calificado, y no de revolucionario.

Así fue como, aprovechando la situación creada, y casi impuesta por Inglaterra (deudora del país por abastecimientos de carne y lana suministradas durante la Segunda Guerra Mundial), el Estado, gobernado nuevamente por batllistas, adquiere empresas de servicios públicos y rescata concesiones británicas (ferrocarriles, aguas corrientes, tranvías), y realiza la máxima aspiración política de Batlle y Ordóñez: el gobierno colegiado íntegro, o sea sin presidencia de la República. Además, se adoptaron otras medidas de gobierno y administración, y se omitieron otras, todo de acuerdo con aquel espíritu y con la imagen de hombre y sociedad que lo encarnaban; espíritu, hombre y sociedad que ya no existían más, ni en el país ni fuera de éste. Medidas, todas esas, que habrían dado los frutos esperados, de haberse adoptado antes de la Segunda Guerra o subsistente la antropología fundamental habida en consideración por el fundador del batllismo. En cambio de esos frutos, las empresas nacionalizadas dieron déficit solamente; y los grupos sindicales y universitarios trascendieron sus marcos institucionales propios, dentro de la sociedad, para convertirse en *poderes* auténticos, con concepto, estructura y funciones nuevas, además de la fuerza propia, en el sentido energético, físico, de la palabra, que ya poseían y que se incrementaba con la que el Estado perdía por inepticias de sus gobernantes y legisladores. Los acontecimientos de 1956 en adelante lo demostraron; en particular la Ley Orgánica universitaria de 1958, en que nuevamente se dio el triunfo del poder educacional espontáneo contra el Ejecutivo y el Legislativo orgánicos.

Interesa ahondar ese concepto de hombre y sociedad que está en la base de la acción política del batllismo derrocado en 1933 y restau-

rado en 1942, porque él mismo da la clave para comprender la imagen del mundo que se forjaron los dirigentes opositores, "revolucionarios", de los años treinta, y la frustración a que condujo su actividad ulterior, ya en ejercicio del poder.

Uno de los autores que mejor ha penetrado ese sentido del pensamiento y la obra de Batlle y Ordóñez, máximo político uruguayo durante el primer tercio del siglo y numen de su partido, antes y después de su muerte (1929), señala el concepto cardinal, antropológico, de su actividad: el concepto de hombre guiado por un ideal en su acción de gobernante.²¹ "En Batlle es siempre el hombre del siglo XIX liberal e individualista, el que intenta resolver los problemas sociales" (*ibidem*).

Las soluciones que propone —no siempre acogidas, ni por partidos suyos— se parecen exteriormente a las del socialismo, esto es, en los resultados; pues difieren de las de éste por su fundamentación y por los medios de alcanzarlas.

La transformación del país se lograría, en todos los casos, "por leyes, siguiendo siempre el pensamiento de Batlle de transformación a base de legislación y no de cambios bruscos".²²

La supresión del latifundio, por ejemplo, se obtendría mediante el impuesto inmobiliario progresivo, el de herencias, o la expropiación con indemnización, nunca por confiscación. La estructura económica, sustrato de la desigualdad social, se cambiaría por la modificación de las relaciones de trabajo, legislando sobre duración de la jornada obrera, el salario, las vacaciones, los retiros, y exonerándolo de impuestos, en particular del impuesto a la renta, que es un impuesto al trabajo. La educación y la cultura mejorarían abriendo más escuelas, más liceos, más facultades, creando la cátedra de conferencias, la orquesta sinfónica nacional, las becas de estudio en el extranjero, la Comisión Nacional de Educación Física, etcétera.

Eso en cuanto a los medios. En lo que concierne a la fundamentación, Batlle invierte la relación determinista propia del marxismo. Para él, la lucha de clases existe y es obra de la mala organización social; pero ésta, como la propiedad privada, es obra de todos, tanto de los que detentan los medios de producción como de los que aspiran a poseerlos, y aun de aquellos que no los desean, pero omiten ejercitar sus derechos cívicos para cambiar ese estado de cosas. Los

²¹ A. M. Grompone. "La ideología de Batlle", en *Batlle, sus artículos*. Montevideo, M. García, 1943, p. 83 y *passim*.

Empleamos el término "antropológico en su sentido filosófico.

²² *Idem, op. cit.*, p. 68.

factores económicos no son independientes de las voluntades individuales, y por lo tanto no determinan las leyes, sino al contrario, son condicionadas por éstas (pasamos por alto la distinción, que habría podido hacerse, entre leyes en sentido *natural* y leyes en sentido *normativo*).

Incluso desde el punto de vista filosófico, Batlle se coloca en una postura comteana, antemarxista. Él tenía confianza en la influencia de las ideas sobre el pueblo, las cuales crearían en éste las fuerzas que harían posibles las reformas. "Batlle tenía esa oratoria de razonamientos clarísimos que bajaba al nivel de la masa: no quería su entusiasmo, aspiraba a despertar su convicción".²³ G. Landauer diría que estimaba, como Hegel, que el mundo debe ser puesto sobre la razón, esto es, cabeza abajo...

Ahora bien, todos en los años treinta, partidarios y adversarios, pensaban como Batlle, sea por persuasión, sea por coincidencia. La conversión de los problemas sociales en problemas políticos la identificación de la solución de dichos problemas con la reforma constitucional, la salida de la dictadura legalizada mediante una nueva reforma constitucional, etcétera, son otros tantos subproductos de esa manera de pensar, original en su autor, por los objetivos superiores que perseguía, pero derivada y cómoda en sus seguidores.

Es más, su estrategia para crear la sociedad "feliz y justiciera" que ambicionaba para el Uruguay, se valía de los instrumentos políticos existentes, como los partidos tradicionales, y de sus negadores anarquistas; los primeros, de fuerte motivación prejuiciada y de móviles pasionales, esto es, irracionales, traídos de todos los episodios de la historia; los últimos, fuertemente intelectualizados y no menos pasionales, alentados por los más recientes acontecimientos europeos, en que sus camaradas tomaban parte.

Su táctica, por ello, consistía, como lo recuerda el autor tantas veces citado, en "aprovechar una corriente sentimental para encauzarla en el sentido ideológico, y la fuerza que significaba la adhesión a la divisa, a la tradición, al caudillo, a los hombres, ponerla al servicio de las ideas".²⁴ Fue así como, sin adherirse al Partido Colorado, hubo batllistas en todos los partidos, y aun fuera de éstos, entre los ácratas, como se dijo, y entre los católicos.

Esa imagen del mundo presente y del futuro, esa estrategia y sus tácticas, estaban a punto ya de ser rectificadas y superadas, al final de los años veinte, cuando la crisis de 1929 (y además la muerte de

²³ *Idem, op. cit.*, p. 41.

²⁴ *Idem, op. cit.*, p. 42.

Batlle, en el Uruguay) divide el reino de las ilusiones precedentes del reino de las realidades subsiguientes. En el transcurso de los años treinta, todo eso pierde eficiencia como idea, sobre todo como idea jurídica, para sucumbir estrepitosamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Con mayor razón, en las décadas subsiguientes no se podía ya seguir pensando del mismo modo; al error de concepto en lo teórico se sumaban las ineptias en el ejercicio del poder, que en parte derivaban de aquel modo erróneo de concebir el mundo y de guiar la acción política. En suma, se llegó, como lo decía M. Paggi, a esa situación en que no es posible cometer más que errores. Poco después, se desencadenaría la crisis generalizada que el Uruguay vive en los años sesenta.

No podríamos cerrar estas consideraciones, sin rectificar una impresión que puede haberse deslizado, y es la de que no habría en el Uruguay, en aquellos años, dirigentes políticos e intelectuales que no se daban cuenta del proceso que en realidad estaba cursando por esa década. Hemos dicho antes que no había *casi* revolucionarios, y debemos ahora nombrar algunos de esos pocos que eran plenamente conscientes de su país y de su tiempo. Desde luego, la brevedad de estas páginas no nos permiten ser más extensos en la mención; pero quede desde ya la aclaración de que fueron más, muchos más que los que aquí nombraremos.

Uno, como J. C. Grauert, actuaron en la histórica Asamblea General del 30 de marzo y señalaron que las medidas de fuerza tomadas por el presidente y exigidas por las clases conservadoras, estaban dirigidas contra las conquistas obreras y sociales, y no a una reforma constitucional pedida "por el pueblo".

Otros, como C. Quijano, esclarecían desde la prensa los verdaderos móviles reaccionarios del golpe de Estado y mostraban las causas de la crisis que se había iniciado en el país. *Acción* (fundada en 1932) y *Marcha* (en 1939) son de la década.

Desde la cátedra de Derecho Constitucional, L. Arcos Ferrand destruyó los pretendidos fundamentos jurídicos invocados por el presidente-dictador, en clases memorables cuyas versiones solían recordarse, en actos de homenaje, después de su desaparición física.

C. Vaz Ferreira, que mantenía su primacía filosófica al par que su magisterio más elevado, en la cátedra de Conferencias de la Universidad, revelaba el signo moral negativo del golpe de Estado y de sus consecuencias.

El mayor número, sin embargo, actuaba políticamente, resistiendo a la dictadura o conspirando contra ella, o preparando la salida polí-

tica evolutiva que ya mencionamos. Debemos decir que casi todos ellos no vieron más que el aspecto político del gobierno de fuerza, y su salida jurídica, constitucional, como lo demuestra el lema del mitin de julio, que vino a compendiar sus aspiraciones: "Por nueva constitución y leyes democráticas."

Eso les fue concedido, pero nada más: no hubo añadidura... La estructura social y económica del país salió indemne de la prueba, y sigue hoy tan campante, en que los problemas de esa índole continúan sin resolverse.

Por ello decimos que hubo restauración, y que el triunfo de la generación restauradora no fue completo, ni siquiera en lo político. Fue parcial, y con esto atenuado, por así exigirlo la vía seguida para salir de la abstención: la transacción de 1942. Ésta no conjuró la crisis social, que era la verdadera y lo más grave de esos años treinta, cuyas secuelas tampoco desaparecieron con ese instrumento jurídico.

VII. CONCLUSIONES

Para que este capítulo final no fuera un simple resumen de las principales proposiciones vertidas a lo largo del trabajo, deberíamos proceder a un análisis de las semejanzas y las diferencias más salientes entre la situación crítica de los treinta y la situación crítica actual.

Pero una comparación de ese tipo nos obligaría a duplicar el trabajo realizado y a exponer, cuando menos, datos y cifras paralelos que respalden las conclusiones a cotejar. Esto es imposible, por ahora.

Sin embargo, como los acontecimientos de la época presente los estamos "viviendo", es fuerte la tentación de prescindir de esos fundamentos y atenernos a la impresión que aquéllos nos están sugiriendo.

Con esas salvedades, entonces, y protestando la subjetividad del resumen, daremos una idea "impresionista" de la situación actual como base para la comparación aludida.

1. Analogías

Primero que nada, se impone una fuerte, tremenda comprobación: el país ha sido alcanzado por la crisis, antes de que hubiera podido —de querer— efectuar los cambios necesarios.

¿Tuvo al menos, el país, conciencia de la crisis que se reaproximaba? Desde luego, si no él (como entidad), por lo menos sus diri-

gentes, sea separadamente, sea como pluralidad responsable, en el poder o en la oposición, de los destinos del país.

Es más; éste ha querido, entre los treinta y los sesenta, que los dos partidos tradicionales se alternaran en el ejercicio del poder, esto es, que ambos fueran antes y después del desencadenamiento de la crisis actual, gobierno y oposición. Diferencia, por lo tanto, que tener en cuenta, pues semejante alternancia no se dio antes, en este siglo.

¿En qué consiste esa innegable conciencia de la crisis? En primer lugar, para los colorados, en que la transacción de 1942 dejó subsistente, como vimos, el problema social de los años treinta. En segundo lugar, para los blancos, en que la reforma constitucional pactada en 1951 no afectó nada más que la distribución de los cargos políticos, siendo evidente para todos, y para los pactantes en particular, que las estructuras social, económica y cultural no se alteraban en lo mínimo.

Idéntica inmutabilidad, con la misma consecuencia política, se dio con la reforma de 1966, cuando era también para todos evidente que lo que el país necesitaba eran cambios de estructuras, y no una nueva reforma constitucional. Lo demostró, con lujo de detalles, la labor de diagnóstico realizada por la Comisión Interministerial de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), organismo oficial, y lo corroboraron los censos general de población y vivienda (1963) y agropecuarios (1961, 1966).

Otra analogía está ya dicha y redicha: la crisis económica y financiera que atraviesa el país, la cual presenta características de gravedad como nunca antes la tuvo aquí un proceso semejante. Son sus indicadores expresivos: déficit en las balanzas de pagos y de comercio, caída de precios, restricciones de créditos, devaluaciones monetarias repetidas, déficit presupuestales de consideración, crecimiento exagerado de la deuda pública, alza astronómica del costo de la vida, con paralela disminución de ingresos salariales y rentísticos para hacerles frente, desocupación creciente, etcétera.

Pero en todo eso se advierte también una diferencia. El país, desde 1959, ensaya medidas contra la crisis, inspirándose o siguiendo prescripciones del Fondo Monetario Internacional, entidad que no existía por cierto antes de la Segunda Guerra Mundial; pero cuyos fundamentos eran sí conocidos doctrinariamente, pero no aceptados por los expertos uruguayos, ni mucho menos seguidos por los gobiernos afectados por crisis económicas y financieras. Antes bien, la experiencia nacional ha sido, que con las medidas adoptadas por los poderes constitucionales antes de 1933 —moratoria de la deuda exter-

na, contralor de cambios, restricción de importaciones, fiscalización de la banca privada, contención presupuestal— era posible salir de tales crisis; máxime cuando el país llegó a poseer una estructura industrial y una más amplia reserva de oro y divisas, en el Banco de la República, que a la fecha se han evaporado o están por disiparse.

Nueva analogía es ofrecida por la subdivisión de los partidos políticos, fenómeno que se daba ya en los años treinta, pero que en los sesenta ha llegado al desmenuzamiento. Prescindamos de los partidos tradicionales, en los cuales la muerte de sus caudillos ha desatado los pocos lazos internos que en vida de aquéllos aún se mantenían anudados. Los partidos no tradicionales han conocido también escisiones internas, que los han hecho perder votos en las últimas elecciones. El Partido Socialista ha perdido su representación parlamentaria; la Democracia Cristiana, su banca en el Senado; y el Partido Comunista mantiene sus legisladores debido a una alianza con otras fuerzas, en un frente bajo cuyo lema, sin su propio nombre, debe actuar parlamentariamente.

No existen más doctrinas partidarias, salvo nominalmente. Ser blanco o colorado, herrerista o batllista, independiente o riverista, no tiene hoy el significado que tenía antes, durante los años treinta. Las fracciones y subfracciones han llegado a ser tan numerosas, que más se distinguen por el número de la respectiva lista de votación que por la denominación partidaria.

2. *Diferencias*

La crisis actual, en su fase presente, se está desarrollando bajo un régimen juridicopolítico de medidas extraordinarias, esto es, de aquellas que la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo, para los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior. Una vez tomadas las medidas, el poder nombrado debe comunicarlas, dentro de las veinticuatro horas, a la Asamblea General, debiendo estar a lo que ésta resuelva. Ahora bien —nueva diferencia— la Asamblea ha recibido la comunicación, pero desde entonces (13 de junio de 1968) no se ha pronunciado sobre las mismas. Dicho de otro modo, los parlamentarios, salvo excepciones, no resisten al Poder Ejecutivo, ni a las fuerza sociales y económicas que actúan tras de éste.

Es más; las cámaras legislativas se han estado reuniendo para su trabajo parlamentario corriente, e incluso para interpelar a los ministros del gobierno por actos realizados bajo el régimen de medidas

de seguridad, y para cuestionarlos. Pero, repetimos, no han encontrado día y hora para reunirse y adoptar resolución sobre las medidas y llegar, por aquí, al fondo mismo de la situación crítica que vive el país.

Por supuesto, la sola vigencia de esas medidas y la publicación de algunos decretos sobre precios y salarios y otras materias que parecen ser de legislación más que de gobierno, no han resuelto las cosas; ni siquiera han atenuado los efectos de la crisis, ni tranquilizado a la población.

También es diferente, con mucho, el papel que juegan los grupos e instituciones sociales en los años que corren. Las fuerzas sindicales, para comenzar, han logrado un nivel de conciencia y una eficiencia de organización que nunca antes habían alcanzado; su movilización abarca cada vez más grupos laborales y afirma su unidad, pese a varios intentos de división y de fundar asociaciones paralelas; sus consignas son obedecidas, aun por grupos no afiliados, y sus órdenes de paro alcanzan a menudo las proporciones de huelga general, afectando a los trabajadores de todos los sectores, del privado como del público.

La Universidad hace oír su opinión en todos los asuntos de interés público, nacional o internacional; y principalmente a través del orden estudiantil que está siempre en la acción, frecuentemente en concierto con las fuerzas sindicales. Los otros órdenes —docentes y egresados—, a punto de pasar la etapa de los pronunciamientos verbales, se van incorporando poco a poco a la acción. Juntas, las fuerzas laborales y universitarias, han mantenido la resistencia más efectiva a los avances del poder político.

Las fuerzas armadas, en esta etapa de medidas extraordinarias, cuando éstas son todavía formalmente constitucionales (a causa de la omisión de la Asamblea General, en adoptar resolución sobre las mismas), se mantienen junto al gobierno, cuyo presidente detenta su mando supremo. Pero no se puede afirmar que los jefes siguen pasivamente los acontecimientos, o que la oficialidad carezca de opiniones sobre los hechos que dieron origen a la crisis, o acerca de los factores responsables de su prolongación.

La Iglesia, a su turno, vive las consecuencias de su actualización conciliar; jerarquía y sacerdocio tienen la preocupación de la realidad social inmediata, que los desafía para la acción, en cumplimiento de doctrinas que son críticas a la sociedad actual, por sus carencias e injusticias notorias.

Las llamadas “fuerzas vivas” del país (que así se califican, como si las ya mencionadas, y otras, no lo fueran también) han dado un paso más hacia la dominación del Estado y la sociedad, pues

ya no actúan a través o por intermediarios (políticos tradicionales, profesionales capaces) que representan en el gobierno sus intereses; ahora forman parte de éste, miembros conspicuos de los ramos industriales, comerciales, ganaderos y bancarios, que nunca antes actuaron en política, o se hallaban retirados de ésta. Se echa de ver el desequilibrio: si el gobierno ha querido llamar a colaborar, con responsabilidad directa, a miembros capacitados de todos los sectores de la vida nacional, no están ahí todos los que lo serían realmente, sino una parte, casualmente aquella contra la cual se dirigen las críticas que motiva la mala distribución del ingreso total o por la resistencia al cambio de las estructuras.

Por ello, al terminar, no podemos hacerlo con invocaciones principistas o con sugerencias de optimismo; lo que haya de hacerse depende en buena parte de esas fuerzas que dominan la escena nacional, algunas de las cuales son foráneas. A lo sumo, por decir algo, podríamos evocar los dichos de la sabiduría popular y campesina, fundados en la experiencia sobre la duración de los males que aquejan a la humanidad; pero, como son conocidos de todos, ni vale la pena mencionarlos.



MÉXICO Y VENEZUELA



MÉXICO EN LOS AÑOS TREINTA

Guillermo Palacios

I. EL PUNTO DE ARRANQUE

La década de los veinte fue para México una etapa de afianzamiento y experimentación. Antes que nada, el ascenso de Álvaro Obregón al poder en 1920 significó el fin propiamente dicho del periodo bélico de la Revolución, y el primer intento de un régimen posterior a 1910 de manejar al país por medio de un gobierno constituido, compuesto por un gabinete y no por un estado mayor.

Obregón —y luego Calles— se enfrentó con primordialidad al problema de la reconstrucción nacional, iniciando de paso una época de regímenes que adoptarían ese calificativo para explicar el foco central de sus esfuerzos, y la orientación última de su política. La eferescencia revolucionaria de los años anteriores había causado grandes estragos en el país, no sólo debido al elevado número de pérdidas humanas y al cierre de muchas fuentes de producción, con motivo de la guerra civil, sino, lo más importante, al creciente temor de los inversionistas extranjeros, muchos de los cuales habían puesto pies en polvorosa.

Obregón enfrentó la problemática de la reconstrucción del país con dos instrumentos fundamentales: en lo práctico, la inversión extranjera; en lo teórico y doctrinario, un nacionalismo tímido y casi de membrete. Así, todo su periodo se mueve en torno a estas dos constantes. Los llamamientos al capital extranjero —sobre todo norteamericano, aunque sin perjuicio de otros— se suceden ininterrumpidamente, y van seguidos, sin excepción, por protestas nacionalistas que cumplen dos funciones: desvanecen los celos de una pequeña burguesía empresarial y comercial temerosa de la competencia monopolista extranjera, al presentarse como contrapeso a la dependencia voluntaria del país con respecto al exterior y, ya referidas específicamente a los futuros inversionistas no nacionales, fungen como un levisimo marco de conducta para sus operaciones, y para el comportamiento correspondiente del poder revolucionario. La aparición de este nacionalismo es el nacimiento de un elemento que, si bien raquíco

en sus principios, será de enorme importancia durante la década posterior.

Absorbido por el problema económico a escala nacional, y por los conflictos políticos resultantes de la diseminación del poder entre un gran número de jefes militares, caudillos y caciques que aún vivían de la revolución armada, el gobierno obregonista se desentendió un tanto de los problemas sociales, dejándolos más que nada dentro de la competencia de una legislación contradictoria, merced a la concurrencia de elementos rezagados del porfirismo y mandatos revolucionarios que, expedidos por necesidades circunstanciales, se contraponían frecuentemente unos a otros.

Sin embargo, los problemas sociales estaban a la vista. Desde 1918 los grupos obreros se habían integrado definitivamente al desarrollo de la revolución, y habían conseguido condicionar el triunfo de ésta a la satisfacción de sus demandas. Pero los campesinos eran el verdadero quebradero de cabeza. Ellos habían hecho la revolución y a partir de Carranza la reforma agraria se consideraba como una de las finalidades impostergables del nuevo régimen. Obregón, sin embargo, débil en el poder, no podía hacer depender su administración de sectores que, a su vez, se encontraban lejos de significar fuerzas coherentemente estructuradas. El compromiso era, pues, necesario como medio para lograr la unidad nacional que permitiera la supervivencia de la revolución y, consecuentemente, la del grupo en el poder. La política escogida fue la del equilibrio de todos los intereses nacionales, continuación y consolidación de la tesis maderista sobre la "armonía" de los factores de la producción. El régimen, empeñado en la tarea de capitalizar el país con base en la inversión extranjera, se convirtió, de una tendencia comprometida con las demandas de quienes lo llevaron al poder, en una entidad supraclasista, arbitral y conciliadora.

Esto, en general, es el tratamiento que recibe el problema obrero. Si acaso, Obregón trata de persuadir a los grupos de la burguesía para que hagan concesiones a los trabajadores, mismas que en último término se reflejarán en incrementos de la producción y, por lo tanto, de las utilidades patronales. En lo agrario, se rechazan las iniciativas colectivistas de propiedad y explotación en beneficio de la creación de la pequeña propiedad, solución intermedia al comunismo y a la proliferación del latifundio. Con base en esta salida pretendidamente consensual, la reforma agraria se lanza al público como una acción vigorosa, tendiente a resolver el problema de la tierra, o al menos aliviarlo, sin entrar en conflicto con los intereses terratenientes, ni modificar sustancialmente la estructura de la propiedad.

Los tiempos no son propicios para ningún tipo de radicalismo. Obregón representa a una clase pequeñoburguesa que cree beneficiarse con la persistencia de las estructuras existentes y con la tranquilidad nacida de una administración centrista. Por otra parte, los sectores interesados en una política más radical no resisten, merced a su desorganización y divisiones internas, el enfrentamiento con los grupos tradicionalistas y contrarrevolucionarios, cuya ira puede llevar, en esos momentos, a la ruina del país. Junto al descenso de la producción industrial, la agrícola bajó de 2 962 millones de 1911 a 2 606 millones en 1921. Este descenso provoca temores de nuevas disminuciones en caso de alterar significativamente el sistema, por lo cual se prefiere la atención a problemas técnicos.¹ La presión extranjera, por si fuera poco, persiste; los Estados Unidos no reconocen al régimen obregonista, y el comercio exterior se resiente del boicot de los mercados norteamericanos, dañando de esa forma los ingresos del país y las condiciones económicas de sus habitantes, sobre todo las masas trabajadoras.

La dependencia de la economía nacional con respecto al exterior, impulsada por Obregón como única posibilidad de resanar los daños de la etapa bélica de la revolución, tuvo consecuencias inmediatas: un año después de entrar Plutarco Elías Calles a la presidencia, se inició en México un notable descenso de la actividad económica, que abarcó hasta 1928, y que estuvo motivada fundamentalmente por la baja de la explotación petrolífera.² Por otra parte, el gran temor de Obregón frente a la reforma agraria resultó cierto: la desorganización del sector agrícola y el reparto de la tierra hasta entonces efectuado, ocasionaron una disminución tal en la producción que fue necesaria la importación de productos alimenticios.³

Calles inició el "periodo gubernamental de la Revolución mexicana", y en un momento de genio político institucionalizó la revolución y su problemática. La política nacional se orientó hacia formas institucionales que impidieran o disminuyeran la influencia de los jefes locales en las decisiones del gobierno central. Junto a la creación de un partido que reuniera a los interesados, en una u otra forma, en la existencia de la revolución, se crearon casi tantos organismos gubernamentales como problemas enfrentaba el país. Calles tuvo una

¹ Tello, Carlos. *La tenencia de la tierra en México*. México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1968, p. 21.

² Padilla Aragón, Enrique. *Ensayos sobre desarrollo económico y fluctuaciones cíclicas en México (1925-1964)*. México, UNAM, 1966, p. 75.

³ Shulgovski, Anatol. *México en la encrucijada de su historia*. México, Fondo de Cultura Popular, 1968, p. 27.

importancia primordial: volcó la revolución hacia el futuro, al declarar en su último informe de gobierno, presentado al Congreso en 1928, que todo lo anterior había sido simple conmoción política, y que a partir de ese momento debía empezar, verdaderamente, la revolución.⁴

Si Obregón había dado la primera importancia al problema de la reconstrucción nacional, Calles se concentró en la fortificación del régimen, a costa de la desaparición de quienes pretendían disputarle el poder. La creación del partido oficial, que se realizaría en 1929, sirvió, como se verá, para reunir dentro de un solo aparato los intereses de los diversos caudillos, que salpicaban el mapa político del país e imponerles disciplina en nombre de una conveniencia partidista que, en último término, quería significar la salud de la revolución.

El enfoque "institucionalista" predominó, desde Calles, en el tratamiento de los problemas nacionales, merced a la nueva visión de la Revolución mexicana, que la situaba en el futuro. De ahí nació la planificación, la creación de múltiples instituciones que fragmentaron los programas y los postulados iniciales, y los dividieron en distintas etapas resolutivas, logrando de esa forma, entre otras cosas, la permanencia indefinida del fenómeno "revolución" en el primer plano de las motivaciones del Estado y, además, la perpetuación de un grupo —*la familia revolucionaria*— en el poder.

De acuerdo con lo anterior, el gobierno de Calles, inicialmente activo con base en tendencias radicales, se vuelve más y más conservador y contrarrevolucionario conforme crecen los compromisos con los sectores de la gran burguesía industrial y terrateniente —compuesta ya, en buena parte, por "revolucionarios"— que lo ayudan en la tarea de fortalecer la autoridad del centro. El reparto agrario se frena hacia el fin de su periodo, para darle la importancia principal a los problemas infraestructurales del sector agrícola, garantizando, de paso, los intereses de los grandes propietarios. En las ciudades, el callismo respalda la unificación de los trabajadores dentro de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la central más poderosa de la época, que se convierte en un inmejorable instrumento de control, por medio de la corrupción abierta de sus líderes, uno de los cuales, Luis N. Morones, secretario general, se transforma en uno de los personajes más poderosos y siniestros del periodo. Pero en medio de la fiebre por la planificación, la corrup-

⁴ Congreso, *Los presidentes de México ante la nación*. México, 1967, vol. III, pp. 804-876.

ción de la central obrera fue un fenómeno incontrolado que tuvo prontas consecuencias: en las postrimerías del gobierno de Calles, la CROM es ya un organismo putrefacto, cuya descomposición se manifiesta por medio del creciente abandono de sindicatos independientes, varios de los cuales formarán, en los primeros días de 1929, una segunda central, la Confederación Sindical Unitaria de México.

La muerte de Obregón fue una auténtica bendición para Calles, que ya no tenía ante sí a ningún caudillo que le hiciera frente en condiciones de disputarle el triunfo, pero planteó también un grave problema en los términos de la política nacional. La fidelidad de las *élites* militares hacia la administración de Calles había estado en mucho determinada por la presencia y el respaldo de Obregón, líder indiscutido, y su muerte convertía ese apoyo firme en una actitud analítica más realista en relación al callismo. La capital empezaba a llenarse de rumores de complots y conjuras del más diverso tinte político. Los dirigentes del partido de Obregón, El Nacional Agrario, no escondían su animadversión hacia el régimen, mientras los antirreeleccionistas pedían a voz en cuello el apego a la Constitución. Mientras varios Estados eran aún escenarios de la lucha cristera, los miembros más prominentes del grupo en el poder se dividían de acuerdo con sus preferencias, y favorecían a diversos candidatos para el interinato.⁵

Finalmente, esa serie de contradicciones motivó la elección de Emilio Portes Gil, secretario de Gobernación del gabinete callista, ex gobernador de Tamaulipas y fundador del Partido Socialista Fronterizo, en quien se presentaban varias ventajas: cuando gobernador, había puesto en práctica varias medidas reformistas, especialmente en el asunto agrario, lo que tranquilizaba a los agraristas. El ejército, si no lo idolatraba, tampoco tenía mayores objeciones para su designación; la pequeña burguesía lo sabía uno de sus fieles, y los trabajadores recordaban su pública enemistad con los dirigentes de la CROM, lo que le granjeaba el apoyo de los grupos enemigos de Morones y compañía. Su designación para cumplir un mandato de un año y convocar a elecciones, fuertemente determinada por sus críticas a los líderes cromistas, da una idea de la descomposición del aparato estatal callista.

Resuelta la crisis política que había planteado el asesinato de Obregón, Calles se convirtió, en tanto que jefe máximo de la Revolución mexicana, en el verdadero director de la política nacional, por medio de funcionarios incondicionales y líderes venales.

⁵ Brandenburg, Frank. *The Making of Modern Mexico*. Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall, 1964, p. 63.

El viraje hacia la derecha que experimentó en sus últimos años el gobierno callista, aunado a la prosecución —también al final— de la política económica de Obregón, ocasionó que para 1929 la economía nacional se encontrara estrechamente ligada al capital extranjero, cuyas actividades se concentraban en los sectores primarios, de tal forma que el país presentaba una fisonomía marcada de productor de materias primas. En efecto, de 683 millones de dólares que representaba la inversión privada directa de los Estados Unidos en México, 230 estaban ocupados en la industria minera, 206 en las explotaciones petrolíferas, 164 en transporte y servicios, y solamente 6 en la industria de transformación.⁶ A fines de los años veinte, el dominio de este tipo de inversiones sobre las actividades primarias determinó el fortalecimiento de una pequeña clase empresarial nacional, que se refugió en los renglones de la industria de transformación, enfrentándose, a partir de entonces, a los intereses de la gran burguesía terrateniente e industrial, y a los monopolios extranjeros. Este sector ascendente era, dentro de la sociedad mexicana de fines de la década, el más vigoroso indudablemente, y el que habría de impulsar con posterioridad la política nacionalista que siguió a la gran crisis de 1929-1933.

El gobierno de Portes Gil, enfrentado a estas condiciones, desplegó en todos los terrenos una actividad inusitada, tratándose como se trataba de un mandato provisional. Elegido para cumplir un periodo transitorio hasta la elección del verdadero sustituto de Obregón, Portes Gil no se limitó al cumplimiento de su misión propiamente electoral, sino que dio, hasta cierto punto, un sello personal al tratamiento de varios problemas.

Fiel a su fama de enemigo mortal de la dirección de la CROM, el presidente provisional propició la caída en desgracia de sus principales integrantes. Pero el enfoque del problema obrero siguió siendo el de los últimos años de la administración de Calles, esto es, la subordinación de las necesidades de mejores condiciones socioeconómicas de los trabajadores, a la seguridad del poder. El problema obrero, de esa forma, continuaba siendo un problema político para el gobierno, antes que un problema económico para los trabajadores. Así, junto a insólitas —e intrascendentes— declaraciones sobre el cambio de la propiedad de los medios de producción a manos de los obreros, por medio de los canales institucionales representados por las cooperativas, Portes Gil, sacando ventajas inesperadas de su pugna con la CROM, favoreció la desintegración de la central y la

⁶ *Foreign Capital in Latin America*. New York, 1955, p. 111.

creación de sindicatos independientes. Los obreros podían estar ahora libres de la dictadura moronista, pero su entrada en los años treinta la harían en desbandada, agrupados y semiagrupados en decenas de organizaciones que, por su mismo número, impedían la acción común y restaban posibilidades a la ya desarticulada lucha obrera.

Por otra parte, la enemistad del Partido Nacional Agrario y Calles, que ya se había puesto de manifiesto durante los escrutinios para designar al presidente provisional, mostró un punto débil del gobierno. Si a los obreros se les prometían las perlas de la Virgen por medio de las cooperativas de sindicatos independientes que los desunían, a los campesinos, más dispersos, había que organizarlos en torno al régimen, y conseguir de cualquier forma su apoyo. Portes Gil dio un fuerte impulso a la distribución de la tierra —al fin y al cabo el plazo era sólo un año—, para lograr el respaldo de una fuerza que contrabalancara la influencia de varios sectores no declaradamente adictos al régimen, como el ejército. El crepúsculo de los líderes cromistas, en 1929, se vio correspondido con el ascenso de varios dirigentes campesinos a puestos de alta responsabilidad dentro del aparato estatal, lo que de paso enfrentaba, competitivamente, a los trabajadores de las industrias y demás obreros, con los trabajadores del campo.

Las distinciones al sector agrario no eran sólo el resultado de la urgencia que tenía el gobierno de lograr el apoyo del campesino, sino que eran el reconocimiento de una fuerza relativamente bien organizada, y peligrosamente independiente. Estando Portes Gil en el poder, la Liga Nacional Campesina, fundada tres años antes, se unió al Partido Comunista y a varias federaciones y agrupaciones campesinas estatales, para crear el Bloque Obrero y Campesino. El programa de esta nueva organización se basaba en medidas radicales, como la sustitución de los poderes estatales por *soviets* de trabajadores, la nacionalización de las industrias, el fin de los latifundios, la creación de guardias campesinas armadas, etcétera.⁷ Rápidamente, uno de los consejeros de la liga, Marte R. Gómez, fue nombrado ministro de Agricultura.

La unidad, sin embargo, duró poco. El levantamiento de los generales Sánchez y Escobar ese mismo año hizo que el bloque se escindiera entre quienes seguían a Portes Gil y quienes estaban en su contra. Entre estos últimos, el Partido Comunista, que vio llegada su oportunidad para brincar al poder, organizó un complot prontamente descubierto, cuya consecuencia principal fue la ola de anti-

⁷ Huizer. *Los movimientos campesinos en México*. México, p. 47.

comunismo que predominó hasta la llegada de Cárdenas, incluyendo el rompimiento de relaciones con la Unión Soviética durante el gobierno de Ortiz Rubio.

Pero sin duda alguna la labor más importante del interinato por-tesgilista fue la creación oficial del Partido Nacional Revolucionario, que nacido del anhelo callista de convertir a México en "un país de instituciones y de leyes", estaba llamado a centralizar la ortodoxia revolucionaria, y a controlar el entusiasmo por el poder que sentían los caudillos.⁸ Al mismo tiempo, el nuevo partido integraba en su seno a gran número de asociaciones políticas estatales, partidos regionales y seudopartidos locales, instrumentos generalmente del poder de los "hombres fuertes". Y lo más importante, disciplinó políticamente al ejército que, al formar parte integrante del PNR, debía convertirse en un cuerpo nacional, alejado de los intereses particulares de sus jefes.

El éxito del nuevo organismo político fue casi inmediato, al menos en sus fines integracionistas y electorales: desde su creación ganó todas las elecciones, lo mismo presidenciales que estatales o senatoriales, sin que hasta la fecha haya que lamentar ningún descalabro serio.⁹ Además, para 1933, los 52 partidos políticos que se habían registrado en 1929, se habían reducido a cuatro.¹⁰

El PNR, nacido de una iniciativa individual y con fines de conservación del poder para un grupo, tuvo desde el principio una plataforma doctrinaria endeble y contradictoria. Mientras se declaraba que era una institución de los trabajadores, destinada al mantenimiento del orden, y a la definición de la ideología de la revolución, así como a realizar sus promesas, la actitud en la práctica correspondía completamente al conservadurismo de Calles y su grupo; quienes en último caso hacían las grandes decisiones. La imposición de precandidatos fue un fenómeno frecuente dentro del partido durante todo el maximato, y la de candidatos fue un sistema común en la vida política mexicana de ese periodo. De la misma forma, los sistemas antidemocráticos del PNR, resolvieron los problemas de la afiliación: a los miembros del ejército se sumaron, automáticamente, los militantes de los pequeños partidos absorbidos, y los burócratas, que por el solo hecho de serlo, entraron a ser parte del flamante partido.¹¹

⁸ Vid. el aparte dedicado al caudillismo en González Casanova, Pablo. *La democracia en México*. México, Ediciones Era, 1965, pp. 29-30.

⁹ *Ibid.*, 11-13.

¹⁰ *Ibid.*, 29.

¹¹ Fuentes Díaz, Vicente. *Los partidos políticos en México*. México, 1956, vol. II, p. 57.

Pero con todo y la existencia del PNR y la centralización consecuente de la política nacional, la presencia de "hombres fuertes" siguió siendo una de las características de la vida pública del país. El poder que conservaban algunos jefes regionales, y sobre todo los militares, como concesión por su disciplina a un principio de unidad representado por el PNR, mantuvo la tradición de los grandes electores en México y nutrió la teoría callista de la *familia revolucionaria*. Esta supervivencia de los caudillos en la cumbre de la estructura del poder institucional, se manifestó claramente a fines de 1929, con motivo de las elecciones para suceder a Portes Gil. La designación cayó en un candidato de compromiso, no involucrado en las maniobras de la "alta" política nacional, y que hasta el momento de su unción se encontraba convenientemente alejado del país, cumpliendo una desabrida misión diplomática en Brasil. Así, esta serie de circunstancias favorables, hicieron a Pascual Ortiz Rubio, un hombre políticamente indefinible, presidente de México, con la anuencia de un grupo de militares frente a los cuales Calles tuvo que ceder: los generales Cárdenas, Amaro, Almazán y Cedillo.¹² El candidato callista, Aarón Sáenz, fue súbitamente retirado, por su completa identificación con el jefe máximo. A partir de este momento, el control total de la dirección del PNR por parte de los miembros incondicionales del grupo callista, disminuye y se transforma en la corriente dominante, sí, pero frente a la cual se eleva, poco a poco, un creciente número de opositores. De hecho, el abandono de la candidatura de Sáenz y la designación a última hora de Ortiz Rubio —prácticamente en calidad de "arrimado"—, fue el primer gran fracaso de la omnipotencia callista.¹³

II. LA CRISIS, SUS EFECTOS, Y LA POLÍTICA DEL MAXIMATO

El principio de la década de los treinta en México presentaba un aspecto de inseguridad, frustración y dependencia. A diez años del término de la etapa armada de la revolución, los gobiernos "emanados" de ese movimiento, aun cuando repetían incesantemente los argumentos de la consolidación y de la afirmación de los principios revolucionarios en la "conciencia colectiva", estaban muy lejos de poder dormir tranquilos. La fuerza efectiva del poder revolucionario reposaba en los dos principales sectores integrantes del PNR: el ejército, de cualquier forma terreno propicio a la conju-

¹² Brandenburg, *op. cit.*, p. 64.

¹³ Shulgovski, *op. cit.*, p. 64.

ración y a las ambiciones de los grupos selectos, y la creciente burocracia del poder revolucionario. Como sustentos de la autoridad, la enemistad de uno de esos grupos, aunada a una política contraria de cierta fuerza, podía poner en peligro a todo el edificio. La burguesía media, el sector económico de mayor pujanza, se mostraba aún indecisa en cuanto a su participación política, mientras las más variadas formas del poder pululaban por todo el país. La reforma agraria era la prueba palpable de que la revolución de ninguna manera había cumplido sus promesas; el proceso estaba incompleto, y el régimen favorecía la conservación de las estructuras tradicionales, combatiendo el colectivismo y fortaleciendo la propiedad privada de la tierra. Los obreros habían obtenido en total una serie de leyes y reglamentaciones, pero el problema económico seguía más vigente que nunca. La organización de ambos sectores adolecía de muchas fallas; cuando no se encontraba capitalizada por el gobierno que la usaba como instrumento, se encontraba fragmentada. Las organizaciones campesinas, más poderosas por su unidad que las obreras, se estrellaban sistemáticamente frente a argumentos nacionalistas y patrioteros y se inclinaban ante una jerarquización de la problemática revolucionaria que en último término favorecía a las clases tradicionalmente poderosas y al nuevo sector de los "revolucionarios" enriquecidos. El crédito, aunque incipiente, actuaba ya como medio de control político de los trabajadores del campo.

Por otra parte, Portes Gil no había cambiado en nada la situación de la economía nacional. El país, fundamentado económicamente en las actividades extractivas, sobre todo del petróleo y la plata, que se destinaban casi por completo a la exportación, se encontraba en manos del capital extranjero: el 80% de todas las minas y las fábricas pertenecían a compañías norteamericanas, el 12% eran intereses británicos, y el resto se repartía entre mexicanos, franceses, españoles, etcétera.¹⁴ El comercio exterior, principal fuente de ingresos del erario, estaba condicionado a las altibajas de su primer mercado, los Estados Unidos, que absorbían el 75% de las exportaciones nacionales, al tiempo que exportaban a México el 70% de las compras del país.¹⁵

México, pues, recibió a la depresión de 1929 con los brazos abiertos y los ojos cerrados. La dependencia de un solo mercado en el comercio exterior provocó, al reducirse las tasas de las importaciones

¹⁴ Tannenbaum, Frank. *Mexico, the Struggle for Peace and Bread*. New York, Knopf, 1950, p. 202.

¹⁵ Shulgovski, *op. cit.*, p. 34.

norteamericanas, el derrumbe de los precios de los productos agrícolas e industriales del país. El producto nacional bruto inició, ayudado por crisis agrícolas ocurridas en los años anteriores, un proceso descendente que no se detuvo hasta 1933,¹⁶ mientras que la producción del campo bajaba en valor, de 2 322 millones de pesos en 1929, a 1 975 millones en 1930.

El efecto de la crisis en las exportaciones fue particularmente nocivo, si se toma en cuenta que este renglón era vital para los ingresos federales. De 267 millones de pesos que representaban las exportaciones con respecto al valor de producción en 1930, descendieron a 175 millones en 1933, año a partir del cual se inicia la recuperación.¹⁷ En el mismo periodo, los ingresos del erario disminuyeron en una cuarta parte,¹⁸ agravándose la situación por la disminución del ritmo del comercio, que disminuía también los efectivos obtenidos por el Estado por impuestos en este renglón.

El gobierno de Ortiz Rubio, apenas llegado al poder, descartó las posibilidades de un empréstito y prefirió el aumento de los impuestos y el control presupuestal: en el informe de 1931 anunciaba ya una serie de reducciones a los gastos públicos en todas las ramas del Ejecutivo, incluyendo salarios. Aplicada la medida, el presupuesto global se redujo, de 11.330,954.73 millones de pesos, a 9.306,077.66 millones. La rama más afectada fue la de Comunicaciones y Obras Públicas, que vio descender su partida presupuestal en cerca de 9 millones de los aproximadamente 47 y medio que tenía antes de las reducciones.¹⁹ Así pues, la disminución de la inversión pública se sumó a la de la privada, para afectar aún más los ingresos de los trabajadores, ya abatidos por la disminución de la producción y el derrumbe de los precios de los productos exportables. El fenómeno de la desocupación se presentó de inmediato, consecuencia de la paralización de las actividades industriales. Según el *Anuario Estadístico de 1938*, el número de los desempleados se elevó, de 287 462 que había en 1931 —año de las reducciones presupuestales del gobierno—, a 339 378 en el año siguiente.²⁰

¹⁶ Vid. Enrique Pérez López. "El producto nacional", en *México, 50 años de revolución*, vol. I, pp. 588-589.

¹⁷ *México exportador*. México, Secretaría de Comercio, 1939, p. 67. Citado por Shulgovski, p. 34.

¹⁸ Solís, Leopoldo. "La evolución económica de México a partir de la Revolución de 1919", en *Demografía y Economía*. México, El Colegio de México, 1969, vol. III, núm. 1, pp. 8-9.

¹⁹ Congreso, *Los presidentes de México ante la nación*, vol. III, p. 1053.

²⁰ Citado por Shulgovski, p. 35.

Con motivo de la crisis, el gobierno de Ortiz Rubio reforzó la tendencia conservadora iniciada por Calles, invocando incesantemente la presencia de la depresión para frenar o suspender las medidas reformistas que habían sido iniciadas con anterioridad. Las reacciones contrarias fueron aisladas y fragmentarias. También los obreros y los campesinos habían recibido la crisis con toda precipitación. Además de un movimiento obrero diluido en decenas de grupos independientes, la nueva Ley Federal del Trabajo, recientemente promulgada, creaba las juntas de conciliación y arbitraje con la tarea de determinar, en último caso, la validez o invalidez de los movimientos huelguísticos. Así, durante todo el maximato, las huelgas son mínimas, y las más de las veces efectuadas por obreros aislados: 15 huelgas en 1930, 11 en 1931, 56 en 1932, 13 en 1933, hasta que por fin, en 1934, el descontento por la política anti-obrerista de los regímenes callistas explota, y se efectúan 202 huelgas que reúnen a 14 685 obreros.²¹

El inicio del gobierno de Ortiz Rubio también coincidió con el rompimiento de la unidad campesina, ya afectada anteriormente por la desintegración del Bloque Obrero y Campesino. En 1930, la VI Convención de la Liga Nacional Campesina se convirtió en un campo de batalla por el control del campesinado, que terminó con el triunfo de los elementos gobiernistas, pertenecientes al Partido Nacional Revolucionario. La consecuencia inmediata fue la fragmentación de la liga: un grupo se integró al PNR, otro siguió al Partido Comunista y, finalmente, el grueso de la organización respaldó la creación de una liga independiente que adoptó el nombre de Liga Nacional Campesina "Úrsulo Galván", en memoria de su dirigente, muerto ese mismo año.²²

La nueva organización campesina, al igual que las restantes, se enfrentaba a una situación de crisis que el régimen utilizaba públicamente para disminuir constantemente el ritmo de la reforma agraria. En 1930, el 2.4% de los predios dominaban el 87.6% de la superficie agropecuaria del país. El gobierno de Ortiz Rubio, callista al fin y al cabo, continuaba la tesis del equilibrio entre la gran propiedad y la parcela, como fórmula salvadora de la producción agrícola. El presidente declaraba que aunque deseaba "liberar a nuestros campesinos, al mismo tiempo estoy convencido de que las grandes propiedades agrícolas son un poderoso factor de apoyo del equilibrio de nuestra economía y, por esa razón, ellas pueden esperar

²¹ González Casanova, *op. cit.*, p. 15.

²² Huizer, *op. cit.*, p. 49.

de mí un apoyo multilateral".²³ Y así era. La ley agraria aprobada en 1931 declaraba inafectables las tierras dedicadas al cultivo de henequén, plantaciones cañeras, caucho, árboles frutales, cultivos de aloe, cacao, café, vainilla, plátano, etcétera, todas ellas necesariamente de grandes proporciones.²⁴ Así, a la falta del reparto agrario se contestaba con el apoyo "multilateral" a los grandes terratenientes; a las peticiones de tierra se respondía con leyes que protegían los intereses latifundistas. Por si fuera poco, a estos factores y al descenso de los ingresos de los campesinos, se sumaron a partir de 1930 la desocupación de miles de peones despedidos de plantaciones y grandes propiedades que resentían también los efectos de la depresión, y el regreso de miles de braceros rechazados en las fronteras norteamericanas, merced a la aplicación de la ley Harris que prohibía su contratación.²⁵

Pero si el gobierno de Ortiz Rubio respondía bien a las esperanzas puestas en él por Calles y su grupo, así como por la burguesía nacional, la crisis, cuyos años más agudos coinciden con la estancia de Ortiz Rubio en el poder, no afectaba solamente a los trabajadores y a los campesinos, sino que decenas de miles de pequeños empresarios, comerciantes y artesanos atravesaban por una angustiosa situación, agravada por el establecimiento de un impuesto extraordinario en 1931, que sumaba 20 millones de pesos, y que afectó en forma considerable a la pequeña burguesía, ya agobiada por la competencia del capital monopolista extranjero.²⁶ La crisis gestaba otra crisis. Junto a la situación desesperada del campo, a la miseria creciente de los trabajadores y al empobrecimiento de la pequeña burguesía, los políticos y los "líderes" enriquecidos y burocratizados daban lugar a una situación caótica en la administración pública, al mismo tiempo causó y efecto de las protestas desorganizadas y el descontento de las clases populares del país.

Además, junto a la rápida descomposición del PNR, la influencia de la CROM llegaba a su fin. Para 1932 las divisiones en su seno estaban a la orden del día. Federaciones estatales, frecuentemente representantes de los intereses de los poderes locales, competían entre sí para lograr las mejores prebendas y los puestos públicos más prometedores. Además, se movían dentro de la otrora poderosa central varios grupos políticos que ofrecían visiones distintas del

²³ Citado por Nathan Weyl en *The Reconquest of Mexico. The Years of Lázaro Cárdenas*. London-New York-Toronto, 1939, p. 96.

²⁴ *Problemas agrarios*, 1933, núm. 11 y 12, p. 128.

²⁵ Shulgovski, p. 36.

²⁶ *Ibid.*, pp. 73-74.

desarrollo que debía observar el movimiento obrero. Ese año, uno de estos grupos, encabezado por Vicente Lombardo Toledano, sistemáticamente bloqueado por Morones y su grupo, dejó la CROM y formó una nueva organización, la Confederación General Obrera y Campesina de México (CGOC).

En 1932 la situación socioeconómica del país era ya definitiva. A las condiciones provocadas por la crisis y por la política reaccionaria de los callistas, se sumaban las intervenciones cada vez más abiertas del jefe máximo en las decisiones presidenciales. Dentro del PNR, los sectores contrarios a la tendencia oficial se fortalecían, ejerciendo ya una presión considerable. La crisis no sólo había provocado la desarticulación de la vida económica del país, sino que iba a crear las condiciones necesarias para un rompimiento temporal de la estabilidad política, ya precaria por las contradicciones internas del grupo en el poder. Así, el 2 de septiembre de 1932, Ortiz Rubio se vio obligado a presentar su renuncia a la presidencia de la República, poniendo de manifiesto, de paso, los manejos de la camarilla callista, la falta de unidad entre los grandes intereses políticos del país, y el sacrificio exigido, como única solución amortiguadora a la crisis que afectaba a todos los sectores del país. De esta forma, si la designación del ex embajador en Brasil para la presidencia había sido una concesión forzada de Calles a sus opositores, su renuncia era la declaración ya sin tapujos de la guerra que se empeñaba en el interior del PNR por el control político, entre los representantes de la pequeña burguesía nacionalista y el sistema compuesto de dominación callista. Hacia el exterior, el sacrificio presidencial se presentaba como un requisito de la unidad del partido.²⁷

El sustituto de Ortiz Rubio fue, en realidad, la última imposición de Calles, y el fin de su periodo marcó el término del maximato. Designado como el único hombre capaz de conservar intactos los principios revolucionarios, Abelardo L. Rodríguez, ex jugador profesional de beisbol y ex gobernador de Baja California, trató de enfrentar la crisis económica por medio del impulso a la industrialización del país, basada, una vez más, en el capital extranjero, y en su debida protección. El movimiento obrero fue atraído una vez más hacia el sustento del régimen, si bien con la utilización de medios menos escandalosos que la corrupción.

El gobierno tenía ante sí la situación más desorganizada que se había presentado hasta el momento. Los obreros se unían en torno

²⁷ *Ibid.*, 75.

a cuatro grandes centrales, la CROM, la CGOC, la CGT, de tendencia anarquista, y la Confederación Sindical Unitaria de México, plaza fuerte de los comunistas. Sin embargo, en 1933 ninguna de estas organizaciones tenía la fuerza suficiente y el respaldo gubernamental para dominar el panorama obrero-nacional. Alrededor de ellas se movían grandes sindicatos, 57 federaciones, 17 confederaciones y 2 781 sindicatos medianos y pequeños. El gobierno de Rodríguez enfrentó la situación por medios institucionales. En lugar de utilizar la venalidad de ciertos líderes y controlar al movimiento obrero por medio de centrales nacidas independientemente, se buscaba ahora convertir al partido en el nuevo instrumento de supervisión. Así, a través de él se crearon "cámaras de trabajo" con el fin de absorber a los elementos salidos de las grandes centrales. El éxito, sin embargo, fue mínimo. A fines de 1933, la organización obrera estatal, la Cámara Nacional del Trabajo, contaba con sólo 15 700 miembros.²⁸ Esta reacción contraria evidenciaba no sólo el repudio generalizado hacia los organismos gubernamentales, sino el decaimiento del movimiento obrero, que para entonces, fragmentado como estaba y colocado ante el arbitrio de las juntas de conciliación, se manifestaba sólo esporádicamente, por medio de paros no reconocidos y reprimidos y huelgas de brazos caídos. Ninguna de estas formas de protesta, esencialmente autodefensivas, tenían la fuerza suficiente para provocar cambios en la política gubernamental.

Calles, tras bambalinas, insistía en las tendencias generales de su concepción del poder revolucionario. Con el pretexto de la consecución de una política dirigida hacia un desarrollo "europeo" del sector agrario, con base en las necesidades exigidas por la depresión, se reforzaba la utilidad de la pequeña propiedad que despertaría el nacimiento de la iniciativa y del espíritu empresarial de los campesinos. El ejido, contra el cual jamás se había podido desatar la guerra abierta, pasaba a una consideración de forma transitoria de propiedad, antecedente del minifundio al que en realidad se veía como la única base segura de apoyo al régimen. Paralelamente a las declaraciones sobre esta urgencia vital del Estado por crear una amplia clase de pequeños propietarios agrarios, los documentos oficiales sobre el problema de la tierra guardaban el mismo temeroso silencio mostrado en regímenes anteriores respecto a las grandes propiedades de tipo latifundista. Además, las deplorables condiciones económicas que vivía el país y los amplios intereses del grupo callista en el campo dieron nacimiento a un nuevo enfoque del problema

²⁸ Clark, Marjorie Ruth. *Organized Labor in Mexico*. Chapel Hill, 1934, p. 270.

agrario. El campesino perdió su carácter de beneficiario de la Revolución y, merced a una situación de emergencia por los efectos de la depresión, se convirtió en un beneficiario de sí mismo, y en un benefactor del Estado y del poder revolucionario, que exigía el redoblamiento del esfuerzo laboral, en un ambiente dominado por las ideas sobre la pequeña propiedad, para alcanzar por medio de este sistema el deseado aumento en la producción agropecuaria. La institucionalización del periodo, y el callejón sin salida en que se habían colocado los gobiernos del maximato, aunado a una política que se asía a la crisis y exageraba sus temores para no afectar los intereses del grupo dirigente, convirtió el problema agrario en un problema cuya atención principal estaba en relación con la economía del país entero, y no tanto ya con las condiciones individuales de los integrantes de ese sector. El campesino era importante como factor de la riqueza nacional, antes que por su situación de sector más atrasado, marginalizado y pauperizado de la sociedad mexicana posrevolucionaria. Se trataba de introducir modificaciones al sistema vigente de propiedad privada, pero con el único fin de reforzarlo. Estas iniciativas reformistas darían sus frutos en un nivel macroeconómico, aunque las deficiencias de la explotación determinarían la perpetuación de la miseria de los productores.

Pero este tipo de actitudes, y la incapacidad del grupo en el poder para ofrecer una mayor flexibilidad en su política sin entrar en contradicción con los intereses de sus miembros y los de los grupos económicos que lo mantenían, prendió la mecha política en las más altas cumbres de la estructura revolucionaria. En 1933, como consecuencia de unas declaraciones públicas de Calles, en las que se declaraba contrario a toda medida reformista en el sistema de tenencia de la tierra, por considerarlas "antieconómicas", surgió en el seno del PNR un grupo disidente, compuesto por representantes de intereses del ala progresista de la clase media, y que venía a sumarse al creciente número de críticos de la política oficial; este grupo —los "agraristas"— exigía la aplicación de los principios revolucionarios tan escatimados por los gobiernos posteriores a Obregón, la destrucción del latifundismo, la creación de un mayor número de ejidos y la socialización de la explotación de la tierra.

Esta división hizo estallar la lucha entre los sectores de izquierda y de derecha, durante el Congreso del Partido Nacional Revolucionario celebrado ese mismo año en Querétaro, y que tenía una importancia fundamental, puesto que de él tenía que salir aprobado el proyecto de programa de la nueva administración, el Plan Sexenal,

y porque de él habría de salir el próximo candidato y virtual presidente de México.

La guerra quedó centrada, desde un primer momento, en la poca atención prestada al problema agrario por el proyecto del plan, que de esa forma continuaba dando al traste con las esperanzas de una población dedicada a las actividades del campo cercana a los 4 millones de individuos. Las exigencias de los "agraristas" fueron calificadas de utópicas por los elementos conservadores y los miembros del grupo de Calles, que sacaron a relucir una vez más la eterna argumentación usada contra el reparto agrario: la aceleración en el ritmo de la reforma de la propiedad de la tierra pondría en peligro renglones tan importantes como el comercio exterior y la oferta de productos agropecuarios para la industria —cara a Abelardo Rodríguez—, ya que los cultivos especializados se verían sustituidos por cultivos de subsistencia.²⁹ El sector contrario no tuvo grandes elementos para rebatir esa tesis, y aun cuando se incluyeron varias de sus proposiciones en el proyecto del plan, el problema del latifundio y el reparto de la tierra seguía siendo una notable ausencia en el supuesto programa del próximo gobierno.

Pero la división del PNR era ya definitiva. La cercanía de las elecciones presidenciales ponía en guardia a los opositores de la política callista contra un nuevo intento de imponer a un candidato idóneo para los intereses conservadores. Aunque para la fecha todavía muchos puestos importantes del partido seguían en manos de Calles y sus partidarios, la presión de los grupos contrarios, generalmente ligados con los anhelos de la pequeña burguesía, aumentaba, secundada por el palpable descontento de los obreros y los campesinos. Esto había hecho que la oposición a Calles llegara al congreso del partido presentando un bloque más o menos unificado. Durante el periodo preelectoral de ese año, la actividad política había sido muy intensa y los sectores de izquierda del PNR se habían dado a la búsqueda de un candidato que reuniera dos condiciones fundamentales: el visto bueno del aún poderoso grupo de Calles, y la tendencia reformista que permitiera la revitalización de la ya cadavérica Revolución mexicana, por medio de la aplicación de sus postulados, y de una política que buscara un distinto tipo de desarrollo económico para el país.

Así, el descontento generalizado por la política contrarrevolucionaria del maximato hizo que los ojos de los "agraristas" y demás facciones interesadas en una política más radical, se volvieran hacia

²⁹ Tello, *op. cit.*, p. 77.

el general Lázaro Cárdenas, que durante su gubernatura en Michoacán había demostrado su disposición a poner en práctica medidas reformistas, además de una insólita honradez para los tiempos que corrían. Por otra parte, la posibilidad de la candidatura de Cárdenas había servido de acicate a nuevos esfuerzos por unificar el movimiento campesino, defraudado y reprimido por el callismo. La principal iniciativa en este sentido partió del seno mismo del Partido Nacional Revolucionario, y fue precisamente uno de los líderes de la central agraria de esa organización, Graciano Sánchez, quien, en unión del grupo de Portes Gil, y secundado por varios líderes agrarios, fundó la Confederación Campesina Mexicana, con el fin de centralizar los esfuerzos para llevar a Cárdenas a la presidencia. Apoyada por varias Ligas de Comunidades Agrarias estatales, la CCM emitió un manifiesto dirigido especialmente a la otra gran central campesina, la Liga "Úrsulo Galván", proponiéndole —y obteniendo— la unificación en bien de la candidatura cardenista.³⁰

De esta manera, los sectores campesinos, apoyados por las organizaciones sindicalistas independientes del control estatal, el ejército, la pequeña burguesía, y hasta algunos núcleos católicos —cualquier cosa sería mejor que Calles—, presentaron la candidatura del general Cárdenas. Ante semejante despliegue de fuerza, Calles y su grupo no tuvieron más alternativa que aceptar la realidad, mientras que por otra parte estaban seguros de que Cárdenas resultaría a la larga tan manuable como todos los mandatarios anteriores.

En el último año del gobierno de Abelardo L. Rodríguez, 1934, se celebró el triunfo de la oposición representado por la candidatura de Cárdenas a la presidencia, por medio de un resurgimiento de los movimientos populares. La inminencia del nuevo poder hizo que los esfuerzos de la administración de Rodríguez por contener las demandas de los trabajadores y sus protestas resultaran estériles, al tiempo que los argumentos de los líderes gobiernistas, que pregonaban la imposibilidad de realizar paros exitosos en tiempo de crisis económica, y la conveniencia, en su lugar, del arbitraje estatal, se vieron ampliamente rebasados por el empuje de los obreros. Las 202 huelgas que se declararon en ese año constituyeron tanto el fin de un periodo de aletargamiento de las luchas populares, como una clara advertencia al presidente electo acerca de los rumbos más convenientes para su política.³¹

³⁰ Huizer, *op. cit.*, p. 54.

³¹ González Casanova, *op. cit.*, p. 15.

III. LA CORRECCIÓN DEL RUMBO

El ascenso de Lázaro Cárdenas al poder significaba la entrada en escena de la pequeña burguesía nacionalista, que había seguido un proceso de crecimiento constante a partir de la competencia con el capital monopolista desde los años veinte; significaba también la introducción de nuevas ideas en torno al desarrollo económico del país, nacidas del aparatoso fracaso de la política del maximato para sórtear la depresión; así como una renovación del instrumental que la revolución había venido creando para enfrentarse a la problemática del México de los años treinta, con su crisis actuante y su angustioso dominio extranjero de las fuentes nacionales de riqueza.

Cárdenas encontró una situación muy deteriorada por causas externas, y por la política torpe y progresivamente conservadora que habían seguido Calles y sus partidarios. Económicamente, el país sufría los coletazos de la depresión, si bien a partir de 1934 se notaban ya síntomas de que la consolidación del momento de la recuperación estaba cercana. La desocupación y el bajo nivel de ingresos creaban un ambiente de miseria que alcanzaba tanto a los obreros y a los campesinos, como a la burguesía nacional. De paso, estos factores avivaban el revanchismo de los círculos reaccionarios, efectivamente apoyados por el capital monopolista extranjero. De hecho, el elemento político más pujante en 1934 era la contrarrevolución.⁸²

Frente a ella, los obreros seguían al garrote sin una estructura vertebral que los unificara. Se multiplicaban las centrales, las federaciones, las confederaciones, los sindicatos autónomos, etcétera. La CROM, que ya nunca se recuperaría del golpe que le asestó Portes Gil, nadaba ya en el desprestigio, mientras que la CGT, que desde mediados de la década anterior había tratado de controlar con cierto éxito el movimiento obrero para el anarquismo, pasaba a ocupar un segundo plano entre la fuerza laboral organizada del país. La CGOC de Lombardo Toledano, apenas a un año de su nacimiento, no tenía aún fuerza política suficiente para pretender el dominio del panorama obrero de la época.

El nuevo presidente trajo consigo un concepto de revolución como fuerza de orden, que a lo largo de su administración caracterizaría las funciones gubernamentales. Su campaña presidencial había aclarado desde el principio su creencia de que sólo la intervención estatal progresiva sería capaz de lograr el reacomodo de la situación nacional a las necesidades que imponían tanto la revolución como la crisis

⁸² Tello, *op. cit.*, p. 25.

de 1929. El Estado, así, asumió ya desde las primeras declaraciones presidenciales funciones administrativas y empresariales, de distribuidor de la riqueza y, en ciertos momentos del inicio, de protector de determinados estratos —como el de los pequeños propietarios³³— sin que, por otra parte, esto significara la ausencia de la tesis tan largamente oída desde 1910 sobre el gobierno *nacional*, indiscriminado, que “no gobierna para una sola clase, sino (dentro del cual) se toman en cuenta los intereses de todos”.³⁴

Y de hecho, Cárdenas puso en práctica la función ordenadora de su régimen a partir de los primeros momentos. Sus declaraciones, además de tocar constantemente el tema de la condición económica, hacían hincapié en las necesidades organizativas de todos los sectores de la sociedad, especialmente los campesinos y los trabajadores de las ciudades. El tratamiento mismo de las constantes de la problemática nacional parecía sufrir un reacomodo; Cárdenas introdujo un nuevo concepto del proletariado, a quien hizo interdependiente para con la revolución, miembro y beneficiario, y coposeedor del poder, como parte de las clases “populares”. También el enfoque del problema del campo rompía con los esquemas anteriormente usados y, al mismo tiempo, marcaba los inicios del distanciamiento político entre Cárdenas y el grupo callista: vuelta a los sistemas ejidal y comunal frente a la preferencia del maximato por la parcelación y la propiedad privada.

Sin embargo, Cárdenas empezó a gobernar con un aparato estatal y partidista, dentro del cual los elementos callistas y conservadores controlaban puestos más o menos importantes. La subsistencia de estos núcleos en las altas esferas del poder, determinó que el comienzo de la administración cardenista tuviera una actuación constreñida dentro de los lineamientos de un plan sexenal, que más que dirigir la acción con criterios revolucionarios, la limitaba, puesto que había sido “elaborado como un compromiso entre los miembros radicales y conservadores dentro del partido”.³⁵

Pero la designación de Cárdenas dentro del PNR, y su posterior triunfo en las elecciones, había sido un triunfo de los sectores de izquierda, si bien éstos no habían logrado aún una plena fortaleza. No obstante, su control progresivo de los órganos del poder, y la radicalización de las clases populares como consecuencia de la situación planteada por la crisis y el maximato, fueron los factores que crearon las condiciones necesarias para que esos grupos desataran,

³³ Vid. *El Universal*, 23 de junio de 1935, p. 1.

³⁴ *El Universal*, 1º de diciembre de 1936, pp. 1 y 6 (versión periodística).

³⁵ Huizer, *op. cit.*, p. 55.

ya desde 1934, una enérgica campaña dirigida a eliminar a los contrarios de los puestos importantes y, al mismo tiempo, a lograr el compromiso y la fidelidad de trabajadores y campesinos al régimen. Depresión, resabios de la política represiva de los años anteriores y la existencia de corrientes progresistas vigorosas dentro del gobierno determinaron una actividad masiva sin precedentes desde el triunfo de los revolucionarios en la guerra civil. Así, en diciembre de 1934, mientras Cárdenas recibe el poder de Rodríguez, se efectúa en la capital el Primer Congreso de la Confederación General de Obreros y Campesinos, una de las centrales sindicales menos viciadas del momento.

El primer año de gobierno de Cárdenas, 1935, mostraba ya los cambios que caracterizarían al periodo en el tratamiento de los problemas nacionales. Un enérgico programa de inversión federal en obras públicas, financiadas con déficit presupuestal, y dirigidas, en tanto que medidas anticíclicas, a incrementar en forma considerable la capacidad adquisitiva de la población, dieron principio en ese año a un proceso inflacionista que por muchos años sería una de las peculiaridades del desarrollo económico nacional.³⁶ Además, en el extranjero, se iniciaba la recuperación de los países industrializados, que provocó un aumento sensible de las exportaciones tradicionales del país.³⁷

Pero un programa de saneamiento de la economía nacional en esos niveles no bastaba para conjurar todos los peligros que enfrentaba el régimen cardenista en su primer año de ejercicio. El descontento no podía ser frenado simplemente por la creación de riqueza; había que aprender a distribuirla, puesto que la posibilidad de levantamientos armados nutridos por las amplias capas de la población no era del todo remota. Por doquier se escuchaban peticiones que poco a poco acercaban más a los grupos obreros y a los campesinos; se demandaban tierras, mejores salarios, enseñanza, obras de infraestructura que terminaran con el marginalismo y la dependencia del sector rural, apertura de mayores centros de trabajo en las áreas urbanas, hospitales, créditos, implementos y maquinaria agrícola, etcétera.³⁸ Y había un claro peligro en la desatención total a esas peticiones. Los campesinos organizaban marchas a las capitales de los Estados, y asaltaban los comercios en los poblados; los obreros reiniciaban las grandes huelgas en demanda de mejores condiciones de trabajo; la pequeña burguesía exigía garantías y condiciones favorables para sus

³⁶ Padilla, *op. cit.*, pp. 14 y 77.

³⁷ Pérez López, *op. cit.*, p. 576.

³⁸ Tello, *op. cit.*, p. 78.

actividades, mientras que los círculos económicamente más poderosos planteaban determinadas condiciones, en un juego de regateo que significaba el mantenimiento de la estabilidad y el orden del país. La solución cardenista hizo trizas todos los enfoques dados con anterioridad a los complejos conflictos de México, e inició toda una época en la política gubernamental: desarrollo independiente, dentro del esquema capitalista, con elementos de planificación y de control estatal cada vez mayores.³⁹

El delineamiento progresivo de una política independiente del gobierno de Cárdenas, con respecto a los intereses y los dictados de Calles y su grupo, provocó en 1935 la primera reacción fuerte de éstos. A mediados de ese año, el mismo jefe máximo de la revolución hizo unas declaraciones a la prensa en las que criticaba acerbamente al régimen. Esta actitud de Calles, su solo nombre que recordaba toda la tendencia corrupta de las administraciones anteriores, y en especial los excesos de Luis N. Morones y demás "líderes" de la CROM, motivaron que las organizaciones sindicales se manifestaran en apoyo al gobierno de Cárdenas y dieran lugar a la primera muestra de la reunificación obrera; esto, como prueba palpable del papel que desempeñarían las masas durante todo el periodo cardenista, se lograría un año después. Ante la intervención de Calles en la política nacional, la CGOC, compuesta por sindicatos disidentes de la CROM, junto con la Confederación Sindical Unitaria de México y varios de los sindicatos más poderosos, publicaron un documento conocido como "Respuesta de los trabajadores a Plutarco Elías Calles", en la que lo calificaban de traidor a la patria. La condena callista a las huelgas del momento provocó algo pero para los intereses conservadores que la simple actividad sindicalista: las centrales y sindicatos que habían tomado parte en la redacción del documento formaron el Comité de Defensa Proletaria, el mismo día de la contestación al jefe máximo, basado en un programa que, entre otras cosas, consagraba la legitimidad de la huelga como arma del proletariado.⁴⁰ El comité tenía como tarea inicial la de convocar a un Congreso de Unificación Nacional, que incluiría a representantes obreros y campesinos.

Pero el balance continuaba: para octubre de ese año de 1935, los grupos armados y las organizaciones de la extrema derecha aumentaron sus actividades como reacción al apoyo obrero al régimen de Cárdenas. Asesinaron líderes y militantes sindicalistas, desataron una furibunda campaña contra el gobierno por estar supuestamente ins-

³⁹ *Ibid.*, pp. 78-79.

⁴⁰ Shulgovski, *op. cit.*, p. 276.

pirado en el comunismo, y crearon de hecho un clima de terror. Para restarle fuerza al Comité de Defensa Proletaria, las organizaciones sindicales afines a los intereses callistas, encabezados por la CROM, se unieron y formaron la Alianza Única de Trabajadores; y el tiro salió por la culata. Además del repudio general, varios sindicatos, hasta entonces de los más fieles a Morones, abandonaron la CROM ante los evidentes fines políticos de su dirección.

El gobierno, sintiéndose apoyado en esta forma por el grueso de los trabajadores, de los núcleos campesinos y de la clase de pequeños empresarios, se aventuraba cada vez más en sus correcciones a los sistemas anteriores y en la implantación de medidas para el equilibrio de la economía nacional, no de todo el agrado del ala derecha. El reparto agrario cobró un impulso inusitado, al tiempo que se complementaba con la creación de instituciones gubernamentales de crédito, que se sumaban a las instauradas por Calles a fines de los veinte, y se elevaba el monto de la inversión pública, que para 1935 representaba 143 millones de pesos, junto a 82 millones dedicados a ese renglón en 1930.⁴¹ La situación mejoraba lentamente: se obtenían mejores salarios merced a la reforma agraria y a los gastos públicos, si bien sus beneficios se veían disminuidos por las tendencias alcistas de los precios con motivo del aumento de la demanda.⁴²

Fiel a su concepción del papel del Estado en México, el gobierno cardenista aceleraba los preparativos para tener un mayor control sobre la vida del país, prosiguiendo el centralismo iniciado por Calles al final de su periodo, incrementando la ingerencia de los organismos públicos en la dirección y desarrollo de la economía y participando activamente en la conformación de una base de apoyo popular. Así, mientras el jefe máximo patrocinaba indirectamente la unificación de las masas obreras, Cárdenas apadrinaba, por medio de un decreto expedido a mediados de 1935, la de los campesinos, fuerza que había sido decisiva en la designación de Cárdenas como candidato del PRI y en su posterior triunfo, y que a la fecha alineaba junto al gobierno, por el impulso dado al reparto de la tierra. La prosecución de la reforma agraria, con todas sus intenciones anticíclicas, precisaba —al igual que la firmeza del gobierno— de la organización de los trabajadores del campo. Cárdenas ordenó a la dirección del PNR la formación de ligas agrarias estatales, que posteriormente integrarían una estructura nacional que gracias a la conversión de

⁴¹ Fernández Hurtado, Ernesto, "La iniciativa privada y el Estado como promotores del desarrollo", en *México, 50 años de revolución*. México, Fondo de Cultura Económica, 1960, vol. I, p. 605.

⁴² Solís, *op. cit.*, p. 17.

gran número de agricultores en ejidatarios, daría al régimen, a través del partido, un arma poderosísima contra la oposición, y una nueva pieza para lograr el acomodamiento favorable de los elementos del poder.

También dentro del aparato estatal había repercutido la acción popular contra el callismo, y la buena fortuna parecía estar del lado de las nuevas corrientes. El apoyo obrero y campesino obtenido por Cárdenas en sólo un año de gobierno, le proporcionó la fuerza suficiente para iniciar la depuración de su régimen: a fines de 1935 fueron reemplazados varios elementos callistas, como el siniestro Garrido Canabal, secretario de Agricultura, y Juan de Dios Bojórquez, secretario de Gobernación, por hombres adictos a la línea cardenista. Portes Gil, que había tenido un destacado papel durante la campaña electoral y la designación partidista de 1933, fue nombrado presidente del PNR, con la tarea inicial de expurgarlo de opositores al régimen, y de abrir sus puertas a todas las organizaciones de trabajadores leales al gobierno.⁴³ Simultáneamente se efectuaron varios cambios en el ejército, movilización de altos oficiales, al tiempo que se hacía la limpia dentro de las filas del partido. Ésta afectó incluso a Rodolfo Elías Calles y a Fernando Torreblanca, hijo y yerno respectivamente del jefe máximo, al igual que a otros destacados callistas. En el interior del país, 7 gobernadores de la misma tendencia perdieron sus puestos en 1935, mientras que 3 más obtenían "licencia" para dejar sus cargos, por medio de la acción del PNR.⁴⁴ Así pues, cuando Calles volvió a México en diciembre de 1935, después de una corta ausencia motivada por la reacción desfavorable hacia sus famosas declaraciones contra las huelgas, se encontró con un panorama desconocido, dentro del cual no sólo ya no era amo absoluto, sino que ahora su opinión no era siquiera de un valor determinante. Su contraataque fueron ya las patadas del ahogado: Cárdenas lo desterró junto con dos de sus más cercanos partidarios en abril de 1936.

Esta depuración del PNR fortaleció todavía más las ya firmes posiciones obtenidas por los sectores pequeñoburgueses que en ese tiempo encontraban metas comunes con los grupos de izquierda. Apuntalados de tal manera, fueron ellos quienes tomaron como responsabilidad propia, dentro del partido, la organización de los trabajadores. Sin embargo, este impulso dado a los movimientos sociales de las masas había nacido con un carácter eminentemente elitista en cuanto a la dirección, y así seguiría posteriormente, de tal suerte que las decisiones y las actividades se dictaban siempre desde las altas esferas del partido. Por otra parte, expulsados los callistas del PNR,

⁴³ Brandenburg, *op. cit.*, p. 80.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 81.

el ala derecha fue ahora ocupada por Portes Gil y sus partidarios, representantes de una burguesía "progresista" que pregonaba las ventajas de la armonía y de la hermandad entre el capital y la fuerza del trabajo y que trataba de neutralizar de esa forma el libre desarrollo de los movimientos populares.

Por su lado, los círculos de la pequeña burguesía se sentían obligados a respaldar la política populista del cardenismo, y a hacer en cierta medida causa común con los trabajadores, por estar también en conflicto permanente con los opositores del régimen, esto es, el capital extranjero, la agricultura latifundista y la gran burguesía nacional monopolista. Su desarrollo estaba asimismo ligado necesariamente a la formación de una estructura económica moderna, dentro de la cual se desarrollara un mercado interno fuerte que les permitiera de una u otra forma alcanzar sus beneficios. El gobierno de Cárdenas tenía que buscar soluciones que satisficieran más o menos a todos los grupos, puesto que al fin y al cabo había que continuar el desarrollo social sobre las bases del consenso, el equilibrio y la armonía, bajo la celosa supervisión del Estado.

A principios de 1936, cumpliendo con lo acordado a mediados del año anterior, el Comité Nacional de Defensa Proletaria convocó a un Congreso de Unificación Nacional, del cual salió la central obrera más grande y longeva que ha tenido el país: la Confederación de Trabajadores de México (CTM). La nueva organización, patrocinada hasta cierto punto por el gobierno, se integró inicialmente con base en campesinos, burócratas, empleados de banco, mineros y maestros, además de los obreros, y contó con una fuerza fundadora de 3 594 organizaciones, tanto sindicatos industriales como trabajadores de pequeñas empresas semiartesanales.⁴⁵

Individualmente, la CTM contó desde el momento de su creación con cerca de 200 mil miembros.⁴⁶ Durante su primer congreso, celebrado bajo la presidencia de su flamante secretario general, Vicente Lombardo Toledano —creador y destructor de la CGOC una vez nacida la CTM—, en 1938, adoptaría una posición definida como "sindical dentro de la lucha de clases al servicio del proletariado nacional".⁴⁷ Sin embargo, desde sus declaraciones iniciales, la CTM, al margen de las protestas clasistas necesarias, se declaró encaminada a un fin nacional que la colocaba en un terreno distinto al de las

⁴⁵ Huizer, *op. cit.*, p. 60. Vid. también Brandenburg, p. 84.

⁴⁶ López Aparicio, Alfonso. *El movimiento obrero en México*. México, Editorial Jus, 1952, p. 219.

⁴⁷ Cerda Silva, *Historia del movimiento obrero en México*. México, UNAM, 1952, p. 142; cf. "El Primer Congreso Nacional de la CTM", en *CTM, 1936-1941*, pp. 467-496.

puras luchas por el mejoramiento de clase: el bien del país, la "completa libertad de la República". Este tipo de actitudes nacionalistas repercutiría posteriormente en forma desfavorable sobre la libertad efectiva de la central. Por lo pronto, sus dirigentes insistían en la idea de que la nueva organización era independiente de todo control ajeno a los trabajadores, y que las coincidencias con la política oficial eran eso, simples coincidencias, comuniones de dos partes en lucha contra un enemigo común. Sin embargo, la CTM había nacido bajo un patrocinio y con el visto bueno del régimen, y a partir del momento mismo de su fundación iba a constituirse en un elemento vital para el sostenimiento del gobierno y en uno de sus partidarios incondicionales, sobre todo a partir de 1938, bajo su nueva indumentaria de "sector" del partido oficial.

La organización de los trabajadores se realizó como una necesidad inaplazable del momento, sobre todo desde el punto de vista gubernamental. La urgencia de contar con bases de apoyo suficientemente poderosas para contrarrestar la influencia de grupos como el ejército y los círculos económicamente más fuertes y conservadores era evidente e impostergable, si se quería iniciar la corrección de los efectos de la crisis por medio de una política de crecimiento independiente, que significaba el radicalismo de izquierda para la corta mirada de los sectores capitalistas de derecha. Pero esta organización obrera debía tener un desarrollo controlado —condición tan importante como su existencia misma—, de forma que las posibles variantes en la actitud gubernamental no fueran a equivaler a la separación entre el Estado y los trabajadores por medio del distanciamiento de los líderes respectivos. El control debía, pues, establecerse en la cumbre, junto con una política de acercamiento a las masas obreras, de rehabilitación de lo que el fenómeno revolucionario había tenido de "popular" y, sobre todo, en un contrabalanceo constante. El nuevo peso puesto en la balanza fue el de los campesinos. En el Congreso Constituyente de la CTM, los elementos cardenistas y los representantes del gobierno se opusieron tajantemente a la participación campesina en el acto, sin que valieran las protestas de la central. Los trabajadores del campo, decía Cárdenas, debían conformar una organización independiente, y ésta debía ser patrocinada por la iniciativa gubernamental, puesto que era el gobierno quien tenía directamente a su cargo la reforma agraria y demás transformaciones del medio rural.⁴⁸ Así pues, la CTM dio la primera muestra de la subordinación de sus intereses a los del

⁴⁸ Lázaro Cárdenas. *La unificación campesina*. México, Partido Nacional Revolucionario, 1936, p. 11.

régimen y tuvo que aceptar la separación de sus filas de un número considerable de trabajadores agrícolas reunidos en sindicatos campesinos. Muchos de ellos, no obstante, conservaron una doble afiliación.⁴⁹

Consecuentemente con esta gran actividad de masas favorecida por el gobierno, el partido empezó a hacer los arreglos necesarios para no quedarse completamente fuera del juego. Para 1936, el PNR, a pesar de las purgas de abril del año anterior, seguía siendo una organización ejemplar de los sistemas del maximato: burocratismo y corrupción se daban la mano con una función eminentemente electoral; su desprestigio entre los trabajadores y los campesinos era notable, subrayado por la política antiobrera del grupo de Portes Gil. Cárdenas, aprovechando la proliferación de los sistemas de frente popular como respuesta a la amenaza fascista en Europa, para establecer un mayor control de los movimientos populares, había anunciado en varias ocasiones su intención de unificar las fuerzas contrarias al fascismo y a la reacción dentro del PNR, lo que de paso debía servir para elevar el nombre del Nacional Revolucionario ante los ojos de los trabajadores y evitar que éstos siguieran un desarrollo fuera del alcance de la tendencia oficial.

En septiembre de 1936, Portes Gil abandona la presidencia del partido por discrepancias con Cárdenas sobre la conducción de una huelga de los electricistas. La nueva dirección toma posesión de su cargo con instrucciones de convertir al partido en una organización capaz de absorber a las amplias capas de la población, y sobre todo a los trabajadores, para canalizar sus bregas, volviéndolo de esa forma, de un instrumento elitista que había sido en tiempos del callismo, en una organización de acusadas características corporativas. Los obreros y los campesinos, partidistas hasta ese momento, forzados por intereses electorales, lo iban a ser ahora por consideraciones políticas que se referían tanto al continuismo del poder como a su mejor funcionamiento dentro de un esquema de democracia dirigida y controlada, y debían, por lo tanto, darle al partido un nuevo significado popular, de acuerdo con la tónica del régimen y las necesidades económicas y políticas de la época.

En 1937, durante la campaña para diputados federales, la CTM tomó una participación muy activa en favor de los candidatos del partido, mientras que éste, en correspondencia, aceptó la postulación de muchos candidatos obreros.⁵⁰ Sin embargo, lo que se estaba

⁴⁹ Huizer, *op. cit.*, p. 65.

⁵⁰ Fuentes Díaz, *op. cit.*, vol. II, p. 64.

tratando de corregir en el PNR empezó a aquejar ese año a la gran central obrera, compuesta ya para entonces por cerca de medio millón de trabajadores. La dirección se tornaba autoritaria y dictatorial y la imposición de varios candidatos durante unas elecciones de representantes locales dio lugar a la primera división de la CTM, que fue abandonada por 23 delegaciones y tres miembros del secretariado, de notables ligas con el Partido Comunista. Y fue éste sobre quien recayó la culpabilidad en la versión de la dirección de la central, que lo acusó de buscar la división y de perseguir una política partidista antes que acatar las disposiciones de la CTM. Finalmente, después de un tiempo de ataques, defensas, proposiciones y contra-proposiciones, a través de las cuales se demostró la puerilidad de los argumentos de los dirigentes cetemistas, el Partido Comunista decidió que lo importante era “la unidad a toda costa”, y sus simpatizadores volvieron al redil, esta vez bajo condiciones específicas: subordinación total a las resoluciones de la plana mayor de la central —ahora libre de miembros del PC—, independientemente de posiciones y tendencias políticas particulares.⁵¹ A partir de este momento, la condescendencia de la CTM para con el gobierno se transforma en colaboración decidida, que no termina aún en nuestros días.

El gobierno, por su parte, llevó adelante sus programas socioeconómicos, con base en una concepción mixta de desarrollo comunal de las organizaciones sociales, que combinaba o procuraba combinar las ventajas de las actividades agrícolas con la industrialización.⁵² La productividad mantenía un ritmo estable de crecimiento, sobre todo en la industria, mientras que la agricultura se mantenía estancada por los efectos del reparto. Pero, en general, el saldo era favorable: el producto nacional bruto había aumentado para 1937 en casi 3 mil millones de pesos en comparación con 1932, el año más agudo de la crisis.⁵³ De igual forma que en lo político se buscaba el balance y contrabalance de la situación, en lo económico se tendía a impedir el dominio exclusivo de uno o varios sectores y grupos generalmente por medio de la intervención oficial.

Pero junto a esto el proceso inflacionista mostraba ya sus inconvenientes, después de su inicio en 1935: los precios aumentaban de

⁵¹ Shulgovski, pp. 296 y ss., cf. CTM, 1936-1941, pp. 256 y ss.

⁵² Vernon, Raymond. *El dilema del desarrollo económico de México. Papeles representados por los sectores público y privado*. México, Editorial Diana, 2a. ed., 1967, p. 89.

⁵³ Pérez López, 588-589 (millones de 1950).

manera alarmante, favorecidos por su elevación artificial y el ocultamiento de los productos por parte de los productores y distribuidores contrarios a la política cardenista, que de esa forma trataban de provocar el descontento popular contra el régimen. La respuesta de éste fue un nuevo paso en la escalada de medidas reformistas: se estableció un organismo encargado del control de los precios, que regularía sobre todo el mercado de víveres; se apoyó la formación de cooperativas de consumo en todo el país, especialmente en el sector agrario, cuyas cooperativas estaban subsidiadas por el gobierno mediante la exención de impuestos.

La política gubernamental, fundamentalmente incomprendida por los representantes de la gran burguesía nacional, no obstante las repetidas declaraciones cardenistas en el sentido de que las concesiones a los trabajadores traerían consigo un aumento de los ingresos de toda la población y, por consiguiente, un aumento en los beneficios de los empresarios, ocasionó a partir de 1937 el principio de un proceso de descapitalización del país, al retirar sus efectivos un considerable número de inversionistas nacionales y extranjeros, por desconfianza hacia el radicalismo mostrado por el gobierno. Como resultado, los recursos monetarios, los depósitos en los bancos y la reserva en divisas disminuyeron bruscamente, mientras por otra parte crecía la necesidad de capital para llevar adelante los programas de inversión pública y de complementación de la reforma agraria, medidas todas escogidas por el gobierno para combatir los efectos de la crisis e iniciar definitivamente, sobre nuevas bases estructurales, el crecimiento económico nacional.

La solución adoptada por la administración de Cárdenas fue proseguir el desarrollo de la inflación, a semejanza de la política del *New Deal* establecida por Roosevelt en los Estados Unidos, y aplicada en México con bastante aproximación.⁵⁴ Este proceso, acentuado en momentos en que se experimentaba una redistribución del ingreso entre las clases populares y se fortalecía el mercado interno merced a la reforma agraria y a otras medidas, aceleró los ritmos del desarrollo económico, y disminuyó los niveles de la desocupación, problema que había acabado por agudizar las condiciones económicas del país durante los años de la depresión.⁵⁵

La situación, sin embargo, estaba muy lejos de ser satisfactoria, sobre todo en el campo; a fines de 1937, la Liga de Agrónomos Socia-

⁵⁴ Vid. William B. Glade y Charles W. Anderson. *Revolution and Economic Development*. Madison, Wisconsin University Press, 1963; p. 128.

⁵⁵ Shulgovski, *op. cit.*, p. 185.

listas se quejaba de la persistencia del latifundio junto a dos millones de campesinos sin dotación, de la mala calidad de las tierras ejidales; de la infracción a la ley por medio de dotaciones demasiado pequeñas, que daban como resultado el hecho de que la superficie media por ejidatario fuera menor en un 50% a lo estipulado para tierras de temporal. Además de lo reducido de las parcelas ejidales, había que contar con su carencia de buena maquinaria agrícola y con el cultivo de productos que, como el maíz, eran de muy bajos rendimientos.⁵⁶

A corto plazo, el reparto agrario había afectado la producción, que para 1937 se encontraba sólo un poco por encima del nivel obtenido en el difícil año de 1932. Además, el problema se acentuó el año siguiente, 1938, al descender la producción de varios importantes productos de exportación, como el algodón y el henequén, al mismo tiempo que el gobierno de Cárdenas reducía considerablemente el ritmo del reparto de la tierra.

A todas luces, 1938 fue en muchos aspectos el año cumbre del cardenismo. A pesar del decaimiento de la atención prestada por el gobierno a la agricultura, hubo importantes medidas económicas e institucionales que daban un panorama de gran actividad reformista.

En lo político 1938 es un año clave. La necesidad del régimen de conservar lo ganado en este terreno, aumentar el respaldo popular y distribuir el poder por medio del equilibrio de las fuerzas, centralizadas en torno a las decisiones presidenciales, lo llevan a buscar nuevas formas de desarrollo político y a favorecer un reacomodamiento de los sectores vitales y grupos de presión con base en un nuevo modelo que se probaba profusamente en Europa: el Frente Popular. Las necesidades del momento obligaron una vez más al régimen cardenista a modificar la estructura política, en busca de una mayor consolidación del poder. En marzo de 1938, el Partido Nacional Revolucionario se transforma en el Partido de la Revolución Mexicana, basado ya no en la afiliación elitista que anteriormente había sido la norma, sino en la integración de cuatro sectores autónomos, a saber, el ejército, los campesinos, los obreros y un amorfo "sector popular".

La reestructuración del partido, que de esa forma agrupaba a todos los grupos de apoyo a la política cardenista, se produjo convenientemente en los momentos de la expropiación petrolera, y fue una primera jugada para conseguir el triunfo frente al capital mono-

⁵⁶ *La redistribución de la tierra y la explotación agrícola ejidal*, México, Liga de Agrónomos Socialistas, 1937, pp. 71 y ss. Citado por Tello, p. 26.

polista extranjero aliado a la gran burguesía nacional. Por otra parte, la nueva apariencia del partido, con base en criterios ocupacionales, facilitó el inicio de un peculiar juego "democrático", gracias al cual el poder y los puestos claves se distribuían —y se distribuyen— entre los cuatro sectores componentes, los que, a su vez, se han respaldado incondicionalmente unos a otros desde entonces, ya sea por unanimidad verdadera, aparente, o simple "disciplina de partido".⁵⁷

El partido, al transformarse en un afán por dar mayor fortaleza al régimen, dio comienzo a una política de acercamiento e identificación con los trabajadores, radicalmente plasmada en su declaración de principios, uno de cuyos puntos afirmaba que el nuevo organismo "considera como uno de sus objetivos fundamentales la preparación del pueblo para la implantación de una democracia de trabajadores —seguramente parafraseando la dictadura del proletariado, al igual que Cárdenas— y para llegar al régimen socialista."⁵⁸ De esta forma se unían dos tendencias fundamentales del gobierno de Cárdenas: por una parte las necesarias posturas populistas, y por la otra la determinación clara e inequívoca de la participación estatal en todos los movimientos sociales, su patrocinio y, de hecho, su control. El partido, además, "reconocía la existencia de la lucha de clases como fenómeno inherente al régimen capitalista y de producción, y en ella se coloca al lado de los trabajadores".⁵⁹

Sin embargo, este tinte clasista del nuevo partido, tan difícilmente sostenible por la naturaleza de sus diversos ingredientes componentes, no obvió las declaraciones de la CTM, que al aceptar su ingreso como uno de los cuatro sectores del PRM, afirmó que esa central, y el movimiento obrero por ella representado, no perderían de ninguna forma su independencia ni su libertad de acción por concepto de su nueva situación institucional, ya que el partido era, según apreciaciones del secretario general de la CTM, Lombardo Toledano, una organización en sí misma independiente, sin mayor vinculación con el gobierno, a más de ser un partido "popular" y, por lo tanto, no sectario.⁶⁰

No obstante, era evidente que la autonomía de los diferentes sectores, reconocida en los estatutos del nuevo partido, no pasaría de ser una apariencia necesaria para conservar el aspecto democrático de su funcionamiento, como tampoco sería más que apariencia la

⁵⁷ Brandenburg, *op. cit.*, p. 91.

⁵⁸ Shulgovski, *op. cit.*, pp. 133-134.

⁵⁹ Fuentes Díaz, *op. cit.*, p. 68.

⁶⁰ "Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la fundación del Partido de la Revolución Mexicana", en *CTM*, pp. 543-550.

lucha por el socialismo. Se trataba en realidad de establecer canales institucionales de comunicación entre el gobierno y las direcciones de los cuatro sectores, para de esa forma encauzarlos debidamente dentro de los esquemas de la política oficial, conformada a su vez a partir de los problemas de mayor imperio en el momento, única forma de frenar el descontento y mantener un principio elemental de unidad. Además, como lo habían hecho regímenes anteriores, el de Cárdenas reforzó la idea de las peculiaridades nacionales, con base en las cuales era imposible el desarrollo de un movimiento masivo, independiente de la acción, el patrocinio y la tutela del Estado. Por lo tanto, la integración de los miembros de los sectores campesinos, obrero, "popular" y del ejército dentro del PNR, equivalió a comprometerlos íntimamente con el aparato del poder, coronando de esa forma un proceso de rendimiento incondicional que tenía sus orígenes en la corrupción de la ya vetusta CROM.

Pero varias organizaciones perdieron no sólo autonomía con su ingreso al partido, sino que además perdieron miembros. La CTM fue la que sufrió especialmente merced al nuevo acomodamiento del PNR, que llevaba intrínseco un nuevo balance del poder. Burócratas, campesinos, maestros, empleados de banco, etcétera, la abandonaron para integrarse a otros organismos. Además, la expropiación del petróleo y de los ferrocarriles había mermado ya la influencia de la organización y el fervor que despertaban sus siglas en esos poderosos sindicatos, puesto que en la nueva situación, la lucha obrera dentro de ellos equivalía a la lucha contra el régimen, problema por demás ajeno a las intenciones de la central.⁶¹

Los campesinos también tuvieron su año en 1938, cuando menos en el aspecto institucional. El levantamiento del general Cedillo, apoyado fundamentalmente por agricultores acomodados, mostró la necesidad de centralizar el control del campesinado, entonces agrupado en torno a ligas agrarias independientes. En junio, un mes después de aplastada la rebelión, el gobierno de Cárdenas hizo pública su intención de proceder a crear la nueva central campesina, sobre las bases sentadas por decreto a mediados de 1935. Este nacimiento "decretado" de la Confederación Nacional Campesina, con sus dos millones iniciales de miembros, fue a la vez la culminación del control sobre el campesinado, antes establecido por las ligas agrarias estatales, y la creación de una formidable fuerza que fungiría como nueva pieza en el juego del equilibrio, sobre todo frente a la CTM, a la cual se vería enfrentada sistemáticamente — si bien no en

⁶¹ Brandenburg, *op. cit.*, pp. 84-85.

forma abierta, salvo en ciertas ocasiones. Esta relación competitiva entre las dos grandes centrales impidió y continúa impidiendo la verdadera colaboración entre ambos sectores.

De paso, el gobierno conservó y acrecentó su función arbitral en los conflictos socioeconómicos del país, aprovechando la competencia entre los dos sectores. Así, las protestas de los dirigentes de la CNC contra las huelgas obreras, a las que calificaban de antipatrióticas e ingratas para con la población del campo, no fueron pocas a partir del momento de la creación de la CNC. Pero esto, generalmente usado no sólo como instrumento para mantener a los dos sectores separados, sino también como diversión de las verdaderas y tradicionales causas de los problemas agrarios, no evitó ni siquiera por un momento la idea clara de la naturaleza gobiernista que presentaría en adelante la "decretada" central campesina. Las quejas contra líderes burocráticos y moderados, que obstaculizaban el reparto agrario, surgieron como primer acto posterior a la formación de la CNC, llegando incluso a pensarse en la fundación de una organización menos funcional para el régimen y más útil para los campesinos, aunque la iniciativa no prosperó debido a la influencia del Partido Comunista y otros grupos, que prefirieron salvaguardar en ese momento la unidad.⁶²

Pero era una unidad interna. La dirección de la CTM, además de herida por la pérdida de poder que le había significado la aparición de la central campesina, era una entusiasta seguidora de la tesis gubernamental sobre la necesaria separación de los sectores, que se comunicarían entre sí por medio del "independiente" Partido de la Revolución Mexicana; así, la CTM no hacía mayores esfuerzos por buscar un acercamiento, dejando al partido las decisiones sobre los momentos y las formas convenientes de comunicación.

La reestructuración del partido y la unificación campesina en torno a la CNC, cumplieron funciones vitales para la existencia del régimen en los difíciles momentos de la aplicación extrema del nacionalismo cardenista, la expropiación petrolera. Rodeado de semejantes fuerzas, el gobierno podía ahora enfrentar las iras del capital extranjero y de la miope burguesía nacional. La CNC estaba asegurada, al igual que la pequeña burguesía nacionalista, ambas beneficiadas directa e indirectamente por las derramas de la inflación (la inversión en obras públicas, en 1938, había aumentado en un 215% con respecto a 1935),⁶³ y por la promulgación de una serie de leyes proteccionistas a la industria nacional, como la que imponía gravámenes

⁶² Huizer, *op. cit.*, p. 67.

⁶³ Padilla, *op. cit.*, p. 78.

a la importación de productos elaborados en el país, en un esfuerzo por disminuir la dependencia de la economía nacional con respecto a las fluctuaciones en el extranjero.

Los dos últimos años del gobierno de Cárdenas experimentaron una clara disminución del ritmo de las transformaciones socioeconómicas hasta entonces llevadas a cabo y una moderación en la política general del régimen, ambos factores consecuencia, sin duda, de la reacción contra la expropiación petrolera y sus efectos, y del hecho de que en México los presidentes empiezan a gobernar cuando son designados por el partido, y dejan de hacerlo cuando el partido elige al sucesor.

En 1939, la dirección de la CTM desautorizó tajantemente todas aquellas huelgas de sus agremiados que no fueran aprobadas en la forma debida por el Comité Nacional, argumentando una responsabilidad *nacional* ya tradicional, y que determinaba lo negativo de ese tipo de movimientos de protesta, casi egoístamente obreros.⁶⁴ El gobierno usaba las mismas argumentaciones para condenar las huelgas y, de hecho, prohibirlas. Junto a estas actitudes neutralizadoras y el consecuente deterioro de la lucha por las reivindicaciones populares, el ritmo del reparto agrario seguía descendiendo, mientras que el impulso dado por Cárdenas al desarrollo industrial beneficiaba ampliamente a la burguesía pequeña y media, que se veía favorecida por la aplicación de medidas nacionalistas (limitación de las importaciones para buscar la sustitución, estímulo a nuevas empresas por medio de exención de impuestos, etcétera), tendientes a lograr las bases del crecimiento nacional con base en el mercado interno. Este reforzamiento de las posiciones moderadas favoreció la aparición, en 1939, del primer partido político de oposición, Acción Nacional, desprendimiento de la Unión Nacional Sinarquista. Esta última, por su parte, organización fascistoide fundada en mayo de 1937 bajo el lema "Nuevo Orden Cristiano", realizaba para 1939 una activa campaña de proselitismo masivo, facilitada por la enemistad de los círculos empresariales contra Cárdenas, el descontento de los trabajadores que aumentaba ante las actitudes gobiernistas y obstaculizantes de la CTM, y por los avances del fascismo en Europa.⁶⁵

El radicalismo de la política cardenista en sus primeros años de gobierno y la caja de Pandora que había abierto al favorecer los

⁶⁴ "Informe del Comité Nacional de la CTM al IX Consejo Nacional de la misma institución", en *CTM*, p. 645.

⁶⁵ Para un resumen escueto del desarrollo del sinarquismo, Fuentes Díaz, *op. cit.*, pp. 87, 91 y 92.

movimientos obrero y campesino y permitir las actividades de los grupos de extrema izquierda, fueron los factores que determinaron, junto a las presiones extranjeras por la cuestión del petróleo, la elección de su ministro de Defensa, el general Ávila Camacho, de claras tendencias hacia la derecha moderada, como el hombre indicado para consolidar los avances y volver el país al orden y al imperio de la "armonía social". Y para mayor paradoja, fue Cárdenas mismo quien tuvo que señalar, en tanto que presidente y, al fin y al cabo, gran elector, al hombre que habría de corregir sus excesos, para que todos los sectores del partido pudieran verlo, con el índice presidencial clavado en la frente, y aclamarlo como *su* candidato.

Cárdenas, en 1939, había encontrado a un PNR dividido, como resultado de las divisiones internas de cada uno de sus sectores. Además de las divisiones de la CTM, los militares estaban ante una disyuntiva, puesto que sólo quedaban dos de los generales que habían ayudado a derrotar al callismo: Cárdenas y Almazán, el primero de ellos imposibilitado para reelegirse, Almazán era la reacción y otro general, Mújica, tenía considerables simpatías entre los campesinos católicos y también planteaba un problema. Cárdenas, en conflicto por su misma actuación, y por las contradicciones inherentes a la política de conciliación y equilibrio que nunca descartó por completo, tuvo que recurrir a la solución usada por Calles durante la elección de Ortiz Rubio: escogió un hombre sin gran prestigio, pero conocido como funcionario honrado, y políticamente moderado, lo que lo colocaba en el centro aproximado de todos los intereses.⁶⁶

Junto a las medidas expropiatorias y nacionalizadoras, la administración cardenista, además de sustituir el nacionalismo defensivo y puro de los regímenes anteriores por uno encuadrado en actitudes fundamentalmente populistas, se había destacado por la atención prestada al problema agrario. Sin embargo, fueron manifestaciones campesinas de protesta las que despidieron a Cárdenas del poder. La reforma agraria iba hacia abajo y el gobierno contestaba las peticiones prometiendo, dentro de los límites de los intereses nacionales, siempre limitativos. Para 1940, las instituciones crediticias relacionadas con el campo, singularmente el Banco de Crédito Ejidal, discriminaban el otorgamiento de créditos por medio de criterios mercantiles, y entablaban relaciones sólo con explotaciones solventes, actitud por demás comprensible si se toma en cuenta que la apertura de ese tipo de instituciones al capital privado, iniciada años atrás, había llevado al Banco Ejidal a contar con fondos privados,

⁶⁶ Brandenburg, *op. cit.*, p. 92.

que en 1940 representaban casi el 50% del total de sus efectivos disponibles.⁶⁷

Y no era solamente la falta de crédito la que agravaba la situación en el campo. Había dos grupos que no necesitaban de empréstitos: los que tenían capital —que eran quienes lo recibían, por solventes— y los que no tenían tierras: cerca de tres millones de campesinos para esas fechas. Aun cuando el reparto hecho por Cárdenas significara el 52% del total concedido desde Carranza hasta Alemán,⁶⁸ la situación seguía siendo, para el último año de su gobierno, bastante negativa: el 80.9% de la superficie agrícola estaba controlado por el 2.3% de los predios,⁶⁹ mientras que la superficie ejidal había pasado tan sólo del 0.49% en 1930 al 1.19% en 1940.⁷⁰ Millones de campesinos estaban dotados con parcelas minúsculas, mientras que los predios mayores de 5 hectáreas constituían el 76.4% de la superficie agrícola. El 1.0% de los propietarios tenían en sus manos el 54.5% de todas las tierras disponibles, en propiedades de más de 10 mil hectáreas de extensión.⁷¹

Sin embargo, la impresión que dejaba atrás don Lázaro era, para la generalidad de la población, la de un radicalismo bastante acentuado. Tanto, que el 20 de febrero de 1940, a escasos diez meses de entregar el poder, Cárdenas, en un llamamiento al pueblo, se vio precisado a defenderse de los ataques que lo enjuiciaban por radical, frente a los cuales subrayó la actitud respetuosa hacia la propiedad privada que había observado su gobierno, y dentro de la cual algunos casos de expropiación y de nacionalización de empresas y servicios, además de haber estado claramente forzadas por las circunstancias, no podían ser sino excepciones que confirmaban la regla. Junto a las medidas socioeconómicas adoptadas por el régimen cardenista, la inflación y el reparto agrario, la crisis sería finalmente liquidada con ayuda de un gran fenómeno exterior: la Segunda Guerra Mundial. Así pues, pasado el peligro, estaba la mesa puesta para reiniciar la consolidación de los regímenes “emanados” de la revolución, en sus fundamentos sociales y económicos, por medio de la paz social, la armonía y la sustitución de la idea de la revolución y el comportamiento consecuente, por la de una democracia metafísica, favorecida por el estado de guerra que de hecho prevalecería

⁶⁷ Clarence Senior. *Land Reform and Democracy*. Gainesville, University of Florida Press, 1958, p. 104. Citado por Shulgovski, p. 404.

⁶⁸ Padilla, *op. cit.*, p. 14.

⁶⁹ Tello, *op. cit.*, p. 43.

⁷⁰ Loredo Goytortúa, Joaquín. “Producción y productividad agrícolas”, en *México, 50 años...*, vol. I, p. 115 (cuadro 7).

⁷¹ Tello, *op. cit.*, p. 42.

en México durante todo el periodo de Ávila Camacho. La revolución armada había terminado allá por 1920; la institucional había sobrevivido un par de décadas más. A partir de allí, la situación cambiaría hacia rumbos más tranquilos, menos arriesgados, y México dejaría de ser individualizado, identificado y explicado ante el resto del mundo por su llamada revolución, y pasaría a ser comprensible dentro de un marco mucho más conocido y respetable, como era la democracia de los países occidentales.

Y Cárdenas mismo era quien tenía que asumir el papel de anfitrión que despide a sus huéspedes en la puerta, excusándose porque la reunión hubiese tomado un cariz ligeramente atrevido:

... En México... no existe un gobierno comunista. Nuestra Constitución tiene un carácter democrático y liberal con ciertos rasgos moderados de socialismo... Todo ello no es más radical que los principios que se observan en otros países democráticos y aun en aquellos países que conservan instituciones monárquicas.⁷²

IV. CONCLUSIONES

Los efectos de la crisis de 1929-1932 sobre la conformación de la política y los movimientos populares de México, es un fenómeno que no ha sido, ni con mucho, plenamente estudiado. Hasta donde sabemos, salvo contadas excepciones, la mayor parte de la bibliografía existente para la década del 30 al 40, de carácter histórico, rodea el problema sin atribuirle mayor papel que los desbarajustes económicos, en tanto que los estudios de naturaleza económica que se han hecho sobre el México posrevolucionario —también a excepción de unos cuantos valiosos ejemplos— tratan generalmente el problema o sencillamente mencionan la concurrencia de una crisis y se lanzan a analizar el desarrollo económico nacional precisamente a partir de 1940.

Las bases, sin embargo, están en la década de la depresión. Y no sólo las del tan mentado desarrollo económico mexicano, sino que la estructura actual de la política y la vida nacional del país tiene sus raíces fundamentales en esa época. Por otra parte, el comportamiento observado por los elementos sociopolíticos de los años treinta en México responden a una situación en extremo peculiar, como es la convergencia de las necesidades y urgencias impuestas por el fenómeno económico con las obligaciones presentes, y de al-

⁷² *El Nacional*, 24 de febrero de 1940, p. 1.

guna forma patentes como factores de presión al poder, heredadas de la programática revolucionaria.

La depresión, en un primer momento, funcionó como un justificante inapelable del freno de las medidas resultantes de los postulados revolucionarios, y favoreció una política gubernamental demasiado comprometida —en su afán por mantener el “equilibrio” socioeconómico preexistente— con los sectores más derechistas del principio de los años treinta. Funcionó así cuando las posibilidades de flexibilidad de los gobiernos callistas se habían agotado, y cuando la corrupción y la represión a las demandas de la pequeña burguesía y de los trabajadores y campesinos eran el pan nuestro de cada día. Pero si por un lado la revolución pudo ser frenada merced a los efectos de la depresión en el país, las condiciones que impulsaban las demandas de cumplimiento de los principios del movimiento armado se vieron incrementadas enormemente por el desastre económico; en ese momento ya no era en nombre de la revolución que se pedían reformas socioeconómicas en México, sino en nombre de una situación presente que se tornaba día con día más intolerable. La política económica del maximato, por un lado apegada a las formas tradicionales de enfrentar una perturbación cíclica, y por otro maniatada e imposibilitada para tomar decisiones reformistas que ayudaran a salvar la situación y, con ella, la seguridad del grupo en el poder, por sus intereses particulares, no pudo capear el maremágnum de protestas y presiones que se le venían encima. El nacionalismo funcionó sólo como amortiguador para quienes no tenían —por su desorganización— poder alguno para imbuir nuevos rumbos a la política oficial; el empleo de figuras abstractas —*alma mater* de la revolución, *alma patria*, etcétera— servía para explicar, si acaso, pero no remediaba ni prometía una solución cercana a los problemas de México. Freno a los programas revolucionarios en nombre de la crisis y en favor de la institucionalización y burocratización de los problemas, corrupción desenfrenada que no disminuía ni con el sacrificio político de notables favoritos, condiciones económicas que no admitían mayor estudio para su mejoramiento, y sobre todo la presencia de una pequeña burguesía nacionalista agresiva y consciente de su poder, dieron las coordenadas necesarias del cambio.

Cárdenas entró al poder sabiendo lo que pasaba en México y sabiendo que tenía dos posibilidades: o rectificar todos los errores del maximato —entre ellos la autoridad de Calles— para reforzar el sistema global de la vida nacional, o persistir en la política entreguista y contrarrevolucionaria de los gobiernos pasados y encarar el

riesgo de una revolución, que esta vez tendría características populares insoportables para un grupo que se decía heredero del movimiento de 1910, y que posiblemente culminaría, pasando el periodo anárquico, en un cambio estructural drástico o en el imperio del ejército.

Por otra parte, mejor aconsejado, Cárdenas midió las posibilidades de seguir en cierta medida la política roosveltiana del *New Deal* como única oportunidad de evitar el desastre y fortalecer a tal punto el sistema económico mexicano que en un futuro borroso pudiera esquivar más fácilmente los efectos de la crisis capitalista. El esquema del desarrollo económico nacional se modernizó automáticamente, según el modelo que se seguía para la corrección de la crisis, y se inició un camino que, salvo excepciones periódicas, continúa hasta nuestros días, caracterizado por una combinación de relaciones capitalistas con una creciente intervención estatal encaminada a salvaguardar los intereses de cada grupo vital en la medida posible y necesaria para salvaguardar, asimismo, la continuidad en el poder.

Pero la operación iba a resultar un poco dolorosa y había necesidad de sujetar los brazos del paciente. Despojando al nacionalismo de las supercherías metafísicas anteriores, Cárdenas lo envolvió en un amplio manto de populismo y recurrió a los trabajadores de todos los tipos para apoyarse y poder atacar los problemas que ponían en peligro al régimen. De ahí vino la institucionalización definitiva de las relaciones entre los trabajadores y el Estado, que hasta la fecha dominan desesperadamente el panorama sociopolítico del país. Siguiendo la reestructuración del PNR, además de obedecer efectivamente a una situación caótica que lo convertía en el instrumento de un grupo, fue una necesidad impuesta por los peligros que corría el poder al iniciar los programas para combatir la crisis, en tanto que sirvió para amalgamar dentro de una estructura dominada por el régimen a todos los elementos vitales del país. El Partido de la Revolución Mexicana, con su nueva estructura, podía ahora controlar por medio del enfrentamiento mutuo y la competencia por los favores del Estado, al ejército, a los trabajadores, a los campesinos, a los comerciantes en pequeño, etcétera. La nacionalización del petróleo fue la primera prueba de fuego de la nueva formación y ésta la pasó con éxito. Pero esta medida tan radical trajo consigo nuevos problemas, merced a las contradicciones del régimen cardenista que, aunque abierto en mayor grado que ningún otro hacia una concepción clasista de la sociedad, en ningún momento podía olvidar compromisos establecidos e intereses creados, cuya satisfacción significaba la paz y la estabilidad de las condiciones vigentes.

en México. La reacción contra el asunto del petróleo cimbró un tanto el piso del cardenismo. La única posibilidad de evitar que el temblor se convirtiera en terremoto y acabaran unos cuantos vidrios rotos, era la suspensión de las reformas emprendidas en 1935 dentro de un favorecido proceso inflacionario, y la instauración de un gobierno con menos iniciativa, más administrador que empresario. Pero lo importante ya estaba hecho. Hasta cierto punto, los gobiernos "emanados" de la revolución podían, en adelante, agradecer al cardenismo el haberlos apuntalado y revitalizado en la práctica, complementando la labor callista de consolidación y perpetuación teórica de una revolución cuyo terreno predilecto era el futuro, y que exigía, por lo tanto, la permanencia en el poder del grupo "revolucionario"; grupo poseedor, además, de la exclusividad de la ortodoxia y de la patente de la revolución. A fines del periodo de Cárdenas, la situación estaba controlada y podía entrar al poder un mandatario neutro, que remediara los excesos innecesarios de la época anterior. El petróleo nacionalizado aseguraba cierta estabilidad de la economía nacional. El reparto agrario había logrado la distribución del ingreso y, por tanto, representaba cierta garantía contra una nueva perturbación cíclica. Obreros y campesinos eran miembros fundamentales del partido, por lo que su peligrosidad quedaba enmarcada dentro del juego "democrático" y equitativo establecido como norma de relación entre los sectores de esa institución. El contacto entre ambos era, por lo demás, difícil, puesto que los líderes respectivos estaban convencidos de que las decisiones sobre los movimientos populares debían llegar de arriba, y se entregaban apasionadamente a su labor de respetar la integridad del PRM y sus funciones coordinadoras en casi todo. El ejército estaba en una situación similar. La pequeña burguesía era la más beneficiada por las limitaciones al capital extranjero y los impulsos a la industrialización por medio de empresas privadas e iniciativas gubernamentales.

A cambio de esto, Cárdenas podía ahora suspender los programas y dar marcha atrás en las medidas; apoyarse nuevamente en las masas para enfrentar las furias desatadas por la expropiación y el resto de las reformas aplicadas, pudiera haber sido inclinarse demasiado hacia un bando que ya había adquirido demasiado poder, y podía haber causado la desaparición del sueño que desde Madero venían cultivando amorosamente todos los regímenes sobre la "armonía" y el "equilibrio" de la vida nacional. Por lo tanto, Cárdenas, teniendo ya alrededor una situación neutralizada por instituciones, compromisos económicos, penetración gubernamental en las organizaciones populares y, sobre todo, por haber tenido el tino de con-

vertir al Estado en un elemento imprescindible para la buena marcha de todos los asuntos importantes del país, se dedicó a preparar la recepción a su sucesor, tranquilizó a los inversionistas extranjeros, detuvo el reparto, dio amplias garantías a los círculos de la burguesía nacional por medio de subsidios a las nuevas industrias, chantajeó al movimiento obrero con la unidad y la integridad del país y pasó a la historia como el mandatario que puso fin a la práctica de una tímida y asustadiza revolución.

VENEZUELA EN LOS AÑOS TREINTA

D. F. Maza Zavala

I. ANTECEDENTES

Para apreciar mejor la coyuntura histórica de Venezuela en la cuarta década del siglo xx es útil el bosquejo breve de la retrospectiva, de modo que permita un conocimiento general de los antecedentes más significativos, bajo cuya luz algunos hechos del periodo objeto de examen adquieren relieve explicativo que facilita su análisis.

1. *La estructura de la economía y la sociedad antes del petróleo*

Las actividades petroleras en el país comenzaron en los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial; pero puede decirse que la era del petróleo se inició en 1917, cuando tuvo lugar la primera exportación comercial de dicha materia prima. Por lo tanto, lo que se ha dado en llamar la época prepetrolera —término no muy feliz, aunque no se ha encontrado otro mejor— comprende desde el nacimiento de la República en 1830, hasta 1916.

El eje económico del país durante el periodo indicado estaba constituido por el cultivo y la exportación de café. En segundo término figuraba el cacao. El cultivo se realizaba en su mayor parte en haciendas de tipo latifundista, con un mayor aprovechamiento de la fuerza humana de trabajo que de la tierra, y con muy escasa participación de medios avanzados de capital y tecnología. Los hacendados eran por lo general grandes propietarios territoriales, cuyas posesiones habían crecido merced a diversos procedimientos entre los cuales los irregulares eran los más frecuentes, y cuyas plantaciones se habían ampliado en virtud de la explotación de índole feudal de los campesinos, bajo las modalidades de “aparcería”, “medianería” o “colonato”.¹ Particularmente en épocas de “lim-

¹ Según estas modalidades, el latifundista concedía al campesino un pedazo de tierra para su cultivo, y hasta le hacía anticipos a cuenta de la futura cosecha, apropiándose de una parte de ésta, generalmente la mitad, y entrando en posesión de los cultivos apenas lo requiriese o mediante el cobro compulsivo de la deuda.

pia" y recolección los hacendados empleaban asalariados como fuerza de trabajo complementaria. Los campesinos dependían de los hacendados según relaciones que se asemejaban a la servidumbre feudal, de modo que prácticamente —aunque no desde el punto de vista jurídico— estaban adscritos a la hacienda junto con sus familias, y estos vínculos se mantenían mediante el procedimiento del endeudamiento perpetuo y hereditario de los campesinos con los hacendados. Los campesinos pagaban en especie o en trabajo su deuda, pero ésta nunca se cancelaba. Los hijos seguían atados mediante la deuda del padre. En algunos casos en que el campesino endeudado se fugaba de la hacienda, la policía del lugar lo perseguía y lo devolvía a su servidumbre una vez castigado.

Los campesinos no sólo cultivaban los frutos exportables, sino también los frutos para la subsistencia, en pequeñas parcelas denominadas *conucos*, en tierra de propiedad privada por la cual pagaban un arrendamiento exagerado, o en baldíos. Cierta parte de los cultivos para la exportación se realizaba en medianas y pequeñas propiedades. En 1891 las pequeñas y medianas propiedades agrícolas ocupaban en total unas 5 000 leguas cuadradas de suelo, distribuidas entre 19 901 propietarios, con un promedio de un cuarto de legua cuadrada por propietario; mientras que 1 184 propietarios, el 5% del total, ocupaban 14 184 leguas cuadradas de tierra, un 74% del total, con un promedio de casi doce leguas por propietario.² Dentro de este último grupo probablemente las disparidades eran bastante acentuadas, conformándose así una estructura muy regresiva de distribución de la propiedad territorial agraria en el país.

La exportación de frutos —café y cacao, principalmente— se hacía por intermedio de firmas exportadoras vinculadas al capital extranjero, las cuales hacían la función de financiadoras de las operaciones de cultivo, cuidado y recolección, a través de anticipos a los hacendados y pequeños cultivadores, con intereses crecidos y compromiso de venta de la cosecha a precios generalmente prefijados. La exportación estaba concentrada con destino a cuatro países: Inglaterra, los Estados Unidos, Alemania y Francia. Mediante la exportación de frutos las coyunturas que conmovían a esos centros del capitalismo se transmitían a la economía venezolana, específicamente al sector que giraba en torno a esas actividades. Las divisas obtenidas de la exportación se aplicaban al pago de la importación de bienes y servicios, incluido en estos últimos el de la deuda exterior del Estado que creció aceleradamente en las tres últimas décadas del siglo pa-

² Federico Brito Figueroa, *Historia económica y social de Venezuela*, UCV, 1966, t. I, p. 226.

sado. Ese tiempo de la formación de una deuda externa en Venezuela y de cierto auge de la inversión extranjera en negocios de exportación, de minería y de algunos servicios públicos —ferrocarriles, etcétera— correspondió en líneas generales a la época de expansión externa del capitalismo europeo y norteamericano, propiamente al tránsito del llamado capitalismo liberal al capitalismo monopolista de impulso imperialista.

En el pequeño sector urbano de entonces —hacia fines de siglo, aproximadamente un 80% de la población era rural— existían algunas actividades artesanales y escasos e incipientes brotes industriales en las ramas de bienes de consumo (alimentación, vestido, etcétera), mientras que en torno a la burocracia gubernamental proliferaban, además del comercio, servicios no ligados a la producción material.

El capital extranjero daba sus primeros pasos hacia la explotación de hidrocarburos en los últimos veinte años del siglo XIX. En 1885 la New York and Bermudez Co., empresa norteamericana, adquirió de H. R. Hamilton un contrato para explorar y explotar los productos naturales de los bosques existentes en terrenos baldíos del Estado Bermúdez (oriente del país), con derecho a explotar el asfalto que se encontrara en dichos terrenos. Las actividades de la citada compañía comenzaron efectivamente en 1887, con la explotación del lago de asfalto natural de Guanoco, por la cual el fisco nacional obtenía, en los términos del contrato, una regalía equivalente a Bs 2 por tonedada de asfalto exportado. Al mismo tiempo, las importaciones de equipos y materiales hechas por la Bermúdez estaban exentas de derechos aduaneros. Esta compañía protagonizaría posteriormente, durante el régimen de Cipriano Castro (en 1907-1908), incidentes abiertos o encubiertos que contribuirían al derrocamiento del mandatario, hecho en el cual se pudo advertir la intervención del capital extranjero asociado con la oligarquía del país.

Intentaré caracterizar en grandes líneas la estructura económica y social de aquella época. Era una economía precapitalista, de base agraria, vinculada al mercado mundial a través de la exportación de frutos y la importación de géneros manufacturados y capitales, con predominio de la clase terrateniente y de la burguesía comercial exportadora-importadora, cuyos intereses, aunque secundariamente antagónicos por el reparto del excedente económico, eran solidarios frente a la gran masa campesina no propietaria de cuya explotación se formaba dicho excedente. El campesinado suministraba la fuerza de trabajo para la economía de exportación, para la producción de alimentos destinados al mercado interno incipiente y para su propia

subsistencia. Las clases fundamentales eran, por lo tanto: la terrateniente, la burguesía comercial y el campesinado sin tierras. Se estaba formando una pequeña burguesía de profesionales, pequeños comerciantes, artesanos y funcionarios públicos. El proletariado industrial era prácticamente inexistente, así como la burguesía industrial y financiera. El Estado servía a los intereses de las dos clases dominantes.

2. *La dinámica económica y social en las primeras tres décadas*

El gobierno de Cipriano Castro (1899-1908) —surgido de la invasión desde los Andes del llamado “grupo de los 60”, pero particularmente de la descomposición del gobierno de Ignacio Andrade, representativo de la decadente burguesía comercial del centro del país— fue rico en peripecias frente al capital extranjero y la oligarquía caraqueña. Propiamente Castro no era representativo de una clase determinada, sino un aventurero ambicioso que aprovechó una coyuntura de descomposición de las fuerzas dominantes del país. Esa descomposición se acentuaría durante la primera década del siglo, en virtud del deterioro de los precios del café que golpeó duramente la economía cafetera del país y frente al cual las clases dominantes no crearon un mecanismo compensatorio. La acumulación de deuda pública insoluta a favor de países europeos —deuda contraída por gobiernos anteriores en las condiciones más deprimentes y negativas para los intereses nacionales— sirvió de pretexto a un grupo de potencias europeas acreedoras para intentar un bloqueo, de las costas y puertos venezolanos, probablemente con el ánimo de convertir a esta República en un protectorado para garantía de sus haberes acrecentados por el procedimiento de la usura desmedida; y así, en 1902, buques de guerra de esos países acreedores se hicieron presentes en La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo en actitud de agresión. La intervención de los Estados Unidos en el amago de conflicto, bajo la advocación de la llamada “Doctrina Monroe”, impidió el sojuzgamiento físico del país, pero a cambio de concesiones a las potencias agresoras bajo el título de arreglo para la cancelación de la deuda. Otro incidente se presentó con la New York and Bermúdez Co. —explotadora de asfalto en el oriente— cuando el gobierno de Castro demandó por vía judicial el pago de ciertas obligaciones fiscales. La compañía afectada buscó el camino del derrocamiento del gobernante, y así financió una revuelta armada de un caudillo regional, que fracasó. Castro tomó repre-

salias contra la Bermúdez y estuvo a punto de suscitarse otro incidente internacional, esta vez con los Estados Unidos, que entonces practicaban la "diplomacia del dólar" acompañada de un gran garrote. Otros hechos violentos contra algunos conspicuos oligarcas caraqueños contribuyeron a la caída del régimen de Castro en 1908.

El advenimiento de J. V. Gómez al mando gubernamental de Venezuela marca una época que es necesario caracterizar a grandes rasgos. Surgido de una conspiración medio grotesca contra Castro ausente, el régimen gomecista se inició en 1908 y duraría hasta 1935. En esos 27 años Venezuela se convirtió de país con base agraria en país con base petrolera.

Gómez, de modo distinto a Castro, fue el agente gubernamental de las fuerzas dominantes: los intereses petroleros extranjeros, la clase terrateniente y la burguesía comercial y financiera. El soporte de estos poderes, principalmente el petrolero, le permitió consolidar el Estado, mediante la eliminación de los caudillos regionales y locales, y lo que se puede calificar como integración política interna del país. Para alcanzar estas metas Gómez organizó un ejército regular, equipado y eficiente en su oficio; a los caudillos que no se sometieron los aniquiló en la cárcel o el exilio, y fomentó el organismo administrativo especialmente en los ramos de hacienda pública, sanidad y obras públicas. Gracias principalmente al ingreso petrolero, los recursos fiscales se multiplicaron y adquirieron cierta regularidad, lo que permitió el sostenimiento del ejército, de la policía, de la burocracia administrativa, de los servicios públicos y de la clientela del dictador. El saneamiento de las finanzas del Estado —no obstante el enriquecimiento ostensible y desmesurado de Gómez, sus familiares y acólitos— permitió atender al servicio de la deuda externa y en 1930, para conmemorar el centenario de la muerte del Libertador Bolívar, y para asombro del mundo, en una época de crisis económica, fue cancelada totalmente la deuda externa.

La dictadura de Gómez constituyó el marco propicio para el florecimiento casi sin tasa ni medida de los intereses del gran capital extranjero —norteamericano e inglés— aplicados a la extracción de petróleo para su exportación. Fueron esos intereses los principales sostenedores del régimen gomecista. Desde luego, también ese régimen favoreció al latifundio y a la burguesía comercial importadora y financiera. En esta trípole de poder económico radica el secreto de la estabilidad de aquel régimen de fuerza.

Durante las tres primeras décadas del siglo, la danza de las concesiones petroleras dominó el panorama nacional. El gobierno otorgaba enormes extensiones territoriales bajo la figura de la concesión

para explorar y explotar hidrocarburos, en los términos de la Ley de Minas, a los amigos del régimen, seguramente sujeto el privilegio a una modalidad de reparto de beneficios entre Gómez y sus allegados y favorecidos; los concesionarios venezolanos a su vez traspasaban las concesiones a compañías extranjeras, principalmente norteamericanas e inglesas. Inmensas fortunas se formaron de este modo y los consorcios petroleros pudieron acaparar áreas petrolíferas que para 1936³ representaban aproximadamente un 25% de la zona petrolera estudiada del país y una séptima parte de la totalidad del territorio nacional. En los casos en que el área bajo concesión cubriera propiedad particular, las compañías reconocían al propietario una regalía cuando la concesión resultaba productiva. Se formó así un estrato dentro de la clase terrateniente, el de los beneficiarios de regalías petroleras, cuyas fortunas crecieron considerablemente y se invirtieron en actividades distintas de la agricultura y la cría. En otros casos, las operaciones petroleras resultaron en perjuicio de hacendados, cuyas tierras no contenían petróleo y eran objeto de servidumbre forzosa en provecho de la industria extractiva.

La pregonada "prosperidad" económica bajo el régimen gomecista no hubiese sido posible sin las aportaciones de la actividad petrolera. En la primera década del siglo la economía cafetera sufrió el considerable deterioro de los precios y la contracción del mercado externo; en la tercera década, particularmente, además de la baja de los precios, durante los últimos años la economía del café resintió el aumento de los costos —salarios y otras partidas—, inducido por las operaciones petroleras.

Las plantaciones cafeteras se arruinaban progresivamente, la productividad descendía, los hacendados se endeudaban más aún y Venezuela cedió su lugar a Colombia como segundo exportador de café. El cacao y otros frutos de exportación también resultaron afectados por factores internos y externos. En 1926 la exportación de petróleo y sus derivados ocupó el primer lugar en el país, relegando a segundo término el café. El volumen del comercio exterior se multiplicó en la tercera década, tanto del lado de la exportación como del de la importación. El mercado de divisas adquirió una nueva fuerza gracias a las entradas procedentes del negocio petrolero. La cotización externa del bolívar comenzó a depender mayormente de las fluctuaciones del ingreso de divisas petroleras que de las divisas de exportación agrícola. El comercio de importación se expandió y una diversidad de artículos industriales —a los que pro-

³ Ministerio de Fomento. *Memoria* correspondiente al año 1937, p. vi.

bablemente no se hubiese tenido acceso en ausencia del auge petrolero— cubrió el mercado nacional. La importación venezolana por habitante, que en 1913 alcanzaba Bs 35.18, en 1926 ascendió a Bs 52.04. El 52% de esa importación procedía de Europa Occidental y el 46% de los Estados Unidos. La renta aduanera y consular, en función de la importación, se cifró en Bs 103 millones en el año fiscal 1928-29, en comparación con Bs 48 millones en el año fiscal 1912-1913. Esta renta hubiese sido bastante mayor si, conforme a la observación del ministro de Fomento de entonces doctor Gumersindo Torres, en lugar de percibir derechos de explotación del petróleo, se hubiesen cobrado a las compañías los derechos de importación sobre los equipos, materiales y bienes de consumo que introducían al país exonerados. Semejante observación, que ponía en evidencia la anomalía de la administración fiscal en las relaciones con la industria petrolera, en lugar de conducir a una reforma de dicha administración provocó la destitución del doctor Torres como ministro.

No es correcto afirmar, como algunas veces se hace por historiadores superficiales, que el establecimiento de la industria petrolera en el país determinó la crisis de la agricultura de exportación. Esta agricultura estaba en crisis antes de que el primer barril de petróleo fuera extraído del subsuelo venezolano. La escasa o nula renovación de las viejas plantaciones, el estancamiento de los métodos de cultivo y recolección, la ausencia de un cambio progresivo en la estructura agraria, la falta de una política de conservación de la principal riqueza anterior al petróleo, la expoliación de los productores por parte de los agentes de exportación vinculados en su mayoría al capital extranjero, constituyeron un conjunto de condiciones y circunstancias que debilitaron profundamente la posición de la caficultura y abatieron sus defensas frente a las fluctuaciones de los precios internacionales y los cambios que en el cultivo y comercialización del fruto estaban ocurriendo en el mundo. Así, pues, cuando la explotación de petróleo se hizo presente en la vida venezolana, la agricultura tradicional, dependiente del mercado exterior, estaba sustancialmente quebrantada y condenada a la ruina si no surgiese una transformación económica, técnica y social de dicha actividad. El surgimiento de la economía petrolera entre la segunda y la tercera década del siglo desempeñó al respecto una doble función: *i*) contribuyó a acelerar la ruina de esa atrasada agricultura, fundamento de una economía atrasada; *ii*) puso de relieve la profundidad de la crisis de esa economía.

La actividad petrolera ocasionó diferentes modificaciones de la situación socioeconómica anterior. Un nuevo uso de la tierra se pre-

sentó en muchos casos como una alternativa forzosa ante la agricultura y la cría. Algunos terratenientes encuentran que su posición económica es afectada negativamente por este nuevo uso; otros, en cambio, derivan una nueva y comparativamente cuantiosa fuente de ingresos "sin causa" de tal circunstancia, bajo la figura de la regalía. Así, la clase terrateniente resultaba subdividida en dos estratos: la de los terratenientes tradicionales, que sufrían las consecuencias totales de la decadencia de la vieja actividad agropecuaria, y la de los terratenientes favorecidos con las regalías petroleras, que se transformaron en ricos propietarios urbanos, en rentistas y en algunos pocos casos en empresarios. Al mismo tiempo, los trabajadores rurales, particularmente los jóvenes, emigraron en buena parte a los campos petroleros y zonas urbanas, y la vecindad de esos campos determinó una elevación de los jornales; este hecho, ante el deterioro de los precios de los frutos, provocó una reducción del excedente económico. La deuda, en gran parte con garantía hipotecaria, que pesaba sobre la propiedad agropecuaria, principalmente en los renglones de café y cacao, aumentaba continuamente durante la tercera década y su carga se hizo insostenible para los hacendados. En virtud del ascenso de los ingresos públicos impulsados por la explotación petrolera, y para atender los requerimientos de infraestructura —vías de comunicación, telecomunicaciones, saneamiento del territorio, etcétera— planteados por las nuevas fuerzas económicas —intereses extranjeros, importadores, etcétera—, el gobierno emprendió obras materiales en diferentes lugares y ello originó una nueva demanda de fuerza de trabajo que en su mayor parte fue suministrada por la población rural. En consecuencia, las labores agropecuarias bajo el régimen de la *hacienda* o el *hato* resintieron una escasez de trabajadores, además del alza de los jornales.

La formación de un proletario petrolero con un promedio de salarios sensiblemente más elevado que el correspondiente a las restantes actividades, así como la proliferación de una burocracia civil y militar alimentada con los proventos fiscales del petróleo, dan lugar a la ampliación del mercado interno de bienes de consumo, tanto de primera necesidad como de orden superior. La agricultura de subsistencia realizada bajo la modalidad secular del *conuco* o minifundio, sufre alguna modificación extensiva para aprovechar esa coyuntura y en las regiones próximas a las zonas petroleras y urbanas se vincula al mercado. Sin embargo, la demanda de alimentos no es satisfecha totalmente por la producción nacional y se recurre a la importación. Por otra parte, la capacidad industrial del país era prácticamente nula, inexistente; artesanado y pequeña indus-

tria eran las actividades manufactureras establecidas con alguna importancia, por lo que la proporción determinante de la demanda de bienes de consumo distintos de los alimentos se orientó a las importaciones. Esta salida era posible precisamente porque el ingreso petrolero daba lugar a una entrada de divisas al país, cuya principal aplicación consistía en la importación de bienes y servicios. Adquiere significación, por tanto, el comercio de importación, el cual reemplaza en el primer lugar, dentro de la jerarquía nacional, al comercio de exportación tradicional. Como función auxiliar del comercio de importación se desarrolla la banca comercial, y frecuentemente comerciantes y banqueros se confunden en sus intereses. La actividad importadora de bienes se constituye en una considerable materia imponible y así la denominada renta aduanera y consular asciende considerablemente. Esta renta varió de Bs 41 millones en el año fiscal 1910-11 a Bs 103 millones en el año fiscal 1928-29,⁴ aunque su significación relativa dentro del total de ingresos públicos descendió de 57% en el primer periodo citado a 45% en el último periodo. Los ingresos provenientes de hidrocarburos se situaron en el año 1919-20 en Bs 20 millones, mientras que en 1928-29 alcanzaron a Bs 34 millones.⁵ Como puede observarse, hacia fines de la tercera década el importe de la renta procedente de importación triplicaba al de la procedente de la actividad petrolera.

Intentaré un cuadro de la composición socioeconómica durante la tercera década, inducida por la dinámica petrolera. En primer término haré referencia de la composición antes del petróleo. El siguiente esquema es una tentativa al respecto:

ESQUEMA 1

COMPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA DE VENEZUELA ANTES DE LA INICIACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA

<i>Clases dominantes</i>	<i>% Población</i>	<i>Clases dominadas</i>	<i>% Población</i>
Terratenientes	0.5	Campesinos sin propiedad .	82.0
Burguesía comercial exportadora - importadora	0.2	Pequeños comerciantes, artesanos y productores de servicios	6.0
Rentistas	0.3	Empleados y obreros públicos y privados	4.0
		Servidores domésticos	6.5
		No definidos	0.5
Total	1.0	Total	99.0

⁴ Dirección General de Estadística: *Anuario Estadístico de Venezuela*, 1938.

⁵ *Ibid.*

En verdad, el mayor poder entre las clases dominantes era ejercido por la burguesía comercial exportadora-importadora, la cual detenía el control del mecanismo financiero y distributivo de la economía de entonces. Por otra parte, el hecho de que las casas comerciales más importantes eran poseídas por el capital extranjero, directa o indirectamente, determinaba que la proporción sustancial del excedente generado dentro del sistema se escapara del marco económico nacional, con efectos negativos en la tasa de acumulación interna y por ende en el desarrollo del potencial productivo del país. Puede observarse igualmente que la totalidad práctica de la población económicamente activa, aplicada a la base material de la economía que era la producción rural, estaba integrada por campesinos, sujetos a la explotación de los terratenientes a través de las modalidades de aparcería y arrendamiento que han sido señaladas. La población aplicada a las actividades terciarias significaba estimativamente un 16% de la población activa total. El grupo de los artesanos y de obreros privados (industria manufacturera y construcción), representativo del sector secundario, puede estimarse en un 3%.

La dinámica del petróleo ocasiona el ascenso o formación de grupos socioeconómicos, y, por otra parte, el decaimiento de otros grupos. La clase terrateniente corre una suerte diversa: los propietarios favorecidos con regalías fortalecen su posición socioeconómica, mientras que los afectados de varios modos por la actividad petrolera pierden riqueza, poder y prestigio. La burguesía exportadora tradicional tiende a decaer, aunque lentamente, mientras que la burguesía importadora, desvinculada de la exportación, asciende rápidamente. Nace una burguesía financiera ligada estrechamente a la burguesía importadora. Se forma una burguesía que pudiera denominarse *burocrática*, de altos funcionarios y favoritos del régimen gobernante, que se enriquece a costas de los intereses nacionales e invierte sus haberes en propiedades rurales y urbanas, empresas de servicios y colocaciones en el extranjero. Se amplía la pequeña burguesía de profesionales, pequeños comerciantes, funcionarios medios de la administración pública y pequeños rentistas. Se forma el proletariado petrolero, que se constituye en núcleo y vanguardia de la clase obrera incipiente. En la periferia de los campos petroleros y en las ciudades crece un *lumpen proletariat* sin ocupación cierta y sin ubicación socioeconómica precisa.⁶ El campesinado sin tierras

⁶ Este *lumpen proletariat* es el antecedente social del grupo de población urbana, y suburbana que hoy se denomina "marginal".

sufre de mayores privaciones y tiende a emigrar hacia los centros petroleros y urbanos. La expansión del mercado interno de alimentos favorece a los intermediarios, pero no a los campesinos. En el esquema 1.2.2 puede resumirse lo dicho sobre la dinámica de clases, subclases y estratos por virtud de la incidencia de la economía petrolera.

Las clases dominantes en las dos primeras décadas de la explotación de hidrocarburos son: la burguesía comercial y financiera, en primer término, los terratenientes favorecidos por la actividad extractiva, y la burguesía que he denominado "burocrática". Estos grupos se constituyen en aliados y servidores incondicionales de los intereses extranjeros que actúan en el negocio petrolero, y el régimen gobernante es el instrumento fiel y eficaz para esa dominación. A la deriva socioeconómica, luchando por sobrevivir, quedan: la burguesía exportadora tradicional, los propietarios de haciendas de café y cacao, en general los latifundistas no favorecidos por las operaciones petroleras. El campesinado pobre que no emigra a las ciudades y centros petroleros continúa vegetando, en ausencia de una reforma agraria que lo eleve a la categoría de productores y consumidores económicamente significativos. Prolifera la pequeña burguesía, alimentada por los residuos del ingreso petrolero que se escapan de las manos de los sectores dominantes y sus inmediatos favorecidos.

ESQUEMA 2
DINAMICA DE CLASES POR LA INCIDENCIA
DE LA ECONOMIA PETROLERA
(Tercera década del siglo XX)

<i>Grupos socioeconómicos que surgen</i>	<i>Grupos socioeconómicos que decaen</i>
Burguesía importadora y financiera	Burguesía exportadora tradicional
Burguesía "burocrática"	
Terratenientes receptores de regalías petroleras	Terratenientes afectados por las operaciones petroleras
<i>Grupos socioeconómicos de nueva formación</i>	<i>Grupos socioeconómicos cuyo "status" no varía</i>
Proletariado petrolero	Campeinado sin tierras
<i>Lumpen proletariat</i>	Artesanado, pequeños comerciantes

La nueva composición de clases de la sociedad venezolana que emerge del impacto petrolero, con referencia a la tercera década del siglo, se muestra tentativamente en el esquema 1.2.3.

ESQUEMA 3

COMPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA DE VENEZUELA
EN LA PRIMERA ETAPA DE IMPLANTACIÓN
DE LA INDUSTRIA PETROLERA

<i>Clases dominantes</i>	<i>% Población</i>	<i>Clases dominadas</i>	<i>% Población</i>
Sector capitalista extranjero *	—	Proletariado petrolero	2.0
Burguesía importadora y financiera	0.4	Campesinado pobre	80.0
Burguesía "burocrática"	0.6	Trabajadores públicos y privados	3.0
Propietarios urbanos	0.1	Empleados	2.0
Grandes propietarios rurales	0.2	Servidores domésticos	2.0
		Pequeños comerciantes, pequeños industriales y artesanos	3.0
		Otros	5.7
Total:	1.2		98.8

* El sector capitalista extranjero no constituye, dentro de la sociedad venezolana, una clase, ni una subclase, ni un estrato; los capitalistas propietarios de la industria petrolera no residen en Venezuela, sino en sus países y allá reciben el excedente económico generado en dicha actividad y de cuya proporción sustancial se apropian. Sin embargo, es necesario incluir dicho sector económico en la composición de las clases dominantes de Venezuela, como una entidad estructural, de cuya fuerza emerge el factor de dominación socioeconómica y política a cuyo alrededor se agrupan las clases que en el país apoyan y gozan del usufructo de la explotación capitalista extranjera de los recursos naturales y la fuerza de trabajo de este país.

3. *La dinámica política hasta 1930*

A. Caracterización del régimen gobernante

Hay quienes, para evitar u ocultar un análisis científico de la realidad política, califican determinados regímenes de fuerza, en los cuales descuella la figura de un dictador, como autocracia, como si el eje del poder residiera en la fuerza personal del gobernante y la fuente de su autoridad consistiera en una extraordinaria, asombrosa capacidad para imponerse y mantenerse en el poder. Ha querido apreciarse en J. V. Gómez un gobernante de esta índole, dotado de virtudes raras para mandar, de una como raíz telúrica que lo proyectara en un momento histórico con un impulso demoníaco irresistible. Nada más alejado de la razón. J. V. Gómez fue un instrumento servil de los factores dominantes, como ya lo he señalado. La llamada oligarquía caraqueña —especie de amalgama socioeconómica de terratenientes rurales y urbanos con elementos de la burguesía comercial, financiera y burocrática— que se deshizo en genuflexiones a Castro en la etapa de su ascenso, mientras intentaba convertirlo en sirviente suyo, aprovechó a Gómez, ambicioso de mando directo, para derribar

a aquél mientras estaba ausente. La conspiración que se dio en llamar movimiento de "rehabilitación nacional", fechada el 19 de diciembre de 1908, no fue más que una comedia grotesca protagonizada en los balcones de la Casa de Gobierno frente a unos cuantos espectadores despistados e ignorantes de lo que realmente estaba ocurriendo. Detrás de Gómez se proyectaba la sombra de los intereses dominantes entonces, entre los cuales comenzaba a crecer una nueva línea del capital extranjero: la explotación de los recursos naturales, y específicamente de los hidrocarburos venezolanos.

La pacificación del país, impuesta por diversos medios, así como la consolidación del Estado nacional y antecedente eliminación de los cacicazgos regionales y locales, eran condiciones indispensables para el florecimiento de la industria petrolera; pero en esa época de establecimiento de la nueva actividad bajo el módulo expansivo del capital extranjero de índole imperialista, el régimen gobernante en el país debía tener determinadas características propicias para llevar adelante el proceso de penetración y dominación por parte de aquel capital. Un régimen nacionalista, popular, progresista, no hubiera servido a los designios de los intereses petroleros en afán de explotación. Ni aun un régimen liberal representativo, formalmente democrático, se hubiera adaptado a esos propósitos. Se requería para el emplazamiento y desarrollo del enclave capitalista extranjero un régimen dictatorial personalista, represivo, bajo el cual no fuera posible juego alguno de opinión pública, ni de participación popular en la dirección del Estado, y que fuese fiel instrumento de las fuerzas dominantes fundamentales. Por ello se consolidó y perduró durante 27 años el régimen gomecista, que se extinguió por la muerte del dictador en 1935. La misión principal de ese régimen fue la de mantener la "paz" en el país, lo que significaba esencialmente el impedimento de toda tentativa de progreso político, de todo planteamiento reivindicativo nacional o social, de toda aspiración objetiva de mejoramiento por parte de las clases dominadas. El mantenimiento de la "paz" y del "orden" tenía entonces el propósito real de favorecer en todos los aspectos el dominio absoluto de los intereses extranjeros en la explotación de petróleo. El orden gomecista fue la expresión política del orden petrolero bajo el signo del imperialismo.

B. Procedimientos del régimen

Desde luego, el sostenimiento de un régimen gobernante como el descrito tenía que proceder del uso sistemático de dos recursos alter-

nativos, según las actitudes y posiciones de los individuos o grupos afectados: *i*) el halago en todas sus formas (económica, social, personal, etcétera); *ii*) la represión, igualmente en todas sus formas (física, moral, política, cultural, económica, etcétera). El régimen, y singularmente su cabecilla el general Gómez, impuso una clasificación simple y efectiva de la sociedad venezolana: los amigos y los enemigos de la "causa". Los primeros tenían las garantías, privilegios y derechos posibles dentro del marco político y administrativo de la época; constituían un antecedente de lo que luego, incluso bajo los regímenes denominados de "democracia representativa", se calificó como "ciudadanía de primera clase". Los últimos no tenían ni las más elementales garantías de la seguridad de vida, de hogar, de propiedad y estaban sujetos en todo caso a la persecución, al despojo y al atropello: o estaban en la cárcel, en el exilio, o alzados en el monte. Naturalmente, dentro del grupo de los amigos los había de diferentes categorías, así como las había dentro del grupo de los enemigos. Existía virtualmente un tercer grupo, de los marginados de la cosa pública, cuya vida transcurría en otra dimensión, salvo que en determinadas oportunidades sufrían los atropellos del régimen: me refiero a los campesinos sin tierras, principalmente, que nada tenían que esperar del régimen desde el punto de vista económico, social, cultural o político, pero que eran víctimas de sus procedimientos infamantes y vejatorios, como la "recluta forzosa" para el servicio militar —que en realidad se convertía en servidumbre gratuita en beneficio de hacendados y burócratas— o el despojo de sus bienhechurías agrícolas.

No había fórmula de juicio, desde luego. Tanto para el castigo físico como para el despojo económico lo indispensable y suficiente era la orden directa del dictador o de alguno de sus acólitos influentes. En la cárcel de La Rotunda, en Caracas, en el Castillo Libertador de Puerto Cabello, en el de San Carlos en el Zulia o en los trabajos forzados en las carreteras se consumieron numerosas vidas valiosas y útiles de venezolanos, bajo las torturas, el envenenamiento, la inasistencia de enfermedades, la alimentación infrahumana y los malos tratos de todo género. Cada gomecista tenía sus "presos" y sus "forzados"; la máxima restricción era para los "presos" del general Gómez, que sólo eran liberados mediante la muerte o la gracia esporádica del dictador solicitada por familiares y amigos en ocasiones especiales. Veintisiete años de la vida venezolana se consumieron en aras del crecimiento de la industria petrolera bajo el dominio extranjero, de la permanencia del latifundio y de la burguesía comercial y financiera.

Sin embargo, se conservaban algunas formalidades aparentes en cuanto al manejo de la cosa pública, la provisión de cargos electivos y otros aspectos de la administración y el gobierno. Las listas de candidatos a los cuerpos colegiados —nacionales, provinciales y municipales— eran confeccionadas por la camarilla gobernante y se hacía una burda comedia de elección indirecta cuando correspondía. Era así como funcionaba la “constitucionalidad”, con su Congreso, su presidente “constitucional”, sus asambleas legislativas y concejos municipales. El pueblo jamás participó de tales “elecciones”.

C. Luchas contra el régimen

Me referiré específicamente al periodo 1919-28. Éste es un periodo intermedio en la trayectoria histórica del gomecismo. La etapa 1908-18 puede considerarse como de consolidación del régimen. La de 1919-28, que culmina con el levantamiento estudiantil de 1928, puede considerarse como de maduración del régimen y, por tanto, de fortalecimiento y dominio demostrado en la falta de éxito de todos los intentos y asonadas de subversión o conspiración que tuvieron lugar en esa temporada. En favor del gomecismo en esta etapa operó la bonanza económica prolongada en el primer centro del capitalismo, los Estados Unidos, en relación con la cual se estructuró en Venezuela la industria petrolera cuyo principal mercado era y es la economía norteamericana.

La ausencia de partidos políticos —los viejos partidos del siglo XIX y principios del XX habían desaparecido ahogados en las guerras civiles y sepultados definitivamente bajo Gómez—, la ausencia consecuente de programas de lucha, la inexistencia del movimiento obrero y campesino, la incipiencia del movimiento estudiantil —a pesar de lo cual éste era el foco más definido y característico de la resistencia contra la dictadura— y, en general, la nula organización del pueblo para el combate político y su casi total falta de orientación en este sentido, constituyeron, por decirlo así, las condiciones no favorables para el desarrollo de las luchas antigomecistas. La meta general era el derrocamiento de Gómez por la fuerza, sin definición previa del proceso que surgiría con posterioridad a ese derrocamiento. Salvo algunos luchadores de vanguardia, numéricamente escasos, no existía conciencia antiimperialista ni antifeudal en esa lucha que transcurre en el tercer decenio del siglo. No se identificaba precisamente a Gómez con el instrumento gobernante del imperialismo petrolero y de sus aliados en el país. Gómez era simplemente el déspota bárbaro, ignorante, primitivo, odiado, represivo; al que había

que suprimir. Incluso la desaparición física del dictador se identificaba frecuentemente con la extinción del régimen.

Los caudillos, en verdad, no habían sido enteramente eliminados por la represión o el halago bajo el gomecismo. En el exilio o levantados en armas —esporádica o permanentemente (como en el caso de Arévalo Cedeño)— algunos caudillos combatían a Gómez. Esos caudillos lograban con frecuencia arrastrar tras de sí a jóvenes románticamente empeñados en la lucha contra el gomecismo y aquéllos estaban siempre en afanes de preparar una revuelta o conducirla. Estos caudillos eran personalistas y buscaban más la incondicional adhesión de quienes los seguían que la incorporación consciente a una causa de proyecciones nacionales. Algunos de ellos habían sido impulsados a la lucha antigomecista por haber caído en desgracia con el dictador o haber sido víctimas de una maniobra para desplazarlos de posiciones privilegiadas con Gómez. Todos se autotitulaban “generales” y todos fracasaron en sus intentos de derribar por la fuerza al tirano.

En algunos luchadores antigomecistas notables se había formado una conciencia revolucionaria antiimperialista y nacionalista. Debo citar, entre otros, a Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, Carlos León, Miguel Zúñiga Cisneros, como representativos de generaciones anteriores a 1928. Los nombrados, exiliados en México, promovieron la organización política denominada Partido Revolucionario Venezolano (PRV), con proyecciones avanzadas para la conciencia política del país en esa época. En la tercera década del siglo las corrientes socialistas de influencia marxista se desarrollaban en el mundo, bajo la inspiración de la revolución bolchevique de octubre de 1917 en Rusia. En América Latina tenían lugar, aunque en forma incipiente, movimientos de lucha contra el imperialismo principalmente norteamericano. Sandino en Centroamérica (Nicaragua) se constituía en héroe de esta lucha, mientras que en Perú surgía el movimiento aprista encabezado por Haya de la Torre que tanta influencia iba a tener en Venezuela y otros países latinoamericanos en movimientos de la pequeña burguesía reformista, como el partido Acción Democrática (1941) y su predecesor el PDN (más propiamente ORVE, en 1937). Estas influencias contribuirían de uno u otro modo a la gestación del intento subversivo de la juventud estudiantina en 1928.

El año 1928 tiene una singular significación en la historia política y cultural del país. Esa significación se identifica con la presencia y actuación de un conjunto de personalidades bajo el denominador de Generación del 28, que han descollado en la vida política y cul-

tural venezolana —por no citar más que estos campos donde esa acción ha sido más característica— por cuarenta años, hasta el presente. Hombres de esa generación han sido y son gran número de los dirigentes que han dejado su huella en la historia contemporánea de la nación. Los estudiantes que participaron en el levantamiento armado de abril de 1928 contra el régimen gomecista y que fueron a atacar románticamente el Cuartel San Carlos de Caracas, contando con la participación de algunos oficiales comprometidos en el intento, se templaron luego en su mayoría en la cárcel, en el trabajo forzado de las carreteras y en el exilio, y se forjaron como dirigentes algunos de ellos, fundadores de organizaciones políticas con actuación destacada en la etapa posgomecista. Característica notable de esos actores de la rebelión antigomecista, en su mayoría, es la de su origen clasista no proletario. Para fines de la tercera década del siglo no existía una conciencia obrera ni campesina en el país, no existía el movimiento sindical y las asociaciones presindicales que se habían formado eran del tipo tradicional de “mutuo auxilio de artesanos y obreros”, con funciones benéficas, culturales y sociales, pero no gremiales ni políticas. La literatura revolucionaria sólo podía llegar a las manos de los intelectuales más avanzados, venciendo los obstáculos de una estricta clandestinidad, y la masa popular carecía de información y de orientación en ese aspecto.

Simultáneamente con la promoción política de la juventud del año 1928, surgida del ámbito universitario, se formó una llamada generación literaria, con influencia en el desarrollo posterior de las letras venezolanas. En algunos casos el afán político y el literario se conjugaban en la misma persona y la literatura recibió el sello de esa inquietud. En general, sin embargo, la obra literaria podía interpretarse como una expresión de inconformidad frente al régimen gobernante. Haciendo una analogía, los escritores se valían de las letras como forma de expresión de una rebeldía subyacente, mientras que la masa popular se valía del “chiste” —modalidad del humorismo en su sentido más amplio— para aliviar la carga de su descontento. Humorismo literario y periodístico cargado de intención política se cultivó entonces con brillantez; basta mencionar los nombres de Leoncio Martínez, Francisco Pimentel y Andrés Eloy Blanco. Este humorismo llevó a la cárcel en varias oportunidades a sus cultores.

Mientras los estudiantes se alzaban en armas contra Gómez en Caracas, en una aventura que terminó en la cárcel, en el trabajo forzado o en el exilio, una expedición marítima armada arribó a la ciudad oriental de Cumaná con ánimo de tomarla como operación inicial de una invasión para derribar al régimen. La llamada inva-

sión del "Falke" —nombre del buque que transportó a los rebeldes en armas— fracasó esforzadamente, dando oportunidad de demostrar la ineficacia de esos movimientos, aislados del pueblo, frente a la maquinaria militar de Gómez provista con aviación de bombardeo y de combate.

II. LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN 1930

El producto petrolero representaba para ese año el 33% del producto total del país, contra 21% de la agricultura, 16% de la industria, el artesanado y la construcción y 30% de los servicios. Si restringimos el concepto a la producción material (bienes únicamente), el producto petrolero significaba el 47%, contra el 30% de la agricultura y el 23% de las industrias manufactureras y el artesanado. Estas proporciones indican que para 1930 el sector económico principal del país era la explotación de petróleo, estando situada en segundo término la agricultura.

Si nos referimos específicamente al comercio exterior encontramos que para el año considerado la exportación de petróleo representaba el 83% de la exportación total. No obstante, el valor retornado a la economía nacional de la exportación de petróleo era de sólo un 20% del valor declarado de ésta; es decir, el 80% de este último valor era retenido en el exterior en concepto de gastos de producción y operación en bienes y servicios extranacionales y beneficios de las empresas petroleras.

Las cifras relativas anteriores permiten señalar como eje de la economía venezolana de la época a la actividad petrolera, totalmente controlada por compañías extranjeras (norteamericanas e inglesas). Las fluctuaciones coyunturales de esta actividad orientada con exclusividad a la exportación, tendían a determinar, dentro de márgenes flexibles, el curso de los negocios privados y públicos en la casi totalidad de la economía. Quedaba fuera de la influencia petrolera el sector agrícola de subsistencia, no vinculado al mercado. Los ingresos públicos no dependían directamente en proporción sustancial de la actividad petrolera, dada la baja incidencia fiscal en el producto petrolero; pero sí dependían de esa actividad de modo indirecto, a través de la capacidad contributiva creada por la circulación de los ingresos derivados de aquélla, principalmente los aplicados a la importación, ya que el mayor producto fiscal tenía su origen en los derechos aduaneros relacionados con la misma. La importación gravada era la del sector no petrolero de la economía, porque, como he

señalado, la importación de las compañías petroleras era exonerada de derechos. El gasto público, en consecuencia, estaba sujeto a la coyuntura de los ingresos ordinarios, dependientes a su vez de la coyuntura petrolera. La flexibilidad de la oferta de bienes en el mercado interno estaba determinada en lo sustancial por las facilidades de importación, de modo que el circuito económico del país no se cerraba dentro de los límites de éste, sino en el dominio de economías extranjeras. Las exportaciones tradicionales de origen agrícola —café, cacao, ganado— sufrían las incidencias de la coyuntura petrolera, no sólo en sus renglones internos de costos sino también, y principalmente desde mediados de la tercera década, a través de las fluctuaciones del tipo de cambio, en las cuales ejercía desde entonces gran influencia la oferta de divisas petroleras. Cuando el cambio fluctuaba hacia la baja, en virtud del aumento de la oferta de divisas petroleras, resultaba desfavorablemente afectado el valor medio en bolívares de la exportación no petrolera. Entonces no existía ningún mecanismo compensatorio de esas fluctuaciones.

El comercio exterior, aparentemente favorable al país, estaba en realidad desequilibrado. Por ejemplo, en 1930 las cifras totales de exportación e importación de mercancías determinaban un balance activo de Bs 399 millones; sin embargo, si se excluyen las exportaciones de petróleo —y consecuentemente también las importaciones de las compañías petroleras— se obtiene un balance pasivo de Bs 163 millones; si al valor de las exportaciones no petroleras se agrega el valor retornado de la exportación petrolera se obtiene un balance pasivo de Bs 36 millones. La propensión a importar se había desarrollado fuertemente durante la tercera década hasta el punto de que tendía a exceder la capacidad corriente para importar.

La capacidad de inversión real de la economía fuera del petróleo se había expandido considerablemente entre 1925 y 1929. Una estimación hecha por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela indica que el monto de la inversión interna real subió de Bs 86 millones en 1925 a Bs 184 millones en 1929, o sea que aumentó más de dos veces. En 1930 —y los años sucesivos hasta 1937 inclusive— dicha inversión sufrió una caída sustancial atribuible a la coyuntura depresiva. En total, mientras en el periodo 1921-29 la inversión real interna había alcanzado a Bs 936 millones, con un promedio anual de Bs 104 millones, en el periodo 1930-39 el monto de la inversión fue de Bs 574 millones, con un promedio anual de Bs 57.4 millones, o sea que se redujo a menos de la mitad. El renglón más fuerte de la inver-

sión interna durante la tercera década fue el de la construcción, principalmente pública, siguiéndole el equipo industrial y en tercer lugar la maquinaria e implementación agrícola.

La inversión petrolera se desarrolló particularmente durante el lapso 1925-30, alcanzando un máximo de Bs 208 millones en 1929, contra Bs 82 millones en 1925. En 1930 la inversión petrolera comienza a decaer hasta 1937 en que se inicia una recuperación parcial. Puede observarse que mientras entre 1928 y 1930 la inversión petrolera supera sensiblemente a la inversión interna, en los años siguientes —1931 y 32— ocurre lo contrario; pero después de 1932 la inversión petrolera toma la delantera por el resto de la década.

La agricultura (incluida la ganadería) era en 1930 la actividad que ocupaba al mayor sector de la población activa del país, pudiendo estimarse este sector en un 67%. La estructura agraria continuaba siendo muy regresiva, de elevada concentración de la propiedad, de bajo índice de utilización económica de la tierra y el capital, de explotación extensiva de la fuerza de trabajo y bajos rendimientos por unidad de superficie o por hombre ocupado. En otros términos, predominaba el latifundio y su figura derivada el minifundio o *comuco*. Gómez y sus favorecidos se habían convertido en insaciables acaparadores de tierra, apropiándose por diferentes vías de los mejores fundos agrícolas del centro y de parte del occidente del país. En su mayor parte los cultivos se destinaban al consumo interno. La población campesina sin tierra constituía la mayor parte de la población rural y su nivel de vida era enteramente precario, al límite de la subsistencia física. En algunos fundos comenzaban a introducirse la mecanización y procedimientos menos rudimentarios de cultivo, pero en conjunto la agricultura de la época era bastante atrasada, seguramente el sector más atrasado de la economía venezolana.

Obras de infraestructura habían sido realizadas por el gobierno y por las compañías petroleras, principalmente vías de comunicación que servían a los fines de la industria extractiva exportadora, a los fines del comercio importador y de control del territorio por el régimen. Se habían instalado algunas líneas telegráficas y telefónicas y el correo funcionaba lentamente salvo para el interés oficial. La mayoría de los servicios públicos urbanos estaban en manos privadas, inclusive bajo control de capital extranjero (teléfonos, tranvías, cable, electricidad, etcétera).

Los bancos habían crecido en función de la importación. Para 1930 la existencia de oro en los bancos se cifraba en Bs 112 millo-

nes, mientras que los billetes en circulación totalizaban Bs 96 millones y los depósitos del público ascendían a Bs 162 millones; la cobertura oro de los medios de pago del público —billetes y depósitos— era de 43%. Los créditos a corto plazo otorgados por el conjunto de la banca comercial sumaban Bs 144 millones a fines de 1930, equivalentes al 56% de las obligaciones bancarias inmediatas con el público. La influencia de los bancos extranjeros en el negocio bancario era considerable: eran receptores del 64% de los depósitos, sin embargo otorgaban sólo el 33% de los créditos.

Algunos brotes industriales se registraban en la época, en los ramos de alimentos, bebidas, textiles, cemento, papel, perfumería, jabonería, calzado, tabaco, materiales de construcción y productos de farmacología. No obstante, la economía estaba en una etapa pre-industrial. En los ramos de ropa, muebles, artes gráficas, talabartería, etcétera, el artesanado era predominante. El comercio mayorista estaba concentrado en Caracas, Maracaibo, Valencia y algunas otras ciudades de cierta importancia. El presupuesto del Estado no sobrepasaba los Bs 200 millones (menos de 40 millones de dólares al tipo de cambio de entonces). La economía hacía su camino del estadio rural al estadio petrolero. El aparato gubernamental era pequeño y sencillo; pero efectivo en cuanto al sostenimiento del orden conveniente a los intereses dominantes. Gómez distribuía su tiempo entre la atención personal a sus vaqueras circunvecinas a Maracay, sede real del poder ejecutivo, y la atención a los “asuntos de Estado” que eran como una modalidad de la administración de las vaqueras, porque Venezuela era para él como una gran finca rural en cuyas dependencias funcionaban mayordomías. El pago de la deuda externa oficial hasta su cancelación en 1930 “para asombro de los deudores y acreedores en el mundo”, tuvo el significado de un monumento a la bonanza y sana administración de los dineros públicos bajo aquel régimen, aunque por otra parte la deuda externa real, sin plazo ni rendimiento fijos, en términos de la inversión extranjera principalmente petrolera, había crecido a cifras entonces sorprendentes. El nacionalismo de la bandera, el escudo y el himno quedaba satisfecho por aquella cancelación de la deuda, tardía reparación formal del vejamen inferido a la integridad de la soberanía nacional a principios de siglo cuando buques de los países acreedores bloquearon nuestros puertos y estaban destinados a hacer de este país un protectorado; pero en lugar de la deuda oficial externa teníamos —y tenemos— la carga de la inversión directa extranjera en los rubros básicos de la economía y en lugar de los buques amenazantes en los puertos tenemos en el trasfondo la figura de los *marines*, que ya

en 1958 estuvieron a punto de convertirse en seres de carne, hueso y arma para rescatar al que después fue presidente Nixon de la furia de las "turbas" venezolanas desatadas.

III. RASGOS DE LA DEPRESIÓN ECONÓMICA DE 1929-34

En una economía como la bosquejada en párrafos precedentes las coyunturas internacionales del capitalismo, generadas en los centros motores del sistema y, principalmente, en el seno de la economía norteamericana, podían ser recibidas, con las modificaciones dependientes de las circunstancias, a través de los canales de las transacciones externas, registradas en los distintos rubros componentes de la balanza de pagos. Los mecanismos de transmisión estaban conectados directamente con la actividad petrolera y subsidiariamente con la actividad de exportación de frutos agrícolas. La capacidad para importar del país, en términos de los valores retornados de la exportación de esos artículos —petróleo, café y cacao—, tendía a reflejar el curso de la coyuntura externa, aunque no debe olvidarse que operaba una fuerza no inmediatamente ligada a esa coyuntura, la cual era el gasto de inversión básica en la estructuración de la industria petrolera en Venezuela. Esa capacidad para importar se aplicaba en su mayor parte a la importación de bienes y servicios y de este modo, bien sea mediante la coyuntura interna del comercio o bien mediante la de las inversiones, el auge externo se reflejaba en el sector de la economía venezolana dependiente de la exportación. Incidencias en este proceso de transmisión de las fluctuaciones recurrentes del capitalismo mundial eran los cambios de nivel del gasto público y específicamente el monto y signo de los saldos de la actividad financiera del Estado. La economía de subsistencia en el campo y la ciudad —economías familiares— quedaba prácticamente al margen de esa dinámica, la cual tenía como instrumento la monetarización de determinados sectores económicos. El nivel del empleo de fuerza de trabajo oscilaba en relación con el curso del negocio petrolero, en lo sustancial, pudiendo hacerse mención de la existencia de un multiplicador pequeño del empleo petrolero; sin embargo, una porción considerable del empleo remunerado no dependía directamente del negocio petrolero, sino del curso de la exportación agrícola, aunque he dicho que había una incidencia por la vía del tipo de cambio dependiente del aporte de las divisas petroleras. El empleo no remunerado en términos de salario —trabajo realizado en la economía no mercantil— fluctuaba en función del crecimiento de la población, pero era afectado por el desplazamiento

de trabajadores hacia actividades remuneradas y de este modo asimilaba la influencia de la coyuntura externa. Otros aspectos de la dinámica económica de la época pueden explicarse en relación con el mecanismo fundamental descrito: así, las fluctuaciones del circulante, del crédito bancario, de los precios, de la tasa de interés y la de cambio, entre otras variables significativas del curso coyuntural, estaban estrechamente relacionadas con aquella dinámica principal y la reflejaban.

Venezuela, desde los albores de su vida independiente, por no remontarme a épocas anteriores, ha estado sujeta, en la esfera económica, a la dinámica del mercado capitalista mundial por la vía del comercio exterior. No obstante, en la etapa petrolera que arranca en el tiempo de la primera guerra europea, esa sujeción se acentúa fuertemente y se extiende en el espacio económico interno, de tal modo que la influencia de las coyunturas externas se hace más precisa e intensa. En esta modificación de la anotada condición de dependencia hay que situar como causa central la penetración directa y profunda del gran capital extranjero, mecanismo trasmisor por excelencia de la dinámica convulsiva de los centros de donde emerge ese capital.

Tomando como guía el diseño del mecanismo coyuntural hecho anteriormente, voy a exponer los hechos más notables del curso de la depresión de la cuarta década del siglo en Venezuela. En primer lugar, el valor f. o. b. total de la exportación de petróleo, que alcanzó un nivel máximo de Bs 634 millones en 1930, desciende en los años siguientes, registrándose el comienzo de la recuperación en 1934, con una exportación de Bs 608 millones; en 1935 esta variable se cifra en Bs 649 millones, valor superior en Bs 15 millones al acusado en 1930; por tanto, puede observarse que entre 1930 y 1935 tuvo lugar una caída sensible de la exportación de hidrocarburos, alcanzándose el nivel mínimo en 1932, con Bs 532 millones. Después de 1935 los valores de esta exportación ascenderán ininterrumpida y considerablemente hasta 1939, en que se sitúa un nuevo máximo, de Bs 895 millones; en 1940 se registra un descenso para alcanzar un valor de Bs 809 millones. Puede observarse que el periodo 1935-39, en lo que se refiere a exportación petrolera, fue de expansión.

Los valores retornados de la exportación de petróleo, correspondientes como se dijo al ingreso efectivamente percibido por la economía venezolana procedente de aquella actividad, sufrieron durante el lapso 1930-34 una caída bastante fuerte. En 1929 se registró un valor retornado de Bs 154 millones, máximo hasta ese año; en 1930 ese valor descendió a Bs 127 millones y en los años siguientes prosi-

guió el descenso, hasta situarse en Bs 105 millones en 1934 y 1936 el valor retornado de referencia se cifró en un promedio anual de Bs 138 millones, superior al valor acusado en 1930, pero inferior al de los años 1928 y 1929, por lo que incluso para 1936 no se podía hablar de una recuperación en el ingreso petrolero nacional.

Las exportaciones no petroleras registraron un nivel máximo en 1930, con un valor f. o. b. de Bs 255 millones; en los años siguientes esta variable acusa una contracción bastante acentuada, que la lleva a un valor de Bs 84 millones en 1936; sin embargo, el mínimo del periodo 1930-36 correspondió al año 1934 con Bs 67 millones. Indudablemente, el golpe asestado por la depresión a las exportaciones agrícolas fue singularmente fuerte, hasta el punto de ocasionar la postración de esa actividad, entonces significativa en el conjunto económico nacional.

Las inversiones reales petroleras, según estimación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCV, llegaron a un máximo de Bs 208 millones en 1929; en los años sucesivos estas inversiones sufren una contracción sustancial que se prolonga por toda la cuarta década, de modo que en 1939 el monto de las mismas fue de Bs 84 millones; sin embargo, el nivel mínimo de esta variable se sitúa en el año 1935, con Bs 28 millones.

Las inversiones reales no petroleras siguen la misma trayectoria que las inversiones petroleras. Su nivel culminante se registra en 1929, con Bs 184 millones; desde 1930 hasta 1939, con fluctuaciones, tuvo lugar un movimiento de descenso de esta variable interna, cuyo valor mínimo se situó en 1935 con Bs 11 millones; en 1938 estas inversiones se cifran en Bs 149 millones, nivel superior al de 1928, pero inferior al de 1929; en 1939 decaen una vez más, para alcanzar Bs 54 millones. La cuarta década fue un periodo de contracción de la inversión interna en Venezuela, como también lo fue de la inversión petrolera.

Los ingresos del Estado, cuyo índice con base en el año 1928 igual a 100 puntos, se situó en un nivel de 125.5 en 1929, bajan sucesivamente hasta 1933, cuando el índice de referencia se sitúa en 83 puntos; en 1934 se inicia un proceso de recuperación en los ingresos públicos y su índice se eleva vigorosamente, de modo que en 1937 alcanza 152.7 puntos, valor superior al de 1929. En la recuperación posterior a 1933 influyó decisivamente el ramo de petróleo y minas, mientras que el índice correspondiente a los derechos de importación señala niveles inferiores durante el lapso 1931-36 a los acusados en 1928-30.

La balanza comercial global, es decir incluidas las transacciones

corrientes del sector petrolero, registra persistentemente saldos favorables en todos los años de la década 1931-39, aunque de montos variables como es natural. El saldo más reducido tuvo lugar en 1931, con Bs 441 millones, y el más elevado en 1939 con Bs 625 millones. En general, el lapso de saldos menores de la balanza comercial estuvo comprendido entre 1931 y 1933.

La balanza comercial sin incluir las transacciones del sector petrolero registra persistentemente saldos desfavorables de magnitud muy variable. El saldo mayor del periodo 1928-36 se sitúa en 1928, con Bs 177 millones. El saldo menor se situó en 1934 con Bs 29 millones. Relativamente decayó más el valor de la importación que el de la exportación. Así, la importación en 1928 se cifró en Bs 324 millones y descendió en los años sucesivos hasta llegar a Bs 97 millones en 1934, denotándose un descenso de 70% aproximadamente entre los dos años; la exportación en 1928 registró un valor de Bs 148 millones y se reduce en los años siguientes hasta alcanzar Bs 68 millones, por término medio, en el trienio 1933-35, lo que señala un descenso relativo de 54%. Conviene comparar esta evolución de la exportación no petrolera con el del valor retornado de la exportación petrolera en ese mismo periodo: este último descendió de Bs 144 millones en 1928 a Bs 92 millones en 1933, lo que significa un descenso relativo de 36% aproximadamente. El descenso más acentuado de la importación nacional que el de la exportación nacional —categoría ésta que incluye el valor retornado de la exportación petrolera y el valor de la exportación restante del país— indica una alta elasticidad de la importación en relación con la capacidad para importar corriente y por tanto un mecanismo flexible de ajuste a la coyuntura de la exportación; sin embargo, al considerar que la importación nacional de aquella época representaba una fuente de abastecimiento de bienes para la inversión y para el consumo, de proporción considerable, pueden entenderse claramente que ese ajuste externo se hizo a costa de la actividad económica interna y del nivel de consumo de la población urbana (ya que la rural estaba escasamente vinculada al mercado y se satisfacía mediante su propia producción).

Si consultamos cifras relacionadas con la dinámica monetaria y financiera de la economía, encontramos confirmado el módulo del movimiento depresivo acusado entre 1930 y 1934 en la esfera de la economía real. Así, el circulante monetario en manos del público —billetes y depósitos bancarios movilizables a la vista— que en 1930 alcanzó un nivel de Bs 259 millones, se reduce en los años siguientes hasta 1934, cuando se cifró en Bs 207 millones; el nivel mínimo, sin

embargo, había correspondido al año anterior, con Bs 201 millones; a partir de 1935 se inicia una recuperación que, con fluctuaciones, llevaría el monto del circulante a Bs 266 millones en 1938, monto superior al acusado en 1930. Las cuentas corrientes bancarias de activo y los avances, rubros de la actividad crediticia de la banca comercial, mostraron en su conjunto un comportamiento ajustado al movimiento depresivo general, pues de un nivel de Bs 144 millones en 1930 y Bs 146 millones en 1931 desciende sucesivamente para situarse en Bs 86 millones en 1936, valor mínimo de la serie 1929-39. Este comportamiento de la gestión crediticia bancaria es significativo, pues revela una determinada resistencia a la depresión en los primeros años y una recuperación tardía, hasta el punto de que en 1939 aún no se había alcanzado el monto de los créditos registrado en 1929. Si separamos la banca extranjera de la banca nacional para apreciar el comportamiento de cada grupo, encontramos que la banca extranjera acusa en 1931 la contracción económica, ya que sus cuentas corrientes de crédito y anticipos se reducen en Bs 47 millones y continúan descendiendo hasta llegar a Bs 20 millones en 1935; en toda la década no se recupera en el grupo de la banca extranjera el nivel de créditos registrado en 1930, pues para 1940 el saldo de los créditos era de sólo Bs 16 millones, mientras que el de los depósitos del público ascendía a Bs 32 millones. El comportamiento de la banca extranjera durante la depresión fue propicio para la acentuación de ésta, pues no sólo restringió sustancialmente el volumen de créditos, como se ha citado, sino que exigió perentoriamente la cancelación de deudas preexistentes y de este modo agravó las dificultades para numerosas empresas y personas del país.

El índice de cotizaciones bursátiles, calculado con base en el año 1925 igual a 100, alcanzó en 1930 a 90 puntos y en los años siguientes sufre un descenso sostenido y considerable, hasta señalar 52 puntos en 1935; desde 1936 en adelante se registra una recuperación parcial en este aspecto de la actividad financiera.

El nivel general de los precios al mayoreo, representado por un índice calculado por la Dirección General de Estadística con base en el año 1913 igual a 100, llegó en 1929 hasta 121.3 puntos y bajó en los años siguientes hasta situarse en 81.6 puntos en 1935; desde 1936 se observa una recuperación parcial en el nivel de los precios a juzgar por el movimiento del índice de referencia.

En el mercado hipotecario la situación se hizo particularmente grave desde 1933, cuando las hipotecas constituidas en el año alcanzaron sólo Bs 86 millones, en comparación con Bs 137 millones el año precedente; el descenso prosiguió con celeridad hasta llegar

en 1936 a un mínimo de Bs 35 millones; una recuperación débil y lenta comienza a observarse a partir de 1937. En el rubro de las cancelaciones de hipotecas pendientes la crisis puede notarse en 1931, cuando la cancelación de hipotecas se cifró en Bs 86 millones, contra Bs 39 millones el año anterior, lo que significa que en el año considerado tuvo lugar una actividad extraordinaria en ejecución de hipotecas por vía judicial o mediante entrega formal de la garantía para saldar el compromiso; en los años siguientes, el nivel de la cancelación decae en proporción sustancial, llegando a un mínimo de Bs 23 millones en el bienio 1935-36. Por otra parte, el valor de la propiedad raíz se redujo fuertemente, mientras el costo del dinero subía.

La balanza de pagos internacionales del país, sin embargo, no sufrió déficit acentuado en ese periodo de la depresión, por las circunstancias ya indicadas: decayó relativamente más la importación de bienes y servicios que la exportación. El tipo de cambio descendió en 1931 a Bs 5.91 por dólar norteamericano, pero se recuperó en 1932 y 1933, para alcanzar un promedio de Bs 5.35. En 1934, con la devaluación del dólar de los Estados Unidos, en una proporción aproximada de 40%, el tipo de cambio subió a Bs 3.40 por dólar. Esta revalorización automática del bolívar, en plena crisis, no podía menos que ocasionar mayores dificultades a la economía del país, basada en la exportación. A la ruina derivada de la baja de precios agrícolas⁷ vino a sumarse entonces la devaluación del dólar, para asestar un golpe casi mortal a la economía de exportación agrícola. También la economía petrolera resintió la baja del dólar en sus operaciones internas (pago de jornales, de impuestos y compras locales). En virtud de que el gobierno no decidió directamente el reajuste de la paridad del bolívar al nuevo cuadro monetario internacional surgido en medio de la depresión, se introdujeron compensaciones casuísticas bajo la forma de un mecanismo rudimentario de cambios múltiples, con un tipo de compra especial para las divisas petroleras, de café y cacao, y un tipo de venta de las divisas, lo que en la práctica equivalía a una devaluación del bolívar, aunque no en la misma proporción que el dólar norteamericano. Así, para 1935-36 el tipo medio de cambio registrado fue de Bs 3.90 por dólar, en

⁷ "...Desde 1927, el año de los más elevados precios para el café y el cacao, durante la última década, la baja ha sido continua. En 1927 el precio medio del quintal métrico de café, tipo Santos 4, en la plaza de Nueva York, fue de 265 francos suizos. El 7 de abril de este año (1934) el café de la misma calidad se cotizó, en el mismo mercado, a 78 francos suizos el quintal métrico, precio que apenas representa el 29% del de 1927." Alberto Adriani, *Labor venezolanista*.

comparación con Bs 3.06 determinado por la paridad oro. Ese mecanismo fue la génesis del sistema de cambios diferenciales que, con diferentes alternativas y contingencias, ha perdurado hasta el presente, aunque sensiblemente modificado.

La depresión no dejó de golpear a la actividad petrolera. En la *Memoria del Ministerio de Fomento*, presentada el año 1931 al Congreso Nacional, se informa que "la industria petrolera, en todos los países productores, está sufriendo una crisis que hasta hoy no ha podido ser resuelta satisfactoriamente" (p. xxv). En el mismo documento se da cuenta de que "se ha discutido mucho en el Congreso y en la prensa de los Estados Unidos la conveniencia de prohibir, restringir o gravar las importaciones de petróleo y aun hasta se ha propuesto el embargo" (p. xlvi). Las propias compañías angloamericanas que operaban en Venezuela se proponían, mediante acuerdo, reducir la explotación de petróleo en un 25% aproximadamente. El producto petrolero bajó de Bs 419 millones en 1930 a Bs 386 millones en 1931; sin embargo, en 1932 se inicia la recuperación en este sector básico y ya para 1933 el producto supera el obtenido en 1930, por lo que puede afirmarse que la depresión fue breve en la actividad petrolera y ello evitó que aquel fenómeno afectara a la economía venezolana hasta el punto del colapso, como pudo ocurrir en otra economía latinoamericana. Dentro de la caída considerable del mercado norteamericano de petróleo, se pudo sostener una cuota entonces satisfactoria para el petróleo importado desde Venezuela, en virtud de la influencia de las grandes compañías, que encontraban en este país condiciones favorables para la minimización de los costos y la maximización de las ganancias, con respecto a otras fuentes alternativas de extracción de hidrocarburos.⁸

IV. LA CONDUCTA GUBERNAMENTAL EN LA DEPRESIÓN

Antes de 1936 no existía política alguna que pudiera calificarse como orientada al interés nacional en materia de fomento económico y de difusión beneficiosa de los proventos derivados del petróleo.

⁸ "En los actuales momentos de aguda crisis porque atraviesan el comercio y la industria mundiales y que afecta principalmente a la industria del petróleo y, de consiguiente, a la explotación petrolera en nuestro país, la cual ha sido restringida de acuerdo con el plan de reajuste adoptado por las empresas explotadoras, tendiente a evitar la sobreproducción y a lograr la estabilización del precio, es de hacer resaltar el hecho de que la renta de minas se ha mantenido a un nivel casi igual al de los tres o cuatro años anteriores, que pueden conceptuarse como el apogeo del desarrollo de la mencionada industria en Venezuela." *Memoria del Ministerio de Fomento*, 1934, t. I, p. LVII.

En materia de administración del patrimonio natural de la nación, y específicamente en lo relativo a hidrocarburos, el papel del gobierno se limitó a un reparto escandaloso de las concesiones para enriquecer personalmente a un grupo reducido de privilegiados del régimen, a la cabeza de los cuales estaba el propio dictador Gómez; la "danza de las concesiones" ha quedado para siempre grabada en la historia de Venezuela como un proceso infortunado, de exacción y escarnio a la República. De esa época negra sólo puede mencionarse con evocación nacionalista la actitud sostenida por el doctor Gumersindo Torres al frente del Ministerio de Fomento, de la cual queda el testimonio de los documentos oficiales, y la que fue premiada con su destitución. Investigaciones valiosas se hicieron entonces en el despacho citado, bajo la dirección del doctor Torres, para demostrar las pérdidas y ganancias nacionales con políticas alternativas concretas en la esfera del petróleo.

En 1928 fueron creados dos institutos oficiales con funciones de bancos de fomento económico y social: el Banco Agrícola y Pecuario y el Banco Obrero, el primero destinado al financiamiento del sector agropecuario y el segundo al fomento de la vivienda popular. Los recursos asignados y manejados por esos institutos sirvieron para favorecer posiciones de los terratenientes y validos del régimen, pero no para cumplir los objetivos que justificaban su creación. Los institutos fueron creados en 1928 probablemente como un intento de aliviar la tensión política de ese año.

Fue contradictoria la conducta fiscal del gobierno durante la depresión. Los saldos de la actividad financiera del Estado en el lapso 1928-31 fueron negativos, es decir que se realizó un gasto neto oficial que contribuyó a levantar el nivel de la actividad económica; en el lapso 1931-35, precisamente el de la depresión, dichos saldos fueron positivos, es decir, el gasto neto oficial contribuyó a reducir el gasto total del país. Este superávit fiscal se obtuvo a pesar de que los ingresos públicos sufrieron un descenso en ese periodo. "En el erario había efectivo; no faltaban setenta u ochenta millones de bolívares, pero estaban estancados porque no se hacía ninguna obra. No se atendía la crisis lo más mínimo, porque Gómez, a quien tal vez le interesara mejorar la situación, no podía darse cuenta de lo que tenía entre manos."⁹

La ruina de la agricultura de exportación era tan evidente e inquietante que el gobierno se vio obligado a decretar un subsidio de 10 millones de bolívares para ser repartidos entre los productores de café en proporción a su exportación, para auxiliarlos en los efectos

⁹ Eduardo Michelena. *Vida caraqueña*, 1967.

de la caída de los precios. La medida no logró los resultados perseguidos, porque el subsidio sólo llegó a los productores mejor situados y a los exportadores, en tanto que los medianos y pequeños productores fueron marginados. Se estableció así, no obstante, un antecedente de la fórmula de las primas a la exportación de café y cacao que posteriormente fue puesto en práctica, bien directamente, bien a través de los cambios diferenciales que estuvieron en vigencia durante un cuarto de siglo.

Antes había sido mencionado que en 1930, cuando el mundo capitalista se agitaba en la fase aguda de la crisis, el gobierno venezolano canceló la deuda externa oficial para asombro de acreedores y deudores internacionales. En 1934, ante la devaluación del dólar, el gobierno se negó a devaluar el bolívar y en su lugar auspició un mecanismo de cambios diferenciales en favor de la exportación.

El llamado punto de inflexión de la coyuntura depresiva, o sea el paso del nivel mínimo de la actividad económica a una fase de recuperación, puede situarse entre 1934 y 1935. Esta imprecisión cronológica obedece a la no coincidencia en los cambios de las diferentes variables económicas consideradas: verbigracia, la exportación de petróleo se recupera prontamente, en 1933, pero el valor rétoronado de dicha exportación —que es la variable de mayor significación para la economía venezolana— no se recupera hasta 1935 y sólo de modo parcial; lo mismo ocurre con la inversión petrolera, la cual no se recupera hasta muy tarde, en 1938, y la inversión en el resto de la economía que se recupera también en 1938; las estimaciones del producto bruto interno a precios de 1936 muestran recuperación en 1934. En consideración a las circunstancias mencionadas, creo lo más indicado situar entre 1934 y 1935 el paso de la depresión a la recuperación.

V. *La dinámica política entre 1929 y 1935*

Los dos únicos partidos políticos que en forma incipiente se crearon durante el lapso que se considera fueron: el Partido Revolucionario Venezolano, ya citado, en México en 1928, organizado por exiliados venezolanos encabezados por Salvador de la Plaza, bajo un signo no simplemente antigomecista sino nacionalista y anti-imperialista, y el Partido Comunista, si es que puede calificarse la constitución de una célula comunista en la cárcel de La Rotunda (Caracas), 1931-33, como germen de dicho partido.¹⁰

¹⁰ El PRV puede considerarse como antecesor del PCV por su orientación doctrinaria y la trayectoria de los principales fundadores.

Un grupo de exiliados, que posteriormente formaría el núcleo dirigente de Acción Democrática, con sede en Barranquilla (Colombia), trató de definir sus principios programáticos en un documento que se ha dado en llamar "Declaración o Carta de Barranquilla", cuya factura se atribuye al señor Rómulo Betancourt. En ese documento se exponen algunas ideas sobre la liberalización política de Venezuela, la democratización de sus instituciones, reformas económicas y sociales para la modernización del país, todo bajo una inspiración jacobina mezclada con una difusa intención socialista.

Después del movimiento insurreccional de 1928, la represión gomecista recrudesció y las cárceles se llenaron de presos políticos; otros, menos desafortunados, pudieron tomar el camino del destierro. Unos y otros desarrollaron sus ideas sobre la naturaleza del régimen gobernante y sobre el futuro de la nación, abrevando en propias y ajenas experiencias y en textos de doctrina e información de prohibida circulación en el país. En el seno del movimiento estudiantil universitario, aunque desorganizado, creció el ímpetu liberador, y nuevas orientaciones en cuanto al desenvolvimiento político nacional condujeron al contacto con los sectores populares. La meta era un régimen de libertades públicas, de garantías elementales y de promoción del bienestar socioeconómico dentro de un esquema democrático-burgués.

El proletariado petrolero, contingente obrero de mayor significación cualitativa, adquiría progresivamente conciencia de su situación de superexplotación económica y fermentos de sindicalismo agitaban clandestinamente las zonas de extracción del oro negro, específicamente el Zulia.

Pueden distinguirse dos principales corrientes doctrinarias en el seno de los luchadores antigomecistas más avanzados: una marxista-leninista, centrada en el problema de la dominación imperialista de la economía venezolana y, por ende, en la necesidad de la liberación económica nacional con respecto a esa dominación, lo que implicaba naturalmente el cambio de régimen político; otra reformista, populista, centrada en el problema de la transformación política inmediata, en la democratización de la vida pública, lo que implicaba desde luego la realización de reformas socioeconómicas dentro del marco de la economía capitalista para difundir en lo posible el bienestar y disminuir los más graves desequilibrios de la sociedad económica. Estas dos corrientes se perfilaban con alguna claridad en la segunda mitad de la tercera década, es decir entre 1936 y 1940, luego de la muerte física del dictador Gómez, y se proyectarían en la vida

venezolana durante los últimos treinta años, con modificaciones importantes. Es conveniente destacar, en todo caso, la característica de que los grupos dirigentes de esas corrientes estaban formados en su gran mayoría por personas de origen clasista no obrero ni campesino, con el disfrute de un nivel de educación entre media y superior y en algunos casos con holgura económica. Algunos cuadros obreros se estaban formando, sin embargo, bajo el fragor de la lucha contra el gomecismo y establecerían, posteriormente, vinculaciones con el movimiento de los trabajadores de la ciudad y el campo.

La crisis económica se dejó sentir con cierta intensidad en los medios petroleros, a través de la disminución del empleo y de las compras locales de bienes y servicios por parte de las compañías extranjeras. En los medios rurales dependientes de la exportación de café y cacao también golpeó duramente la crisis, particularmente acentuada en ese sector de la actividad. En los medios urbanos dependientes del gasto público el malestar fue sensible, sobre todo en la construcción y la menos que incipiente industria manufacturera de la época. El malestar por la depresión económica no llegó a significar un fermento de descontento suficiente para poner en peligro la estabilidad del régimen gobernante. La ausencia de información verídica sobre el proceso económico —la libertad de prensa estaba completamente suprimida y lo mismo la libertad de difusión por cualquier otro medio— y el temor casi orgánico que inspiraba el régimen, impedían la formación de conciencia sobre los sucesos. Ocurrieron casos notables, pero esporádicos y estrechamente limitados, como el del artículo del doctor Alberto Adriani sobre la política que debía adoptarse para combatir la depresión, publicado originalmente en la revista de la *Cámara de Comercio de San Cristóbal* y que comenzó a reproducir el *Boletín de la Cámara de Comercio* de Caracas, siendo bruscamente interrumpida esta reproducción bajo consejo coactivo gubernamental. El régimen, en plena caída económica, proseguía pregonando, sin réplica, la existencia de una situación de paz, progreso y trabajo, dentro de la cual unos pocos privilegiados podían disfrutar de todos los excesos, mientras la gran mayoría soportaba con aparente resignación la carga de la pobreza, de la desesperanza y de la inseguridad.

En diciembre de 1935 muere en su lecho de enfermo el dictador J. V. Gómez y la noticia se da a la nación con parsimonia, demorada, para prevenir reacciones incontrolables y poder asegurar sin contratiempos el traspaso del mando al nuevo gobernante. El propio Gómez moribundo había designado a su ministro de Guerra y

Marina, general Eleazar López Contreras, para sucederle como jefe de gobierno. Los funerales fueron solemnes, tranquilos, aun bajo el imperio del terror hecho institución. La noticia de la muerte del dictador corría de boca en boca, al oído, musitada clandestinamente, al filo de la madrugada decembrina, y la duda sobre la veracidad del suceso anidó en muchos, habituados a considerar inmortal al viejo andino que había forjado alrededor suyo una leyenda de poderes casi sobrenaturales.

La lucha por el mando comenzó inmediatamente después de la muerte del dictador. El gomecismo estaba intacto, como mecanismo de poder político, como régimen de fuerza casi primitivo, y su vigencia, aunque recibió el impacto de la defunción del caudillo, conservaba prácticamente su vigor. Existía el "clan Gómez" y existía el mecanismo sociopolítico y militar gomecista. El clan estaba formado por los familiares cercanos del dictador, por sus amigos de absoluta confianza y los mayores favorecidos del régimen. La designación del general López Contreras como sucesor fue una mala pasada del difunto a "su gente". El nuevo mandatario, aunque formado en la escuela gomecista, y aunque había probado largamente su fidelidad a la "causa", no correspondía exactamente a las aspiraciones del clan sobre la sucesión de la jefatura. López Contreras no era un "chácharo" como Eustaquio Gómez o como el "compadre" Galavís, sino un militar de carrera con aficiones intelectuales y, por tanto, sospechoso de "debilidad".

El gomecismo no había muerto con su progenitor. La lucha por su liquidación consumiría años de la vida venezolana. Sin embargo, desde pocos días después de los funerales del dictador las masas populares comenzaron a expresar en la calle sus exigencias de liberación. Era una nueva circunstancia que tomó casi de sorpresa a los mecanismos represivos del régimen. Los gritos de "libertad" estremecieron ciudades y pueblos del país, y el primer clamor se dirigió al rescate de los presos políticos, que sufrían en las cárceles el delito de oposición a la dictadura o quizá la equivocación de algún esbirro o la venganza personal de algún valido del régimen. En la alborada de 1936, que señala la iniciación de una nueva etapa en la historia nacional, los grillos tenidos en las cárceles como instrumentos de tortura fueron arrojados al mar y los presos políticos puestos en libertad. La piqueta echaría abajo la mole tétrica de La Rotunda, en Caracas, temida mazmorra símbolo del gomecismo bárbaramente represivo y en su lugar se construiría la plaza de La Concordia, signo que pretendió exaltar el nuevo régimen para borrar la vieja

división de los venezolanos entre “amigos” y “enemigos” del gobierno, entre perseguidores y perseguidos, o entre ciudadanos de primera clase y los de clases con derechos disminuidos o cercenados.

VI. LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD VENEZOLANA EN 1936

El fenómeno fundamental de la economía que puede observarse, según el análisis estático, en 1936, era el de la dicotomía estructural, consistente en la existencia simultánea de dos regímenes de producción en el país: *i*) el sector extractivo exportador, bajo el dominio absoluto del capital extranjero, con la aplicación de avanzada tecnología, y en general de prácticas capitalistas de alto desarrollo; *ii*) el sector interno, dentro del cual podía distinguirse un subsector típicamente precapitalista y uno que podría denominarse “neocapitalista” siguiendo la terminología de Ernesto Wagemann.¹¹

El sector capitalista extranjero aprovecha fuerza de trabajo y recursos naturales nacionales y coloca la casi totalidad de su producción en el mercado exterior; los insumos materiales proceden casi enteramente del exterior, por lo que, desde este punto de vista, no existe vinculación interindustrial con el sector interno. El objeto de su explotación es el petróleo, por lo que sustancialmente esta actividad se ubica en la esfera primaria de la economía, siguiendo la clasificación de Colin Clark. En la combinación técnica de producción el capital es utilizado intensivamente, y la proporción de fuerza de trabajo es comparativamente bastante escasa (apenas un 2% de la población activa de entonces); si se agrega la estrecha dimensión del salario, se encontrará que la tasa del excedente económico era considerablemente alta. La acelerada expansión de las operaciones petroleras entre 1917 y 1936, apenas disminuida en los primeros años de la gran depresión, se explica por las excepcionales condiciones favorables de Venezuela para la explotación del mencionado recurso por las compañías extranjeras, de modo tal que la reproductividad del capital ha debido alcanzar entre 1925 y 1936 un 50% o más; esto significa que cada dos años revertía al capital extranjero la totalidad de la inversión. El mercado mundial de hidrocarburos estaba en esa época en auge secular, en virtud del desarrollo del automovilismo y de la mecanización basada en el motor Diesel. Aunque en el interior de los Estados Unidos existían grandes recursos petrolíferos, la lucratividad de la explotación en Venezuela —la joya

¹¹ *Estructura y ritmo de la economía mundial*, Editora Nacional, México, D. F., 1951.

máspreciada de la Standard Oil— excedía varias veces la razón media prevaleciente en la economía petrolera norteamericana..

El aprovechamiento de fuerza de trabajo venezolana por el capital extranjero en la industria petrolera, aunque modesto en términos absolutos y relativos, tenía —y tiene— un significado fundamental múltiple. El grupo de esos trabajadores se constituye en núcleo primigenio de la clase obrera venezolana, con la especial característica de que mantiene relaciones antagónicas con una clase capitalista no nacional y, desde luego, la más poderosa del mundo. La elevada productividad de esta fuerza de trabajo no tenía punto de contacto con la del resto del país y tendía a aumentar en el transcurso del tiempo, mediante la acumulación de experiencia productiva y la dinámica tecnológica del sector. Por otra parte, la tasa media de salario obtenida en la industria petrolera por los trabajadores venezolanos se convierte en un nivel de referencia positivo para el resto de los trabajadores del país, impulsando hacia arriba la tasa de salarios en el sector no petrolero de la economía, y específicamente en el subsector neocapitalista interno. No es de extrañar, por tanto, que el proletariado petrolero, en buena parte de origen campesino, representara en el periodo 1936-40 la vanguardia más consciente y activa en la lucha sindical y política.

El significado cuantitativo del sector petrolero en la economía venezolana el año de 1936 puede apreciarse por las cifras siguientes: el producto petrolero contribuía con el 32% al producto bruto interno del país, con el 36% del producto bruto material y el 80% de la entrada de divisas. Desde luego, la significación indirecta de la actividad petrolera, a través de sus repercusiones en la economía interior, era ya bastante grande en la época examinada y ha venido creciendo en el transcurso del tiempo.

El sector interno de la economía no era homogéneo en su composición. Existía un subsector precapitalista, formado por una agricultura de plantaciones para la exportación (café, cacao, etcétera), una agricultura de minifundios (*conucos*) para el mercado interno, un artesanado bastante extendido y relativamente numeroso que suministraba parte considerable de los bienes manufacturados consumidos por la población y un conjunto de servicios de consumo (servidumbre doméstica, servicios personales directos, etcétera) que absorbía una proporción significativa de la población activa. Por otra parte, estaba en proceso de formación un subsector capitalista —que he denominado antes “neocapitalista”—, compuesto por una incipiente agricultura de explotaciones relativamente moderna, mecanizada o semimecanizada, una industria manufacturera que daba sus primeros pasos

en la producción de artículos de consumo, una industria de construcción de escala moderada y un conjunto de servicios, algunos de los cuales estaban relacionados con la producción material (transporte, almacenaje, comercio, financiamiento, etcétera) y otros no. El sector interno estaba vinculado al mercado internacional mediante diferentes canales: la agricultura de exportación, por su propia índole económica, colocaba la casi totalidad de su producción en el mercado exterior; la agricultura incipientemente capitalista producía para el mercado interno, pero obtenía la parte sustancial de sus insumos materiales por la vía de la importación; la industria manufacturera, la construcción, el comercio y otros servicios utilizaban bienes procedentes de importación en proporción considerable. La economía territorial en su conjunto, incluida la extracción de petróleo, sostenía estrechos vínculos con el mercado capitalista extranjero y funcionaba como una periferia del capitalismo.

Una quinta parte de la producción agrícola del país se destinaba a la exportación. Un 98% de la producción petrolera era exportada. Un 39% de la oferta de bienes industriales en el país procedía del mercado extranjero. Sólo un 60% del consumo aparente de productos agrícolas procedían del exterior. Si se agrega el ingreso petrolero del Estado y los derechos aduaneros, con una significación conjunta de 70%, se podrá apreciar el peso del comercio exterior en la economía venezolana.

En 1936, prácticamente el 60% de la población vivía en el campo y del campo. El producto agrícola, sin embargo, representaba sólo el 23% del producto total del país, lo que debe interpretarse en el sentido de que el ingreso agrícola promedio (por habitante) era sensiblemente más bajo que el promedio nacional. La agricultura, a pesar de que continuaba siendo una actividad sustancial para el sostenimiento de la población, era de una pobreza productiva evidente, por lo que se infiere que el nivel económico de la población dependiente del campo era muy bajo; si se considera que la distribución del ingreso ha debido ser muy regresiva —por la alta concentración de la propiedad y la elevada exacción del trabajo por los propietarios— se concluirá que la gran mayoría de la población campesina tenía un nivel de vida casi al ras de la subsistencia física. La figura del *peón* agrícola se extendía tanto en las plantaciones tradicionales de café, cacao, caña, etcétera como en las explotaciones modernas o modernizadas. El número de propietarios con respecto al total de la población rural era inferior al 10%.

La población urbana se había estado formando merced a un proceso sostenido de migración interna, desde el campo a las ciudades y

demás agrupaciones. Se desplazaban los campesinos sin tierras y también los propietarios incrementándose así el fenómeno del *absentismo*. Los campos petroleros y los suburbios formados a su alrededor atraían numerosa gente. El aumento del gasto público aplicado a las ciudades, a pesar de su lentitud, inducía al asentamiento en las mismas. La proliferación de los servicios ofrecía un salida de empleo improductivo a esa nueva población. Así, el sector terciario se expandía a costa del sector primario, sin que las actividades secundarias crearan el soporte económico para aquella expansión. El artesanado también aumentaba en las ciudades, así como el pequeño comercio y el ejercicio de las profesiones llamadas liberales. Algunas fábricas de mediana y pequeña dimensión se establecían en ciudades importantes, como Caracas, Maracaibó, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Puerto Cabello, proporcionando ocupación a un contingente moderado de trabajadores. Las ciudades eran, sin embargo, todavía pequeñas, provincianas, recogidas en sí mismas. La Venezuela que emergió del gomecismo y de la etapa de establecimiento de la industria petrolera tenía características eminentemente rurales y estaba en una fase de preurbanización. Su ingreso por habitante apenas alcanzaba Bs 455 anuales (US \$ 127 al tipo de cambio de entonces). La población total se cifraba en 3 364 000 personas, de las cuales eran para el trabajo 1 084 000, o sea un 32.2%. En el cuadro 1 se muestra la composición económica del empleo en el año 1936.

CUADRO 1

FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN

<i>Actividad</i>	<i>Volumen de empleo</i>	<i>Porcentaje del total</i>
PRIMARIA	646 000	60.0
Agricultura	630 000	58.5
Petróleo	14 000	1.3
Minería	2 000	0.2
SECUNDARIA	173 000	15.9
Manufacturas	145 000	13.2
Construcción	28 000	2.7
TERCIARIA	265 000	24.1
Gobierno	55 000	5.0
Servicios privados	210 000	19.1

FUENTE: Censo de población, 1936.

En el subsector precapitalista de la economía interior se ocupaba alrededor del 80% de la población activa del país y se generaba el 45% del ingreso territorial. En el subsector neocapitalista de esta economía prestaba servicio el 18% de la fuerza de trabajo disponible

y se creaba un 25% del ingreso territorial. En el sector extractivo exportador se ocupaba el 2% de la fuerza de trabajo y se creaba el 30% del ingreso. La exacción capitalista extranjera en el sector petrolero puede apreciarse por el hecho de que mientras esa actividad contribuía con el 30% aproximadamente del ingreso territorial, sólo aportaba un 4% al ingreso nacional, bajo la forma de remuneraciones del trabajo venezolano y contribuciones fiscales al Estado venezolano. Así, mientras el producto bruto petrolero en 1936 alcanzaba Bs 647 millones, de un total estimado en Bs 1 865 millones, el ingreso nacional originado en la actividad petrolera sólo alcanzaba Bs 57 millones, de un total de Bs 1 500 millones. La proporción entre el ingreso nacional petrolero y el ingreso territorial del mismo sector era de menos de 9%, lo que significa que más del 90% de dicho ingreso territorial no revertía al país, sino que beneficiaba la economía extranjera.

Las fuerzas dominantes de la economía y la sociedad eran: el capital extranjero, la burguesía comercial y financiera, los grandes terratenientes y la que se ha convenido en llamar "burguesía burocrática", formada en los cuadros superiores del gobierno. Estas fuerzas dominantes, de cuyo ejercicio se beneficiaba territorialmente alrededor de un 3% de la población y extraterritorialmente grupos de población de otros países, habían quedado intactas del tránsito circunstancial del gomecismo al régimen presidido por López Contreras. Las clases dominadas eran: el campesinado pobre, no propietario; los obreros de la producción material (agrícolas, industriales, petroleros, de la construcción); los trabajadores de servicios y los empleados públicos y privados de los niveles medio e inferior. Estas clases comprendían estimativamente un 82% de la población. Existían otros grupos socioeconómicos compuestos por pequeños propietarios rurales, artesanos profesionales independientes y otros no bien definidos, que formaban una categoría intermedia, no sujeta a la explotación directa, pero tampoco identificada con el sector dominante y que comprendía alrededor del 15% de la población.

Venezuela era entonces una economía dependiente, en el estadio inferior del subdesarrollo, supeditada al capitalismo extranjero, principalmente anglonorteamericano. A juzgar por la proporción del empleo y del ingreso nacional relativo a la agricultura, esta economía descansaba sobre una base agraria; pero si se atiende a la significación de la actividad petrolera en el producto bruto interno, en el aporte de divisas, en la inversión territorial y otras variables importantes, la economía se fundamentaba también en la explotación del petróleo. La decadencia de la agricultura y la expansión de la actividad

extractiva hacían pensar en la existencia de una fase de transición que conduciría bajo las condiciones prevalecientes al dominio entero de la economía por el negocio petrolero. La fuerza dominante interna, adyacente a la petrolera, era la burguesía comercial y financiera cuyo crecimiento era determinado por la evolución de la capacidad para importar en función de la exportación petrolera en primer lugar. Aunque la agricultura estaba en decadencia y el valor de la propiedad rural había sido severamente golpeado por la depresión económica, los grandes terratenientes constituían todavía una fuerza considerable, capaz de oponerse con éxito, por ejemplo, a una reforma agraria. Los intereses de los diferentes estratos de las fuerzas dominantes estaban vinculados orgánicamente entre sí. El aparato del Estado, aunque formalmente sujeto a modificaciones en virtud de la desaparición física del dictador, continuaría respondiendo, naturalmente, a los intereses dominantes. Sin embargo, algunos sectores de las clases dominadas —el proletariado petrolero, el industrial, incluso los empleados—, así como el grupo intermedio que se ha señalado anteriormente, comenzarán en 1936 a desempeñar un papel activo en la transformación progresiva de ciertas condiciones y situaciones de la economía, la política y sociedad. Esa transformación se iniciaría en 1936, se aceleraría después de 1940, sufriría contingencias de variable gravedad después de 1949 y conduciría al cuadro actual de la vida venezolana, que no vaciló en calificar de crítico en el sentido profundo del término.

VII. LA DINÁMICA POLÍTICA EN EL QUINQUENIO 1936-40

Una lucha llena de peripecias entre las fuerzas regresivas, empeñadas en mantener esencialmente el “orden” gomecista, y las fuerzas propulsoras de reformas económicas, políticas y sociales de contenido democrático se desarrolló durante el quinquenio en examen. El jefe del gobierno, Eleazar López Contreras, confirmado como tal por el Congreso de 1936 de composición eminentemente gomecista, y un grupo de sus colaboradores en el Poder Ejecutivo, desempeñaron el papel equilibrador entre las dos categorías de fuerzas mencionadas. El régimen lopecista —si así puede llamarse— auspiciaba reformas moderadas, pausadas, que debían ocasionar las menores reacciones posibles, es decir que debían evitar lesiones considerables a los intereses dominantes, aunque proporciona alguna mejoría a las masas dominadas. Esas reformas, según la inclinación oficial, debían proyectarse e imponerse desde arriba, con “calma y cordura” según

el lema entonces en vigor. La participación del pueblo directamente en calles, campos y centros de trabajo o mediante sus líderes frustró parcialmente aquel designio equilibrista del gobierno y la lucha se llevó a cabo frecuentemente en términos de violencia represiva por parte del aparato oficial, y de exigencia activa por parte de las clases dominadas e intermedias.

La Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) se constituyó por necesidad como la única organización de lucha popular existente en los primeros tiempos de 1936. El estudiantado, como en la época gomecista, formaba la vanguardia política progresista en ausencia de partidos políticos. La represión gubernamental se hizo presente con prontitud. A principios de enero de 1936 fueron suspendidas las garantías constitucionales y se prohibía toda propaganda "comunista", se implantaba la censura de prensa y se limitaba el derecho de reunión y de asociación. La protesta pública contra esas medidas represivas culminó en la concentración popular celebrada en la mañana del 14 de febrero en la plaza Bolívar de Caracas, frente a la Casa de Gobierno. Desde los balcones de ésta se hicieron nutridos disparos a la masa popular y cayeron numerosos muertos y heridos. En la tarde del mismo día el pueblo caraqueño encabezado por sus líderes desfiló hasta Miraflores, el palacio presidencial, en protesta contra la masacre y la represión.

El gobierno aparentemente retrocede en su actitud de freno a las exigencias progresistas. El general López Contreras presenta a la nación el famoso "Programa de febrero", bosquejo de un plan de gobierno y sobre todo promesa de acción administrativa y de estabilidad política. Ciudadanos notables, opositores o ajenos al gomecismo, son llamados a la formación del gabinete. Se organizan los primeros partidos para la lucha por reformas democráticas: el Partido Republicano Progresista (PRP), el Movimiento de Organización Venezolana (Orve), la Unión Nacional Republicana (UNR). El PRP está orientado por los marxistas y tiene una participación considerable de estudiantes. Orve está orientado por lo que sería luego el núcleo dirigente de Acción Democrática, con Rómulo Betancourt a la cabeza. Estas tres organizaciones formaron a fines de marzo de 1936 el llamado Bloque de Abril, cuya plataforma de lucha se basaba en la necesidad de reunir el Congreso el 19 de abril, a pesar de su composición reaccionaria, y la convocatoria pronta a elecciones generales. La dinámica de partidos populares conduce al propósito de fundar una organización única de la izquierda, la cual se proyecta con el nombre de Partido Democrático Nacional (PDN), teniendo como secretario general a Jóvito Villalba, el más desta-

cado líder estudiantil de la época, y como secretario de organización a Rómulo Betancourt, ambos de la llamada "Generación de 1928". Este partido no fue legalizado. En la clandestinidad funcionó un PDN controlado por el "grupo de Barranquilla" (Betancourt, Leoni, Montilla, etcétera), que sería el antecesor directo de Acción Democrática, partido que gobernaría en Venezuela en los periodos: 1945-48, 1959-69.

La derecha también se organiza y muestra agresividad. En el nivel estudiantil se crea la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), orientada por el grupo que once años más tarde constituiría el partido Copei, con Rafael Caldera a la cabeza. En el plano partidista se organiza Acción Nacional, de tendencia reaccionaria, refugio de gomecistas.

El gobierno constituye sus armas institucionales represivas y las aplica con singular eficacia: el inciso sexto del artículo 31 de la Constitución Nacional, por el cual se declara fuera de la ley la ideología comunista y se ordena perseguir a quienes la profesen, practiquen y difundan; la ley de Orden Público, llamada popularmente Ley Lara por su proyectista el ministro del Interior doctor Lara, destinada a reprimir por la fuerza las manifestaciones públicas antigubernamentales. En noviembre de 1936, en aplicación del inciso sexto, se practica una requisita en las librerías del país para "purgarlas" de material marxista, socialista o radical de alguna manera. Igualmente el gobierno elabora el *Libro Rojo*, especie de censo de revolucionarios peligrosos, presuntamente comunistas, teniendo como fuente informativa los archivos gomecistas, que calificaban como comunista a todo enemigo progresista del régimen, a todo el que luchaba por reformas y libertades.

Los partidos populares de la época se limitaban a exigencias de liberalización de la vida política y de fomento de la economía nacional, en base del mejoramiento y modernización de las leyes, reglamentos y otros componentes del cuadro institucional del Estado. Se pedía, por ejemplo, la creación del impuesto progresivo sobre la renta, el establecimiento del banco central de emisión, la reforma agraria, la protección y el estímulo a la industria nacional, y la agricultura, la instalación de un mecanismo de créditos baratos para la producción, la revisión del régimen de concesiones petroleras para fortalecer la posición de la nación, libertad sindical, mejoramiento de las condiciones de trabajo en la ciudad y el campo, etcétera. Se exigían elecciones generales para los cuerpos deliberantes y garantías para el ejercicio de las libertades y los derechos constitucionales.

En el mes de junio de 1936 estalló una huelga con intenciones de hacerse general, manifestándose como propósitos de la misma la derogación de la Ley Lara, la reforma de la Constitución, la confiscación de los bienes de Gómez, familiares y colaboradores en favor de la nación, la reorganización de la Oficina Nacional del Trabajo para servir a los trabajadores y la libertad sindical. Los dirigentes de esa huelga fueron encarcelados y enjuiciados. Algunos de los objetivos fueron alcanzados, aunque no de modo directo e inmediato: el gobierno hizo pasar al patrimonio nacional un considerable acervo de bienes pertenecientes a Gómez y gomecistas, fue reorganizada la ONT, y en 1937 se promulgó una Ley del Trabajo que se estimó muy avanzada para la época.

En diciembre de 1936 estalla una huelga en la industria petrolera, de objetivos políticosindicales, la cual se prolongaría hasta enero de 1937, ocasionando un descenso de la producción de petróleo equivalente a un 50% del incremento programado por las empresas. La huelga fue muy combativa y unitaria y demostró el progreso logrado en breve tiempo por el movimiento sindical en el sector obrero más importante del país. El gobierno dio fin a la huelga por decreto y ordenó algunas reivindicaciones socioeconómicas para los trabajadores del petróleo.

El año 1937 transcurre bajo el signo de hechos contradictorios. Por una parte, se conquista el voto popular para la elección de los concejos municipales y también para la designación de representantes al Congreso Nacional; por la otra, se ilegalizan los partidos populares, se persigue a la Federación de Estudiantes, a las organizaciones sindicales y campesinas, se clausuran periódicos y se asalta policialmente la Universidad Central, en Caracas, con un saldo de un estudiante muerto (Eutimio Rivas). La Corte Federal y de Casación —de composición gomecista— declara anulada la elección de algunos senadores y diputados al Congreso de origen popular. En marzo el gobierno decretó la expulsión de 47 dirigentes políticos progresistas, entre los cuales se encontraban Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, José Antonio Mayobre, Miguel Otero Silva, Gabriel Bracho Montiel, Fernando Márquez Cairós, Miguel Acosta Saignes, Gonzalo Barrios, bajo la acusación de comunistas. Se pretendía así descapitalizar al movimiento popular y permitir al gobierno un sosiego para el ejercicio de su política de reformas pausadas y limitadas, sin presión pública. La forma principal de lucha habría de ser en lo sucesivo y hasta la iniciación del gobierno de Medina Angarita en 1941 la clandestina,

tanto para el Partido Comunista entonces incipiente, como para el PDN, ya citado.

El gobierno del periodo 1936-41 tuvo un papel singular en la evolución política venezolana. Surgido realmente del gomecismo, trató de suprimir las características más negativas de ese régimen y de abrir un proceso hacia la liberalización y la modernización del Estado, así como también hacia el mejoramiento paulatino de las condiciones de trabajo y de vida de las clases dominadas. Tuvo que reprimir al movimiento popular porque, desde el punto de vista de sus metas, exigía un cambio más profundo y acelerado que el tolerable por las fuerzas dominantes. Al mismo tiempo, debía ir más allá de lo que los más recalcitrantes sectores dominantes estaban dispuestos a permitir. En el propio seno del gobierno, comprendidos todos sus mecanismos, permanecían activas determinadas fuerzas regresionistas y buena parte de las medidas represivas obedecieron a esa actuación. Los grupos más avanzados de las clases dominantes entendían la conveniencia de una liberalización de las condiciones políticas, económicas y sociales al menor costo posible para dichas clases, mediante una táctica que evitara el clímax popular de agitación y exigencia. El propio jefe del gobierno obedecía a esa intención. En el seno del movimiento popular nuevas fuerzas se manifestaban y crecían al calor de la lucha: las que he denominado clases intermedias y los grupos más avanzados de las clases dominadas. El horizonte de estas nuevas fuerzas era amplio para la época, considerando la secuela de la larga noche gomecista, pero limitado a la luz de la perspectiva histórica. No pretendían ni buscaban una revolución, sino un conjunto de reformas dentro del sistema, que permitieran la participación de las mayorías en la dinámica de la democracia formal y una cuota menos restringida en la distribución del ingreso nacional. Estas exigencias mínimas —que involucraban desde luego una mayor participación nacional en los proventos de la explotación petrolera— serían las banderas esenciales del movimiento popular, incluido el partido comunista, a través de los tiempos que median entre la muerte de J. V. Gómez y el ascenso a la presidencia de la República de Rómulo Betancourt en 1959. La radicalización de las exigencias —y de la lucha por alcanzarlas— data de años recientes, prácticamente dentro del presente decenio de la vida venezolana.

En consecuencia de lo anterior, el quinquenio 1936-40 se caracteriza por una parcial y relativa liberalización política y por la implantación de algunas reformas socioeconómicas. En lo político: elecciones para cuerpos deliberantes, un restringido juego de partidos, alguna libertad de prensa frecuentemente interrumpida y alterada,

alguna libertad de reunión y de asociación. En lo económico y social: rescate para la nación de algunos de los bienes apropiados por Gómez y sus acólitos, promulgación de una Ley del Trabajo, progresista para entonces, modernización de algunos aspectos del sistema fiscal, establecimiento formal de un mecanismo de cambios diferenciales en que se reconoce la coexistencia de sectores diversos dentro de la economía del país, y se da un trato específico a la industria petrolera, establecimiento del Banco Central de emisión y correspondiente reforma bancaria, implantación de algunas medidas de protección a la industria manufacturera, la agricultura y la cría, ejecución de algunas obras de infraestructura (vías de comunicación, acueductos, instalaciones sanitarias, etcétera), ampliación y mejoramiento de las facilidades educativas y médicoasistenciales. En lo relativo a las relaciones de la nación con la industria petrolera bajo el control extranjero, salvedad hecha del régimen cambiario ya señalado, de un mejor control fiscal de las operaciones de las compañías y del aumento de las remuneraciones del trabajo empleado en esa industria, nada significativo hizo el gobierno para fortalecer la posición nacional. Los intereses petroleros estaban a la cabeza de las fuerzas dominantes y eran los menos dispuestos a permitir una reducción del ámbito de su dominio efectivo, expresado en el índice de sus beneficios.

En abril de 1941, cuando termina el periodo constitucional del presidente, mediante la formalidad de la elección de segundo grado por el Congreso mayoritariamente adicto al gobierno, el general López Contreras deja el mando y designa como sucesor al general Isaías Medina Angarita, quien haría un gobierno más progresista que su entecesor, con mayor contenido de realizaciones positivas tanto en el campo político, como en el económico y social.

VIII. LA DINÁMICA ECONÓMICA EN EL QUINQUENIO 1936-40

Cuando se inicia el año 1936 la depresión económica había sido superada en Venezuela y comenzaba un proceso de recuperación. La exportación se cifraba en 1936 en Bs 768 millones, cantidad sólo inferior a la de 1929; si se tiene en cuenta únicamente la exportación de petróleo, cifrada en Bs 684 millones, se encontrará que marca un máximo para entonces. Decayó, por tanto, la exportación no petrolera, golpeada duramente por la depresión. La importación no se había repuesto enteramente y ascendía a sólo Bs 212 millones, contra Bs 364 millones en 1930. El valor retornado del petróleo, sin embargo, alcanzaba Bs 138 millones, superior al acusado durante

los seis años precedentes. La inversión petrolera real se estimaba para 1936 en Bs 43 millones, nivel deprimido con relación al periodo anterior a 1931. También la inversión real en el resto de la economía permanecía deprimida. Los ingresos públicos superaban los registrados en cinco años anteriores; si se observan específicamente los ingresos derivados de hidrocarburos y minas, se aprecia que marcaron un máximo hasta entonces; no obstante, el peso sustancial de los derechos de importación, cuyo monto permanecía deprimido con respecto al periodo anterior a 1930, determinaba en conjunto un menor índice de recuperación de la situación fiscal. El crédito bancario aún no había recuperado los niveles de años anteriores a 1934; sin embargo, la cantidad de dinero en manos del público (billetes y depósitos) en 1936 era prácticamente igual a la de 1930, máximo precedente. El nivel de precios al mayoreo no alcanzaba el registrado en 1934 y el de las cotizaciones bursátiles aún estaba deprimido con respecto al periodo 1929-33. La existencia de oro en la banca superaba ampliamente a la registrada en años precedentes, con excepción de 1935, indicador de actividad de la balanza de pagos. El mercado hipotecario aún sufría los efectos de la depresión. La importación de cemento —indicador de actividad en la construcción, ya que entonces la producción nacional de ese artículo era muy pequeña— estaba en sus más bajos niveles. En síntesis, por lo que se refiere a la situación en 1936, puede decirse que la economía estaba en vías de recuperación, pero persistían aún algunos aspectos recesivos, limitados a la economía interior.

Un impulso más vigoroso y sostenido de rehabilitación económica tuvo lugar entre 1937 y 1940. Además de que el negocio petrolero continuó expandiéndose, puede observarse un crecimiento acelerado de la importación (fuente de aprovisionamiento sustancial entonces), un alza notable de los ingresos y gastos públicos, una reactivación del crédito bancario comercial, un ascenso considerable de la circulación monetaria, un alza moderada del índice general de precios, un aumento sustancial de la importación de cemento, un incremento considerable del movimiento de divisas. En síntesis, puede afirmarse que en este último periodo la economía superó enteramente la fase de recuperación y entró en un proceso expansivo moderado.

La actividad petrolera amplía y fortalece en esta época su posición determinante de la economía venezolana. La agricultura de exportación había pasado definitivamente a un lugar accesorio. Aunque en la composición del ingreso público, el renglón petrolero significa sólo un 25% en 1940, su influencia indirecta era mucho mayor: la renta aduanera que representaba el 38% de ese ingreso constituía

realmente una función del ingreso de divisas petroleras al país. La actividad comercial y bancaria giraba en gran proporción en torno a la importación. El artesanado y la pequeña industria continuaban suministrando una porción considerable de los bienes manufacturados de consumo en el país, pero la importación aportaba una fracción cada vez mayor de dichos bienes. La política proteccionista oficial se iniciaba tímida y dispersa, figurando entre las primeras ramas favorecidas la industria textil. Más que un proceso de sustitución de importaciones, tuvo lugar en ese tiempo un auge de importaciones. En 1938 se celebró un *modus vivendi* con los Estados Unidos en virtud del cual resultaron decisivamente favorecidas las mercancías procedentes de ese país, que era, por otra parte, el principal comprador del petróleo, del café y del cacao producidos en Venezuela.

IX. LA DINÁMICA SOCIAL EN EL QUINQUENIO 1936-40

El esquema de clases y estratos socioeconómicos que he expuesto en párrafos anteriores, correspondiente al año 1936, no sufre modificaciones apreciables durante el periodo examinado. Alguna ligera expansión de la burguesía industrial y agraria (esta última formada por medianos y grandes empresarios de explotación agropecuaria) puede observarse en esos años, así como un moderado deterioro de la posición de los terratenientes tradicionales y de los que surgieron bajo el gomecismo. La influencia de las clases intermedias (pequeños propietarios rurales, profesionales, independientes, artesanado, pequeños comerciantes e industriales) aumenta ligeramente. Disminuye la proporción del campesinado pobre y aumenta la de los trabajadores de la producción y los servicios. Aparece, incipientemente, un nuevo grupo social que en el correr del tiempo adquiriría importancia numérica y fenomenológica: el de los *marginados*. Como fuerzas dominantes actúan: el sector capitalista extranjero, la burguesía comercial y financiera, los terratenientes, los rentistas urbanos y la burguesía industrial y agraria.

X. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PODER

La base económica de la sociedad determina la composición de clases de la misma y, consecuentemente, la estructura del poder. En el esquema 4 se intentó bosquejar la sucesión de cambios operados en Venezuela en el sentido indicado.

ESQUEMA 4

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PODER EN VENEZUELA

<i>Periodo</i>	<i>Base económica</i>	<i>Fuerzas dominantes</i>	<i>Instrumento político</i>
1830-1917	Agrícola Exportación	Terratenientes Burguesía exportadora y financiera	Gobiernos pseudo-constitucionales. Gobiernos <i>de facto</i> en periodos breves
1918-35	Explotación petrolera bajo dominio extranjero Agrícola Exportación	Capital extranjero Burguesía importadora y financiera Terratenientes	Gobierno de fuerza prolongado
1936-41	Explotación petrolera bajo dominio extranjero Agrícola Exportación	Capital extranjero Burguesía importadora, financiera, industrial Terratenientes	Gobierno pseudoconstitucional

XI. CONFRONTACIÓN ENTRE LA DÉCADA DE LOS 30 Y LA ACTUAL

Venezuela ha crecido en los últimos treinta años. En el cuadro 2 se comparan los indicadores económicos más significativos para los años 1938 y 1968. Mientras la población se ha multiplicado por tres, el ingreso por habitante se ha multiplicado por seis. No hay cifras directas sobre la distribución del ingreso, pero hay acuerdo sobre la presunción de que más del 40% de la población obtiene un ingreso por habitante como el de 1938, que era de US \$ 145 anuales, y que menos de un 10% obtiene ingresos similares o superiores al promedio de los Estados Unidos. La población se ha hecho en su mayoría urbana (65%) y su grado de juventud ha aumentado sensiblemente (alrededor de un 50% tiene menos de 20 años). La base material de la producción apenas se ha modificado: la explotación de petróleo continúa siendo decisiva para la vida del país. La estructura económica se ha desenvuelto en el sentido capitalista, con preponderancia del capital extranjero en el sector fundamental, significación considerable de ese mismo capital en la industria manufacturera y los servicios, dependencia decisiva de los patrones de producción y de consumo con respecto a los Estados Unidos, fomento de cierto capitalismo de Estado y un incipiente capitalismo nacional privado en la agricultura y el sector secundario. Una proporción importante de la población deriva sus ingresos de actividades precapitalistas.

La estructura social, en consecuencia, ha sufrido algunas modifi-

caciones. En el esquema 5 se comparan a este respecto los años 1938 y 1968. Las fuerzas dominantes siguen siendo las mismas, sólo que, paradójicamente, el sector capitalista extranjero tiene mayor peso, la burguesía industrial ha cobrado impulso, en tanto que han decaído más aún los terratenientes rurales, y la burguesía comercial. Ha surgido un estrato ligado a las clases dominantes y al sector público, que actúa como agente de dominación incluso en la esfera política y cultural, y que se ha dado en llamar la "clase gerencial", formada por ejecutivos altos y medios, profesionales y burócratas influyentes. Ha disminuido el campesinado pobre, en proporción, mientras se ha incrementado la clase obrera de la producción y los trabajadores de servicios. El desempleo ha adquirido significación socioeconómica, hasta alcanzar a un 12% de la población activa. El grupo de los *marginados* (sin techo, sin paternidad conocida, materia prima de la delincuencia y la prostitución), ha crecido notablemente. En las ciudades no sólo hay cinturones de miseria, sino también islas donde dominan los *marginados*.

La vida política se ha liberalizado bajo el signo de la democracia formal. Hay presos políticos, torturados, perseguidos, exiliados por causas políticas. Hay partidos políticos legalmente inhabilitados (los de orientación marxista-leninista). Las universidades nacionales han sido allanadas varias veces. Se allanan hogares sin fórmulas legales. Algunos ciudadanos "desaparecen" bajo la intrincada red policial. Pero hay elecciones generales regularmente y la Constitución consagra libertades, derechos y garantías a los ciudadanos, funcionan los cuerpos deliberantes, y existe una limitada libertad de información y de opinión.

Venezuela es una economía dependiente, subdesarrollada, deformada, desintegrada. En 1983 termina la mayoría de las concesiones petroleras en favor de compañías extranjeras, y la nación no ha escogido aún una alternativa de desarrollo independiente de la industria petrolera. Está congelada la participación nacional en los proventos del petróleo. La industrialización está supeditada en su mayor parte a los suministros extranjeros. La sustitución de importaciones está detenida al nivel de los bienes de consumo. Recursos naturales, humanos y financieros se desperdician. La juventud clama por capacitación para el trabajo. El sistema educativo tiene niveles críticos de estrangulamiento en las fases media, superior y especial. El gasto público está comprometido en el sostenimiento de servicios ineficientes, que encubren el subempleo. Los intereses dominantes se dejan sentir en todos los niveles y mecanismos del gobierno y la administración pública.

El país tiene ante sí la tarea de la formación de una economía y de una sociedad *nacional*, entendida ésta como la armoniosa integración de la soberanía política, la independencia económica, el desarrollo cultural autónomo, la liberación del hombre. Las formas tradicionales de la política están en crisis. En 1936 se planteaba la necesidad de una transición hacia la democracia representativa, apenas vivida por Venezuela en breves lapsos del siglo pasado. En 1968 la democracia representativa es insuficiente y se exige una democracia efectiva, dinámica, de contenido transformador.

La carga de la *marginalidad* en su sentido comprensivo —económico, político, social— crece y alimenta la violencia: represión gubernamental, delincuencia, subversión incluso armada. La violencia es la medida de la incapacidad de las fuerzas dominantes para solucionar el problema de la conservación del poder.

CUADRO 2

INDICADORES ECONÓMICOS VENEZOLANOS

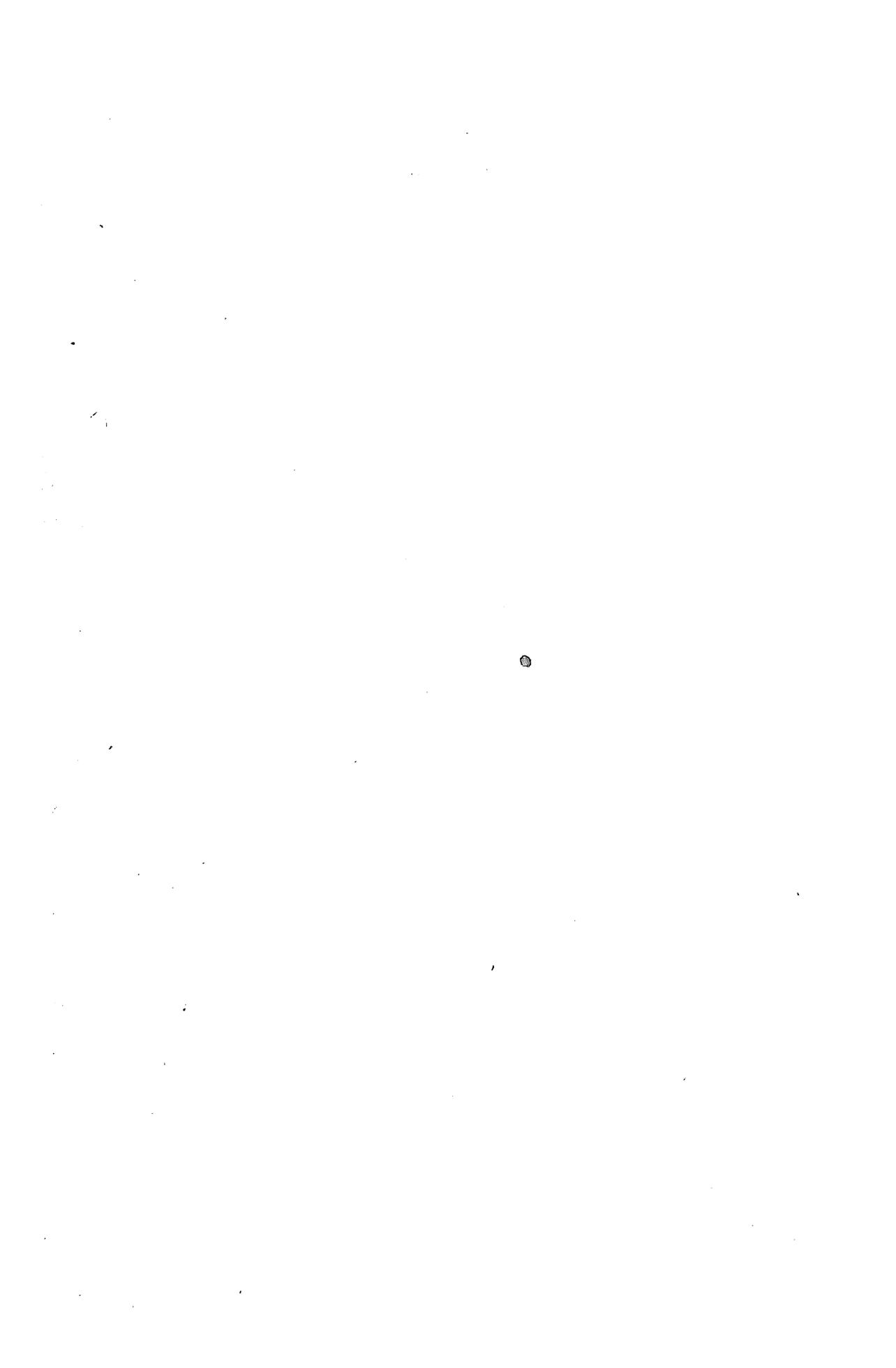
	1938	1968
Ingreso Nacional por habitante (US anuales)	145	870
<i>Estructura de la producción</i>		
Sector primario	55%	30%
Sector secundario	15%	20%
Sector terciario	30%	50%
Población activa (miles)	1 150	3.300
Población urbana	36%	65%
Población rural	64%	35%
Ingreso de divisas (millones de US \$)	85	1 400
Reservas monetarias internacionales (millones de US \$)	56	850
Ingresos públicos nacionales (millones de bolívares)	340	9 200
Ingreso petrolero del Estado (millones de bolívares)	97	5 650
Relación entre el ingreso nacional petrolero y el ingreso territorial petrolero	0,10	0,65
Tipo de cambio (Bs./US \$)	3,19	4,50
Proporción del comercio exterior venezolano correspondiente a los Estados Unidos	60%	55%

ESQUEMA 5

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE VENEZUELA
(porcentajes de la población)

<i>Clases y Estratos</i>	1938	1968
DOMINANTES		
Sector capitalista extranjero *	—	—
Burguesía:		
comercial y financiera	0.6	1.0
industrial y agraria	0.3	0.8
rentista	0.5	1.0
Terratenientes	2.0	1.0
Subtotal	3.4	3.8
INTERMEDIOS		
Pequeños y medianos agricultores		
independientes	4.0	6.0
Profesionales independientes	1.0	2.0
Artesanos	10.0	5.0
Subtotal	10.5	16.0
DOMINADOS		
Campeinado pobre	40.0	33.0
Obreros de la producción	18.0	18.0
Trabajadores de servicios	17.0	20.0
Empleados	5.0	6.0
Marginados	0.1	2.0
Subtotal	80.1	79.0

* Ver nota al pie del esquema 1.2.3.



ÍNDICE

Presentación: <i>Raúl Benítez Zenteno</i>	5
Prólogo: <i>Víctor Manuel Durand Ponte</i>	7

PAÍSES DEL CARIBE Y CENTROAMÉRICA

La crisis del 29 y la instauración de un nuevo sistema de dominación-dependencia en Haití: <i>Susy Castor</i>	25
La crisis del 29 y la génesis del trujillato: <i>Franklin J. Franco</i>	52
Puerto Rico en los años treinta: <i>Manuel Maldonado Denis</i>	75
Influencia de la crisis del 29 en Nicaragua: <i>Edelberto Torres</i>	89
Estudio sobre la crisis de los años treinta en El Salvador: <i>Alejandro D. Marroquín</i>	113

PAÍSES ANDINOS

Bolivia en la crisis de los años treinta: <i>Luis Antezana E.</i>	193
El Ecuador en los años treinta: <i>Agustín Cueva</i>	214
El Perú en la crisis de los años treinta: <i>Aníbal Quijano Obregón</i>	239

PAÍSES DEL CONO SUR

La Argentina en la década de los treinta: <i>Rodolfo Puiggrós</i>	305
Los años treinta en Brasil: <i>Manuel Correia de Andrade</i>	326
El movimiento popular chileno y el sistema de alianzas en la década de los treinta: <i>Hugo Zemelman M.</i>	379
El Uruguay en los años treinta: <i>Isaac Ganón</i>	451

MÉXICO Y VENEZUELA

México en los años treinta: <i>Guillermo Palacios</i>	515
Venezuela en los años treinta: <i>D. F. Maza Zavala</i>	556



En la Imprenta Universitaria, bajo la dirección de Beatriz de la Fuente, se terminó la impresión de *América Latina en los años treinta*, el día 13 de mayo de 1977. Su composición se hizo en tipos Electra 11:12, 10:11 y 8:9. La edición consta de 2 000 ejemplares.

U N A M

FECHA DE DEVOLUCION

El lector se obliga a devolver este libro antes del vencimiento de préstamo señalado por el último sello.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

F1414
.2
A53

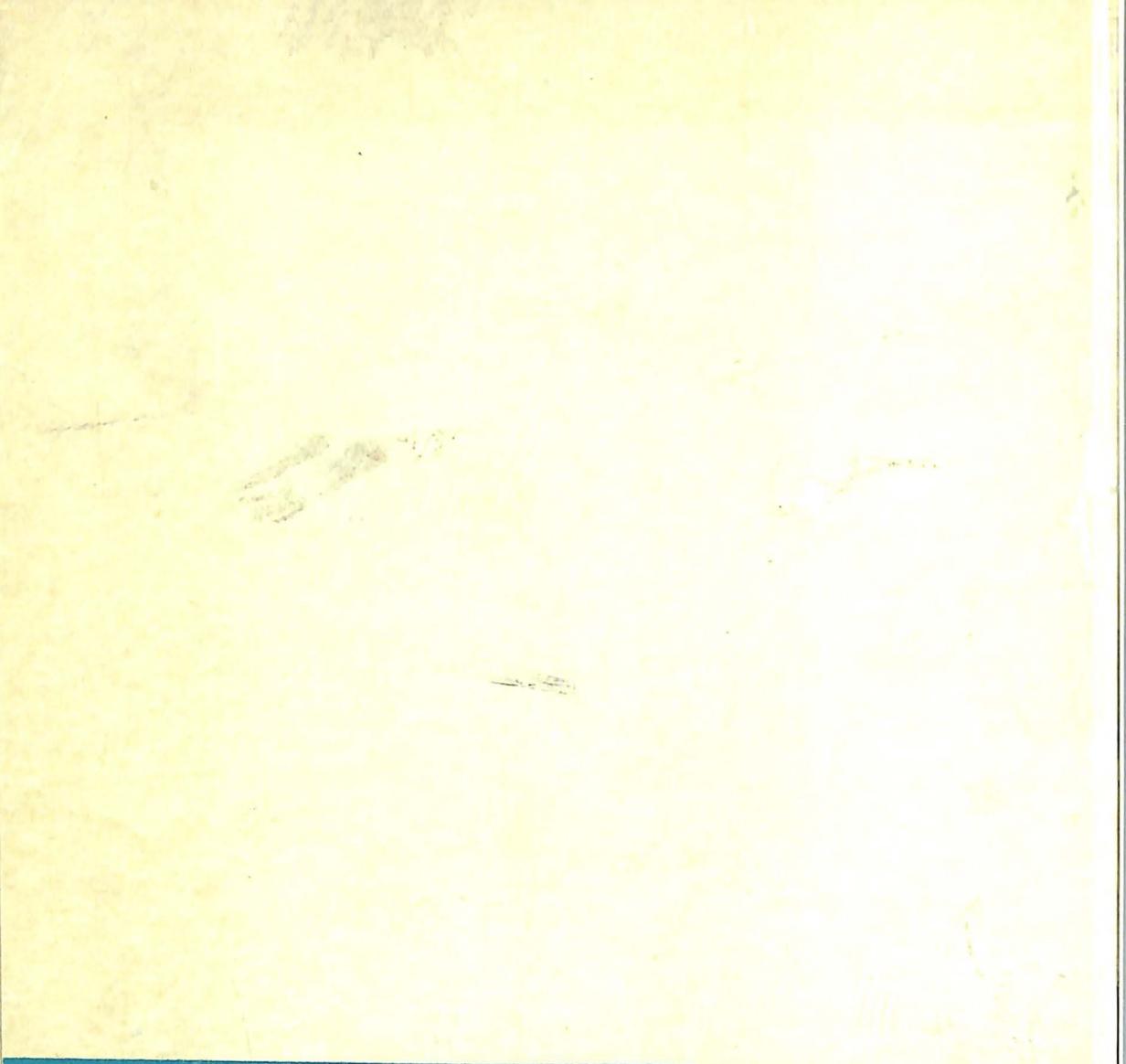
UNAM



25590
INST. INV. SOCIALES

F1414.2
A53

Ds.25590



116

GONZALEZ



AMERICA
LATINA
EN LOS
AÑOS
TREINTA

F1414
.2
A53

INSTITUTO